.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Repositorio Digital Institucional

LIBROS

Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates

Norma Giarracca, Miguel Teubal [coords.], María Celeste Castro García, Mariana Ciccolella, Julieta Godfrid, Daniela Mariotti, Mariano Negro, Tomás Palmisano, Agustina Schvartz [autoras/es]

Antropofagia, Buenos Aires, 2010

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información consulte: http://repositorio.sociales.uba.ar/

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)
La imagen se puede sacar de aca: https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR

Repositorio Digital Institucional

.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Del paro agrario a las elecciones de 2009

Tramas, reflexiones y debates

Norma Giarracca
Miguel Teubal
(Coordinadores)

Del paro agrario a las elecciones de 2009

Tramas, reflexiones y debates

Norma Giarracca
Miguel Teubal
(Coordinadores)

Autores:
María Celeste Castro García
Mariana Ciccolella
Norma Giarracca
Julieta Godfrid
Daniela Mariotti
Mariano Negro
Tomás Palmisano
Agustina Schvartz
Miguel Teubal

Diseño de tapa: Julián Teubal
Del paro agrario a las elecciones de 2009
Tramas, reflexiones y debates
ISBN: 978-987-1238-70-5
Primera edición: Editorial Antropofagia, abril de 2011.
www.eantropofagia.com.ar

Giarracca, Norma
Del paro agrario a las elecciones de 2009 : tramas, reflexiones y debates / Norma Giarracca y Miguel Teubal. - 1a ed. - Buenos Aires : Antropofagia, 2010.
416 p. ; 23x15 cm.

ISBN 978-987-1238-70-5

1. Sociología 2. Economía 3. Ciencias Políticas. I. Teubal, Miguel II. Título
CDD 301

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su almacenamiento ni transmisión por cualquier medio sin la autorización de los editores.

Índice

Prólogo 7
Norma Giarracca y Miguel Teubal

La Trama de un conflicto extendido.
El conflicto agrario marzo – julio de 2008 13
María Comelli, Ma. Celeste Castro García,
Julieta Godfrid, Agustina Schvartz
Mariana Ciccolella, Mariano Negro

El conflicto agrario: características y proyecciones 193
Miguel Teubal y Tomás Palmisano

Paro agrario: crónica de un conflicto alargado 253
Norma Giarracca, Miguel Teubal y Tomás Palmisano

Expansión sojera y paro agrario.
Reflexiones para comprender el 2008 y 2009 en la Argentina 275
Norma Giarracca y Tomás Palmisano

Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el
escenario electoral de 2009 287
Celeste Castro García, María Comelli y Tomás Palmisano

El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios 313
Norma Giarracca

El sutil arte de entramar 343
Daniela Mariotti

Las colaboraciones periodísticas: la reflexión en situación 347

Anexo. Votos en la Cámara de Diputados y en el Senado 395

Siglas 399

Bibliografía 405

Datos de los autores 415

Prólogo

En el año 2008, la Argentina estuvo atravesada por lo que se denomina el conflicto campo-gobierno ("lockout patronal" en la caracterización del gobierno y "paro agrario" en la de otros). Si los medios de comunicación, programas periodísticos y hasta las sobremesas cfamiliares estuvieron impregnados por esta situación, es imaginable cómo se la vivió en el Grupo de Estudios Rurales y la Cátedra de Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde desarrollamos nuestro trabajo. Las discusiones entre nosotros sobre cómo se procesaba y vivía el conflicto; las construcciones mediáticas; las frecuentes apariciones en cadena nacional de radiodifusión de la Presidenta; el debate en el Congreso de la Nación y luego la aparición de un grupo de intelectuales (muchos docentes de nuestra misma casa de estudios) que propuso una interpretación de los sucesos en base a situaciones agrarias de décadas atrás, nos interpelaban diariamente. Cambiamos los programas docentes para iniciar la materia y el seminario con ese conflicto que motivaba e interesaba a los estudiantes por la actualidad de la problemática; iniciamos rápidamente la tarea de recortar los periódicos nacionales y provinciales para seguir la cronología del proceso desde los medios escritos; aprovechamos la invitación de una universidad provincial para viajar y llevar a cabo un "trabajo de campo" con productores de una de las zonas más ricas de la región sojera y ganadera.

Escribimos artículos académicos con ese material que incorporamos a este libro ("Paro agrario: crónica de un conflicto alargado", Giarracca, Teubal y Palmisano y "Expansión sojera y paro agrario: reflexiones para comprender el 2008 y 2009 en la Argentina", Giarracca y Palmisano); otros para revistas y boletines de nuestra institución, artículos periodísticos en *Página 12* y *Crítica* de la Argentina (que también incluimos en este libro) y en varias revistas de opinión y de actualidad. Pero pasado el tramo más dramático de este proceso, cuando las aguas comenzaron a calmarse tomamos la decisión de no cortar el trabajo y seguirlo hasta las elecciones de junio de 2009. Ese es el período que analizamos y cuyos resultados presentamos en este libro. Mientras tanto otros análisis coyunturales del 2008 así como sugerentes etnografías y entrevistas periodísticas se han publicado[1]. Asimismo, muchos cientistas sociales hasta hace poco alejados de la problemática agraria preparan tesis de posgrados e investigaciones

sobre el tema y en las charlas de "café" o en los almuerzos familiares un gran número de personas puede hablar de la soja, del glifosato o de las retenciones.

Nuestras investigaciones se llevan a cabo en un ámbito universitario y ello implica que investigamos; dirigimos muchas tesis de maestrías y doctorados con temas diferentes al de la investigación grupal; mantenemos seminarios internos; presentamos nuestros trabajos a congresos (en este período fue el importante encuentro en Buenos Aires de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS) y somos también docentes de grado (del primer escalón de la formación) y de posgrado. Muchos jóvenes decidieron incorporarse a las tareas de esta investigación como parte de la formación requerida por el Plan de Estudios de Sociología ("horas de investigación"). Ellos formaron parte del trabajo de construcción de "la trama" (véase capítulo de Daniela Mariotti); fueron los que buscaron los diarios y seleccionaron las noticias y aprendieron a construirla bajo nuestro acompañamiento y dirección. Es así que esta tarea ardua, tediosa que lleva a muchos controles técnicos y que ocupa muchas horas de trabajo antes de poder ser presentada, fue realizada por un grupo formado por dos miembros del equipo de investigación, María Comelli y Celeste Castro García y por Julieta Godfrid, Agustina Schvartz, Mariana Ciccolella, Mariano Negro, algunos aún estudiantes y otros ya sociólogos, algunos ya becarios o ayudantes en el equipo y otros que siguen con otras problemáticas en diferentes equipos. No obstante, todos firman la autoría en el primer capítulo.

"La Trama de un conflicto extendido" justamente abre el libro y narra el día a día de los acontecimientos desde una metodología de trabajo que ya hemos utilizado anteriormente. Sólo cabe decir aquí que es un ensamble de hechos que funciona como herramienta que trae los acontecimientos al presente así como sus secuencias. Presenta el significativo valor de recordar que hay discursos y prácticas que se llevaron a cabo y su existencia no pueden ser negados (aunque se pueda cuestionar el modo de narrarlo).

Sigue el capítulo de Miguel Teubal y Tomás Palmisano "El conflicto agrario: características y proyecciones", que da cuenta de la gran transformación sojera y sus consecuencias tomando como eje central las retenciones a las exportaciones. El trabajo, como se podrá corroborar, sintetiza la "gran transformación conservadora" del agro argentino y da por tierra con algunos de los "mitos" que indican que la soja genera el excedente que permite el sostenimiento del modelo económico por su gran capacidad

tributaria. Se presentan luego los dos artículos producidos y publicados durante la coyuntura (a los que hicimos mención anteriormente) y luego uno firmado por Castro García, Comelli y Palmisano, "Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral de 2009" que pone en diálogo la situación bajo estudio, la Mesa de Enlace y el proceso electoral que finaliza en junio de 2009.

El último trabajo está firmado por Norma Giarracca y propone una revisión de algunos dispositivos que utilizaron en los debates los intelectuales del "espacio progresista" y que, a juicio de la autora, formaron parte de la construcción del proceso. Por último están nuestros artículos periodísticos con los agregados de otros dos que resultan de la palabra de organizaciones de mucha importancia en el mundo de "los de abajo": el Consejo Asesor Indígena (CAI) y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Durante todo el conflicto muchos medios radiales o escritos (no monopólicos) requirieron nuestras opiniones como estudiosos de la cuestión agraria. Escribimos y respondimos entrevistas radiales de todo el país y ese ejercicio nos ayudó a reflexionar en cada situación y arriesgar interpretaciones que involucraban los derroteros futuros del conflicto. Tomamos la decisión de publicar el debate periodístico porque consideramos que estas pinceladas y cortas reflexiones están articuladas coherentemente con los resultados de la investigación grupal y con lo que ocurrió después. Esas reflexiones fruto de la percepción coyuntural acompañan esta investigación que cumple con todas las reglas del trabajo intelectual y que siempre tiene la ventaja de conocer el final (abierto) de los procesos. Cerramos el libro con el aporte de Daniela Mariotti quien con su experiencia en el tema le cuenta al lector no especializado acerca de la construcción, límites y posibilidades de la metodología "trama" que permite narrar el conflicto: "El sutil arte de entramar".

Queremos agregar una advertencia: no se encontrarán en este libro las posiciones dicotómicas habituales; no estamos a favor del campo (de la Mesa de Enlace) ni estamos a favor del gobierno. Pero nada más lejos de nosotros está declararnos neutrales; muchas veces hemos sostenido con Boaventura de Sousa Santos que no somos neutrales pues ningún cientista social responsable y sensible podría serlo en estas situaciones a las que nos ha arrastrado el "neoliberalismo" en todas sus variantes que comportan mucho sufrimiento social. No obstante, muchos años de experiencia intelectual y académico-política de los directores de este equipo, conducen

a mantener el principio de trabajo intelectual que indica no denostar a los sectores medios propietarios sino tratar de comprender los complejos sistemas donde se mueven, las condiciones de posibilidad que los arrastraron allí; los límites corporativos de sus acciones; las posiciones relativas con los "núcleos de poder". No es juzgándolos o sintiendo superioridad en relación con ellos como se los comprende en la acción social corporativa. De lo que se trata es de sacar a luz los mecanismos de construcción de un orden económico hegemónico que en el sector agrario denominamos "agronegocio", así como desarmar los dispositivos simbólicos que ese bloque construye ante la menor amenaza a su poder o a sus ganancias.

Pensamos que la autonomía universitaria, intelectual y científica debe mantenerse tanto en relación con los poderes económicos como con el poder político. Por todo esto, si es necesario dar cuenta del lugar donde nos "situamos" (política y epistemológicamente) como manda cierta moda mediática, diremos que es en un espacio de resistencia (y de esperanza) que construyen actores sociales, políticos, culturales, periodísticos, artísticos, científicos, intelectuales, etc. contra estos modelos concentradores de riqueza, devastadores, contaminadores e injustos.

Queremos agradecer a todos los que colaboraron de una u otra forma en la investigación y en esta publicación. A nuestros financiadores, Universidad de Buenos Aires y Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica; a todos aquellos a quienes recurrimos para recabar información, buscar materiales, datos, etc. Como muchas veces antes agradecemos a Cristina Klimsza, Silvia Cloquell y Susana Aparicio por los densos diálogos donde ponen de manifiesto sus largas experiencias en los estudios agrarios; a nuestros pacientes lectores de manuscritos, Mirta Antonelli, Raúl Zibechi, Daniel Scarfó; a la socióloga y productora agraria Gloria Cucullo de Murmis que suele transformarse en una informante clave en estos temas; también a los economistas Julio H. G. Olivera por sus siempre penetrantes comentarios y observaciones y a Juan Carlos Gómez Sabaini y Axel Kiciloff por su predisposición a intercambiar ideas y trabajos.

Deseamos agradecer a *Página 12* y a *Crítica de la Argentina* tanto el espacio que nos brindaron para exponer nuestros pensamientos como por la autorización para que esos artículos se publiquen en este libro. Damos las gracias en forma especial a Javier Lorca (quien además es entrevistador de la segunda nota), Alfredo Zaiat, Claudio Scaletta y Andrés Osojnik de *Página 12* y a Gabriela Granata, Diego Shurman y Rodolfo Gonzáles Arzac también entrevistador de *Crítica de la Argentina* (de aquellos años).

Con todos ellos aprendimos que es posible ese difícil oficio de acotar el desarrollo de ideas a un espacio reducido de papel.

Por último queremos agradecer a todos los colegas que están comprometidos con la búsqueda de una sociedad mejor y nos acompañan obstinadamente en esta construcción autónoma de pensamientos y conocimientos. Todos los días desde Buenos Aires, desde alguna provincia o desde algún lugar del mundo llegan voces de esa red que cobija los lazos necesarios para la generación de un conocimiento que se declara comprometido con la querella por la igualdad y con los grandes debates del presente.

Norma Giarracca y Miguel Teubal

Julio de 2010

[1] Por ejemplo el de Rodolfo González Arzac, *¡Adentro!, millonarios, chacareros y perdedores en la nueva argentina rural,* Buenos Aires, Marea 200

La Trama de un conflicto extendido. El conflicto agrario marzo – julio de 2008

María Comelli, Ma. Celeste Castro García,
Julieta Godfrid, Agustina Schvartz
Mariana Ciccolella, Mariano Negro[1]

Los primeros desencuentros

Sábado 1 de Marzo

A comienzos de este mes, en los sectores agroalimentarios de la carne, de la leche y del trigo comenzaban a surgir ciertas fricciones con el Gobierno debido a ciertas políticas públicas. Mientras que los tamberos reclamaban que el precio promedio que pagaba la industria por el litro de leche, aumentara de $ 0,85 a $ 1,20 para poder afrontar sus costos de producción, la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) sostenían que el argumento era falso porque el costo oscilaba entre $ 0,75 y $ 0,80. En función de contener el precio de la carne, que ya había aumentado un 15 % en lo que iba del año, el Gobierno intentaba negociar con frigoríficos y carnicerías. Con respecto al aumento del precio del trigo, el Gobierno intervino el mercado fijando un precio de corte de $ 360 por tonelada con el fin de que la suba no impactara en los valores de productos sensibles de la canasta básica como el pan, harina y fideos.

Lunes 3 de Marzo

Para frenar la suba del precio de la carne el Gobierno volvía a limitar su exportación: el cupo se reduciría un 40 %. La medida se aplicaría a partir del mes de abril para mejorar la oferta de hacienda en el mercado interno. Por su parte, los principales dirigentes rurales insistieron sobre la necesi-

1 Agradecemos la colaboración de Natalia Buzzella, Claudia Calvo y Laura Tozzini.

dad de "dialogar" para hallar herramientas que permitieran incrementar la producción.

Por otro lado, la cotización internacional de la soja se mantenía en alza: la tonelada en el mercado de Chicago llegó a U$S 573, con un alza de 1,5 % con respecto al viernes anterior.

Martes 4 de Marzo

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y el secretario de la SAGPyA, Javier de Urquiza, recibieron en sus oficinas a los representantes de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF) y de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA). La intención del Gobierno era acordar con los representantes de los frigoríficos un esquema de subsidios para garantizar los valores de que se habían alcanzado en enero en doce cortes populares.

Si bien Ulises Forte, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), acordaba con el esquema de subsidios impulsado por el Gobierno, consideraba que había que liberar la exportación de las carnes más caras. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Carne Vacuna, Javier Martínez del Valle, subrayaba que de aplicarse esa medida "no agregaría demasiado para corregir el valor de la carne". En esa misma línea, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza, también criticaba la medida: "Así como estamos, la única salida parece ser tomar acciones".

A su vez, obreros y dirigentes del Sindicato de la Carne protestaron frente a la sede de la SAGPyA en reclamo por las restricciones a las exportaciones, que ponían en serio riesgo a más de nueve mil puestos de trabajo. A la movilización se sumaron dirigentes y productores de la CARBAP para apoyar a los trabajadores de la carne.

Miércoles 5 de Marzo

Un nuevo aumento en el precio de la carne y la persistente escasez de animales en el Mercado de Liniers, profundizó la tensión entre el Gobierno y el sector ganadero. Mientras que controladores de la Secretaría de Comercio comenzaron a aplicar multas que oscilaban entre los $ 500 y $ 800 a los comercios que no respetaban los precios máximos fijados para los

doce cortes populares, los industriales de la carne aseguraron que estaba lejos un acuerdo por los precios. A su vez, los trabajadores del sector decidieron realizar un paro de media jornada en rechazo al "inminente cierre de las exportaciones" que acarrearía el "despido de 7.000 trabajadores". Frente a esta medida de fuerza, el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires (APCCBA), Alberto Williams, explicó que como el paro se llevaba adelante en los frigoríficos dedicados a la exportación, no afectaría al consumo.

Por su parte, la FAA, a través de un documento, exigió a las autoridades nacionales: la normalización del mercado del trigo; un precio lleno para los productores; valores accesibles para el consumidor; firme lucha contra la inflación; la eliminación de la diferencia entre la cotización local e internacional; incentivos para la producción; precio sostén; recreación de la Junta Nacional de Granos; entre otras medidas.

En tanto frente a la creciente inflación, las Asociaciones en defensa del consumidor denunciaron un aumento de más del 84% en el precio de la papa y otras verduras, mientras que un grupo de usuarios convocó a realizar un boicot contra la suba de precios en los alimentos.

En este marco de disputa por los precios entre el Gobierno y los sectores agropecuarios, comenzaba la gran muestra agroindustrial organizada por los diarios Clarín y La Nación conocida como Expoagro. Esta vez, se realizó en la ciudad de Armstrong, provincia de Santa Fe, y fue inaugurada por los gobernadores Daniel Scioli y Hermes Binner. En el inicio de Expoagro, el secretario de la SAGPya, Javier de Urquiza, revalidó el rol estratégico que podía cumplir el país en un momento donde los *commodities* alcanzaban valores históricos.

Jueves 6 de Marzo

En una nueva reunión con la Mesa de Comercialización Lechera, el Secretario de Comercio Interior, volvió a rechazar el pedido de aumento en la leche y sólo aceptó volver a discutir el tema dentro de los cuarenta y cinco días posteriores.

Por su parte, el Presidente de la CICCRA, que agrupa los frigoríficos que se dedican esencialmente a abastecer el mercado interno, denunció que Moreno "mandó inspectores a la Cámara para intimidarnos y presionarnos para que aceptemos la propuesta". Desde Expoagro, los dirigentes de las cuatro entidades nacionales expresaron su repudio a la posible concreción

del acuerdo entre los frigoríficos y el Gobierno Nacional por el precio de la carne.

En su visita a Expoagro, Eduardo Buzzi, presidente de la FAA, anunció que se había terminado el "dialoguismo" con el Gobierno y que el martes se iniciarían medidas de protesta a nivel nacional por la profundización de la crisis ganadera, la transferencia de los exportadores a los molinos, la pérdida que estaban teniendo los productores trigueros y el proceso de concentración que llevaría a la desaparición del pequeño y mediano productor.

Las voces de los dirigentes políticos Elisa Carrió y Francisco De Narváez también se hicieron oír en Expoagro. Ambos criticaron la política rural que mantenía el Gobierno y exigieron que se bajaran las retenciones a las exportaciones.

Viernes 7 de Marzo

Luego de varias reuniones, el Gobierno, los frigoríficos y los carniceros firmaron un acuerdo que comprendía una nueva lista de precios máximos para trece cortes de carne vacuna de consumo masivo. A la reunión asistieron los integrantes del consorcio exportador ABC, la UNICA, la CADIF, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la APCCBA y la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos (CASRECH).

Lunes 10 de Marzo

Referentes de la dirigencia del campo y de la producción pecuaria como Eduardo Buzzi; Pedro Apaolaza; Horacio Delguy, presidente del Frente Agropecuario Nacional (FAN); Néstor Vittori, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (CARSFE); Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) criticaron el acuerdo y destacaron que al no tener el consenso de los sectores de la producción estaba destinado al fracaso.

Mientras tanto, los trabajadores del frigorífico Alberdi, en la localidad de Oro Verde, provincia de Entre Ríos reclamaron la regularización de su situación, ya que había días de faena en los que trabajaban más horas de las que correspondía. Por su parte, la empresa sostuvo que esta situación se daba por los cupos de exportación que había fijado el Gobierno Nacional.

De manera sorpresiva, el secretario Javier De Urquiza dispuso, a través de la Circular N° MZ/2008, el cierre del registro de exportaciones de granos por 48 horas argumentando razones de "ordenamiento administrativo" de todas las ventas anotadas hasta el momento.

El anuncio de un conflicto

Martes 11 de marzo

Como parte de una nueva política para contener el alza del precio de los alimentos y la inflación, el ministro de Economía, Martín Losteau, dio a conocer la Resolución N° 125/08 que consistía en la implementación de un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz, el trigo y los productos derivados que se obtenían de ellos[2]. El aviso se realizó a través de una conferencia en Casa de Gobierno junto al secretario de la SAGPyA, Javier de Urquiza y el de Política Económica, Gastón Rossi.

La medida fue rechazada por la SRA, la CRA, la FAA y la CARBAP. Mario Llambías, dirigente de la CRA, opinó: "El Gobierno es poco agradecido hacia un cultivo que sacó al país de la crisis en 2001 (...) Es una lástima que nos sigan usando como fuente de recursos para remediar los problemas de caja". Por su parte, Buzzi hizo alusión a que las retenciones castigaban especialmente a los pequeños y medianos productores ya que no eran segmentadas ni progresivas. De esta manera, las entidades agrarias aseguraron que iniciarían una serie de protestas. Mientras que la FAA convocaba a una movilización nacional para el día siguiente, la CARBAP, que justamente se encontraba reunida en Buenos Aires al momento del anuncio, se declaró en estado de alerta y movilización y comunicó que acompañaría el miércoles siguiente, al Sindicato de los Trabajadores de la Carne en su protesta frente al Mercado de Hacienda de Liniers.

En cuanto al conflicto por el trigo -cuyos registros de exportación se encontraban cerrados desde noviembre de 2007- los productores agrarios

2 La medida consistía en una estructura de valores móviles para los próximos cuatro años que se ajustaban día a día -automáticamente- a los precios internacionales: si las cotizaciones subían, el valor de las retenciones también; si bajaban, ocurría lo contrario. Teniendo en cuenta los precios de ese momento se registrarían subas entre siete y nueve puntos para las retenciones a soja y girasol y bajarían casi un punto las de trigo y maíz lo que, según el Ministro, sería una forma de incentivo a su producción. A través de este esquema se buscaba retrotraer los precios de exportación fijos a los niveles de diciembre de 2007, por ejemplo, un chacarero que cobraba $ 1.070 por tonelada pasaba a recibir de $ 850 a $ 900.

realizaron bloqueos en el puerto de Rosario y en la Ruta Nacional N° 9, que une a esa ciudad con la de Buenos Aires, tal como había anunciado Buzzi días atrás. En la asamblea realizada a la vera de la ruta se reclamó que se le pagara al productor el precio internacional del trigo y se rechazaron los precios máximos en el comercio local de trigo, carne y leche. En este sentido se denunció a los exportadores, como Dreyfus o Cargill, que se quedaban desde hacía dos años con gran parte de la renta del sector al acaparar la diferencia que existía al comprar al precio interno y vender al internacional a partir de las políticas de intervención por parte del Estado[3].

Miércoles 12 de marzo

Ante el anuncio de la Resolución N° 125/08 la SRA , la FAA, la CRA y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) decidieron dejar de comercializar carnes y granos por dos días como forma de protesta conjunta.

Desde la FAA y la CARBAP se remarcó que el aumento de las retenciones respondía a fines recaudatorios para mantener el superávit fiscal. Buzzi argumentó: "...estos recursos serán más transferencia de los productores a la Casa Rosada para disciplinar a los gobernadores (...) Esta es la forma más centralizada de conducción que hemos conocido nunca, con un deterioro muy importante de la institucionalidad". Añadió que no había, por parte del Gobierno, una búsqueda de decisiones concertadas.

Luciano Miguens reclamó públicamente una reunión con Lousteau y afirmó tener esperanzas "en que se revierta esta medida" ya que constituía una agresión al sector que estaba "haciendo todo lo posible por crecer". El vicepresidente de dicha entidad, Hugo Biolcati, sostuvo no entender por qué la soja produciría alteraciones en los precios de los alimentos al interior del país, si se trataba de un producto que el 95% se exporta.

En la misma línea, el consejo directivo de la CRA se reunió para evaluar medidas de fuerza. Llambías hizo referencia a las provincias del interior que estaban siendo "despojadas" con la suba de las retenciones y la

3 A ello se agregaría que las exportadoras de trigo concentraban a su vez las distintas etapas de la cadena productiva como la molienda y la comercialización en el mercado interno. Al producir derivados del trigo o subproductos del trigo para el consumo local recibían una compensación por parte del Estado nacional en el marco de la política de control de precios. A su vez, al exportar el trigo como harina la alícuota de exportación era menor, 10 % frente al 28 % que tributaba el trigo.

"injusticia que resulta para todos sus ciudadanos". La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) participó también de dicha reunión y dio a conocer su adhesión a la protesta.

También el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos mostró inconformidad ante la intervención del Gobierno en los mercados, considerándolo como una "burla" para un mercado "tan dinámico y transparente".

Por su parte, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) dejó entrever que sus costos de producción eran cada vez mayores debido al aumento del precio de insumos como los fertilizantes o el glifosato, los altos precios de flete y transporte. Aseguró que con el nuevo esquema de retenciones también peligraría la incorporación de tecnología agrícola. Manifestaron también su repudio al nuevo esquema de retenciones la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) y la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FEDIA)

Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía se realizaba una conferencia de prensa para hacer circular dos trabajos que avalaban la postura oficial. La conferencia fue presidida por el secretario de Política Económica, Gastón Rossi, y el de la SAGPyA, Javier de Urquiza. Allí manifestaron su rechazo al paro dispuesto por las entidades del sector, ya que la aplicación de las retenciones era una decisión tomada por el Gobierno que establecía las condiciones para trabajar y que seguía manteniendo la rentabilidad de los productores. También remarcaron la medida como una herramienta para contener la inflación, para derivar recursos al sector ganadero y para que el productor triguero cobrara el precio lleno por su cereal. Por último, difundieron el esquema de retenciones para los productos derivados de granos[4].

Por parte de la oposición los legisladores de Propuesta Republicana (PRO) comenzaron a revisar junto con la Coalición Cívica (CC) y la Unión Cívica Radical (UCR) formas de acción conjunta. El vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Christian Gribaudo, junto al bloque del PRO, interpelaron a Lousteau para que explicara la medida.

Por otra parte, los trabajadores del Sindicato de la Industria de la Carne protestaron frente al Mercado de Hacienda de Liniers en rechazo al acuerdo firmado días atrás entre el Gobierno y los frigoríficos. A su vez,

4 Mientras que para el aceite de soja se fijaría la misma alícuota que la soja, se elevaría al 20 % para el biodiesel 18 % para la harina de trigo.

llamaron a los pequeños y medianos productores a no entregar carne al Mercado. De la medida participaron también el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD) y la CARBAP.

En el mercado local, las repercusiones del anuncio del nuevo esquema de retenciones produjeron la suba del precio del maíz y la baja en el de las oleaginosas. La Bolsa de Chicago registraba en tanto, bajas en los precios.

Jueves 13 de marzo

Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (ME) dieron a conocer sus opiniones a través de un comunicado a partir del cual se entreveía la posibilidad de que el paro se extendiera a lo largo de la semana siguiente. Se aseguró que eran los productores quienes se organizaban espontáneamente y presionaban para que se realizaran cortes de ruta.

El paro fue acompañado por tractorazos, asambleas y movilizaciones en el interior del país y contó con la adhesión de diversos sectores de la agroindustria y operadores del mercado, como el FAN; la Asociación de Productores de Granos del Noroeste Argentino (PROGRANO); la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA); la Federación de Acopiadores de Granos (FAG); las Bolsas de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; la Asociación Cadena Argentina de la Soja (ACSOJA); la AAPRESID; y la FEDIA.

Entre algunas de las declaraciones que se realizaron se encontraban las del dirigente de la delegación entrerriana de la FAA, Alfredo de Angeli, quien opinó que las retenciones eran un "ataque a los ya pobres pueblos del interior" y criticó a la presidenta Cristina Fernández por la hipocresía que demostró al desoír un petitorio que su entidad le había alcanzado "contra la concentración de la riqueza del campo". El presidente de la CONINAGRO, Fernando Gioino, aseguró: "somos dialoguistas, pero con una medida como ésta no nos queda otra que hacer un alto. Están pasando por encima a un sector que le da vida al interior".

Por otro lado, los gobiernos provinciales manifestaron su apoyo a la medida adoptada por el Gobierno Nacional en un encuentro –pactado con anterioridad a la suba de las retenciones- que mantuvo Martín Lousteau, con los ministros de producción provinciales en el Palacio de Hacienda. Sin embargo, recalcaron su interés en que una porción del dinero recaudado por la aplicación de la medida fuera repartida entre las provincias para incentivar su desarrollo.

Además, se dieron a conocer declaraciones del Ministro de Economía en donde mostraba su desacuerdo con la protesta impulsada por las entidades agrarias. Lousteau recalcaba que no era "un reclamo de todo el campo, ni de todos los que trabajan en el campo, ni de toda la sociedad", al tiempo que valoraba medidas del Gobierno como el mantenimiento de un tipo de cambio alto y la intervención en los precios internos de combustibles y gasoil que favorecían especialmente a los productores.

Buzzi replicó con dureza al Ministro y remarcó que la protesta se debía a "una política agropecuaria equivocada" que estaba afectando la seguridad alimentaria del país y que era necesario "un Estado inteligente que produzca más leche, más carne y más trigo". Desde la CRA, Mario Llambías, afirmó que el Ministro de Economía creía que la soja era "el enemigo de la Argentina" y que "muchas de las mejoras que tuvo el país en los últimos años, se debieron al avance de la agricultura, en momentos en que la industria no estaba y el país tenía un déficit enorme".

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, también hizo declaraciones a favor de la suba de las retenciones como medida de "criterio redistributivo" para "garantizar" que las ganancias del sector fueran compartidas con "todos los argentinos". Afirmó que la huelga le resultaba una respuesta "desmesurada".

Comienzan los cortes de ruta

Viernes 14 de Marzo

En el marco de la segunda jornada de paro agrario, la protesta se endureció con cortes de ruta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos.

En la Autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución, alrededor de ochocientos productores de la FAA impidieron el paso de camiones jaula que transportaban hacienda.

En la provincia de Córdoba, los productores cortaron la circulación de vehículos durante una hora y media sobre la Avenida de Circunvalación de la ciudad capital y el empalme con la Autopista Córdoba-Villa María. Luego, se realizó un tractorazo hasta el centro de la capital cordobesa. Allí estuvieron los vicepresidentes de la FAA, Pablo Orsolini, y de la CRA, Néstor Roulet, quienes se trasladaron después del mediodía a Jesús Ma-

ría, para participar de una asamblea a la que asistieron unos doscientos cincuenta productores. Desde allí, le reclamaron al Gobernador cordobés que bajara el perfil de su "obsecuencia con el Gobierno Nacional".

En Paraná, provincia de Entre Ríos, se realizó una reunión de la que participaron la SRA , la FAA, la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). Allí hicieron un pedido al gobernador Urribarri, para que tomara posición ante el conflicto y anunciaron que el campo entrerriano impulsaría una movilización en Ceibas (en la intersección de las rutas nacionales N° 12 y N° 14) el miércoles 19 de marzo.

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, los productores lácteos de la zona de Trenque Lauquen cortaron la Ruta Nacional N° 5, bloquearon el ingreso de camiones a la planta de La Serenísima y por la tarde lo liberaron. La Mesa Láctea de la FAA aseguró que los productores tamberos se sumaban a las medidas de fuerza ya que las subas en las retenciones no afectarían sólo a los productores sojeros sino a todo el sector en general. También se sumaron a las protestas la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores Cerealeros, quienes a través de un comunicado aseguraron que la decisión del Gobierno de elevar las retenciones a los granos "atenta contra la competitividad del sector y desalienta la producción".

En Casilda, provincia de Santa Fe, en el marco de una medida de fuerza dispuesta por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y afines (FESICARA), cerca de trescientos trabajadores de la carne marcharon sobre la Ruta Nacional N° 33 y cortaron el tránsito frente a la Facultad de Ciencias Veterinarias, en defensa de las fuentes de trabajo y para exigir una compensación salarial por la reducción de las horas laborales que implementaron algunos frigoríficos a partir de la suspensión de las exportaciones. A su vez, los dirigentes de la FESICARA se reunieron con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y los representantes de las cámaras empresarias del sector donde acordaron una nueva reunión para el 26 de marzo en el Ministerio de Trabajo de la Nación para discutir la compensación salarial que pedía el gremio. Asimismo, seiscientos trabajadores de la carne pertenecientes a los frigoríficos de Mar del Plata Sadowa y Vivoratá se instalaron en la Ruta Nacional N° 2 reclamando más cupos para exportar carne. En tanto, en Paraná, provincia de Entre Ríos, los trabajadores del frigorífico Alberdi levantaron el paro luego de lograr un acuerdo que determinaba que la firma les garantizaría a sus

doscientos empleados, treinta y cinco horas de trabajo y el pago de dos de los cinco días de jornada no trabajadas por paro (a pedido del sindicato).

Luego del mediodía se reunieron las cuatro entidades agropecuarias y decidieron que el paro se extendería hasta el miércoles 19 de marzo. Buzzi afirmó: "Esperábamos una reacción del Gobierno y lamentablemente ya la hubo: salieron a descalificarnos". A lo que Mario Llambías agregaba: "La única manera de levantar el paro es que el Gobierno de marcha atrás con la suba en las retenciones".

Por su parte, Alberto Fernández, consideró que la medida de fuerza producía "asombro e indignación" y agregó: "estos señores están hablando como si estuvieran en una situación de pérdida absoluta y desde hace cuatro años nunca el campo estuvo como ahora". A las críticas esgrimidas por el Jefe de Gabinete se sumaron las del ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el gobernador Daniel Scioli.

Sábado 15 de Marzo

La programación de marchas y protestas que los dirigentes habían anunciado que comenzarían el domingo, se vio desbordada por las bases.

En la provincia de Buenos Aires tuvieron lugar diferentes manifestaciones de protesta. En Pergamino se realizó un gran acto que congregó a quinientos productores representativos de las cuatro entidades. Se interrumpió el tránsito sobre la Ruta Nacional N° 8 y se realizó una gran asamblea en la sede de la Sociedad Rural local donde, según el director de la FAA, Jorge Solmi, los participantes se manifestaron a favor de seguir con el paro por tiempo indeterminado y hasta que se revean las medidas del Gobierno. También se registraron cortes en varias localidades de las provincias de Córdoba, Salta, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

En Córdoba, un grupo de ruralistas se instaló en las afueras de Alta Gracia, con media docena de tractores al costado del pavimento. A la mayoría de los automovilistas y transportistas les entregaban volantes en los cuales se fundamentaban las razones de la "protesta del campo". En la provincia de Salta, productores autoconvocados de Anta, Metán y Rosario de la Frontera cortaron el cruce de las rutas nacionales N° 34 y N° 16 con tractores, camiones y camionetas. Los productores explicaban a los conductores las razones de la protesta y cada 15 minutos liberaban el tránsito.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo, volvió a cuestionar la "insensibilidad" del campo. En tanto, Luciano Miguens afirmó que "a nadie le gustan estas medidas", pero volvió a quejarse de que "tampoco tuvo el campo la posibilidad de sentarse en una mesa para discutir los precios de los productos básicos".

Mientras Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. (CGT), acusaba al agro de golpista y de causar desabastecimiento, tanto Luciano Miguens (SRA) como Néstor Roulet (CRA) negaron que el paro pudiera producir desabastecimiento de carne al afirmar que los frigoríficos se encontraban abastecidos. En tanto, Eduardo Buzzi (FAA) denunció: "Buscan enfrentarnos con la población". Por su parte, Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que el paro había complicado la puesta en marcha del acuerdo realizado entre los frigoríficos, las carnicerías y el Gobierno con el fin de rebajar los precios de trece cortes populares, debido a lo cual las carnicerías no podrían ofrecer los valores de referencia pactados.

Domingo 16 de Marzo

Por la mañana la FAA realizó una reunión de socios extraordinaria para analizar las acciones a seguir; a través de un comunicado la entidad confirmaba la realización de diferentes actos, asambleas y cortes de rutas a lo largo del día en la localidad bonaerense de General Arenales. En las ciudades cordobesas de Jovita y Del Campillo; en las santafecinas Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz y en la provincia de Chaco habría un bloqueo total de rutas. "Tenemos confirmada la realización de más de cien actos en las próximas horas", consignaba el comunicado difundido por la entidad.

Ante el rumor que había trascendido acerca de que el Gobierno estaba evaluando aplicar retenciones más bajas a pequeños y medianos productores, algunos dirigentes agropecuarios negaron la versión y en Economía aseguraron que "Lo único nuevo que podría haber es algún incentivo para los productores de zonas marginales que tienen costos de flete más altos". Por su parte, Eduardo Buzzi afirmaba que ningún funcionario los había convocado para proponer una medida de ese tipo. Desde la CRA, Mario Llambías señalaba que nada se ganaría intentando congraciarse sólo a algunos y tratando de dividirlos.

Las duras críticas al Gobierno llegaron también de parte de Gerardo Morales, jefe de la UCR y senador por Jujuy, quien además de replicar a los radicales kirchneristas, se pronunció a favor de la protesta del campo. En tanto Roberto Urquía, senador nacional por Córdoba y empresario aceitero aliado al Gobierno, manifestó que el nuevo esquema de retenciones daba "un horizonte de previsibilidad al sector" y que era "mejor que el anterior", al tiempo que negó que ese favoreciera a los grandes grupos exportadores.

Lunes 17 de Marzo

Si bien se ratificó la validez de la Resolución N° 125/08, el Gobierno introdujo una modificación que disminuyó a cuatro puntos porcentuales la diferencia entre las materias primas y los derivados de harinas y pellets de soja y girasol, como era hasta marzo de 2007[5]. Para defender esta resolución desde el Ministerio de Economía se sostuvo que la rentabilidad de los productores de soja locales estaba un 16 % por encima de los números de los productores de soja brasileños. Por otra parte, expresaron preocupación por los costos de ciertas producciones agrícolas, mencionando la posibilidad de implementar medidas que promovieran producciones regionales como manzanas, peras y algodón, subsidios al uso de semillas certificadas de maíz y trigo, así como subsidios al uso de fertilizantes (que representaban, para el caso del trigo, más del 30 % del costo directo de implantación). De todas formas, advirtieron que "ese programa productivo sería discutido y presentado cuando se levantasen las medidas de fuerza".

Durante la quinta jornada del paro agrario fueron registradas más de cien acciones de protesta que tuvieron lugar en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán. Las principales manifestaciones fueron convocadas por la FAA, la CRA y asambleas de productores autoconvocados.

En la provincia de Buenos Aires, hubo cortes de ruta en las localidades de Lincoln, 25 de Mayo, O'Brien, Tandil, General Arenales, Pehuajó, Carlos Tejedor, Cuenca, Saladillo, Piedritras, Daireaux, Guaminí, Chacabuco, Nueve de Julio, Balcarce y Junín. También por la mañana se

5 La Resolución N° 125 establecía un porcentaje de retenciones móviles a las exportaciones, determinado en función del precio internacional de la tonelada de los diferentes granos, y un porcentaje menor para las exportaciones de sus subproductos (harinas y pellets de soja y girasol), que fue establecido en tres puntos porcentuales por debajo de los primeros para la harina y los pellets de soja, y en dos puntos porcentuales para el caso del girasol.

realizó una concentración de productores en la localidad de Necochea y en las últimas horas de la tarde se realizó una asamblea de productores en Bolívar.

Respecto de La Pampa, unos mil productores rurales del norte de la provincia cortaron tres rutas nacionales y provinciales en las localidades de Realicó, Bernardo Larroudé y Quemú Quemú, lo que dejó por lo menos a unos quinientos vehículos varados.

En lo que concierne a la provincia de Entre Ríos, la protesta abarcó las localidades de Ceibas, Paraná y Victoria. Asimismo, productores agropecuarios del departamento de Diamante se instalaron en el puente sobre el arroyo Salto para reclamar que el Gobierno Provincial respaldara a los productores en su repudio al nuevo esquema de retenciones móviles. Luego, los productores se trasladaron hasta el puente sobre el arroyo La Ensenada, donde, a diferencia de Brasilera, no había alternativas de paso. El ministro de Gobierno entrerriano, Adán Bahl, acordó una reunión para el martes siguiente con los productores, el Secretario de Producción de la provincia y los legisladores provinciales y nacionales. Sergio Urribarri, gobernador entrerriano, se pronunció a favor del diálogo permanente para superar el conflicto que había generado el esquema de retenciones móviles, alegando que el corte de ruta era una medida equivocada.

Por otro lado, en Santa Fe, grupos de productores cortaron durante varias horas las principales rutas que unen esta provincia con el resto del país, como la Ruta Nacional N° 11 (Santa Fe-Resistencia) y la Ruta Nacional N° 34 (Rosario-Tucumán). En el caso de Venado Tuerto, la Sociedad Rural local convocó a un acto del que participaron alrededor de quinientos productores agropecuarios, los oradores principales fueron Mario Llambías (CRA) y Eduardo Buzzi (FAA). Uno de los aplausos más encendidos los recibió María del Carmen Alarcón, secretaria de Integración Regional del Gobierno Provincial de Hermes Binner.

Respecto de las manifestaciones en Córdoba, la FAA, la CRA y la CARTEZ realizaron múltiples concentraciones de productores rurales en siete localidades, mientras que en Chazón el corte de ruta fue llevado a cabo por productores autoconvocados.

En el Chaco las protestas tuvieron lugar en las localidades de Charata, en la Ruta Nacional N° 94; en Roque Sáenz Peña, sobre la Ruta Nacional N° 95 y N° 16; y en Avia Terai, en la intersección de la Ruta Nacional N° 16 y N° 94.

A su vez, en San Miguel de Tucumán se realizó una movilización hacia la Casa de Gobierno en rechazo al nuevo esquema de retenciones móviles a la exportación de granos y en la provincia de Santiago del Estero se registró un corte de ruta en la localidad de Selva.

Por otra parte, durante una reunión con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro Martín Lousteau ratificó el nuevo esquema de retenciones móviles y criticó el paro agropecuario. Las declaraciones de Lousteau fueron apoyadas por el secretario general de la UIA, Juan Carlos Sacco, quien aseguró que "el resguardo del tipo de cambio competitivo implicaba una política de retenciones, en particular frente a la suba de los precios internacionales tan elevados que tuvieron las *commodities*".

Martes 18 de Marzo

Mientras el Sindicato de Trabajadores de la Carne bloqueaba la entrada al Mercado de Liniers y realizaba un abrazo simbólico en apoyo a las medidas de fuerza de las entidades agropecuarias, los supermercadistas anunciaban que comenzaban a agotarse los stocks de carne y lácteos, no sólo por la falta de envíos sino también por los camiones demorados en los cortes de ruta. El titular de la CASRECH, Miguel Ángel Calvete, dijo que si bien la provisión en Capital Federal y Gran Buenos Aires era normal, ya varios asociados del interior del país (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba) habían recibido menos mercadería.

En cuanto a la industria láctea, los representantes de La Serenísima, afirmaron que los camiones de leche estaban entrando a las plantas, excepto en la planta de Trenque Lauquen que se encontraba bloqueada. En el caso de Sancor, permanecía bloqueada la planta de Devoto y sus camiones también permanecían demorados en los cortes de ruta.

Durante la jornada se registraron alrededor de cien concentraciones y setenta cortes de ruta en todo el país. No sólo se mantuvieron los cortes en las provincias de la Pampa Húmeda (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa), sino que se extendieron a provincias que se encontraban al límite de la frontera agrícola como Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Según las estimaciones de la FAA, participaron de las acciones de protesta aproximadamente cuarenta mil productores en todo el país. Así, el Presidente de FAA hablaba de "jornadas históricas" protagonizadas por

los productores rurales aclarando que "a cada hora se confirma un nuevo corte en cada pueblo".

En algunos cortes arribaron camioneros, presuntamente enviados por Hugo Moyano para negociar una flexibilización de la protesta. En otros puntos, en cambio, los transportistas se plegaban a la protesta.

En la provincia de Buenos Aires, hubo movilizaciones en Benito Juárez, Azul, Luján, González Cháves y Tres Arroyos. En Mar del Plata, unos quinientos productores se dirigieron en caravana al Palacio Municipal, mientras que la Sociedad Rural de Trenque Lauquen convocó a una asamblea de productores y representantes de la industria, el comercio y los servicios. En la misma ciudad se establecieron guardias para controlar el paso de camiones frente a la planta de La Serenísima a fin de evitar el envío de leche a Buenos Aires. También se produjeron cortes de ruta sobre la Autovía N° 2 a la altura de Chascomús y sobre la Ruta Nacional N° 9 en San Pedro, donde los presidentes de tres de las entidades agrarias (FAA, CRA y SRA) encabezaron una caravana de tractores, camionetas y hasta una cosechadora. Al quedar bloqueados dos carriles de la autopista y las colectoras, generó un gran descontento en los camioneros que no podían pasar, quienes amagaron con romper el cerco. Asimismo, se produjeron algunos hechos de violencia en Gral. Arenales, donde un camionero embistió contra un auto atravesado sobre la ruta y los chacareros reaccionaron con tiros al aire. En tanto en Pehuajó el enfrentamiento entre camioneros y productores dejó tres detenidos. También se realizó un corte de ruta por cinco horas en 9 de Julio, sobre la Ruta Nacional N° 5 y la Ruta Provincial N° 65, al que se acercaron a participar productores de Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, 25 de Mayo, Salliqueló, Trenque Lauquen y otras localidades cercanas. La protesta contó con la adhesión de la Cámara de Comercio e Industria local, que invitó a sus asociados a apoyar la medida.

En la provincia de Entre Ríos se repitieron los cortes de ruta en el Túnel Subfluvial que une Paraná con Santa Fe, Ceibas, Aldea Brasilera y Basavilvaso. A éstos, se sumaron nuevos cortes de ruta en Cerrito, Alcaraz y Crespo.

En Santa Fe, la Ruta Nacional N° 9, fue el epicentro de las manifestaciones, en un corte que se prolongó por tres horas, a la altura del Río Carcarañá. Hubo también un bloqueo, organizado por transportistas, en el límite con la provincia de Chaco, sobre la Ruta Nacional N° 95. Por otra parte, los productores rurales cordobeses bloquearon la entrada a la

Aceitera General Deheza, perteneciente a la familia del senador nacional Roberto Urquía, quien había defendido el sistema de retenciones móviles. En esa misma provincia, hubo manifestaciones de productores de maní y otros productores aceiteros.

En la provincia de La Pampa aproximadamente trescientos cincuenta productores de la zona de Quemú Quemú volvieron a cortar la Ruta Provincial N° 1. En Realicó, hubo una protesta de la que participaron el presidente de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, Carlos Arese, el vicepresidente segundo de la FAA, Ulises Forte, el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Jorge Arocena, y dirigentes de las entidades ruralistas de Rancul.

En la provincia de San Luís, continuaba interrumpido el transporte de hacienda desde hacía cinco días, mientras las firmas consignatarias suspendieron los remates que habían sido previstos para esa semana. Respecto de las protestas en Salta, se realizaron cortes en la Ruta Nacional N° 36 y N° 14; mientras que en la provincia de Formosa, se concentraron en Villa Dos Trece y el Puente Libertad. Por último, en Santiago del Estero hubo cinco cortes de ruta en distintas localidades de la provincia.

Por su parte, distintos sectores políticos de oposición expresaron sus puntos de vista respecto al conflicto. Así, la líder de la CC, Elisa Carrió, apoyó la protesta agraria indicando la "inconstitucionalidad" de las retenciones a las exportaciones de granos. María del Carmen Alarcón, titular del Grupo Pampa Sur, señaló en un corte de ruta que quienes imponían la medida estaban "profundizando un modelo" que generaría "la desaparición de gran cantidad de productores". Asimismo Margarita Stolbizer (CC) culpó al Gobierno Nacional por tratar al "campo" como un simple "sujeto de imposición fiscal". No obstante, las críticas también surgieron desde sectores del oficialismo: nueve concejales del Frente para la Victoria (FPV) de General Villegas adhirieron al reclamo rural.

En cuanto a las organizaciones, la presidenta del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML[6]), Ana Galmarini, indicó que los pequeños y medianos productores estaban como en la década del noventa, a lo que agregó: "si no nos adherimos a esta lucha vamos a desaparecer todos". La protesta de las entidades agrarias recibió también el apoyo de la AAPRESID y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

6 Es necesario aclarar que la fundadora y presidenta desde los comienzos del movimiento, Lucy de Cornellis, no compartió esta posición y fue una activa defensora de la política gubernamental.

A fin de enfriar la protesta agraria, el Gobierno y las principales firmas de fertilizantes (Profertil, Mosaic-Cargill y Petrobras) anunciaron una rebaja del 20% en el precio de la urea (US$ 410 más IVA por tonelada), lo que, según el Secretario de Comercio Interior significaría una rebaja del 12 % en los costos de los productores. Rápidamente, Pablo Orsolini, vicepresidente de la FAA, criticó la medida, al tiempo que ratificó el paro agrario. Por su parte, el Secretario de la SAGPyA afirmó que compensarían las subas de costos que pudieran tener los productores en los cuatro años que durase el nuevo sistema de retenciones móviles y mencionó la línea de créditos específica que se establecería para la tecnificación de los pequeños productores. Sin embargo, afirmó que no habría negociación hasta tanto no finalizara el paro agrario.

Los dirigentes de las cuatro entidades se reunieron en una estación de servicio, a pocos kilómetros de un acto organizado en el marco de la protesta agraria y redactaron un comunicado que explicaba que resolvían continuar con las medidas de protesta y reunirse para evaluar la marcha de las mismas.

A su vez, ciertas organizaciones sociales afines al kirchnerismo como Federación de Tierra y Vivienda (FTV), se reunieron para organizar una movilización a la sede de la SRA en la Ciudad de Buenos Aires en repudio al paro agropecuario. Tanto Luís D'Elía como Edgardo Depetri acusaron a la entidad de "golpista". A esta iniciativa adhirieron representantes del Movimiento Octubre, Militancia Social, Coordinadora de Villas de la Capital Federal, Corriente Bicentenario, Corriente Federal Kirchnerista, Movimiento de Organizaciones Sociales, Agrupación Rodolfo Walsh, Agrupación Peronista "26 de Julio" y Movimiento Plátanos, entre otras organizaciones populares.

Miércoles 19 de Marzo

Las movilizaciones y cortes de ruta se multiplicaron sobre todo en las provincias de Buenos Aries, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. A su vez, comenzó a circular la posibilidad de realizar una marcha hacia la Plaza de Mayo.

En Entre Ríos, la protesta agraria tuvo su epicentro en los tres pasos que comunicaban a la provincia con el resto del país. En el caso del corte de ruta de Ceibas se extendió hasta las 16 horas, luego de que un oficio del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenara a Gendarmería

Nacional liberar el paso. Aproximadamente doscientos efectivos con carros hidrantes y bastones se interpusieron entre los ruralistas y las largas filas de turistas y camiones que se habían formado hacia ambos lados de la ruta. En tanto en Urdinarrain y en Federal se realizaron asambleas de productores sin cortes. En esta última ciudad se adhirieron al reclamo los transportistas agremiados en la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas. Además, hubo manifestaciones espontáneas a pocos kilómetros de Concordia mientras que otros productores autoconvocados volvieron a realizar cortes sorpresivos en más de nueve localidades. Teniendo en cuenta los cortes de frontera en Colón y Gualeguaychú por el reclamo sobre las pasteras, la provincia quedó en un semi aislamiento, ya que sólo quedaron libres por varias horas el paso a Corrientes y el de Concordia-Salto.

En la provincia de Santa Fe, además del bloqueo del túnel Subfluvial del que participaron cerca de quinientos productores agropecuarios, hubo cortes en Rufino y en Villa Saboya. Allí también se realizó un acto organizado por el MML, la FAA y la CRA en el que se solicitó la renuncia del Ministro de Economía. Los oradores fueron los dirigentes de las entidades mencionadas, así como los intendentes de Armstrong y Las Rosas. En tanto en Santa Teresa, un pueblo cercano a Rosario, unos trescientos ruralistas se reunieron en asamblea para coordinar acciones. Allí se redactó un instructivo que establecía, impedir el paso de camiones con cereales a puerto, ganado y productos lácteos elaborados; no molestar a turistas y "ciudadanos comunes"; persuadir a transportistas (cerealistas, cooperativas) a que no cargaran ni enviaran cereal ni ganado; y reforzar los bloqueos en los anillos de los puertos. Por su parte, ante la proliferación de productores "autoconvocados", Ulises Forte (FAA) indicó: "hay muchos pueblos donde no existen filiales de las entidades. Entonces se juntan los gringos y salen a la calle. Hoy hay entre cincuenta y sesenta mil productores movilizados. Es la mayor protesta del campo en treinta años"; a ello, el dirigente de la CARBAP, Jorge Azurmendi (quien se encontraba en un corte en Vedia), agregó: "en la ruta hay mucha gente autoconvocada y éste es un tema que nos alegra, pero a la vez nos tiene bastante preocupados, porque es tanta la bronca que a veces la gente se exalta y se excede en las reacciones".

En la provincia de Córdoba, se realizaron cortes de ruta en Cruz del Eje, Laboulaye, Oncativo, Río Cuarto, La Puerta, Villa María y Sinsacate. Desde el Gobierno Provincial, el Secretario de la Producción solicitó que

no se interrumpiera la libre circulación "que tiene cualquier ciudadano" y que "sigan reclamando por los canales institucionales como la mesa de consenso a la que fueron invitados por el Gobierno Nacional".

Sin embargo, la principal concentración se realizó en Villa Constitución, con una caravana de tractores hacia San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde se realizó un acto que comenzó con el corte de la autopista Buenos Aires-Rosario, en el que participaron los presidentes de la FAA y la CRA.

Jueves 20 de Marzo

Las declaraciones del Jefe de Gabinete y del Ministro de Economía, ratificando que no darían marcha atrás con la suba de las retenciones, endureció la protesta agropecuaria. Comenzaba Semana Santa y los productores rurales volvían a protestar en las rutas.

En la provincia de Buenos Aires hubo al menos siete cortes de ruta. Bien temprano, los ruralistas organizaron una protesta en la Ruta Provincial N° 188, cerca de Pergamino, donde se registró una caravana vehicular de más de tres kilómetros de extensión. También se registraron cortes en las rutas cercanas a las ciudades de Lobos, Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio e Hipólito Vieytes. En varias localidades, los ruralistas decidieron realizar cortes de ruta informativos, en los que repartían panfletos, explicaban los motivos de la protesta y dejaban fluir el tránsito cada 30 minutos mientras que mantenían el corte total para los camiones que transportaban granos. Por la noche, en una asamblea realizada en el corte de la Ruta Nacional N° 8 y acceso a Pinzón, productores de la filial Pergamino de la FAA resolvieron "paralizar la cosecha de granos gruesos".

Mientras tanto, productores agropecuarios entrerrianos volvieron a cortar las rutas nacionales N° 12 y 131 y las rutas provinciales N° 11, 32 y 39. Los productores autoconvocados que mantenían el corte a la altura de Sauce Pintos, eran en su mayoría jóvenes con una edad promedio de 30 años, quienes aclararon que no respondían a ninguna entidad gremial. En dicha provincia varias entidades manifestaron públicamente su apoyo a la protesta agropecuaria: el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la oposición política.

En el norte y centro del país, se registraron cortes en las provincias de Tucumán (sobre la Ruta Nacional N° 34, Pozo Hondo; Ruta Nacional N° 9, Los puestos; y Ruta Nacional N° 157, Taco Ralo), Córdoba (sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura de Marcos Juárez), Santa Fe (sobre la

Ruta Nacional N° 7, a la altura de Rufino y Villa Saboya) y Santiago del Estero (Ruta Nacional N° 34).

A su vez, el gremio de camioneros salió a enfrentar a los piquetes del campo exigiendo que liberaran las rutas. Productores denunciaron que fueron amenazados por transportistas que iban armados sobre la Ruta Provincial N° 188, a unos 10 km de Pergamino. Por su parte, el gremio de los ferroviarios, La Fraternidad, denunció que los productores estaban atentando contra estructuras ferroviarias a través de "la quema de durmientes, la destrucción de clipseras para provocar descarrilamientos, y de cambios eléctricos".

Por otro lado, en la localidad santafecina de Santa Teresa se realizó un encuentro convocado por la FAA que reunió a unos doscientos dirigentes propios y productores no agremiados. Allí, los productores resolvieron los mismos puntos que se habían establecidos en otras zonas; entre otros continuar con la medida de fuerza hasta que el Gobierno retrotraiga la medida; no dejar pasar camiones con cereal a puerto, ganado en pie ni productos lácteos elaborados; reforzar las tareas de persuasión para que los dadores de carga, *feed lot*, cerealistas y cooperativas, no carguen ni envíen cereal ni ganado a los puertos y grandes centros de abastecimiento.

Ante el avance de las protestas, Luciano Miguens justificó los cortes de ruta al sostener que "el piquete es una moda" de manifestación, en tanto Buzzi aseguró que distintos referentes políticos y sociales le expresaron su apoyo a la protesta de los pequeños y medianos productores, tales como el titular del grupo Moreno, Fernando 'Pino' Solanas; el ex secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro; Carlos Chile, dirigente del Movimiento Territorial Liberación (MTL); y el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Al respecto, Solanas señaló: "Hace falta una política que discrimine por tamaño de explotación y premie la diversificación rural" y agregó que hacía falta "una junta nacional de carnes y de granos". "Necesitamos que el Estado regule y proteja al pequeño productor", concluyó Solanas, quien consideró "ilógico" que se pusieran altas retenciones a los productores rurales chicos y no altas cargas de exportación a petroleras y mineras.

Por su parte, los gobernadores de las provincias de Buenos Aires (Daniel Scioli), Córdoba (Juan Schiaretti), Chaco (Jorge Capitanich) y Entre Ríos (Sergio Urribarri) se alinearon al Gobierno Nacional y reclamaron a los dirigentes agropecuarios "prudencia, responsabilidad y solidaridad" y que asumieran un "diálogo con sensatez", a fin de "preservar el equili-

brio socioeconómico externo e interno". En tanto, el vicepresidente, Julio Cobos, sostuvo que el Gobierno estaba dispuesto al diálogo con el sector agropecuario "pero sin condicionamientos, ni presiones".

Por otro lado, el legislador entrerriano Lisandro Viale (CC), que integraba la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y Ruben Giustiniani, del Partido Socialista (PS), presentaron un Proyecto con retenciones diferenciales para fomentar mecanismos de redistribución de la riqueza y frenar la migración de pequeños productores del campo.

Viernes 21 de Marzo

Mientras el Gobierno Nacional recibía una clara muestra de apoyo por parte de la CGT y la UIA, las cuatro entidades que lideraban la masiva protesta de los productores agropecuarios profundizaban las protestas y comenzaban a organizar una gran marcha hacia la Plaza de Mayo. En este contexto, Eduardo Buzzi aseguró que el paro continuaría "el tiempo que haga falta" y remarcó que observaba en los pequeños y medianos productores no agremiados a las cuatro entidades, "una rebeldía incontrolable".

Durante toda la jornada, los cortes de ruta se multiplicaron. En Córdoba se intensificó el corte sobre la Ruta Nacional N° 9 a la altura de Villa María, donde los manifestantes impidieron el paso a los camiones con alimentos.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta continuó aunque con menor intensidad debido al pedido de las entidades convocantes de que no se realizaran cortes totales durante los días de la Semana Santa. Al menos doce grupos de manifestantes se concentraron en distintas rutas registrándose camiones transportadores de cereales demorados, manifestantes entregando panfletos a los automovilistas y congestionamiento vehicular.

En las provincias de Salta y Tucumán se vieron varios cortes de ruta, como también en la provincia de La Pampa donde, en la localidad de Ingeniero Luiggi, un piquete de productores rurales frenó un tren que cargaba granos y se dirigía al puerto de Bahía Blanca. En la provincia de Santiago del Estero permanecía cortada la Ruta Nacional N° 34, la principal vía de comunicación de la provincia con los puertos de exportación ubicados en Santa Fe. Allí cientos de productores sojeros, ganaderos y tamberos cortaban el paso liberándolo cada dos horas. También se registraron algunos hechos de violencia cuando una persona de la localidad de Bandera denunció haber sido golpeada ferozmente por productores. El presiden-

te de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS), Omar Chianti, descartó que el hecho tuviera que ver con la medida de fuerza, al tiempo que afirmó que se trataba de "infiltrados" que buscaban "desnaturalizar" la protesta.

Las provincias de Formosa y Catamarca no estuvieron ajenas al clima que caracterizaba al país. En Formosa las entidades representativas de la producción anunciaron que el martes 25 reanudarían su plan de lucha, adhiriendo a la protesta nacional. Así se decidió en la última asamblea realizada en Villa Dos Trece, desde donde marcharon hacia El Colorado con camionetas, tractores y maquinarias agrícolas, para cortar el puente Libertad, tendido sobre el Río Bermejo. Por su parte, los productores catamarqueños del departamento Santa Rosa, se sumaron a las medidas de protesta de todo el país. Los bloqueos se habían iniciado el martes anterior sobre la Ruta Nacional N° 64, que une la provincia con Santiago del Estero. En San Luis, la medida de protesta tuvo alto acatamiento y nulo movimiento de hacienda y cereales en todo el territorio provincial.

En Entre Ríos, hubo protestas en diversas carreteras internas. Por otro lado, la Iglesia de esta provincia convocó a una reunión en la que participaron tanto productores autoconvocados como dirigentes de la FAA y la SRA. Sin embargo la mediación de la Iglesia no pudo frenar la protesta. También en esta provincia, el presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR, Jaime Benedetti, cuestionó al gobernador Urribarri por avalar el aumento de las retenciones al agro. Por su parte, el titular del PJ de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que trabajaría para construir una mesa de diálogo entre las autoridades nacionales y los pequeños y medianos productores.

Sábado 22 de Marzo

Grupos de chacareros santafecinos volvieron a instalarse en las principales rutas, donde entregaron volantes, dejaron circular vehículos particulares, pero cerraron totalmente el paso a camiones con vacunos, granos y leche. También se concretaron distintas acciones de protesta, incluyendo asambleas, piquetes y movilizaciones, en las provincias del Chaco, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras que en Buenos Aires hubo cortes en varias localidades.

En Entre Ríos, crecía la tensión en la localidad de Ceibas por la presencia de integrantes del gremio de camioneros, quienes se movilizaron hasta

allí para impedir el corte de las rutas nacionales N° 12 y N° 14. El sindicalista Pablo Moyano y cerca de quinientos camioneros se encontraban apostados en dicha localidad para garantizar que se permitiera trabajar a los afiliados del gremio. En Córdoba, se registraron cortes en varias localidades de la provincia. Entre ellos, unos trescientos productores de la localidad de Marcos Juárez, recibieron la sorpresiva visita de la líder de la CC, Elisa Carrió. Asimismo, otros sectores de la oposición expresaban sus opiniones sobre el conflicto. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, reclamó que el Gobierno Nacional fuera el que iniciase el diálogo con los sectores rurales. Por otra parte, una iniciativa del radicalismo proponía que la Constitución protegiera al pequeño productor y planteaba que el Estado Provincial le facilitara el crédito agrario, extensiones impositivas, subsidios en tarifas públicas y asesoramiento técnico, etcétera.

Por su parte, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) emitió un comunicado calificando a la medida oficial como "un desaliento a la inversión". Asimismo, otros organismos técnicos, cámaras empresarias y operadores granarios, tales como la AACREA; la AAPRESID; la ACSOJA; la CIARA; el Centro de Exportadores de Cereales; la FEDIA; el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales y la FAG, criticaron con dureza la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias.

Domingo 23 de Marzo

Mientras se mantenían los cortes de ruta y las manifestaciones en todo el país, la provincia de Entre Ríos era la más convulsionada ya que allí se mantenían algunos enfrentamientos entre productores y camioneros que se encontraban acampando en la localidad de Las Ceibas. Al respecto, Alfredo de Angeli y el director de SRA por Entre Ríos, Luís Miguel Etchevehere, responsabilizaban al Gobierno Nacional de cualquier hecho de violencia que pudiese ocurrir. Por su parte, Aníbal Fernández, aseguraba que la Gendarmería se encontraba "tomando recaudos" para permitir el tránsito y garantizar la libertad de circulación.

En Buenos Aires, continuaron los cortes en quince puntos diferentes de la provincia. Algunos productores se concentraron ese mediodía sobre la Ruta Nacional N° 9, en la ciudad de San Pedro. Allí, en el ingreso al puerto de la multinacional francesa Louis Dreyfus, se detuvo a los camiones que pasaban con carga de cereales o productos frutihortícolas.

Los manifestantes colocaron clavos en uno de los carriles de la ruta, a la altura del km 159, de forma tal de obligar a los camiones a parar, ante lo cual cinco camioneros se enfrentaron con productores que mantenían el corte. El titular de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Vitore, expresó que la gente del campo estaba comenzando a armarse y responsabilizó por dicha situación al Gobierno Nacional y al ministro Florencio Randazzo. En la zona de Pergamino, los productores decidieron suspender la cosecha de granos hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus reclamos, mientras que en Tres Arroyos, no dejaron pasar camiones con cargamentos hacia los mercados e hicieron "escraches públicos" frente a los establecimientos o domicilios particulares de los dueños de la carga.

En Santa Fe, mientras que los productores se mantuvieron apostados frente a la planta de procesamiento de oleaginosas de Dreyfus, en General Lagos, continuaban los cortes en Rufino y en San José de la Esquina, donde se realizó un acto del que participaron productores de Arequito, Los Molinos, Casilda, Chañar Ladeado y Cruz Alta. En la ciudad de Santa Fe, la manifestación más importante de productores colapsó el ingreso al complejo fabril Reconquista-Avellaneda donde centenares de camiones aguardaban a la vera de la Ruta Nacional N° 11 para que se les permitiera pasar.

En Córdoba los productores realizaron masivos cortes en treinta puntos diferentes de la provincia. El piquete de mayor tensión se vivió en Laboulaye, donde quedaron varados mil doscientos camiones y un camionero desafió a cuchillo a los manifestantes e intervino la Policía. Otro transportista, presionado por los productores, tiró 1.200 kilos de carne al asfalto, que luego se destinaron a entidades de bien público. En uno de los puestos, situado en las afueras de San Francisco, los manifestantes se cruzaron a golpes con un hombre que intentaba pasar por la ruta.

En Salta, continuaron las concentraciones de productores de Rosario de la Frontera y Metán, a la altura de El Quebrachal. También en las provincias de Formosa y San Luis se mantuvieron los cortes. Mientras tanto, algunas entidades expresaron su rechazo a las acciones de protesta lideradas por la M E. Así, la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales (FEDECAMARAS) criticó el paro agrario y los culpó de desacelerar el consumo.

Desde la oposición, seguían las voces de crítica hacia el Gobierno. Por un lado, Elisa Carrió, quien estuvo recorriendo los cortes de ruta, criticó al Gobierno Nacional y acusó a Moyano como una presencia parapolicial.

Por otro lado, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Federico Pinedo, presentó un proyecto de ley para impedirle al Poder Ejecutivo decidir por su cuenta el nivel de las retenciones y devolverle esa facultad al Congreso; en tanto el titular de la UCR, Gerardo Morales, expresaba nuevamente su posición negativa frente a las retenciones. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, solicitó participar de la negociación. "No pedimos debatir sobre el petróleo o el tabaco, pero lo agrícola-ganadero sí le es pertinente a Santa Fe", sostuvo.

Lunes 24 de Marzo

Tras la falta de acuerdo entre el Gobierno y las entidades agropecuarias, se profundizó la protesta luego del fin de semana largo. La masividad de las manifestaciones prácticamente no dejó ruta central de acceso al área metropolitana que no se viera afectada. Además de los cortes de ruta para impedir la llegada a los puertos, se sumaba el bloqueo de usinas lácteas.

Mientras que en territorio bonaerense, se realizaban protestas en 19 localidades (principalmente en el centro y norte de la provincia), en La Pampa más de quinientos productores se instalaban sobre la Ruta Provincial N° 5, frente al establecimiento Carnes Pampeanas, para impedir el movimiento de transportes de carga. A su vez, otro corte tenía lugar en Eduardo Castex y se realizaba una marcha en General Pico.

En Entre Ríos, la Gendarmería, cumpliendo órdenes del Ministerio del Interior, desplegó unos trescientos efectivos llegados desde otras provincias para impedir el corte al acceso al túnel subfluvial en Paraná. Hubo gases, forcejeos, heridos y otros tantos detenidos. Asimismo, los ruralistas quemaron una vieja cosechadora. Tras varios minutos de confusión y caos, la Gendarmería acordó con los productores la continuidad de la protesta pero sin restringir el tránsito. Sólo se impidió el paso a camiones que llevaban alimentos, carne, lácteos o granos. Por otra parte, los productores de Las Ceibas evitaron ir a un choque frontal con los camioneros y decidieron correr la protesta 40 km más al norte. A diferencia de lo que sucedió en Paraná, la Gendarmería, tanto en las rutas nacionales N° 14 y N° 12 como en la Ruta Provincial N° 16, ofició como mediador entre los chacareros, los automovilistas y los camioneros, sin reprimir.

En la provincia de Córdoba productores agropecuarios llevaban a cabo nuevamente numerosos cortes de ruta en las zonas de Marcos Juárez, Río Cuarto, Laboulaye, Jesús María, Monte Cristo y San Francisco, entre

otros. En Santa Fe, productores de Alcorta y Bigand decidieron en asamblea frenar el levantamiento de las cosechas y el traslado a los acopios, mientras en Tucumán, en la frontera con Santiago del Estero, los ruralistas cortaron la Ruta Nacional N° 9. El gobernador de esta provincia, José Alperovich, quien días antes había calificado de "millonarios y terratenientes" a los productores en huelga, sufrió un escrache de chacareros en las tranqueras de su campo.

A su vez se registraron cortes de ruta en Villa Mercedes (San Luis), Saenz Peña y Gancedo (Chaco) y en Villa 213 (Formosa). Mientras que los productores correntinos se sumaron a la protesta sin manifestaciones pero paralizando la comercialización de productos.

También la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de protestas, aunque en apoyo al Gobierno. Integrantes del Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, manifestaron su rechazo al paro agrario frente a la sede principal de la SRA , en la calle Florida. Luego de un breve discurso algunos militantes lanzaron bombas de color rojo contra el frente del edificio, además de escribir pintadas que aludían a la complicidad de ese sector con el pasado régimen militar.

En tanto, el sector lechero nacional reclamó al Gobierno que distribuyera los fondos prometidos para el sector y denunció la falta de diálogo desde los despachos oficiales. Asimismo la Mesa Nacional de Productores Lecheros anunció que se reuniría con los líderes de la protesta ruralista a fin de hacer más visible la participación de ese sector en el cese de comercialización, que por razones productivas no podía parar.

Algunos gobernadores mostraban preocupación por la virulencia que estaba adquiriendo la protesta en cada uno de sus territorios. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se comunicó con uno de los líderes del paro en su provincia para informarle que estaba "realizando gestiones". Schiaretti, por su lado, exhortó "a iniciar en forma inmediata un diálogo sin condicionamientos".

Hacia la politización del conflicto

Martes 25 de Marzo

La treceava jornada del paro agrario amaneció sin ingresos de cabezas de ganado al Mercado de Liniers y en un contexto donde el alza de los precios

de los alimentos y el temor por el cercano desabastecimiento eran cada vez mayores. Las demoras de pasajeros y transporte en las rutas formaban parte del escenario cotidiano de la protesta, mientras que los buques de exportación, que tenían como destino a los puertos del Sur de Santa Fe, se desviaban hacia Estados Unidos. Desde la Bolsa de Rosario comunicaron que no se realizaron operaciones de compra/venta de productos agrícolas y hasta detuvieron la industrialización de los productos.

Una de las amenazas presentes más preocupantes eran los recortes de empleo en las actividades relacionadas con la actividad agropecuaria, especialmente la rama alimentaria. La Unión Industrial de Córdoba (UIC), dio a conocer que se suspenderían a trabajadores por la "falta de insumos básicos", y desde la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados se comunicó que el 60 % de los frigoríficos del país se encontraban paralizados. También desde el sector aceitero se dijo que no se contaban con insumos para trabajar y que los trabajadores no podían cumplir sus tareas habituales, mientras que la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) aseguró que los productores estaban sacrificando pollitos por no tener granos para alimentarlos. La Serenísima sostuvo que el recibo de leche había bajado a la mitad y Milkaut que no podía sacar los productos de las plantas para ser comercializados.

Por la tarde, la presidenta Cristina Fernández dio un discurso en la Casa Rosada en el que cuestionó fuertemente a los productores rurales, comparó a los "piquetes de la miseria", haciendo alusión a los ocurridos en el 2001, con "los piquetes de la abundancia", como llamó a los protagonizados por los productores rurales. También hizo referencia a que con la huelga se estaba perjudicando a todos los argentinos mientras que "las exportaciones siguen viento en popa".

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de las palabras de la Presidenta, comenzaron a oírse cacerolazos en los barrios de Recoleta y Barrio Norte. Al poco tiempo ya se estaban cortando las avenidas principales de la ciudad: Santa Fe y Salguero, en Barrio Norte; Santa Fe y Callao, en Recoleta; Coronel Díaz y Santa Fe, en Palermo; Cabildo y Juramento y Cabildo y Federico Lacroze, en Belgrano; Acoyte y Rivadavia, en Caballito y una concentración en el Obelisco. Luego, muchos de los manifestantes se dirigieron a la Plaza de Mayo donde se congregaron a su vez, sectores en apoyo al Gobierno, convocados por D'Elía. Entre ellos se encontraban las organizaciones: Libres del Sur, Movimiento Evita, la FTV y el Frente Transversal Nacional y Popular (FTNP). Al producirse el encuentro entre

los dos sectores hubo incidentes y el hecho más abrazado por los medios fue una trompada de D'Elía a un manifestante "pro campo".

También se registraron movilizaciones y cacerolazos en las principales ciudades del país, tales como Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Santa Fe y San Miguel de Tucumán. En Rosario se congregaron alrededor de cinco mil personas en el Monumento a la Bandera y hubo choques con sectores kirchneristas. En muchas otras ciudades del país, principalmente las de la Pampa Húmeda, se produjeron movilizaciones con cacerolazos y tractorazos en las plazas principales y municipalidades, caravanas de automóviles y hasta apagones.

El disgusto por parte de los productores frente a las palabras de la Presidenta también se hizo sentir a través de bloqueos de rutas en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Frente a la magnitud de la protesta, los dirigentes de las cuatro entidades se manifestaron sorprendidos por el apoyo recibido en las ciudades y criticaron al Gobierno. Buzzi manifestó: "Esto es muy grave. (La Presidenta) eligió el camino de la confrontación. Me pregunto qué viene después de esto, el estado de sitio y la represión".

Los sectores de la oposición también reaccionaron con críticas al Gobierno, luego del discurso de la Presidenta. Elisa Carrió pidió a la Ciudad de Buenos Aires "que acompañe al campo" y que los pequeños y medianos productores, "frente a esta provocación violenta, tengan una reacción no violenta". También se escucharon los pronunciamientos de Eduardo Duhalde, el senador Gerardo Morales, el senador Rubén Giustiniani, el diputado Federico Pinedo, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, Eduardo Macaluse (diputado por Solidaridad e Igualdad), Luis Galvalisi (Partido Demócrata Progresista) y de Jorge Altamira (Partido Obrero). Mientras tanto, los legisladores de la oposición (UCR, PRO, CC) buscaban debatir en la Cámara de Diputados la derogación del decreto que había fijado el aumento de las retenciones, al tiempo que el PS buscaba impulsar un proyecto propio para "proteger a los pequeños y medianos productores" a través de reintegros.

Por su parte, la Iglesia mostró preocupación a través de un llamado del Episcopado y remarcó la necesidad de la apertura de una instancia de diálogo entre ambas partes. En efecto, una de las estrategias que buscaban las entidades agrarias era acercarse a dicha institución como mediador del conflicto. Sin embargo, fue el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo

Mondino, quien justamente se había reunido ese mismo día con la ME, el primero en ofrecerse como mediador.

Por otra parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) emitió un comunicado en el que señalaba: "la actitud de los señores dueños de la tierra de la Argentina no deja de sorprender por su reiterada e inveterada audacia en la defensa de sus bolsillos, con una hipocresía digna de los mejores falsarios de la historia". Y agregaba: "se repite el modelo de siempre en el campo, donde la Sociedad Rural se opone a cualquier control por parte del Estado de su tasa de ganancia, lograda a costa del esfuerzo de toda la nación".

Miércoles 26 de Marzo

Por la mañana, el Gobierno desestimó los cacerolazos realizados en las principales ciudades del país y las masivas movilizaciones de ruralistas en el interior. Martín Lousteau aseguró que el cacerolazo de la noche anterior había sido "montado por dirigentes que no están ideológicamente de acuerdo con el Gobierno, donde se manifestó la clase media alta urbana que no tiene absolutamente nada que ver con el campo". Además, añadió que "los líderes de la oposición incentivaron" las protestas callejeras. Por su parte, el secretario de la SAGPyA, Javier De Urquiza, llamó a la reflexión a los productores, mientras que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió que quienes impidieran la circulación de los camiones que transportaba alimentos, irían presos.

Luego de reunirse con la Presidenta, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, se comunicó con cada uno de los representantes de las cuatro entidades rurales para pedirles que levantaran el paro y los cortes con el fin de armar una mesa de diálogo que estudiase medidas compensatorias para el sector. Scioli aclaró que era una iniciativa "propia" pero que la Presidenta había convalidado su propuesta. Los dirigentes rurales le aseguraron que se reunirían para evaluar la propuesta.

Binner firmó un documento junto a ciento cuarenta intendentes de su provincia en el que se reclamaba a la Casa Rosada suspender el nuevo esquema de retenciones. A su vez, convocó a las entidades del agro a conformar una mesa de diálogo y a establecer un "Consejo Nacional Agropecuario Ampliado" para discutir una salida para el sector. El senador nacional Carlos Reutemann adhirió al comunicado convocando al diálogo a la vez que criticó duramente el discurso de la Presidenta. Por su

parte, el gobernador de la provincia de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y la mayoría de los intendentes de dicha provincia, elevaron una nota al ministro Martín Losteau, solicitando abrir el diálogo con el sector agropecuario "sin condicionamientos".

También el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, criticó el discurso de la Presidenta considerando que se había desperdiciado una oportunidad de convocar al diálogo, mientras que Gustavo Grobocopatel, el mayor productor de soja del país, consideró que en el Gobierno había "una especie de locura" y que "sería bueno que reconociera que en algo se equivocaron, algo falló, que hubo un error de cálculo" que desató el conflicto.

Por otra parte, la Mesa Nacional de la CTA se manifestó en favor de las retenciones como mecanismo redistributivo, advirtiendo que "su sola presencia sin la reconstrucción de organismos de regulación e intervención estatal (Junta de Granos y de Carnes) limita sus efectos e impide frenar la suba de los alimentos". La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se manifestó en similar sentido respecto de las retenciones y pidió al Gobierno "diferenciar a las PYMES del campo de los grandes monopolios".

El Gobierno recibió el apoyo del Congreso Nacional: el Senado aprobó una declaración de apoyo a la política de retenciones móviles. En tanto, la UCR, la CC, el PRO y el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) proclamaron en conjunto la derogación del decreto que había aumentado las retenciones, criticaron duramente a la Presidenta por su discurso "confrontativo" y cuestionaron la actitud de los "piqueteros oficialistas" y de su dirigente Luis D'Elía como "fuerza de choque del Gobierno".

El Mercado de Liniers no registró ningún ingreso de vacunos y el Gobierno decidió utilizar el ganado perteneciente al Ejército y a la Armada para evitar el desabastecimiento. En Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, los tamberos se vieron obligados a tirar leche por no poder despachar la producción. En tanto la Cámara de Empresas de Larga Distancia anunció que se habían cancelado unos seiscientos servicios de micros.

Mientras los cortes de ruta se intensificaron en varios puntos del país, la novedad estuvo dada por los numerosos bloqueos que se registraron en las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y Jujuy. En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron

setenta y tres concentraciones de ruralistas. Además, hubo bloqueos en Bragado, Tornquist, Olavarría, San Cayetano, Trenque Lauquen, Benito Juárez, Adolfo Gonzáles Cháves y Junín, entre otros puntos.

Por su parte, productores rurales entrerrianos volvieron a cortar la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Arroyo El Sauce, cerca de Gualeguaychú. Los manifestantes impidieron el paso de camiones con mercaderías de origen agropecuario, aunque permitieron la circulación del resto de los vehículos. En la provincia de Santa Fe, los transportistas de cargas, adheridos a la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (FATAC) y Transportadores Rurales Argentinos (TRA) se sumaron a la protesta y paralizaron sus actividades por tiempo indeterminado.

En la provincia de Catamarca los productores agropecuarios continuaban con el corte de la Ruta Nacional N° 64, en la localidad de Los Altos, ubicado a unos 100 km de la ciudad capital. Al sur de la provincia de Mendoza, en la Ruta Nacional N° 188, los ruralistas demoraban el tránsito repartiendo volantes a los automovilistas para explicar los términos de la protesta del agro. Por su parte, productores del centro y sur de la provincia siguieron con cortes parciales de tránsito. En la provincia de San Luis, los cortes fueron totales tanto en la intersección de las rutas nacionales N° 7 y N° 8 como a la altura de Villa Mercedes, donde aproximadamente doscientos cincuenta camiones quedaron varados.

A los cortes de ruta se sumaron las protestas con cacerolas, bocinazos y presencia de gente en las calles tanto en Buenos Aires como en distintas ciudades del interior del país. La Plaza de Mayo volvió a ser el escenario de concentraciones a favor de la protesta agraria y de militantes oficialistas. María del Carmen Alarcón, dirigente del grupo Pampa Sur, y un grupo de mujeres, entregaron un petitorio dirigido a la presidenta Cristina Fernández para que atendiera el reclamo de los productores. Mientras tanto, militantes de la Convergencia Socialista y de la Asamblea de San Telmo, se concentraron frente a la Pirámide de Mayo para protestar contra el Gobierno.

En Mar del Plata unas cuatrocientas personas con cacerolas y latas en la mano se manifestaron sobre el monumento al general San Martín; en tanto que a sólo cincuenta metros, un grupo integrado por militantes de la FTV, sindicalistas del gremio de la pesca y el Movimiento Evita expresaron su posición en favor del Gobierno. A su vez, en La Plata, se reunieron alrededor de mil quinientas personas convocadas por la FAA

haciendo sonar sus cacerolas, mientras que grupos piqueteros oficialistas intentaban romper la convocatoria.

En Paraná, Entre Ríos, los productores hicieron una caravana importante con sus tractores durante más de una hora reclamando al Gobernador que adoptara una posición firme en favor del sector. También hubo manifestaciones en las provincias de Tucumán, Santa Fe y Córdoba. En esta última se sintió principalmente en la capital, Río Cuarto, Río Primero, Jesús María y Laboulaye.

Jueves 27 de Marzo

El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), informó acerca de buques aguardando para cargar en los puertos argentinos; que no se comercializaron quinientos mil vacunos en todo el país; y que, sumado al freno en la venta de maquinaria agrícola, todas éstas eran consecuencias de los primeros 15 días de paro agropecuario. Se hablaba de desabastecimiento; el Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), advirtió sobre la falta de combustible en el interior del país, particularmente en Catamarca y Misiones. En tanto el Centro de Industriales Panaderos también denunció la escasez de harina.

Mientras que se registraban intentos de saqueos a supermercados en el Gran Buenos Aires y en Mendoza, Guillermo Moreno se reunía con las autoridades y operadores del Mercado Central a quienes les solicitaba que realizaran un relevamiento de los camiones con frutas y verduras que se encontraban varados en las rutas cortadas por la protesta del campo. Desde Gualeguaychú, Alfredo de Angeli, rechazó la posibilidad de liberar las rutas y sentenció ante las cámaras: "Si Moreno quiere mandarnos la Gendarmería, que mande también las ambulancias. Nosotros no nos movemos".

En la asamblea de la cuenca lechera de Santa Fe, en la que convergen dieciocho pueblos y ciudades desde San Jorge hasta Totoras, los autoconvocados decidieron no cosechar la soja y mantener el corte. Participaron de la asamblea representantes de la FAA y la CRA. Tanto en Laboulaye, Córdoba, como en la intersección entre la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 303 de Santiago de Estero se registraron incidentes entre los ruralistas, camioneros, pasajeros y automovilistas.

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, los productores de Las Flores fueron apartados de la Ruta Nacional N° 3 ante la presión policial. En sintonía con esta primera línea de protesta, otros cortes cercanos en la misma ruta se volvieron inflexibles con cientos de camiones varados, uno a la altura de Cacharí y otro en Azul, donde incluso llegaron a cortar el paso a un tren cargado con frutas y verduras.

En el ámbito de la justicia se realizaron presentaciones cruzadas, tanto por los cortes como por las retenciones. La Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) solicitó un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo para declarar inconstitucionales las resoluciones que aplicaban las retenciones a las exportaciones[7] e incluyó el pedido de una medida cautelar que interrumpiera provisoriamente la aplicación de las mismas. Por otro lado, el abogado Eduardo Barcesat denunció por extorsión en el fuero Penal Federal a los ruralistas que cortaban las rutas.

Otras voces comenzaron a resonar convocando a superar el conflicto a través del diálogo. La UIA lo hizo a través de una solicitada que se publicó en varios diarios, mientras que el legislador porteño Aníbal Ibarra, el diputado nacional Miguel Bonasso y el dirigente Carlos Heller, lo realizaron a través de un comunicado. En tono más alarmista, el productor de soja Gustavo Grobocopatel evaluó: "Cada día es más urgente sentarse a dialogar. Hay que resolver este problema a través de diálogo. Eso es lo que todos esperamos". Desde la Iglesia Católica, el equipo de la Pastoral Social y la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina difundieron un comunicado en el que exhortaban a "una tregua que permita avanzar en el encuentro y el diálogo, hacia la búsqueda de una solución creativa, justa y equitativa, superadora del momento actual. . . ".

En Parque Norte se llevó a cabo un acto que fue una muestra de apoyo al Gobierno frente al conflicto con los productores rurales. En el escenario, la Jefa de Estado estuvo acompañada por Néstor Kirchner, todo el Gabinete Nacional, numerosos gobernadores peronistas, intendentes, sindicalistas y dirigentes del oficialismo. También estuvieron presentes, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Evita, FTV, Libres del Sur, el Frente Barrial "19 de diciembre" (FB 19) y miembros de la juventud kirchnerista, entre otros.

7 El Artículo N° 755 del Código Aduanero, que trasladaba del Congreso al Poder Ejecutivo la delegación de la legislación en materia de derechos de exportación; el decreto 2752 de 1991, que subdelegaba el tema en el Ministerio de Economía; y las Resoluciones N° 125/06, 125/08 y 141/08 de esa cartera, que habían motivado el paro rural.

Desde Parque Norte, por cadena nacional, la Presidenta pidió que se levantaran los cortes y convocó al diálogo. También volvió a calificar al conflicto como de "naturaleza política" y lo asoció con una posición contraria a lo realizado en materia de derechos humanos. Sostuvo: "en los cacerolazos vi caras de conocidos defensores de genocidas en la protesta de Plaza de Mayo". A su vez, se preocupó por remarcar los distintos sectores e intereses en conflicto: "este Gobierno no está en contra de los pequeños productores que trabajan con sus manos el campo, les quieren hacer creer que queremos ir por ellos" aseguró. Y agregó: "necesitamos que no se sojice nuestro campo". "Tiene que haber rentabilidad, pero hablemos con sinceridad. Se está discutiendo la distribución del ingreso y un modelo de país", planteó la Presidenta.

Mientras tanto, varias organizaciones afines al kirchnerismo, como el Movimiento Libres del Sur y Barrios de Pie, se congregaron en la Plaza de Mayo para escuchar el discurso de la Presidenta a través de una pantalla gigante, ubicada a un costado de la pirámide de Mayo. Una vez terminado el discurso, se le sumaron algunas columnas lideradas por Luis D'Elía, que llegaban desde Parque Norte.

Si bien los dirigentes de las cuatro entidades valoraron el llamado al diálogo, afirmaron que se necesitaban medidas concretas para que se levantaran los cortes de ruta. Inmediatamente después del discurso presidencial, los productores autoconvocados decidieron continuar con el paro y los cortes de ruta en los distintos puntos del país. En Gualeguaychú, el dirigente Alfredo de Angeli sostuvo que el discurso presidencial había estado "cargado de odios y revanchismo". Tanto en la zona conocida como la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, como en Córdoba, los productores decidieron continuar con la medida de fuerza.

Luego del discurso de la Presidenta, buena parte de la oposición política coincidió en marcar un avance en la posibilidad de superar la crisis. En cambio, la UCR y la CC se mostraron más escépticos frente al discurso. Por su parte, Gustavo Grobocopatel respondió al discurso de la Presidenta retomando un viejo argumento suyo: "Con una cosecha de soja le pagamos al FMI".

Por la noche, volvieron a escucharse cacerolazos en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país. Así, un grupo de vecinos de Mar del Plata se concentró con sus cacerolas frente a la Catedral, mientras que en La Plata hubo una concentración a escasos metros de la Casa de Gobierno bonaerense. En Bahía Blanca, los productores y

comerciantes respondieron con un apagón de vidrieras de los comercios del centro y un cacerolazo. Por último, también en Pergamino y en Junín los productores y pobladores se manifestaron con ruidosos cacerolazos en las plazas principales de esas ciudades.

Mesa sin diálogo

Viernes 28 de Marzo

Hubo una reunión luego de la cual, la ME decidió suspender la medida de fuerza que realizaban desde hacía dieciséis días aunque los dirigentes rurales anunciaron que se mantendrían en estado de alerta y movilización a la vera de las rutas. A raíz de esta decisión, el Gobierno y las entidades del campo se reunieron en la Casa Rosada. Si bien la negociación se extendió hasta la medianoche, no lograron ponerse de acuerdo. Tras el encuentro, el Jefe de Gabinete junto con el Ministro de Economía y el Secretario de Comercio, ofrecieron una conferencia de prensa donde detallaron lo sucedido y adelantaron la continuación de la negociación. La oferta del Gobierno, según Fernández, incluía la liberación de las exportaciones de trigo, "garantizando el precio interno"; la compensación en los costos de los fletes para los productores de zonas marginales; la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar; contemplar la situación de los cuatro mil quinientos productores que estaban endeudados con el Banco Nación y la creación de una mesa de diálogo para discutir políticas para los próximos cuatro años. Por su parte, los ruralistas reclamaron retrotraer la situación al 11 de marzo, suspendiendo, al menos por noventa días, el nuevo sistema de retenciones móviles dispuesto por el Gobierno. Al rechazarse su pedido, se fueron disconformes de la Casa Rosada. Mario Llambías dijo: "No hemos tenido las respuestas que esperábamos" y admitió que no estaba resuelto si regresarían a la mesa de diálogo.

Por otra parte, el vicepresidente Julio Cobos recibió en su despacho a representantes de la Cámara Frutihortícola para garantizar el normal abastecimiento de productos. Por primera vez, cuestionó ante los medios de comunicación no sólo la forma en que se había presentado el esquema de retenciones, sino también la manera en que las entidades del campo habían respondido ante la medida tomada por el Gobierno.

Desde la mañana, los productores rurales discutieron en asambleas qué hacer con los cortes de ruta. Mientras que en varias localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, los productores decidieron suspender el corte de ruta a la espera del inicio del diálogo, en otras localidades bonaerenses como Tandil, Balcarce y San Pedro continuaba interrumpido el paso de camiones con productos agropecuarios. En la provincia de Santiago del Estero y en Tucumán los ruralistas decidieron habilitar el tránsito a autos particulares y colectivos de larga distancia, aunque no así a los camiones que transportan productos agrícolas. En el Chaco, aunque algunos de los catorce bloqueos se flexibilizaron, los agricultores continuaban en las rutas.

Tras la frustrada reunión en Casa de Gobierno, los productores agropecuarios ratificaron la medida por tiempo indeterminado en Gualeguaychú, San Pedro y Laboulaye.

La Ciudad de Buenos Aires también fue escenario de variadas manifestaciones. Los militantes de la agrupación Quebracho se concentraron frente a la Bolsa de Cereales, donde protestaron contra la política oficial hacia el sector agrario. Desde allí, se movilizaron hasta el Obelisco donde se le unieron otros grupos de izquierda como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), Convergencia Socialista, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez (CUBA-MTR). En tanto, el MIJD, encabezado por Raúl Castells, marchó por las calles céntricas en apoyo a las demandas de los pequeños y medianos productores. Por la noche, se realizó un festival en Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno, organizado por manifestantes kirchneristas y la FTV, liderada por Luis D´Elía.

Sábado 29 de Marzo

Ante el frustrado encuentro, la ME decidió extender el paro hasta el miércoles 2 de abril y destacó que sólo lo levantarían si se decidía suspender la aplicación de las retenciones por noventa días. Una de las posiciones más duras fue la expresada por la CARBAP, que tras una asamblea en Saladillo resolvió entregar un petitorio a la Jefatura de Gabinete con seis puntos, entre los que figuraban: volver al esquema de retenciones previo al 11 de marzo; precio pleno del trigo y normalización del mercado; reapertura total de las exportaciones de carne e incentivos a la ganadería;

recomposición del precio de la leche y apoyo a las economías regionales y a la agricultura familiar. Desde la FAA sostuvieron que la mayoría de las medidas propuestas por el Gobierno eran viejas promesas nunca cumplidas, como la Subsecretaría del Pequeño Productor. A su vez criticaron el mecanismo de compensaciones para los pequeños productores propuesto por el Gobierno ya que los reintegros eran difíciles de aplicar.

Entre tanto, se reanudaron más de trescientos cortes de ruta en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero. Los más importantes se registraron en Gualeguaychú, Tandil, Bragado, 25 de Mayo, Chivilcoy, Saladillo, 9 de Julio, Chajarí, Federal, Victoria y Paraná. Las modalidades asumidas por la protesta en cada localidad fueron diversas: en algunos lugares el corte era total; en otros dejaban avanzar a camiones con artículos perecederos; algunos dejaban transitar a los autos particulares y los colectivos; otros se mantenían al costado de las rutas y en algunos lugares los cortes eran intermitentes.

Domingo 30 de Marzo

Mientras los productores continuaban con la medida de fuerza en las provincias del centro y norte del país, se realizaron varias ceremonias religiosas como forma de protesta: hubo varias misas a los costados de las rutas; hubo una invocación interreligiosa en el aula magna de la facultad de Derecho de la UBA para que "prime la calma" en el conflicto y se realizó una ceremonia ecuménica con católicos, evangélicos, judíos e islámicos.

En medio del endurecimiento de las protestas en el interior del país y a través de un comunicado titulado "El campo sigue dialogando", la ME reafirmó su "vocación de diálogo" y pidió la "normal" circulación de productos lácteos y "otros productos perecederos" en las rutas del país.

Por su parte, el Gobierno decidió dejar en suspenso la convocatoria al diálogo luego de que la ME decidiera continuar con el paro.

Lunes 31 de Marzo

Tras un acto en Casa de Gobierno, el Ministro de Economía anunció seis medidas tendientes a incentivar la producción agropecuaria: reintegro automático para los pequeños productores de soja y girasol; subsidio a los fletes, especialmente para los de las zonas del NOA y NEA; reapertura del

registro de las exportaciones de trigo; incremento de las compensaciones para los lecheros; una línea de crédito a tasa fija para quienes agreguen valor a la cadena agropecuaria y la creación de la subsecretaria de Desarrollo Rural. A su vez, la Presidenta afirmó que con las nuevas medidas, los pequeños productores volverían "a tener la misma ganancia que antes de la aplicación del nuevo esquema" de retenciones. Por otra parte, utilizó datos técnicos para referirse a las plantaciones de soja: "En los últimos años fueron afectadas unas 1.100 hectáreas por la deforestación para sembrar soja (...) Tenemos 300 millones de hectáreas donde el 10% son cultivables, de los cuales el 45%, casi el 50%, está dedicado al cultivo de la soja". "¿Esto convierte a la soja en algo maligno? No, pero de esa soja los argentinos sólo consumen el 5%, el otro 95% se exporta", concluyó. También pidió a quienes mantenían cortadas las rutas que liberaran el tránsito y habló de "piqueteros rurales que hacían asado a la vera del camino", a quienes solicitó que permitieran que los camiones llevaran insumos a distintos puntos de la Argentina. Por su parte, los ruralistas cuestionaron los anuncios del Gobierno y ratificaron el paro.

Por otro lado, organismos de Derechos Humanos difundieron un documento en el que denunciaban "intentos de desestabilización política y golpista". Según los organismos firmantes los sectores "desestabilizadores", eran los mismos que "en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos".

Desde la oposición se escucharon duras críticas al discurso de la Presidenta. La CC emitió un comunicado en el que consideraba que las medidas oficiales no contemplaban las necesidades del campo. Por su parte, Gerardo Morales, del Comité Nacional de la UCR opinó que la Presidenta tenía que "abandonar el sesgo autoritario e intolerante en su forma de gobernar". En cambio Hermes Binner, gobernador de Santa Fe, se manifestó conforme con el discurso presidencial.

En tanto en la Ciudad de Buenos Aires sonaron las cacerolas y en el interior del país los productores agropecuarios mantuvieron los cortes de ruta y el estado de asamblea después del discurso presidencial.

Más de una docena de rutas fueron parcialmente cortadas en la provincia de Buenos Aires. Los cortes más extensos se realizaron en la Ruta Nacional N° 3, donde las organizaciones de productores acordaron una medida común y simultánea que implicaba una restricción absoluta para

el tránsito de vehículos pesados. También hubo manifestaciones en más de cincuenta ciudades bonaerenses.

En la provincia de Santa Fe los productores protestaron cortando las rutas en distintos puntos de la provincia. En tanto que en Entre Ríos, se profundizó la medida impidiendo el tránsito en forma total. Frente a la decisión de la asamblea de Arroyo El Sauce de impedir el paso de camiones de países del Mercosur, el Gobierno respondió con un operativo de Gendarmería para garantizar el tránsito. Al mismo tiempo, seguían los cortes en el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe y en la cabecera entrerriana del puente Victoria-Rosario. A su vez, los productores correntinos criticaron las medidas anunciadas por el Gobierno y resolvieron continuar con los cortes de ruta.

Los ruralistas realizaron actos y cortes en La Pampa y Córdoba. Mientras en Chaco, concentrados en rutas y rotondas, rechazaron los anuncios gubernamentales y ratificaron las medidas de fuerza. En la provincia de Santiago del Estero ratificaron las medidas de protesta y la mayoría de los cortes se efectuaron sobre la Ruta Nacional N° 34. En Catamarca los productores cortaron las rutas en el límite con Tucumán y Santiago del Estero, con unos setenta tractores, fumigadoras y otros vehículos, impidieron el paso de camiones que se dirigían hacia poblaciones locales; del mismo modo en Salta, Tucumán y San Luis continuaban los cortes.

Martes 1 de Abril

En un acto en Plaza de Mayo la Presidenta objetó los cortes de ruta y afirmó que el Gobierno no cedería en la disputa con el campo. También repasó los logros de su gestión y convocó al "gran acuerdo del Bicentenario". Aseguró que "nunca había visto, en tan corto tiempo, tantos ataques (. . .) a un Gobierno surgido del voto popular". A su vez, recordó que el último golpe de Estado había estado precedido, un mes antes, por un "lock-out patronal" y volvió a caracterizar de golpistas a los dirigentes de la ME, quienes, según sus palabras, en lugar de estar acompañados por tanques lo estaban por generales multimediáticos "que han hecho el lock-out de la información". Para finalizar sostuvo: "Quiero pedirles, rogarles encarecidamente a los que aún creen que es bueno cortar caminos para que no pasen alimentos, para que no pasen instrumentos para las fábricas, que por favor adviertan el mal que están haciendo". "No se puede representar al pueblo y enorgullecerse de desabastecerlo", afirmó.

De las columnas de los gremios que participaron en ese acto, la más masiva fue la de los camioneros de Hugo Moyano. Los movimientos sociales kirchneristas se organizaron en columnas diferenciadas: una encabezada por la FTV, el FTNP, filiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones de base de la CTA; otra del Movimiento Evita y una tercera de Libres del Sur. Entre los grupos de la juventud kirchnerista estuvieron: La Cámpora, la JP Evita y la juventud del Peronismo 26 de Julio. También asistieron el Frente Grande; los estatales del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); la organización alineada con la CTA, Tupac Amaru (Jujuy); la Unión Tranviarios Automotor (UTA); la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Unión Ferroviaria. Detrás de una bandera que decía "Sí a la producción, no a la extorsión" marcharon los funcionarios que no pertenecían al PJ: Graciela Ocaña, Eduardo Sigal y Ariel Basteiro. El secretario general del Partido Comunista, Patricio Echegaray, explicó: "Nosotros decidimos venir porque estamos contra la derecha".

El intendente de Morón, Martín Sabatella, asistió al acto aunque aclarando: "no pertenecemos al dispositivo K. Tenemos un acompañamiento crítico y coincidimos con las retenciones, que son una herramienta de distribución social de una rentabilidad que surge de un tipo de cambio con intervención estatal". Sabatella criticó la "inexplicable continuidad" de las medidas de fuerza de las entidades después de que el Gobierno corrigiera "el error de no anunciar las retenciones con políticas complementarias" para los pequeños productores agrarios.

A su turno, representantes de comunidades indígenas de San Antonio de los Cobres, (provincia de Salta) que asistieron al acto, explicaron que para ellos la crisis logró sacar a la luz problemas ecológicos que su provincia sufre desde la sojización. "Nosotros siempre fuimos tratados como esclavos, el peón rural es el peor tratado de todos", afirmaban, al tiempo que aseguraban que "hay mucho poder por parte del campo" e incluso hay gobernantes que tienen sus intereses en la plantación de soja, "como el ex gobernador salteño Juan Carlos Romero".

Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), explicó que adherir al acto hubiera significado "tomar partido por un sector, pero, sin dudas, las 62 y la CGT tenían que estar en la Plaza de Mayo y apoyar a Cristina Kirchner". Venegas se pronunció en favor del diálogo entre las partes y expresó que la

Presidenta había cambiado el tono respecto del primer discurso que había brindado en la Casa de Gobierno. Además, garantizó que los productores del agro levantarían la huelga.

Luego del discurso de la Presidenta, distintos dirigentes agropecuarios recorrieron las asambleas de productores asentados en las rutas, anunciando que el miércoles se comunicaría el levantamiento del paro en el Acto Federal Agropecuario de Gualeguaychú. De esta manera, la CARBAP realizó una conferencia de prensa en la que propuso una tregua de treinta días, manifestándose dispuesta a levantar los cortes de ruta. El titular de la entidad, Pedro Apaolaza, dijo que se estaba "entorpeciendo el normal abastecimiento" en las ciudades y que había "llegado el momento de cambiar el ángulo de la protesta".

Al costado de la Ruta Nacional N° 9, en la localidad bonaerense de San Pedro, la UCR reunió a la mayoría de sus representantes parlamentarios para lanzar una recolección de firmas en pos de poner fin a las retenciones móviles. El cordobés Oscar Aguad, jefe de los diputados nacionales del radicalismo, insistió en que el Gobierno se quería apropiar de la renta agropecuaria para beneficiar a otros sectores concentrados de la economía a través de subsidios. En tanto el diputado de la CC, Adrián Pérez, sostuvo que los reclamos de los productores y de algunos sectores urbanos no cuestionaban "ni la democracia ni la institucionalidad" y acusó al Gobierno de generar un "discurso confrontativo que irrita".

Para la dirigente pampeana que había fundado el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), Lucy de Cornelis, quien respaldaba las medidas anunciadas por el Gobierno para los pequeños y medianos productores, el paro del campo tenía "un trasfondo que excedía el tema de las retenciones". De Cornelis recordó que en la década del noventa, cuando lideraba acciones para frenar los remates de tierras de pequeños productores, "la SRA nos vallaba para impedir que nos manifestáramos contra Menem". "Los que entonces resistimos y defendimos el campo apoyamos las medidas que claramente diferencian a los sectores económicamente concentrados de los pequeños y medianos productores, porque reconocemos el esfuerzo del Gobierno que nos permitió recuperar las 14 millones de hectáreas que en el 2003 estaban hipotecadas".

Por su parte, Martín Lousteau aseguraba que las medidas adoptadas dejaban al pequeño productor mejor que antes y que era necesario "pensar cómo queremos encarar una política agropecuaria y a partir de ahí una política de la agroindustria alimentaria". En tanto el jefe de Gabi-

nete, Alberto Fernández, expresaba que si la protesta se había iniciado por los pequeños productores, entendía que esa preocupación había terminado. "Confío en que todo esto se termine. Si sigue, entonces es que están discutiendo otra cosa y condenaron a los argentinos a un paro y un desabastecimiento inmenso con un argumento oculto que no conocemos", concluía el Jefe de Gabinete.

En Washington, el embajador ante los Estados Unidos, Héctor Timerman, envió trescientas cartas explicando la situación que se vivía en el país debido al nuevo sistema de retenciones y caracterizando como "grupo minoritario de propietarios de la tierra" a quienes colocaron "barricadas en las rutas impidiendo que la provisión de alimentos" llegue a las ciudades. Los destinatarios fueron funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso estadounidense, *think tank*[8], medios de comunicación y personalidades de ese país.

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, consideró que el discurso de la Presidenta presentaba "una serie de alternativas y propuestas que no figuraban entre las medidas del 11 de marzo" que permitían "alumbrar una esperanza de que el conflicto pueda destrabarse". Además sostuvo que, en vistas a las medidas anunciadas para los pequeños productores, sería un gesto importante que estos permitieran el tránsito de alimentos. En sintonía con ello, Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos, afirmó que esperaba que los cortes se levantaran ese mismo día y agregó que convocaría a los productores a la Casa Gris para consensuar medidas para el sector. También el titular del PJ de Entre Ríos y diputado provincial, Jorge Busti, señaló que las medidas dadas a conocer por la Presidenta "indudablemente han mejorado en lo que hace a la propuesta para pequeños productores" y agregó que, en función de ello, las entidades del campo debían "sentarse a dialogar porque estas propuestas significan un gran punto de avance". Por su parte, Néstor Mover, presidente de la Federación Entrerriana del Citrus, admitía que, pese al apoyo de los productores de cítricos al paro del campo, la extensión del conflicto se había tornado "dañina" para el sector ya que se estaba perdiendo gran parte de la producción. Mientras tanto, ante la falta de alimentos en la provincia, el Secretario de Desarrollo Social de Entre Ríos pidió la intervención del fiscal de Estado para que adoptara los mecanismos legales necesarios a fin de garantizar la provisión de alimentos de planes sociales.

8 Significa "depósito de ideas" y hace referencia a instituciones académicas, laboratorios militares, empresas privadas u otro tipo de organizaciones que ofrecen consejos e ideas sobre asuntos de política, economía e intereses militares.

Por otra parte, las entidades representativas del sector agroindustrial (la Asociación Argentina de Productores Porcinas, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lecheras, la CICCRA, el Centro de Industria Lechera, el Centro de Empresas de Exportadores Cárnicos, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, la Junta Intercooperativa de Productores de Leche y la UNICA) se reunieron con el Ministro de Economía y rechazaron "el sistema de cortes de ruta como medida de protesta".

La Asociación Cadena Argentina de la Soja (ACSOJA), integrada por entidades de la producción, el comercio, la industria y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) afirmaron, a través de un comunicado, que la soja tenía un elevado "contenido de aceites y proteínas de alta calidad" y que esas características eran "la consecuencia de muchos años de selección y mejoramiento genético tradicional, potenciado en las últimas décadas por los gigantescos avances de la biotecnología".

Los Consumidores Argentinos y la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) presentaron una denuncia ante la Justicia en lo Penal Económico por los efectos del paro agropecuario. Allí se le solicitaba a la Justicia que determinara si existía responsabilidad de los titulares de las entidades agropecuarias, en tanto promotores del paro que llevaba veinte días.

Por otro lado, si bien el Ministerio de Economía no emitió una resolución prorrogando el sistema de cupos de exportación que había vencido el día lunes, la Dirección General de Aduanas (DGA) ordenó frenar todos los embarques, incluso los que estaban en el puerto. Desde la DGA se informó que se habían intensificado los controles de embarques de carne vacuna para verificar que las declaraciones juradas de los exportadores coincidieran con los datos que poseía el Registro Operaciones de Exportación (ROE). Desde el sector empresarial exportador dijeron que la disposición emanada desde la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) representaba un "literal cierre del flujo exportador de carne vacuna".

En tanto en Entre Ríos se mantuvieron quince cortes de ruta. A la protesta se sumaron los integrantes de la Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Cargas (FETAC), reclamando la "reacción" de las autoridades provinciales en contra de las medidas del Gobierno. En Paraná, los productores continuaron cerrando el paso hacia el túnel a los camiones de carga con productos del campo. No obstante, el día anterior

se había autorizado el ingreso y egreso de leche en la provincia, y el paso de transporte de verdura y de alimento balanceado para pollos y vacas.

En Córdoba, dejaron pasar con normalidad a los camiones en buena parte de las rutas, con excepción de los tramos en la Ruta Nacional N° 9, en los que hubo cortes selectivos. En Jesús María y en Oncativo se organizaron reuniones de productores con abogados constitucionalistas, en las que se analizó la posibilidad de interponer recursos de amparo ante la Justicia por el aumento de las retenciones a niveles que juzgaron confiscatorios.

En Santa Fe se mantuvieron la mayoría de los cortes de ruta. Los camiones que lograron llegar a los mercados y puntos de distribución lo hicieron, en gran medida, con la mercadería en mal estado. En Rosario los manifestantes se corrieron a la vera de la ruta, aunque continuaron impidiendo el paso de camiones con producción agrícola. El titular de la SRA de Venado Tuerto, confirmó que la posición de la asamblea de las rutas nacionales N° 8 y N° 33 era trillar la soja y el maíz normalmente; mientras que en el corte de Firmat, bajo control de la FAA, decidieron parar la cosecha, aunque muchos hicieron caso omiso a la proclama. Lo cierto es que la cosecha, pese a los diecinueve días de cortes, se había venido realizando normalmente. En términos generales, Santa Fe continuaba sin carne (los frigoríficos permanecían cerrados y se consideraba que más de cuarenta mil trabajadores habían sido suspendidos) y con escasez de lácteos, frutas y verduras. Incluso las trece plantas procesadoras de oleaginosas, ubicadas entre Timbúes y Arroyo Seco, se encontraban paralizadas.

En varias localidades de la provincia de Buenos Aires, gran parte de los productores levantaron los cortes de ruta, aunque se mantenían concentrados a la vera de las mismas. En una asamblea realizada en Chivilcoy, los productores autoconvocados del partido y otros cuarenta y tres distritos, dispusieron levantar los cortes durante la tarde. En tanto los cortes en Villarino, Carmen de Patagones y Viedma, impidieron el abastecimiento de carnes, pollos, lácteos y otros productos en la zona.

En Santiago del Estero, los productores agropecuarios volvían a cortar la Ruta Nacional N° 34. La prohibición del paso se aplicó de manera selectiva en determinadas horas. A la altura de Colonia Dora, se autorizaba el paso de los vehículos cada tres horas, mientras que en otros cortes, como el de Quimilí, Selva, Pozo Hondo y Fernández, la prohibición funcionaba exclusivamente para el transporte de granos hacia los puertos. Los lácteos

y productos frescos eran autorizados a seguir, además del transporte de pasajeros y particulares.

En Chaco, se mantenían unos doce cortes de ruta, siendo el principal el que tenía lugar en Presidencia Roque Sáenz Peña. Asimismo, en Mendoza, los productores se mantenían concentrados en la Ruta Nacional N° 7, en el departamento de Santa Rosa, donde demoraban el paso vehicular mientras informaban las razones de la protesta. En Salta, había bloqueos en las rutas nacionales N° 34 y N° 16, en las rutas provinciales N° 5 y N° 30, en las localidades de El Galpón, El Quebrachal, Metán, Rosario de la Frontera y Pichanal.

Tiempos de tregua

Miércoles 2 de Abril

A pesar de que la CARBAP había adelantado el anuncio el día anterior, en un acto en Gualeguaychú las cuatro entidades agrarias levantaron el paro y los cortes de ruta por treinta días para retomar el diálogo con el Gobierno. En este período, las entidades monitorearían el funcionamiento de las medidas ya anunciadas (como las compensaciones por suba de retenciones o el subsidio al flete) para verificar su efectivo cumplimiento y alcance. A su vez, le reclamaron al Gobierno que habilitara una mesa de concertación para tratar políticas referentes a temas diferenciales, haciendo a un lado los planteos referidos a las retenciones móviles a la soja y el girasol.

Durante el acto, los dirigentes de la ME advirtieron que seguirían "en estado de alerta y movilización", y que si en treinta días no se resolvía "el problema de fondo" y no se llegaba a una "solución integral", volverían los cortes de ruta. Alfredo de Angeli se disculpó por el desabastecimiento, mientras Juan Echeverría señalaba: "Les vamos a abastecer las ciudades porque no somos insensibles, porque no somos golpistas". En cambio, Eduardo Buzzi culpó al Gobierno por la falta de productos: "El desabastecimiento, que pudo haber pasado en algún rubro, es una consecuencia, no un objetivo. . . ." y enfatizó que la medida de las retenciones móviles tenía como objetivo disciplinar gobernadores e intendentes. Por su parte, Luciano Miguens sostuvo: "no somos golpistas, no somos opositores ni tenemos líderes políticos". Mario Llambías aseguró que el reclamo del sector no sólo había logrado ocupar la agenda de los medios de comunica-

ción sino también un gran apoyo de la sociedad y destacó como un hecho histórico que por primera vez las cuatro entidades del campo estuvieran unidas en un mismo objetivo.

Desde las últimas horas del día anterior y la mañana del miércoles que corría, varios cortes de ruta habían ido levantándose, como en las provincias de Buenos Aires (cerca de cuarenta cortes), Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca. Mientras en otras provincias, como Salta, Mendoza y Entre Ríos, los productores habían aguardado los resultados del acto de Gualeguaychú.

Por su parte, trabajadores tabacaleros de Jujuy, reclamaron que si el flete de la soja sería subsidiado, el del tabaco también debería estarlo. "En el departamento El Carmen hay cuatrocientos productores de tabaco que tienen entre diez y veinte hectáreas. No es una superficie para desarrollar una plantación de granos", explicó el Presidente de la Cooperativa de Tabacaleros de esa provincia. "Nos vendrían muy bien estas compensaciones por fletes y combustibles por la distancia que tenemos a los puertos donde despachamos nuestra mercadería a distintos mercados del mundo", indicó. Los productores trasladaron su reclamo al Gobierno Provincial, para que a su vez éste lo elevara a las autoridades nacionales.

En un discurso a la provincia transmitido por radio y televisión, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se comprometió a ser "garante de la ejecutividad de los programas públicos" orientados al campo y anunció una serie de medidas tendientes a resolver varios de los conflictos de gestión que se percibían para hacer efectivos los beneficios para el productor: se habilitaría una oficina de la ONCCA en territorio provincial; se crearía un registro de pequeños y medianos productores, que debería incorporar a más de quince mil unidades productivas; se anticiparía el pago de compensaciones demoradas en la ONCCA, por alrededor de 6,5 millones de pesos correspondientes al Programa Ganadero Nacional y se prometió el desarrollo de un nuevo esquema impositivo provincial "más justo, equilibrado, progresivo y estimulador del empleo". Asimismo, ratificó los lineamientos del Plan Entrerriano de Desarrollo Rural y anunció un nuevo esquema impositivo provincial.

Por otro lado, el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires (SICGBA), estimó que más de cincuenta mil empleados del sector habían sido suspendidos.

Jueves 3 de Abril

El vicepresidente de la CRA, Néstor Roulet, advirtió en declaraciones radiales que uno de los principales reclamos era que la distribución de lo recaudado por el Estado a través de las retenciones se encontraba en manos del Gobierno Nacional. Roulet sostuvo que ese dinero debía volver al sector en forma de inversión, compensaciones y reintegros.

Por su parte, el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, pidió por nota al Secretario de la SAGPyA una convocatoria urgente al Consejo Federal Agropecuario para que se informara el estado de situación de la relación del Gobierno con el campo y las soluciones propuestas, con la participación de los sectores productivos involucrados en la problemática. El Ministro también anunció la creación de un consejo económico en el ámbito provincial "con el objetivo de generar un espacio donde se pueda dialogar, acordar y diseñar estrategias y políticas de desarrollo productivo". Por otro lado, el senador por la provincia, Carlos Reutemann, defendió el paro de los productores y aseguró que en las rutas no había visto "golpistas ni gente que quisiera voltear a un gobierno". En tanto, los miembros del bloque de diputados del Partido Demócrata Progresista, pidieron una mesa de diálogo de la que participaran "las entidades que representan a los intereses del campo y los gobiernos provinciales, para elaborar y concertar las bases de un acuerdo nacional".

Por otra parte, el titular de la UCR de Córdoba, Mario Negri, y el ex intendente de la capital cordobesa, Luis Juez, encabezaron una reunión de diputados y senadores nacionales de la UCR, el socialismo, la CC y el Partido Nuevo, en la que se decidió convocar a sus pares de Entre Ríos y Santa Fe a un encuentro más amplio la siguiente semana. Allí buscarían impulsar tres iniciativas: crear una comisión bicameral que supervisara la instrumentación de las medidas anunciadas por el Gobierno para el sector agropecuario, un proyecto para coparticipar los recursos que provengan de las retenciones al agro y una iniciativa para que dichos recursos confluyeran en un fondo federal de promoción de las actividades productivas de las provincias que integran la región centro. Asimismo, en la ciudad de Córdoba los tribunales federales recibieron una docena de recursos de amparo contra el aumento de las retenciones.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que pedía al Gobierno y a las entidades del agro que produjeran "gestos concretos" para alcanzar

una solución definitiva al conflicto así como para "defender y consolidar una paz social real y duradera".

A partir del levantamiento de los cortes de ruta la actividad comenzó a normalizarse tanto en el Mercado Central, al cual ingresaron trescientos camiones de frutas y verduras, como en los tambos y en los puertos, donde decenas de camiones arribaron con cargas de granos y oleaginosas, permitiendo el abastecimiento a buques y a la industria molinera. Sin embargo, exportadores de carne y maíz advirtieron que la DGA había comenzado a solicitar requisitos adicionales a los habituales para la exportación de ambos productos. La Subdirección General de Control Aduanero comunicó que no se autorizaría el libramiento de la mercadería de exportación de carnes enfriadas y congeladas y de maíz hasta tanto los exportadores informaran una serie de datos suplementarios a la documentación que normalmente se presentaba. La soja había llegado a cotizar en Rosario 900 pesos por tonelada para el mercado disponible, lo que la llevaba al nivel anterior a iniciarse el conflicto.

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el paro retrasó la cosecha de todos los cultivos respecto al mismo período de la campaña anterior. En el caso de la soja, la trilla alcanzaba apenas el 4,7% de la siembra, abarcando un área de 790 mil ha que, con los rindes logrados, mantenía la proyección de 47 millones de toneladas. Asimismo, ante la urgencia de cosechar para evitar que disminuyeran los rindes de la soja, se registraba una fuerte demanda de gasoil y un colapso en el sistema de transporte de granos, sobre todo en el centro y norte de Buenos Aires y el sur de Córdoba y Santa Fe. También se habrían registrado problemas con el flete internacional ya que, durante el paro, algunos barcos con carga de granos habían quedado varados en los distintos puertos a la espera de la mercadería.

Viernes 4 de Abril

El Gobierno puso al aire un spot publicitario que defendía la aplicación de retenciones a las exportaciones y aseguraba que el 20% de los productores del país concentraba el 80% de la producción de soja, situación a la que debía ponerse fin. Por otra parte, se decidió que Ricardo Echegaray, ex titular de la Aduana, asumiera la presidencia de la ONCAA.

En Entre Ríos, Urribarri mantuvo un encuentro con los principales dirigentes de las entidades agropecuarias de la provincia: la FAA, la SRA ,

la FEDECO y la FARER. Allí el Gobernador reiteró su alineamiento con la Presidenta, mientras que los dirigentes de las entidades insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional diera marcha atrás con las retenciones móviles. Urribarri se comprometió a trasladar a la Presidenta sus inquietudes y propuestas. Por otro lado, se acordó elaborar un trabajo conjunto para definir las figuras del pequeño y mediano productor en el marco del registro que elaboraría el Gobierno Provincial para actualizar la tipificación del sector rural. Juan Echeverría, director suplente de la FAA entrerriana, señaló que los puntos planteados a nivel provincial eran importantes aunque pequeños y que no hacían a la resolución del problema estructural. En tanto, Luis Miguel Etchevehere, director por Entre Ríos de la SRA , señaló que el campo entrerriano pretendía que "la provincia estuviera al frente del reclamo" de los productores agropecuarios y "no del lado de la nación". Luego, en Cerrito se realizó una reunión de productores agropecuarios para analizar los resultados del paro y los pasos a seguir. Allí, Juan Echeverría informó la ratificación del alineamiento con el Gobierno Nacional por parte del Gobernador, frente a lo cual los productores manifestaron su rechazo y resolvieron promover un encuentro con todos los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos.

Por su parte, el titular del PJ de Entre Ríos, apoyó las medidas anunciadas por el Gobernador al tiempo que dio a conocer una carta dirigida a Néstor Kirchner en donde se proponía una serie de medidas para destrabar el conflicto; se destacaba, la propuesta de bajar los aranceles de importación de insumos para el campo. Por otro lado, Busti manifestaba su convicción de que era "el momento oportuno" para que se diera una fuerte participación a los gobiernos provinciales en la instrumentación de futuras medidas y remarcaba una vez más que la rentabilidad del productor debía ser el eje de la discusión.

En el Mercado de Liniers ingresaron catorce mil cabezas de ganado y los precios volvieron a los niveles previos al paro, aunque en los mostradores se mantenían elevados. Al tiempo que seguían frenadas las exportaciones de carne y maíz, los representantes de las distintas cámaras que agrupaban a los frigoríficos se reunieron con el Secretario de Comercio Interior, pero no lograron destrabar los envíos al exterior.

La jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, rechazó varios de los amparos contra el aumento de las retenciones.

Sábado 5 de Abril

En alusión al spot que había lanzado el Gobierno, Hugo Biolcati, advirtió a la Presidenta sobre "actitudes que tienden más a la confrontación"; Mario Llambías, mientras tanto, confirmó que limitarían el comercio hasta que concluyera la negociación y sostuvo que los dirigentes habían aconsejado no entregar mercadería hasta que la negociación establezca un precio razonable.

En Azul, grupos de autoconvocados de cuarenta partidos de la provincia de Buenos Aires marcharon por la Ruta Nacional N° 3 en apoyo a las entidades agrarias. "La idea es mantenernos movilizados, tal como se pidió en Gualeguaychú, como una forma de darle nuestro respaldo explícito a las negociaciones que encararán las entidades agropecuarias", indicó un productor de la zona. La única entidad que brindó un "aval institucional" a la medida fue la FAA.

Por otro lado, Elisa Carrió, estuvo reunida con productores agrarios en Colón e hizo "un llamado profundo a la paz y la unidad del pueblo frente al discurso divisionista que emerge desde el poder kirchnerista".

Domingo 6 de Abril

Con respecto a las críticas que desde las entidades de la ME se hicieron al sistema de compensaciones anunciado por el Gobierno, la SAGPyA afirmó que si dichas compensaciones no llegaban a los productores y sí a las industrias era por la existencia de "muchos productores que tienen parte de su actividad en negro". En tanto, un director de la CARBAP, aseguró que no tenía que ver "con estar en negro. Son tantos los requisitos que piden, que sólo empresas con estructuras grandes pueden cumplir a tiempo con todo. Aun así hay productores que demoran seis meses en cobrar". Por su parte, Hugo Biolcati, afirmó: "Lo primero que hay que aclarar es que no son compensaciones, sino devoluciones, porque la plata sale del aumento del 4% de las retenciones de enero de 2007. El problema de estas devoluciones es que llegan tarde y no llegan a todos".

Hermes Binner reclamó un mejor reparto de las retenciones, afirmó que aspiraba a lograr un esquema de retenciones coparticipables y reclamó una mayor financiación para la producción.

Lunes 7 de Abril

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se reunió con el secretario Javier de Urquiza, para especificar los detalles de los anuncios que compensarían a los pequeños productores. Por otro lado, se creó formalmente la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Sin embrago, a cinco días de levantadas las medidas de fuerza, el Gobierno no había convocado aún a las entidades a una mesa de diálogo.

En este contexto, los dirigentes de las entidades agropecuarias comenzaron a expresar su inquietud ante la actitud del Gobierno de seguir dilatando el diálogo. El titular de la CARBAP, Pedro Apaolaza, opinó que "cuanto más se demorara la negociación más se iba a complicar la situación". Las entidades consensuaron elevar un pedido formal de audiencia a la Presidenta.

En Rosario, Eduardo Buzzi dijo que el Gobierno aún estaba "a tiempo de dar un giro razonable", aunque recordó que las medidas lanzadas por el oficialismo habían sido "un anuncio hecho para la tribuna". Alfredo de Angeli sostuvo que con el paro del campo "se despertó un gigante" y reclamó: "Ahora van a tener que atenderlo". Mientras tanto, los veintiocho delegados del Consejo Directivo de la FAA iniciaron en Rosario unas jornadas de debate con el objetivo de "imaginar escenarios" para los próximos días. Allí se resolvieron dos temas prioritarios para discutir en la esperada mesa de negociación con el Gobierno: retenciones e insumos.

Algunos productores autoconvocados habían comenzado a reorganizarse con pequeñas marchas, aunque sin cortes de ruta. Así, en la localidad santiagueña de Fernández "se reunieron unos doscientos productores y sus familias al costado de las rutas para recordar que el campo no va ceder en la protesta, si el Gobierno no cumple con lo prometido".

Sergio Urribarri y su Vicegobernador se reunieron por la mañana con diputados y senadores nacionales y, por la tarde, con los intendentes del PJ, para ratificar el apoyo a las gestiones realizadas por el Gobierno de Entre Ríos en el conflicto con el campo.

Eduardo Barcesat, ex juez, y Rubén Manusovich, titular de la FEDECAMARAS, habían presentado diversas denuncias en la Justicia contra las entidades de la ME y los productores que mantuvieron cortadas las rutas. Manusovich acusaba directamente a los presidentes de la SRA , la CRA, la FAA y la CONINAGRO, por supuesto entorpecimiento de los servicios públicos, desabastecimiento, impedir el normal funcionamiento de

los transportes y sedición. Por su parte, Barcesat acusaba a los dirigentes de las entidades por supuesta extorsión y reclamaba una urgente medida cautelar para que la Justicia dispusiera la inmediata suspensión del paro. Al respecto, el fiscal federal Carlos Rívolo sostuvo que no hubo extorsión ni intento de sedición por parte de los dirigentes agrarios, pero en cambio, le pidió al Juez que enviara la causa al fuero Penal Económico para que se investigara si hubo una violación a la Ley de Abastecimiento.

El gremio de los camioneros mantenía ocupada una planta de la empresa Los Grobo, en la localidad bonaerense de Carlos Casares, reclamando el "blanqueo de trabajadores y el pago de salarios por convenio". El dirigente, Pablo Moyano, advirtió: "Este es sólo el inicio de las medidas de fuerza que la rama de cereales del sindicato de camioneros implementará en el marco de una campaña a nivel nacional en reclamo por la regularización de trabajadores transportadores de soja y cereales en todo el país". También señaló que de no mediar una rápida solución a este conflicto, el gremio no descartaba realizar "un paro nacional del transporte de soja y cereales", hasta que se regularizara la situación de todos los trabajadores de esa actividad.

En tanto, un centenar de obispos del país iniciaba su plenario en Pilar donde convocaban a rezar por el diálogo y las instituciones, en relación al conflicto por las retenciones. Además, se decidió oficiar una misa en la Basílica de Luján para rezar "por el fortalecimiento de la amistad social". El vocero del Episcopado aclaró que la Iglesia no mediaría en el conflicto porque existían las "instancias naturales de la democracia".

Martes 8 de Abril

El presidente de la CARBAP, Pedro Apaolaza, lanzó un ultimátum al Gobierno para que concretara la convocatoria al diálogo, al reclamar que "en 24 o 48 horas defina de una vez por todas" el esperado encuentro. Apaolaza sostuvo que hasta el momento sólo había habido anuncios por parte de las autoridades que no se concretaban en medidas puntuales; recordó que la tregua vencía el 2 de mayo y advirtió que los productores seguían "con un pie en el campo y otro en la ruta". En tanto Eduardo Buzzi, sostuvo que la tregua de treinta días no corría "peligro" aunque recordó que el sector agropecuario se encontraba en estado de "alerta y movilización".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que "el gran tema" que había que conversar con los productores agropecuarios te-

nía que ver con contar con "un plan para el futuro", porque "la Argentina tiene la muy buena oportunidad de garantizar la producción interna" y externa de alimentos. Agregó a su vez la necesidad de trabajar "para que la producción de granos también mejore, en un mundo que con el ingreso de India y de China demanda alimentos de modo sostenido. . . El secreto es que nos podamos poner a trabajar rápidamente en ver de qué modo el mercado crece y metamos nuestros productos agropecuarios y ganaderos en el mundo y que eso no repercuta en contra de los argentinos". Ante la insistencia en que se produjera la reunión entre el Gobierno y las entidades, Fernández explicó: "Ya nos vamos a reunir y nos vamos a poner a trabajar".

Finalmente, por la tarde, los dirigentes de la SRA , la CONINAGRO, la CRA y la FAA concretaron el pedido formal de audiencia a la Presidenta, con el objetivo de "contribuir a elaborar el plan estratégico para el sector agropecuario y a consolidar una sociedad sin exclusiones, con igualdad de oportunidades y con equidad social".

Desde el oficialismo aseguraban que primero había que arreglar la cuestión técnica, el subsidio a los fletes de los que se encontraban a más de 400 km de un puerto y a los que cosechaban hasta 500 toneladas de soja. Afirmaban que había que darle forma al trazo grueso de un plan agropecuario global y sólo después tendría sentido un encuentro entre la Presidenta y las cuatro entidades del agro.

Mientras tanto, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados discutía un dictamen sobre un proyecto de ley que establecía un nuevo Sistema Nacional de Emergencia Agropecuaria, elaborado por el presidente de la Comisión, Alberto Cantero (FPV). El proyecto promovía el resarcimiento económico de los productores que sufrieran daños por causas climáticas. El dictamen de los asesores, con sus modificaciones, fue comunicado a la oposición quince minutos antes de que comenzara la reunión. El eje de la discusión pasó por si era relevante o no la sanción de una ley de estas características, dado que la ME todavía aguardaba una audiencia con la Presidenta para discutir la letra chica de las medidas anunciadas por Martín Lousteau. Otros puntos hacían hincapié en la ausencia de un criterio diferenciador entre el pequeño y el gran productor; no estuvo ausente en la discusión el poder concentrado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El oficialismo dio quórum para aprobar el proyecto y girarlo a la Comisión de Legislación y Presupuesto lo antes posible. Sin embargo, la oposición criticó la conducta adoptada parlamen-

tariamente e incluso al proyecto por considerar que no resolvía ninguno de los reclamos de fondo. Así la UCR y la CC se retiraron de la reunión antes de la votación. "Más allá de esta ley, no resolvemos el conflicto de fondo con el campo, teniendo en cuenta que las partes involucradas (...) todavía no se sentaron a dialogar. Deberíamos resolver desde el Legislativo otros temas de relevancia: el precio de la leche, mecanismos de fijación de precios de los commodities, medidas para que los grandes productores no se coman a los chicos, arrendamientos a precios justos. Esta ley es como un geniol para resolver una gran enfermedad", señaló Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad (SI).

El presidente del PJ de Entre Ríos Jorge Busti, envió a Néstor Kirchner una carta con propuestas tendientes a superar el conflicto con el sector agropecuario[9]. Kirchner le pidió a Busti que remitiera la misma carta a la Presidenta. Por su parte, el bloque de diputados por Entre Ríos de la UCR emitió un comunicado en el que criticaba la alineación incondicional del PJ provincial con el Gobierno Nacional. En tanto el gobernador Sergio Urribarri se reunió con representantes de las veintiún plantas que conformaban la Cámara de Frigoríficos de Entre Ríos y se comprometió a gestionar ante entidades bancarias líneas crediticias para que el sector pudiera recomponer la cadena de pagos que se había cortado a raíz del conflicto agrario.

En el centro porteño, el MIJD marchó hasta la sede de Los Grobo. Su dirigente Raúl Castells, quien la semana anterior se había manifestado a favor del paro de los productores agropecuarios y en contra del Gobierno, sostuvo que no caía en contradicciones al cuestionar a Grobocopatel y reclamarle que pagara "sueldos atrasados de sus obreros y los blanquee".

Por la tarde, la DGA destrabó y autorizó el embarque de carne de sesenta contenedores para exportación, por haberse cumplimentado los requerimientos y finalizado los controles técnicos.

Por la noche se realizó una asamblea en la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, con dirigentes y productores agrarios para analizar el estado de las negociaciones y se planteó la posibilidad de volver a iniciar la protesta si el Gobierno Nacional no daba soluciones en el corto plazo.

9 Véase contenido de la carta el día 4 de abril.

Miércoles 9 de abril

La Presidenta decidió convocar a las cuatro entidades del campo a una reunión que se llevaría a cabo el viernes siguiente, con el objetivo de presentarles la instrumentación que haría el Gobierno de las compensaciones y de los reintegros para pequeños productores agropecuarios afectados por la suba de las retenciones a las exportaciones de granos.

Carlos Garetto, vicepresidente de la CONINAGRO, afirmó que valoraban el llamado del Gobierno y agregó que era necesario "entender que todos tienen que ceder un poco para que todos salgamos beneficiados. Por su parte, Eduardo Buzzi calificó como "muy positiva" la convocatoria del Gobierno en tanto era lo que estaban esperando. Luciano Miguens también entendió como una "buena señal" la convocatoria oficial.

El Consorcio Exportador de Carnes Argentinas, conocido como consorcio ABC (compuesto por trece frigoríficos que representaba aproximadamente una quinta parte de la faena del país) se comprometió con la Secretaría de Comercio a ofrecer los cortes delanteros (que usualmente se vendían a las cadenas de supermercados) directamente a las carnicerías y a los mismos precios que regían el 7 de marzo. Por su parte, los frigoríficos, tendrían la posibilidad de exportar sin restricciones los cortes traseros como lomo y bife -ancho y angosto- a Europa, o cortes de cuadril con destino hacia Brasil. El compromiso consistía en vender a "precio viejo" los trece "cortes populares", como el asado, la carnaza, el roastbeef y la carne picada.

Jueves 10 de abril

En un acto convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Kirchner exhortó al diálogo y cuestionó a "los más favorecidos" que salían a "cortar calles" y a "tirar la mercadería", al tiempo que diferenció los piquetes de 2001 de los protagonizados por los productores agropecuarios. Por otro lado, mientras que el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial el decreto 606/08, que disponía la designación de Ricardo Echegaray como nuevo titular de la ONCCA, la CC criticaba la designación del mismo a través de un comunicado firmado por el jefe del bloque de diputados de la fuerza, en el que manifestaba su desconfianza a la designación de Echegaray en la ONCCA por su relación con el secretario Moreno.

En tanto, los dirigentes de las cuatro entidades de la ME estuvieron en Pilar, donde sesionaba el Episcopado, para agradecer a la Iglesia su intervención en el conflicto. El vocero episcopal afirmó que la reunión había sido programada cuando aun no se conocía la convocatoria de la Presidenta a las entidades agropecuarias y los alentó a seguir dialogando.

Productores agropecuarios de diferentes regiones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Formosa, La Pampa, Tucumán y Buenos Aires comenzaron a realizar asambleas para analizar el avance de las negociaciones con el Gobierno. La conducción de la CARBAP y FAA ratificaron que se mantendrían en estado de "alerta y sesión permanente".

Encuentros y desencuentros

Viernes 11 de abril

La ME y las máximas figuras políticas del Gobierno se reunieron durante casi tres horas en las que reiteraron diagnósticos sobre la situación de la producción y la efectividad de las políticas vigentes para el sector. Acordaron revisarlas y volver a reunirse. En tanto en los despachos oficiales, comenzaban a analizarse algunas carpetas con propuestas sectoriales de las entidades. Los dirigentes elogiaron la recuperación del diálogo y remarcaron que, a pesar de que el detonante del paro había sido el aumento de las retenciones a la soja, las medidas de protesta habían permitido que se discutiera la política ganadera, lechera y de las economías regionales. En San Pedro, una asamblea de productores que contaba con la presencia de delegados de varios de los cortes de ruta realizados durante el paro, aguardaba la llegada de Eduardo Buzzi al finalizar la audiencia. Los autoconvocados provenían de distintas ciudades de las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero. Luego de un extenso debate resolvieron alinearse con la ME para no mostrar debilidad ante el Gobierno. Buzzi llegó por la noche al lugar y afirmó que la Presidenta había tenido "una actitud constructiva, positiva y no confrontativa". Mientras tanto, los productores agropecuarios no alineados con entidades oficiales despotricaban contra la política oficial.

En tanto, más de cuarenta diputados y senadores de la oposición de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, más de diez intendentes y un centenar de productores se reunían en la localidad cordobesa de San Francisco para

acordar una posición común con respecto a las retenciones al sector agropecuario y avanzar en otros intereses comunes de la región centro del país. Bajo el lema "Producción y federalismo", el encuentro fue organizado por el ex intendente de Córdoba, Luis Juez, y el radical Mario Negri, quienes aclararon que no se trataba de una "cumbre opositora", sino de una reunión de dirigentes, diputados y senadores de la UCR, la CC, el Frente Cívico y un sector del socialismo para respaldar al campo y debatir una modificación en la distribución de los recursos nacionales. También participaron representantes de la CONINAGRO, la FAA y la CRA. Los legisladores resolvieron por unanimidad crear una comisión bicameral que monitoreara el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno hacia el sector agropecuario, y si bien abundaron los discursos contra las retenciones, no se pidió el levantamiento de las mismas, sino una nueva Ley de Coparticipación Federal y un mecanismo que devolviera parte de las retenciones a las provincias productoras. En las conclusiones respaldaron "la espontánea movilización social" de los productores.

Lunes 14 de abril

Aunque los dirigentes de la ME esperaban que tuviera lugar una reunión técnica fueron recibidos sólo por el Jefe de Gabinete en lo que fue una reunión política que fijó una agenda de trabajo. El cronograma acordado incluyó cuatro reuniones técnicas que comenzarían el martes por la mañana, donde se reunirían con funcionarios de la SAGPyA para consensuar políticas para la cadena de la carne y por la tarde para los granos. El jueves volverían a juntarse para discutir sobre el mercado lácteo y las economías regionales, y el martes de la próxima semana regresarían a la Casa Rosada para analizar la evolución de las negociaciones. Estas reuniones serían encabezadas por el secretario, Javier de Urquiza, y especialistas del INTA y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La reunión terminó con desconfianza y malestar por parte de los dirigentes de la ME y la advertencia de que si en quince días no recibían ofertas concretas desde el Gobierno volverían a debatir si retomaban el paro.

Simultáneamente a esta reunión, en Pergamino, Jesús María y Gualeguaychú los productores se movilizaban, aunque sin cortar rutas. "El ánimo en las asambleas sigue tal cual estuvo en los momentos de máxima

tensión", expresó el Presidente de la CARSFE, agremiada a la CRA. En Entre Ríos, se realizaron varias asambleas de productores; en la de Diamante, en particular, se analizó el avance de las negociaciones, se discutió acerca del cambio en la metodología de lucha y prevaleció la posición de no bloquear los puertos para "no castigar a la sociedad que nos dio su apoyo".

Mientras el Jefe de Gabinete iniciaba negociaciones con las cuatro entidades agropecuarias, el Gobierno reforzó los cerrojos sobre las exportaciones de trigo y carne vacuna. En el caso del trigo, una circular de la SAGPyA volvió a postergar la reclamada reapertura de las exportaciones. Por otro lado, el secretario Guillermo Moreno, amenazó con aplicar clausuras y con la Ley de Abastecimiento, a los frigoríficos y carnicerías que no respetaran los precios fijados para trece cortes populares de carne. En tanto, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados se intentaba reflotar un proyecto polémico: el referido a la creación del Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (ENPYCCA), un organismo de control de comercialización y de precios de los agroalimentos que reemplazaría a la ONCCA. El vicepresidente de la SRA, se mostró crítico hacia el proyecto.

Martes 15 de abril

En la reunión que se realizó en la SAGPyA, Javier De Urquiza limitó el temario a la cuestión del cierre de las exportaciones de trigo, quedando para el día siguiente el tema de la carne. En tanto el Secretario de Comercio Interior prometió que se ocuparía de garantizar a los trigueros el precio "lleno", aunque los representantes de la entidades rurales no obtuvieron respuesta acerca de cómo se lograría dicho fin. Al salir de la reunión, Javier Ordoqui, ex titular de la CARBAP, señaló a Guillermo Moreno como responsable de las "amenazas y presiones en el Mercado de Hacienda de Liniers". Antes de que empezara la reunión, la ME había denunciado a través de un comunicado que funcionarios relacionados con el comercio de carnes habían "vuelto a efectuar presiones y amenazas, en una inequívoca maniobra tendiente a 'embarrar la cancha', buscando el fracaso de las gestiones de buena voluntad iniciadas por la Presidenta y las entidades".

Moreno había visitado por la mañana el Mercado de Liniers, donde había requerido documentación, exigido el cumplimiento de los precios sugeridos extraoficialmente por su cartera, y mantenido una tensa reunión

con el Presidente de la concesionaria del predio, al que le habría hecho advertencias sobre la continuidad de la principal plaza concentradora de ganado del país. Luego estuvo con el Presidente de la Cámara de Engordadores de Hacienda a Corral, y con otros empresarios del sector a los que, según voceros de esa cámara, les "bajó línea" sobre los precios a los que debían vender el ganado a los frigoríficos para que la carne llegara a los supermercados a los valores indicados. Voceros del sector dijeron que Moreno les había advertido que las exportaciones de carne permanecerían cerradas hasta que bajara el precio al consumidor.

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, aseguró que la provincia estaba sufriendo "las consecuencias gravísimas de no tener una política agropecuaria nacional", que en las últimas semanas había empezado a reflejarse en el corte de la cadena de pagos, lo que generaba problemas económicos que, a su vez, originarían graves problemas sociales. Además, el ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, explicó que durante el mes de marzo las transferencias del Gobierno Nacional en concepto de coparticipación federal se habían reducido "en unos 60 millones de pesos, un 10% de la recaudación mensual".

Miércoles 16 de abril

Los secretarios de la SAGPyA y de Comercio Interior volvieron a reunirse con los dirigentes de las entidades del campo para tratar el tema de la producción ganadera. De la reunión también participaron el Jefe de Gabinete de la SAGPyA, el titular de la ONCCA, del INTA, del SENASA, los representantes de la CRA, de la SRA , de la FAA, y de la CONINAGRO. Mientras Guillermo Moreno buscaba centrar el debate sobre los costos de producción y los precios al consumidor, los productores intentaban forzar una discusión sobre la liberalización progresiva de las exportaciones de carne y la definición de incentivos para la producción ganadera. Las cuatro entidades le dejaron al Gobierno su propia propuesta para normalizar la actividad. En tanto el Gobierno afirmó que a más tardar el día jueves tendría una respuesta para esas propuestas, momento en que se reunirían para tratar el tema del trigo y las economías regionales. No obstante, Moreno rechazó de plano el pedido de los dirigentes agropecuarios en cuanto a que se normalizaran las exportaciones de carne y se reabrieran las de trigo, insistiendo con que ello no sucedería hasta tanto hubiera abastecimiento y bajaran los precios domésticos.

Ulises Forte resumió la sensación con la que se quedaron los representantes de las entidades de la ME: "Vinimos con una propuesta superadora y no encontramos recepción del Gobierno. Hay coincidencia en el diagnóstico, pero las herramientas anacrónicas, malas, de Moreno, son nefastas. No hay solución de la parte oficial". Por su parte, un dirigente de la CRA explicó: "Nosotros habíamos preparado una serie de propuestas para diseñar una política de carnes. Pero no podemos avanzar en esa discusión sin resolver antes las urgencias. Y la urgencia es que se abran las exportaciones de vacas y novillos pesados, que no tienen nada que ver con el mercado interno".

Alfredo de Angeli estuvo en la localidad santiagueña de Colonia Dora y en la localidad salteña de Las Lajitas; se mostró "preocupado ante la falta de respuestas y soluciones", acusó al Gobierno de estar "pateando la pelota" y de estar "sentado sobre la plata de la soja" con "una política errada". También instó a los productores a no bajar los brazos, asegurando que el Gobierno quería enfrentarlos con el pueblo.

En Buenos Aires, diecinueve productores de Trenque Lauquen que se habían movilizado durante el paro del campo, recibieron una notificación del Juzgado Federal de Junín, por la presunta infracción del Artículo N° 194 del Código Penal, que reprimía con prisión de tres meses a dos años al que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes". El abogado de los productores expresó que no habían realizado un corte de ruta porque el transporte circulaba.

Jueves 17 de abril

Tras un encuentro entre el Jefe de Gabinete, el Secretario de Comercio Interior, el Secretario de la SAGPyA y la ME se llegó a un primer acuerdo en cuanto a la actividad ganadera: se ampliarían sustancialmente las exportaciones de carne y el Gobierno se comprometía a liberar los embarques de una categoría de vacas que no se consumían en el mercado interno. Como contrapartida, la ME se comprometía a procurar que el público en general adquiriera "a precios razonables y en cantidades adecuadas" los trece cortes de mayor consumo en el país. Los dirigentes rurales recordaron que el reclamo que había motivado el paro había sido la fuerte suba de las retenciones, a lo que el Jefe de Gabinete respondió que lo dejarían

para la semana próxima. El lunes se retomarían las negociaciones sobre el problema de la comercialización del trigo y la problemática de la leche.

El Gobierno culpó a los productores rurales por la quema de pastizales en la zona del Delta, que había llenado de humo la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En la Casa Rosada calificaron a los productores agropecuarios de "irresponsables". Las entidades agrarias rechazaron la acusación y afirmaron que el Gobierno quería "embarrar" la negociación.

Por otro lado, en el marco del Día de la Lucha Campesina, numerosas organizaciones campesinas y de pueblos originarios, agricultores familiares y trabajadores de la tierra crearon el Frente Nacional Campesino (FNC). En el acta fundacional expresaron: "Decidimos constituirnos en FRENTE NACIONAL CAMPESINO con el objeto de conformar un ESPACIO que nos contenga genuinamente ya que no nos sentimos actualmente representados por las diversas organizaciones del sector que hasta el momento se han expresado en los cortes de ruta y han producido el desabastecimiento de nuestro pueblo"[10].

Viernes 18 de abril

El Gobierno Nacional informó sobre los detalles y la puesta en marcha de las medidas sobre reintegros y fletes que la Presidenta había expresado días atrás[11]. El anuncio lo hicieron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández,

10 El documento fundacional fue firmado por: el **Movimiento Campesino de Formosa** (MOCAFOR)**, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero** (MOCASE)**, el Movimiento Campesino de Jujuy** (MOCAJU)**, el Movimiento Agrario Misionero** (MAM)**, la Mesa de Agricultura Familiar de Buenos Aires, la Mesa Provincial de Organizaciones de productores Familiares- Francisco Álvarez, la Asociación Civil Los pirujas, la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina** (ONPIA)**, la Asociación de Familias Productoras de la Cuenca Río Luján, las Familias Productoras de Cañuelas, la Cooperativa** APF**- Florencio Varela, el** Centro ecuménico de educación popular(CEDEPO)**-Florencio Varela, la Mesa Provincial Zona Sur Madre Tierra-Tres Arroyos, la** Federación de Cooperativas Agropecuarias(FECOAGRO)**-San Juan, la** Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar y la Economía Social(COOPAFES)**-Mendoza, la Asociación Civil** AMAUTA**-Villa Sarmiento, el Parque Pereyra-Grupo San Juan, el Puente Verde, la Asociación de Técnicos del** AMBA**, la** TUPAJ KATARY**-Jujuy, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente** ECOSUR**, el Movimiento Campesino de Liberación** (MCL)**, la Cooperativa de Trabajo** ICECOOP**, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados** (FACTA)**, la Cooperativa** QUILMES**, la** Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles(CAUQUEVA) y la **Asociación de Técnicos de La Pampa. Debemos aclarar que en el momento de esta creación ya funcionaba como organización el Movimiento Nacional Campesino e Indígena articulado a la federación internacional Vía Campesina.**

11 El reintegro de retenciones llegaría a los productores de hasta 500 toneladas de soja y girasol, que además tuvieran hasta 150 ha en la zona pampeana o 350 ha en el resto del país, y no

el ministro de Economía, Martín Lousteau, y el titular de la SAGPyA, Javier de Urquiza, luego de una reunión con la Presidenta.

Aunque los dirigentes agropecuarios no habían sido informados sobre el anuncio, remarcaron que no se retirarían de la mesa de diálogo. Eduardo Buzzi sostuvo que los anuncios constituían medidas que se quedaban a mitad de camino y que no resolvían el problema que los había llevado al paro. En este sentido, agregó: "A primera vista, resulta insuficiente. Y además, llama la atención que no hayan convocado a las entidades para discutir estas medidas, cuando estamos en medio de una negociación". Desde la SRA , se quejaron: "Esto no es un diálogo, es un monólogo. Se hacen anuncios sobre el sector, luego de una semana de encuentros, sin participar al sector afectado". Además, en las entidades esperaban una mayor segmentación de los productores y reintegros diferenciados para productores de hasta 3 mil toneladas.

Hermes Binner le envió al Poder Ejecutivo diez medidas para resolver el conflicto con la ME, consistentes en: 1) Reservar como ámbito para la discusión al Consejo Federal Agropecuario, lo que requería cambiar la ley para convertirlo en un organismo vinculante; 2) Orientar las retenciones móviles, mientras existieran, a equilibrar las rentabilidades de las diferentes producciones y crear un sistema de compensación a las provincias por las retenciones; 3) Reemplazar paulatinamente las retenciones por los impuestos coparticipables; 4) Extender el sistema de regulación de ingresos del sector a los precios de insumos claves; 5) Revisar el mecanismo de compensaciones para que fuera más "transparente y equitativo", e involucrar a la comercialización y la distribución; 6) Garantizar "rentabilidad aceptable" y "reglas claras" para aumentar la producción de carnes y lácteos, de modo tal de aprovechar la demanda internacional sin desatender al mercado interno; 7) Otorgar créditos, recalcular la deuda de origen y suspender remates a los agricultores familiares; 8) Articular políticas de ciencia y tecnología para el sector; 9) Combinar financiamiento e incenti-

hubieran facturado más de 500 mil pesos en 2007, ni esperaran facturar más de 800 mil pesos el año que corría. Para acceder al reintegro los productores debían presentar una declaración jurada en Economía, que debería ser visada por alguna de las cuatro entidades representativas del campo y por las autoridades municipales correspondientes. El pago se realizaría mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria declarada por el productor y se estimaba que el trámite podría demorar sesenta días. El Gobierno estimaba que dicho reintegro llegaría a más de 62 mil pequeños productores. Además se puso en marcha un subsidio en concepto de flete para aquellos productores de zonas extra pampeanas que estuvieran a más de 450 km de distancia de un puerto.

vos para actividades como el arroz, algodón, cítricos, etc. 10) Discutir un plan nacional de política agropecuaria.

Por otra parte, en la Biblioteca Popular de Paraná se realizó una reunión denominada "Cabildo Abierto" entre productores agropecuarios entrerrianos y nueve de los doce legisladores que tenía la provincia en el Congreso Nacional para conocer la posición de cada uno en el conflicto. La reunión había sido convocada por la FAA, la FEDECO, la FARER y la SRA. Desde la oposición cuestionaron la falta de debate en el Congreso y afirmaron la necesidad de discutir una nueva Ley de Coparticipación. En tanto el oficialismo (que contó con los diputados Cristina Cremer, María de los Ángeles Petit, Gustavo Zavallo y Raúl Solanas) tras defender la política oficial, fue fuertemente abucheado por los productores quienes pidieron a los legisladores que no cambiaran "las reglas de juego" en medio de un ciclo productivo y que "presionen a los frigoríficos exportadores" y a los pools de siembra. Previo al acto los productores agropecuarios habían participado de un "camionetazo" por las calles de la ciudad. En tanto Jorge Busti, emitió un comunicado anunciando que promovería un trabajo conjunto con las provincias de Córdoba y Santa Fe a fin de plantear al Gobierno Nacional propuestas para el sector agropecuario, diferenciándose de este modo del Gobernador de su provincia.

Sábado 19 de abril

Una multitudinaria asamblea de productores de distintas provincias tuvo lugar en el Estadio de la Doma y el Folklore de Jesús María, provincia de Córdoba. Allí se ratificó que, no obstante las actitudes y decisiones "unilaterales" del Gobierno, continuarían en la mesa de negociaciones, aunque se le notificó a la Presidenta que el tiempo para que se acordaran medidas destinadas al sector se agotaría inexorablemente el 2 de mayo.

Los representantes de las entidades agrarias manifestaron que no creían que las medidas anunciadas el viernes por el Gobierno tuvieran aplicación práctica. Así, Hugo Biolcati, afirmaba: "Es que ya antes habían ofrecido este sistema de reintegros, nosotros lo aceptamos porque entendemos que hay que amortiguar el impacto social, pero ahora lo vuelven a anunciar sin tener nada concreto, sólo con ambigüedades, más confuso que antes. Seguimos en cero". Por su parte, Néstor Roulet, de la CRA aseguró que el Gobierno se equivocaba si consideraba que "el productor pequeño es el de 500 toneladas". "En este beneficio entrarán, como mucho, mil pro-

ductores", agregó Roulet. En tanto Eduardo Buzzi, precisó que la FAA había propuesto un mecanismo de reintegro de las retenciones para soja y girasol, pero "no de un 5 %, como anunció el Gobierno, sino del 15 % y gradual". Así, quien produjera hasta 1.000 toneladas recibiría 15 % de devolución, de 1.000 a 1.500 toneladas, 10 %, y de 1.500 a 3.000 toneladas, un 5 %. "Pero ahora ya lo anunciaron, y por tanto no se puede discutir, porque sino lo tomarían como una derrota política. Aquí queda claro que lo único que buscaron es atenuar el conflicto con el campo, al menor costo fiscal posible. Y entonces salió esto", agregó Buzzi.

Lunes 21 de abril

En la reunión que tuvieron con el titular de la SAGPyA, los técnicos de la ME le reclamaron al Gobierno una serie de medidas para solucionar los principales conflictos del sector lácteo, a saber: 1) elevar el precio promedio que les pagaba la industria a los tambos de 0,85 centavos de peso a 1,25 pesos por litro (de acuerdo con los productores, este incremento podría ser absorbido por las industrias del sector); 2) aumentar el precio de corte para la exportación de leche en polvo de 2.770 dólares a 3.500 dólares; 3) disminuir la cantidad de productos que se habían comprometido a no aumentar de dieciséis a cinco; 4) acelerar el pago de compensaciones y desembolsar el dinero acumulado en el fondo que se había creado con lo proveniente de las retenciones a los lácteos; y 5) reclamar la puesta en marcha de los créditos para el sector con tasa de 6 % anual que había prometido el Ministro de Economía cuando anunció los reintegros para pequeños y medianos productores. También pidieron la elaboración de un plan de largo plazo que les otorgara previsibilidad a los productores para favorecer las inversiones. Desde el Gobierno afirmaron que les responderían en breve, sin precisar fecha alguna.

Hugo Biolcati afirmó que la semana en curso sería el punto de inflexión en las negociaciones con el Gobierno y que si para el viernes no se llegaba a un acuerdo podrían retomar la protesta. En tanto que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió que si volvían a cortar las rutas las fuerzas de seguridad se encargarían de habilitar los pasos.

El Secretario de Comercio Interior, advirtió en el Mercado de Liniers que si la carne no se comenzaba a vender a los precios fijados por el Gobierno se aplicaría la Ley de Abastecimiento contra los empresarios del sector el día martes. Además, negó que las exportaciones de carne

fueran a ser liberadas, como se había pactado el día jueves. Mientras tanto, los ingresos de animales al Mercado de Liniers fueron la mitad de lo habitual para un lunes, con lo que también se frenaba la baja de precios. Ni la Aduana ni la ONCCA autorizaron embarques, al tiempo que fueron paralizadas las exportaciones de lácteos. Así, el acuerdo que se había alcanzado el día jueves respecto a los precios de los cortes populares de carne y de la liberación de embarques, no fue cumplido por ninguna de las partes en conflicto. Al respecto, el Vicepresidente de la CRA, se quejó: "El jueves sellamos un acuerdo sobre la carne y el Secretario de Comercio está demostrando que en la práctica no se cumple".

El fiscal federal Guillermo Marijuán realizó una denuncia contra Alfredo de Angeli, luego de que el productor admitiera en una entrevista periodística que en los cortes de ruta tenían armas de fuego y que estaban dispuestos a resistir. El fiscal pidió que se investigara si de Angeli había incurrido en los delitos de intimidación pública, acopio de armas e incitación a la violencia colectiva y solicitó que se averiguara si el dirigente estaba habilitado para portar armas. El dirigente rural declaró en un programa radial: "Sólo me preguntaron si había armas y yo dije la verdad ¿Por decir la verdad me van a procesar? Yo dije que sabía que había gente armada, nada más".

Ante el creciente malestar del sector agropecuario, el secretario Javier de Urquiza convocó de urgencia a los titulares de la CRA, la FAA, la SRA y la CONINAGRO. Aunque la reunión trató de mantenerse en secreto, luego se supo que el funcionario les presentó un proyecto del Secretario de Comercio Interior que consistía en que fueran los exportadores de granos (un negocio controlado por unas pocas multinacionales) los que compraran toda la cosecha de trigo de 2009, pagando por ella los precios "llenos" (el valor internacional menos las retenciones) que reclamaban los productores. Y que luego fueran esas firmas las que vendieran a los molinos para el consumo doméstico. De Urquiza se encontró con un rechazo rotundo por parte de las entidades, pero convinieron acercarle el martes una contrapropuesta.

Martes 22 de abril

Las entidades de la ME presentaron su contrapropuesta al plan del Secretario de Comercio Interior concerniente a los granos, que consistía en que se liberaran las exportaciones, se compensara la harina directamente a los

molinos y que de haber una regulación como la propuesta por el Gobierno, fuera administrada por un comité del que formaran parte representantes de los molinos más chicos y de la producción. Además, proponían que las operaciones no se hicieran por compra directa de los exportadores a la producción, sino que los molinos pudieran adquirir en el mercado a término sus necesidades para el año.

Luego de que la reunión para dialogar sobre el trigo pasara a un cuarto intermedio debido a que no llegaron a un acuerdo, y en una extensa referencia a la propuesta que el sector agropecuario había hecho el día anterior para superar el conflicto por el precio de la leche, la Presidenta sostuvo que le preocupaba "cierto sesgo predemocrático en algunos pedidos. Los reclamos deben hacerse a través de las instituciones". Además, acusó al campo de querer una rentabilidad excesiva en el negocio lácteo y llamó a los dirigentes a "la cordura, a la responsabilidad social y a la articulación democrática".

Fernando Gioino, titular de la CONINAGRO, expresando sus diferencias con el resto de las entidades de la ME, se reunió con la Presidenta y la empresa SanCor, para ratificar su compromiso de respetar los acuerdos logrados en diciembre del año anterior. Así, comenzaron a circular rumores de un "boicot comercial" a la empresa SanCor y sobre la posible renuncia de Gioino, quien estuvo ausente en la reunión que mantuvieron los titulares de las entidades agropecuarias.

El Mercado de Hacienda de Liniers recibió más de siete mil cabezas de ganado, un número bajo para un martes, pero mucho mejor que las mil trescientas del lunes, situación que ayudó a descomprimir las advertencias del Secretario de Comercio Interior sobre la aplicación de la Ley de Abastecimiento.

Por otro lado, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Carne del Gran Buenos Aires, aseguró que unos trece mil trabajadores de la industria de la carne perderían parte de sus ingresos si las exportaciones de cortes vacunos se mantenían cerradas.

Miércoles 23 de abril

En el marco de una denuncia presentada a principios del mes por el Presidente de Fedecámaras, en la que el secretario Guillermo Moreno era el principal querellante, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, citó a los titulares de las entidades del campo a declarar por una pre-

sunta violación a la Ley de Abastecimiento. Los dirigentes de las cuatro entidades del agro se reunieron por la tarde para analizar la situación y emitieron un comunicado donde acusaban indirectamente al Gobierno por la citación judicial y reivindicaban su "vocación de diálogo".

La Cámara de Diputados aprobó sobre tablas y por unanimidad el pedido de reunión urgente al Consejo Federal Agropecuario, que había sido propuesto mediante el proyecto presentado por los diputados radicales por Entre Ríos, José Antonio Artussi y Jaime Benedetti, y que fuera apoyado por el oficialismo. En este marco, el diputado Jorge Busti, además titular del PJ de Entre Ríos, sostuvo que "las provincias no pueden ser convidadas de piedra" en la aplicación de las medidas por parte del Gobierno Nacional.

Jueves 24 de abril

Tras varios días de encuentros y negociaciones frustradas entre el Gobierno Nacional y la ME, se confirmó el rumor de la renuncia del ministro de Economía, Martín Lousteau, quien sería reemplazado por Carlos Fernández. En este escenario, en un acto en Mendoza, Néstor Kirchner, presidente del PJ, señaló a los productores agropecuarios como responsables del desabastecimiento y la inflación consecuente, y los comparó con los sectores que apoyaron los golpes militares de 1955 y 1976. "Primero hay que comer en la Argentina y después hay que exportar", les dijo a las entidades de la ME, a quienes también acusó de haber generado los incendios en el Delta. Los dirigentes de las entidades respondieron a las acusaciones de Kirchner. Así, Mario Llambías, sostuvo: "Se ve que busca un enfrentamiento en la sociedad que no es bueno. Y contradice a la propia Presidenta, que habla de diálogo y acuerdo". Mientras Eduardo Buzzi, afirmó que quería creer que el Gobierno no había dado por terminadas las negociaciones con el campo, y advirtió que la gente estaba "muy dispuesta a volver a un paro, aunque nadie quisiera hacerlo".

La presidenta Cristina Fernández rechazó las críticas de las entidades que habían acusado al Gobierno por el incumplimiento en el acuerdo por la carne. Además, deploró que hubieran interpretado como un "apriete" el hecho de que un Juez, "aplicando una ley de la Nación, intime a otros argentinos que, haciendo uso de mecanismos, a mi criterio, de ilegalidad, hayan pretendido dejar sin abastecimiento a todos los argentinos". Por su parte, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia,

declaró que judicializar el conflicto no era el mejor camino. En este marco, la Justicia había comenzado a aceptar amparos contra las retenciones móviles. Así sucedió en Paraná, donde un Juez de Primera Instancia aceptó el recurso de amparo presentado por un pequeño productor. Y en Bahía Blanca la Cámara Federal resolvió que el amparo era una vía válida en este caso.

La ONCCA informó que desde que Ricardo Echegaray había asumido la presidencia del organismo (el día 10 de abril), se habían pagado compensaciones por 116 millones de pesos a aproximadamente 6 mil destinatarios. Además, se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones N° 284 y N° 285 oficializando el mecanismo de compensaciones y los subsidios a los fletes destinados a los pequeños productores de soja y girasol[12].

Viernes 25 de abril

Al acto de asunción de Carlos Fernández como ministro de Economía asistieron los titulares de la SRA , Luciano Miguens, y de la CRA, Mario Llambías; así como Silvio Corti, en representación de la FAA, y Jorge Morales, de la CONINAGRO. En declaraciones de prensa, las entidades mostraron ciertas expectativas por el reemplazo. Los dirigentes de las entidades intercambiaron algunas palabras con la Presidenta y con el Jefe de Gabinete y luego confirmaron que pedirían una audiencia al nuevo Ministro de Economía.

Mientras tanto, en la Sociedad Rural de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires, durante una asamblea organizada con la CARBAP, la CONINAGRO y productores independientes, se decidía de forma mayoritaria que, ante la opinión generalizada de que no se llegaría a una solución antes del 2 de mayo, volverían a manifestarse en las rutas pero bajo la consigna de no producir desabastecimiento. No obstante, la propuesta de los productores del sudeste bonaerense se pondría a consideración de las demás entidades.

12 La Resolución N° 284 establecía que para acceder a los reintegros el productor debía estar inscripto en el Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas de la AFIP; no superar las 500 toneladas producidas; explotar en forma directa una superficie de hasta 150 ha en la región pampeana y de hasta 350 ha agrícolas en la región extrapampeana; asegurar que el cultivo de soja y girasol constituyera su actividad principal; no poseer deuda líquida y exigible; y haber declarado en 2007 un nivel máximo de facturación neta de impuesto al valor agregado de 500 mil pesos y estimar no más de 800 mil pesos para el año que corría. La Resolución N° 285, por su parte, creaba el régimen destinado a compensar el transporte de soja y girasol producidos en las provincias extrapampeanas.

También en la Sociedad Rural de Victoria, provincia de Entre Ríos, se realizaba un encuentro entre productores y legisladores opositores de la Región Centro, para discutir las medidas a tomar y se aprobó la propuesta de los legisladores de "convocar a una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional para tratar la anulación de la Resolución N° 125/08". También se aprobaron dos mociones propuestas por Alfredo de Angeli: la convocatoria a los gobernadores y legisladores nacionales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para debatir los problemas del campo y que el 2 de mayo se realizaran asambleas en las rutas entrerrianas para determinar la metodología de la nueva medida de fuerza. Otra de las propuestas de parte de los productores fue que no se desabasteciera a las ciudades.

Los diputados nacionales de Entre Ríos Gustavo Zavallo, Cristina Cremer, Nelio Calza, María de los Ángeles Petit y Raúl Solanas, enviaron una nota al Jefe de Gabinete, al Ministro de Economía y al Secretario de la SAGPyA, planteando la necesidad de: profundizar el diálogo con el sector productivo; que se excluyera a Entre Ríos de la Pampa Húmeda ya que su rendimiento era menor y, por lo tanto, sus costos más elevados; que se revieran las medidas anunciadas por el Gobierno para beneficiar a pequeños y medianos productores, ya que abarcaban a una pequeña porción de los agricultores entrerrianos; y que se bajara la distancia mínima para que los productores se beneficiaran con el subsidio a los fletes.

El senador nacional pampeano por el FrePam, Juan Carlos Marino, también se mostró disconforme con las medidas anunciadas para los pequeños y medianos productores, calificando como "ridículo" el sistema de compensaciones determinado a través de la Resolución N° 284/08 del Gobierno Nacional. Marino destacó que la Resolución perjudicaba "notablemente a la Provincia de La Pampa, ya que al incluirnos dicha medida dentro de la región pampeana, nos obliga a que las tan famosas 500 toneladas sean producidas en 150 ha, hecho que significa un profundo desconocimiento por parte del Gobierno de los dispares rendimientos que pueden alcanzarse en nuestra provincia".

Por otra parte, en los cinco días de operaciones, se registró el ingreso de casi treinta mil animales al Mercado de Liniers, una cifra que se acercaba a los valores normales del mismo. Al respecto, Alberto Williams, vicepresidente de la APCCBA, aseguró que la carne sobraba y que entre el fin de semana y el comienzo de la próxima los precios continuarían bajando, ubicándose en los valores acordados. También se mostró "optimista" en

relación con las perspectivas del sector cárnico en el marco del acuerdo firmado entre el Gobierno y las entidades del agro.

Sábado 26 de abril

Con respecto al cambio en el ministerio de Economía, el presidente de la CRA, Mario Llambías, opinó que había una "oportunidad para una apertura y para encontrar las soluciones del país". También destacó el "importante gesto político" que la Presidenta había tenido durante la asunción de Carlos Fernández, quien se había acercado a los dirigentes de las entidades del campo para saludarlos. En tanto el Presidente de la CARBAP, afirmó que si Carlos Fernández daba "una señal clara" al agro, la tregua podría postergarse "una semana o diez días más" pero aseguró que si el campo volvía al paro no habría desabastecimiento; eso mismo reafirmó Biolcati, y agregó: "nuestro movimiento no es para cambiar al Gobierno o a la política económica. Sin querer nos han colocado en ese lugar, pero se olvidan de que nuestro reclamo es sectorial; para otros cambios están los partidos políticos". En este contexto, la CARBAP organizó una asamblea en Olavarría donde se decidió que si se retomaban las medidas de protesta a partir del 2 de mayo, no se incluirían la modalidad de los cortes de rutas. Productores de Junín informaron a la asamblea que preparaban un paro "tranqueras adentro" que no impedirán el paso en la Ruta Nacional N° 7 y la Provincial N° 65, como lo habían hecho en la primera etapa de la movilización, pero realizarían un paro en la comercialización de productos agrícolas y de insumos además de restringir la siembra. Sin embargo, afirmaron que si el Gobierno daba señales concretas de diálogo podrían prolongar la tregua.

En tanto en Trenque Lauquen se realizó otra asamblea en la que se reclamaron "soluciones concretas". Allí, Alfredo de Angeli afirmó que con el cambio de Ministro de Economía había expectativas pero advirtió: "tal como nos encontramos, el 2 de mayo vamos a estar en asamblea en las rutas". Mientras tanto, en Santa Fe, los productores mantenían la idea de no extender la tregua que vencería el 2 de mayo; en La Pampa se realizaba una asamblea en la que los productores rurales se mostraron pesimistas con la designación del nuevo Ministro de Economía.

Hugo Moyano (CGT) advirtió que su gremio tendría un papel activo si la ME decidía retomar el paro. "Pasan todos o no pasa nadie", sostuvo en relación con la directiva que daría a los camioneros de su gremio res-

paldando de esta forma la postura de su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de camioneros, que el día anterior había advertido que en caso de que se volvieran a cortar los caminos los choferes pasarían a la acción.

En Santa Fe, varias fueron las disputas por el posicionamiento en torno al conflicto agropecuario. Allí, los legisladores provinciales del PS, la UCR, el Partido Demócrata Progresista (PDP) y la CC manifestaron en un comunicado conjunto: "los diputados del Frente Progresista Cívico y Social estamos convencidos de que Santa Fe tiene un gobernador que defiende los intereses de la provincia de Santa Fe y con ellos los derechos de todos los santafesinos". De este modo, reafirmaban su posición al lado de los productores de esa provincia. También aludieron a diputados, como Agustín Rossi, titular del bloque oficialista en Diputados, quien había criticado al Gobernador por sus actitudes "camaleónicas" hacia el Gobierno Nacional. Rossi le pedía a Binner que empezara "a gobernar" y agregaba que le preocupaba que el conflicto agrario hubiera "escondido la falla de gestión del Gobierno de Santa Fe".

Domingo 27 de abril

Más de mil productores y los representantes de la ME se reunieron en una asamblea en Villa Mercedes, provincia de San Luis y coincidieron en que esperarían el llamado de parte del Gobierno para evitar el paro. Sin embargo, aclararon que las propuestas realizadas hasta el momento no los convencían y que el Gobierno había perdido credibilidad. Alfredo de Angeli estuvo presente e interpeló a la Presidenta para que buscara una solución al conflicto. A su turno, el Vicepresidente de la CRA, afirmó: "Trabajamos para que el Gobierno nos tenga como socios y no como enemigos".

Lunes 28 de abril

En Santiago del Estero, Añatuya, el gobernador Gerardo Zamora, inauguraba un hospital y viviendas rurales y la Presidenta, presente en el acto, dirigió un duro mensaje al campo y expresó que era "hora de ser más solidarios y de redistribuir la riqueza por el bien de todos los argentinos (...) Los que más deben ayudar son los que más han ganado y recibido en estos últimos años".

Continuando con el recorrido por las distintas asambleas rurales que se extendieron en todo el país, Alfredo de Angeli, con otro dirigente de FAA y en compañía de Néstor Roulet, convocó al ex presidente Néstor Kirchner a un debate público entre ambos. Además, acusó a la Presidenta de hostigar injustamente al sector agropecuario y amenazó una vez más con el paro advirtiendo que las consecuencias las pagaría la agroindustria.

Por otro lado, los directivos de la CAFMA se reunieron con dirigentes rurales en la sede de la FAA, donde describieron un duro panorama sectorial y se solidarizaron con el reclamo para que se retrocediera con el incremento de las retenciones a los granos. Manuel Dorrego, gerente de la CAFMA, aseguró que todos coincidían en que si no cambiaba el ánimo de los productores, dentro de un mes la situación sería caótica e iba a haber que empezar a despedir personal, y agregó que "tanto a los cuarenta mil trabajadores que dependen del sector de forma directa, como a los cien mil que lo hacen de manera indirecta", se les habían cortado las horas extras.

Los Tribunales Federales de Rosario autorizaron a tres productores rurales santafecinos a comercializar novecientas treinta y cinco toneladas de soja en condiciones anteriores a la aplicación de las retenciones móviles, que regían desde el 11 de marzo para la exportación de granos. El fallo destacaba en sus considerandos que los productores habían promovido una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 125/08 porque ésta infringía el principio de legalidad que emana de los Artículos N° 4 y N° 17 de la Constitución Nacional.

Por la noche se realizó un encuentro informal y reservado entre el Jefe de Gabinete y los titulares de las cuatro entidades agropecuarias. La instrumentación de una posible solución al conflicto transitaba sobre tres ejes: una efectiva baja del precio de la carne vacuna en los mostradores que indujera al Gobierno a reabrir las exportaciones, la creación de un nuevo mecanismo de comercialización del trigo que facilitara el acceso de los productores medianos a un valor más retributivo para la producción y la fijación de un precio para el litro de leche en tambo que garantizara la sustentabilidad de las unidades productivas más pequeñas. El Gobierno ofrecería fijar una tasa máxima a las retenciones móviles cuando la soja superara los 600 dólares la tonelada. Se esperaba que entre el martes y el miércoles se encontraran formalmente las entidades y el Gobierno para darle forma al acuerdo.

Martes 29 de abril

Al término de una reunión de la ME, los presidentes de las cuatro entidades señalaron que por la tarde habían recibido una convocatoria del Gobierno para asistir a una reunión al miércoles siguiente con el Jefe de Gabinete. Eduardo Buzzi señaló que en el encuentro se evaluarían una serie de temas, entre los que destacó la situación de los mercados del trigo y la carne. A su vez, aseguró que estaban dadas las condiciones para la reapertura de las exportaciones de carne y que había avances en la propuesta para el mercado del trigo. Respecto de la posibilidad de prorrogar la tregua, sostuvo que eso lo evaluarían luego de la reunión en la Casa de Gobierno.

El juez federal en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, recibió a las cuatro entidades del campo y al Secretario de Comercio Interior. El Juez afirmó que la causa por desabastecimiento abandonaría el ámbito judicial para ingresar en la órbita de la Secretaría de Comercio. Desde las entidades, en tanto, se comprometieron a no afectar el abastecimiento y aclararon que nunca habían tenido intención deliberada de producir faltantes. Antes de ingresar al edificio de Comdoro Py, tanto Fernando Gioino como Eduardo Buzzi, habían rechazado las denuncias por desabastecimiento durante la huelga de veintiún días. Además, Buzzi criticó que se hubiera llegado a la instancia judicial.

En La Pampa se realizó una multitudinaria asamblea de productores en la rotonda de las rutas nacionales N° 5 y N° 33, convocada por las cuatro entidades rurales en solidaridad con los productores de la zona de Trenque Lauquen, que estaban bajo instancia judicial por la participación en cortes efectuados durante los veintiún días de paro agrario nacional.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió un primer informe oficial que daba cuenta del impacto de las medidas de fuerza del campo sobre la economía real. De este modo, se confirmaba que el paro agrario había golpeado a la industria alimenticia, teniendo como consecuencia "la menor disponibilidad de materia prima para ser procesada por la industria". Y detallaba que las actividades más afectadas habían sido "la elaboración de carnes rojas y la molienda de cereales y oleaginosas". En este último rubro, la actividad había caído un 16,4% respecto de marzo de 2007. En tanto las exportaciones de aceite de soja y girasol habían bajado un 35%, mientras que las de harina lo habían hecho en un 21%. El Estimador Mensual Industrial de marzo había perdido 1,7% en relación a febrero y subido solo 3,1% contra marzo de 2007. Pero la

actividad del sector alimentos y bebidas había caído un 10,1% a nivel interanual; las carnes rojas mermó en la producción el 37,6% y las ventas al exterior de cortes Hilton se retrajeron un 26%. En carnes procesadas, la disminución era del 24% mientras que en menudencias la exportación había disminuido un 4%.

Miércoles 30 de abril

La reunión del Gobierno y la ME se llevó a cabo. Durante la primera parte estuvieron presentes el Secretario de la SAGPyA y los presidentes y vicepresidentes de las cuatro entidades junto a sus equipos técnicos. La segunda parte del encuentro fue sin los técnicos y se sumó el Jefe de Gabinete. A media tarde, ingresó el Secretario de Comercio Interior. Tras ocho horas de reunión Alberto Fernández y los representantes de las entidades rurales cerraron un nuevo acuerdo parcial según el cual se debería liberar las exportaciones de carne y empezar a regir un acuerdo previo que ampliaría el cupo máximo anual de ventas al exterior, de 500.000 a 550.000 toneladas. Además, se acordó un mecanismo que permitiría a los productores recibir un mejor precio por el trigo y lograron la promesa oficial de que cobrarían por el cereal el precio pleno (el valor internacional, menos las retenciones y gastos de flete) a través de compensaciones de la ONCCA. El encuentro concluyó con la promesa de discutir el sistema de retenciones móviles en una nueva reunión que se realizaría el siguiente martes. Sin embargo, Eduardo Buzzi aseguró que en el encuentro se habló de las retenciones móviles y que incluso se dijo que había "voluntad en el Gobierno de revisarlas". Uno de los puntos centrales de la reunión y el objetivo principal del Gobierno fue lograr una extensión de la tregua, algo que Eduardo Buzzi se encargó de poner en duda: "Quiero que este país se pacifique. Pero dilapidamos treinta días y esto también es un condicionante". Aseguró que existía una altísima probabilidad de protesta sin comprometer necesariamente a la comercialización. Sostuvo, además, que había "un panorama para discutir cosas que hace un mes no estaban y eso es valorable". En cuanto a la posibilidad de nuevas movilizaciones, los presidentes de las entidades aseguraron que todo dependía de lo que decidieran sus respectivas comisiones directivas y de lo que discutiera luego la ME. Tras salir de la reunión los dirigentes se reunieron en la sede de la FAA para analizar los próximos pasos.

El Jefe de Gabinete en el Senado defendió en su informe la política oficial hacia el campo al asegurar que las retenciones móviles eran "más justas" que las fijas. No obstante, no descartó una eventual revisión, al tiempo que afirmó que el diálogo entre el Gobierno y el campo se estaba recuperando "poco a poco". Además, cuestionó los cortes de ruta de los productores y volvió a rechazar las versiones acerca de su renuncia al cargo. La oposición se quejó por "la falta de definiciones concretas".

Cuenta regresiva: a la espera de las negociaciones

Jueves 1 de mayo

Tras la reunión que mantuvieron las cuatro entidades con el Gobierno el día anterior, la FAA congregó en Rosario a sus 48 directores de todo el país para discutir qué medidas tomar frente a las propuestas impulsadas por el Jefe de Gabinete. Por su parte, los representantes de la CRA se reunieron en su sede de Buenos Aires. El primero en salir a hablar fue Eduardo Buzzi: "La tregua terminó. A partir del sábado nos movilizaremos a las rutas pero sin cortes. Queremos empezar una campaña de concientización para desenmascarar a los grandes grupos económicos que son, en última instancia, los formadores de precios. De todas maneras, el diálogo sigue abierto". Minutos después, el que salió a dar su postura fue Mario Llambías: "Empieza un nuevo plan de lucha. Pasaron 30 días y hay temas que ni siquiera se tocaron, como la leche, las economías regionales y las retenciones".

Viernes 2 de mayo

Las entidades agrarias afirmaron que para finalizar el paro era necesario que en la reunión concertada para el siguiente martes con los representantes del Gobierno se discutiera el tema referido a las retenciones, así como la puesta en marcha de los pequeños acuerdos que se habían alcanzado durante las semanas anteriores. Entre ellos figuraban, la liberalización de las exportaciones de carne, de granos y la implementación de un esquema eficiente para compensar a los tamberos.

En tanto, Alberto Fernández intentaba conformar una "mesa agropecuaria" para discutir una política integral para el agro que superara la discusión en torno a las retenciones.

La oposición, por su lado, expresó sus opiniones ante el fin de la tregua de los ruralistas. Mauricio Macri sostuvo que el Gobierno no fue inteligente en la forma de encarar las negociaciones y agregó que era "grave" que no se hubiese llegado a una solución. El senador de la UCR, Ernesto Sanz, consideró también, que la Casa Rosada "tiene una visión equivocada porque defiende a rajatabla" la suba de las retenciones. El diputado Francisco De Narváez, por su parte, dijo "para que haya menos pobres, el campo argentino debe exportar más" y pidió al Gobierno que "aporte soluciones concretas". Al mismo tiempo, el vicepresidente del bloque radical de la Cámara baja, Pedro Azcoiti y el diputado Carlos Raimundi del ARI, coincidieron en que para terminar con el conflicto del campo, el Gobierno debería diseñar "una política de largo plazo" para granos, carnes y leche.

El sindicato de camioneros conducido por Hugo Moyano se estableció en la Ruta Nacional N° 9, a la altura de la localidad de Garín, para repartir volantes donde ratificaban su postura contraria a las medidas de los ruralistas.

Sábado 3 de mayo

Ante el fin de la tregua propuesta por los ruralistas, el Gobierno decidió mostrarse con mayor firmeza respecto al tema de las retenciones. Un funcionario del Gobierno subrayó: "El martes no va a haber correcciones en las retenciones. Sólo se podrían llegar a discutir después del 25 de mayo".

En la localidad de Gualeyguaychú, los productores agropecuarios que semanas atrás habían protagonizado los cortes más duros del conflicto, aceptaron la "última tregua" para que sus dirigentes pudieran dialogar con el Gobierno. Hubo importantes asambleas en varias localidades en las que los productores decidieron reunirse después del encuentro entre el Gobierno y la ME, para evaluar los resultados de la negociación y decidir cómo seguir con la protesta. En varias localidades de la provincia de Buenos Aires los chacareros decidieron permanecer en vigilia al costado de los caminos hasta conocer el resultado de la reunión. En Córdoba, también, más de unas treinta asambleas se encontraban en estado de alerta, expectantes de los resultados de la próxima reunión.

En la provincia de Santa Fe la FAA realizó un acto donde planteó sus diferencias con el Gobierno Nacional. Allí, Eduardo Buzzi afirmó que lo que realmente quería el Gobierno cuando hablaba de redistribución de la riqueza era "demonizar al campo para disciplinar al conurbano bonaerense".

Por otro lado, el paro agrario comenzaba a sentirse en las economías regionales del interior del país. En Córdoba, una de las principales provincias productoras de soja, un empresario fabricante de tractores afirmó que desde el comienzo del conflicto, las ventas cayeron un 70 %. De igual modo, en Santa Fe, una empresa que fabricaba remolques y carrocerías comentaba que se empezaron a anular órdenes de compras.

Domingo 4 de mayo

El Gobierno informó que estaría dispuesto a introducir cambios en el esquema de las retenciones si el precio de la soja superaba los 600 dólares.

En la provincia de Santa Fe sobre la Ruta Nacional N° 11, productores autoconvocados decidieron en asamblea volver al paro contra el Gobierno Nacional. Los productores comunicaron que solamente permitirían circular al transporte con hacienda en pie, ómnibus y vehículos particulares. Por otra parte, en las localidades de Santa Teresa y Alcorta se concentró una numerosa cantidad de productores agremiados a la FAA que se apostó al costado de la ruta, a la espera de la reunión que mantendrían las entidades con el Gobierno Nacional.

En la provincia de Córdoba, los productores alineados a las cuatro entidades rurales intentaban contener la decisión de los autoconvocados de continuar con los cortes de ruta.

En tanto que en la provincia de La Pampa se declaró la emergencia agropecuaria como consecuencia de la sequía, los bajos precios de la hacienda y las heladas que golpeaban a los productores de la región.

Lunes 5 de mayo

El Gobierno no habilitó en su totalidad las exportaciones de carne y cedió a la ONCCA la potestad de regular las operaciones, pese a las promesas que había realizado el Jefe de Gabinete. El Secretario de la CRA criticó al respecto el sistema de Registros de Operaciones de Exportación (ROE) porque dificultaba las exportaciones de carne.

En un acto en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández reconoció que si bien estaban dadas "las condiciones macroeconómicas" para que no se generara inflación, se observaba una suba de precios debido al "lock-out patronal del mes pasado y a la puja distributiva" entre los distintos sectores. A su vez, el Ministro de Economía informó que la recaudación impositiva aumentó un 52,4 % en abril sobre el mismo mes del año pasado y que los derechos de exportación subieron un 106,7 % debido al incremento de alícuotas y precios.

En las provincias de Salta y Formosa se realizaron movilizaciones de productores mientras que en la provincia de Santa Fe se cortaron rutas en varias ciudades.

Martes 6 de mayo

Luego de la reunión que mantuvieron las entidades agrarias y el Gobierno Nacional, las primeras declaraciones reavivaron el conflicto. Eduardo Buzzi declaró: "el Gobierno admite que las retenciones son un problema que están dispuestos a modificar". A lo que Alberto Fernández respondió: "No sé en qué reunión estuvo Buzzi. Las retenciones son una decisión del Gobierno, no se planteó que sean un problema". Aún así, el Jefe de Gabinete y los titulares de la ME lograron acercar posiciones con respecto a las demandas de reapertura de exportaciones de carne y trigo, compensaciones a pequeños productores, retribución a tamberos y refinanciación de deudas hipotecarias. En cambio, otras cuestiones, tales como la readecuación del régimen de retenciones, las desgravaciones a la inversión ganadera y los créditos subsidiados para pasturas o ampliación de planteles vacunos, fueron planteados como temas de una mesa de negociación permanente. En relación a las retenciones, la propuesta de la ME fue llevar la devolución del impuesto a las exportaciones a quince puntos para los productores de menos de 6 mil toneladas en la campaña (de soja o girasol), a diez puntos para los ubicados en el rango de seiscientas a mil quinientas toneladas y a cinco puntos para los productores de entre mil quinientas y 3 mil toneladas.

El Gobierno le presentó a los ruralistas un documento con una serie de objetivos para planificar a mediano y largo plazo la actividad agropecuaria. En concreto, se planteó la necesidad de armonizar las exportaciones con el consumo interno; lograr un desarrollo territorial equilibrado, sostenible y con inclusión social; promover el avance de las cadenas de valor,

mejorando la competitividad sectorial y por último, se formuló la idea de avanzar sobre la formalización tributaria y laboral del sector, mejorando las condiciones de los trabajadores rurales. El plan agropecuario que empezó a esbozar el Gobierno incluía también: incentivos para la carne vacuna y porcina, el sector lácteo, cereal y oleaginoso, arroz, tabaco, algodón, forestación, olivo, yerba, apicultura, frutas, hortalizas y orgánicos.

Por otra parte, el Gobierno estableció una nueva normativa para la exportación de carne. Los exportadores deberían constituir una suerte de encaje de carne, a partir del cual tendrían un saldo exportable para vender cortes vacunos al exterior. Los cuatro conceptos que incorporó la ONCCA para el control operativo fueron: capacidad de almacenamiento de la producción, stock de producción, encaje productivo exportador y remanente exportable.

Los diputados y senadores del bloque justicialista de la región centro del país presentaron un documento a la Presidenta y a las entidades agrarias, instando al diálogo entre ambos y manifestando su "apoyo al modelo productivo con movilidad social ascendente que ha venido impulsando el Gobierno nacional peronista".

En la provincia de Entre Ríos, se realizó una asamblea que contó con la presencia de intendentes y funcionarios de varias localidades. Al igual que en Victoria y Gualeguaychú, los ruralistas decidieron volver a manifestarse al día siguiente en el acceso al Túnel Uranga Sylvestre Begnis, a la espera de las repercusiones de la reunión.

La vuelta a las rutas

Miércoles 7 de mayo

Sin acuerdo con el Gobierno, por la decisión de no modificar el régimen sobre las retenciones móviles, los productores volvieron a apostarse en las banquinas de las rutas.

El Gobierno caracterizó al paro como un nuevo "lock-out de los empresarios del campo" y decidió no reanudar el diálogo hasta que se levantara la protesta. En dicho sentido, un funcionario declaró que "hay predisposición a seguir hablando para terminar este conflicto, pero no por la vía del apriete". También afirmó: "con las retenciones móviles las dos cuestiones que ellos objetaban básicamente eran la situación de los pequeños

productores y los mercados de futuro. El primero ya lo arreglamos y el segundo propusimos analizarlo".

La consigna de los ruralistas fue: no a la comercialización de granos con destino a la exportación, realización de asambleas en distintos puntos del país, pedidos de audiencia a gobernadores, legisladores e intendentes y la invitación a usar los símbolos patrios.

Este segundo paro contó además, con el apoyo en la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC), entidad que agrupaba mayormente a dueños de camiones cerealeros.

En el interior del país los cortes retomaron su protagonismo. En Entre Ríos, los productores agropecuarios decidieron apoyar el paro agrario y detener a todos los camiones con carga cerealera, incluyendo al transporte internacional. Lo mismo sucedió en la provincia de La Pampa, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Córdoba y Santa Fe. En las dos últimas provincias hubo fuertes críticas a la dirigencia.

La oposición cuestionó en bloque el fracaso de las negociaciones con las entidades rurales y culpó al Gobierno. En primera fila, Elisa Carrió sostuvo que "el llamado al diálogo fue una burla y una trampa". En tanto, Francisco De Narváez remarcó que "los problemas no se resuelven desde la soberbia y los gritos. El campo quiere vivir y producir en paz". Por su parte, Patricia Bullrich observó que "una estrategia del Gobierno de generar una situación de desgaste y llevar una negociación a la nada. La idea es volver al discurso del ataque al gobierno popular".

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Federico Pinedo, aseguró que "el Gobierno boicoteó la negociación, porque dio señales de que no iba a cumplir con la apertura de las exportaciones de carnes. Por un capricho político, van a generar más inflación, más paro y desocupación en las industrias vinculadas con la producción agropecuaria". El titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó la presencia de la Gendarmería en las rutas diciendo que "la militarización del conflicto sólo agregaría más leña al fuego".

Desde el socialismo, por su parte, el senador Rubén Giustiniani destacó que "el Gobierno lamentablemente eligió el peor camino, que es la confrontación". En igual sentido se pronunció el diputado Eduardo Macaluse: "La negociación cae porque hay una estrategia de dilación para fracturar el frente. Pero si fueran inteligentes, separarían al pequeño productor, otorgándoles compensaciones. Las que están son insuficientes". Por su parte, el legislador Claudio Lozano, afirmó "objetivamente, lo que

el Gobierno hizo es tratar de arreglar con los grandes exportadores y no les dio respuesta a los pequeños productores".

En otro orden de cosas, representantes de las cuatro entidades agrarias llegaron a un principio de acuerdo con la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, para garantizar que no hubiera remates de propiedades contra deudores rurales de esa entidad financiera. Además, la Presidenta de la institución respaldó la propuesta de la FAA con respecto a la búsqueda de un acuerdo con los gobiernos provinciales para que estos resuelvan la deuda con el Banco y pasen a ser los acreedores frente a los propietarios endeudados.

Jueves 8 de mayo

La presidenta Cristina Fernández afirmó que más allá de los beneficios que les dieron a los ruralistas, éstos buscaron una excusa para llevar adelante el paro debido a que su decisión fue absolutamente política. Funcionarios del Gobierno ratificaron que no habría diálogo con las entidades agrarias hasta que éstas no levantasen la medida de fuerza. Por su parte, la Presidenta dijo en relación al paro que "el compromiso con este país profundo, desigual, asimétrico con el que todavía tenemos varias deudas, es inquebrantable e indisoluble". En ese mismo tono, en la inauguración de una escuela, afirmó: "no voy a defeccionar en esta lucha, que no es la mía, es la de todos los argentinos por un país mejor".

Acompañados por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dirigentes del FNC estuvieron reunidos con el Jefe de Gabinete y con el Secretario de la SAGPyA. Acordaron la apertura de espacios de discusión técnica y aclararon que no son kirchneristas. Ellos se presentaron como "el otro campo", el campo de los productores, campesinos y aborígenes pobres.

Por otra lado, frente a las nuevas protestas agrarias, el Gobierno Nacional envió más de mil efectivos de Gendarmería a los puntos más relevantes donde los productores agropecuarios iniciaron sus acciones de protesta.

En todo el país se registraron alrededor de doscientos cortes de rutas sin incidentes. En la ciudad de Mar del Plata, se realizó un tractorazo de doce cuadras de distancias, conformado por catorce sociedades rurales del sudeste de la provincia. En la localidad de Tres Arroyos, los productores agrarios volvieron al paro con presencia masiva y corte total de la ruta. Se estimó a su vez, que crecería la presencia de productores en las rutas,

llegando a conformar cuarenta asambleas y numerosas concentraciones en las localidades de Junín, Azul, Coronel Dorrego, 25 de Mayo, Balcarce, Coronel Pringles y Chacabuco.

En la provincia de Córdoba, aunque los máximos dirigentes ruralistas pidieron evitar el corte de rutas, en Jesús María y Sinsacate hubo cortes que sorprendieron hasta a los propios productores, cuando los transportistas de granos decidieron endurecer las medidas y bloquearon la Ruta Nacional N° 9 a la altura de esas ciudades. Por su parte, los productores pampeanos desplegaron varios frentes en el primer día del paro. Le pidieron una audiencia al gobernador Oscar Mario Jorge para exigirle que se pusiera al frente del reclamo del sector. Además, se reunieron con los intendentes peronistas que expresaron su respaldo (unos cuarenta intendentes del PJ pampeano anunciaron que se sumarían a las manifestaciones). Asimismo, los productores, agremiados y autoconvocados, se instalaron en la Ruta Nacional N° 5 frente a un frigorífico de exportación. En Santa Fe, los productores volvieron masivamente a las rutas en más de catorce localidades.

Desde Gualeguaychú, Alfredo de Angeli aseguró que la hacienda no pasaría diciendo que "no queremos desabastecer, pero vamos a dejar morir las vacas en los campos antes de regalarlas". De esta manera, la asamblea de productores agropecuarios de dicha localidad ratificó el corte total para los camiones de tránsito internacional, sumado al de los cereales y granos de origen local. Por otro lado, la asamblea del Túnel Subfluvial, que une las ciudades de Paraná y Santa Fe, decidió cortar totalmente el tránsito de cereales, granos y hacienda en pie.

La dirigencia del campo dejó trascender su preocupación por los cortes, ya que no estaban previstos en los anuncios que habían realizado. En su mayoría, se lo atribuyeron al malestar de "las bases".

En relación con el conflicto, se difundió un documento firmado por unos cincuenta legisladores peronistas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en el que se expresaba el apoyo a las entidades agrarias. Los ideólogos del documento fueron el gobernador cordobés, Juan Schiaretti y el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti y fue apoyado por el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner y el ex mandatario de esa provincia, Carlos Reutemann. A colación, Eduardo Duhalde, dijo que el campo tendría razón en la disputa que mantiene con el Gobierno.

Viernes 9 de mayo

A la vez que el Gobierno se mantenía en la postura de invitar al diálogo siempre y cuando se levantara la medida de fuerza impulsada por las entidades agropecuarias, el Ministro del Interior aclaró que "lo importante es transmitir tranquilidad a la sociedad" y se mostró "optimista en que se llegue a un acuerdo".

Mientras tanto la ME organizó un acto en la localidad de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, en el cual el Presidente de la SRA exclamó: "vamos a federalizar la protesta hablando con intendentes y gobernadores porque las provincias son las más perjudicadas por la entrega de la riqueza al poder central". Por su parte, Buzzi, en alusión al ex presidente Néstor Kirchner, sostuvo: "tenemos que seguir protestando porque hay un señor que dice que nos quiere poner de rodillas, pero no somos súbditos". Igualmente crítico, el Presidente de la CRA, instó a los funcionarios a que recorrieran el país para que conozcan los verdaderos problemas, "esto no es una lucha de poder, queremos soluciones". A su turno, el Presidente de la CONINAGRO, advirtió que "todos los productos tienen que tener rentabilidad, no sólo la soja".

En el resto de las provincias, unas trescientas asambleas se mantenían al costado de la ruta. En la provincia de Salta, productores autoconvocados de los departamentos de Orán, San Martín y Anta se movilizaron hacia la Ruta Nacional N° 34. Además, hubo otras dos concentraciones en esta provincia, una en Las Lajitas y otra en Rosario de La Frontera.

En la provincia de La Pampa, el gobernador Oscar Mario Jorge junto a ochenta intendentes y algunos presidentes de comisiones de fomento, elaboraron un documento en el que llamaron al "diálogo y la negociación" y dijeron estar "preocupados" por el conflicto y las consecuencias inflacionarias del mismo. También hubo manifestaciones en las rutas cercanas a las localidades de Santa Rosa, Catriló, Arata y Ataliva Roca, donde se entregaron folletos explicativos a los automovilistas y no se permitió circular camiones cargados con cereales para la exportación.

Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, los productores agropecuarios del sur bonaerense impidieron el paso de camiones cargados con cereales y repartieron volantes donde explicaban los motivos de la protesta. Los ruralistas se acercaron a las intendencias de Bahía Blanca y Coronel Pringles, con el objetivo de comprometer a los jefes comunales para que se sumaran a los reclamos, y a su vez reclamaron la interven-

ción activa del gobernador Daniel Scioli en el conflicto, amenazando con movilizarse para forzar una definición del mandatario.

Los productores santafesinos impidieron el paso de los camiones con carga de granos desde Puerto General San Martín hasta Villa Constitución. También se mantuvieron los cortes de ruta en nueve ciudades y se organizaron movilizaciones al costado de la ruta en Chabás, Pujato, Arequito y Rufino. Por su parte el PJ santafesino se distanció de la posición adoptada por el Gobierno Nacional y dio a conocer un documento apoyando a las entidades agropecuarias. El texto contó con la participación de gran parte de los intendentes y presidentes comunales peronistas, especialmente aquellos alineados con el ex gobernador Carlos Reutemann.

En tanto, en la provincia de Formosa, se mantuvo firme la presencia de unos ciento cincuenta productores con herramientas, maquinarias y tractores en la cabecera del Puente Libertad que une El Colorado, Formosa, con General San Martín, Chaco. Los únicos que no podían pasar eran los camiones que transportaban granos.

En la localidad de Gualeguaychú, los productores apostados sobre la Ruta Nacional N° 14 decidieron intensificar la protesta impidiendo el paso de los camiones con carga granaria y afectando al comercio internacional. Por su parte, el Secretario de Producción de la provincia estuvo presente en la asamblea de productores en el Túnel Subfluvial. Allí expresó su apoyo al reclamo de los productores y le pidió al Gobierno Nacional que abriera "el diálogo y le asegurara rentabilidad a la gente del campo". De modo similar, la Federación del Citrus de Entre Ríos, manifestó su apoyo a la "protesta del campo", pero no compartió la medida de cortar los pasos sólo para algunos productos. Por otra parte, ante el temor por el desabastecimiento de comida, en la mayor parte de los cortes sólo repartían folletos y no se detenían a los camiones de alimentos.

La oposición, también se posicionó frente al reclamo agrario. Elisa Carrió dialogó con chacareros en Tres Arroyos y anticipó que asistiría "como una ciudadana más" a la protesta que el sector rural realizaría el 25 de mayo en Rosario. Igualmente, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que no puede entender por qué no hay arreglo entre el Gobierno y el campo; la dirigencia de la UCR, por su parte, formuló un comunicado de respaldo a los productores.

Sábado 10 de mayo

El presidente de la ONCCA y ex titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, aseguró que "sólo se presentaron 120" de los 62 mil pequeños productores a los que el Gobierno les ofreció compensaciones para mejorar la rentabilidad afectada por el sistema de retenciones móviles. Adjudicó esta situación a que los productores "no conocen" la existencia de esta normativa "o no la quieren conocer".

El conflicto también desató una interna al interior del PJ, gobernadores, intendentes y legisladores de las provincias emitieron sus opiniones respecto del conflicto. En Santa Fe, el senador y ex gobernador Carlos Reutemann enfatizó que "este gobierno no tiene feeling con el campo". Del mismo modo, en Córdoba, seis legisladores nacionales se alinearon con el gobernador Juan Schiaretti y apoyaron la política de la administración cordobesa hacia el agro. En Entre Ríos los reclamos se combinaron con la fuerte disputa interna que enfrentaban a Jorge Busti, jefe del PJ local y distanciado del Gobierno, con el gobernador Sergio Urribarri. Por su parte, la senadora bonaerense Hilda González de Duhalde acusó a los intendentes, gobernadores y legisladores de todos los partidos de "tener una actitud absolutamente cobarde frente al Gobierno nacional".

En las provincias el paro siguió convocando manifestantes. En la localidad de Gualeguaychú, el titular de FAA encabezó un tractorazo de casi diez kilómetros de maquinarias rurales y camionetas, que congregó a más de ocho mil personas. Buena parte de la población salió a las calles a saludar a quienes desfilaban, en tanto que se agitaban cientos de banderas argentinas y entrerrianas.

En Santa Fe, los productores del departamento de Castellanos, en el cruce entre las rutas nacionales N° 34 y N° 19, liberaron el paso de camiones durante la noche, pero lo restringieron nuevamente por la mañana. Hubo también un tractorazo en Sunchales y por las localidades de la zona. Además, se realizaron movilizaciones en Gálvez, Emilia, Videla y Gobernador Crespo. Mientras tanto, en Las Amintas, Villa Ocampo y Malabrigo los autoconvocados decidieron realizar cortes totales de ruta durante una hora, intensificando la protesta.

En la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, se realizó un tractorazo por las calles de la ciudad con una caravana de casi ocho kilómetros de vehículos, entre los que se contaban tractores, camiones y maquinaria agrícola. Los productores mantuvieron vigilia en el acceso a la ciudad y

aplicaron cortes totales de media hora en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del cruce con la Ruta Nacional N° 60. Asimismo, hubo otro importante tractorazo en Tandil con vehículos que ingresaron en el centro de la ciudad. En Córdoba, una de las principales manifestaciones se dio en la localidad de San Francisco. Los ruralistas que protestaban en la misma Ruta Nacional N° 9, a la altura de Oliva y Oncativo, se desplazaron por esa vía con sus vehículos hasta James Craick, ingresando en los pueblos vecinos para exteriorizar su reclamo. En la provincia de La Pampa, mientras esperaban reunirse con el gobernador Oscar Mario Jorge, los productores se manifestaron en las localidades de Realicó, General Acha, Lonquimay, Macachín, Santa Rosa y Eduardo Castex. En tanto, en la provincia de Salta, se mantuvieron concentraciones en Las Lajitas, en el cruce de las rutas provinciales N° 5 y N° 30, donde hacían dos cortes de una hora cada uno por la mañana y por la tarde. Del mismo modo, en el cruce de las rutas nacionales N° 9 y N° 34, a la altura de Rosario de la Frontera, se entregaron volantes, mientras que en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Embarcación, se hizo retornar a tres camiones con soja.

Domingo 11 de mayo

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que las retenciones debían reducirse y reclamó a las dos partes que "cedan en algo" para reencauzar las negociaciones. De igual modo, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, difundió una carta abierta a la presidenta Cristina Fernández, en la que solicitó "dejar de lado posiciones ideológicas o intentos de ganar la partida" respecto al conflicto con el campo.

En la localidad santafecina de Santa Teresa se realizó un tractorazo y una "mateada" de productores. Al final del recorrido por distintas comunidades del interior, ante más de 3 mil productores, Buzzi alertó que si no había señales claras desde el Gobierno para discutir una política agropecuaria general, en la que estuviera incluido el tema de las retenciones móviles, continuaría el paro. Por otra parte, el diputado Rossi denunció que un grupo de personas encabezadas por el Presidente y Vicepresidente de la SRA de Rosario se trasladaron en vehículos hasta su casa, en Fisherton, donde lo insultaron y le solicitaron su renuncia. En la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, productores autoconvocados instalaron una carpa frente a la Casa de Gobierno y repartieron "una carta abierta a los argentinos", donde difundieron su disconformidad con los

resultados de las negociaciones realizadas con el Gobierno Nacional. En la provincia de San Luis, una extensa caravana de tractores y camionetas interrumpió el tránsito a lo largo de seis kilómetros de la Ruta Nacional N° 7.

En la provincia de Entre Ríos se produjeron varias protestas. En el acceso al Túnel Subfluvial se realizó una "mateada" en la cual, según los organizadores, hubo 5 mil personas. En asamblea los productores resolvieron por unanimidad no dejar pasar los camiones internacionales al día siguiente por veinticuatro horas. En la localidad de Gualeguaychú hubo malestar por la llegada del titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, quien reclamó el fin del bloqueo en medio de insultos. A su vez, los ruralistas realizaron un cacerolazo en la Ruta Nacional N° 14 y luego se concentraron frente a la Municipalidad, donde una caravana de automóviles recorrió la zona céntrica de la ciudad. En Paraná, alrededor de doscientas personas se manifestaron en la Plaza 1° de Mayo frente a la Catedral.

También, por la noche, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron cacerolazos en algunas esquinas de Barrio Norte, Palermo, Belgrano y Caballito, contra la política oficial. El cacerolazo más concurrido fue el de Santa Fe y Callao, donde la presencia de unas cuatrocientas personas obligó a la Policía a cortar el tránsito. Allí se vieron pancartas y remeras no sólo en apoyo del campo sino también contra "la mentira" de los números oficiales sobre la inflación, según rezaban las inscripciones. Por su parte, las organizaciones sociales afines al kirchnerismo anunciaron que se encontraban en "estado de alerta y movilización" para salir en apoyo del Gobierno en caso de nuevas protestas. El conflicto empezó a afectar económicamente a algunas zonas. En la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, las ventas disminuyeron un 30 % y en algunos rubros 70 %. Los más perjudicados fueron los rubros directamente ligados al campo, como los vendedores de maquinarias agrícolas, que suspendieron las horas extras de sus empleados y rogaban que el temporal pasara rápido para no reducir personal.

Lunes 12 de mayo

En el acceso al Túnel Subfluvial de la provincia de Entre Ríos los camioneros pertenecientes a la Federación del transporte de Cargas (FETAC), realizaron un corte total de la ruta en protesta al paro agropecuario. El sector consideraba justo el reclamo de los ruralistas pero no compartía su

metodología. Desde allí mismo una columna de productores agropecuarios se dirigió al domicilio del gobernador Urribarri, donde se iba a reunir con integrantes del PJ. De modo similar, en la localidad de Viale, frente a la casa del intendente Sergio Schmunk, ruralistas realizaron un cacerolazo reclamándole que se definiera frente al conflicto.

En Pergamino, provincia de Buenos Aires, durante un acto masivo de productores agropecuarios, Jorge Solmi, dirigente de la FAA, le entregó simbólicamente un par de rodilleras al intendente Héctor María Gutiérrez y le aclaró: "Le pedimos que no las use. No lo queremos de rodillas. Lo queremos de pie, al frente de esta gesta".

La protesta también se volvió a sentir en la Ciudad de Buenos Aires cuando un grupo de personas en Barrio Norte, realizaron un cacerolazo en apoyo al campo y en contra de las retenciones. Los manifestantes, convocados a través de correos electrónicos y mensajes por teléfonos celulares, cortaron entre las 20:15 y las 21:15hs el tránsito en la esquina de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio.

En la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Armstrong, el titular de la FAA se reunió con legisladores, intendentes y presidentes comunales del sur santafecino. En dicha reunión, Buzzi garantizó el abastecimiento de alimentos para el consumo interno y denunció que su madre había recibido una amenaza telefónica por parte de una persona que se presentó como camionero. Por otro lado, en la localidad de Arequito, el corte de ruta produjo la ira de un camionero que al no poder trabajar, embistió contra los productores rurales.

Presionados por el sector agrario y por las crecientes medidas de fuerza producidas en el interior del país, gobernadores de diversas provincias se reunieron con la dirigencia ruralista y reclamaron un mayor diálogo entre el Gobierno y el sector agropecuario. Algunos de los gobernadores, como el cordobés Juan Schiaretti y el entrerriano Sergio Urribarri, pidieron modificaciones en el esquema de retenciones. En la provincia de Chaco, el gobernador Jorge Capitanich admitió que "no somos mediadores, pero podemos cooperar". Asimismo, en la provincia de Salta, el vicegobernador Andrés Zottos recibió a los ruralistas locales y les pidió que defendieran las economías regionales.

El Gobierno bonaerense, por su parte, recibió a los representantes del campo pero en el encuentro no estuvo el gobernador Daniel Scioli, como se había anunciado. Scioli dijo al respecto que no asistió a la reunión con la CARBAP, porque se le quería dar un tono político al encuentro. Esgrimió

al respecto que "quisieron generar divisiones, y eso estaba lejos de mi ánimo y de mi esencia, así que preferí que fueran Alberto Pérez y Débora Giorgi, que podían tratar mejor la parte técnica". Al enterarse de que el Gobernador no participaría del encuentro, el presidente de la CARBAP, Pedro Apaolaza, tampoco asistió.

Con el fin de asegurar el abastecimiento de la carne en medio del paro agropecuario, el Gobierno decidió, a través del Secretario de Comercio Interior, regular las compras a los *feed lots.* Al respecto, un comprador de un frigorífico comentó que había recibido de Guillermo Moreno una lista de productores y establecimientos de engorde de corral, los cuales garantizaban "la provisión de carne, a pesar de la protesta y el cese de la comercialización de carnes dispuesto por las entidades".

Martes 13 de mayo

La asamblea de productores del Túnel Subfluvial, en la provincia de Entre Ríos, decidió cortar el paso a camiones internacionales y no dejar pasar a los camiones del Grupo Motta[13]. Por su parte, los comerciantes autoconvocados de Cerrito y el Centro Regional Empresario Cerrito Entre Ríos, reunidos en asamblea resolvieron adherir a la solicitud de la Asamblea de Productores Agropecuarios del Túnel Subfluvial. Además, se registró una manifestación en San Salvador, que recorrió la ciudad y finalizó con un acto frente a la Sede Municipal. De igual manera, se realizó un importante tractorazo en la localidad de Larroque. En la localidad de Gualeguaychú, todos los camiones fueron detenidos por varias horas en el bloqueo de la Ruta Nacional N° 14, sin importar su carga ni nacionalidad. El corte fue realizado por transportistas pertenecientes a la FETAC que se manifestaron en apoyo al reclamo agropecuario y en contra del Gobierno.

Mientras tanto en la provincia de Buenos Aires, una caravana de más de siete kilómetros de distancia, conformada por tractores, camiones, camionetas y maquinaria agrícola recorrió las calles de la localidad de Tres Arroyos. Del mismo modo, en Coronel Suárez, marcharon tractores, camiones y camionetas, reuniendo alrededor de tres mil vecinos, productores y dirigentes agropecuarios locales y de las localidades vecinas de Huan-

13 Es un grupo empresario de referencia en el sector avícola, compuesto por Cabaña Avícola Feller, planta de recepción de cereales, planta de alimentos balanceados, plantas de incubación, granjas de recría, planta procesadora de aves; Complejo Alimentario SA (CALISA) y la planta Asado, destinada a la elaboración de productos cocidos listos para ser consumidos. Tanto las plantas como las áreas industriales se encuentran ubicadas en los departamentos Diamante, Nogoyá y Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

guelén y Guaminí. Por su parte, los comerciantes adhirieron a la protesta con el cierre de sus locales. En la localidad de Pigüé, los productores mantuvieron por segundo día consecutivo la modalidad de cortar durante tres horas la Ruta Nacional N° 33. En Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Villa Iris, Médanos, Villalonga y Stroeder los productores agropecuarios continuaron entregando volantes explicativos a los automovilistas, sin cortar el tránsito.

En la provincia de Córdoba, en las localidades de Sinsacate y Jesús María, los ruralistas realizaron cortes sorpresivos sobre la Ruta Nacional N° 9, impidiendo la circulación de transportes de carga pero dejando caminos alternativos para el resto de los vehículos. También en la localidad de Bell Ville, los productores agropecuarios mantuvieron el bloqueo a camiones cargados con granos, aceites y ganado en pie. En el resto de los puestos en las rutas, entre ellos en San Francisco, continuaron entregando volantes sin interrumpir el tránsito. En la provincia de La Pampa prosiguieron las manifestaciones de productores en Santa Rosa, Ataliva Roca, Catriló, Realicó, Macachín y Trenel.

En la provincia de Salta, los productores autoconvocados mantuvieron las concentraciones en los cruces de las rutas nacionales N° 9 y N° 34, en Rosario de la Frontera; en las rutas provinciales N° 5 y N° 30, en Las Lajitas y en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Embarcación.

Ante el aumento de los cortes, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat presentó una denuncia penal en los tribunales contra los dirigentes agrarios, acusándolos de entorpecer el normal abastecimiento de alimentos, generando un aumento de precios de los mismos. En una reunión con el gobernador Daniel Scioli, los jefes comunales del noroeste, sur y este de la provincia de Buenos Aires, plantearon su preocupación por la falta de acuerdo en el conflicto con el campo. El intendente de Balcarce, José Luis Pérez, le pidió al Gobierno que "levante por 90 días el aumento de las retenciones y se siente a dialogar con el sector agropecuario". Igualmente, ante la suspensión de una audiencia entre las entidades agrarias y el Gobernador de La Pampa, se produjeron incidentes contra algunos funcionarios.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández, en un anuncio sobre obras a realizar en la provincia de Córdoba, deslizó nuevas críticas a las entidades agrarias, que fueron respaldadas rápidamente por D'Elía en una conferencia de prensa que dio junto a otros dirigentes de organizaciones sociales.

Por otro lado, intelectuales vinculados con la cultura, la educación, las artes, el periodismo y las ciencias, hicieron público su apoyo al Gobierno a través de una carta abierta, que contó con la firma de setecientas cincuentas figuras públicas. El documento caracterizaba la situación como una confrontación entre "sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía". Fue el surgimiento de Carta Abierta.

Al mismo tiempo, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto de ley que crearía el ENPYCCAA, impulsado por el kirchnerista y titular de la Comisión, Alberto Cantero. Los Legisladores del PRO y la UCR se retiraron de la sesión por considerar que el Ente no resolvería los problemas planteados.

Paralelamente, los dirigentes de la ME se reunieron en el Congreso con todo el arco opositor. En sintonía con los legisladores de la CC, la UCR, el PS, el PRO, los peronistas Adolfo Rodríguez Saá, Hilda "Chiche" Duhalde y el lavagnista Jorge Sarghini, propusieron la derogación de la Resolución N° 125/08.

El Poder Ejecutivo, a través de un decreto, dispuso que cuando se produjeran incrementos en los derechos de exportación (retenciones) de productos agrícolas, para poder exportar con la alícuota anterior al aumento, los exportadores deberían acreditar la tenencia o la adquisición de dichos productos, con anterioridad al aumento de la alícuota[14].

Miércoles 14 de mayo

La presidenta Cristina Fernández cerró el acto en el que Néstor Kirchner asumió la conducción del PJ, pidiendo a todos los argentinos "debatir y discutir en un marco democrático para profundizar la transformación y el crecimiento", en referencia al conflicto agrario. Algunos senadores santafecinos y el ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, acordaron en Buenos Aires, junto a cincuenta intendentes y legisladores de veinticinco localidades bonaerenses, pedirle al Gobierno que derogue la resolución de las retenciones móviles. El texto también le pedía al sector agropecuario

14 Esta disposición se debió a que cada vez que se subieron las retenciones a los granos (las dos últimas, en noviembre de 2007 y en marzo 2008), las grandes cerealeras, ya sea por el uso de su posición dominante o el manejo de información privilegiada, lo que hicieron fue inscribir, antes del cambio, grandes volúmenes de ventas externas, con lo cual quedaban registradas para pagar a la tasa más baja, aunque la operación se embarcara meses después.

que levantara las protestas como condición para regresar las negociaciones.

Por su parte, los ruralistas calificaron como conciliador el discurso de la Presidenta. Por tal motivo, Carlos Garetto, vicepresidente de CONINAGRO, y Luciano Miguens sostuvieron que "el campo está siempre dispuesto a apoyar al país". No obstante, el Presidente de la SRA , comentó que el tema de las retenciones móviles seguía irresuelto y que necesitarían una señal más firme de parte del Gobierno. En Gualeguaychú, luego de escuchar las palabras de la Presidenta, interpretaron que el discurso significó un llamado al diálogo. Sin embargo, dirigentes de otras asambleas indicaron que, más allá de las palabras moderadas de Cristina Fernández, "los productores no le creen y continuarán con las medidas de fuerza". En otro orden de cosas, Luciano Miguens fue insultado y silbado a la salida de la sede de la SRA en la calle Florida, por manifestantes pertenecientes al FB 19 de diciembre, mientras cantaban "me siento bien, me siento bien, con las retenciones me siento bien". En el Senado se levantó la sesión que pretendía votar el repudio a las amenazas sufridas por la madre de Eduardo Buzzi y una condena a las agresiones que recibió Agustín Rossi.

En la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, alrededor de mil quinientos productores participaron de una manifestación con tractores. Llegaron a la sede del Gobierno Municipal y allí le entregaron al intendente un petitorio en el que solicitaron su apoyo al reclamo del campo. Por otra parte, en el acceso al Túnel Subfluvial se interrumpió la circulación a camiones que transportaban granos, pero se permitió el paso del ganado en pie. En Chajarí, en cambio, en la Ruta Nacional N° 14 km 270, los camioneros brasileños y los vehículos argentinos con carga internacional, eran detenidos por doce horas. En la localidad de Urdinarrain, por su parte, el Consejo Deliberante a través de la Resolución N° 006, exhortó a las autoridades nacionales y a los gobernadores a "trabajar en conjunto para lograr definitivamente una solución justa y equitativa al grave conflicto planteado".

En la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe, se realizó un acto entre la Ruta Nacional N° 8 y la Ruta Nacional N° 33, con 2 mil productores que se movilizaron con maquinaria agrícola sin interrumpir la circulación del tránsito. El comercio también adhirió a la movilización mientras que un grupo de avionetas, que se suelen usar para fumigación del glifosato, pasó en vuelo rasante en reclamo junto a los productores. Del mismo modo, en San José de Esquina, los productores autoconvocados realizaron un

tractorazo, al que se sumaron los comerciantes de la localidad. En la provincia de Córdoba, en la localidad de Monte Cristo, un grupo de docentes se acercaron a la concentración instalada sobre la Ruta Nacional N° 19, para participar del corte de ruta de los productores agropecuarios, en su caso, en reclamo de un aumento salarial de emergencia. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, alrededor de dos mil ruralistas en camionetas, camiones, caballos y maquinaria agrícola, realizaron un tractorazo por las calles de la ciudad que finalizó con un masivo acto frente a la Casa de Gobierno, en rechazo de la política agropecuaria del Gobierno. Según lo organizadores, la columna de manifestantes superó los veinte kilómetros de distancia.

Jueves 15 de mayo

En la provincia de Santa Fe, los integrantes de las entidades agropecuarias se reunieron con el gobernador Hermes Binner e informaron que continuarían con el paro pese a los anuncios presidenciales. A su vez, le enviaron una carta a la Presidenta para solicitar una audiencia y plantearon un temario de asuntos a discutir que iban desde las retenciones móviles a las exportaciones hasta los acuerdos que ya se habían firmado sobre el trigo, la carne y los lácteos.

Los representantes de la UIA se reunieron con referentes del campo, con la intención de convencer a los ruralistas de que moderaran su postura. Al respecto, los industriales les plantearon que no supieron manejar la crisis, acaso porque no contaban con la experiencia del roce continuo como ellos, que suelen pelearse periódicamente en paritarias.

En la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli se reunió con veintiséis intendentes opositores para pedirles que intercedieran ante los productores locales para favorecer las negociaciones con el Gobierno. Asimismo, en las localidades de Bragado, Junín y Balcarce hubo movilizaciones que confluyeron en la entrega de petitorios a las respectivas intendencias.

Se realizó en Paraná, provincia de Entre Ríos, la primera jornada de la XIX Reunión de delegados y directores de la SRA. En la misma, participaron doscientos cincuenta representantes y se manifestó el apoyo a las cuatro entidades que sostenían el reclamo contra las retenciones. Por su parte, en el acceso al Túnel Subfluvial, Alfredo de Angeli, anunció que los productores habían decidido continuar el paro con la misma modalidad

por tiempo indeterminado. Según los organizadores, calcularon que en el acto hubo quince mil personas.

En la ciudad de Villa María, Córdoba, se realizó uno de los tractorazos más importantes desde que comenzaron las protestas y movilizaciones agropecuarias. Allí, los ruralistas se dirigieron a la intendencia para repudiar la negativa del jefe municipal, Eduardo Acastello, de solidarizarse con los reclamos agropecuarios. En las provincias de La Rioja, San Luis y Mendoza también hubo movilizaciones y tractorazos en apoyo al campo.

Viernes 16 de mayo

Diversos representantes industriales, bancarios, comerciales y bursátiles, formularon en una solicitada, un llamado a "la reflexión de las organizaciones y el Gobierno Nacional". El documento destacaba la convocatoria realizada por la presidenta Cristina Fernández a las entidades agrarias para el acuerdo del Bicentenario. Por otro lado, el titular de CARITAS y obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, se promulgaron en favor de la reapertura del diálogo, advirtiendo que en el conflicto sobre las retenciones "el bien común debe primar por sobre los intereses particulares".

El Gobierno Nacional por su parte, elaboró dos avisos publicitarios sobre el conflicto por las retenciones. El primero precisaba que con las retenciones móviles los productores ganaban más que con las fijas, 271 dólares por tonelada de soja en un caso y 258 dólares en el otro. El segundo aviso embestía contra el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, y el dirigente de esa misma entidad, Alfredo de Angeli, a quienes mostraba en imágenes de archivo diciendo "vamos a dejar morir las vacas en el campo" (de Angeli) y "ya mostramos que se podía desabastecer" (Buzzi), mientras la voz de un locutor enumeraba los puntos que el Gobierno había acordado con el sector agropecuario. Ambos avisos cerraban con la consigna: "Los sectores más favorecidos deberían tener mayor responsabilidad".

Por otra parte, el Ministro de Economía intervino en el conflicto a través de funcionarios de su equipo que se reunieron con representantes del sector agropecuario, para conocer su propuesta y modificar el sistema de retenciones. El Gobierno sostuvo en la reunión, que el sistema de retenciones móviles ideado por el ex ministro Martín Lousteau, tenía el problema de impactar sobre los pequeños productores complicando los mercados de granos. Al respecto, Carlos Fernández dijo que modificaría las alícuotas y cambiaría la fórmula de cálculo para eliminar los precios máximos. Por su

parte, la dirigencia agropecuaria aceptaría la movilidad de las retenciones que, en caso de que se produjera un acuerdo, seguirían vinculadas a la evolución de los valores internacionales de los *commodities* agrícolas.

En Entre Ríos, la FETAC inició cortes de rutas impidiendo el paso de todo tipo de camiones, en protesta por las pérdidas que generaba el paro agropecuario. Los camioneros bloquearon el tránsito en el Túnel Subfluvial y en las localidades de Federal, Villaguay, Gualeguaychú, Chajarí y Concordia.

Por otra parte, la presidenta Ana Galmarini y la secretaria Ana María Riveiro, del MML, Santa Fe, manifestaron la autonomía del movimiento respecto de las entidades agrarias, pero dijeron que adherían a la protesta agropecuaria y eran parte activa del paro.

Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Chubut, les pidieron a las entidades agropecuarias que revieran su actitud de no levantar el paro. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, aseguró: "creo que la continuidad –de la medida – es un error, porque en vez de ayudarlos los va a terminar desfavoreciendo". Por su parte, el Gobernador de Santa Fe dijo que parecía "una competencia para ver cuál de las entidades tiene más poder". El Gobernador de Entre Ríos advirtió que los ruralistas estaban "llevando al país a una situación de máxima tensión", haciendo un erróneo análisis de la realidad mezclando cuestiones políticas cada vez más complejas. Asimismo, el Gobernador de Tucumán reclamó que levantaran "la medida de fuerza y retomen el camino de la negociación con el gobierno nacional". En la misma línea, el mandatario bonaerense Daniel Scioli pidió el fin del paro que estaba "perjudicando al conjunto de la sociedad Argentina".

Sábado 17 de mayo

En la localidad de Gualeguaychú, sobre la Ruta Nacional N° 14, se realizó una protesta desde las 13:00 hasta las 15:00hs en la que circularon durante cinco kilómetros alrededor de cien tractores por la doble vía. Para los productores agropecuarios esta modalidad de protesta fue de por sí una tregua.

Los principales funcionarios del Gobierno Nacional expresaron su preocupación por las repercusiones que podría tener la marcha federal convocada para el 25 de mayo. Por tal motivo, el Gobierno comenzó a conversar con dirigentes intermedios del campo para formar una corriente de opinión

dentro del ruralismo favorable a detener la medida de fuerza. Opinaban que CONINAGRO y la SRA eran proclives a alcanzar un acuerdo, mientras que la FAA y la CRA tenían objetivos políticos distintos.

El Gobierno les ordenó moderación a los dirigentes sociales Luis D´Elía y Edgardo Depetri. Ambos anunciaron que no cortarían rutas sino que realizarían una jornada de debate, explicando su posición sobre las retenciones en las plazas, las escuelas y las rutas. No así, la agrupación Barrios de Pie, que anunció que cortaría rutas y puentes en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y algunas ciudades de otras provincias para mostrar su oposición al reclamo de los sectores agropecuarios.

En la Biblioteca Nacional, se volvieron a reunir los intelectuales que habían publicado la "Carta Abierta" en defensa del Gobierno. Al encuentro asistieron alrededor de doscientas personas y se realizaron debates sobre cómo debían continuar con el desarrollo del espacio, sin ser nombrados como "kirchneristas".

En otro orden de cosas, el Secretario de Comercio aludió a la posibilidad de solicitar a la Justicia el arresto por cuarenta y ocho horas de alguno de los dirigentes rurales, en base a la Ley de Abastecimiento N° 20.680. El Gobernador de Santa Fe, luego de plantearle a las entidades agrarias en una reunión, que levantaran las protesta, se comunicó con Eduardo Buzzi y le dijo que "si quieren hacer el acto el 25 en Rosario no me voy a oponer porque el Monumento a la Bandera es de todos y están en su derecho. Pero que quede claro que el gobierno de Santa Fe ni avala ni tiene nada que ver con ese acto. Y si alguno de ustedes dice o insinúa lo contrario lo voy a salir a desmentir". Por otro lado, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, ordenó a la Gendarmería que liberara los caminos en caso de que se produjeran cortes de rutas.

En la provincia de La Pampa, ruralistas bloquearon el paso al gobernador Oscar Mario Jorge, durante 45 minutos en el aeropuerto, para pedirle que explicara su posición respecto al conflicto. A su vez, en la provincia de Córdoba, los productores de la Sociedad Rural de Río Cuarto protestaron frente al domicilio particular del diputado del FPV, Alberto Cantero.

Domingo 18 de mayo

En la quinta presidencial de Olivos, el matrimonio Kirchner y el Jefe de Gabinete, analizaron los pasos a seguir en caso de que el sector agropecuario levantara la protesta. Como una manera de acercar posiciones, el

Gobierno estaba dispuesto a ponerle un tope a la alícuota del 50 % y recordaron que esta cuestión había quedado expuesta por escrito en la agenda de trabajo que el Jefe de Gabinete le presentó a la ME, el día en el que las negociaciones habían vuelto a foja cero.

Por otro lado, los productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos se negaron a levantar el paro y realizaron una manifestación desde el Túnel Subfluvial hasta el Parque Urquiza. Los obispos de ese lugar elaboraron un documento en el que convocaban al diálogo y resaltaban "el amor que los productores tienen por su tierra". En las localidades de San Gregorio, Diego de Alvear y Christophersen, provincia de Santa Fe, los productores autoconvocados, salieron a la ruta para expresar su apoyo a la ME.

En la provincia de La Pampa, en el acceso a la localidad de Macachín, se movilizaron alrededor de cinco mil productores agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa, para realizar un acto en repudio al Gobierno.

El titular de la ONCCA, sostuvo que los ruralistas mentían "cuando afirmaban que aún seguían frenadas las ventas de carne al exterior". Afirmó también, que "la exportación de carnes está abierta y el sistema está funcionando normalmente". Asimismo, evaluó que el sector rural había "radicalizado el conflicto, lo ha politizado en extremo y se ha llegado a una situación donde lo que se está discutiendo ya no es la operatividad de los instrumentos del Estado".

Nuevos tiempos de tregua

Lunes 19 de mayo

En un comunicado de prensa, las entidades agropecuarias anunciaron el fin del paro. Mario Llambías señaló: "Esperamos que esta acción genere la contrapartida del Gobierno en el inmediato llamado a resolver en un clima de concordia y pacificación el arribo a las soluciones concretas". Por su parte, voceros del Gobierno confirmaron al poco tiempo del anuncio, que los dirigentes agropecuarios serían recibidos por el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía. Diversos funcionarios del Gobierno, reiteraron al respecto, que no se modificaría el sistema de retenciones móviles, pero que se podrían analizar los efectos que la medida implicaba para los mercados a futuro.

En Santa Fe, en el cruce de la Ruta Nacional N° 34 y la Provincial N° 65, una asamblea de alrededor de seis mil personas resolvió levantar el paro. Tanto al norte como en el centro de de la provincia, los productores agropecuarios permanecieron a la vera de las rutas. También en la provincia de Buenos Aires, los productores de Baradero, San Pedro y Ramallo se mantuvieron apostados a la vera de la Ruta Nacional N° 9 con decenas de camionetas y tractores. Raúl Victores, uno de los dirigentes más respetados de la zona, aclaró que "aquí la gente está muy firme. Preferimos estar uno o dos meses más en la ruta, en vez de seguir de rodillas".

Por su parte, los ruralistas de la provincia de Entre Ríos decidieron no acatar el cese del paro y continuar con las protestas. Juan Echeverría, vicepresidente de la FAA de Entre Ríos, aclaró que "pese a lo que dice Buzzi, no hay señales claras de parte del Gobierno". Asimismo, se realizó un cacerolazo en la localidad de Paraná y cientos de productores se movilizaron con sus tractores desde el Túnel Subfluvial hasta la Casa de Gobierno, donde exigieron ser atendidos por el gobernador Urribarri.

El Banco de la provincia de La Pampa recibió a los representantes del sector agropecuario, con el objetivo de buscar alternativas frente al quiebre de la cadena de pagos. Por otro lado, centenares de jóvenes nucleados en entidades ruralistas de la provincia y estudiantes de las Facultades de Agronomía, Veterinaria y Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, se manifestaron en la plaza céntrica de la capital bajo el lema "los jóvenes del campo dicen basta". Los oradores de la concentración argumentaron en contra de las medidas implementadas por la Presidenta en materia agropecuaria, aunque aseguraron estar dispuestos al diálogo.

Por otro lado, dirigentes de CARBAP expresaron a través de un comunicado la reivindicación del diálogo. La Iglesia, mediante un comunicado de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal, instó al Gobierno y al sector agropecuario a alcanzar cuanto antes un acuerdo. Los obispos señalaron que "en democracia los problemas se solucionan en el ámbito de las instituciones, privilegiando el diálogo por sobre toda muestra de violencia verbal o física".

Los principales partidos políticos opositores -la UCR, la CC y el PRO- señalaron su apoyo a la continuidad del paro agropecuario, con la convocatoria a una sesión especial en diputados para que se anulara el esquema de retenciones móviles al agro. Al respecto, el jefe de la UCR, Gerardo Morales, sostuvo que el lugar donde se debería encauzar el diálogo sería

en "el Congreso de la Nación, ya que es el ámbito natural de la representación de todo el pensamiento nacional". De igual manera, aunque sin definir una posición, Silvia Ausburger, jefa del bloque de diputados socialistas, afirmó que "si las entidades del campo aceptan, como indican las versiones, discutir las retenciones móviles con el Gobierno, no tendría sentido que nosotros insistamos en el Congreso por su derogación".

En tanto, el Gobernador de provincia de La Pampa declaró, en una conferencia de prensa, su firme apoyo al Gobierno Nacional y, en referencia a los ruralistas, agregó que "si los gobernadores de la región pampeana salimos a apoyar decididamente a un sector que está discutiendo facultades que son del Gobierno, no sería más que sedición".

El movimiento Barrios de Pie, que había comenzado con las acciones de protesta anunciadas días atrás, decidió levantar los cortes de ruta, para facilitar el diálogo del Gobierno con las entidades rurales.

Por su parte la ONCCA cumplió con dos concesiones que había realizado hacía un mes atrás. Primero, quitó del cupo de exportaciones de carne a los embarques de vaca de conserva. Segundo, mediante la Resolución N° 94/08, instituyó la creación del "ROE Verde", que debutaría con el envío de 100 mil toneladas de trigo a Brasil.

Martes 20 de mayo

Los productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos, pese a discrepar con la decisión de los dirigentes, decidieron en asamblea levantar el corte de ruta pero quedándose al costado del camino en estado de alerta y movilización. Al respecto, Alfredo de Angeli dijo que debería haber garantes en la mesa de diálogo porque "los presidentes de las cuatro entidades, corren el riesgo de quedar desprestigiados" y nombró a los gobernadores Binner y Schiaretti, como posibles veedores de la negociación. Por otro lado, los productores agropecuarios rodearon con tractores la Casa de Gobierno provincial, buscando ser recibidos por el gobernador Sergio Urribarri.

También en la provincia de Santa Fe, se vislumbraron ciertas diferencias entre la voluntad de los productores autoconvocados y la dirigencia nacional. En cambio, productores autoconvocados del sur de Santa Fe y Córdoba, realizaron una asamblea sobre la Ruta Provincial N° 92, en San José de la Esquina, y decidieron acoplarse a la decisión de las cuatro entidades agrarias de levantar el paro.

Mientras tanto, diversas organizaciones sociales afines al Gobierno, comenzaron una campaña de difusión en apoyo a las retenciones móviles y en contra del paro agrario. La iniciativa incluyó volanteadas y actos en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en las principales ciudades del país.

El dirigente Fernando "Pino" Solanas, participó de uno de los actos de la FAA, invitado por Eduardo Buzzi. En el mismo, Solanas criticó la alianza de la FAA con la SRA y defendió las retenciones, pero pidió su cobro diferenciado.

La ONCCA anunció la creación del Registro Único de Clave Bancaria Uniforme (CBU), con la finalidad de que los productores rurales se inscribieran para acceder al cobro de compensaciones.

Miércoles 21 de mayo

En Entre Ríos, la Cámara de Diputados Provincial aprobó por unanimidad un proyecto que pedía la remoción de las retenciones, un acuerdo sobre políticas específicas para la ganadería y lechería, lineamientos para el cultivo de trigo y políticas dirigidas a las economías regionales.

Jueves 22 de mayo

Se realizó la primera reunión entre el Gobierno y las entidades agropecuarias luego de que éstas anunciaran el cese del paro el lunes anterior. Mientras que los representantes de las entidades agrarias pretendían que el tema de las retenciones móviles fuera el primero en ser discutido, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que la propuesta del Gobierno en torno a ese tema, se les daría a conocer recién el próximo lunes. Ante esta negativa, los ruralistas se declararon en estado de asamblea permanente hasta el día domingo, día en el que decidirían, tras el acto programado en Rosario por el 25 de Mayo, si acudirían a la nueva instancia de negociación propuesta por el Gobierno para el lunes. El Presidente de la FAA, afirmó que "la reunión fue mala y que hay una actitud permanente de dilatar el conflicto". Para el Gobierno, en cambio, la reunión fue "muy buena" y tras la reacción negativa de las entidades agropecuarias, el Jefe de Gabinete dijo: "si no es paro, es marcha, desabastecimiento y ahora movilización, siempre están apretando".

Mientras tanto, en el Salón de los Cuadros del Palacio de Hacienda, una docena de dirigentes rurales debatía puertas adentro si se atrincheraban en el ministerio. Ganó la opción más moderada y una hora después anunciaron que se abocarían a organizar el acto del 25 de Mayo, aunque no descartaban volver al paro. Por la noche los productores volvieron a cortar rutas en varios puntos del país.

Por otro lado, en el acto de la UPCN que se realizó en el Luna Park, la presidenta Cristina Fernández declaró que era necesario que quienes más ganaban entendieran que debían hacer su aporte a la reconstrucción del país y advirtió que no reprimiría las protestas, ya que "aunque los que cortan las calles no son desocupados ni trabajadores, igual son argentinos".

La oposición se mostró sumamente crítica ante la actitud del Gobierno. En medio de las críticas de la oposición, el vicepresidente Julio Cobos consideró que tanto el Gobierno como los ruralistas cometieron "errores" y les faltó "tolerancia" para afrontar el conflicto generado por el aumento de las retenciones.

Viernes 23 de mayo

Los empresarios agropecuarios aprovecharon el impasse que se abrió en medio del conflicto con el Gobierno para ponerse al día con sus ventas. Ingresaron al Mercado de Liniers 16.520 cabezas, el mayor volumen del año, y el envío de granos a los puertos de Gran Rosario continuó a un fuerte ritmo.

Las entidades rurales lanzaron dos spots televisivos que afirmaban: "Si el pan aumenta, no es por culpa de la soja" y que la oleaginosa no estaba desplazando al trigo, sino que lo financiaba y permitía que subsistiera: "Si la soja pierde rentabilidad, no se podrá sembrar trigo y con menos producción, sólo habrá más inflación". Los spots también cuestionaban el cierre de exportaciones ganaderas, "Nos dijeron que era para que bajara el precio de la carne, pero siguió aumentando". Ambas propagandas terminaban diciendo: "Todos los argentinos estamos esperando una solución" y estuvieron firmadas tanto por entidades agropecuarias como productores independientes, sin que apareciera el sello de ninguna de las cuatro entidades.

Néstor Kirchner criticó duramente a la oposición en la ciudad de San Juan. En su discurso comparó a la oposición nucleada en torno a las cámaras patronales del agro con "la Unión Democrática que conspiró contra

Perón y Eva Perón". El ex presidente estuvo acompañado por los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Urribarri (Entre Ríos) y Celso Jaque (Mendoza).

Por otra parte, el FNC realizó su segundo plenario nacional en la sede de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, agrupando a doscientas organizaciones que representan a más de doscientas mil familias agrarias. El eje de los reclamos del sector se distanció de una modificación de las retenciones móviles. Sus planteos apuntaron al uso de la tierra y la condena a la concentración de la propiedad, a garantizar la soberanía alimentaria y a rechazar la conversión en monocultivo de grandes extensiones por la invasión de la soja. Por otro lado, reclamaron una mayor intervención del Estado para lograr una real distribución de la riqueza y condenaron el tipo de representación que ejercen las cuatro entidades que protagonizaban el conflicto agrario. "Las entidades hablan en nombre de nosotros y no mencionan nuestra problemática, con el FNC apuntamos a convertirnos en la quinta entidad", señaló Benigno López, dirigente del MOCAFOR. Por su parte, los miembros del MOCASE hicieron referencia al desalojo fraudulento de tierras por parte de miembros de FAA.

A su vez, en la provincia de Tucumán el gobernador José Alperovich recibió en su domicilio particular a ruralistas que fueron a exigirle, nuevamente, que tomase posición "a favor o en contra del campo", según dijo un vocero del grupo. En la ciudad de Rosario, jóvenes del Movimiento Evita colgaron en el Monumento a la Bandera durante unos minutos una bandera de 4 metros que decía "Fuerza Cristina". Los jóvenes repartieron volantes que desacreditaban a quienes protagonizarían el acto del 25 de Mayo, calificándolos como "empleados de las multinacionales Monsanto, Cargill, Bunge y Dreyfus", cuya única bandera –según el panfleto– sería "la rentabilidad".

Sábado 24 de mayo

La dirigencia agraria se reunió en Rosario. Tras un extenso encuentro, los dirigentes de las cuatro entidades rurales optaron por bajar el tono de las críticas y afirmaron que cuando fuesen convocados seguirían negociando con el Gobierno.

Dos actos patrios: El diálogo nuevamente coartado

Domingo 25 de mayo

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizó el acto convocado por las cuatro entidades agropecuarias. Una multitud de productores, comerciantes y familias completas de distintas localidades del país se acercaron al Monumento de la Bandera. Según afirmaron los organizadores, al acto concurrieron unas trescientas mil personas. Los dirigentes rurales advirtieron que no aceptarían una nueva dilación en las definiciones ya que querían discutir necesariamente sobre las retenciones. El titular de la CRA replicó con dureza al ex presidente Néstor Kirchner: "No se confundan: nosotros no somos la Unión Democrática ni la pareja gobernante son Perón y Evita. No venimos con carteles ni nos pagan para venir". Por su parte, Buzzi se refirió a "las enormes transferencias del productor a las exportadoras y las industrias aceiteras, especialmente a la aceitera de un hombre que por meterse en política traicionó al campo", haciendo referencia al dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, senador por Córdoba para el FPV. Además, Buzzi hizo referencia a una carta que le había entregado durante la semana Darwina Galliquio, una referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario. Esa carta decía que "los chacareros sabemos quiénes son los enemigos" y mencionó párrafos: "contra la concentración de la tierra y su enajenación desde el 24 de marzo de 1976, cuando se abrió un proceso nefasto". Luego, dijo a modo de conclusión, "A no aflojar, compañeras y compañeros. Esta es una lucha larga, que va a continuar, pero hay un solo camino: ganar o ganar, no hay lugar para otra cosa". Al acto asistieron políticos de distintos partidos, pero tal como pretendían los organizadores del acto, no hubo pancartas, ni banderas, ni discurso, ni escenario para ellos.

Por otra parte, el Gobierno realizó la tradicional celebración del 25 de Mayo en la ciudad de Salta. Luego de que finalizaran los discursos de los referentes de las entidades agropecuarias en Rosario, la presidenta Cristina Fernández enunció un discurso que duró sólo 14 minutos, en el que evitó criticar "al campo" e hizo sólo alguna alusión indirecta al conflicto. Señalando a la ex dirigente del MML, Lucy de Cornelis, allí presente, la Presidenta recordó que por entonces, la mujer "se paraba frente a las tranqueras para evitar los remates" de los campos y destacó que, en cambio, "estamos construyendo un país que nos habían robado,

que ya no reconoce propietarios porque todos somos la Patria, todos somos Argentina", y ejemplificó: "Un país que cuando viene un funcionario del Fondo Monetario, no lo recibe como virrey". Sobre el escenario estuvieron el vicepresidente, Julio Cobos, una decena de los gobernadores más fieles al kirchnerismo, la mayor parte del Gabinete nacional, los principales legisladores del Frente para la Victoria y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Por su parte, el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, quien ofició la homilía en el Tedeum, sin llegar a mencionar el conflicto agrario, aconsejó a la Presidenta utilizar el diálogo "como instrumento eficaz para convertir la crisis en oportunidad".

Con matices diferentes, los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Chubut, Juan Schiaretti, Hermes Binner y Mario Das Neves, respectivamente, reclamaron que las partes retomasen una negociación seria que permitiera hallar una salida al conflicto.

Lunes 26 de mayo

Antes del mediodía, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció que el encuentro entre el Gobierno y las entidades rurales había sido cancelado y declaró que "Ayer rompieron el diálogo, con todas sus amenazas e imposiciones". Por su parte, la ME consideró la suspensión de la reunión como "una provocación". Sin embargo, después de una reunión en la sede de la CRA para analizar los pasos a seguir, las entidades rurales decidieron evitar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza y pasar a un cuarto intermedio para el día siguiente. En el comunicado que emitieron pidieron a las bases "mantener, más que nunca, el estado de alerta y movilización, sin caer en esta nueva provocación". A su vez, convocaron al resto de las organizaciones patronales a apoyar los reclamos del agro.

Sin embargo, en la provincia de Santa Fe los chacareros volvieron a los cortes parciales de rutas. En la provincia de Entre Ríos los productores apostados en el túnel subfluvial realizaron un corte de una hora y decidieron, a través de una asamblea, la restricción de la comercialización de granos. A su vez, debido a la cancelación de la reunión que iban a mantener las entidades agropecuarias con el Gobierno, la plaza granaria nacional estuvo paralizada durante la jornada, no hubo operaciones en ningún mercado ni bolsa de cereales del país. Mientras que la plaza ganadera operó con una oferta importante de vacunos. Por otra parte, la oposición responsabilizó al Ejecutivo por la ruptura del diálogo y la

prolongación del conflicto que generó el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos.

Martes 27 de mayo

Néstor Kirchner convocó a la mesa de conducción del Consejo Nacional del PJ con el objetivo de elaborar una respuesta pública a los discursos que se escucharon en el acto de Rosario convocado por las entidades agrarias. La respuesta se difundió a través de un documento en el que se acusó a las entidades de estar impulsando un "ataque antidemocrático con ánimo destituyente y falta de respeto a la voluntad popular", las protestas fueron calificadas como un "lock-out salvaje e interminable". Además, se les reprochó invocar al diálogo cuando "simplemente desacreditan o conciben a las autoridades electas como un obstáculo" mientras defendieron las retenciones como un instrumento válido y legítimo del Estado para impulsar la redistribución del ingreso. Todos los gobernadores que formaban parte del Consejo asistieron a la reunión: Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Juan Manuel Urtubey (Salta), José Luis Gioja (San Juan), Mario Das Neves (Chubut), Celso Jaque (Mendoza), Walter Barrionuevo (Jujuy), Oscar Mario Jorge (La Pampa). Desde bien temprano, la agrupación juvenil La Cámpora se había instalado en la calle y colgado banderas frente al edificio.

Por su parte, la CGT criticó la "escalada desestabilizadora" y reiteró su apoyo al Gobierno Nacional. Mientras que el ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió que "no es hora para tibios" y que "aquellos que están a favor del modelo deben decirlo porque ahora el que no suma resta".

En tanto, los presidentes de las cuatro entidades volvieron a reunirse y elaboraron un documento, en el cual expresaron que el Gobierno buscaba cualquier justificativo para no sentarse a dialogar y resolver el conflicto usando como pretexto los discursos pronunciados en Rosario. A su vez, los dirigentes afirmaron que por las continuas idas y vueltas de las últimas reuniones dejaban de tener como interlocutor válido al Jefe de Gabinete. Sin embargo, a pesar de que este documento fue consensuado entre las cuatro entidades, el hecho de no haber sido recibidos por el Gobierno generó diferencias al interior de las mismas. Tal es así que CONINAGRO presentó ante el resto de las entidades un documento en cual se pidió "mantener en cada acción el reclamo sectorial del campo", "la no politización de las posiciones, el discurso o las decisiones que se tomen" y la

necesidad de "respetar la institucionalidad de cada entidad, manteniendo dentro de las mismas la verticalidad y la disciplina".

En algunos puntos del país, "las bases" no esperaron el anuncio de la ME y cortaron el paso a camiones que transportaban granos. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se chequeó la carga de los camiones en Saladillo y 25 de Mayo, en Córdoba los cortes tuvieron lugar en Jesús María e Inriville. Los productores también bloquearon el tránsito cerealero en el túnel subfluvial que conecta Paraná con Santa Fe. Por su parte, Alfredo de Angeli ratificó su voluntad de volver a los cortes y acusó al Gobierno: "no quiere solucionar nada, quiere que cortemos todas las rutas, que hagamos un caos". En tanto que el gobierno chaqueño, anticipándose a las medidas, anunció que no permitiría la interrupción del tránsito en las rutas provinciales.

Por otro lado, hasta la fecha, de los doscientos cuarenta y nueve productores que se presentaron ante la ONCCA para pedir reintegros por exportaciones, sólo el 25 por ciento cumplía con todos los requisitos. El Presidente de la ONCCA, remarcó que para recibir las compensaciones se exigía como "condición inalienable" que los productores y la industria "estén en regla". El Gobierno estimaba que la principal razón por la cual miles de pequeños productores no se habían presentado a cobrar las compensaciones que les hubiese permitido quedar por fuera del último aumento de retenciones era la falta de cumplimiento fiscal.

Hacia la profundización del conflicto

Miércoles 28 de mayo

Las entidades agropecuarias resolvieron reiniciar el paro agropecuario. El plan de acción incluía sucesivamente el cese de comercialización de granos para exportación y de hacienda para faena, la instalación de campamentos en las plazas de las localidades rurales y la búsqueda de apoyos entre legisladores y gobernadores. La iniciativa se tomó a raíz de los llamados telefónicos que recibieron las entidades de las diferentes asambleas del interior, que reclamaban acciones más duras. En este marco, el Consejo de Administración de CONINAGRO volvió a plantear su preocupación por el desenvolvimiento de las acciones que estaban llevando adelante las entidades agropecuarias. A su vez, las entidades enviaron cartas a diferentes

actores y les solicitaron que intervinieran para facilitar una negociación con el Gobierno.

Aunque la restricción a la comercialización establecida por la cúpula agropecuaria para la hacienda comenzaba al día siguiente, en algunas localidades del país los productores bloquearon su tránsito. La modalidad de los cortes fue variable. En algunos casos, como en Gualeguaychú, las limitaciones alcanzaron a los camiones cerealeros e internacionales. Los productores de dicha localidad señalaron que hubo una importante presencia de Gendarmería que los obligó a quedarse al costado del camino.

En este marco, Néstor Kirchner convocó a una reunión en la que participaron una gran cantidad de organizaciones sociales. El grupo de dirigentes sociales estuvo integrado por el diputado Edgardo Depetri (FTNP), Luis D'Elía (FTV), Lito Borello (Comedor Los Pibes), Gastón Harispe (Octubres), entre otros. También estuvieron presentes el dirigente Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y el legislador porteño Juan Cabandié. En la reunión el ex presidente dijo descreer de las encuestas que publicaban los medios y convocó a realizar acciones, pero sin confrontar con los productores. Una hora más tarde, los dirigentes anunciaban que a partir del día siguiente iniciarían una campaña de esclarecimiento a favor de las retenciones móviles.

Luego del primer comunicado en apoyo al Gobierno emitido por el PJ bajo la conducción de Néstor Kirchner, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, admitió tener "evidentes diferencias" con el documento, a la vez que su antecesor, José Manuel de la Sota, acusó al modo de conducción del PJ de "estalinista". A esto se sumó la renuncia del entrerriano Jorge Busti a la presidencia del partido en la provincia.

En tanto, la oposición convocó a dos sesiones especiales para discutir acerca del conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario que se vieron frustradas por la ausencia masiva del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados, unos veinte legisladores se reunieron para tratar el proyecto del diputado Claudio Lozano y Eduardo Macaluse para crear un "fondo especial para desarrollo provincial" que haría coparticipable el 60 % de lo recaudado por retenciones a las exportaciones. En el Senado, otra veintena de legisladores opositores propusieron sin suerte la derogación de la Resolución N° 125/08. Por su parte, el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, advirtió que los correligionarios de su partido acompañarían a los productores en el paro y en las movilizaciones que

hiciesen, y pidió al Gobierno que reflexionase sobre la masividad del acto del domingo en Rosario, en comparación con el oficialista.

Por otro lado, el ingreso de animales al Mercado de Liniers mermó considerablemente ya que muchos productores ganaderos temieron que sus envíos fueran frenados en las rutas, pero a su vez, otra razón fue su adhesión a la medida de fuerza.

Jueves 29 de mayo

El Gobierno anunció cambios en el sistema de retenciones que consistían, por un lado, bajar la curva de retenciones para habilitar nuevamente los mercados a futuro[15]; y por otro, en que los reintegros a pequeños productores, cuando la retención superara el 35 %, lo hicieran las gobernaciones provinciales y los municipios, además de permitir que se inscribieran en este beneficio los monotributistas. En la conferencia, que estuvo presidida por Alberto Fernández y el ministro de Economía, Carlos Fernández, también estuvieron presentes los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Oscar Mario Jorge (La Pampa), Juan Manuel Urtubey (Salta), José Alperovich (Tucumán), Luis Beder Herrera (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Tras el anuncio, todos los dirigentes nacionales del agro coincidieron en que los anuncios oficiales no modificaban la situación del sector y volvieron a solicitar públicamente al Gobierno que los convocara a dialogar. Hugo Luis Biolcati calificó el anuncio como "gatopardismo puro". Lo justificó diciendo que el cambio introducido en la progresividad de la parte final de la escala que establecía las retenciones a la soja era "cosmética en un lugar inalcanzable" porque la soja cotizaba en ese momento a 480 dólares y los beneficios recién serían palpables si la oleaginosa trepaba por encima de los 600 dólares. Lo que las entidades reclamaban era que "se aplane la curva", no a partir de los 600 dólares sino desde el comienzo de la misma. En cambio, de Angeli y algunos otros referentes, aspiraban a que la situación se retrotrajera al menos hasta el 10 de marzo, cuando la alícuota estaba en treinta y cinco puntos sin ningún tipo de movilidad. Luciano Miguens, por su parte, declaró que "las mejoras fueron mínimas".

15 El decreto N° 125 del 11 de marzo establecía una curva según la cual el porcentaje de retenciones se aceleraba mucho ante precios extraordinarios. Si la soja superaba los 600 dólares la tonelada, del monto que estuviera por encima de ese precio el Estado se quedaba con el 95 %. De este modo, el precio de la soja quedaba casi planchado en los 600 dólares y se anulaba la posibilidad de los mercados a futuro. Con la modificación anunciada, la curva se aplanó de tal forma que si la soja superaba los 750 dólares, la retención neta era del 52,6%.

A su vez, las entidades agropecuarias esperaban que se ampliara el rango de productores habilitados para cobrar las compensaciones y en eso, no hubo cambios[16].

La oposición coincidió en cuestionar el anuncio realizado por el Gobierno mientras Fernando "Pino" Solanas fue el único que entendió las medidas como "un gesto", pero dijo descreer de que el conflicto se solucionara, mientras agregó que "el Gobierno debe, de una vez por todas, cuestionar a los monopolios exportadores, que parecieran quedar todavía fuera de la discusión, y crear la Junta Nacional de Granos". Entre sus reclamos, también planteó la necesidad de aplicar retenciones a los sectores de la pesca y la minería y de discutir un "nuevo plan agropecuario que garantice la soberanía alimentaria".

Durante toda la jornada la Gendarmería tuvo una presencia activa en las rutas. En Gualeguaychú no permitió que los productores cortasen la ruta. Además, desde temprano empezó a desviar todo el transporte de carga –internacional y local– por Gualeguay. Sin embargo, tras el anuncio por parte del Gobierno de modificaciones en el sistema de retensiones, los productores agropecuarios de varias provincias resolvieron volver a cortar las rutas.

En la provincia de Entre Ríos, los productores de Gualeguaychú cortaron por dos horas todo el tránsito de carga mientras que en Paraná se hizo lo mismo por una hora. Por su parte, los productores de Buenos Aires y La Pampa, nucleados en CARBAP, realizaron aproximadamente treinta concentraciones y asambleas en diferentes rutas. En Las Rosas, provincia de Santa Fe, una caravana de tractores ocupó alrededor de treinta cuadras del radio urbano. La protesta fue organizada por productores, comerciantes y vecinos autoconvocados; y se movilizaron para entregar un petitorio al Concejo Municipal, en el que solicitaron "un apoyo y acompañamiento más activo hacia el sector agropecuario que reclama por cambios en la política agropecuaria del país".

Néstor Kirchner se reunió con los bloques legislativos en la sede del PJ. En la reunión participó el Secretario General de la CGT más algunos gobernadores. El encuentro permitió que el Jefe de Gabinete pudiera explicar en directo todos los pormenores de la negociación con las entidades

16 El régimen establecía que los chacareros que en aquella campaña cosecharan hasta 500 toneladas de soja o girasol podían pedir al Estado que les devolviera la diferencia entre el nuevo nivel de retenciones y el que regía hasta el 10 de marzo. El segundo parámetro es que las explotaciones no debían superar las 150 ha en la Pampa Húmeda y las 350 ha en zonas extrapampeanas.

del campo y en qué consistía el nuevo paquete de medidas y cómo impactaría sobre los productores. Entre los ausentes sobresalieron los diputados Felipe Solá y José Montoya, cordobés ligado a José Manuel De la Sota, como también los senadores Carlos Reutemann, Roxana Latorre y Juan Carlos Romero. Todos ellos ya habían expresado diferencias con la implementación de las retenciones móviles y la política oficial hacia los productores rurales. Antes de que comenzara la reunión, tres diputados nacionales por Entre Ríos (María Cristina Cremer, María de los Ángeles Petit y Gustavo Zavallo) habían hecho pública una carta dirigida a Kirchner que se diferenciaba del documento del Consejo Nacional del PJ y en la cual se afirmaba: "Estamos convencidos, señor Presidente, que con el diálogo nunca se pierde".

Por otra parte, organizaciones sociales no kirchneristas, estudiantes y trabajadores precarizados (el Frente Popular Darío Santillán, junto al Frente de Organizaciones en Lucha y la Coordinadora de Trabajadores Precarizados) realizaron una marcha que pasó frente a la SRA , la sede de Repsol-YPF y terminó en el Ministerio de Economía. La consigna de la movilización fue "contra el hambre y la inflación, por la socialización de la riqueza y la soberanía alimentaria...Criticamos el modelo agropecuario porque vemos que no toca a Monsanto ni a los Grobocopatel, que se alían con los grupos locales para saquear el país. Tampoco vemos que haya una redistribución que favorezca la implementación de mejoras en la salud y el trabajo".

Viernes 30 de mayo

En San Pedro, provincia de Buenos Aires, la Prefectura arrestó a ocho ruralistas acusados de cortar una ruta y de quemar pastizales. Ante esta situación, Buzzi llamó a repudiar la judicialización de la protesta y convocó a los productores a reclamar con una sentada en las rutas de todo el país. La detención también fue repudiada por CARBAP y la oposición, que responsabilizó al Gobierno por la medida. Por su parte, Aníbal Fernández desvinculó a la Casa Rosada de la decisión judicial.

En Entre Ríos hubo sentadas en repudio a las detenciones de San Pedro. En Paraná los manifestantes cortaron en forma total la Avenida Raúl Uranga y en Gualeguaychú hicieron lo mismo en el km 53 de la Ruta Nacional N° 14. Asimismo, a la vera de la Ruta Provincial N° 11, a la altura de Valle María, cerca de treinta camiones permanecieron estacionados en

respaldo a los reclamos de los productores agropecuarios entrerrianos. La ciudad de Diamante también fue escenario de protestas, allí, en la intersección de la Ruta Provincial N° 11 y la Ruta Nacional N° 131, otro grupo de camioneros protestó por no poder trabajar debido al paro agropecuario. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, productores agropecuarios, la mayoría llegados desde pueblos vecinos, se concentraron en la Municipalidad, tras protagonizar un tractorazo por las calles de la ciudad. A su vez, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recibió huevazos e insultos por parte de un grupo de productores rurales cuando se disponía a inaugurar nuevas oficinas de la administración pública en Pampa del Infierno, a más de 200 km de Resistencia.

Por su parte, CONINAGRO volvió a diferenciarse del resto de las entidades agropecuarias al evaluar como un gesto positivo el cambio introducido por el Gobierno en el régimen de retenciones. Si bien la entidad coincidió en el rechazo a la suba de las retenciones, consideró que el lunes siguiente se debía poner fin al paro comercial y a los cortes de ruta y pasar a una etapa de protestas más moderada mientras se buscaba restablecer el diálogo. Esta posición fue compartida por la SRA que recomendó poner un freno a los piquetes y comenzar a manifestarse montando carpas frente a las intendencias y gobernaciones.

Ante la escalada de tensión en el conflicto agropecuario, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pidió a la presidenta Cristina Kirchner que actuara con cautela e insistió en que "Santa Fe impulsa un plan que permita el diálogo, la concertación, la búsqueda de acuerdos y también una propuesta económica cierta para superar el conflicto".

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), señaló que no iba a adherir al "cese de actividades" convocado por las entidades agropecuarias para el lunes siguiente, y salió a repudiar la posibilidad de que los empresarios rurales utilizaran un método como la carpa blanca para reclamar "la defensa de intereses antagónicos con los intereses populares".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo de la Nación fue el único de los invocados por las entidades ruralistas, que accedió a evaluar una mediación entre el campo y el Gobierno.

Sábado 31 de mayo

El fiscal que intervino en la detención de los ocho productores rurales, Juan Murray, declaró que no recibió ninguna orden del oficialismo para imputarlos y detenerlos.

Por otra parte, a partir de la incorporación de los monotributistas agropecuarios como beneficiarios de los reintegros para pequeños productores, el Gobierno agudizó la mirada sobre estos pequeños contribuyentes y detectaron serias irregularidades en la emisión de certificados de comercialización y transporte de granos: gran cantidad de monotributistas habían cargado camiones por cifras que superaban largamente los 144 mil pesos anuales, que era el tope de facturación para esos contribuyentes. También descubrieron un mercado paralelo de venta de los certificados conocidos como "cartas de porte"[17].

Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos, productores rurales continuaron cortando intermitentemente la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Gualeguaychú. Hubo un importante despliegue de la Gendarmería. Asimismo, en la ciudad de Paraná, un grupo de productores se trasladaron en tractores hasta el autódromo donde repartieron calcomanías de "apoyo al campo". El líder de la FAA de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, estuvo presente.

Domingo 1 de Junio

En el transcurso del día se produjeron una gran cantidad de cortes de ruta. Según confirmaron fuentes de CARBAP, en las rutas bonaerenses se produjeron al menos setenta cortes y otros veinticinco en La Pampa, mientras que en Santa Fe continuaron los cortes selectivos de camiones con hacienda y granos. En la provincia de Chaco las protestas se redoblaron después de los huevazos que debió soportar el viernes el gobernador Jorge Capitanich. Sobre la Ruta Nacional N° 95, en el límite con Santa Fe, los productores levantaron un muro de tierra de un metro y medio de alto para impedir el paso. También en Entre Ríos se mantuvo el corte sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Gualeguaychú.

17 Las cartas de porte son los certificados en los que quedan asentados los movimientos de cereales en todo su camino desde la cosecha hasta la comercialización.

Lunes 2 de junio

En el marco de la jornada de protesta agropecuaria se realizaron actos en diferentes ciudades del país y un cese general de actividades del comercio y la industria. El acto en la ciudad de Armstrong, provincia de Santa Fe, fue el que tuvo mayor convocatoria. Según los organizadores, participaron cerca de veinte mil personas. En el acto se pronunciaron discursos de fuerte tono político y se reclamó una mayor presión sobre los gobernadores. La FAA fue la única entidad de la CE que estuvo presente en el acto, del cual también participaron más de treinta intendentes (varios oficialistas), comerciantes, empresarios del sector agroindustrial y productores. Entre banderas de Argentina, expresiones de repudio cada vez que se mencionaba el apellido Kirchner o de algún gobernador del Partido Justicialista, Buzzi afirmó que "este es un mensaje para Olivos, Puerto Madero y Roma, donde está de viaje oficial la Presidenta". Muchos intendentes presentes en el acto estimaron que el 95 % de la mano de obra de su ciudad dependía del campo.

El cese parcial de actividades en industrias y comercios en ciudades del interior del país marcó contrastes. El sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba mostraron un alto nivel de adhesión, mientras que en la capital de San Luis pasó casi desapercibida, al igual que en la ciudad de Mendoza. Allí, los dirigentes de la Federación Económica local criticaron la protesta del agro al sostener que "sólo se apoyan voluntades de cuatro entidades nacionales que en ningún momento representaron al campo mendocino", distinguiendo entre los intereses de la Pampa Húmeda y los productores de cultivos regionales. En Catamarca, los productores sojeros del este provincial participaron de un tractorazo en la Villa Los Altos, con la adhesión del comercio y la industria. En Bahía Blanca, buen número de locales comerciales permanecieron cerrados desde las 8:00hs hasta las 10:00hs, según afirmó el gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Juan Carlos Strarobinski.

En tanto, los productores agropecuarios de Entre Ríos aseguraron haber realizado veinticinco movilizaciones en distintos puntos de la provincia, según informó el secretario de la FAA de Entre Ríos, Alfredo Bel. También los productores rurales realizaron una concentración en la localidad de Villa Elisa. En Gualeguaychú, una movilización de tractores, camionetas y automóviles partió al mediodía desde la Municipalidad hacia la Ruta Nacional N° 14. También se movilizaron en Concordia, Chajarí, Victo-

ria, Diamante, Alcaraz, Nogoyá, Basabilvaso, Paraná, Viale, Gualeguay, Cerrito, Crespo y La Paz. En la provincia de Córdoba hubo protestas y concentraciones. En algunos casos con cortes totales de rutas, tractorazos y cierres de comercios, como en la ciudad capital, Bell Ville, Sinsacate, Jesús María, San Francisco, Río Primero y Monte Maíz. En esta última localidad, las fábricas de maquinaria agrícola dieron asueto a su personal para que concurrieran a un acto en la plaza central. En la provincia de La Pampa también se registraron protestas en Ataliva Roca, Santa Rosa y General Pico. Otras manifestaciones tuvieron como escenario distintos puntos en las provincias de Corrientes, Chaco, La Rioja y Santiago del Estero.

Por su parte, la ME anunció la extensión del paro hasta el 9 de Julio, aunque se permitió la venta de hacienda a los mercados, para no desabastecer de carne a la población. Néstor Kirchner se reunió con dirigentes que integraban la Concertación Plural: representantes radicales, socialistas y otras fuerzas de centroizquierda afines, con la finalidad de discutir el conflicto con el campo. Sin embargo no pudieron consensuar un documento conjunto. Estuvieron los radicales K encabezados por el vicepresidente Julio Cobos, quienes pugnaron por un mensaje conciliador; mientras el resto, intendentes y un conglomerado de fuerzas de centroizquierda propusieron que se denunciara la "desestabilización".

A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, la agrupación Barrios de Pie y el Movimiento Universitario Sur demandaron "el fin del paro agrario" con una movilización hasta la sede de la calle Florida de la SRA. En un comunicado, las dos agrupaciones calificaron las medidas del agro como un "chantaje patronal absolutamente injustificado, más aun después de los últimos anuncios del Gobierno".

Por otro lado, el presidente de la ONCCA, Ricardo Echegaray, cuestionó que las entidades del agro "ni siquiera han querido participar" de la inscripción en el sistema de compensaciones "para poder identificar a sus productores pequeños y medianos" beneficiados con la modalidad. "El 28 de abril lanzamos el régimen para los pequeños productores de soja y girasol, y sólo se presentaron al día viernes unos doscientos cuarenta pedidos", expresó. Y de los que se presentaron, apenas el 29 % estaba en condiciones de acceder a este beneficio. Según explicó Echegaray, el 40 % de ellos no tenía la explotación agropecuaria como actividad principal, una condición exigida por el régimen de reintegros. El 31 % restante no estaba incluido en el Registro Fiscal de Operaciones o eran monotributistas.[18]

Carlos Reutemann y Felipe Solá volvieron a tomar distancia del Gobierno. Por su parte, el senador santafesino consideró que "el 35 % (el porcentaje de retenciones que se aportaba antes de la suba) no es contribuir poco al Estado nacional" y que el problema era que las autoridades nacionales pensaban que "retroceder" con las medidas "es como sufrir una derrota política". El ex gobernador bonaerense, en cambio, tomó distancia de los productores que expresaban "una especie de altar a la bronca espantoso", pero exigió que el Estado "debe actuar" y no "sentirse como parte ofendida", además de arremeter contra "las burradas" del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. A su vez, Eduardo Duhalde reivindicó a las entidades agrarias y cuestionó al Gobierno Nacional porque "se dedica a pelear con todos".

Rutas bloqueadas, se suman los transportistas

Martes 3 de Junio

El cronograma anunciado por la ME, una semana atrás, preveía que a partir de hoy los productores abandonaran las rutas dando paso a una segunda fase más moderada que contemplaba campamentos frente a las intendencias, marchas a las capitales de provincia y recolección de firmas. Sin embargo, en respuesta a las detenciones que realizó la Gendarmería el viernes y las citaciones que le envío el juez Carlos Villafuerte Ruzo a dirigentes rurales y políticos, imputados por el delito de obstrucción de caminos, la ME resolvió extender el paro agropecuario hasta el domingo a la medianoche, aunque se limitaría sólo al comercio de granos.

En Entre Ríos los productores realizaron una reunión "multisectorial de piquetes" para discutir metodologías y acciones conjuntas. Por otro lado, la asamblea de Gualeguaychú, a la vera de la Ruta Nacional N° 14 se trasladó hasta la puerta de la Municipalidad y fueron acompañados por los militantes de la CCC. En el Chaco, los productores decidieron cortar el tránsito a los camiones con vacunos, sumado a los granos para exportación. Esta decisión fue en rechazo al anuncio de la ME que estableció que sólo se impediría la comercialización de granos. "Acá la situación es com-

18 Estos últimos serían amparados por el mismo sistema, según anunció el Gobierno, pero aún no estaba la resolución de Economía que permitiera cumplir con ese compromiso oficial.

pleja porque las bases han superado a la dirigencia", resumió el chacarero Héctor Rothamel.

Por otra parte, ante la imposibilidad de trabajar por la continuidad del paro agropecuario, los transportistas rurales decidieron comenzar su propia medida de fuerza e impedir la circulación de camiones con productos derivados del campo. Con la intención de forzar el camino al diálogo, los transportistas realizaron bloqueos en las rutas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. La dirigencia del sector anunció que los cortes sólo serían levantados si el Gobierno y el "campo" se sentaban a dialogar. En Córdoba, los principales contra cortes fueron realizados en Sinsacate, Marcos Juárez, Río Cuarto y Bell Ville. Mientras que en Entre Ríos los camioneros de la FETAC cerraron la Ruta Nacional N° 14 en su intersección con la Ruta Provincial N° 20 durante media hora.

En tanto, la fundadora del MML, Lucy de Cornelis, solicitó a los dirigentes rurales que "depongan su actitud y terminen con todo esto" y recordó que "muchos productores salvaron sus tierras gracias a que pudieron refinanciar sus deudas con el Banco Nación".

Los diputados opositores de la CC, la UCR, el PRO y el PS volvieron a insistir en realizar una sesión especial de la Cámara baja para tratar la derogación de la Resolución N° 125/08. Esta vez, los legisladores incluyeron otros proyectos para "promocionar distintas actividades agropecuarias" y una modificación en la reglamentación del impuesto a las ganancias, con el fin de que los productores pudieran imputar como pago de ese gravamen parte de las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, tras no haber logrado la derogación de las retensiones móviles, la oposición parlamentaria decidió convocar a su propia "mesa de diálogo nacional", que "empuje al Gobierno a negociar" con los ruralistas.

Al mismo tiempo, el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino recibió a la ME. En el encuentro los ruralistas se comprometieron a no volver a cortar las rutas ni a entorpecer el abastecimiento.

Por otro lado, mientras que en el Mercado de Chicago se reiteraron las subas en los principales granos y oleaginosas de exportación, los directivos de los Mercados a Término de Buenos Aires y de Rosario indicaron que con "estas condiciones es imposible operar los mercados a futuro (...) debido a la incertidumbre que provoca la falta de precios de referencia" para los *commodities*. Mientras que el Director de la ONCCA denunció un "mercado negro" del trigo, la Agencia de Recaudación de la provincia de

Buenos Aires (ARBA) intimó a casi ochenta mil productores bonaerenses por presunta evasión impositiva.

En la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la Presidenta, tras cuestionar el proteccionismo de los países desarrollados, señaló que el problema no era "solamente de producción de alimentos sino de distribución de esos alimentos", criticó a los pools de siembra como una actividad especulativa, y afirmó que "en mi país, un pequeño ahorrista de 16 mil dólares, que los coloca en un pool de siembra, obtiene una renta en 6 meses del 30 % en dólares. Una renta inusitada en el mundo actual".

Miércoles 4 de junio

Los empresarios del transporte volvieron a bloquear una gran cantidad de rutas en protesta contra el paro del agro. Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, y Santa Fe fueron las más afectadas por los cortes de los transportistas. Rubén Agugliaro, presidente de la CATAC, señaló que pretendían presionar, impidiendo el paso de todo tipo de transporte, para que ambas partes sintieran la obligación de llegar a un acuerdo. Por su parte, las entidades agropecuarias tomaron distancia de los cortes de ruta que llevaban adelante los transportistas rurales. El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, dijo que los cortes eran "funcionales" al Gobierno porque apuntaban al desprestigio de la protesta rural.

En Entre Ríos, Concordia, más de dos mil personas con tractores se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo. A su vez, en Basavilbaso los productores autoconvocados movilizaron sus maquinarias y tractores para bloquear el paso de camiones por rutas provinciales. En Santa Fe la realización de un prolongado corte en la Ruta Nacional N° 9, a la altura de Armstrong, por parte de los transportistas cerealeros, aisló a las poblaciones del corredor vial que une Rosario con Córdoba.

Por otra parte, CARBAP emitió un duro comunicado contra el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, donde declaró que el funcionario "miente, engaña y confunde" al afirmar que estaban abiertas las exportaciones de carne vacuna, ya que del acuerdo firmado con el Gobierno para exportar 45 mil toneladas mensuales, "sólo se han embarcado 30 mil" y agregó que "tampoco es verdad que el campo tiene el 58 % de los empleados en negro" y que los cultivos de soja "han desplazado al trigo y al maíz".

Las opiniones de CARBAP no cayeron bien entre las otras entidades que consideraron inoportunas las críticas.

Jueves 5 de junio

Las cámaras de transportistas realizaron más de cien cortes en las rutas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y sur de Chaco mientras que en los pueblos del interior se registraron faltantes y subas especulativas de precios en la carne. Desde la CATAC justificaron el paro y el desabastecimiento alegando que "es la única manera que encuentran para obligar al Estado a que solucionen el conflicto con el campo". En cambio, Jorge Toreli, titular de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, señaló que "los piquetes son cada vez más virulentos, no dejan pasar nada. Son los transportistas los que cortan, pero ya están todos mezclados (con los productores agropecuarios)". A su vez, los mismos dirigentes de la FAA tomaron contacto con directivos de los transportistas de carga para "pedirle el gesto" de liberar las rutas.

Pese a la presión extra que sumaron los empresarios del transporte, los ruralistas continuaron con la medida de fuerza. Sin embargo, comenzaron a aparecer fisuras en el frente agrario: distintas cámaras agropecuarias, de comercio, industria y transporte de General Villegas, provincia de Buenos Aires, llevaron un pedido a la ME para que se levantaran todas las medidas. Rubricaron el documento, la FAA, la Cámara de Comercio e Industria, transportistas, productores lecheros y acopiadores de cereales, el Concejo Deliberante y el Intendente.

En Entre Ríos, los ruralistas y los empresarios del transporte continuaron con los cortes de rutas y se mantuvo el bloqueo para el transporte de granos en Gualeguaychú. En el Túnel Paraná - Santa Fe, Chajarí, Federal y Villaguay los camioneros realizaron otras manifestaciones. A esas se sumaron Alcaraz, Hasenkamp, La Picada, Viale, Seguí, Hernández, Nogoyá, Basavilbaso, Urdinarrain, Villa Elisa, Larroque, Paraná, Diamante, Valle María, Crespo, entre otras localidades. En Santa Fe la situación fue similar, los transportistas autoconvocados mantuvieron los bloqueos a los accesos de los puertos del cordón industrial de la región, complicando aún más la circulación de la zona. En la Autopista Rosario- Santa Fe, los camiones bloquearon ambas manos, aunque por la noche fue liberada parcialmente. Además los mismos transportistas también cortaron el acceso a las terminales de Timbres, Puerto San Martín y San Lorenzo. En

La Pampa, ruralistas y transportistas autoconvocados cortaron a partir de las 17:00hs las rutas provinciales N° 1 y N° 18. Durante la noche hubo una cola de casi ochenta camiones y autos particulares a lo largo de la ruta. Frente a la insistencia de los viajantes, abrieron el paso a la noche, en tandas de media hora.

También en la provincia de San Luis se registraron cortes de ruta. Transportistas de cereales cerraron el paso en la Autopista Serranías Puntanas, a la altura de la ciudad de Villa Mercedes, reclamando una solución al conflicto. Sólo pudieron transitar ómnibus de pasajeros y automóviles particulares. En San Fernando del Valle de Catamarca un grupo de productores marchó hasta la plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral y la sede del Gobierno Provincial. Los manifestantes comenzaron en ese lugar a recolectar firmas para pedir la derogación de las retenciones móviles a las exportaciones de granos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en La Matanza, acompañada por el gobernador Daniel Scioli y el intendente Fernando Espinoza, cuestionó a los productores y volvió a defender el modelo económico y la distribución de la riqueza. Por su parte, los organismos de Derechos Humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Fundación Memoria Histórica y Social y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) reclamaron que el Gobierno aplicara la Ley de Abastecimiento para "proteger al pueblo". También la agrupación juvenil La Cámpora criticó a los productores rurales. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer una declaración titulada "La Nación requiere de grandeza" en la cual pidieron "encarecidamente al Gobierno de la Nación que convoque con urgencia a un diálogo transparente y constructivo, y a los sectores en conflicto que revean las estrategias de reclamo".

El gobernador santafesino Hermes Binner encabezó una reunión en la Casa Gris a la que asistieron Buzzi y otros dirigentes rurales, más un puñado de legisladores e intendentes, en su mayoría del PJ. La reunión finalizó con la elaboración de un documento que firmaron Buzzi y los otros dirigentes, en el cual se convocó "a todos los santafesinos a defender la paz y la convivencia social.", a "instar a suspender todas las medidas que impidan la libre circulación de personas, alimentos, medicamentos y

demás bienes" y se pidió un "gesto de grandeza de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que permita remover los obstáculos que desencadenaron esta situación y convoque al Consejo Agropecuario Nacional ampliado para consensuar un plan agropecuario que promueva el desarrollo económico y social de todos los argentinos". Paralelamente, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con unos cuarenta intendentes bonaerenses que le expresaron "apoyo a las políticas agropecuarias llevadas adelante por el Gobierno" y a "las últimas decisiones tomadas al respecto".

Por otro lado, Mario Llambías (presidente de CRA), Eduardo Buzzi (titular de FAA), Margarita Stolbizer (CC) y María del Carmen Alarcón (fundadora de la agrupación Pampa Sur) se presentaron a declarar en los tribunales de San Nicolás, imputados por el delito penal de "obstrucción de caminos federales", por el corte de la Ruta Nacional N° 9, a la altura de San Pedro, el 19 de marzo pasado. Se juntaron frente a la fiscalía alrededor de cuatrocientas personas: productores de la FAA y la CRA, referentes de la CC como Enrique Olivera, militantes radicales y una columna de la CCC; también estuvo presente el gobernador de Santa Fe, Binner. Luciano Miguens y Hugo Luis Biolcati, presidente y vicepresidente de la SRA , permanecieron en Buenos Aires, pues montaron una mesa en la puerta de la sede que la entidad tenía en la calle Florida para juntar firmas de adhesión a un texto donde se solicitaba que el Congreso hiciera valer sus atribuciones referidas a fijar los derechos de exportación.

La CCC, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Teresa Vive y la FTV Disidente marcharon a Plaza de Mayo acompañados por los diputados de la CC, Héctor "Toty" Flores y Fernanda Reyes. Tras la realización del acto, las organizaciones acamparon hasta la media tarde, bajo el lema: "Contra el hambre, la inflación y la desocupación, somos todos chacareros". Por su parte, Néstor Kirchner encabezó un encuentro con el consejo del PJ por el conflicto agrario.

Viernes 6 de junio

Por la mañana unos doscientos manifestantes de la agrupación Barrios de Pie montaron una olla popular en la puerta de la CRA en la Ciudad de Buenos Aires. El Defensor del Pueblo de la Nación citó a las cuatro entidades del campo y al Gobierno Nacional en procura de una solución al conflicto de las retenciones, la condición fue que se levantaran "las me-

didas de acción directa". Pese a no haber recibido ninguna oferta oficial, la convocatoria realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación, fue el motivo que dieron las entidades rurales para finalizar el paro a partir del día domingo. El fin de la medida fue anunciado a través de un comunicado, titulado "El campo busca soluciones y paz social". Mientras fuentes oficiales adelantaron que no concurriría ningún funcionario, los ruralistas aseguraron que mantendrían la presencia a la vera de las rutas "en aquellas localidades que lo consideren necesario" y llamaron a reforzar la campaña de recolección de firmas.

En Entre Ríos continuaron más de cincuenta cortes de ruta de la FETAC y de los transportistas autoconvocados: en Paraná, San Salvador, Basavilbaso, Gualeguay, Rosario del Tala, Macia, Gualeguaychú, Galarza, Cuatro Bocas, Federal, Victoria, entre otras localidades. En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti envió a funcionarios y policías a los cortes para garantizar el tránsito normal de camiones tamberos. Por su parte, las cámaras empresarias liberaron el paso a camiones tamberos en la zona de Río Cuarto, según indicó Eduardo Marcle, de la Federación Cordobesa de Transporte de Cargas (FECOTAC). Uno de los puntos más conflictivos en esa provincia fue Vicuña Mackenna, donde llegó a haber diez kilómetros de camiones varados, muchos desde hacía cuatro días. En tanto en Santa Fe, productores autoconvocados que se mantenían a la vera de las rutas volvieron a cortarlas. Los bloqueos de Santa Teresa, Piñero y General Lagos convergieron en la Autopista a Buenos Aires lo que derivó en incidentes con los transportistas de cargas generales.

Ante el pedido que realizaron la Iglesia y el Gobernador de Santa Fe para que el Gobierno reanudara el diálogo con las entidades rurales, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, cuestionó: "aparecen gestos de quienes se quieren erigir como mediadores de la cuestión cuando el Gobierno tiene un mandato popular de tan sólo seis meses y tiene que ejercerlo, que es el de gobernar, y no necesita nadie que medie ni resuelva esta situación porque para eso fue elegido". La ONCAA dictó una resolución por la cual obligaba a los productores a informar si poseían granos u oleaginosas sin ingresar en el circuito comercial.

Sábado 7 de junio

El jefe del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, como vocero del Gobierno, confirmó que a principios de semana habría una convocatoria

formal a las entidades ruralistas para retomar el diálogo. Las condiciones de la Casa Rosada eran que se debía terminar con los cortes de ruta y dejar de lado el tema de las retenciones móviles, que para el Ejecutivo era una cuestión cerrada. A la vez, Rossi descartó la presencia de funcionarios en la audiencia citada por el Defensor del Pueblo de la Nación. La posición pública de FAA y la SRA fue la disposición al diálogo y señalaron que si la convocatoria se producía, las entidades acudirían. También el vicepresidente de CONINAGRO, Carlos Garetto, fue contundente en su reclamo para que cesaran los cortes de ruta y volver a negociar. Sin embargo, advirtieron que varios productores autoconvocados de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires estaban desacatando a la ME y continuarían con los bloqueos más allá del anuncio del cese del paro. El presidente de CATAC, Rubén Agugliaro, señaló que si los ruralistas no levantaban el corte tampoco lo harían los transportistas, y advirtió "Llevamos más de 80 días sin ganar un centavo, sin vender servicios, que no se pueden guardar como los productores lo hacen con su cosecha. No estamos ni con el campo ni con el Gobierno".

Por su parte, los productores autoconvocados de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires decidieron no levantar el paro como lo había anunciado la ME y afirmaron que continuarían en las rutas con cortes intermitentes y la interrupción del paso a camiones de granos. En la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, se volvieron a registrar incidentes entre camioneros cuando un transportista fue herido en el bloqueo de la Ruta Nacional N° 205 y tuvo que ser hospitalizado.

Al tiempo que, agrupación La Cámpora junto a organizaciones vecinales, dirigentes políticos y sindicales, realizó un acto en Mar del Plata en respaldo al Gobierno. Néstor Kirchner cuestionó duramente a las cámaras empresarias en el acto de reasunción del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, como titular del PJ de esa provincia. En un auditorio compuesto por petroleros y camioneros, Kirchner calificó la protesta rural como "una extorsión" y vinculó la protesta rural con los golpes de 1955 y 1976. En su discurso, afirmó: "La Argentina tuvo un '55, que nos costó dolores, tuvo un '76 que nos costó 30 mil desaparecidos, pero nunca más se van a truncar los procesos nacionales y populares. Nos pondremos al frente y daremos batalla".

Domingo 8 de junio

Las medidas de fuerza de los ruralistas continuaron en diversos puntos del país. Sin embargo, los cortes tuvieron una dinámica distinta a la de los últimos días. Montados en las localidades habituales, estuvieron más desolados y con vigilancias más ligeras, así fue el caso de Entre Ríos. Representantes de la FAA y de los grupos de autoconvocados continuaron allí con cortes en Gualeguay, Gualeguaychú y el Túnel Paraná-Santa Fe, pero dejaron pasar a buena parte de los transportistas, menos los camiones cargados con soja.

Con la misma dinámica, Chaco mantuvo cortes en Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Gancedo y Gato Colorado. A partir de las 18:00 hs los autoconvocados y productores agropecuarios comenzaron a levantar los bloqueos pero continuaban en estado de alerta, permaneciendo a la vera de la ruta, a la espera de las deliberaciones que llevaría adelante la ME al día siguiente. Por su parte, los transportistas de cargas mantuvieron su presión en las rutas. Rubén Agugliaro, titular de CATAC, dijo que los camioneros levantarían los bloqueos en las rutas "si les dan trabajo".

Durante una breve asamblea realizada en Gualeguaychú, Alfredo de Angeli ratificó en nombre de "las bases" la suspensión del paro anunciado por las entidades, aunque afirmó que si no había novedades el lunes estarían "de vuelta en la trinchera". Después del mensaje de Alfredo de Angeli, los productores autoconvocados de la provincia de Santa Fe realizaron una asamblea en la cual decidieron no dejar pasar a camiones con cereales. En el sur de la provincia hubo cortes por parte de los transportistas en todas las rutas y en la mayoría de los casos esos bloqueos estaban cercanos a los de los productores.

Lunes 9 de junio

La Presidenta, a través de cadena nacional, presentó un plan social de construcción de hospitales, viviendas y caminos que se financiaría con las retenciones agropecuarias superiores al 35 % y subrayó que la ejecución de los fondos (nacionales, producto de las retenciones) sería descentralizada entre provincias y municipios. En su discurso también convocó a todos, incluso a las entidades agropecuarias, para que participaran en "el combate contra la pobreza". Al cerrar su discurso, la presidenta Cristina

Fernández ofreció sus disculpas a quienes pudo haber ofendido con sus palabras a lo largo del conflicto.

Tras el discurso, las entidades reconocieron estar de acuerdo con el destino que se les quería dar a los fondos, pero cuestionaron que fueran los productores los que tuvieran que hacer el aporte. Por otro lado, solicitaron tranquilidad a los chacareros que seguían en los piquetes y dejaron en claro que estaban esperando a que se los convocara al diálogo y elogiaron el pedido de perdón de la Presidenta. Por su parte, la mayor parte del arco opositor criticó el plan anunciado por Cristina Fernández, al que acusaron de ser centralista e ir en desmedro del interior.

Desconociendo a las conducciones nacionales, los productores volvieron a cortar rutas en algunos puntos del país apenas terminó el discurso de la Presidenta. Los transportistas también decidieron volver a los cortes en cuatro provincias. Alfredo de Angeli salió al cruce del discurso presidencial y anunció que en Gualeguaychú los productores se mantendrían en asamblea permanente hasta el día siguiente por la tarde, cuando analizarían la posibilidad de volver al paro. En Paraná, sobre el túnel subfluvial, los autoconvocados decretaron a la noche volver al paro granario y vacuno. Mientras tanto, los transportistas de la provincia de Entre Ríos mantuvieron quince bloqueos sin dejar pasar ningún camión. En los supermercados se registró falta de leche, aceite, harina y verdura.

En la provincia de Córdoba, los transportistas nucleados en la FECOTAC realizaron treinta y siete cortes. Los principales se registraron en Sinsacate, La Carlota, Villa del Rosario y Marcos Juárez.

En el sur de Santa Fe los productores autoconvocados continuaron en las rutas impidiendo la circulación de transporte de granos. Los chacareros de Casilda, Chabás, Pujato, Arequito y San José de la Esquina decidieron mantener la protesta hasta que surgieran soluciones. En Firmat, Piñero y Villada levantaron los cortes pero se mantuvieron en estado de alerta y movilización. Los transportistas también continuaron bloqueando el paso de todo tipo de cargas.

Tras la frustrada convocatoria para un diálogo, por la ausencia de un representante del Gobierno, el Defensor del Pueblo insistió en solicitar la participación del Jefe de Gabinete en un nuevo encuentro pautado para el martes y le pidió una audiencia a la Presidenta. El diputado y jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, señaló que la propuesta de Mondino tendría el defecto de contraponer el Estado, "que representa a todos los ciudadanos" con el agro, es decir, con "un sólo sector" de la sociedad.

Los gobernadores Hermes Binner y Juan Schiaretti criticaron duramente la posición del Gobierno de no hacerse eco del llamado de Eduardo Mondino, sin embargo, el santafesino hizo una salvedad al reconocer la "actitud" de la Jefa de Estado, que lo recibiría al día siguiente y exhortó a los productores rurales autoconvocados y a los transportistas a que despejaran las rutas de su provincia, a los efectos de retomar las conversaciones con el Gobierno. Por su parte Schiaretti pidió al Gobierno que se sentase a dialogar con el campo.

Martes 10 de Junio

En las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, tanto productores agropecuarios como transportistas, realizaron múltiples cortes de ruta. Entre estos últimos, se encontraron autoconvocados y miembros de la TRA, que agrupaba a empresarios camioneros del sur de Santa Fe. Por otra parte, los representantes de la ME se reunieron con el gobernador Rodríguez Saá y expresaron su voluntad de que los representantes del interior se comprometieran con los reclamos del sector agrario. Además, le plantearon que continuarían con las presentaciones judiciales en contra de las retenciones móviles.

A su vez, el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino había citado para dialogar a la ME y a representantes del Gobierno. Finalmente, el encuentro se frustró ya que si bien los dirigentes del agro asistieron a la reunión, ningún funcionario se hizo presente. Mientras tanto, la Presidenta se reunió con el Gobernador de Santa Fe. Allí Binner le reclamó que abriese las instancias de diálogo con la ME y que le diera participación a los gobernadores de las diferentes provincias. Por su parte, Cristina Fernández se comprometió a invitarlo a los posibles encuentros y a la vez le criticó al Gobernador su "cambio de posición" en contra de la soja a partir del conflicto con las entidades agrarias.

Miércoles 11 de Junio

Mientras que los productores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa continuaban con la medida de no comercialización de granos, los transportistas bloqueaban las rutas de varias provincias, argumentando que las medidas tomadas por los productores ponían en riesgo su trabajo.

En la provincia de Buenos Aires, transportistas autoconvocados realizaron cortes de ruta en las localidades de Pergamino, Olavarria, Saladillo, Bragado, Chivilcoy, Las Flores, Ramallo, Lincoln, Junín y Chacabuco. En la provincia de Santa Fe, durante la tarde, todos los accesos a Rosario permanecieron cerrados.

En la provincia de Córdoba, los accesos a las rutas permanecieron bloqueados por la Federación de Transportistas Rurales Argentinos (FTRA), cuyo secretario general, Daniel Vilanova, declaró: "Desde hace unos tres meses nos encontramos paralizados y esta medida de fuerza no se levantará hasta que los productores rurales terminen con el lock-out de comercialización".

En Entre Ríos, los productores impidieron el paso de camiones que transportaban granos tanto por el Túnel Paraná - Santa Fe como por Villaguay, Gualeguay, Chajarí y Rosario del Tala. Además realizaron una marcha desde Basavilbaso hasta Gualeguaychú para reclamar al gobierno una pronta solución al conflicto.

Otra de las provincias donde se realizaron numerosos bloqueos fue en Chaco donde hubo cortes en Roque Sáenz Peña, Avia Teray, Las Breñas, Pinedo, Charata, Gancedo y Gato Colorado, todas localidades ubicadas a la vera de la Ruta Nacional N° 95. Una de las protagonistas de la protesta, Sonia Ibáñez, declaró: "Los cortes los estamos llevando adelante productores autoconvocados y transportistas que apoyan nuestro reclamo".

En Tucumán también hubo cortes protagonizados por transportistas y productores de la FAA que desconocieron el mandato de la conducción nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Kirchner, Florencio Randazzo y Alberto Fernández se reunieron con el Gobernador de Entre Ríos, cincuenta intendentes peronistas de la misma provincia y el titular de la ONCCA, Ricardo Etchegaray. Entre otros temas, discutieron acerca de las retenciones móviles y la liberalización de la exportación de trigo.

A su vez, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció la liberalización de la exportación de un millón de toneladas de trigo con destino principal a Brasil y Bolivia, luego de haberse llevado adelante el programa de "transparencia de existencia de granos"[19], el cual obligaba a declarar a productores, acopiadores y poseedores de granos y oleaginosas el volumen almacenado y la cosecha a la que pertenecían.

19 Resolución N° 684 del ONCCA.

Jueves 12 de Junio

En varias provincias productores y transportistas autoconvocados mantuvieron bloqueado el acceso a las rutas. Los camioneros que no respondían a ninguna cámara empresaria realizaron cortes por su cuenta intentando apurar el diálogo entre la ME y el Gobierno. Debido a la presión de los transportistas, el titular de la FADEEAC, Luis Morales, y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se encontraron con Luciano Miguens y Mario Llambías. Al finalizar la reunión Morales declaró que "la llave está en comercializar los granos".

En la provincia de Córdoba, los transportistas realizaron cortes a lo largo de la Ruta Nacional N° 9, en las localidades de Río Primero, Río Cuarto, Jesús María, Bell Ville y La Carlota. En la provincia de Santa Fe, camioneros nucleados en la FTRA, junto con productores autoconvocados realizaron cortes de ruta en las localidades de Casilda, Reconquista, Armstrong y Roldán. El secretario general de esa organización sindical, Daniel Vilanova, denunció: "Cuando la ME dijo levantamos el paro, nosotros levantamos, pero ellos apretaban a los acopios para que no manden camiones, están todos cómodos unos sentados arriba de los granos y el Gobierno a la espera, mientras tanto nosotros no tenemos comida".

A su vez, en el partido de La Matanza, la CCC, acompañada por representantes de la FAA y de la FTV realizó un tractorazo desde el km 44 de la Ruta Nacional N° 3 hasta las puertas de la Municipalidad para solicitar al intendente kirchnerista, Fernando Espinoza, que escuchara el reclamo de los productores locales en contra de las retenciones móviles. Por la tarde, Néstor Kirchner se reunió con los intendentes del conurbano bonaerense. Del encuentro participaron también Daniel Scioli, el vicegobernador Alberto Balestrini, Alberto Fernández, Florencio Randazzo y Ricardo Echegaray. Allí Kirchner expuso su repudio frente a los cortes de ruta y expresó "¿Si tienen tanta representatividad como dicen por qué no liberan las rutas?, ¿por qué no dejan de extorsionar al pueblo?".

El derecho a la "libre circulación"

Viernes 13 Junio

El Gobierno anunció que no permitiría que las rutas permanecieran bloqueadas. De esta manera, la presidenta Cristina Fernández dispuso la libre circulación en todas las rutas del país que estuvieran cortadas. Así también se expresó Aníbal Fernández quien dijo que se comunicó con todos los gobernadores y les pidió que si se realizaban cortes en rutas provinciales procedieran a hacer las denuncias ante el juzgado, desde donde se daría la orden para "liberar las rutas".

Por otra parte, Aníbal Fernández y Ricardo Jaime se reunieron con algunas entidades del sector de transporte. Al finalizar la reunión, un dirigente declaró: "Hemos decidido levantar la medida porque ellos -por los ruralistas- ratificaron que se puede cargar cereal y vamos a trasladar los cereales a puerto".

Frente al clima de tensión, la ME, en un comunicado de prensa, señaló estar "a la espera de una urgente convocatoria" del Gobierno e instó a los productores a manifestarse "sin afectar el orden público ni los legítimos derechos de los demás conciudadanos".

Sábado 14 de Junio

Por la mañana, los productores agropecuarios de Gualeguaychú se reunieron en la Ruta Nacional N° 14 para debatir la continuidad del corte. Al hacerse presente la Gendarmería con una orden de desalojo decidieron permanecer sentados en la ruta y cuando el jefe de la División de Gendarmería de Gualeguaychú leyó la orden judicial, los ruralistas extendieron el corte a ambos carriles, razón por la cual, la Gendarmería comenzó a rodearlos. Ante esta situación, transmitida por los canales de televisión y comunicada a través de mensajes de texto enviados desde los celulares, la gente comenzó a acercarse al corte en apoyo a los productores. A su vez, estos cruzaron tractores, maquinarias y piedras en la ruta para impedir el paso. Luego de forcejeos, la Gendarmería se dispuso a desalojar la ruta y detuvo a diecinueve ruralistas, entre ellos a Alfredo de Angeli, Juan Ferrari, Raúl Sobredo, Ignacio Maggio y Emilio Cocaro.

Al enterarse de lo sucedido, los productores agropecuarios que habían levantado la medida de fuerza, volvieron a cortar las rutas de las distintas

localidades del país, apoyados por las cuatro entidades agrarias. Mientras que el sector de transportistas que había pactado con el Gobierno se mantuvo fuera de las rutas, la CATAC continuó apoyando a los ruralitas. Por su parte, los trabajadores de ómnibus de larga distancia, agrupados en la UTA, realizaron un paro total de actividades, aduciendo que no contaban con ninguna garantía para prestar el servicio de forma regular.

Existieron diferentes negociaciones para liberar a los diecinueve ruralistas, entre ellos intervino el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y el diputado Emilio Martínez Garbino. Entrada la tarde los productores fueron liberados ante la presencia de varios manifestantes que se habían reunido en la puerta del juzgado para pedir por la libertad de los detenidos.

Mientras transcurrían estos acontecimientos en la provincia de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires se realizaban manifestaciones a favor y en contra de la medida tomada por el Gobierno. Decenas de personas se congregaron frente a la quinta presidencial de Olivos, donde realizaron un cacerolazo con banderas argentinas y pancartas con la leyenda "¡Fuerza, campo!", en repudio al desalojo de los ruralistas de Gualeguaychú. Los militantes kirchneristas dividieron sus fuerzas, algunos estuvieron frente a la quinta de Olivos, otros fueron ocupando lugares simbólicos como la Playa de Mayo, que para la noche, quedó ocupada con las banderas de Barrios de Pie, Aukache, FTNP y la FTV. Allí también se hicieron presentes Néstor Kirchner, Julio de Vido, Ricardo Jaime y Nilda Garré; así como Hebe de Bonafini, Teresa Parodi y el legislador porteño Juan Cabandié. Por otra parte, en varios barrios porteños como Belgrano, Palermo, Recoleta y Caballito, se realizaron cacerolazos y bocinazos en apoyo a los productores.

En el interior de la quinta presidencial de Olivos se encontraban reunidos la Presidenta, Néstor Kirchner, el Secretario Legal y Técnico de la Nación, Alberto Fernández y Aníbal Fernández, donde decidieron que se realizaría una conferencia de prensa en la Casa Rosada. En la misma, Alberto Fernández señaló que "Los cortes afectan a todos los argentinos, los dejan sin comida y generan un clima de intranquilidad pública" y agregó que "si el Gobierno cediera, la gobernabilidad quedaría seriamente afectada".

Desde la oposición, le solicitaron al vicepresidente Julio Cobos que diera marcha atrás con las retenciones móviles y que retirase las fuerzas de seguridad.

Domingo 15 de Junio

Tanto en la provincia de Entre Ríos como en Santa Fe, los transportistas autoconvocados y los productores mantuvieron cortada las rutas en varias localidades. En todos los casos se permitió circular a ómnibus y automóviles particulares y se impidió el paso de camiones que transportaban granos; en algunos bloqueos tampoco se dejó transitar a los que llevaban ganado en pie. Por su parte, el Gobernador santafesino se reunió con el Ministro de Gobierno y legisladores socialistas, al finalizar el encuentro sacaron un comunicado instando a la presidencia a que convocase a una solución pacifica del conflicto.

En la provincia de Córdoba, el corte más importante se realizó en Bell Ville, donde se interrumpió totalmente el paso de cualquier tipo de vehículo. También se registraron bloqueos de ruta en la provincia de La Pampa encabezados por el Movimiento de Autoconvocados y la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (AAGLP), los cortes duraron de media a cinco horas y se efectuaron en toda la provincia, excepto en la localidad de Santa Rosa.

Por otra parte, tanto los transportistas de cargas asociados en la CATAC como la UTA decidieron levantar los bloqueos para festejar el Día del Padre.

Frente a los cortes de ruta la Presidenta declaró desde la quinta presidencial de Olivos: "No voy a dejar que me extorsionen. Nos quieren golpear institucionalmente y afectar a la gente con desabastecimiento y no lo voy a permitir".

Mientras que desde la vicepresidencia de la Nación, Julio Cobos, publicó una carta abierta en la que pedía por el diálogo y planteaba "dejar atrás los agravios, la búsqueda de culpables, la intolerancia y esforzarnos entre todos para encontrar una solución".

Lunes 16 de Junio

Frente al agravamiento del conflicto, el jefe del bloque de diputados de la CC, Adrián Pérez, pidió que se tuviese en cuenta la convocatoria de Cobos y expresó, al igual que el Gobernador de Córdoba y de Santa Fe, su postura a favor de un diálogo entre las cuatro entidades y el Gobierno, donde quedasen superadas las diferencias.

En Gualeguaychú se realizó una multitudinaria concentración en la que Alfredo de Angeli declaró "Si nos agreden, vamos a responder con pacificación" y convocaron para el día miércoles a un encuentro ecuménico donde invitaron "a la Iglesia Católica, a los pastores y a todas las religiones, en todos lo lugares donde nos estamos manifestando, para demostrar que primero está la paz". Mientras se mantenían los cortes en diferentes puntos de la provincia, la Cámara de Diputados de Entre Ríos sesionó en conferencia y recibió a nueve productores, cinco autoconvocados y cuatro de la ME, que participaron con el objetivo de conseguir la remoción de la Resolución N° 125/08.

En la provincia de la Pampa, en la ciudad de Catrilcó los productores impidieron la salida de un tren con un importante cargamento de cereales que tenía como destino final el puerto de Bahía Blanca.

También en Santa Fe se realizaron cortes en diferentes puntos de la provincia. Mientras que los productores autoconvocados se mantuvieron al costado de la ruta en las localidades de Piñero, Cuatro Esquinas, Pérez y General Lagos; en Irigoyen, Malabrigo y Reconquista cortaban cada dos horas el paso vehicular. A su vez, el ingreso a la ciudad de Franck fue totalmente bloqueado por los transportistas.

Por otra parte, en la ciudad de Rosario se realizó una manifestación con bocinas y cacerolazos por las calles céntricas que finalizó en el Monumento a la Bandera, donde le reclamaron al Gobierno Nacional que convocase a las entidades rurales al diálogo. Por la noche, también se realizaron cacerolazos en las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca y Buenos Aires en apoyo "al campo".

En Buenos Aires, las cacerolas se escucharon en los barrios de Palermo, Recoleta, Belgrano y Caballito. Así también, se realizó un bocinazo frente a la residencia de Olivos del que participó Hugo Biolcati. Desde allí los manifestantes opositores al Gobierno marcharon por Avenida del Libertador hacia el Obelisco y se concentraron en la Plaza de La República. En contrapartida y a favor del Gobierno, a partir de las 22:00 hs varios grupos como el MTD-Evita, la Juventud Peronista (JP)-Identidad, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) y La Cámpora se dirigieron hacia la Plaza de Mayo, con el objetivo de impedir la llegada de los manifestantes que se encontraban en la Plaza de La República.

El conflicto se traslada al Parlamento

Martes 17 de Junio

A través de la cadena nacional de radiodifusión, la presidenta Cristina Fernández anunció: "Esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace noventa días corta rutas, voy a enviarla al Parlamento como proyecto de ley por si no les basta con esta Presidenta, que hace seis meses obtuvo el 46 por ciento de los votos". De esta manera, el Gobierno trasladó el debate por los derechos de exportaciones al Congreso Nacional.

Las entidades rurales mostraron satisfacción frente a la decisión del Gobierno, aunque decidieron permanecer en las rutas. Buzzi declaró: "Esperemos que el Congreso sea ámbito de discusión y no actúe como escribanía y certificación"; mientras que Llambías expresó que "El anuncio del Gobierno no nos hace olvidar de los problemas de la lechería, el trigo, los cítricos, muchos cultivos regionales, las dificultades de los productores por la crisis energética, la falta de gasoil".

En la provincia de La Pampa, se continuaron con los cortes en Catrilcó y se volvió a paralizar la salida de un tren que cargaba cereales, ya que algunas acopiadoras intentaron seguir sacando la mercadería más allá del paro.

A su vez, en la provincia de Buenos Aires se realizaron algunos escraches, en particular al intendente de Bragado, Aldo San Pedro, y al legislador del FPV, Darío Durretti, quien presidía la Comisión de Asuntos Agropecuarias de la Cámara baja provincial. Como no fueron encontrados en la Municipalidad, los manifestantes fueron hasta sus domicilios particulares.

En la provincia de Entre Ríos, en las localidades de Viale, María Grande, Tabossi y Crespo, varios productores bloquearon con maquinarias la entrada de las municipalidades para exigirles a sus respectivos intendentes que se pusieran al frente del reclamo.

También en la provincia de Santa Fe, productores autoconvocados cortaron el tránsito sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad de Fighiera; en el acceso sur de San Lorenzo y en la intersección de la Ruta Nacional N° 10 y la N° 11.

A la vez productores rurales realizaron bloqueos de ruta en las localidades cordobesas de La Carlota, Sinsacate, Bell Ville y Marcos Juárez.

Mientras que, tanto en Monte Cristo, provincia de La Pampa, como en la intersección de las rutas nacionales N° 16 y N° 95, en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, los productores agropecuarios y transportistas impidieron en forma total el transito vehicular.

Por otra parte, Néstor Kirchner realizó una rueda de prensa donde rectificó la decisión de realizar un acto en apoyo al Gobierno al día siguiente y expuso: "El acto es en defensa del sistema democrático y de poder convivir pensando diferente sin caer en el autoritarismo divisor, con pluralidad de ideas". La convocatoria al acto fue apoyada por múltiples organizaciones, entre ellas, la CTA, la CTERA, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo, los firmantes de Carta Abierta, Tupac Amaru, Patria Grande. Todas estas organizaciones firmaron un documento conjunto en el que plantearon concurrir a la manifestación desde "nuestra propia identidad y sin ahorrar críticas al Poder Ejecutivo, pero en respaldo de la institucionalidad democrática y de las medidas progresivas que enfurecieron a una nueva derecha que usa la retórica del diálogo y se envuelve en los símbolos nacionales, mientras pretende imponer por la fuerza del lock-out y el desabastecimiento una política distinta a la que la mayoría del pueblo votó hace pocos meses y en defensa de sus ganancias extraordinarias".

A su vez, el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, se expresó a favor de la decisión de la Presidenta de enviar el proyecto de las retenciones móviles al Congreso de la Nación. En el comunicado argumentaba que el proyecto promovería la diversificación productiva y ayudaría a la seguridad alimenticia nacional.

Miércoles 18 de Junio

Tal como lo venía anunciando Néstor Kirchner días atrás, se realizó un acto a favor de las retenciones móviles y en apoyo al Gobierno en la Plaza de Mayo. Allí, la Presidenta criticó el accionar de las cuatro entidades y la modalidad de cortar las rutas; al respecto, señaló que "Cuatro personas a las que nadie votó y nadie eligió nos decían a los argentinos quién podía andar por las rutas". Frente a la decisión de aumentar las retenciones, declaró: "Cuando tomé decisiones, no lo hice para perjudicar a nadie. Las tomé para que todos los argentinos pudiéramos vivir un poco mejor. Es imprescindible garantizar la mesa de los argentinos", el discurso fue emitido por cadena nacional.

El acto fue multitudinario, pero aún así faltaron muchos dirigentes que estaban invitados especialmente para el acto, el primer ausente fue el vicepresidente, Julio Cobos, quien no asistió y escuchó el discurso desde el senado. También faltaron el gobernador cordobés Juan Schiaretti, el chubutense Mario Das Neves y el de Salta, Juan Manuel Urtubey. Además sucedió un hecho desgraciado, un joven tucumano murió al desprenderse un farol que lo golpeó en la cabeza cuando recién se estaban acercando las primeras columnas de manifestantes a la Plaza de Mayo.

Desde los distintos espacios de la oposición el discurso no fue bien recibido. Elisa Carrió dijo que "La concepción de la democracia de la Presidenta es radicalmente autoritaria, porque si la sociedad no puede expresar su voz se trata de una monarquía electiva y no de una democracia". Por otra parte, el diputado Claudio Lozano planteó que "éste es el gobierno de las medias verdades, dice que las retenciones sirven para frenar los precios de los alimentos y los alimentos subieron; habla de soberanía nacional y vendió la cordillera completa a la minería y habla de los trabajadores y no les da libertad sindical".

Por su parte, los representantes de las entidades rurales escucharon el discurso desde la sede de la Rural en Palermo, Buzzi planteó: "Valoramos el gesto democrático de poner el tema en el Congreso, pero queremos señalar que no estamos de acuerdo con el proyecto tal como se lo envió". La ME en su conjunto solicitó que se abriera el juego para que surgieran modificaciones al proyecto oficial. Frente al discurso de la Presidenta, Buzzi afirmó: "No somos desestabilizadores, golpistas ni desabastecedores" y plantearon seguir adelante con la medida de los cortes de ruta.

Mientras tanto, se mantuvieron los cortes de ruta en las localidades entrerrianas de Crespo, Paraná, Chajarí, Basavilbaso y Gualeguaychú.

Jueves 19 de Junio

El proyecto enviado por el Ejecutivo ingresó en la Cámara de Diputados, allí los diferentes bloques oficialistas y de oposición sentaron posiciones frente a qué estrategia adoptar para la discusión sobre las retenciones. Frente al anuncio el sector de transportistas decidió flexibilizar su posición y se fue retirando de las rutas, sin embargo, los ruralistas mantuvieron la medida.

Con respecto al proyecto de Ley, desde el bloque oficialista buscaron la ratificación del proyecto de las retenciones móviles, pero a la vez estu-

diaron otras iniciativas complementarias, como la ampliación de las facultades de la ONCCA, una ley de arrendamientos y la creación de un Plan Nacional para el Desarrollo Agropecuario. Desde la oposición, el PRO, la UCR, la CC y el peronismo disidente, intentaron elaborar un proyecto único frente al Congreso, pero lo único que llegaron a establecer en común, fue su posición contra las retenciones móviles.

Mientras tanto, el vicepresidente, Cobos, intentando resolver el conflicto por otra vía, convocó a una reunión para el día lunes a diferentes gobernadores. Entre ellos, habló con los gobernadores de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Tucumán, Santa Fe y Salta.

Por otra parte, la decisión de los productores de visitar las casas de los legisladores para conversar sobre las retenciones móviles, fue cuestionada desde el Gobierno. A su vez, motivó una fuerte advertencia del jefe del bloque del kirchnerismo en Diputados, Agustín Rossi. En Córdoba, los productores planificaron una cruzada de presión pública sobre los cuatro diputados del kirchnerismo: Bedano, Alberto Cantero, Patricia Vaca Narvaja (los tres del PJ) y Cecilia Merchán, de Libres del Sur. En el caso de Merchán los militantes de Libres del Sur salieron a defender a su diputada planteando que realizarían un escrache a la casa del titular de la SRA, Luciano Miguens, en la Capital Federal. En este sentido, declararon: "Así como ellos decidieron ir a los domicilios de los diputados nacionales, nosotros vamos a ir a las casas de los dirigentes ruralistas a explicarles por qué estamos a favor de las retenciones". Por su parte el Gobernador de Córdoba, quien no había asistido al acto en la Plaza de Mayo y había tomado distancia del Gobierno, se pronunció en contra del paro agropecuario e instó a los ruralistas a retomar el diálogo.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Madres de Plaza de Mayo lanzó una campaña en defensa de la democracia y de la distribución de la riqueza. Hebe de Bonafini acompañada por Julio Piumato y Emilio Persico[20], en una conferencia de prensa declaró que la campaña consistiría en repartir pañuelos blancos, que luego serían anudados en la Casa Rosada a la manera de un vallado, con la inscripción de "No Pasaran"; además, señaló que detrás del paro agrario se ocultaba un golpe de Estado.

Por otro lado, la Federación de la Industria Molinera (FAIM) denunció públicamente a la ME por no cumplir con su palabra de levantar la medida de no comercialización de granos con destino nacional. Denunciaron que

20 Julio Piumato se encontraba presente en carácter de secretario de Derechos Humanos de la CGT y Emilio Pérsico en carácter de representante del Movimiento Evita.

en diferentes zonas del país, se había bloqueado el tránsito de los camiones con granos y que la industria se había paralizado debido a la falta de trigo.

De las rutas a las carpas en la Plaza del Congreso

Viernes 20 de Junio

Las entidades agrarias decidieron levantar los cortes de ruta y asegurar la comercialización de granos, si bien no todos estaban de acuerdo, la decisión se tomó por mayoría. En algunas zonas como en Gualeguaychú y Paraná, algunos productores se mantuvieron al costado de la ruta reclamando que el conflicto de las retenciones era más amplio que la cuestión de la soja y que el sector necesitaba una política agropecuaria destinada a producciones como la leche y la carne. Alfredo de Angeli, planteó que la presencia en las rutas se trasladaría a la Plaza del Congreso y anunció que pondrían una carpa frente al Congreso, para explicarles a los diputados la necesidad de derogar la medida de las retenciones móviles.

En la provincia de Entre Ríos, los productores se reunieron con legisladores del FPV en la Bolsa de Cereales local para plantear sus necesidades. En Santa Fe, a pesar de la decisión de levantar el paro, varios productores continuaron con los cortes de ruta, así lo determinaron en las asambleas de Artesana, San José de la Esquina, Firmat, Chañar Ladeado, Los Quirquinchos, Beravebú, Godeken y Piñero, entre otras.

El oficialismo insistió en la Cámara de Diputados con la necesidad de ratificar las retenciones móviles pero continuó en la búsqueda de alternativas y leyes complementarias para modificar el proyecto de las retenciones. Evaluó la posibilidad de sancionar una ley de arrendamientos, facilitar el pago de reintegros directos a pequeños y medianos productores sin exclusiones y también reconvertir el Programa de Redistribución Social en un fondo que se distribuiría privilegiando a las provincias sojeras que aportan más al fisco a través de las retenciones.

Por otra parte, sectores de la oposición, como el PRO, Recrear, Unión Celeste y Blanco, la CC y la UCR, evaluaron la posibilidad de presentar un proyecto alternativo de forma conjunta, pero no lograron ponerse de acuerdo. Aún así se manifestaron a favor de derogar la Resolución N° 125/08.

Sábado 21 de Junio

Frente al levantamiento del paro agrario, la presidenta Cristina Fernández envió un fax a los cuatro presidentes de las organizaciones rurales para citarlos a hablar en una reunión en la Casa Rosada, para el día lunes a las 18:00 hs. La convocatoria no era para discutir sobre las retenciones, sino para hablar sobre el sector lácteo, el trigo, el sector ganadero y las economías regionales. Las cuatro entidades tomaron como positiva la invitación y plantearon que más allá de las retenciones, que se discutirían en el Congreso, querían discutir sobre política agraria.

A su vez, la Presidenta junto a Aníbal Fernández, se reunieron con el jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, y con el del senado, Miguel Pichetto, para discutir sobre el proyecto de la 125 y la posibilidad de establecer leyes complementarias que beneficiasen a los pequeños y medianos productores.

Frente al anuncio de Alfredo de Angeli de instalar una carpa en repudio a las retenciones móviles frente al Congreso, la agrupación kirchenista "Compromiso K" se le adelantó e instaló en la Plaza del Congreso tres carpas para hacer campaña a favor del proyecto de las retenciones móviles. El dirigente de la agrupación, Damián Barijhoff, planteó que las carpas serían para realizar charlas y conferencias informativas sobre las retenciones y que allí darían su apoyo las organizaciones Libres del Sur y Movimiento Evita.

Lunes 23 de Junio

En la reunión entre la ME y el Gobierno, los dirigentes reclamaron por la derogación de las retenciones móviles, frente a lo cual la Presidenta insistió que el tema sería discutido por el Congreso exclusivamente. Alberto Fernández leyó un informe de la Aduana y enseñó algunos gráficos donde se mostraba un crecimiento de las ventas al exterior de granos del 28 % en cantidad y del 63 % en dólares entre enero y mayo del 2008. Las estadísticas sirvieron para reprochar a los dirigentes agrarios las acciones de corte de ruta y desabastecimiento generado en los últimos meses del conflicto.

Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos se reunió en su despacho del Senado con gobernadores de distintas provincias, entre ellos, Juan Schiaretti, de Córdoba; Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis y el socialista Hermes Binner, de Santa Fe. Con respecto a este encuentro, Aníbal Fer-

nández declaró "El debate hoy en día está en la Cámara de Diputados. No entendí muy bien para qué se abrió un debate en paralelo en el Senado, porque ni siquiera el Senado tiene el tema en sus manos todavía, ni siquiera sabe lo que va a tratar".

El debate en la Cámara de Diputados se inició a la nochecita con la presencia de representantes de las cuatro entidades agrarias. Se trabajó en la Comisión de Agricultura, donde se plantearon diferentes proyectos como una ley para el precio pleno del trigo, la promoción de la lechería, el fomento a la producción de la carne, la ampliación de las facultades de la ONCCA y sobre todo, el eje central de interés, fueron las retenciones móviles.

La estrategia del oficialismo giró en torno a producir el marco legal para muchos acuerdos que ya tenía establecidos con las entidades agropecuarias, como el sistema de compensaciones para el trigo, la soja y el maíz, y el subsidio a fletes para las exportaciones. A su vez, Agustín Rossi, continúo con la búsqueda de alianzas con otros sectores, sin mucho éxito.

Desde la oposición, la UCR, la CC, y el PRO, volvieron a pedir por la derogación de las retenciones, pero no lograron presentar ningún proyecto común. Otro núcleo opositor estuvo compuesto por los diputados del SI y el diputado Claudio Lozano, quienes señalaron que no se podía estar discutiendo el tema de aplicar mayores retenciones cuando las retenciones del 35 % no venían siendo pagadas. En este sentido, presentaron un informe en el que expusieron que las cerealeras trasnacionales evadieron 1.450 millones de dólares en retenciones y además, presentaron una lista de las veintidós empresas más beneficiadas por defraudación fiscal en la liquidación de las retenciones en el período del 11 de septiembre al 31 de marzo de 2008, en la cual entre las primeras evasoras se encontraban, Bunge Argentina, LDC Argentina, Cargill, Aceitera General Deheza, Vicentín y Molinos Ríos de la Plata.

Mientras tanto, afuera del Congreso, además de las carpas instaladas en apoyo al proyecto de ley oficialista, los representantes de las cuatro entidades levantaron al otro lado de la plaza una nueva carpa, llamada "carpa verde", para manifestarse en contra de las retenciones móviles. Si bien el Jefe de Gobierno porteño quiso erradicar las carpas argumentando que no tenían permiso para instalarse allí, la Policía Federal no se presentó en el lugar y los funcionarios tuvieron que retirarse.

Martes 24 de Junio

Los dirigentes de la ME se reunieron con diferentes bloques de diputados para plantear la necesidad de discutir el proyecto de las retenciones móviles. Por un lado, se reunieron con la conducción del bloque kirchnerista. Por otro lado, Alfredo de Angeli y los productores autoconvocados de Entre Ríos y Santa Fe se juntaron con los legisladores socialistas. A su vez los presidentes de la Bolsa de Cereales y los autoconvocados bonaerenses se reunieron con la UCR, la CC y el PRO. Mientras tanto, el Gobernador de Entre Ríos se reunió con legisladores alineados con el Gobierno y también con el intendente de Paraná.

La Presidenta de la Nación junto con Florencio Randazzo y Julio de Vido, recibieron al gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, quien viajó a Buenos Aires, para expresarle su preocupación en cuanto a la aplicación de las retenciones en su provincia.

Asimismo, en la reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados estuvieron presentes el FNC, el Foro de Agricultura Familiar y representantes de los pueblos originarios, quienes intentaron expresar su opinión frente a las retenciones y plantearon sus necesidades de una nueva política agropecuaria, pero su discurso fue permanentemente interrumpido por los diputados del PRO, la UCR y la CC, que planteaban que lo único que querían hablar era de la Resolución N° 125/08 y amenazaban con retirarse del recinto si no se discutía al respecto. Los referentes del FNC expusieron que venían siendo negados desde hacía mucho tiempo y que venían sufriendo el deterioro de los cultivos tradicionales y de los bosques nativos, por la expansión de la soja transgénica. Por otra parte, frente a las retenciones Luis Horacio Santucho, integrante del FNC, señaló: "Estamos de acuerdo con las retenciones, pero queremos que el Fondo de Redistribución Social sirva para mejorar también a nuestro sector. Pedimos por la redistribución de tierras para aquellos que sufrimos el despojo en la mal llamada Campaña del Desierto, en las diferentes Dictaduras Militares y ahora con la soja".

Por otra parte, organizaciones campesinas, indígenas y de agricultura familiar de todo el país realizaron un primer encuentro en Rosario en el que conformaron la Mesa Coordinadora Nacional y plantearon la necesidad de diferenciarse de las cuatro entidades agrarias[21]. Si bien las

21 Las organizaciones que formaron parte del encuentro fueron: el FNC (MOCASE Juríes, MOCAFOR, MOCAJU e Hijos del Monte), las Ligas Agrarias, el MNCI (MOCASE Vía Campesina, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Movimiento

organizaciones coincidieron en apoyar las retenciones móviles con reintegros a los pequeños productores, reclamaron subsidios y una clara política estatal en apoyo al sector de la agricultura familiar.

Miércoles 25 de Junio

Roberto Urquía, senador por el FPV, renunció a sus dos cargos dentro de la Cámara de Senadores, como presidente de la Comisión de Presupuesto, así también a la Cámara de Agricultura, Ganadería y Pesca. Planteó que estaba en desacuerdo con las retenciones móviles por lo tanto consideró que lo mejor era dar un paso al costado.

Mientras que el titular de la SAGPyA, Javier De Urquiza, declaró que el Gobierno dispondría de una investigación para revisar el aumento de la exportación de granos durante el paro agrario; en el ámbito del Congreso, el oficialismo trabajó sobre posibles modificaciones al proyecto de las retenciones móviles. Algunos representantes de bloque declararon: "Somos el bloque oficialista, no haremos nada que esté en disonancia con la decisión del Gobierno". Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista en diputados, se reunió con Alfredo de Angeli para discutir sobre la posibilidad de modificación del proyecto de retenciones móviles y sobre la fecha en que la misma se trataría en la Cámara de Diputados.

Campesino de Misiones, Encuentro Calchaquí de Salta, Comunidades Unidas de Molinos de Salta, red Puna de Jujuy, Sercupo, organizaciones de Buenos Aires), la Coordinadora de Comunidades Indígenas y Trabajadores Rurales de Argentina, el Poriajhu Vía Campesina, el CAI, la Coordinadora Mapuche Neuquina, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, la Cooperativa Nor Patagónica Movimiento Evita, el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas, la Mesa de Pequeños Productores del Chaco, la Asociación de Mujeres Campesinas – Entre Ríos, la Unión de Pequeños Productores del Chaco, los Productores Minifundista "La Nueva Estrella", la Fuerza Criolla, el Consejo Asesor Cooperativo de Río Negro, la Comisión Central de Campesinos, la Unión Trabajadores Rurales - Misiones, la Unión de Trabajadores Técnicos Rurales de Misiones, la Agrupación Padre Mujica, la Cooperativa de Trabajo Icecoop, Pequeños Productores Villar Berm, el Foro de Agricultura Familiar – Entre Ríos, el Observatorio del Sur, el Taller Ecologista, la CPN-asesora, la FA JAHA ITATU, la mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe, el Movimiento Norte Grande, la Asociación Biodinámica Argentina, los Huerteros urbanos de Rosario, la Cooperativa Surco, la Lof. Mapuche "Mariano Solo", la Caudal - Salta, el Em Renguedo-Rosario-La Colmena, la UFA, la Escuela de la Familia Agrícola "Mensú Peguera", el Desarrollo Rural – CHACO, la Escuela de la Familia Agrícola "Ñamembae", la Cooperativa Agropecuaria AF, la Escuela de la Familia Agrícola Coembota, los Productores Unidos Santiago Liniers, el Foro de Agricultura Familiar – Chaco, la Unión de Organizaciones de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa, la Escuela de la Familia Agrícola "Pejú Porá", la Organización Tierra Nuestra, la Cooperativa de Productores de Hermoso Campo Ltda., el Movimiento Agrario Correntino, el Movimiento Agrario de Misiones, la Asociación de Productores ARCAN - Río Negro, el Frente Campesino Por Tierra y Trabajo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Jujuy.

Jueves 26 de Junio

Los dirigentes de las entidades rurales, se reunieron con representantes del PRO, la CC, la UCR, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Demócrata y los diputados del peronismo disidente Francisco De Narváez y Norma Morandini, para analizar las consecuencias de las retenciones móviles. También por la tarde, recibieron a productores autoconvocados, encabezados por Alfredo de Angeli.

Por otra parte, el bloque oficialista continuó discutiendo modificaciones e incluso nuevos proyectos para conseguir la aprobación del proyecto sin sobresaltos. En este sentido, los diputados kirchneristas apoyarían, con algunos agregados, el proyecto de Eduardo Macaluse del bloque SI, para avanzar en la reforma de la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales[22]. A su vez, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se reunió con los diputados y senadores kirchneristas de su provincia y los intendentes de Gualeguaychú y Gualeguay para proponer una medida que diferenciara a los productores entrerrianos de los pampeanos. Otro de los diputados que planteó modificaciones fue Felipe Solá, quien propuso que parte de las retenciones se tomaran como un anticipo del pago del Impuesto a las Ganancias, que era coparticipable, unificando así reclamos de productores y gobernadores.

Mientras que en la Plaza del Congreso se siguieron instalando carpas. A la "carpa verde" en representación de las cuatro entidades rurales y las cinco carpas a favor de las retenciones, se sumó la del Movimiento al Socialismo (MAS) que sostuvo la postura de "Ni con el campo ni con la oligarquía".

Viernes 27 de Junio

Se realizó una movilización en apoyo al acampe kirchnerista frente al Congreso donde distintos grupos oficialistas dieron su apoyo al proyecto de las retenciones móviles, entre ellos Libres del Sur, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el FTNP, el Movimiento Popular de Liberación, la FTV y la JP. También participaron algunos diputados como Carlos Kunkel, Cecilia Merchan, Jorge Coscia y el socialista Ariel Basteiro. Algunos de los oradores del acto fueron Julio Piumato de la CGT, Eduardo Sigal del

22 Con la reforma de esta Ley se intentaría desalentar la actuación de los "pools de siembra" a través del arrendamiento. En este sentido, los diputados del kirchnerismo, Luis Ilarregui y Beatriz Alperovich, proponían extender el período mínimo del alquiler a cinco años.

Frente Grande, Pérsico del Movimiento Evita y el legislador porteño Juan Cabandié.

Por otra parte la carpa de los representantes del agro permaneció cerrada hasta que concluyó el acto, luego se reabrió con un espectáculo folklórico.

En lo que respecta al Congreso el proyecto de las retenciones móviles siguió en discusión. Las bancas opositoras, entre ellas UCR, la CC, el PRO, el PS, el Frente Justicia Unión y Libertad (Luis Lusquiños), el Movimiento Popular Neuquino y el Partido Renovador de Salta, además de los bloques individuales del Partido Liberal de Corrientes, el Demócrata de Mendoza, Guardia Peronista (Paola Spatola), Partido Unidad Federalista (Luis Patti) y Partido Nuevo de Córdoba distribuyeron, en la Cámara baja, un comunicado en el que se pronunciaron en contra de la Resolución N° 125/08 y expresaron que "los niveles de imposición deben ser razonables y no confiscatorios, permitiendo el aumento de la producción y de la inversión, atendiendo las realidades regionales y de los pequeños y medianos productores".

Desde otro lugar, el bloque kirchnerista buscó alternativas para la modificación del proyecto de la 125, Néstor Kirchner solicitó a sus legisladores que tuvieran "coraje" y votaran a favor de la ratificación del proyecto. En tanto, Agustín Rossi dejó correr la versión de una posible modificación a favor de los pequeños y medianos productores. Eduardo Macaluse indicó que si el oficialismo decidía realizar dicha modificación, la apoyarían, pero que las versiones que circulaban dentro de la Cámara habían sido contradictorias.

A su vez, en la Comisión de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados participó la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, quien realizó una exposición sobre el impacto ambiental del monocultivo de soja. Explicó que durante el período 1998-2005, el área sembrada de soja creció en el NEA un 400 % y en el NOA un 200 %, dejando como resultado la deforestación de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos.

Por otra parte, la ME se reunió en la sede de la CRA para analizar los avances que se registraron en la primera semana de discusión parlamentaria. Al salir Eduardo Buzzi y Luciano Miguens formularon un pedido de suspensión inmediata de las retenciones móviles hasta que se debatiese en el Congreso.

En la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Hasenkamp, se realizó un encuentro de productores de diferentes localidades, como Paraná, Nogoyá y Diamante. Allí, decidieron levantar el corte de ruta sobre el túnel subfluvial y buscar el apoyo de los intendentes.

Sábado 28 de Junio

Finalmente, el oficialismo decidió no modificar la presentación de la Resolución N° 125/08 y establecer una ley complementaria que beneficiara a los pequeños y medianos productores, estableciendo reintegros para todos aquellos que pagasen retenciones por encima del 35 %, brindándole mayor agilidad al cobro de las compensaciones. Y además resolvieron realizar un acuerdo favorable para los productores de lácteos y de trigo e incluir una modificación a la Ley de Arrendamientos, solicitada por la FAA.

Por su parte, el legislador Felipe Solá presentó un proyecto alternativo que establecía un tope a las retenciones móviles entre el 40 % y el 41 %, aclarando que las retenciones instrumentadas el 11 de marzo seguirían vigentes hasta el 1 de julio y que recién en esa fecha entraría en vigencia el paquete de modificaciones. El proyecto también planteaba ampliar la incidencia de las provincias en la instrumentación del Fondo de Redistribución Social y a su vez, crear un consejo de gobernadores que supervisara la administración de dicho fondo. El proyecto contaba con el apoyo de los diputados que respondían al gobernador entrerriano Jorge Busti, al cordobés Jorge Schiaretti y al senador santafesino Carlos Reutemann, como así también de los radicales kirchneristas que respondían al vicepresidente, Julio Cobos.

Aún cuando el proyecto de Solá fue recibido por la CC y el PRO, no logró la aceptación dentro de los respectivos espacios.

Frente al Congreso continuó el acampe de las distintas facciones. Mientras que en las carpas kirchneristas se proyectaron documentales y espectáculos infantiles; al otro lado de la plaza, donde se encontraban la carpa en favor a las entidades agropecuarias, ambientada con pasto artificial, se escuchó folklore y se repartieron tortas fritas. A su vez, sobre la Av. Rivadavia se colocó una pequeña carpa en la que los pueblos originarios reclamaban por haber sido expulsados de sus tierras ante el avance de la soja transgénica.

Por otro lado, Pedro Cerviño se alejó de su cargo como jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la FAA por diferencias con la conducción.

A su vez, en la Casa de la Cultura de La Paz, provincia de Entre Ríos, se reunieron pequeños campesinos que rechazaron la metodología de la protesta llevada adelante por la ME. Héctor Mendieta dirigente del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAS) planteó que apostaban a construir una alternativa a la dirigencia tradicional del sector agropecuario[23].

Domingo 29 de Junio

Mario Llambías planteó que "si se vota el acuerdo del capricho y la intolerancia del ex presidente de la Nación, evidentemente el conflicto sigue y no sólo será del campo, sino de otros sectores que ven con qué prepotencia se quiere manejar el destino del país". Otras de las voces que se hizo escuchar fue la de Alfredo de Angeli quien señaló que veían un escenario complicado para el debate en el Congreso ya que creía poco oportuna la presión del ex presidente. A pesar de estas declaraciones, la ME no se pronunció.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne, elaboró un comunicado de prensa, que llevó el titulo de "La carne no baja", donde denunciaron que los precios de los principales cortes populares se ubicaron un 40 % por encima de los valores de referencia acordados entre la cadena comercial, los frigoríficos y el Gobierno Nacional. El comunicado denunció que la cadena de comercialización se estaba quedando con una ganancia extra a costa de los consumidores y los otros eslabones de la cadena.

Lunes 30 de Junio

En la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la propuesta del bloque kirchnerista fue mantener la movilidad en las retenciones y buscó incluir leyes complementarias para acelerar los tiempos de la devolución de los compensaciones, a la vez agilizar el tramite para que fuesen más directas, incluir a los monotributistas y flexibilizar las presentaciones ante la AFIP y la ONCCA.

Por su parte, la oposición, la CC, la UCR y el PRO, se pronunció nuevamente en contra de la Resolución N° 125/08. Adrián Pérez, jefe de bloque de la CC explicó que su objetivo era establecer retenciones del 27 % pero que llegado el caso aceptarían negociar volver al 35 %. Por el PRO, Fede-

23 El FONAS agrupa a más de 300 entidades de pequeños productores, entre los cuales algunos provenían de la FAA.

rico Pinedo señaló que rechazaban la política de precios impuesta por el Gobierno por considerarla represiva a la producción.

En cambio, los Socialistas y el SI declararon que si la Resolución N° 125/08 se modificaba a favor de una segmentación de las retenciones diferenciando a los pequeños de los medianos productores aceptarían la propuesta oficial. Además Eduardo Macaluse (SI) reclamó que el oficialismo debía expresarse frente a la denuncia de evasión por 1.450 millones de dólares realizada por las grandes exportadoras.

Luego de sesionar, el oficialismo se reunió con diferentes diputados, como Felipe Solá, los del SI y con Oscar Aguad de la UCR. Allí el oficialismo pidió veinticuatro horas para definir dentro de su bloque el dictamen que llevaría a las comisiones legislativas.

Mientras tanto, en la Plaza del Congreso, la ME decidió levantar la "carpa verde" con la intención de descomprimir el conflicto. A pesar de esta decisión, el MIJD, liderado por Raúl Castells, colocó una nueva carpa en repudio a las retenciones móviles. Así también permanecieron los inflables, el toro y la paloma, y la carpa del MST, donde participó Vilma Ripoll en repudio a las retenciones. Como también se mantuvieron las carpas a favor de las retenciones de las distintas facciones del oficialismo.

Martes 1 de Julio

Durante la jornada, aproximadamente ciento veinte diputados, de los ciento veintinueve que tenía el bloque de diputados kirchneristas, debatieron la ratificación del proyecto del Gobierno a favor de las retenciones móviles. En el encuentro, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, presentó un proyecto alternativo, el cual según él, corregía y disminuía la curva de las alícuotas sobre las retenciones móviles. Este proyecto no obtuvo quórum y el diputado declaró que se comprometería a acatar la decisión de la mayoría. La principal crítica que recibió su iniciativa fue que la misma ratificaba la Resolución N° 125/08 sin diferenciar entre pequeños y medianos productores y que, a su vez, establecía una alícuota máxima del 55 % para todos. Luego de este debate, el kirchnerismo resolvió ratificar el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo pero con modificaciones para defender a los pequeños y medianos productores. Según voceros de la Comisión de Agricultura y Ganadería, hubo tres posturas principales: votar el proyecto del Ejecutivo tal cual había sido en-

viado, cambiarlo todo o apoyar la iniciativa pero incluyendo un conjunto de modificaciones.

En tanto, la mayoría de la oposición, por primera vez desde que el Gobierno envió las retenciones móviles al Congreso, consensuó un proyecto común, firmado por catorce bloques y monobloques que incluían a la UCR, la CC, el PRO, el Partido Unidad Federalista, el PS, el peronismo disidente y algunos partidos provinciales. De esta manera, presentaron un dictamen con tres ejes centrales: suspender la Resolución N° 125/08 por ciento cincuenta días, fijar la alícuota de 35 % para las exportaciones de soja e implementar una segmentación que establecía una retención del 27 % a las primeras mil doscientas toneladas exportadas.

Asimismo, las entidades agropecuarias nucleadas en la ME reiteraron el pedido de suspensión de las retenciones móviles en forma provisoria por ciento ochenta días frente a quinientos intendentes que participaron de un encuentro con productores agropecuarios en la Ciudad de Buenos Aires y retomaron el vínculo con Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación. A su vez, intendentes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa pidieron la suspensión de la Resolución N° 125/08 y exigieron la coparticipación de lo recaudado.

Por su parte, en un acto por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, en la provincia de Chaco, Néstor Kirchner se refirió al conflicto con las entidades del agro y sostuvo que lo que estaba en juego era "la mesa de los argentinos, que no puede estar subordinada a los precios internacionales. O la defendemos, o nuestro pueblo va a estar condenado al aumento de los precios, al desabastecimiento y nuevamente a la pobreza". Paralelamente al acto, los productores de esta provincia se concentraron al costado de las rutas nacionales N° 16 y N° 95, a la altura de Roque Sáenz Peña.

En Buenos Aires, un grupo de productores montados a caballo cruzaron el puente de Barracas con la intención de avanzar hacia el Congreso, pero un escuadrón de la Guardia de Infantería de la Policía Federal les impidió continuar ya que en la ciudad está prohibida la circulación de caballos. En la Plaza del Congreso, el dirigente del MIJD, Raúl Castells, y productores agropecuarios autoconvocados inauguraron una carpa de apoyo al sector agropecuario, en el mismo lugar donde funcionó la carpa verde que habían levantado las cuatro entidades del agro.

Durante un acto en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, del que participaron el gobernador, Daniel Scioli y un grupo de intendentes

de esa provincia, se hizo presente un grupo de productores agropecuarios autoconvocados que arrojaron huevos, insultaron y golpearon a algunos de los jefes comunales.

Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al vicepresidente de la FAA de esa provincia, Juan Echeverría, a la pena de dos años de prisión condicional por el delito de evasión impositiva simple, debido a un importe impago de IVA por unos 365 mil pesos.

En otro orden de cosas, la ONCCA afirmó que en los últimos tres meses había otorgado un promedio de 10 millones de pesos diarios en concepto de compensaciones a productores y que el monto equivalía a un 50 % más que lo abonado durante el año 2007 siendo las empresas industriales de los sectores avícola, molinero y lácteo las principales beneficiarias de estas compensaciones.

Miércoles 2 de Julio

El jefe de la bancada de diputados kirchnerista, Agustín Rossi, por la mañana se reunió con Claudio Lozano, diputado por Proyecto Sur, quien planteó sus condicionamientos para acompañar el proyecto oficial. Por la noche, luego de no acordar con el kirchnerismo, Lozano presentó su propio dictamen e insistió en que el Gobierno debía aclarar "la evasión fiscal" de 1.450 millones de dólares que las cerealeras acumularon pagando menos retenciones de las vigentes al momento de su exportación. Además, el diputado opinó que el proyecto del oficialismo debería extender las compensaciones a las mil toneladas para la soja y dos mil quinientas para el maíz y además, profundizar la segmentación. Por la tarde, Agustín Rossi se reunió con Jorge Solmi, abogado de la FAA, buscando, sin éxito, el apoyo de esta entidad al proyecto oficial de retenciones móviles antes de presentar su dictamen definitivo. Por su parte, Elisa Carrió volvió a marcar su oposición al proyecto de retenciones móviles mayores al 35 % y sostuvo que en el Congreso darían "batalla hasta lograr al final la derogación de la resolución 125" y que la oposición trabajaría "para contar con la mayoría de los votos".

Mientras tanto, Néstor Kirchner, realizó un acto en el Mercado Central de Buenos Aires, donde defendió la Resolución N° 125/08, condenó el escrache al gobernador Daniel Scioli, acusó de "extorsivos" a los ruralistas

y preguntó: "¿Qué van a hacer ahora?, ¿nos van a matar?, ¿nos van a asesinar? (...) No creemos en las patoteadas", agregó.

Eduardo Buzzi rechazó el proyecto oficial y sostuvo que el mismo no resolvía la parte más confiscatoria, que a su criterio era el alto porcentaje de las retenciones, ni tampoco "los problemas de los pequeños y medianos productores, porque no modifica la curva con grandes productores y no recuperamos los mercados a futuro". Destacó además la importancia del tema de las compensaciones para pequeños y medianos productores, punto en el que se diferenció de Hugo Biolcati, vicepresidente de la SRA, quien consideró que las mismas eran un simple recurso para comprar voluntades y se enmarcaban en "un operativo dirigido a cooptar a la FAA", sosteniendo que la propuesta oficial era "más de lo mismo y no conforma a nadie".

En la provincia de Entre Ríos, productores autoconvocados se volvieron a movilizar, interrumpiendo por aproximadamente una hora el paso por el Túnel Subfluvial. Estos productores, luego de votar en asamblea, rechazaron por unanimidad las propuestas de compensaciones y subsidios sosteniendo que estas no llegaban a las provincias y que la gente seguía "oponiéndose a todo lo que sea sistema de compensaciones que nunca llegan". Asimismo, expresaron que seguirían movilizados e instalaron una ermita al borde del camino en honor a María Auxiliadora, como símbolo de la lucha que mantenían.

Por la tarde, la Presidenta encabezó un acto en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, donde inauguró una planta de producción láctea y anunció la ampliación de una planta industrial autopartista. Durante el acto, manifestantes de la localidad que expresaban consignas a favor de las entidades agropecuarias impidieron participar del mismo a las agrupaciones kirchneristas, MUP y La Cámpora. También fueron insultados funcionarios de la comitiva presidencial.

Asimismo, en otro acto realizado en la Casa Rosada, la Presidenta anunció la firma de un nuevo acuerdo con el sector lácteo, que contemplaba un aumento de hasta 13,6 % para los tamberos y la reducción de las retenciones a la exportación de leche en polvo. Sin embargo, no consiguió el apoyo de la Cámara de Productores de Leche de Buenos Aires ni de la Unión General de Tamberos, que criticaron la iniciativa. La SRA, la CRA y la FAA se opusieron también y expresaron en un comunicado conjunto: "la solución no pasa por más compensaciones, sino por un precio que nos permita seguir produciendo e invirtiendo para aumentar la producción de

leche como único camino para abastecer plenamente el mercado interno y aprovechar una excepcional oportunidad internacional".

Jueves 3 de Julio

Durante el plenario de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el oficialismo obtuvo el dictamen para tratar en la Cámara de Diputados al día siguiente el proyecto oficial de retenciones móviles con sus modificaciones, al tiempo que aseguraban tener los votos para aprobar el proyecto. El dictamen ratificaba la movilidad y las alícuotas que fijaba la Resolución N° 125/08, aunque introducía otros dieciocho artículos con el objeto de facilitar un sistema de reintegros para pequeños y medianos productores en treinta días, con un tope de 750 toneladas para la soja y el girasol con vigencia hasta el 31 de octubre de 2008.

Por su parte, la oposición compuesta por la UCR, la CC, el PRO y el PS, aseguraban que sumarían ochenta y siete diputados a favor de la suspensión de la Resolución N° 125/08 por ciento cincuenta días. También pedían mantener las retenciones en un piso del 35 % y una segmentación con valores menores y topes altos en los volúmenes de producción.

En tanto, Felipe Solá había presentado un proyecto propio -con el acompañamiento de la radical kirchnerista, Laura Montero y otros peronistas disidentes- que modificaba la curva de las retenciones móviles.

También se habían presentado otros dos proyectos: uno de Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur) junto al bloque del Espacio SI y otro impulsado por el duhaldista Jorge Sarghini.

A su vez, la Comisión comenzó el tratamiento de la Ley de Arrendamiento que tenía como base el proyecto del diputado Eduardo Macaluse (SI). De los representantes de las entidades agropecuarias que habían sido invitados al plenario, Abel Ganieri, de la SRA, solicitó la suspensión de su tratamiento, argumentando que la ME no lo había podido estudiar a fondo. Con esta normativa, los contratos de alquiler tendrían un plazo de cinco años, se modificaría la posibilidad de realizar contratos accidentales, de un año de duración, y se prohibiría el subarrendamiento, entre otras medidas de carácter fiscal, como la reducción del Impuesto a las Ganancias y una devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por su parte, Lisandro Viale (PS), diputado por la provincia de Entre Ríos y coautor del proyecto de ley, sostuvo que "el objetivo de esta iniciativa es darles mejores condiciones de competitividad en el uso de la tierra a los

pequeños y medianos productores, sobre todo promoviendo beneficios impositivos para los pequeños arrendatarios". La normativa crearía nuevas figuras de arrendatarios, como por ejemplo la de los contratos promovidos, que serían aquellos realizados por microempresas agropecuarias, y también disminuiría la alícuota del Impuesto a las Ganancias en un 33 % para los tomadores y en un 20 % para los dadores. El bloque oficialista tenía como objetivo tratar esta nueva norma y presentarla al día siguiente en el recinto, junto con otras medidas como la ratificación de la Resolución N° 125/08, con sus modificaciones, y el proyecto de Ley de Emergencia Agropecuaria. El plenario de las comisiones pasó a un cuarto intermedio y se seguiría tratando desde la mañana del día siguiente.

A su vez, las entidades agropecuarias tuvieron actitudes diferenciadas respecto de los proyectos presentados en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Mientras la FAA reclamaba la realización de cambios en el régimen de compensaciones para ampliar sus alcances a una franja mayor de medianos productores, la SRA y la CRA cuestionaban la facultad del Poder Ejecutivo de decidir la aplicación de retenciones a las exportaciones y demandaban que fuese el Congreso el que las fije, con un techo inferior al vigente. Tanto la FAA como la SRA buscaron incidir en los proyectos en discusión a través de propuestas técnicas o negociaciones reservadas.

En tanto, al interior de Proyecto Sur se manifestaron diferentes posturas. Por un lado, Pino Solanas, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, el ex diputado nacional Luis Brunati y los líderes del Partido Socialista Auténtico (PSA), Mario Mazzitelli y Jorge Selser, apoyados por el ex secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, respaldaban a la FAA y negaban un plan de desestabilización. Por otro lado, Alberto Lapolla, Ana Lorenzo, Hugo Kofman, Sergio Ortiz y otros, apoyados por el teólogo y docente Rubén Dri, cuestionaron a las cuatro entidades, denunciaron un golpe de Estado y apoyaron la suba de retenciones.

En la provincia de Santa Fe, a horas de conocerse el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación respecto del proyecto de ley en torno a las retenciones, la FAA movilizó a sus bases, que se instalaron al costado de la Autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad de Villa Constitución. Productores de la zona con tractores y camionetas permanecieron entre las 10:00 y las 15:00 horas en el lugar sin cortar la autopista. También realizaron otras concentraciones: al costado de la intersección de las rutas nacionales N° 9 y N° 178, cerca de la localidad de Armstrong; en el cruce de la Auto-

vía N° A-O12 y la Ruta Provincial N° 14 a la altura de la localidad de Piñero; en la Ruta Provincial N° 21, frente a la Terminal de la empresa multinacional Dreyfus; en la Ruta Nacional N° 34 y la Autovía N° A-012 en la localidad de Roldán; y en la intersección de la Ruta Nacional N° 33 y la Ruta Provincial N° 93, en Firmat.

19 horas de debate parlamentario, se ratifica la Resolución N° 125/08

Viernes 4 de Julio

En la Cámara de Diputados, pasada la tarde, el kirchnerismo había logrado el quórum con ciento veintinueve diputados para sesionar y discutir el proyecto de retenciones móviles. En el recinto, este bloque anunció modificaciones destinadas a los pequeños y medianos productores que contemplaban un aumento de la cantidad de beneficiados por los reintegros y la eliminación de la mayoría de los requisitos para recibirlos. Agustín Rossi sostuvo que las modificaciones en el proyecto dejaría "al 85 por ciento de los productores fuera del alcance de la resolución 125" y anunció la nueva escala de retenciones, la eliminación de la segmentación por extensión productiva medida por hectáreas y la ampliación a distintas regiones de los subsidios por transporte, para los que estuviesen ubicados más allá de 400 km del puerto exportador. A su vez, sostuvo que escucharían todas las opiniones y estarían abiertos a introducir nuevos cambios si las propuestas mejoraban las del oficialismo. Los presidentes de los principales bloques acordaron que el kirchnerismo hiciera públicas las nuevas modificaciones antes de la votación.

Por su parte, la oposición no le creyó. La UCR, la CC y el PRO pidieron la suspensión de la Resolución N° 125/08 por ciento cincuenta días, cuestionando el carácter constitucional de la medida. Eduardo Macaluse (SI) y Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur) confirmaron su voto negativo y denunciaron que las reformas del proyecto oficial no eran suficientes y que no contemplaban los cultivos de maíz y trigo, entre otros aspectos. Claudio Lozano fue quien más aplausos recibió de parte de los representantes de los productores agropecuarios, en el momento en que volvió a denunciar a un conjunto de empresas por defraudación fiscal. En

este sentido, afirmó: "A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación, y en este contexto, no hay una situación en donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino... Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado...¡Acá hay que parar el negociado! ¡Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! ...Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión, nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron".

En el recinto hubo algunos incidentes y gritos. Luego de que productores desplegaran una bandera con la consigna "Aguante el campo. Pampa Sur", al tiempo que le gritaban a los diputados "¡Voten por el pueblo y no por la chequera!", los kirchneristas respondieron: "¡Callate, gorila! ¡Oligarca!". El debate continuó hasta las primeras horas del sábado.

Mientras tanto, fuera de la Cámara de Diputados, los movimientos kirchneristas se concentraron frente al Congreso en apoyo al proyecto oficialista. Asistieron también, cinco ministros: Jorge Taiana (Relaciones Exteriores), Nilda Garré (Defensa), Juan Carlos Tedesco (Educación), Lino Barañao (Ciencia y Técnica) y Carlos Tomada (Trabajo); el titular de Cascos Blancos de la Cancillería, Gabriel Fuks y el subsecretario de Organización del Ministerio de Desarrollo Social, Jorge Ceballos, quienes siguieron el debate por una pantalla, sin escenario ni oradores. Entre los presentes se encontraban también el Movimiento Evita, el Movimiento Libres del Sur, la FTV, el FTNP, el Movimiento Octubres, el Movimiento Segundo Centenario, la JP-Evita y delegaciones de los municipios bonaerenses de La Matanza, Berazategui, Avellaneda, Florencio Varela y Merlo. Luego ingresaron las columnas de la JP y de La Cámpora. Una sucesión de insultos se escuchó mientras por la pantalla se mostraba a los diputados Francisco De Narváez y Claudio Lozano. Cerca de la medianoche, los asis-

tentes comenzaron a desconcentrarse. A su vez, comenzaron a levantarse las carpas que todavía permanecían instaladas frente al Congreso. Quien mantuvo la suya, a favor de los sectores rurales, fue el líder del MIJD, Raúl Castells.

Por su parte, Alberto Fernández criticó públicamente al vicepresidente Julio Cobos, por su posicionamiento político frente a la discusión sobre las retenciones móviles y sostuvo que "Se confundieron los roles institucionales" y que "Todos tenemos formas de pensar y también muchas veces disiento con medidas que toma el Gobierno, pero la realidad es que soy parte de él, y si cada vez que a uno no le gusta hace lo que quiere, sería un disparate". Los encuentros que el Vicepresidente iba teniendo con productores agropecuarios e intendentes contrarios a la aplicación de retenciones móviles y la reunión que esa misma semana había mantenido con el cardenal Jorge Bergoglio, entre otras cosas, motivaron a los kirchneristas a la ruptura de los lazos que el Vicepresidente aun mantenía con el Gobierno.

Por otro lado, las entidades agropecuarias de la ME no acordaron un criterio único acerca de cómo continuar con el reclamo en caso de que la Cámara de Diputados no resolviese suspender el proyecto de retenciones. Las entidades siguieron el debate por televisión. Eduardo Buzzi, frente al anuncio del oficialismo sobre las modificaciones del proyecto, sostuvo que era "sólo hasta el 30 de octubre" y que no estaba claro cómo sería el mecanismo de compensación. Asimismo, Alfredo de Angeli, dijo que si el Congreso convalidaba la norma, todavía quedaba la vía judicial y que si bien podrían realizarse algunas protestas, negó que fueran a impulsar nuevos cortes de ruta porque sólo beneficiarían al Gobierno para justificar el desabastecimiento de gasoil. Esta postura no fue compartida por Mario Llambías, quien expresó un rechazo más contundente al proyecto modificado, ni por Hugo Biolcati (SRA), quien sostuvo que "si esto sale ratificado de la manera que busca el Poder Ejecutivo hay muchísimas posibilidades de volver al paro".

Por la noche cientos de personas junto a dirigentes de la FAA y la FEDECO, se congregaron frente a la Catedral de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, con banderas argentinas y algunas cacerolas, ante el inicio de la discusión de las retenciones móviles en el Congreso.

Sábado 5 de Julio

En la madrugada, la Cámara de Diputados ratificó las retenciones móviles. La sesión duró diecinueve horas y contó con una asistencia record: de los doscientos cincuenta y siete diputados asistieron doscientos cincuenta y tres. Con ciento veintinueve votos a favor, el kirchnerismo obtuvo la mayoría absoluta de los votos y consiguió la ratificación del proyecto oficial. De los ciento veintinueve votos, ciento once fueron de legisladores propios y dieciocho de aliados. En cambio, ciento veintidós diputados rechazaron la propuesta y dos se abstuvieron. En el mismo orden del día también se habían incluido, pero no llegaron a tratarse, los proyectos de Ley de Arrendamiento y de Emergencia Agropecuaria. Finalmente, el proyecto de retenciones oficial estableció una serie de modificaciones para diferenciar entre los pequeños productores y los grandes capitales aplicados a la producción agropecuaria. El régimen creado tendría validez hasta el 31 de octubre de 2008.

Durante la sesión, los diputados defendieron sus posturas, presentaron informes sobre el sector agropecuario, hubo discusiones y también incidentes. Por un lado, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, Alberto Cantero, presentó un informe para revelar que los productores de soja ganaban, en ese momento, mucho más que antes del aumento de las retenciones, señalando que el promedio de costos de una explotación agropecuaria en el sur de Santa Fe se había incrementado un 27 % desde el momento de la siembra hasta la semana anterior a la votación en la Cámara de Diputados y en ese lapso, la soja había incrementado su precio en un 110 %. El objetivo era convencer a los diputados que este sector había aumentado su rentabilidad a pesar de la implementación de las retenciones móviles.

Por otro lado, Felipe Solá, quien al comenzar la sesión había agredido a un asesor de la jefatura de gabinete que había impedido el paso a tres dirigentes de la SRA y de una allegada suya, a las 02:15hs de la madrugada, expuso su postura. Reconoció las modificaciones introducidas por Agustín Rossi pero cuestionó la inexistencia de una política agropecuaria y con ese argumento fundamentó el voto contrario al proyecto de su bloque. Se alinearon con él, quince diputados oficialistas y ex aliados del kirchnerismo, entre ellos, Luis Barrionuevo (FPV), Graciela Camaño (FPV) y Laura Gisela Montero (Consenso Federal). A su vez, Felipe Solá fue insultado por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, que le gritó: "¡Traidor, hijo de

puta!" y que luego cantó junto a otros diputados: "¡Patria sí, colonia no!". Por su parte, Elisa Carrió rehusó sumarse al proyecto de Solá y dijo a los miembros de su bloque: "Nosotros somos opositores, no golpistas. No se presten a ningún acuerdo entre Duhalde y Cobos". En tanto, al interior del bloque de la Concertación Plural hubo diferencias que se manifestaron en los votos: seis de sus integrantes votaron a favor del proyecto del oficialismo que ratificó la Resolución N° 125/08; cinco en su contra y cuatro por el proyecto que presentó Felipe Solá.

En la votación se observaron catorce cambios respecto de la votación de marzo[24], cuando hubo una primera votación en la Cámara baja sobre las retenciones, los diputados del FPV y sus aliados habían votado a favor del proyecto oficialista. Entre ellos, y por el bloque oficialista, se encontraban: Felipe Solá (Buenos Aires), Manuel Baladrón (La Pampa), Cristina Cremer de Busti (Entre Ríos), Zulema Daher (Salta), Irma García (La Pampa), María de los Ángeles Petit (Entre Ríos), Enrique Thomas (Mendoza), Martha Velarde (Santiago del Estero) y Gustavo Zavallo (Entre Ríos). Al grupo de Felipe Solá se sumó Daniel Katz. En tanto, por los aliados del kirchnerismo estaban Raúl Parodi, del Frente Cívico y Social de Catamarca, y Eduardo Pastoriza, del Bloque por la Verdad. Por su parte, Marta Osorio (FPV- La Pampa), había votado a favor de las retenciones en marzo, pero esta vez se abstuvo. Por último, cuatro votos con los que la oposición contaba terminaron respaldando el proyecto para ratificar las retenciones: por el bloque Unión Peronista, Julio Arriaga (FPV- Río Negro) y Lorena Rossi (Frente Grande- Río Negro), que habían firmado el proyecto de Solá; Hugo Cuevas, radical kirchnerista por Río Negro, y Osvaldo Salum (FPV- Salta).

Durante la sesión, varios discursos de la oposición giraron en torno de la supuesta inconstitucionalidad del proyecto del Ejecutivo. Cuando terminó la votación, volvieron a juntarse manifestantes kirchneristas frente al Congreso. Entre ellos estaba el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Vilma Ripoll, dirigente opositora del MST-Nueva Izquierda, luego de la votación, dijo que esta ley perjudicaba "a miles de chacareros y a los pueblos del interior" mientras se favorecía a las exportadoras y grandes pools.

Por su parte, el PRO, la UCR y la CC consideraron el resultado como una victoria propia, por la sumatoria de negativas al proyecto oficial. Desde

24 En aquella oportunidad, se había ratificado la Resolución N° 125 por ciento treinta y dos votos a favor, veintiséis votos para el proyecto opositor y trece abstenciones.

la FAA, a pesar de sostener que las concesiones fueron insuficientes, se mostraron satisfechos por las modificaciones a la Ley, a diferencia de la SRA y la CRA. Consideraban que al rechazo del proyecto en el Senado se sumarían los senadores: Carlos Menem, Hilda Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso; Carlos Reutemann, que presentaría su proyecto alternativo, y Roxana Latorre. María Eugenia Estenssoro, de la CC, declaró al respecto: "en el Senado es más difícil el panorama para el oficialismo. Con esta votación tan ajustada en Diputados, puede haber cambios. Somos optimistas, porque algunos estudios independientes daban el escenario con 40 votos a favor del campo y solamente 32 por el oficialismo".

Por otro lado, los dirigentes de la ME descartaban la posibilidad de retomar el paro y les solicitaban a los productores que querían movilizarse, que no retomaran los cortes de ruta. La estrategia de las entidades rurales para los días posteriores se centraba en lograr que el Senado frenara el proyecto oficial o al menos que permitiera introducirle más modificaciones.

No obstante, en algunas localidades hubo concentraciones de productores agropecuarios autoconvocados al costado de las rutas, pero poco movimiento. Sin embargo, la idea que primaba era la de movilizarse hacia la Ciudad de Buenos Aires, para estar presentes en el debate en la Cámara alta. En la provincia de Santa Fe, los productores de la FAA se mantuvieron en la banquina de las rutas, esperando la determinación de la ME. Sin embargo, el delegado regional de la FAA, Daniel Bodo, señaló que "numerosos intendentes del sur santafesino están organizando una marcha a la Capital para cuando lo trate el Senado". En tanto, en la provincia de Chaco se reunieron productores autoconvocados al costado de las rutas en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en otras localidades con la idea de organizar la ida a Buenos Aires para estar en el Senado el día de la votación, según declararon.

En la provincia de Entre Ríos, luego de la votación se realizó una asamblea de productores agropecuarios en la localidad de Gualeguaychú, sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del km 53. En ella, Alfredo de Angeli dijo que la protesta y los reclamos seguirían, que tendrían tres años y medio de lucha, y señaló: "vamos a tener que empezar con una economía de guerra, porque esta política nos quiere hacer desaparecer" y haciendo referencia a los cacerolazos dijo: "yo sé que ese ruido les molestó, los cortes no. Además los cortes terminan perjudicándonos". En tanto, Juan Echeverría habló de la existencia de dinero para comprar votos entre los

legisladores y Julián Gilard, representante de los productores autoconvocados, dijo que con la sanción que tuvo el proyecto oficial en diputados "se confirmó que el Congreso de la Nación es una escribanía del Poder Ejecutivo". Por su parte, el representante de la SRA en Entre Ríos, Luis Miguel Etchevehere, dijo que resultó auspiciosa la votación ya que casi la mitad de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados votaron en contra.

En la provincia de Tucumán los productores agropecuarios realizaron una protesta en la sede del aeropuerto Benjamín Matienzo, donde esperaban la llegada de los diputados en el último vuelo desde Buenos Aires. La protesta continuó en las calles del centro de la ciudad. Luego realizaron un escrache ante la casa de Alfredo Dato (diputado del FPV y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial) lanzando piedras y huevos a su domicilio. Por último, avanzaron hacia el negocio de la mujer del diputado Gerónimo Vargas Aignasse, quien declaró: "Le tiraron piedras, rompieron los vidrios, escribieron insultos arriba y rompieron parte de los carteles, pero para nosotros no hay dudas de que son los terratenientes. (...) La semana pasada estuvimos reunidos con el presidente de la Sociedad Rural tucumana. Éramos tres, la diputada Stella Maris Córdoba, él y yo. En la reunión nos dijo que si salía la ley realmente iba a correr sangre y salió la ley". Vargas Aignasse era uno de los ocho diputados tucumanos del FPV que habían votado en la Cámara de Diputados a favor de la Resolución N° 125/08.

Domingo 6 de Julio

Si bien el debate en el Senado comenzaría el martes en las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, algunos integrantes del bloque kirchnerista en el Senado anunciaron que votarían en rechazo al proyecto oficial, entre ellos: el cordobés Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero y el catamarqueño Ramón Saadi.

Mientras tanto, el Partido de la Liberación (PL), integrante de Proyecto Sur, se diferenció públicamente de las posiciones del diputado Claudio Lozano y repudió su voto negativo, sosteniendo que, en ese sentido, actuó en consonancia con la "oligarquía y la derecha reaccionaria", declaró Sergio Ortiz, secretario general del PL. Por otro lado, los dirigentes de la ME planeaban reunirse con los senadores de la oposición y con los oficialistas

disidentes para intentar preparar un proyecto alternativo similar al que propuso Felipe Solá.

En la localidad de San Pedro, provincia de Entre Ríos, productores agropecuarios realizaron una asamblea y amenazaron con cortes. Raúl Vítores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro sostuvo: "En un momento hubo una moción para que se cortara la ruta. No obstante, la mayoría se pronunció por la negativa y por continuar movilizados a la espera de lo que se resuelva en los próximos días en la cámara alta".

Lunes 7 de Julio

Los distintos bloques de senadores acordaron que el proyecto sobre la Resolución N° 125/08 fuera votado en el recinto el miércoles 16 de julio. En tanto, la oposición se reunió y anunció que presentaría un proyecto conjunto en el Senado, una nueva propuesta que reivindicaría la facultad del Congreso de fijar la alícuota de las retenciones al equipararla a un impuesto y luego determinar que esas alícuotas sean progresivas de acuerdo con el tamaño del productor agropecuario. Asimismo, sostuvieron que lo votado en Diputados era inconstitucional. Al respecto el presidente de la UCR y senador por la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que "El proyecto oficial es muy malo, incluso es un retroceso respecto de la resolución 125". Por su parte, los senadores de la CC, María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik, consideraron que avalar la iniciativa que obtuvo la media sanción de Diputados significaba aprobar un sistema de decisión "feudal, donde un señor va fijando sin ningún control el impuesto que debe pagar la plebe". De la reunión del bloque opositor también participaron el jefe de la bancada de la UCR, Ernesto Sanz, la senadora tucumana Delia Pinchetti e Hilda "Chiche" Duhalde, entre otros.

Agustín Rossi, en conferencia de prensa, acusó al ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, de haber quedado "en el medio de una operación que era de la oposición" y negó que se hubiera fragmentado su bloque. Por su lado, el Jefe de gabinete dijo estar decepcionado con el voto de los diputados kirchneristas que le retiraron el apoyo al Ejecutivo y sostuvo que terminaron avalando el proyecto opositor de eliminar las retenciones, que, según él: "tenía un solo sentido, que era el de lastimar al Gobierno".

La Mesa de Enlace se reunió en la sede de la SRA de la Ciudad de Buenos Aires, para diseñar la estrategia que llevarían adelante en el Senado. Luego de reconocer que su punto débil en Diputados fue no poder identificar

claramente a "el campo" con uno de los proyectos, el principal objetivo que tenían era intentar alinear a la oposición y a los peronistas disidentes detrás de una propuesta que representase los intereses del sector y reducir el impacto de las retenciones para todos los productores, pero no a través de reintegros sino con una rebaja general de la alícuota.

En otro orden de cosas, el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, rechazó la posibilidad de aplicar la vía judicial del *per saltum* en el conflicto entre el Gobierno y las entidades de la ME. La misma facultaría al máximo tribunal a analizar un recurso sorteando las instancias previas. Zaffaroni aseguró que los políticos no debían derivar a la Justicia los problemas sociales que no podían resolver, a lo que agregó: "El *per saltum* desapareció y es una institución que no queremos jamás volver a abrirla (...) De ninguna manera deben judicializarse conflictos de carácter político".

Martes 8 de Julio

En el marco de una ronda de consultas que iniciaron las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, los presidentes de las entidades agropecuarias se reunieron con el Vice-presidente y participaron de la primera rueda de debate en el Senado, donde expusieron sus opiniones sobre la Resolución N° 125/08. En ella, respondieron a las preguntas de los senadores acerca de si se resolvía o no el conflicto con la media sanción de Diputados, y también, entre otras preguntas, cuáles serían los niveles de retenciones justos para ellos, cuáles creían que fueron los resultados de la intervención del Estado en la economía, principalmente en carne y trigo. En tanto, la ME ya no hacía hincapié en la suspensión de las retenciones, sino que sus reclamos pasaban ahora por una mayor segmentación y una crítica al plazo para las compensaciones impuesto en el proyecto oficial (desde marzo hasta el 31 de octubre).

Luego de recibir a la ME, los senadores escucharon la disertación del Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, sobre la importancia de las retenciones como instrumento de la política económica del Gobierno, y sostuvo que "las retenciones son un instrumento para asignar recursos desde los sectores de mayor renta hacia los sectores de menores ingresos".

Por su parte, Carlos Reutemann presentó en Mesa de Entradas su proyecto alternativo sobre retenciones móviles y con ello se convirtió en el

foco de atención del plenario de las comisiones. La oposición evaluaba alinearse en torno a su proyecto, el cual, además recibió una felicitación de las entidades rurales que lo consideraron como la propuesta más integral por ser la única que incluía exenciones impositivas para los insumos básicos de la actividad: semillas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes.

Respecto del plenario de comisiones del Senado, Alfredo de Angeli señaló que "no existe una renta extraordinaria" y que "la lucha es por la subsistencia de los pequeños y medianos productores". Asimismo volvió a reclamar la suspensión de la Resolución N° 125/08 por ciento ochenta días, lo que, según él, permitiría liquidar la última cosecha de soja con la anterior escala de derechos de exportación y desde la calle advirtió: "Minga nos vamos a arrodillar (...) Si votan en contra del campo, se van a avergonzar en sus provincias". Al mismo tiempo, Eduardo Buzzi en el interior del plenario y apoyado por los dirigentes nacionales de las otras tres entidades, anunciaba que la marcha prevista para ese día al Congreso había quedado diferida sin fecha, y señaló que "mientras estén funcionando las instituciones, tratando el tema de las retenciones, es inconveniente confrontar". Sin embargo, de Angeli desde afuera, convocaba para el día siguiente a una movilización en la localidad de Chajarí, sobre Ruta Nacional N° 14, en la provincia de Entre Ríos, y a una marcha federal desde todo el país al Congreso para el miércoles 16 de julio. A esta iniciativa se sumó la CARBAP, que convocó a asambleas y tractorazos en las localidades de Saladillo y Pergamino, provincia de Buenos Aires, y a una marcha a la Capital Federal. Los autoconvocados acompañaron la vuelta a las rutas de la filial entrerriana de la FAA y la de la CARBAP.

Por otro lado, se realizó un encuentro entre dirigentes entrerrianos de entidades agrarias y la senadora oficialista Blanca Osuna. Los dirigentes agrarios consideraron al encuentro positivo.

Miércoles 9 de Julio

Los diputados del FPV-PJ que acompañaron el proyecto de Felipe Solá y el grupo de radicales kirchneristas que encabezó Daniel Katz, ex intendente de Mar del Plata, explicaron su decisión por el voto negativo a las retenciones móviles, sosteniendo que esta votación era diferente a la de marzo, porque en esta oportunidad había sido presentado un nuevo proyecto, el de Felipe Solá, con el cual acordaban.

Por su parte, la ME decidió volver a las rutas e instalar un clima de fuerte movilización en distintos puntos del país. Los presidentes de las entidades pidieron a los productores que regresaran a la vera de las rutas y anunciaron una concentración para el siguiente martes 15 de julio frente al Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, la CARBAP se sumó a esta iniciativa y anunció que instalaría una carpa frente al Congreso que funcionaría como centro de reunión para el día de la votación en el Senado. Eduardo Buzzi, por su parte, llamó a "reeditar las acciones anteriores y quedarse en las rutas el fin de semana".

Desde la CARBAP se aclaró que no se trataba de un paro, "no dejamos de comercializar, volvemos a la vera de las rutas pero no las cortamos"; pero la noche anterior hubo varios cortes de ruta en distintas provincias. En la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, alrededor de treinta personas bloquearon el paso de manera intermitente cada quince minutos. En las provincias de Córdoba y Santa Fe también hubo cortes.

Las organizaciones juveniles del kirchnerismo instalaron de nuevo las carpas a favor de las retenciones móviles. A su vez, el Gobierno opinaba que el acto que preparaba la ME en el Monumento de los Españoles era un gesto desesperado ante la evidente pérdida en el Senado y evaluaba cómo responder a esa movilización. Finalmente, el oficialismo decidió organizar una nueva movilización el mismo martes 15 de julio frente al Congreso de la Nación.

Por su lado, en el acto por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la Presidenta tuvo que iniciar su discurso pidiendo un minuto de silencio por un asistente que murió al desplomarse una tribuna minutos antes de dar comienzo al mismo. Si bien no se refirió directamente al conflicto con el sector agropecuario, habló de los "obstáculos" que se interponían frente a quienes intentaban llevar adelante gobiernos y políticas populares, en su discurso se refirió a los "próceres que tuvieron que enfrentar luchas y oposiciones internas" y consideró que, a casi doscientos años, la Argentina atravesaba disyuntivas similares a las que tuvieron aquellos hombres.

Mientras tanto, el FNC junto a militantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego y otras organizaciones políticas, realizaron un festival frente al Congreso, bajo la consigna "Hay otro campo. Por la democracia con redistribución de la riqueza: sí a las retenciones. No al hambre". El dirigente de la asamblea de Dorrego, Ignacio Ivansich, cuestionó a los diversos medios señalando: "que cubrieron el paro patronal, pero se cerraron a la voz de los campesinos echados de lugares originarios para talar y colocar

soja (...) Los trabajadores estuvieron en negro, sin dignidad y respeto por parte de estas empresas". Los pequeños agricultores familiares y los pueblos originarios se movilizaron porque afirmaban no estar representados por la SRA, la FAA, la CRA y la CONINAGRO, y las acusaban de "haber utilizado todo tipo de métodos criminales ilegales para expulsar por la violencia, incluso armada, a comunidades enteras campesinas e indígenas con el accionar cómplice de jueces, policías y políticos".

Jueves 10 de Julio

Tres gobernadores llevaron sus posiciones al plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El chaqueño Jorge Capitanich y el tucumano José Alperovich defendieron con distintos argumentos la postura del Gobierno Nacional. Por su parte, Alberto Rodríguez Saá, que ocupó el lugar opositor ante las ausencias de Hermes Binner y Juan Schiaretti, denunció a las retenciones como inconstitucionales, criticó al Gobierno y desplegó todos los argumentos jurídicos volcados en la denuncia presentada por la provincia de San Luis ante la Corte Suprema de Justicia contra las retenciones. Los senadores kirchneristas Silvia Gallego y Daniel Filmus reaccionaron ante estas acusaciones, Gallego afirmó: "No voy a permitir que mañana aparezcamos todos en los medios nacionales como sospechados ni que se ponga en duda mi honorabilidad" y el debate se cerró sin la posibilidad de formular preguntas.

Por su parte, el interbloque opositor firmó un dictamen elaborado junto a los técnicos de las cuatro entidades agropecuarias de la ME. El proyecto fue rubricado por el senador cordobés Carlos Rossi, los tucumanos Delia Pinchetti y Carlos Salazar, la puntana Liliana Negre de Alonso y también, por los senadores opositores que formaban parte de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del Senado (los radicales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Luis Naidenofk, Roy Nikich, Juan Carlos Marino y Alfredo Martínez; y por la CC, María Eugenia Estenssoro y Samuel Cobanchik). El socialista Rubén Gustiniani no acompañó el frente opositor ya que presentaría su propio dictamen.

Por otro lado, la ME decidió reinstalar la denominada "carpa verde" en la Plaza del Congreso para esperar en vigilia el debate en el Senado sobre las retenciones móviles. Los productores autoconvocados de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe se instalaron en el extremo de la plaza, sobre la calle Virrey Cevallos, frente a la carpa que había instalado

el MIJD de Raúl Castells. Por la noche, visitó la carpa Mario Llambías, quien al anunciar la convocatoria para el acto en el Monumento de los Españoles declaró: "Elegimos el Monumento de los Españoles. De ese lado estaremos nosotros y enfrente queda el zoológico". Por su parte, de Angeli afirmó que el acto del martes siguiente era "para que los legisladores nacionales vean que no somos solamente un puñado de dirigentes que estamos dando vueltas en el Congreso". Elisa Carrió también convocó a participar del acto de las entidades agropecuarias y sostuvo: "no podemos seguir formando parte de un ritual donde se viola la Constitución y no reaccionamos", además denunció haber observado el "sistema de prebendas de la Argentina corrupta" durante la aprobación del proyecto oficial en Diputados.

En tanto, las agrupaciones kirchneristas, JP-La Cámpora, el Movimiento Evita y el FTNP volvieron a instalar las carpas frente al Congreso y se sumaron a la carpa del Movimiento Compromiso K, que había quedado instalada luego de la votación en la Cámara de Diputados. La carpa con más actividades fue la de la JP-La Cámpora. Hubo radios abiertas y también exposiciones del FNC, el diputado Jorge Coscia y Ricardo González, de la AFIP. Ante la reinstalación de las carpas en apoyo al Gobierno, Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, destacó que no habían pedido el permiso y consideró que esa instalación era "autoritaria y arbitraria" ya que se había efectuado con la complicidad de los jueces Roberto Gallardo y Patricia López Vergara que los autorizaron mediante la concesión de amparos, determinando que las mismas contaban con las condiciones mínimas de seguridad.

Por su parte, Néstor Kirchner convocó a un acto para el martes 15 de julio en la Plaza del Congreso, a la misma hora en que las entidades agropecuarias realizarían el acto en el Monumento de los Españoles. Según el ex presidente, se convocaba para "profundizar, apoyar y promover el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas" y sostuvo que "El acto no es contra nadie. Es por la Argentina, por el respeto, la pluralidad y la diversidad". A su vez, durante la convocatoria, advirtió: "Tenemos que terminar con las actitudes patoteriles. Vemos con preocupación actitudes ciertamente desestabilizadoras, que ya son acciones cotidianas. Percibimos actitudes que pueden ser tomadas como presión" y calificó a la concentración de la ME en Palermo como un acto amenazante.

Mientras tanto, en diferentes puntos del país hubo manifestaciones de productores agropecuarios en contra del régimen de retenciones móviles.

En la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, los ruralistas realizaron un tractorazo, que se inició en la intersección de las rutas nacionales N° 8 y N° 188 y culminó en la plaza central de dicha ciudad con la que participaron de más de mil personas,

En las provincias de Córdoba y Santa Fe grupos de productores también volvieron a las rutas, sin bloquear el paso de vehículos, aunque hubo demoras debido a la entrega de volantes y la explicación que los manifestantes brindaban sobre la protesta a quienes circulaban. Según un informe de la FAA, los principales cortes de ruta fueron en la provincia de Santa Fe, en la intersección de las rutas nacionales N° 9 y N° 178, cerca de la localidad de Armstrong; y sobre la Ruta Nacional N° 33, a la altura de las localidades de Casilda, Chabás, Villada, Venado Tuerto, Rufino y Bombal. Además hubo concentraciones en las zonas centro y norte de la provincia (Gálvez, Reconquista y Villa Ocampo) y en todas ellas los productores repartían volantes donde se encontraba el listado de los diputados nacionales por la provincia que ratificaron en Diputados la Resolución N° 125/08.

En la provincia de Córdoba, las filiales de las entidades ruralistas pidieron que se realizaran las concentraciones a la vera de las rutas, sin cortar el tránsito. No obstante, las organizaciones autoconvocadas en algunos casos demoraron el paso de camiones de carga para informarlos acerca del estado del conflicto, tal fue el caso en la localidad de Jesús María. En la provincia de Chaco, productores locales, junto a comerciantes y legisladores provinciales, deliberaron en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y decidieron no ir a las rutas sino organizar una caravana para sumarse, la semana siguiente, a la marcha nacional convocada por la ME hacia Buenos Aires. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, productores autoconvocados retomaron la protesta y se instalaron al costado de las rutas.

Viernes 11 de Julio

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería del Senado, los senadores oficialistas presentaron el dictamen que llevarían al recinto, la propuesta era la misma que fue sancionada en Diputados y el kirchnerismo pensaba que obtendría en el Senado un triunfo ajustado pero seguro. En tanto, el dictamen de los opositores radicales, la CC y los peronistas Adolfo Rodríguez Saá e Hilda "Chiche"

Duhalde sería presentado el lunes siguiente, que entre otros puntos, sostenía que las retenciones no debían superar el 35 % para no ser confiscatorias. Por su parte, Reutemann presentó su proyecto y dijo estar en contra de la sojización y a favor de las retenciones, pero propuso que fueran fijadas por el Congreso. Su dictamen establecía retenciones fijas para el maíz y el trigo del 22 %, para el girasol del 30 % y móviles para la soja, con un tope del 40 % y declaró: "no soy un megaproductor como dicen". A su vez, la Multisectorial de General Pico no sólo se organizó para asistir al acto en el Monumento de los Españoles, sino que además se reunió con la senadora Silvia Gallego, que al no retirarse conformes del encuentro, decidieron remitirle una carta a la senadora. Un dirigente de la multisectorial explicó a la opinión pública que "la resolución 125 se opone al criterio fundamental de previsibilidad de las leyes, un principio básico para mantener y atraer capitales de inversión".

Por su parte, Néstor Kirchner se reunió en el NH City Hotel, ubicado en el microcentro porteño, con dos gobernadores del radicalismo kirchnerista, el Miguel Saiz (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y dirigentes de centroizquierda para organizar el acto en el Congreso. Luego de escucharlo durante veinte minutos, ellos le prometieron asistir al acto. En tanto, la CGT convocaba al cese de actividades en Capital Federal y Gran Buenos Aires, a partir de las 12:00hs del martes 15 de julio, y llamaba a marchar al acto frente al Congreso, en defensa de la democracia y del gobierno popular de la Presidenta.

En otro orden de cosas, el diputado kirchnerista y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Alberto Cantero, quien defendió el proyecto oficial de retenciones durante su tratamiento en la Cámara baja, en una declaración que realizó en una radio de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, responsabilizó a la Sociedad Rural local por pintadas intimidatorias que fueron realizadas en la fachada de su casa en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y sostuvo que quienes promovieron el ataque querían "coartar" su derecho a decidir libremente y anticipó que recurriría a la Justicia.

Por otro lado, en la ciudad de Rosario, Eduardo Buzzi se encontraba preparándose para responder las preguntas de los periodistas en la sede de la FAA, cuando un integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) le preguntó: "Buzzi, te hago una pregunta: ¿no te parece una falta de respeto que hoy, después de 32 años, la Federación Agraria esté al lado de la Sociedad Rural que apoyó la desaparición de 30 mil personas?", y

continuó: "¿No te parece una falta de respeto que hayan dejado de reivindicar la reforma agraria para aliarse al monopolio de la soja?, ¿no te parece una falta de respeto que haya gente buscando a sus nietos mientras vos estás sentado con los que apoyaron ese proceso? Vos sos un traidor", y luego Buzzi dijo a los periodistas: "Bueno, muchachos, tranquilos. Ya pasó. ¿Quién es este chico? No tengo idea quién es. Pero tenemos que ser tolerantes. No podemos hacer lo mismo que Kirchner" y luego otros dirigentes de la entidad retiraron a empujones al joven y a las otras personas que lo acompañaban. Más tarde, los militantes de la UES denunciaron haber sido golpeados por aquellos dirigentes, sin embargo éstos lo negaron y contraatacaron diciendo que los jóvenes los amenazaron de muerte cuando se iban. Por su parte, Buzzi, horas más tarde, en un programa radial, dijo: "Me agreden, me dicen una cantidad de barbaridades, dicen que somos socios de la Sociedad Rural, que apoyamos el genocidio. Yo no me hago cargo del pasado de la Sociedad Rural, al que también cuestiono".

En la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Chajarí, los productores agropecuarios instalaron en una carpa al costado de la Ruta Nacional N° 14. Mientras que en la provincia de Santa Fe, cerca de cien productores autoconvocados se reunieron en el peaje General Lagos de la autopista que une Rosario con Buenos Aires, interrumpiendo por momentos el paso de camiones, autos y colectivos que se dirigían hacia Capital Federal. Además los productores de las localidades de Reconquista y Rafaela realizaron un tractorazo en la localidad de Villa Ocampo. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente sesenta productores agropecuarios de la localidad de Coronel Vidal, se concentraron en la Autovía 2.

Sábado 12 de Julio

Aproximadamente el 90 % de los senadores adelantó cuál sería su voto: treinta y cinco lo harían por el sí y treinta por el no. A su vez, a pesar de que aproximadamente diez de los senadores que habitualmente votaban a favor del gobierno afirmaron que votarían en contra de la Resolución N° 125/08 (de los cuales seis eran del FPV), el oficialismo contaba con que ya tenía los votos en el Senado. Entre tanto, colaboradores de Cobos anticiparon que en un supuesto caso de empate, el vicepresidente no votaría en contra de la voluntad de la Casa Rosada. Por su parte, el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó a la Presidenta por hablar con los senadores del oficialismo y dijo que ella,

personalmente, había llamado por teléfono "a cada uno de los senadores para que no modifiquen una coma" del proyecto del Gobierno y advirtió que "la gran responsable de la inconstitucionalidad que se sancionará será Cristina Fernández, porque ella no admite ningún cambio o corrección" al proyecto.

Néstor Kirchner se reunió con integrantes del espacio Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. En el encuentro, dijo que el conflicto con las entidades agropecuarias había repolitizado al país y dado más fuerzas a los sectores populares, lo que ayudaría a nacer un segundo momento en la presidencia de Cristina Fernández y que "ciertas derechas ayudan a que nosotros recobremos nuestros propios ideales". A su vez, criticó a los dirigentes de la FAA, sosteniendo que el 80 % de sus miembros en ese momento se dedicaba a la renta sojera, llamó a la ME como "la junta de desenlace" y recalcó que en el conflicto se jugaban dos proyectos de país, uno con un Estado democrático y una política de justicia social versus otro con "una minoría a la que vaya muy bien y millones muertos de hambre, como fue la Argentina hasta 1943". Además, denunció que el 16 de junio anterior, "el campo", grupos de la derecha y sectores que lideraron el peronismo en los años noventa, pusieron en marcha un plan para desplazar a la Presidenta. Por último, escuchó críticas al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la falta de respuestas a los pedidos de la CTA y Canal 7.

Por su parte, Silvia Gallego, senadora kirchnerista por la provincia de La Pampa, denunció que recibía amenazas desde que anunció que iba a votar a favor del proyecto oficial. La senadora pidió y obtuvo custodia policial en su casa en la ciudad de Santa Rosa. Los otros dos senadores por la provincia, el radical Carlos Marino y el peronista Rubén Marín, anunciaron que votarían en contra de las retenciones. En tanto, productores autoconvocados hicieron protestas en diez puntos en las rutas pampeanas y en el centro de esta ciudad, en donde instalaron una carpa para esperar la decisión de los tres senadores.

También los productores rurales se concentraron en otras rutas del interior del país, con asambleas y cortes intermitentes. Uno de los epicentros de la movilización fue la Autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de la ciudad santafesina de Villa Constitución, donde se movilizaron productores con tractores para apoyar a Eduardo Buzzi. Durante la mañana, automovilistas y camioneros hicieron sonar sus bocinas en señal de apoyo al reclamo del campo. Estuvieron presentes las autoridades de la FAA

y los intendentes de las localidades santafecinas de Empalme y Figuera, Raúl Vallejos y Carlos Mariani. Mientras tanto, agricultores tucumanos agrupados en la Comisión de Productores Autoconvocados volvieron a instalarse en la Ruta Nacional N° 9, al costado de la misma. El productor sojero Maximiliano Alcocer anunció: "Vamos a continuar así y el lunes nos trasladaremos a Buenos Aires para participar de la marcha que convocan las entidades". La expectativa del sector era reunir a la gente del interior del país y también a la clase media porteña que salió a manifestar con cacerolazos su apoyo al reclamo por las retenciones.

Domingo 13 de Julio

El vicepresidente de la CRA, Ricardo Buryaile, aseguró que contingentes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Salta, Chaco y Santiago del Estero se preparaban para ir al acto en Palermo. El vicepresidente de la CARBAP, Martín Garciarena sostuvo que "el campo va a reaccionar pésimo" si la mayoría de legisladores convalidaba la iniciativa oficial.

Mientras los ruralistas repartían chocolate en el centro de Santa Rosa, donde se encontraba instalada la "carpa del campo pampeano", anunciaron que viajarían alrededor de tres mil productores pampeanos al acto. A su vez, se informó que en el acto de Palermo habría cinco oradores, los titulares de: la SRA, Luciano Miguens; la CONINAGRO, Fernando Gioino; la CRA, Mario Llambías, y de la FAA, Eduardo Buzzi y Alfredo de Angeli. La CC, la UCR oficial, el PRO, el movimiento de Raúl Castells y la central gremial de Luis Barrionuevo adelantaron que participarían. Las entidades decidieron retrasar su acto, sería a las 16.30hs, para evitar que haya coincidencia con el acto oficialista, aunque en el Gobierno aseguraban que Kirchner hablaría a las 18hs y que sería el único orador. Además del PJ, participarían del acto oficialista la CGT, gobernadores radicales kirchneristas, partidos de centroizquierda aliados, organismos de derechos humanos, movimientos sociales e intelectuales.

En tanto, continuaba la protesta de los productores en las rutas. En la provincia de Santa Fe se realizaron cortes en la Autopista A012 y la Ruta Nacional N° 14, a la altura de la localidad de Piñero; en las rutas nacionales N° 9 y N° 178, en la localidad de Armstrong; en la Ruta Nacional N° 33, cerca de las localidades de Casilda, Chabás, Villada, Venado Tuerto,

Rufino y Bombal; y en la Ruta Nacional N° 11 cerca de las localidades de Reconquista, Romang, Emilia y Villa Ocampo.

En la provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, se realizó una concentración de aproximadamente cuatrocientos productores que interrumpió por algunas horas el paso por la Ruta Nacional N° 8.

A su vez, en la provincia de Entre Ríos, a las afueras de Gualeguaychú, el dirigente Alfredo de Angeli encabezó una manifestación, de la que participaron productores con tractores, camionetas, cosechadoras y fumigadoras que se extendió tres kilómetros sobre la Ruta Nacional N° 14. También realizaron una asamblea en la que Alfredo de Angeli, además de rechazar las acusaciones hechas por Néstor Kirchner sobre un presunto intento de golpe de estado, dijo que se realizaría el acto nacional en Palermo porque era "el lugar donde Justo José de Urquiza estuvo peleando por el federalismo". También los productores se manifestaron en otros puntos de la provincia, como Chajarí, Basavilbaso, Villaguay, Victoria y en el acceso al Túnel Subfluvial, del lado de la ciudad de Paraná.

Lunes 14 de Julio

En el Senado se cerró el plazo para presentar dictámenes sobre las retenciones móviles. Mientras que el oficialismo pretendía ratificar la Resolución N° 125/08 tal como la había aprobado la Cámara de Diputados[25], los proyectos presentados por la oposición se diversificaron. En total, se presentaron cuatro dictámenes y dos proyectos alternativos a la media sanción de la Resolución N° 125/08 ratificada en Diputados. Los dictámenes fueron elaborados por el senador Carlos Reutemann[26], el senador Pablo

25 En ella se había establecido un régimen de reintegros para pequeños y medianos productores que, en el caso de la soja, implicaba retenciones del 35 % para las primeras 750 toneladas de los productores que exportaran hasta 1.500 toneladas, y aquellos que exportaran menos de 300 toneladas estarían sujetos a retenciones del 30 %. También realizaba una reducción de los requisitos impositivos para el cobro de reintegros, que se devolverían en treinta días hábiles a partir de la aprobación de la AFIP y a través de la CBU.

26 El dictamen de Reutemann proponía para la soja una curva de retenciones con alícuotas crecientes a medida que aumentaba su precio internacional con un tope del 40 % en caso de que el precio alcanzase los ochocientos dólares y a su vez, los pequeños y medianos productores, hasta mil quinientas toneladas, podrían computar a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias el excedente sobre alícuotas del 22 %, 27 % y 30 %, según su volumen de producción. Para el trigo y el maíz establecía una retención fija del 22 % y para el girasol del 30 %. También promovía el uso de fertilizantes a partir del establecimiento de una deducción adicional de hasta el 70 % de los gastos, como desgravación del impuesto a las Ganancias y reducía el IVA de las semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas e inoculantes al 10,5 %. Restituía al Congreso las facultades para establecer derechos de exportación, derogando el artículo N° 755 del Código Aduanero. No

Verani (radical kirchnerista)[27], el senador salteño Juan Pérez Alsina[28] y el elaborado en conjunto por la UCR, la CC y el peronismo disidente[29]. A su vez, los otros dos proyectos alternativos fueron firmados por el socialista Rubén Giustiniani y Carlos Menem.

En tanto, el tratamiento en la Cámara de Diputados de las leyes de Arrendamiento y de Emergencia Agropecuaria fue pospuesto para realizarse el mismo día que se trataría en el Senado la Resolución N° 125/08. La presidencia del bloque oficialista atribuyó el cambio a que la Cámara de Diputados primero debía analizar la prórroga de la participación de los Cascos Azules en Haití, sin embargo otra fuente oficial habría reconocido que existían presiones "de los grupos económicos afectados por la Ley de Arrendamiento que no quieren que se vote esta semana".

En cuanto a los dos actos que se iban a realizar con razón de la votación en el Senado, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, sostuvo que la Iglesia no concurriría a ninguno de ellos con el objetivo de contribuir a la paz social. Por su parte, tanto las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora como la Asociación Madres de Plaza de Mayo decidieron participar del acto oficialista en la Plaza del Congreso. Hebe de Bonafini sostuvo que la movilización sería: "en contra de la derecha fascista y la oligarquía terrateniente que se cree que todavía tiene la impunidad y el poder de voltear a un gobierno porque no hace lo que ellos quieren". Por otro lado, el Partido Comunista y el Partido

obstante, estos beneficios no alcanzaban a los monotributistas. Según la ONCCA, esta propuesta, a diferencia de la propuesta oficial, no contemplaba compensaciones por flete a los productores de zonas extrapampeanas.

27 En su dictamen ratificaba la Resolución N° 125 pero con diferenciaciones y reintegros: fijaba una escala de retenciones diferenciadas para los productores de hasta 2 mil toneladas y con alícuotas del 33 % para la soja y de 32 % para el girasol. También establecía topes para las retenciones al maíz 28 % y el trigo 28 %. Además, eliminaba el sistema de compensaciones y coparticipaba las retenciones con los gobiernos provinciales.

28 Proponía volver a las retenciones del 35 % por dos años.

29 Éste planteaba que los derechos de exportación se establecieran por ley del Congreso y proponía una tabla progresiva y segmentada de retenciones, las cuales no podrían superar 35 %. También establecía una tabla progresiva de retenciones según el tonelaje de exportación y un techo para cada uno de los granos y oleaginosas, que en el caso de la soja, su piso sería del 20 % y las primeras trescientas toneladas no pagarían ningún adicional y hasta seiscientas toneladas se agregaría un 2 %; hasta mil quinientas el adicional sería del 4 %; hasta 3 mil, el 6 %; hasta cuatro mil quinientas, el 10 % y para más de cuatro mil quinientas, el 15 %. En el caso del trigo el piso sería del 15 % con un techo del 6 % para el adicional en los casos que superaran las 3.600 toneladas. Para el maíz el piso sería del 15 % con un techo de adicional del 10 % para más de 4 mil toneladas exportadas. Para el girasol, el piso sería del 20 % y el techo adicional no podría superar el 10 % a quienes superasen las 4 mil toneladas.

Humanista anunciaron que irían también al acto kirchnerista, mientras que el MST y el PCR asistirían al acto en Palermo.

Durante un acto que compartió con el líder sindical, Luis Barrionuevo, en la sede del sindicato de los gastronómicos, Mario Llambías indicó: "Saquémonos de encima la dominación, unámonos". También participaron del encuentro, Hugo Biolcati, vicepresidente de la SRA y Pedro Apaolaza, titular de CARBAP. Barrionuevo a su vez, y en referencia al líder de la CGT, Hugo Moyano, sostuvo: "No tengo la menor duda de que de diez trabajadores que cesen mañana sus actividades, ocho van a ir al Monumento de los Españoles y dos se irán a sus casas". Por otro lado, luego de mantener un encuentro en la provincia de Córdoba, de Angeli declaró que el gobernador Juan Schiaretti estaría entre los dirigentes políticos que en el futuro iban a poder caminar por la calle y dijo que "muchos van a tener problemas hasta para convivir".

Por otro lado, los diputados nacionales del FPV, Patricia Vaca Narvaja, Carlos Kunkel y José María Díaz Bancalari denunciaron que fueron agredidos por los dirigentes agropecuarios. A su vez, la agrupación kirchnerista La Cámpora realizó una manifestación en las puertas de la FAA, repudiando las declaraciones de Alfredo de Angeli respecto a que se debían liberar las exportaciones de carne y a que si un argentino quisiera comer lomo, que pague el kilo "a 80 pesos".

A la espera del debate en el Senado, dos actos

Martes 15 de Julio

Mientras que los productores autoconvocados de la provincia de La Pampa se organizaban para viajar en micros hacia la Ciudad de Buenos Aires para asistir al acto organizado por la ME en el Monumento de los Españoles, varias agrupaciones políticas y sociales de la misma provincia, tales como el Movimiento Evita, el Peronismo Militante, la agrupación "Pampero García", el Sindicato de Empleadas Domésticas y el FB 19 (ambas de la localidad de General Pico), convocaron a participar del acto oficialista que se realizaría en la Plaza del Congreso.

Al mediodía, se realizó en el Senado la reunión de Labor Parlamentaria donde se acordaron las formas de funcionamiento para la votación, en ella se pactó que los miembros informantes de los distintos proyectos y

los presidentes de las bancadas partidarias tendrían hasta treinta minutos para exponer, mientras que el resto de los que quisieran tomar la palabra dispondrían de cinco minutos, lo que extendería la sesión hasta avanzada la noche, a pesar de que los presentes coincidían en que la votación debería realizarse antes de la medianoche, cuando los senadores y los ciudadanos todavía estuvieran despiertos.

Por la tarde, se realizaron los actos, ambos tuvieron asistencia multitudinaria, sin que se registraran incidentes. Hubo diferencias en la información que los distintos medios de comunicación brindaron respecto de la cantidad de gente que asistió a cada uno, sin embargo se estimó que en el acto de las entidades agropecuarias había siete cuadras cubiertas de gente por la Avenida del Libertador, y que en el acto oficialista, desde el Congreso se observaba gente hasta las avenidas Corrientes, 9 de Julio y San Juan. Por su parte, el PTS, el Partido Obrero (PO) y el MAS no participaron de ninguno de los dos actos.

En el acto oficialista, los manifestantes llevaban consignas que se relacionaban con el respaldo al Gobierno y la distribución de la riqueza. Néstor Kirchner, fue precedido en su discurso por los gobernadores Sergio Urribarri y Daniel Scioli. Cuando le tocó su turno, Néstor Kirchner comprometió al PJ a respetar la decisión que votase el Senado, defendió sus acciones de gobierno, en cuanto a las políticas de generación de empleo y derechos humanos, y asoció a los dirigentes de la ME con aquellos sectores que apoyaron a los golpes de estado del '55 y del '76. También transmitió la decisión de la Presidenta de aceptar lo que resolviesen los senadores y anunció: "La Presidenta me pidió que les diga que me juramente ante ustedes que nosotros respetaremos la decisión del Congreso sea cual fuere (...) Nosotros aceptaremos la resolución del Congreso, porque queremos más democracia. Es la única forma en que pueden convivir los pueblos. Esperamos que todos hagan lo mismo (...) Basta de comandos civiles, basta de cortes de rutas, basta de desabastecimiento". Y luego sostuvo: "Logramos desendeudar a los productores, a quienes abrazamos. Los productores no son nuestros enemigos. Sí tenemos que estar atentos con aquellos pools que se enriquecen con el trabajo ajeno". A su vez, cuestionó a sus ex compañeros del PJ que se alejaron del oficialismo para apoyar la protesta de las entidades agropecuarias. Una vez finalizado el acto, el jefe de la bancada del FPV, Miguel Ángel Pichetto, convocó a una reunión del bloque que presidía.

Entre los presentes se encontraban los siguientes gobernadores provinciales aliados del oficialismo: Daniel Scioli (Buenos Aires), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Walter Barrionuevo (Jujuy), Oscar Jorge (La Pampa), José Alperovich (Tucumán), José Luis Gioja (San Juan), Daniel Peralta (Santa Cruz) y Miguel Saiz (Río Negro). A ellos se sumaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; la ministra de Salud, Graciela Ocaña; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jorge Taiana. También participaron del acto el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el intendente de Morón, Martín Sabbatella; el dirigente cooperativista Carlos Heller; los dirigentes gremiales Hugo Moyano y Juan Belén (UOM), el Partido Comunista y el Partido Humanista.

Por otro lado, asistió el Movimiento Barrios de Pie, Libres del Sur, el Movimiento Evita, el Movimiento Segundo Centenario, la Federación de Tierra y Vivienda con Luis D´Elía, la organización barrial Tupac Amaru de la provincia de Jujuy junto a la dirigente jujeña Milagro Sala y el cura Luis Farinello, el Frente Transversal Nacional y Popular con Edgardo Depetri y el Movimiento Nacional Marcha Grande, a los que se sumaron otras organizaciones barriales referenciadas en la CTA. De los gremios trabajadores, asistió la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato de Choferes de Camiones, trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otros gremios de la CGT. Por último, se observó la presencia de intelectuales del espacio Carta Abierta que se ubicaron junto a los organismos de derechos humanos.

Mientras tanto, en el acto de las entidades agropecuarias en el Monumento de los Españoles, hablaron los titulares de la SRA, la CONINAGRO, la CRA, la FAA y además, Alfredo de Angeli. Luego de que un cantante de chacareras recitara unos versos gauchescos contando las penurias por las que estaba atravesando el campo y se entonara el Himno Nacional, comenzaron los discursos. El primer orador fue Alfredo de Angeli, quien dirigió su palabra hacia los senadores: "mañana tienen la responsabilidad", "tienen que representar al pueblo, no al ejecutivo". Luego, hizo su discurso el titular de la CONINAGRO, Fernando Gioino, seguido por Luciano Miguens. Posteriormente, le tocó su turno a Eduardo Buzzi quien le exigió al gobierno que grave la renta financiera y que controle a las exportadoras y sostuvo que "estamos en presencia de un modelo económico que apunta

a la concentración y a un capitalismo de amigos. ¡Así no se resuelve la pobreza!". Finalizó su discurso parafraseando el preámbulo de la Constitución argentina: "para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino", ovacionado por todos los manifestantes.

Finalmente, el acto fue cerrado por el titular de la CRA, Mario Llambías quien cuestionó: "¿Qué quieren los senadores que votan en contra? Que el país siga siendo un unicato" seguido por dos mujeres que cantaban desde el palco: "El que no salta es un pingüino / el que no salta es un pingüino", a las que siguieron la dirigencia agropecuaria y el resto de los manifestantes. El acto terminó con una guitarreada y con el regreso al palco de Alfredo de Angeli, a pedido del público, que cerró con la frase "¡¡Minga nos van a poner de rodillas!!". Asistieron a la movilización, Elisa Carrió, Hilda Chiche Duhalde, Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, Juan Carlos Blumberg, Jorge Macri, Esteban Bullrich y los peronistas disidentes Diego Santilli, Cristian Ritondo, Daniel Amoroso, José Manuel De la Sota. También estuvieron presentes el misionero Ramón Puerta, Nito Artaza, Francisco de Narváez, Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy. Por su parte, asistieron organizaciones sociales y partidos políticos tales como, la CCC, el MIJD, la Juventud Socialista y el MST.

Miércoles 16 de Julio

En el Senado, el debate y votación de la Resolución N° 125/08 comenzó a las 10:00hs de la mañana y siguió durante todo el día y la noche. Por un lado, Hilda "Chiche" Duhalde aseguró: "La resolución 125 es una trampa mortal". A su vez, durante su discurso en la sesión del Senado, Adolfo Rodríguez Saá, criticó la "demonización de la soja y de quienes tenemos una opinión diferente del discurso único que se quiere imponer", votó en contra de la Resolución N° 125/08 parafraseando a Juan Domingo Perón: "Nosotros somos los ricos del futuro". El ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, quien fue uno de los primeros en votar por la negativa al proyecto oficial, sostuvo: "De ninguna manera me opondré a mi condición de mediano productor, pero tampoco me opongo a las retenciones. Sí quisiera que los aportes sean iguales en todas las actividades. Por eso me parece que llegó el momento de volver a hablar en el país de una nueva Ley Federal de Coparticipación".

En tanto, Blanca Osuna y Pedro Guillermo Guastavino, senadores por la provincia de Entre Ríos, votaron a favor de la Resolución N° 125/08. En cambio, el tercer legislador por dicha provincia, el radical Arturo Vera, lo hizo en contra, argumentando que sus críticas no apuntaban a "las retenciones en sí" si no "al nivel de dichas retenciones" y cuestionó la opción del oficialismo cuando decidió que "al proyecto que llegó al Senado desde Diputados no se le pudiera cambiar ni una coma". En tanto, un grupo de militantes y dirigentes del PJ brindaron su apoyo al gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, concentrándose frente a la Casa Gris en la ciudad de Paraná. Por su parte, el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, declaró: "El efecto de la resolución 125 no va a ser la redistribución de la riqueza sino la gran concentración de la tierra y la expulsión de los pequeños productores". Por otra parte, el senador por la provincia de Catamarca, Ramón Saadi, alrededor de las 21:00hs, anticipó su voto a favor del proyecto oficial y fue repudiado por los productores que se encontraban dentro del recinto.

Mientras tanto, los dirigentes de las entidades agropecuarias junto con productores del interior que habían participado en el acto en el Monumento de los Españoles, se concentraron en los bosques de Palermo para ver el debate de los senadores por televisión, a través de una pantalla gigante que habían instalado en el lugar. La concentración sumó a más productores y manifestantes y pasadas las 20:00hs cortaron la calle con banderas y cacerolas. A ellos se sumaron otros manifestantes y también militantes del MST, la CCC y la FTV disidente. Sumado a ello, luego del discurso del senador Ramón Saadi, también se concentraron opositores al oficialismo en la intersección de las avenidas Callao y Santa Fe y se generaron otras concentraciones en la zona norte de la ciudad. La protesta comenzó a disminuir cuando los resultados parciales de la votación mostraban un escenario complicado para el oficialismo. A su vez, en la quinta presidencial de Olivos se acercaron militantes de las agrupaciones Barrios de Pie y Libres del Sur en apoyo al proyecto oficial de retenciones móviles. Más tarde, llegaron al lugar manifestantes opositores a la Resolución N° 125/08.

Por otro lado, en la casa de la madre del senador por la provincia de Santiago del Estero, Emilio Rached (Bloque Frente Cívico Por Santiago), se concentró un grupo de productores y se movilizaron hasta las localidades Bandera y Los Juríes. El senador era catalogado como uno de los "indecisos".

Hacia la medianoche, la votación se encontraba pareja y la ventaja que llevaba el oficialismo se fue achicando a medida que se iban definiendo los senadores indecisos. Tanto el oficialismo como la oposición auguraban una definición complicada.

El final: la no ratificación de la Resolución N° 125/08

Jueves 17 de julio

La sesión en el Senado de la Nación contó con asistencia perfecta, los setenta y dos legisladores de la Cámara alta pasaron por el recinto y votaron, incluido el senador por la provincia de La Rioja, Carlos Menem, quien se encontraba afectado por una neumonía, pasó por el recinto y emitió su voto negativo. La votación se extendió hasta aproximadamente las 04:30hs.

A las tres de la mañana, emitió su voto el último opositor conocido del recinto, el senador por la provincia de Mendoza, Ernesto Sanz (UCR), quien reclamó la presencia del vicepresidente y que, ante un posible empate, le pidió que votara en contra de la Resolución N° 125/08. El último senador en emitir su voto fue Emilio Rached, radical kirchnerista, que votó en contra del proyecto oficial y generó un empate de treinta y seis votos a favor y en contra, obligando al Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado a definir la votación. Mientras tanto, en las carpas instaladas frente al Congreso en apoyo al proyecto oficial, una multitud se había preparado para festejar el triunfo del oficialismo, suponían que su bloque obtendría treinta y siete votos contra los treinta y cinco de la oposición. No obstante, en cuanto se corrió el rumor de que debería desempatar el Vicepresidente, la situación se volvió muy tensa y se corría el rumor de que Néstor Kirchner iba a acercarse hasta la carpa kirchnerista.

Finalmente, el Vicepresidente, a las 04:30hs de la madrugada, tuvo que definir la votación en el Senado. Había solicitado un cuarto intermedio que no fue aceptado, luego leyó el reglamento y ordenó votar nuevamente antes de definir con su voto. A pesar de que sus colaboradores habían declarado que en caso de empate no iría en contra de la voluntad de la Presidenta, el Vicepresidente afirmó que en el Senado no se había logrado el consenso necesario para aprobar las retenciones móviles y afirmó: “Mi voto no es positivo”. Luego de votar en contra del proyecto oficial, señaló:

"La historia me juzgará". Argumentó que tomaba esa decisión para ayudar a la "paz social" y que no se debía leer el resultado de la votación en términos de triunfos y derrotas. Por su parte, el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto, previamente a la definición de Julio Cobos había declarado: "Si vota por la negativa, tendrá que dejar su cargo", sin embargo, luego de emitir su voto, el Vicepresidente no renunció a su cargo.

En la madrugada, los dirigentes agropecuarios concentrados en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Sarmiento, celebraron el resultado de la votación en el Senado. El resultado los sorprendió debido a que suponían que el oficialismo conseguiría ajustadamente la ratificación de la Resolución N° 125/08. Además de los festejos por el resultado, las entidades agropecuarias señalaron que continuarían con su pedido de declaración de inconstitucionalidad de las retenciones móviles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, los ruralistas tendrían que recorrer cada una de las instancias del sistema judicial.

Luego de extensas jornadas la Cámara alta finalmente no ratificó la Resolución N° 125/08 y retrotrajo la situación al 11 de marzo de 2008, cuando las retenciones a las exportaciones de soja eran del 35 %.

Viernes 18 de julio

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández, dieron a conocer las tres resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían las retenciones móviles y que se publicarían en el Boletín Oficial el lunes siguiente.

En tanto, el texto del Decreto N° 1176/2008 firmado por la Presidenta incluyó críticas a las entidades agropecuarias y legisladores de la Cámara alta. Contenía también declaraciones tales como que "la igualdad de oportunidades es un eje" del Gobierno como así también "procurar mayor equidad en las relaciones económicas y en la distribución del ingreso" a lo que se agregó, respecto del crecimiento de los precios internacionales de alimentos, que el resultado la votación alejaba "la posibilidad de adquirirlos a los sectores populares". Expresaba, asimismo, que la Resolución N° 125/08 "fue pretexto para un violento lock-out que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, acciones verbales y físicas", entre otras cosas. Por último, el Gobierno en dicho decreto se lamentaba que

el Congreso haya sido objeto de “presiones” y que el debate se haya dado “en un marco de agresiones”.

Una de las resoluciones dejó sin efecto la Resolución N° 125/08 y sus modificatorias, mientras que las otras dos volvieron a poner en marcha un régimen de retenciones igual al que existía antes del inicio del conflicto, poniendo en vigencia los aranceles establecidos en noviembre de 2007 del 35 % fijo para la soja, del 28 % para el trigo, del 10 % para el girasol y del 25 % para el maíz.

El conflicto agrario: características y proyecciones

Miguel Teubal y Tomás Palmisano

El conflicto agrario, que comenzó en 2008 y que en el año 2010 todavía se hallaba inconcluso, trajo a la luz múltiples aspectos vinculados con la problemática del sector agropecuario argentino desconocidos para gran parte de la opinión pública nacional. Sin embargo, también quedaron invisibilizadas muchas cuestiones relevantes. Por una parte, la gran heterogeneidad de la estructura agraria, la diversidad de sectores y agentes sociales que la conforman y las estrategias que desarrollan. Se trata de una temática importante por cuanto es difícil entender el conflicto si no se visualiza que "el campo" no es una entidad homogénea sino un sector integrado por muchos y variados subsectores en cuanto a los procesos productivos y la naturaleza de los actores sociales involucrados. A ello debería considerarse que las transformaciones operadas en el sector en décadas recientes han potenciado esta heterogeneidad estructural.

La otra cuestión que también quedó en gran medida afuera del debate pero que subyace en el trasfondo del conflicto tiene que ver con el modelo agrario predominante. Se trata de un modelo basado en la extrema "sojización" de la actividad agropecuaria, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el "sistema del agronegocio" (Giarracca y Teubal, 2008). En el marco de este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras (fundamentalmente la empresa Monsanto y/o sus licenciatarias o empresas que venden la semilla transgénica), etc. Durante el conflicto fue solapado el análisis en profundidad y con una perspectiva crítica acerca de las características y consecuencias del modelo sojero y del agronegocio en el país[1].

1 El agronegocio no remite sólo a la producción de soja sino a una lógica sobre como llevar adelante la actividad. Se aplica también a otros sectores como, por ejemplo, al complejo cárnico vacuno con *feed lots* o al avícola, e involucra los diferimientos impositivos y el potenciamiento del sector financiero con la aparición de los denominados *pools* de siembra. Asimismo tiene vínculos

En nuestra consideración, ninguno de los protagonistas del conflicto cuestionó seriamente el modelo sojero en sí, esto es, el modelo de la soja transgénica impulsado por intereses asociados a grandes empresas que conforman el sistema de los agronegocios en el país. Asimismo, como veremos más adelante, durante el conflicto sólo en forma circunstancial fueron tratadas algunas de sus consecuencias económicas, sociales, ambientales y de salud pública. Tales invisibilizaciones fueron acrecentándose a medida que avanzó el conflicto y las partes se enfrascaron en el debate sobre las retenciones. En efecto, ni al gobierno, ni al "campo" les convenía cuestionar elementos esenciales del modelo sojero. Asimismo, cuando se hacía alguna alusión a la heterogeneidad estructural del sector, ésta era considerada poco importante o anecdótica. En realidad la referencia al "campo" se remitía en todo momento a la *Mesa de Enlace* (ME) [integrada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA)] que no necesariamente es representativa del sector en su globalidad. A lo largo del conflicto no participaron en forma directa ni el sector campesino, ni las comunidades indígenas, ni una parte importante de la agricultura familiar, aunque sectores chacareros de medianos y pequeños productores familiares manifestaron críticas al gobierno por múltiples razones que no necesariamente tenían que ver con el problema de las retenciones.

Al gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de los servicios de la deuda externa. Asimismo, al "campo" le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable – por lo menos a sus principales protagonistas –debido al alza continua de los precios de los *commodities* (principalmente la soja) en el mercado internacional. Quizás por estas razones ninguna de las dos partes en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad.

La discusión en torno de las retenciones tenía, entonces, que ver con quiénes se apropiaban y en qué proporciones de las rentas fundiarias percibidas por el alza de los precios internacionales de los *commodities* que se produjo fundamentalmente a partir del año 2003[2]. A la ME le parecía co-

con la operatoria de grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas que operan en sectores clave del sistema agroalimentario. Véase Giarracca y Teubal (2008).

2 En sus últimos tramos este ciclo de alzas fue impulsado por intereses vinculados a las finanzas por razones netamente especulativas como estrategia para hacer frente a la crisis financiera

rrecto que esta bonanza favoreciera a los "productores agropecuarios"; en cambio para el gobierno los aumentos generaban *ganancias extraordinarias* susceptibles de ser gravadas parcialmente y apropiadas y redistribuidas por el Estado para hacer frente a sus necesidades de funcionamiento.

Al acrecentarse esta dicotomía impulsada por ambos bandos, se generó una polarización de posturas que ocultó muchos de los problemas a los que hacemos referencia en este trabajo. El gobierno proponía promover la idea de que el aumento de las retenciones constituía una medida *redistributiva*, alternativa a las políticas impositivas aplicadas bajo el neoliberalismo en décadas pasadas. Asimismo, entre las funciones que presumiblemente tendría la política de retenciones estaba no sólo la necesidad de proveerse de fondos para hacer frente a las obligaciones externas e internas, sino también de incidir sobre los precios alimentarios internos mediante su desacople con los precios internacionales. También se proponía neutralizar en alguna medida los efectos de la devaluación del tipo de cambio. En cambio, la ME veía peligrar la rentabilidad de su sector ante las medidas adoptadas con relación a la política de retenciones.

Sin embargo, pronto la dicotomía *campo-gobierno* adquirió tintes políticos. El gobierno veía la posibilidad de configurar un bloque de poder que le serviría a una estrategia orientada hacia las cercanas elecciones. De allí el mote de *desestabilizante* que le asignó al accionar de los referentes de la ME. En efecto, pretendía movilizar detrás de sí a sectores del "progresismo" de la sociedad para enfrentar al golpe que presumiblemente preparaban los tradicionales "desconocidos de siempre" (SRA, etc.) a la usanza del golpe económico de 1989 durante el gobierno de Alfonsín, o los tristemente célebres golpes militares que se produjeron con anterioridad. Por su parte, a la ME también le resultó provechoso entrar en el juego de considerar al campo como una totalidad ya que le permitía asumirse como representativo del conjunto del sector. Al adoptar *motu proprio* esta función, pudo enfrentarse y negociar con mayor fuerza con el gobierno. Su reclamo estuvo orientado a mantener o aumentar la alta rentabilidad percibida por una parte de los productores agropecuarios debido básicamente al auge de los precios internacionales de la soja y de otros *commodities*.

internacional invirtiendo en los mercados de *commodities*. Estos aumentos de precio ejercieron una influencia significativa sobre la denominada "crisis alimentaria mundial". afectando en el año 2008 a numerosos países del tercer mundo que a lo largo de los años se habían transformado en importadores netos de alimentos básicos. Para un análisis de estos procesos véase Mac Michael, 2009 y la mención en Teubal, *Página 12,* 27 de marzo de 2008, reproducido en este libro. Véanse también varios artículos incluidos en el número especial sobre el tema publicado por el *Journal of Agrarian Change,* Vol.10, N° 1, enero 2010.

En la "invención" de estos dos bloques de poder (campo y gobierno), la posición más incómoda le cupo a la Federación Agraria Argentina (FAA). Si bien históricamente representó a los medianos y pequeños productores y a los arrendatarios, en esta coyuntura apareció unida y sin fisuras con las demás organizaciones de la ME incluyendo la SRA, su contrincante histórico.

El comportamiento de la FAA tuvo consecuencias tan importantes como cuestionables para diversos sectores internos de la organización. Esta alianza estratégica de la FAA, que tomó un camino diferente al que asumen sectores agrarios medios con características productivas similares en otros países[3], pudo deberse al cambio en su base de sustentación por parte de medianos y pequeños productores de la región pampeana. La desaparición, entre los censos nacionales agropecuarios (CNA) de 1988 y 2002, de más de ochenta mil explotaciones pertenecientes fundamentalmente a estratos de pequeños productores de menos de 200 hectáreas colaboró para que este estrato redujera significativamente tanto su número como su influencia dentro de la Federación[4].

Como consecuencia, durante el conflicto la FAA optó por privilegiar los acuerdos con las demás corporaciones de la ME favoreciendo a la mediana y gran empresa agropecuaria, en detrimento de la defensa de los medianos y pequeños productores familiares tanto del agro pampeano como del resto del país. Este sector, también integrado por los arrendatarios, constituyó históricamente la base de sustentación de la organización.

El desenlace parcial del conflicto tras la votación en el Senado donde desempató el Presidente de la Cámara y también Vicepresidente de la Nación, que retrotrajo la situación al 11 de marzo antes de la Resolución 125, mostró que el "campo" triunfó notablemente en la disputa mediática al volcarse gran parte de la opinión pública a su favor (véase los tres artículos siguientes en este libro).

La incidencia de la inflación sobre la caída de los salarios reales de gran parte de la población habría contribuido a la erosión de la popularidad del gobierno a lo largo de los meses en que duró el conflicto. Se fue ha-

3 En este sentido es interesante el ejemplo de los chacareros o *farmers* trigueros del Canadá incluidos en la Canadian Wheat Board (CWB) (Junta Canadiense del Trigo) que controla la comercialización y exportación de trigo y cebada de los tres principales estados cerealeros en el oeste de Canadá, y que se ha transformado en un importante exportador a la economía mundial al margen de las grandes empresas exportadoras transnacionales.

4 Según un importante referente de la FAA, la organización también se vio desilusionada por la falta de sustento de las principales propuestas "progresistas" para el sector que formaron parte de la retórica gubernamental a partir del nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

ciendo patente que el presunto progresismo del gobierno se confrontaba con la falta de impulso a una política redistributiva firme[5]. Asimismo, durante este período la ME tejió alianzas con otros sectores políticos, para así consolidar una estrategia de poder con vistas a lograr una mayor participación en el Congreso y/o influencia sobre la política agropecuaria del futuro. El sector alcanzó en gran medida sus objetivos al ser electos muchos de sus referentes para integrar el Congreso Nacional.

Hacia fines del 2008 y comienzos del 2009 la situación del campo comienza a cambiar. Luego del alza de los precios internacionales de los *commodities* se produjo una caída súbita de los mismos. La reducción del precio de la soja y de otros granos contrajo los ingresos del sector, aunque en términos relativos la soja siguió siendo el cultivo más rentable. Se revertía así temporalmente la situación económica respecto de la imperante durante el año anterior, lo cuál refleja la vulnerabilidad del modelo[6]. Asimismo, la sequía afectó a una parte importante de los productores agropecuarios de todo el país. En definitiva, la caída del precio de la soja, los bajos rendimientos por falta de agua, los costos de los arrendamientos que se mantenían altos y la perspectiva de que la crisis mundial podría afectar a la economía argentina fueron factores que incidieron en los ya tensionados escenarios. Más allá de todos estos factores, la soja siguió siendo el cultivo más rentable entre todas las producciones nacionales y en la campaña 2009/2010 se batió nuevamente el récord de superficie implantada con este cultivo.

Después de las elecciones del 28 de junio de 2009, y con el precio de la soja nuevamente en alza, el panorama político-económico del conflicto toma otro cariz. Comienza un período de "diálogo" entre la ME y el gobierno. Y si bien se intenta lograr un mayor consenso en torno de numerosas cuestiones, el veto de artículos clave de la nueva Ley de Emergencia que fue presentada en el Congreso crispó nuevamente los ánimos de los protagonistas del campo.

De todos modos, en enero del 2009 el gobierno decretó un sistema de compensaciones para diferentes segmentos de productores, lo cual pudo significar un cambio en las rentabilidades relativas. Sin embargo, el reclamo de segmentación de las retenciones a la soja no fue aceptado. A partir de entonces podría decirse que hubo un atisbo de crítica oficial (aunque leve) al modelo sojero, y de todo lo que aquello entraña.

5 La postura del gobierno con relación a políticas vinculadas con la explotación de los recursos naturales en el nivel nacional contribuyó al cuestionamiento del discurso oficial.

6 Véase Teubal, 27 de marzo de 2008 y 9 de noviembre de 2008, reproducidos en este libro.

En definitiva, la dicotomía *campo-gobierno* invisibilizó – en muchos sentidos continúa invisibilizando –aspectos importantes de la política y estructura agraria de nuestro país. En lo esencial dejó de lado la caracterización realizada frecuentemente acerca de la gran heterogeneidad estructural del sector, o sea, la persistencia de múltiples y diversos sub-sectores que lo integran, algunos muy enfrentados entre sí. Esta dicotomía también llevó a muchos a insistir en una caracterización que pudiera haber tenido el sector en otros períodos históricos, cuando una parte importante del poder agrario lo detentaba la tradicional "oligarquía terrateniente" (véase el artículo de Norma Giarracca en este libro). De igual forma, se tendió a invisibilizar la naturaleza y primacía del agronegocio sojero en el país. Desentrañar estas fuentes de construcción de sentidos es, *prima facie*, importante para considerar aspectos que atañen a la política agraria de estos últimos años y la que se perfila hacia el futuro[7].

Caracterización del sector

En vista de lo planteado más arriba, presentamos en forma esquemática un análisis sobre la conformación del sector agropecuario de nuestro país y sus transformaciones recientes. Como consecuencia de políticas y procesos desarrollados desde los años setenta en adelante (Teubal y Giarracca, 2005) el sector agrario argentino puede ser dividido en tres subsectores. El primero estaría conformado por un conjunto importante de grandes empresas: exportadoras de cereales y oleaginosas (Cargill entre otras), grandes sojeros (Grobocopatel), *pools de siembra*, fondos de inversión y la empresa Monsanto y otras semilleras que proveen en el país (y en el mundo) la semilla transgénica utilizada en más de un 95% en la producción sojera. Este bloque de poder se constituyó en el principal beneficiario de las políticas económicas y agropecuarias de las últimas décadas enmarcadas en los procesos de sojización a que hacemos referencia, los cuales fueron potenciados fundamentalmente a partir de la liberación al mercado de la semilla sojera transgénica RR (Round up Ready) en el año 1996. En el otro extremo del espectro agropecuario están el campesinado y las comunidades indígenas, así como también una parte importante de la agricultura familiar, pertenecientes fundamentalmente a regiones ex-

7 Hacia mediados del 2010 la postura de la FAA a favor de una segmentación de las retenciones para favorecer a los medianos y pequeños productores significó un cierto enfrentamiento con los demás integrantes de la ME.

trapampeanas. Se trata de explotaciones de poca extensión, en muchos casos con formas de tenencia precaria de la tierra, y que producen a una escala mucho menor que lo que es habitual en la región pampeana. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002 el 69,5% de las explotaciones agropecuarias del país tenían menos de 200 has a la vez que ocupaban una proporción importante de la mano de obra del sector, fundamentalmente de tipo familiar. Una parte de este estrato representaría al sector campesino y las comunidades originarias que serían los más afectados por el embate del neoliberalismo, el avance sojero y las políticas estatales que promovieron la expansión de esta oleaginosa en las últimas décadas. Serían los sectores más afectados por las políticas de deforestación, los desalojos mediante represión y violencia, la flexibilización del control ambiental permitiendo la fumigación indiscriminada por aire con agrotóxicos, etc. Estos embates han sido en algunos casos resistidos con la organización del campesinado y de las comunidades indígenas como lo muestran los ejemplos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Campesino de Formosa y otras organizaciones afines centradas en la defensa de la tierra como elemento esencial de la vida (véase Giarracca y Teubal, 2005). Como veremos más adelante, en años recientes se han sumado a sus luchas y reclamos vecinos afectados por la fumigación masiva con glifosato y otros agrotóxicos que se realiza en gran parte del país.

El tercer sector, en el medio de los enunciados en el párrafo anterior, está formado por los denominados "medianos y pequeños productores". Abarca un espectro muy grande de explotaciones, que se extiende desde medianos productores cuya organización responde a la lógica empresarial en la zona pampeana hasta los tradicionales "chacareros" de la misma zona, así como también productores familiares y empresariales de regiones extra pampeanas[8]. Un número importante de estas explotaciones fundamentalmente pampeanas se dedica al cultivo de soja aunque también desarrollan otras actividades: tambo, cría de ganado, producción de trigo, cultivos industriales, etc. En los años 90 muchos productores agropecuarios pertenecientes a este sub-sector y al sector campesino desaparecieron, en particular aquellos cuyas explotaciones tenían menos de o se hallaban

8 Es importante destacar que la cantidad de hectáreas de una explotación familiar está estrechamente vinculada con el tipo de producción y la intensidad en el uso de la tierra. En muchos casos son necesarias extensiones muy amplias para que una familia pueda vivir mientras que en otras regiones con unas pocas hectáreas se obtendría un valor de la producción relativamente alto.

en torno a las 200 ha. Se trató de un proceso relacionado con la expansión del agronegocio y la extrema sojización de la actividad agropecuaria. Muchos se endeudaron y luego perdieron sus tierras[9] y otros, en condiciones similares vieron en el auge sojero un salvavidas para su actividad. No obstante, en los últimos años un número significativo de productores salieron directamente del sector o pasaron a arrendar sus campos a contratistas y pools de siembra. Quienes sobrevivieron y mantuvieron la producción vieron la posibilidad de recomponer su patrimonio debido a la renegociación de sus deudas y a condiciones más favorables para su producción, basadas fundamentalmente en el alza de los precios internacionales de los *commodities*. Así tamberos y ganaderos se volcaron a la soja como estrategia de supervivencia, acuciados por deudas y años desfavorables para su actividad tradicional. Sin embargo, otros optaron por mantenerse al margen del cultivo de soja como en el sur de la provincia de Buenos Aires en donde combinan con trigo y cebada la rotación agricultura-ganadería; ocurre otro tanto con pequeños cañeros tucumanos, algodoneros chaqueños, viñateros en Cuyo, productores medianos y pequeños de frutas y hortalizas tanto del valle del Río Negro como del resto del país, etc. Muchos de estos sectores sufren presiones frente al avance sojero, confrontándose con una problemática vinculada a la dislocación de sus cultivos y sus formas tradicionales de organización. En otras épocas, estos productores se caracterizaron por haber logrado un grado substancial de asociación en cooperativas de diferente naturaleza como modo de adaptación a condiciones productivas y comerciales adversas[10].

En líneas generales, la ME pudo haber representado a una parte importante de este sub-sector durante el reciente conflicto. Se trata de la fracción que puso su fuerza de choque en las rutas, contribuyendo sustancialmente a las grandes movilizaciones especialmente en los pueblos del interior. El conflicto no hubiera alcanzado tamaña envergadura sin esta participación. Si la ME los pudo movilizar se debió no sólo al debate sobre las retenciones sino también a otros aspectos de la problemática agraria

9 Estos medianos y pequeños productores perdieron sus campos en los noventa tras haber realizado inversiones o tomado préstamos en coyunturas en que los precios de los *commodities* cayeron, y por tanto no lograron hacer frente a sus deudas. Otros no alcanzaron a ampliar la escala de su producción no pudiendo acceder al equipo necesario para operar con efectividad en esta etapa. Como consecuencia, debido a cambios tecnológicos y organizativos fueron expulsados del sector numerosos productores y trabajadores rurales (véase Giarracca y Teubal, 2001 y Gras y Hernández, 2009, varios capítulos).

10 Para un análisis de un cambio en el "estilo de vida chacarero" en años recientes, véase Urcola, 2010.

que no fueron tratados en profundidad por la ME. El problema de las retenciones fue el catalizador, el significante flotante que unió las muchas demandas y situaciones críticas en contra del gobierno (véase Giarracca, Teubal y Palmisano, 2008).

Como contrapartida, en ningún momento aparecieron los representantes de los exportadores en las rutas[11], tampoco los grandes sojeros (aunque pudieron haber participado sus empleados) ni los *pools* de siembra, y menos aún la empresa Monsanto. Sin embargo, la ausencia "física" de estos sectores en la arena pública no impedía que sus intereses fueran realmente defendidos. En cierto sentido, los puntos de vista de muchos representantes de las corporaciones ruralistas coincidían con la postura de estos grandes ausentes, creando una clase especial de interacción discursiva en la cual una voz (exportadores, grandes productores, *pools* de siembra más importantes, empresas de insumos y agroquímicos) hablaba a través de otra voz o tipo de voz en un lenguaje social (ME)[12]. Si bien esto no quiere decir que los representantes ruralistas articularan efectivamente su postura y semántica, la realidad es que sus acciones sirvieron al doble propósito de defender estos grandes intereses a la vez que le evitaban los costos políticos de una eventual discusión acerca de la raíz del modelo del agronegocio sojero. En el otro extremo de las ausencias, las comunidades indígenas y el campesinado del interior del país, enfrentados en forma directa con los grandes sojeros y la política de sojización de las últimas décadas, sólo consiguieron atención de la opinión pública de manera intermitente.

Expansión sojera, el auge de los "agronegocios"

Una vez descripta someramente la estructura del sector agropecuario, es necesario analizar aspectos del proceso reciente que le dio forma. Como mencionamos anteriormente, una cuestión que ha caracterizado a la evolución agraria en estas últimas décadas es la extrema *sojización* que ha habido en el campo argentino con una especialización creciente en este cultivo transgénico de exportación. Para caracterizar a este período con

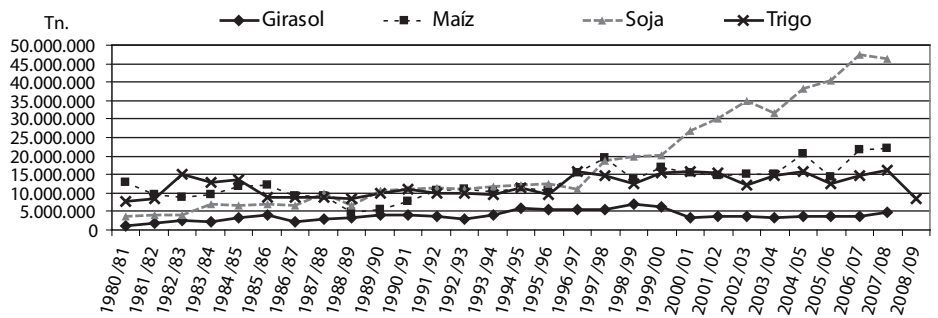
11 Una de las principales razones para explicar la ausencia de los exportadores durante la mayor parte del conflicto es el hecho que no son ellos los que en última instancia pagan las retenciones. Como veremos más adelante, esta alícuota es trasladada en su totalidad a los productores agropecuarios.

12 Este análisis es desarrollado por miembros del Círculo de Bajtín, especialmente en Volóshinov, 2009.

frecuencia de habla de la "reprimarización" de la economía, equiparable a la que operó en otros períodos históricos, aunque esta vez ha ido de la mano de la consolidación de un nuevo "sistema de agronegocios". Nos remitimos a la importancia que fueron asumiendo grandes empresas transnacionales, o transnacionalizadas, en sectores clave del complejo agroexportador y del sistema agroalimentario en su conjunto. Se trata de empresas entrelazadas y articuladas entre sí en un sistema que, aunque remite fundamentalmente a la soja, también – como dijimos - caracteriza y afecta a otros sectores de la producción agropecuaria (véase Giarracca y Teubal, 2008, Teubal, 2008). Dichas transformaciones no se hubieran producido si no fuera por la gama de políticas que desde los años 70 fueron introduciéndose en el país en el marco de la implantación del neoliberalismo.

La expansión de la soja fue espectacular. Como se observa en el gráfico 1, la producción de dicha oleaginosa pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 11 millones en 1996/97 y a 46,24 millones en 2007/2008. Fue así como pasó de representar el 10,6% de la producción granaria total en 1980/81 a más del 50 % en 2006/2007. Entre 1996/97 y 2006/2007 más del 91% del aumento de la producción granaria total del país correspondió a la soja.

Gráfico 1. Producción de granos en toneladas

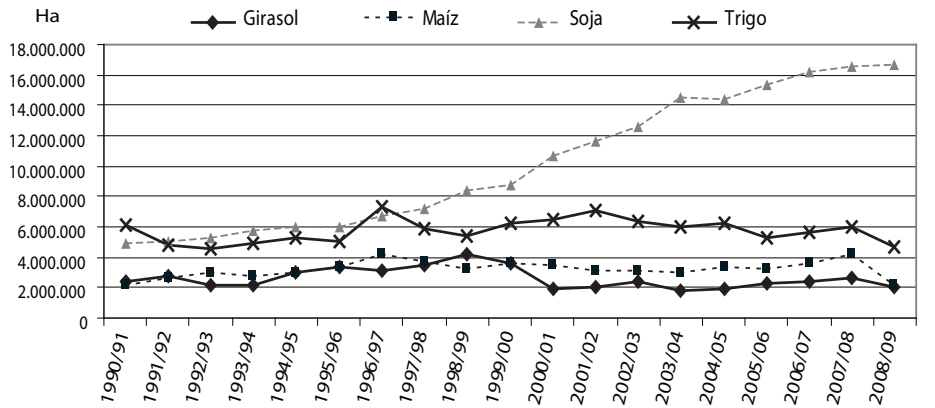


Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA).

El auge de esta oleaginosa se manifiesta también en la superficie sembrada. El gráfico 2 registra el notable aumento de dicho parámetro entre el período 1990/91 a 2008/09. Si bien la implantación del cultivo venía en ascenso desde los años 70, se da un salto importante a partir de la campaña 1995/96 cuando se aprueba la difusión de semilla transgénica en el merca-

do[13] y en un contexto de precios favorables. Si entre la campaña 1990/91 y 1995/96 la superficie sembrada con la oleaginosa había crecido 1.000.000 ha, en el mismo lapso de tiempo transcurrido entre 1995/96 y 2000/01 se expandió 4.660.000 ha, y para el siguiente quinquenio (2000/01 a 2005/06) el incremento en la superficie fue similar: 4.700.000 ha más sembradas con soja. En el período 2005/06 a 2008/09 la expansión fue de 1.270.000 ha, permitiendo que más del 53% del territorio destinado a los granos esté ocupado por la oleaginosa (16,66 millones de ha).

Gráfico 2. Superficie implantada por cultivo



Fuente: SAGPyA excepto datos campaña 2008/2009 extraídos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Siguiendo el gráfico 2, podemos afirmar que las superficies destinadas a cultivos como el maíz y el girasol no variaron en demasía, a excepción quizá del girasol que entre las campañas 1998/99 y 2000/01 redujo su superficie en más de 2.000.000 ha. y a partir de ese momento tuvo muy pocos cambios, ubicándose entre las 2.000.000 y 2.500.000 ha de superficie cultivada. La soja también avanzó sobre campos destinados a otros usos (cría e invernada de ganado y tambos en la región pampeana; algodón y

13 Un análisis de los rendimientos muestran que los kg./ha. de soja aumentan sustantivamente tras la campaña 97/98 pero no puede asegurarse que ello derive de una mayor productividad de la semilla transgénica en sí, sino del conjunto de cambios tecnológicos introducidos en el sector incluyendo la siembra directa. En realidad, si también tenemos en cuenta la evolución de la superficie sembrada podemos pensar que el aumento de los rindes puede vincularse con la puesta en producción sojera de mejores tierras a causa de un aumento de rentabilidad de dicho cultivo por la baja de costos gracias al nuevo paquete tecnológico utilizado. Por otra parte, la suba sustancial del precio de la soja en el período generó una importante diferencia de rentabilidad con sus dos cultivos competidores de la región pampeana (maíz y girasol).

otros cultivos industriales en el Chaco, etc.) y principalmente sobre yungas, monte nativo y territorios de comunidades campesinas e indígenas ubicados en la zona norte del país. En definitiva, se presenta un desplazamiento de los cultivos competidores de la soja hacia tierras de menor calidad y la reubicación del ganado, principalmente bovino, hacia la zona norte del país, mientras se profundizaron los arrinconamientos, desalojos y procesos judiciales contra comunidades indígenas y campesinas al tiempo que aumentaron los desmontes y la superficie puesta al servicio de la producción sojera (Barbetta. 2009; Grupo de Estudios Rurales, 2004; GER-GEMSAL y Cátedra de Sociología Rural, 2010).

Para llegar a esta situación fue necesario un marco de arreglos institucionales que facilitaron la consolidación del sistema del agronegocio, el cual posibilitó el control por parte de grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas de sectores clave del sistema agroalimentario argentino: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia), la comercialización de la producción, tanto para el mercado interno (super e hipermercados) como para la exportación, etc. (véase Teubal, Domínguez, Sabatino, 2005; Teubal, 2008; Giarracca y Teubal, 2008).

Estas empresas asumen una lógica muy diferente a la agroindustrial de antaño (Giarracca y Teubal, 2008). Como señala Giarracca, "este era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas: Terrabusi o Bagley, por ejemplo, eran algunas de las viejas empresas nacionales que estaban en la cadena agroindustrial y les iba bien. . . Había una lógica orientada a exportar pero también de producir alimentos orientados al consumo popular masivo" (entrevista a Norma Giarracca en *La Vaca*).

Todo ello comenzó a cambiar durante la dictadura militar cuando se potenciaron procesos de globalización y asume una importancia creciente el capital financiero. Surge un nuevo *régimen de acumulación* y el sistema agroalimentario en su conjunto comienza a operar en función de la lógica del agronegocio. A partir de entonces, se incrementa la influencia de las grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas en la definición de aspectos esenciales de la política agropecuaria que también se articulan con el sector financiero a través de los *pools de siembra*. Un hito importante que impulsó este proceso lo constituyó el decreto 2284 de desregulación económica del 31 de octubre del año 1991 que, entre otras múltiples medidas de desregulación, eliminó de raíz todas las juntas reguladoras de la

actividad agropecuaria (la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, entre otras) que operaban desde los años ´30. Repentinamente, el agro argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo y sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial. Se trataba de producir *commodities* orientados a la exportación, basándose en "tecnología de punta" y en grandes unidades productivas. Según funcionarios del gobierno debían desaparecer 200.000 productores agropecuarios considerados ineficientes (véase Giarracca y Teubal, 2005).

Durante la dictadura militar de 1976-1983 el banco de semillas del INTA se desmontó, y ese conocimiento pasó a las corporaciones que llegaban al país. Así se abrió la reserva genética de biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales. Se manifestaron nuevas revoluciones tecnológicas, primero los híbridos, luego los transgénicos, ambas dominadas por grandes empresas. El productor agropecuario que tradicionalmente reproducía su propia semilla se vio inducido a comprarla año tras año a las transnacionales. Y ciertas empresas, como es el caso de Monsanto, presionaron para el cobro de *royalties* por la provisión de la semilla transgénica. Asimismo, la utilización de esta semilla fue acompañada por un paquete tecnológico que incluía la "siembra directa" y que requería grandes cantidades de agrotóxicos para matar la maleza que queda en el campo tras la incorporación de la semilla sin el tradicional laboreo. Ello también involucró la utilización de maquinaria y equipo no siempre accesibles a medianos y pequeños productores.

Además, se flexibilizaron las leyes de arrendamiento y se promovieron nuevos "contratos accidentales" por una cosecha que incidieron en el potenciamiento de la figura del contratista, con o sin tierra propia. Se privatizaron los silos y puertos y se fue configurando un nuevo complejo agroexportador dominado por grandes empresas que tallaron con cada vez mayor fuerza en el panorama agrario nacional. Paralelamente, se fortalecieron los grandes productores agropecuarios, surgen los *pools* de siembra, fideicomisos que financian el arrendamiento y los contratistas necesarios para llevar adelante el proceso productivo. En el resto del sistema, la industria alimentaria se extranjeriza casi totalmente y crecen significativamente los supermercados e hipermercados, con una importante presencia del capital extranjero.

Tras la devaluación del 2002 y el alza de los precios internacionales de la soja y de otros *commodities* se produce un aumento continuo en el valor de las exportaciones de estos ítems. Las exportaciones totales del

país aumentan de 25,7 mil millones de dólares en 2002 a 55,8 mil millones en 2007, superándose los 70 mil millones en 2008. (Véase el cuadro 1)

Cuadro 1: Exportaciones vinculadas al complejo agroexportador (en millones de u$s)

Año	Soja			Girasol			Trigo		Maíz			Exportaciones totales
	Grano	Aceite	Derivados	Grano	Aceite	Derivados	Grano	Harina	Grano	Aceite	Derivados	
1997	144,8	1043,9	2044,1	33,9	998,1	226,0	1346,8	135,7	1348,4	12,8	18,6	26430,9
1998	650,0	1478,1	1740,7	163,8	1055,1	145,6	1307,6	99,5	1346,3	9,5	9,4	26441,0
1999	510,6	1253,6	1800,3	198,7	801,8	128,3	999,2	70,7	817,2	8,1	9,7	23332,7
2000	778,3	942,2	2169,4	64,6	472,8	135,0	1218,2	63,4	1020,4	9,4	27,4	26341,0
2001	1244,5	1055,6	2401,1	27,5	336,5	102,6	1301,6	65,9	994,0	7,1	28,0	26610,1
2002	1118,8	1348,3	2568,4	93,8	528,7	95,4	1097,7	32,2	924,9	7,4	32,6	25650,6
2003	1843,4	2084,6	3266,5	69,3	547,2	90,1	940,5	2,1	1235,4	15,1	42,2	29484,1
2004	1736,6	2337,0	3604,9	25,6	548,9	76,0	1366,6	5,2	1195,2	14,0	40,2	34575,7
2005	2295,7	2247,0	3798,4	56,1	704,0	66,7	1280,6	1,5	1367,5	16,7	54,6	40386,8
2006	1779,1	2789,6	4362,5	33,4	678,2	78,1	1472,1	35,0	1263,9	18,0	82,8	46456,4
2007	3435,1	4419,1	5748,0	48,6	604,3	85,8	2016,0	250,1	2253,1	20,3	179,3	55779,6
2008	4491,0	4798,5	7008,6	66,7	1449,3	156,5	2535,5	424,5	3482,6	27,2	216,6	70043,9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

En el año 2008 se exportó soja en grano por U$S 4491 millones representando el 6,41% del total exportado; aceite de soja por 4798,5 millones (6,85%) y otros derivados (harina y *pellets*) por U$S 7008,6 millones (10%). Todos estos productos sumaron en total U$S 16297,5 millones de dólares, constituyendo el 23,3% del valor total de las exportaciones de la Argentina. Cabe destacar que más del 90% de la producción sojera se destinó a la exportación. El valor de las exportaciones de soja en 2007 aumentó con relación a 2006 en un 57,6% y entre 2007 y 2008 en casi un 20%, debido no sólo a mayores volúmenes exportados sino también al alza significativa de sus precios. Otros *commodities* también se orientaron en forma creciente a la exportación. En el año 2008 el trigo representó el 4,2% de las exportaciones totales, el maíz el 4,4% (en el 2002 representaba el 3,8%), la carne el 2,7% y los lácteos el 1,2%. En términos generales los productos del complejo agroexportador figuran entre los primeros 15 más exportados del conjunto de la economía, tal como lo muestra el cuadro 2.

Cuadro 2: Listado de los 15 productos más exportados de 2008

Orden	Descripción
1	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja
2	Habas de soja
3	Aceites de petróleo, excepto crudos
4	Aceite de soja
5	Maíz
6	Gas de petróleo
7	Aceites crudos de petróleo
8	Minerales de cobre
9	Trigo y morcajo
10	Aceite de girasol, cártamo o algodón
11	Coches de turismo
12	Oro
13	Preparados para núcleos de fundición; productos químicos y preparados de la industria química
14	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura
15	Las demás aeronaves (aviones, helicópteros)

Fuente: Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina.

En estos procesos participaron un conjunto de grandes exportadoras de oleaginosas y otros granos que concentraron las transacciones comerciales. En el cuadro 3 se presentan las 20 empresas exportadoras más importantes. Sin embargo, es en el rango de las primeras 15 donde se centraliza la mayor parte del negocio. Tal es así que, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), entre Cargill, Noble Argentina, ADM Argentina, Bunge Argentina, LDC (Dreyfus), A. C. Toepfer y Nidera se concentra el 83,5 % del total de los porotos de soja exportados en 2008. El 82,8 % del comercio de aceite de soja quedó en manos de 5 firmas: Bunge Argentina; LDC (Dreyfus); Cargill; AGD y Molinos Río de la Plata. Finalmente, casi el 90 % (89,34) de los derivados de la oleaginosa fueron vendidos al exterior en 2008 por las primeras seis firmas de la lista del cuadro 3 (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).

Finalmente, para mostrar la importancia de dichas empresas en el conjunto del comercio exterior argentino, proponemos el cuadro 4 donde se registran no sólo las firmas agroexportadoras sino las de toda la economía. Como puede observarse, de una lista de veinte empresas, once se orientan a la venta de productos agrarios y sus derivados, mientras que

Cuadro 3: Exportaciones de soja y sus derivados por las principales empresas exportadoras de la Argentina (en toneladas y porcentaje comercializado en 2008)

Nº	Nombre de la empresa	Soja		Aceite de soja		Pellets de soja	
		%	tn	%	tn	%	tn
1	Cargill SA	19,51	2311,03	27,60	1414,70	21,85	5560,96
2	Bunge Argentina SA	10,48	1241,57	16,18	829,37	17,96	4571,63
3	LDC Argentina SA (Dreyfus)	10,24	1212,85	15,20	779,08	13,50	3436,32
4	Aceitera General Deheza SA (AGD)	0,00	0,00	13,82	708,10	16,45	4185,93
5	Vicentín SAIC	0,04	5,00	4,30	220,41	9,42	2396,96
6	Molinos Río de la Plata	0,00	0,00	10,07	515,90	10,17	2587,43
7	Asoc. de Coop. Argentinas Coop.Ltda.	5,38	637,26	2,60	133,43	2,20	560,55
8	Nidera SA	10,00	1184,43	3,01	154,27	2,41	614,43
9	Noble Argentina SA	12,03	1425,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oleaginosa Moreno Hermanos	0,40	47,25	1,57	80,67	1,82	464,04
11	A. C. Toepfer International Argentina SRL	10,05	1190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ADM Argentina SA	11,23	1330,93	0,19	9,60	0,00	0,00
13	Molino Cañuelas SACIFIA	1,10	130,66	0,50	25,87	0,37	94,92
14	Serv. Integrados para Exportación Agroalimentos	1,96	232,28	0,04	2,00	0,06	14,90
15	Agricultores Federados Argentinos SCL	0,00	0,00	0,70	35,83	0,71	180,23
16	Compañía Agroindustrial La Oriental SA	0,07	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Otras	7,51	889,97	4,22	216,25	3,08	783,01
Total		100	11847,2	100	5125,48	100	25451,3

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

un número importante de las restantes se vinculan con otras actividades primarias o extractivas como es el caso de la Pan American Energy; YPF S.A., Esso, Mega, Refinería del Norte y Shell que remiten al comercio exterior petrolero, de gas y sus subproductos. En cuarto lugar aparece Minera Alumbrera que extrae y es exportadora de cobre y oro entre otros metales. Las únicas dos compañías vinculadas al sector manufacturero son Siderca SAIC (tubos de acero sin costura) y Ford Argentina SCA (automóviles y autopartes).

Entre los nuevos actores económicos que aparecen en el panorama agrario del país y se vinculan con el sector financiero podemos destacar los *pools de siembra*[14], cuyos primeros registros se dan entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Al comienzo sólo integran a producto-

14 Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la forma más frecuente de *pool* de siembra incluye "la combinación del dueño de la tierra, un contratista y un ingeniero agrónomo, que convienen una producción aportando cada uno sus recursos (tierra, labores e insumos respectivamente) y se reparten utilidades de acuerdo a su participación". Según esta misma institución, este esquema tiene una serie de características definitorias:

- El organizador propone un plan de actividades de siembra y, una vez armado, se lo ofrece a potenciales inversores;

Cuadro 4: Exportaciones por empresa (en 2008) en dólares estadounidenses

Orden	Empresa	Exportación	Exportación Acumulada	%	% Acumulado
1	Bunge Argentina sa	4.137.884.997	4.137.884.997	6	6
2	Pan American Energy llc Suc. Argentina	4.092.943.587	8.230.828.584	6	12
3	Idc Argentina sa	3.850.792.330	12.081.620.914	5	17
4	Minera Alumbrera Limited	3.114.242.882	15.195.863.796	4	21
5	ypf sa	2.090.755.136	17.286.618.932	3	24
6	Vicentín saic	1.902.865.595	19.189.484.527	3	27
7	Aceitera General Deheza	1.859.140.658	21.048.625.185	3	30
8	Nidera sa	1.337.031.706	22.385.656.891	2	32
9	Alfred C. Toepfer Internacional Argentina srl	1.206.570.067	23.592.226.958	2	34
10	Esso Petrolera Argentina srl	1.164.339.264	24.756.566.222	2	36
11	Compañía Mega sa	1.159.890.254	25.916.456.476	2	38
12	adm Argentina sa	1.150.623.492	27.067.079.968	2	40
13	Refinería del Norte SA	1.107.950.598	28.175.030.566	2	42
14	Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA	1.007.510.693	29.182.541.259	1	43
15	Siderca SAIC	978.264.008	30.160.805.267	1	44
16	Noble Argentina SA	885.336.441	31.046.141.708	1	45
17	Cargill SACeI	843.127.559	31.889.269.267	1	46
18	Shell Cia Argentina de petróleo SA	825.354.522	32.714.623.789	1	47
19	Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda.	764.527.127	33.479.150.916	1	48
20	Ford Argentina SCA	662.461.973	34.141.612.889	1	49

Fuente: Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina.

res agropecuarios que necesitaban "ganar escala para sobrevivir". Según informantes del sector, con el *boom* del campo (y el alza en las cotizaciones internacionales de los granos) los *pools* de siembra se transformaron en una alternativa cada vez más atractiva para una serie de inversores, incluyendo inversores extra agropecuarios. En los últimos años se refinó el marco legal y su seguridad jurídica a través de la figura del fideicomiso. La gran variabilidad de las explotaciones dificulta conocer la cantidad de

- La tierra en la que se siembra es de terceros y la contratación es por arrendamiento o aparcería;
- Las labores son realizadas por contratistas de la zona y la comercialización se realiza a través de determinados acopiadores, industriales o exportadores;
- El fondo tiene una calificación de riesgo, la cuál es exigida por la Comisión Nacional de Valores.

Para ampliar a esta definición se puede recurrir a:
http://www.inta.gov.ar/extensión/finan/tool/pool.htm
Para otros análisis de los *pools* de siembra véase Cristiano, 2007; Gras y Hernández 2009, y artículos en Internet, por ejemplo http://www.agrodiario.com.ar/10/04/08).

hectáreas que se trabajan bajo esta forma de organización, pero en un informe de hace algunos años realizado por AACREA se estimaba que la superficie controlada por los *pools* de siembra se habría quintuplicado en el período 1997 a 2002 (de 400.000 hectáreas a 2 millones). No existen datos fehacientes referidos a años recientes, aunque puede presumirse que estos fideicomisos se habrían multiplicado sustancialmente.

Existen fondos de inversión que son más grandes que los *pools* de siembra; incluso productores, como Grobocopatel, que tienen sus propios *pools* de siembra. Muchos operadores financieros que actúan anónimamente reúnen fondos de diversas fuentes para invertir en el campo. "El que antes apostaba a la renta financiera, ahora lo hace en el campo" (Giarracca, 2008). Los fondos de inversión y *pools* de siembra se combinan con el nuevo contratismo ("contratos accidentales por una cosecha") que cobra intensidad con el correr de los años. Si bien una parte importante de los productores que arriendan sus campos en el período que nos ocupa son grandes, también hay muchos que son medianos y pequeños. En este contexto adquiere relevancia asimismo un nuevo actor social y económico: el rentista. Muchas veces se trata de un productor que tiene pocas hectáreas y/o capital insuficiente para aplicar nueva tecnología o comprar el equipo necesario para la producción sojera. Como consecuencia, arrienda su campo y se va a vivir a la ciudad[15]. O sea, no sólo son los grandes propietarios los que arriendan parte de su tierra, también los pequeños propietarios se transforman en rentistas, contribuyendo de este modo a que se potencie la "agricultura sin agricultores". La extensión del arrendamiento adquiere tal significación que, según estimaciones, en la actualidad más del 60% de la tierra destinada a la producción de granos es arrendada (La Nación, 15/09/2008).

En el cuadro 5 presentamos un listado con algunos *pools* de siembra y productores importantes en el sistema de los agronegocios. Se trata de una compilación de varias búsquedas en http://buscador.lanacion.com.ar/ realizada por Neal Richardson, de la Universidad de California, y que sir-

15 Este relato aparecido en el diario La Nación es paradigmático: "Acostumbrados a vivir con ingresos crecientes provenientes del alquiler de sus tierras, en los últimos años los rentistas del campo supieron aprovechar como pocos el *boom* de la soja. Cobrando arrendamientos cada vez más caros para que otros produjeran en sus explotaciones, hicieron una fortuna personal y en muchos de sus pueblos invirtieron en propiedades, autos de lujo y locales comerciales, dinamizando sus economías. Sin trabajar sus campos, constituyeron una especie de clase media rural acaudalada. De hecho, en la Argentina el 60 por ciento de la agricultura la hacen productores y contratistas que, en muchos casos sin tierras, producen en campos de otros pagando por ello (Bertello, *La Nación,* 13 de febrero de 2009).

vió de base para investigaciones al respecto de la estructura rural argentina. La heterogeneidad de esta lista es muy amplia e incluye a *pools*, corporaciones y gerenciadores vinculados con la producción agraria.

Cuadro 5: Pooles de siembra, grandes empresas agropecuarias, (algunos inversionistas y responsables) y productores importantes

	Descripción
1	Los Grobo
2	Cresud (irsa, Elsztain)
3	Adecoagro (Soros)
4	Calyx Agro (Dreyfus)
5	El Tejar (Oscar Alvarado)
6	msu: Manuel Santos de Uribelarrea
7	Olmedo Agropecuaria (Alfredo Olmedo)
8	Fondo Agrícola de Inversión Directa (Estudio Cazenave, Santiago Casares y Eduardo Serantes)
9	Aceitera General Deheza (Familia Urquía)
10	Rodrigué-Fogante, La Redención-Sofro (Marcos Rodrigué, Rogelio y Germán Fogante)
11	Liag Argentina (Familia Kahlbetzer de Australia)
12	Cañón-Imbern Agropecuaria (Alfonso Cañón de Venado Tuerto)
13	Administración Duhau
14	Lartirigoyen y Cía. S.A.
15	La Biznaga S.A. (Grupo Ledesma, familia Blaquier)
16	Espiga srl. (Fondo de Inversión presidido por Oscar Faccioli)
17	"Siembras Asociadas" del Grupo Ceres Tolvas.
18	Openagro S.A. (fideicomiso dirigido por Darío Genua y Guillermo Villagra)
19	Agrarius: pool de siembra

Fuente: Richardson, N. Department of Political Science, University of California, Berkeley, npr@berkeley.edu

Entre los grandes productores sojeros se destaca el caso del grupo Los Grobo, presidido por Gustavo Grobocopatel. Según información periodística este grupo económico posee 17.700 has propias, pero cultiva en total más de 290 mil en tierras arrendadas en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y tiene como objetivo llegar a sembrar cerca de 400 mil has en el Mercosur. En los últimos tiempos ha intensificado su estrategia de expansión hacia países vecinos, principalmente Brasil, en donde a partir de 2010 la empresa espera obtener la mitad de sus ingresos. En total produce casi tres millones de toneladas de granos por año mientras que las empresas del *grupo* facturan cerca de 200 millones de dólares (*Cash,* 12 de abril de 2009 y Lukin, *Página 12,* 29 de marzo de 2008). Sus actividades no se limitan a la producción granaria sino que también incluyen la

venta y distribución de insumos, fabricación de harina de trigo, corredora de cereales para operar en los mercados a término, servicios financieros, asesoramiento empresarial, etc. Con el correr de los años, los cultivos agrícolas ocupan apenas el 20% de la actividad global, mientras que el 80% restante se distribuye entre la prestación de servicios para terceros (logísticos, financieros, gestión de riesgo, desarrollo tecnológico) y la consultoría integrada (Ballesteros Ledesma, 2010). Sin embargo, no es el único conglomerado de semejante tamaño. Gustavo Grobocopatel afirma que hay empresas mucho más poderosas que la suya pues "los cinco o seis productores más grandes de la Argentina producen (en) 500.000 hectáreas" (Ceriotto, *Clarín,* 8 de julio de 2008). Cada una de estas grandes empresas desarrolla estrategias diferentes, por lo que expondremos brevemente los casos de El Tejar, Adecoagro y Aceitera General Deheza como ejemplos de esta diversidad.

La heterogeneidad de estos casos es paradigmática por sus opuestas trayectorias y métodos. El primer ejemplo corresponde a la firma "El Tejar" presidida por Oscar Alvarado, miembro de una familia ganadera tradicional de la zona de Lobos, Provincia de Buenos Aires. En 1987 nucleó a un grupo de productores de los partidos de Saladillo y Roque Pérez creando la firma "El Tejar". Su primera actividad fue la ganadería con una fuerte integración vertical que incluía desde la cría hasta la exportación con marca propia. A principios de los noventa comenzó con la producción de granos que se convirtió paulatinamente en su principal actividad. Actualmente trabaja cerca de 200.000 hectáreas en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y recientemente Paraguay. Otro detalle importante es que "El Tejar" desarrolló sus actividades hasta el año 2006 únicamente sobre inmuebles rurales arrendados a terceros. Sólo a partir de allí combinó el alquiler con la adquisición de campos en los cuatro países en que opera. De esta manera busca mantener altos niveles de liquidez (a pesar de las compras de los últimos años) con la multi-localidad a nivel geográfico: producción primaria similar pero en lugares distintos. El segundo ejemplo es el de Adecoagro una empresa creada en 2002 (entre cuyos accionistas figura el magnate George Soros) dueña de más de 270.000 hectáreas en Argentina, Uruguay y Brasil, las cuales fueron compradas paulatinamente a lo largo de los últimos años. A diferencia de El Tejar, la producción se hace en campos propios. A partir del 2004 comenzó un proceso de integración vertical que sumó a la producción agropecuaria la industria energética (procesamiento en Brasil de caña de azúcar para biodiesel),

la producción y comercialización de café *premium*, la industria láctea, harinera, arrocera, etcétera.

Finalmente tenemos el caso de la Aceitera General Deheza (AGD). Fundada en 1948 por la familia Urquía y dedicada en sus orígenes a la producción aceitera, esta empresa es un paradigma de la integración en el sector agropecuario. Hacia fines de los años setenta comienza su expansión hacia el área de logística que con el correr de los años incluirá el control de una línea de ferrocarril (Nuevo Central Argentino) y dos terminales portuarias en sociedad con otras empresas. A partir de finales de los años ochenta hasta la actualidad, AGD se expande constantemente en la fabricación de alimentos y en 2007 inicia la producción de biodiesel. Asimismo, trabaja en 200.000 has (entre propias y de terceros) destinadas a soja, girasol, maní, trigo, maíz y la cría de ganado. En definitiva, AGD es un verdadero complejo agroindustrial que integra la producción agropecuaria, la provisión de insumos y semillas, la comercialización interna y externa (ver cuadro 3), el procesamiento de oleaginosas para producir aceites y derivados, la fabricación de alimentos, etc.[16]. Como detalle a destacar, uno de los directivos de esta empresa, Roberto Daniel Urquía, logró combinar la actividad agroindustrial con la política, y tras varios años en el escenario local y provincial fue elegido en 2003 como Senador nacional por el partido Alianza Unión Córdoba.

Claudio Lozano ha sintetizado aspectos de este modelo sojero del siguiente modo:

> *. . .se sostiene en condiciones de alta concentración, expresadas en el hecho objetivo de que 936 propietarios controlan 35 millones de hectáreas, a razón de 38.000 cada uno, mientras casi 150.000 propietarios tienen 2.200.000, a razón de 16 cada uno. Concentración que se expresa, también, en la "nueva oligarquía" que se va consolidando con no más de 2.000 productores que controlan más del 60% del producido de la soja y que incluye, dominantemente, a pools de siembra. Por lo tanto, a sociedades productivas que no necesariamente ejercen el control sobre la tierra pero que manejan capital, insumos y que arrendando campos, se transforman en jugadores principales del negocio agropecuario (Lozano, 2008).*

16 Información extraída de las páginas Web de las empresas http://www.eltejar.com.ar/, http://www.adecoagro.com/index.php?seccion_generica_id=128, http://www.agd.com.ar/es/home.htm y de La Nación, 7 de enero de 2008.

Corresponde destacar como planteamos en este trabajo la importancia que asumen los agentes del complejo exportador a los cuáles están articulados los grandes productores agropecuarios: exportadores, *pools* de siembra, y semilleras, entre otros.

Renta de la tierra, retenciones y otros interrogantes

Tal como señalamos más arriba, el conflicto agrario giró fundamentalmente en torno a la política de retenciones impulsada por el gobierno a partir del nuevo ciclo de alza de los precios internacionales de los *commodities* y tras la devaluación del año 2002. En este contexto fue adoptada una política tributaria apuntalada por los derechos de exportación, que si bien fue aplicada en otras épocas históricas no tuvo la continuidad de otros gravámenes. Como consecuencia surgió el debate, tanto entre los protagonistas del conflicto (ME y Gobierno) como en la sociedad en su conjunto, acerca de la naturaleza y vigencia de las retenciones: quiénes deberían pagarlas y cómo y en qué medida constituyen mecanismos que impulsan una mayor justicia distributiva a nivel nacional.

En numerosas publicaciones académicas y/o periodísticas se señala que el agro argentino se caracterizó históricamente por generar grandes "rentas diferenciales a escala internacional" que fueron una de las bases de sustentación de su desarrollo. Los ejemplos van desde la etapa de integración de la economía argentina al mercado mundial (1880-1930) hasta períodos más recientes (véase Laclau, 1969; Flichman, 1977, 1971/72, 1974; Braun, 1974; Teubal, 1975; Teubal, 2006, Giarracca y Teubal, 2005; Arceo, 2003) Esto nos lleva a preguntarnos en qué medida la aplicación de retenciones (denominadas originariamente impuestos a las exportaciones) constituye un sistema eficaz para captar una parte importante de esas rentas "diferenciales en escala mundial" o "especulativas"[17]. ¿En qué medida – por la forma de aplicación del tributo en nuestro país – se cumple con este objetivo? ¿Qué implicancias tiene el carácter indirecto de las retenciones – lo pagan los exportadores pero son transferidas en su totalidad a los productores? ¿Cómo influye esta mecánica de gravación tributaria sobre la eficacia del sistema recaudatorio?

17 Es importante aclarar que en la medida en que se presume que el agro genera una renta agraria diferencial a escala internacional por sobre la ganancia del capital y los salarios, la producción agropecuaria puede ser gravada sin que esto incida necesariamente sobre la viabilidad del proceso productivo.

Si se los considera en el marco del sistema impositivo en su conjunto, surgen otros interrogantes acerca de los derechos de exportación: ¿En qué medida constituyen mecanismos apropiados para que se efectivice una mayor "justicia distributiva", entendiéndose por tal un sistema impositivo en el que pagan proporcionalmente más impuestos los que más (ingresos o riqueza) tienen o perciben?[18] ¿Cómo se comparan las retenciones con la aplicación de otros impuestos; por ejemplo, a la ganancia, a la tierra, a las ganancias eventuales o extraordinarias, al sector financiero, etc.? O visto de otra manera: ¿En qué medida la política de retenciones involucra una transferencia significativa de recursos desde sectores encumbrados – esencialmente rentísticos – hacia otras fracciones de la economía? ¿En qué medida contribuye a objetivos redistributivos de los ingresos y/o procesos de acumulación? ¿Que otras formas de apropiación de la renta agraria serían más eficaces para lograr estos objetivos? Finalmente, una pregunta que surgió frecuentemente pero quedó en el tintero: ¿Cuáles son las implicancias de que las retenciones no sean totalmente co participables con las provincias?

Digresión sobre la renta de la tierra

La teoría de la renta, diferenciada de la ganancia y el salario fue desarrollada por la economía política clásica, fundamentalmente por Ricardo y posteriormente por Marx. En sus orígenes la renta constituye el pago que realiza el arrendatario (capitalista) al terrateniente por el derecho al uso de la tierra con las construcciones e implementos allí incluidos. Marx sigue a Ricardo en este sentido: el arrendatario al frente de la explotación agropecuaria es el que aporta instrumentos de capital (maquinaria y equipo) para impulsar el proceso productivo como así también es el que paga los salarios de los trabajadores. Si bien las mejoras que se aplican a la tierra y son incorporadas a la propiedad benefician al propietario, sólo es renta lo que proviene del uso de la tierra, de su fertilidad, o bien, al decir de Ricardo, de "las fuerzas indestructibles de la naturaleza". Las mejoras son inversiones de capital que reditúan una ganancia y forman parte de

18 En 2007, según palabras del entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex-ministro de Economía y Producción Miguel Peirano, las retenciones se presentaban como "un mecanismo redistributivo importante que permite que aquel que produce en pesos y vende en dólares coparticipe con la comunidad las utilidades que tiene y, además, que los precios internacionales no afecten el mercado interno" (Presidencia de la Nación, 7 de noviembre de 2007).

un residual que queda después que el arrendatario le paga el salario a sus trabajadores y al terrateniente la renta por el uso de la tierra. Tal es el enfoque original de Ricardo. La economía política clásica también se preocupa por la distribución del "producto de la tierra –todo lo que se obtiene de su superficie mediante la aplicación aunada del trabajo, de la maquinaria y del capital–. . . entre las tres clases de la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo, y los trabajadores por cuya actividad se cultiva" (Ricardo, 1959[1817]: 5). Para Ricardo, los terratenientes son fundamentalmente rentistas y como tales, una clase social que se desentiende en forma directa del proceso de acumulación de capital requerido para que el país (Inglaterra) creciera. Según este autor, el alza de la participación de la renta fundiaria en el ingreso nacional ocurre a medida que se expande el agro hacia nuevas tierras que son menos fértiles y por lo tanto menos productivas. Este proceso incide sobre el aumento de los precios agroalimentarios internos. Cuando esto ocurre – cuando sube el precio del pan y de otros bienes esenciales de consumo popular pautados por los costos de producción generados en las tierras menos fértiles – los propietarios de las tierras *más* fértiles recibirán una renta denominada por Ricardo como *diferencial*. Se trata de un ingreso provisto por las "fuerzas indestructibles de la naturaleza" y apropiado por los terratenientes por el sólo hecho de ser propietarios de esas tierras relativamente más fértiles. Este proceso incide significativamente sobre la caída de la tasa de ganancia de la economía en su globalidad, siendo la ganancia, tanto para Ricardo como para Marx, el factor propulsor del proceso de acumulación de capital del sistema en su conjunto. En este esquema la renta no es fruto del trabajo, ni de la acumulación de capital; por lo tanto, es *improductiva* y despreciable como factor de crecimiento.

Marx incorpora el concepto de renta a su análisis sobre la evolución del sistema capitalista. Según este autor, en las sociedades precapitalistas prevalecen distintas formas rentísticas pero en el marco de regímenes laborales no libres. Para el análisis de la renta en la evolución del capitalismo elabora un modelo en el que el terrateniente es el sector o la clase social que se apropia de una parte del plusvalor generado en la economía global por el solo hecho de ser propietario de la tierra. ". . . es la forma en la cual se realiza económicamente la propiedad de la tierra, la forma en la cual se valoriza. Tenemos además aquí las tres clases que constituyen el marco de la sociedad moderna, en forma conjunta y enfrentada: el asalariado, el capitalista industrial y el terrateniente." Asimismo ". . . lo peculiar de

la renta de la tierra...es que, con las condiciones dentro de las cuales los productos agrícolas se desarrollan como valores (mercancías) y con las condiciones de la realización de sus valores, se desenvuelve asimismo la facultad de la propiedad de la tierra de apropiarse de una parte creciente de esos valores creados sin su participación, (o sea) que una parte creciente del plusvalor se transforme en renta de la tierra" (Marx, 1986: 822). Esta problemática vista desde la periferia del sistema capitalista mundial nos permite inferir el concepto de "renta diferencial a escala mundial" definida "fundamentalmente por las diferencias internacionales de costos originadas en la calidad de nuestros suelos y clima" (Flichman, 1977: 77), o sea, considerando que los costos agropecuarios en la periferia son menores a los equiparables del "centro".

Breve historia de las retenciones

Los derechos aduaneros fueron una de las principales y más antiguas fuentes de recursos desde el período colonial. A ellos han recurrido sucesivos gobiernos para financiar sus estructuras. De hecho la Corona española apelaba a los derechos de exportación gravando ciertas mercaderías destinadas a la metrópoli en especial aquellas relacionadas con las actividades primarias, como fue el caso de los cueros. Tras la independencia, el manejo de la aduana fue la causa de muchos conflictos políticos y militares a lo largo del siglo XIX[19]. La Constitución Nacional de 1853 hace patente la centralidad de este tópico ubicando a los derechos de exportación e importación en primer lugar entre los fondos del Tesoro Nacional y poniendo la legislación en materia aduanera como una de las primeras de una extensa lista de atribuciones del Congreso de la Nación[20].

19 "Los aranceles no eran solamente un instrumento de política económica, sino también la más importante fuente de ingresos. Y por estar concentrado el comercio exterior del país en el puerto de Buenos Aires, las demás provincias querían participar en la formación de la política arancelaria. La tarifa se convirtió de este modo en un problema simultáneamente provincial y nacional...que el gobierno porteño no podía descuidar...El gobierno no estaba en condiciones de prescindir de las rentas provenientes del comercio exterior. Con la mirada puesta en la Tesorería, el gobierno se oponía tanto al comercio libre como a la decidida protección. Se esforzaba por mantener una línea media, que conciliara los intereses de la Tesorería con los de la economía provincial" (Burgin, 1969: 279/280).

20 Artículo 4: "El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación..." **Artículo 64:** "Corresponde al Congreso: 1) Legislar sobre las Aduanas exteriores, y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ella..." La numeración corresponde a la Constitución de la Nación Argentina sancionada por el Congreso General Constituyente el

Los derechos de exportación y/o importación eran importantes fuentes de ingresos fiscales en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX cuando fueron paulatinamente reemplazados por otros impuestos[21]. Todavía en la década de 1920 ambos impuestos tenían relevancia, e incluso los derechos sobre las importaciones superaban a los que tributaban las exportaciones. En la década de 1930 el peso de los recursos aduaneros (derechos de importación, exportación, tasas y otras recaudaciones aduaneras) con relación a la totalidad de la recaudación del Estado disminuye. Asumen una importancia mayor nuevos tributos como el impuesto a los réditos y a las ganancias. Hacia mediados de la década de 1940, con excepción de 1946 y 1947, y hasta 1961 esta fuente recaudatoria se ubicará por debajo del 10% de los ingresos fiscales del Estado. A su vez se desarrollará el sistema de seguridad social que adquiere gran importancia durante el primer gobierno de Perón. Cabe destacar que el monto de los derechos de exportación estaba implícitamente pautado por la política cambiaria. En efecto, los sistemas de cambios múltiples inciden sobre la importancia relativa que adquieren estos tributos con relación al valor de las exportaciones y/o importaciones.

A raíz de la crisis de los años treinta y el desarrollo de políticas de industrialización por sustitución de las importaciones (ISI) que se perfilan desde entonces, los aranceles a las importaciones adquieren otra función más allá del financiamiento del presupuesto nacional pues se orientan a proteger determinadas industrias locales y cooperar en el control de cambios. En efecto, la ISI se sustenta en dos tipos de controles: unos que atañen al tipo de cambio; otros vinculados con los aranceles que gravan las importaciones.

Con la conformación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) bajo el primer gobierno peronista (1946-1955) la totalidad de la producción exportable pasa por el Estado que provee las divisas necesarias para las importaciones. Tras la aplicación máxima del control de cambios, los derechos sobre el comercio exterior como fuente de ingresos del estado son subsumidos por los mecanismos del IAPI[22].

1° de mayo de 1853 y si bien hubo varias reformas el contenido se mantuvo intacto. En el texto vigente tras la reforma de 1994 estos artículos reciben el número 4 y 75 respectivamente.

21 "Las retenciones registran múltiples antecedentes en Argentina, y fueron aplicadas, en general, durante períodos limitados. Rigieron entre 1862 y 1888, de 1890 a 1905 y en el período 1918/25" (Gaggero, 2005:70).

22 "El IAPI prestó en todo momento una función sumamente útil a los intereses del país al bregar, obstinada y decididamente, por la mejora de los *términos de intercambio nacionales*

En 1962 se recurre nuevamente a los derechos de exportación. Entre 1967 y 1976 representan aproximadamente la mitad de los ingresos por comercio exterior y entre el 6 y 8% de la recaudación a nivel nacional. Durante la presidencia de Arturo Illia, además de fijarse controles sobre las exportaciones, por un decreto del 19 de abril de 1965 se puso en vigencia una retención del 13% sobre el valor exportado del trigo, del 9,5% sobre las carnes y del 6,5% sobre el maíz. La SRA en su Memoria de 1963 plantea que estos impuestos constituyen "un elemento regresivo para incrementar la producción rural". Pero la medida más resonante en este sentido la iba a tomar un economista del *establishment* durante la dictadura de Onganía, Adalbert Krieger Vasena. Como parte de su plan económico lanzado en marzo de 1967, Krieger realizó una devaluación del 40% del tipo de cambio, al tiempo que estableció un derecho de exportación para los principales productos agropecuarios de un 20 a un 25%. Según los economistas Mallon y Sourrouille, se trató del primer intento de una devaluación "casi plenamente compensada". Junto a una rebaja de cerca del 50% de los derechos de importación se impusieron fuertes retenciones a las exportaciones tradicionales, como forma de "compensar la mayor parte de los efectos de la devaluación sobre los precios internos" (Mallon y Sourrouille, 1973). En respuesta a las declaraciones públicas del Ministro denunciando presiones para que esa medida se revea, la Memoria de la Sociedad Rural de 1968 replica que su oposición se hace en un "tono mesurado"[23].

El paquete económico también incluía una reducción de los aranceles aduaneros para los productos importados. Presumiblemente estas medidas tenían por finalidad impulsar la competencia de la industria local con la externa y así lograr altos niveles de "eficiencia" en la producción manufacturera local. Asimismo, se evitaban los ingresos desmedidos de los productores agropecuarios cuya producción se orientaba al mercado externo. En ese momento se vislumbró la importancia de una política de retenciones para evitar las grandes traslaciones de ingresos hacia el sector agropecuario, lo cual podría ser perjudicial para la estabilidad del sistema

y al combatir la intermediación – sumamente onerosa - que lucra con el comercio interno e internacional de cereales" (Cafiero, 1961: 226) (cursivas en el texto original).

23 "Cuando la SRA, convencida de que una justa política de ingresos requiere la eliminación de los impuestos a la exportación ha expresado sus puntos de vista, que podrán ser o no compartidos, lo ha hecho en un tono mesurado, (...) de ninguna manera ha ejercitado o pretendido ejercitar presiones" (Rapoport, 2007:958)

global. Se trataba de evitar el alza de los precios agroalimentarios y su incidencia sobre los procesos inflacionarios internos y los salarios reales.

En 1970 y 1971, la SRA, la FAA, Coninagro y CRA en forma conjunta coincidieron en protestar ante los poderes públicos por la vigencia de las retenciones. Pero la respuesta del gobierno militar – se trataba del breve interregno de Levingston y luego de Lanusse – no se hizo eco de esos reclamos. El 16 de noviembre de 1971 se impusieron derechos de exportación de un 11% a aquellos productos que estaban exentos y se aumentaron las retenciones a los que pagaban más de un 20%. Más tarde, el 22 de febrero de 1972, el Poder Ejecutivo fijó derechos especiales móviles a la exportación, con un tope del 15%, a fin de evitar, entre otras cosas, "un aumento de los precios internos", y en noviembre de ese año se prohibió la exportación de ganado vacuno en pie "para mejorar el abastecimiento de la población". Durante la última dictadura militar, el Secretario de Hacienda Juan Alemann reestableció las retenciones, que habían sido suprimidas, y cuando estalló la guerra de Malvinas éstas fueron aumentadas. La Memoria de la SRA de 1982 expresó en esa ocasión una aceptación condicionada: las retenciones "no entran dentro de nuestra filosofía, pero en el momento difícil que vive el país las aceptamos aunque no compartamos la idea de su conveniencia" (Rappoport, 2007: 958)[24].

Tras la restauración democrática los incrementos en las alícuotas siguieron, y a pesar de que no alcanzaron los niveles anteriores hubo varias muestras de oposición a estas medidas encabezadas principalmente por la SRA. Como es de imaginar, la política neoliberal de la década de los 90, tendiente a la liberalización del comercio exterior,[25] impulsó la eliminación de este recurso fiscal a la vez que acentuaba la participación recaudatoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A partir de 1992 se produce un aumento de casi el 20% en el peso del IVA en el total del conjunto de los impuestos del país. Tal es así que mientras en el decenio 1981-1990 el IVA significó 31,3% del valor de los impuestos recaudados y el 20,97% de los ingresos totales del Estado argentino, en la década posterior (1991-2000) estos valores ascendieron al 55,42% y el 35,96% respectivamente. El IVA pasó de significar un quinto de la recau-

24 En otra ocasión el ex titular de la SRA Guillermo Alchouron afirmó que "Las retenciones representan una real confiscación y una causa de desaliento que pone en peligro la rentabilidad de las explotaciones", *Clarín*, 30 de marzo de 2002.

25 La liberalización arancelaria contribuyó a potenciar la desindustrialización del país. Asimismo a lo largo de los noventa prevaleció fundamentalmente la sobrevaluación del peso.

dación total de la Argentina a representar poco más de un tercio (AFIP, 2008).

En febrero de 2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y tras la devaluación del peso se decide un aumento importante de las alícuotas de los derechos de exportación, intentando captar la renta generada por un favorable contexto internacional para la producción de *commodities*, principalmente la soja. Según algunos analistas, el precio de esta oleaginosa se había disparado por la demanda europea de materia prima para alimento balanceado utilizado para nutrir a sus cerdos, pollos y vacunos (la crisis de la "vaca loca" había impulsado la búsqueda de un sustituto eficaz para las proteínas de origen animal que eran incluidas en los alimentos balanceados ingeridos por el ganado europeo). También incidió sobre el mismo el impulso dado a la producción de los agrocombustibles y el aumento de la demanda de China e India producto del proceso de modernización de los sectores agropecuarios de esos países. Sin embrago, a partir de la crisis mundial del 2007 y frente al constante avance de la lógica financiera en la economía mundial pudo vislumbrarse otro factor explicativo del aumento sostenido del precio de los *commodities*: en el año 2008 en medio de la crisis financiera muchos inversores y analistas económicos recomendaron la compra de *commodities* como reaseguro frente a la desarticulación de las finanzas mundiales. Posteriormente, entre julio de 2008 y diciembre de ese mismo año, el precio de los *commodities* sufrió una caída de casi el 40%. Sin embargo, en 2009 se produce una cierta recuperación y si bien en junio de 2009 la soja aun estaba en casi 100 U$S menos que el precio mensual máximo alcanzado en el mismo mes de 2008 (548 U$S), la oleaginosa se encontraba a niveles similares a los registrados entre abril y mayo de 2008 (452U$S)[26].

26 En un artículo de Teubal publicado en *Página 12* (26 de mayo 2008) se mencionan factores especulativos que impulsan el alza de los precios internacionales de la soja y de otros *commodities*. Según Mc Michael los precios venían aumentándose por múltiples razones. "En la historia reciente las políticas de liberalización han transformado al sur Global en una "finca mundial" que provee determinados alimentos para una minoría de los consumidores globales, concentrados en el Norte global. . . La especulación financiera potenció el problema" (nuestra traducción) (Mc Michael, 2009: 32-33).

Las retenciones: marco legal y traducción práctica de la norma. Evolución reciente de las alícuotas correspondientes

En primer lugar es necesario señalar que el nombre legal de las retenciones según el Código Aduanero (Ley 22.415 sancionada en el año 1981) es Derecho de Exportación. Sin embargo, algunos economistas distinguen el concepto de retención del de derecho de exportación: mientras estos últimos se aplican sobre las ganancias del exportador, las retenciones son aquellas que se trasladan al precio de venta del productor. En la práctica, al menos en años recientes, se mantiene la segunda acepción y se caracterizan a los derechos de exportación como impuestos indirectos: si bien el agente de retención y de pago es el exportador el tributo es transferido en su totalidad al productor. Por ello, desde el punto de vista económico, las retenciones las solventan siempre los productores rurales aunque el pago al Estado lo efectiviza el exportador luego del embarque. Más adelante señalamos algunas de las implicancias de estos procesos.

En segundo lugar, es necesario aclarar que, si bien la Constitución Nacional en su artículo 75 expresa que corresponde al Congreso de la Nación establecer los derechos de importación y exportación, en la actualidad dicha facultad se encuentra delegada en el Poder Ejecutivo. Por medio de un decreto dictado en 1991 y reimplantado en 2002 esa facultad fue delegada en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Asimismo, el Código Aduanero en sus artículos 755 y 757 le permite al Estado gravar, desgravar y modificar los derechos de exportación.

En el caso de la soja y luego del rechazo por parte del Congreso de la Resolución Ministerial 125 y sus sucesivas modificaciones, la alícuota quedó fijada en 35% sobre el precio FOB (Free on Board) el cual es establecido y publicado por la secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación[27]. Sin embargo, a lo largo del período varios productos primarios de exportación y sus derivados sufrieron numerosas modifica-

27 Si bien lo desarrollaremos algunas páginas más adelante es importante tener en cuenta que el precio FOB es el precio de un bien exportado en el punto de salida del país exportador, cargado en el barco o sobre el medio de transporte que lo llevará al país importador. Este precio incluye todos los gastos, derechos, y riesgos generados desde la producción del bien hasta la colocación del mismo en el barco; y excluye todos los costos vinculados al transporte del mismo a su país de destino. La evolución diaria de este valor puede encontrarse en http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ link agricultura/Precios y cotizaciones.

ciones en las alícuotas de sus derechos de exportación, principalmente tras la devaluación de 2002.

Como se trasluce del cuadro 6, hasta el año 2002 las retenciones tenían una alícuota mínima del 3,5% sobre la soja y el girasol, mientras que el maíz y el trigo estaban exentos. En ese año se aumentaron las alícuotas para la soja y el girasol al 13,5% y al 10% para el maíz y el trigo, y para julio de 2002 las mismas se elevan al 23,5% para la soja y el girasol y al 20% para el trigo y el maíz. En enero del 2007 se elevan las alícuotas de la soja al 27,5% y la tendencia general es al aumento de las alícuotas en todos los segmentos, más marcado para el caso de la soja, el girasol y sus derivados (véase el cuadro 6).

Cuadro 6: Evolución porcentual de la alícuota de derechos de exportación para soja, maíz, trigo y girasol.

Fecha / Producto	Hasta Marzo 2002	Marzo 2002	Abril-julio 2002	Octubre 2006	Enero 2007	Noviembre 2007	Marzo 2008	Julio 2008	Diciembre 2008
Soja	3,5	13,5	23,5	23,5	27,5	35	44	35	35
Girasol	3,5	13,5	23,5	23,5	23,5	32	39	32	32
Maíz	0	10	20	20	20	25	24	25	20
Trigo	0	10	20	20	20	28	27	28	23
Derivados de la soja	0	5	20	20	24	32	41	32	32
Derivados del Girasol	0	5	20	20	20	30	37	30	30
Derivados del Maíz	0	0	20	20	20	20	20	20	20
Derivados del Trigo	0	0	20	10	10	10	10	10	10

Fuente: Leyes, Decretos y resoluciones extraídos de la biblioteca on-line de la AFIP

Hacia marzo del 2008, y mientras estuvo vigente la resolución ministerial 125, los derechos de exportación variaban diariamente de acuerdo con la cotización de los distintos *commodities* en el mercado mundial. El rechazo por parte del Congreso de la resolución 125 y su posterior limitación por parte del Poder Ejecutivo retrotrajo la situación a noviembre de 2007. A partir de entonces comenzó la tendencia a la baja de las alícuotas del maíz y el trigo, pues para diciembre de 2008 se da la primera disminución de 5% en dichos segmentos. El día 11 de septiembre de 2009 el Gobierno anuncia la eliminación de las retenciones al maíz y el trigo para los pequeños y medianos productores (que producen hasta 800 toneladas de trigo y 1200 de maíz) a través de un sistema de compensaciones.

Operatoria en el pago de las retenciones y su traslado a los productores

Como dijimos anteriormente, a partir de la legislación vigente las retenciones o derechos de exportación son pagados por los productores agropecuarios pero los exportadores son los correspondientes agentes de retención. Sin embargo, según la normativa establecida en el Código Aduanero existe una diferencia entre lo que paga el productor con relación al precio de exportación (en realidad el monto de lo que deja de percibir por su producción), y la retención que es efectivamente recibida por el Estado. La diferencia entre ambos importes favorece a los exportadores en un proceso que establece una suerte de *privatización* de la retención (Ferrari Etcheberry, 2009).

En este sentido, el primer punto a considerar es la forma en que se determina el precio interno de los diversos granos objeto de la retención. En principio éste se obtiene multiplicando la cotización internacional del *commodity* (precio FOB) por el precio del dólar menos las retenciones y otros gastos (precio FAS teórico). Esto resulta en lo que podría considerarse como un tipo de cambio efectivo. Este importe es lo que cobra el productor previa deducción de los gastos de transporte, acondicionamiento, comisiones, etc. Se trata de un precio con una alta variabilidad producto de múltiples factores internos y/o externos. Sin embargo, cuando se calcula el monto de la retención que es remitido al Estado después de realizarse la exportación se obtiene una diferencia que queda en manos de los exportadores a través de un intrincado mecanismo que comienza en el Código Aduanero. De hecho, si bien su artículo 735 dice expresamente que el valor imponible de los derechos de exportación es el precio FOB, algunas líneas más abajo en el artículo 737 expresa: "No obstante lo dispuesto en el art. 735, se excluyen del valor imponible *los derechos y demás tributos que gravaren la exportación*"(las cursivas son nuestras). Esta frase suscita múltiples interpretaciones y permitió que, según un informe presentado por Mario Cafiero y Javier Llorens (2008), entre enero de 2007 y junio del siguiente año 35.096 permisos de embarque hayan sido liquidados tomando como base un valor imponible inferior al correspondiente precio FOB.

Como consecuencia, y siguiendo el Código Aduanero, el porcentaje que va al fisco no se calcula sobre el precio final, sino como si el tributo ya estuviera incluido en ese precio. Por ejemplo si una tonelada de soja vale

U$S 360 (precio FOB al 19/03/09) se toma como base el valor neto del producto (valor de las exportaciones menos la alícuota de las retenciones) al que se le aplica la retención. El valor neto resultante es U$S 266.66 y la retención es de U$S93.33 que es lo que se le paga al Estado[28]. Esta curiosa forma de calcular el tributo no es un privilegio exclusivo de la exportación de granos, sino de todos los productos exportables.

Cuando se le paga al productor se utiliza como referencia el precio FAS teórico que sólo es de carácter orientativo. Tal es así que para el día considerado el precio de la tonelada de soja para el mercado interno, según la Cámara Arbitral de Rosario, era de 850 pesos mientras el FAS teórico ascendía a los 868 pesos[29]. Esta diferencia de 18 $ y casi 5 u$s por tonelada queda en manos de la cadena comercializadora[30]. Así, se genera tal libertad en la interpretación de las cláusulas del código aduanero que

28 Siguiendo al Código Aduanero, el cálculo para llegar a la retención que se le pagaría al Estado es el siguiente: los exportadores consideran que el precio FOB representa, por ejemplo, el 135% del precio de la mercancía y por ello deducen lo que deben pagarle al Estado según la fórmula siguiente:

$$\frac{Alícuota\ por\ precio\ \text{FOB}}{135} = la\ retención\ que\ recibe\ el\ Estado$$

En nuestro ejemplo: (35 x 360)/135= U$S 93.33, siendo este importe el total a pagar en concepto de derecho de exportación por la empresa que realiza la venta al exterior. Si la operatoria se hubiese realizado de acuerdo el artículo 735, el Estado tendría que haber recibido 35x360/100= U$S 126. Es decir, con este mecanismo las exportadoras se apropiarían de U$S32,67 por tonelada.

29 Es importante hacer una serie de aclaraciones. 868 pesos al cambio del día 19 de marzo de 2009 significarían U$S237.80, es decir un 66,06% del precio FOB. A primera vista esto implicaría que los productores pagan menos de la alícuota fijada (35%), pues el descuento total sería de 33,94%; sin embargo, hay que tener en cuenta que el porcentaje de soja en poroto que se exporta (entre el 20 y el 30% en el último quinquenio) es muy inferior al porcentaje de subproductos de dicha oleaginosa que se destinan al mercado externo (entre el 80 y 70% en el mismo período). El mayor valor de los derivados de la soja y la menor alícuota (ver cuadro 6) permiten que el precio oficial para el productor de la tonelada de porotos de soja esté un poco por encima del FOB menos el 35%, sin que ello afecte las ganancias de las empresas comercializadoras.

30 Según un informe preparado por los diputados Lozano y Macalusse, "desde Enero de 2007 al 31 de Mayo del 2008, sobre un volumen de exportación de U$S 21.268,9 millones se recaudaron por retención U$S 4.984,9 millones (equivalentes al 23,4%) cuando se tendría que haber recaudado U$S 6.432,9 millones. La diferencia de U$S 1.447,9 millones es defraudación al fisco practicada por los exportadores y pagada por los productores". Así, por manipulaciones inherentes al calculo de la retención, el gobierno recibe un importe sustancialmente menor. El informe concluye que "es imprescindible que previo al tratamiento del Proyecto del Ejecutivo respecto a ratificar o no el decreto de las retenciones móviles, se revise lo actuado en materia de liquidación de las retenciones. Entendemos que la reglamentación de la Ley Martínez Raymonda estipula que la ONCAA es el organismo que debe revisar las citadas liquidaciones, pero hasta la fecha no lo ha hecho. En rigor, la última resolución de dicho organismo (9/12/08) permite privatizar las compensaciones a las aceiteras exportadoras. En lugar de que el Estado sea el que decida si conviene o no compensar, dicha resolución inhibe esa decisión porque los recursos que nutren estas compensaciones serán administrados directamente por las citadas exportadoras sin

los exportadores llegan a utilizar como base imponible el precio FAS, tal como lo muestran 6.434 casos de los tantos analizados en el informe de Cafiero y Llorens, yendo claramente en contra del artículo 735 de mismo Código.

A este procedimiento se suma el accionar de las compañías exportadoras en lo que respecta a la especulación y posible defraudación al fisco mediante la Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE), la cual en 2008 generó el inicio de una causa judicial asentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. La legislación para la comercialización internacional de productos del reino vegetal y derivados (reglamentada por la ley 21.453 sancionada el 8 de octubre de 1976) establece que la retención debe calcularse según el valor de mercado, la alícuota y el tipo de cambio vigentes al día en que se emite la DJVE en la que el exportador se compromete a vender en el exterior una determinada cantidad de productos comprados en el mercado interno. Esta declaración se conoce como "registro de la exportación" o "permiso de embarque". De esta manera, el valor del día que cobra el productor no es el mismo al que liquida la retención el exportador.

Como es sabido, hacia fines del 2008 se dio una tendencia ascendente del precio de los *commodities*. Frente a esta disyuntiva y a la expectativa de aumento de la alícuota de las retenciones, el sector exportador solicitó DJVE sobre exportaciones todavía no compradas. Ello les permitió un mayor margen de ganancia dado que calculaban sus derechos a las exportaciones en base a valores de varios días o meses atrás. El pedido adelantado de declaraciones juradas como mecanismo de absorción de los aumentos internacionales en los precios de los *commodities* y como reaseguro frente al aumento de la alícuota de los derechos de exportación llegó a un punto tal que para "el 13 de marzo del corriente año [2008], fecha en que entró en vigencia la famosa y cuestionada resolución 125, existía un total acumulado de DJVE del Complejo Soja (soja, aceite, harina y pellets, etc.) de nada menos que 93 millones de toneladas, lo que equivale a dos cosechas anuales de ella" (Cafiero y Monner Sans, 2008). Es decir, que existía en manos de los exportadores la capacidad (mediante la posesión de DJVE) de exportar a valores y alícuotas anteriores al 13 de marzo de 2008 un volumen similar a dos cosechas completas. Esta situación tenía dos resultados principales: por un lado, los beneficios por el aumento de

que el Estado reciba ni siquiera transitoriamente los recursos que por retenciones tengan como fin estas compensaciones" (Lozano, Macalusse y otros, 2009).

las retenciones no le llegarían al Estado hasta que no se hicieran efectivas las declaraciones ya solicitadas con anterioridad, las cuales, a juzgar por los datos expuestos, no se agotarían hasta después de la campaña 2009-2010. Por otro lado, la medida permitía a los comercializadores trasladar el nuevo régimen de retenciones al precio que les pagaban a los productores en el mismo momento en que la resolución ministerial 125 se puso en vigencia. Así se combinaba una defraudación al fisco y una absorción mayor de la renta generada por los productores por parte de las empresas exportadoras. Estas maniobras en el pago que reditúan mayores ingresos para los exportadores no son necesariamente ilegales, sino que se basan en una determinada interpretación de la ley que favorece a estos sectores, aprovechando la falta de reglamentación por parte del Estado en esta área.

Finalmente, es importante destacar que en el artículo 739 del Código Aduanero se expresa que el precio FOB comprende los gastos por transporte y seguro hasta el puerto; comisiones; corretajes; obtención dentro del territorio aduanero, de documentos relacionados con la exportación; tributos exigibles dentro del territorio aduanero; embalajes y carga. Sin embargo, es usual que ciertas empresas exportadoras cobren aparte los gastos de exportación (*Fobbing*), los cuales rondan el 2%, valor que se adiciona al flete hasta el puerto y la comisión del acopiador, los cuales se encuentran en el orden del 1% al 1,5%. Estos costos son trasladados al productor quien también se encarga del transporte desde el lugar donde están sus granos o la cosecha. Asimismo, el precio pagado al productor también depende en gran medida de la calidad del producto, por lo tanto los valores antes mencionados (FAS, FAS teórico, FOB) sólo sirven de referencia ya que el precio termina de calcularse cuando la producción llega a los silos y se hacen los análisis correspondientes (calidad, humedad, presencia de cuerpos extraños, etc.) en base a los cuáles se dictamina el importe final. En todos los casos de cereales y oleaginosas, el precio tomado como referencia por los acopiadores para la compra de semillas a los productores (FAS teórico) no distingue si la producción está destinada al mercado interno o al externo. Así un cereal como el trigo que mayoritariamente se destina al mercado interno tiene como precio de referencia el precio FAS teórico (FOB menos retenciones menos gastos de *fobbing*), lo cual es considerado una herramienta para mantener más bajo el precio de la canasta básica en el mercado interno al reducirse los costos de las materias primas de los alimentos.

Las características antes descriptas surgen como consecuencia del carácter indirecto de los derechos de exportación. Si bien desde el texto legal nada impide que el importe sea afrontado por el comprador (país de destino de las exportaciones), el precio fijado en el mercado internacional hace imposible trasladar hacia el comprador externo la incidencia del impuesto en el precio del bien exportado. La cotización de los principales *commodities* primarios (soja, maíz, trigo, etc.) es dada diariamente por varias bolsas del mundo, siendo la más afamada la Chicago Board of Trade. Ningún comprador estaría dispuesto a pagar un precio mayor al dictado por dichos organismos para hacer frente a un impuesto que rige en el país de origen del producto. Por lo tanto, la carga impositiva es trasladada al eslabón más débil de la cadena, normalmente encarnado en los productores agropecuarios, y fundamentalmente los medianos y pequeños productores.

Carácter indirecto de las retenciones

El debate en torno a las retenciones remite a diversas cuestiones de importancia algunas de las cuáles consideramos a continuación.

Lo primero ya señalado es la legitimidad de cobrarle a los productores agropecuarios una retención y el carácter de impuesto indirecto de la misma. Aparentemente se vivió una situación excepcional a comienzos de los años 2000 en razón del alza de los precios internacionales de los *commodities* y ésta derivó en la generación de *ganancias extraordinarias* que fueron consideradas susceptibles de ser gravadas por parte del gobierno. Asimismo, se consideró necesario aplicar retenciones a esas exportaciones para evitar su incidencia sobre los precios alimentarios internos. Se encuentra aquí una paradoja respecto de la soja, pues en su casi totalidad es exportada y sólo mínimamente se consume en el mercado interno. Sin embargo, no gravarla hubiera aumentado aún más su rentabilidad relativa frente a otros *commodities* que no sólo son exportados sino que también son productos alimenticios consumidos en el mercado interno (principalmente el trigo y el maíz)[31].

Existe otra cuestión vinculada con el carácter indirecto del gravamen. Si bien efectivamente la retención la pagan los exportadores al Estado,

31 El maíz y el girasol compiten directamente con la soja por ser cultivos de verano que se siembran en idéntico período. Sin embargo, en el caso del trigo la influencia es indirecta pues sólo es compatible con la soja en aquellos predios donde se practica el doble cultivo.

como vimos más arriba, es trasladada en su totalidad al productor agropecuario. Si por otra parte los exportadores –por diversos mecanismos– no transfieren la totalidad de la retención al Estado surge aquí una incongruencia que los favorece directamente. Como consecuencia el sistema de retenciones puede dar lugar a numerosas irregularidades en el pago, simplemente por el modo en que es calculado el importe que debe ser abonado al Estado. Cómo, de qué forma y a qué alícuotas, son trasladados los derechos de exportación a los productores agropecuarios y qué retención es en última instancia pagada al gobierno, constituyen algunos de los problemas a considerar.

Pero aparte de esta cuestión corresponde preguntarse acerca de la importancia relativa que tienen las retenciones como mecanismo redistributivo. En efecto, no sólo se trata de un impuesto que es trasladado en su totalidad a los productores, sino que además lo pagan proporcionalmente más los pequeños productores que los grandes. Es aquí en donde se trasluce una cierta regresividad del tributo. O sea que no es todo lo "progresivo" que se presume.

Si un gobierno se plantea adoptar una política de redistribución de ingresos, no cabe duda de que un aspecto importante de la misma lo constituye la estructura impositiva que impera en el país. Si como ocurre en la actualidad, y acorde a políticas neoliberales de larga data, prevalecen impuestos indirectos (por ejemplo, el IVA) por sobre los impuestos directos (a los ingresos y/o ganancias pagaderas en forma proporcional), o sea, que pagan proporcionalmente menos los que más ingresos o riqueza tienen o perciben, entonces el sistema impositivo tiende a ser regresivo. Esto ocurre con el IVA, un impuesto indirecto, que grava al consumo de bienes esenciales, por ejemplo, los alimentos, con lo cual los sectores de bajos ingresos pagan proporcionalmente más con relación a sus ingresos totales que los sectores de altos ingresos.

La regresividad de los tributos se vincula con la heterogeneidad estructural del sector en el cual operan grandes, medianos y pequeños productores que se diferencian entre sí no solo por su tamaño sino también por su naturaleza. En un lado de la escala pueden observarse grandes productores que aplican una lógica empresarial; en el otro polo existen productores familiares y comunidades campesinas e indígenas que construyen vínculos alternativos con la tierra y el territorio operando en función de otras lógicas distanciadas notablemente de las empresariales. Estos sectores suelen priorizar las necesidades básicas familiares y desarrollar actividades agro-

pecuarias asentadas en el autoconsumo y mercados locales. Entre estos dos estratos hay una amplia gama de pequeños y medianos productores (chacareros) fuertemente vinculados a los mercados internos y externos pero que aún mantienen una proporción importante de trabajo familiar[32]. Estas diferencias permiten afirmar la naturaleza sustancialmente distinta de los ingresos que perciben cada uno de estos estratos. Podemos suponer que el gran productor recibe proporcionalmente mucha más renta o "ganancias extraordinarias" como consecuencia del alza de los precios que los medianos o pequeños productores familiares. Esto se debe a que en los ingresos de estos últimos el peso de las ganancias y los salarios (aquellos que se pagan a sí mismos como contraparte del trabajo en el predio) es mayor que el de su renta, mientras en las grandes explotaciones empresariales la renta constituye una proporción substancialmente mayor. Con un tributo indirecto, como es el caso de las retenciones que no gravan el ingreso percibido sino al producto, se hace más complejo determinar su influencia sobre las retribuciones a los agentes productivos (salario, ganancia y renta) de las distintas unidades productivas.

Precios de los commodities y evolución de las retenciones en las cuentas fiscales

Señalamos anteriormente que un importante elemento del conflicto lo constituyó el alza de los precios internacionales de los principales *commodities* de exportación de la Argentina que se produce a partir del año

32 Si consideramos sólo las diferencias en la esfera económica, para los dos primeros actores caracterizados (comunidades campesinas e indígenas/productores empresariales) podemos retomar algunas ideas de Marx en *El Capital*. Para dicho autor, en el proceso de circulación simple la producción de mercancías tenía como objeto la satisfacción de necesidades básicas de los productores. Si bien Marx no hace referencia explícita a los campesinos, de hecho podemos considerar que dichos actores operan dentro de esta lógica. Por el contrario, en la lógica de reproducción ampliada del capital la acumulación y la constante repetición de su ciclo de circulación/expansión se convierte en el principio regulador. Esta separación analítica puede servir para pensar las lógicas de organización productiva de los dos extremos de este amplio universo que es el mundo rural.

Para el caso de los sectores medios los clásicos estudios de Archetti y Stölen (1975) continúan siendo una referencia. Para ellos, los colonos "chacareros" muestran una combinación de las formas productivas campesinas y capitalistas en donde conviven el trabajo doméstico con la posibilidad de acumular capital. Existe en este tipo de explotaciones una "tendencia natural (al) ahorro de la compra de trabajo de terceros" (1975: 148), por lo cual el colono sólo invierte cuando puede mantener la permanencia de la relación entre trabajo doméstico y cantidad de recursos disponibles en tierra y tecnología.

2003. Esta situación difiere del periodo 1995-2001 cuando los precios de dichos productos sufrieron un ciclo a la baja que significó caídas del 45,6% para el trigo, 50% el maíz, 34,8% la soja, y un 50% en otros productos tales como el algodón (Véase Patnaik, 2003: 42 basados en datos de la FAO).

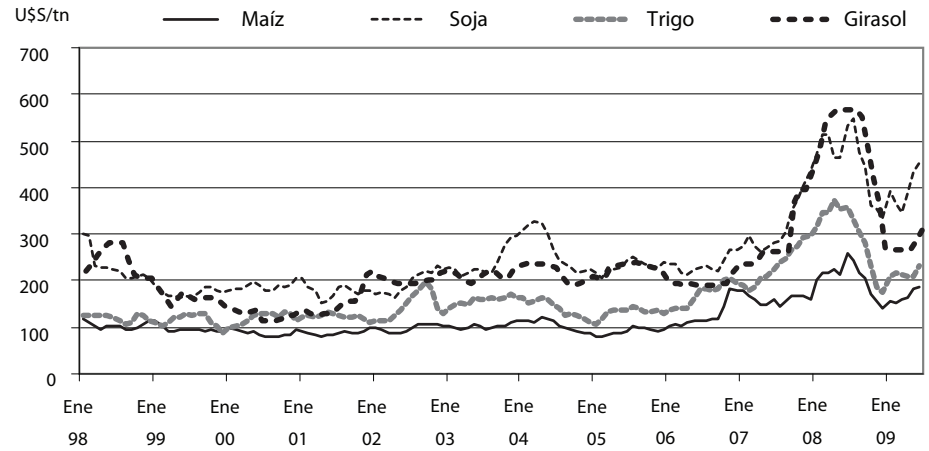
A partir del 2002 se revierte esta tendencia y comienza un período de alzas con gran variabilidad. La soja alcanza un pico en abril del 2004, luego baja y en el 2005 emprende nuevamente su marcha ascendente. En septiembre del 2002 la soja supera por primera vez los U$S 200 por tonelada, mes en el cual el maíz alcanza U$S 109 y el trigo U$S 196. Pero este ciclo ascendente se potencia a partir del inicio de la denominada crisis del *subprime* en los EE.UU hacia fines del 2006 y a lo largo del 2007. A partir de julio de aquel año todas las *commodities* de exportación sufren una suba importante. El trigo alcanza U$S 226 en junio del 2007, la soja U$S 281 y poco después en septiembre habrá alcanzado los U$S 350 mientras que el girasol supera los U$S 400. A partir de entonces las alzas son vertiginosas: la soja logra un máximo de U$S 548 en julio del 2008, para luego bajar a partir de agosto de ese mismo año (Véase el gráfico 3). Frente a este escenario, varios analistas expresaron que, más allá de la caída de finales del 2008, la soja continua siendo el cultivo más que rentable (Castro 2008; Fortuna 2008). En general, la demanda de las *commodities* actúa como reaseguro frente a la importante inestabilidad de otras inversiones bursátiles afectadas por la quiebra de varias entidades bancarias y financieras en los EE.UU. y el mundo.

Este aumento de los precios de los *commodities* influyó sobre el valor de las exportaciones en el período considerado aunque no fue el único factor, también aumentaron los volúmenes exportados. Estos incrementos del valor de las exportaciones totales incidieron sobre el crecimiento del superávit de la balanza comercial de nuestro país.

En el cuadro 7 se presentan los ingresos fiscales para el período 2001-2008, y en el cuadro 8 esa recaudación como porcentaje de los ingresos fiscales totales y su participación en el PBI. Como puede notarse, los derechos a las exportaciones representan apenas del 10% de los ingresos fiscales totales y – según fuentes diversas –poco más del 2% del PBI del país. Los derechos de exportación vinculados al modelo agroexportador (incluye la carne y la leche) ascienden en el 2008 al 7,84%.

Tal como se desglosa de los cuadros 7 y 8, los ingresos provistos al fisco por los impuestos a las exportaciones aumentaron de una cifra casi nula

Gráfico 3. Evolución precios fob



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA).

Cuadro 7: Distribución del ingreso fiscal en millones de pesos

Concepto			2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Impuestos		Ganancias	53.646	42.855	33.615	28.045	22.289	14.751	8.919	10.091
		iva Neto	80.229	62.669	47.104	36.853	30.977	20.948	15.242	15.351
		Resto	39.314	31.567	38.484	21.916	18.868	15.422	11.813	10.278
Sistema de Seguridad Social y facilidades de pago			51.144	56.087	40.000	28.460	22.190	16.626	13.428	15.386
Recursos Aduaneros	Derechos de exportación	Productos del Reino Vegetal	10.023	5.954	3.096	3.186	2.789	2.719	1.175	
		Productos de la Industria alimentaria	6.274	4.476	3.011	2.493	2.367	2.138	930	
		Grasa y aceites animales o vegetales	4.831	3.603	2.177	1.752	1.657	1.661	663	52
		Productos Minerales	10.456	3.330	3.540	2.952	1.850	1.318	1.065	
		Resto	4.507	3.087	2.888	1.939	1.609	1.375	1.188	
	Derechos de importación		8803	6859	5019	3780	3.168	2.228	1.266	1.540
	Estadística de Importación		185	156	110	87	82,08	60,46	40,93	34
	Otras recaudaciones aduaneras		0	1328	826	559	454,28	73,54	29,42	49
TOTAL			269375	221970	167317	132025	108301	79320	55760	52783

* Incluye ingresos provenientes de las productos del reino vegetal (cereales y oleaginosas), grasas y aceites animales y vegetales, y de la industria alimentaria (*pellets* principalmente).

Fuente: Informe de recaudación año 2008 y IV cuatrimestre 2008 AFIP. Expresado en millones de pesos

en 2001 a $36.000 millones en 2008, representando el 13,4% de los ingresos fiscales provistos al Estado en ese año. De este importe, $21.128 millones

Cuadro 8: Distribución de los ingresos fiscales en %

Concepto			2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Impuestos		Ganancias	19,91	19,31	20,09	21,24	20,58	18,60	16,00	19,12
		iva Neto	29,78	28,23	28,15	27,91	28,60	26,41	27,34	29,08
		Resto	14,6	14,21	15,18	16,60	17,24	19,69	21,10	19,43
Sistema de Seguridad Social y facilidades de pago			18,99	25,28	24,23	21,56	20,66	20,96	24,17	29,15
Recursos Aduaneros	Derechos de exportación	Productos del Reino Vegetal	3,72	2,68	1,85	2,41	2,58	3,43	2,11	0,10
		Productos de la Industria alimentaria	2,33	2,02	1,79	1,89	2,19	2,69	1,67	
		Grasa y aceites animales o vegetales	1,79	1,62	1,30	1,33	1,53	2,09	1,19	
		Productos Minerales	3,88	1,50	2,11	2,24	1,71	1,66	1,91	
		Resto	1,67	1,39	1,72	1,47	1,49	1,73	2,13	
	Derechos de importación		3,27	3,09	2,99	2,86	2,93	2,81	2,27	2,92
	Estadística de Importación		0,07	0,07	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,07
	Otras recaudaciones aduaneras		0	0,60	0,49	0,42	0,42	0,09	0,05	0,09
TOTAL			100	100	100	100	100	100	100	100
% del PBI			25,9	27,33	25,57	24,82	24,19	21,08	17,84	19,65

* Incluye ingresos provenientes de las productos del reino vegetal (cereales y oleaginosas), grasas y aceites animales y vegetales, y de la industria alimentaria (*pellets* principalmente).

Fuente: Informe de recaudación año 2008 y Informe de recaudación del IV cuatrimestre 2008, AFIP.

corresponden a ingresos vinculados con el complejo agroexportador, representando el 7,84% de los ingresos fiscales totales. Dentro de este ítem los rubros vinculados a las exportaciones cerealeras, y fundamentalmente oleaginosas, conforman la gran mayoría.

En términos más generales entre los rubros que constituyen los principales ingresos fiscales, se destacan el impuesto a las ganancias[33] y el IVA. El primero representa el 20 % de los ingresos fiscales totales, mientras que el IVA asciende al 30%. En forma conjunta constituyen una proporción mucho mayor del PBI que los derechos a las exportaciones. Por último los aportes al sistema de seguridad social, que ascienden al 19% de los ingresos fiscales, bajaron su participación relativa a lo largo de la década. Una política redistributiva podría focalizarse sobre el aumento de los impuestos a las ganancias con relación al IVA, aparte de los aumentos que corresponderían asignar a la seguridad social. También podrían crearse

33 Cabe destacar que el "impuesto a las ganancias" también grava a los salarios, o sea que se aplica sobre los ingresos de los trabajadores sin considerar la naturaleza diferencial de los mismos. En este sentido debería considerarse un "impuesto a los réditos".

otros impuestos como, por ejemplo, a la renta financiera y otras propuestas afines.

Asimismo, es importante destacar el alto grado de evasión fiscal en el sector agropecuario. Tal es así que durante el año 2008 la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó un estudio que mostraba un índice de evasión en el pago del impuesto a los ingresos brutos del 70%. Según este documento, los productores rurales no habrían declarado más de 3.500 toneladas de soja de la campaña 2007/2008 almacenadas en silobolsas cuyo valor ascendía de más de 2,3 millones de pesos. Estos números sólo corresponden a uno de los gravámenes que el productor agropecuario paga, pues existen otros impuestos provinciales y municipales que se suman a los cobrados desde la órbita nacional.

Otras particularidades del sistema de retenciones actual

Páginas atrás hemos descripto la cadena de pagos de los derechos de exportación identificando quiénes, en última instancia, hacen frente a este tributo. Ya hemos visto cuáles son las implicaciones del carácter indirecto de este impuesto así como algunas consecuencias que tienen que ver con la forma particular de su aplicación que permite a los exportadores apropiarse de una parte de las retenciones que deberían ir al Estado.

Asimismo, destacamos que desde sus inicios los derechos de exportación eran recursos no coparticipables con las provincias. Es decir que se trata de fondos que se destinan al financiamiento del aparato estatal nacional sin que ningún gobierno provincial pueda hacer un uso directo de los mismos. Sin embargo, en marzo de 2009 el Gobierno nacional creó, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, el Fondo Federal Solidario que sería destinado a la construcción de escuelas, viviendas, redes de agua potable, construcción de cloacas, etc. El dinero para solventar estas obras provendría de los ingresos por derechos de exportación del complejo sojero de los cuales el Estado Nacional retiene el 70% y distribuye de acuerdo con los índices de coparticipación el 30% restante entre las provincias. Esto implica la distribución territorial de una parte del dinero recaudado por retenciones no por medio de un cambio en el régimen tributario sino a través de una medida *ad-hoc* aplicada sobre lo obtenido por algunos rubros. El Estado Nacional aún mantiene el control de un 70% de los

ingresos que genera el complejo sojero y el total aportado por los otros rubros sujetos a derechos de exportación. Cabe destacar que el hecho de que una parte se redistribuya regionalmente no necesariamente indica que sea redistribuido socialmente hacia los sectores más necesitados de la comunidad.

La otra cuestión referida al sistema de retenciones tiene que ver con su presumible efecto redistributivo. Esto puede considerarse no sólo si nos remitimos al sistema impositivo en su globalidad sino también a lo que ocurre al interior del sector agropecuario. Tal como señalamos más arriba, se trata de un impuesto indirecto que puede ser trasladado "hacia adelante" o "hacia atrás" de la cadena agroalimentaria. En el caso que nos ocupa, como no puede ser trasladado "hacia adelante" lo es hacia atrás, hacia los productores agropecuarios. También corresponde señalar que lo pagan proporcionalmente más los pequeños productores que los grandes. Si bien históricamente la renta agraria, diferenciada de la ganancia o el salario, es provista por el sector agropecuario en su conjunto, no todos los productores agropecuarios contribuyen en la misma proporción a la generación de esa renta. Gran parte del debate reciente en torno de las retenciones surgió de la presunción de que el grueso de la producción agropecuaria es básicamente rentística y que el aporte de los productores a la generación de renta es uniforme y de todos por igual. Sin embargo, esto no es así. Si bien en el sector se generan importantes rentas también se producen ganancias y salarios, y en la estructura de costos/ingresos de los medianos y pequeños productores estos dos ítems son proporcionalmente más significativos: la renta es proporcionalmente mucho más importante en los ingresos de las grandes explotaciones. Como consecuencia, aplicar una alícuota uniforme a todos los productores por igual soslaya esta cuestión: las retenciones que pagan los medianos y pequeños productores terminan siendo más onerosas ya que gravan proporcionalmente más sus salarios y ganancias que en el caso de los grandes productores. Cabe destacar que un productor relativamente pequeño dedica una proporción mayor de sus ingresos para su propia subsistencia comparado con un productor grande. Como consecuencia, podemos deducir que para el gran productor el impuesto constituye una proporción menor de sus costos totales.

En lo esencial se trata de un gravamen que se aplica a la producción exportada, como granos básicos, carne, leche, el petróleo y sus derivados, etc.[34]. Como consecuencia el precio interno de todos estos productos también está en gran medida determinado por los precios de exportación. Un

gravamen sobre la producción exportable, independientemente del tamaño de las explotaciones agropecuarias y la naturaleza de las mismas, tiende a discriminar en contra de la explotación familiar mediana y pequeña, y en contra de aquellas que se orientan hacia el mercado interno.

¿En qué medida gran parte del producto (ingreso) generado en el sector agropecuario y en otras actividades centradas en los recursos naturales corresponden a rentas, susceptibles de ser gravadas a través de las retenciones? Aquí cabe destacar dos cuestiones: a) si pueden ser consideradas renta (en el sentido en que lo plantean los economistas clásicos), y b) en qué medida constituye la retención una forma adecuada para apropiarse de una parte de la misma.

Por lo general se supone que el gran productor genera proporcionalmente más renta por hectárea comparado con el mediano o pequeño productor. Si esto fuese así, una retención uniforme para todos los productores tendría un efecto negativo desproporcionado para el mediano o pequeño productor con relación al gran productor. Este último pagaría la retención con una parte de su renta, y no con su ganancia o salario, lo cuál no ocurre con el mediano o pequeño productor que extrae los fondos para el pago de la retención proporcionalmente mucho más de su ganancia (de los fondos destinados a sus inversiones de capital) o de su salario (como productor que trabaja en su predio y/o que contrata parcialmente trabajadores rurales). Como consecuencia la retención es, en términos comparativos, un gravamen mucho más oneroso para el pequeño productor familiar. Es en este sentido que puede considerarse un impuesto regresivo, ya que incide proporcionalmente más sobre los costos de producción del pequeño productor que del grande[35].

En definitiva, podemos suponer que la ganancia extraordinaria o renta es menos significativa para la pequeña explotación familiar debido a que su estructura productiva es sustancialmente diferente a la del gran productor. Y que el grueso de la renta agraria se genera en las grandes explotaciones; como consecuencia la retención incide proporcionalmente mucho más sobre los ingresos de los medianos y pequeños productores[36].

34 Cabe destacar que las exportaciones de minerales no pagan retenciones o bien éstas son mínimas.

35 Tal situación sería más regresiva aún para el productor campesino, ya que éste generalmente produce para el mercado interno o para su subsistencia. Cuando se produce maíz o trigo para la venta en el mercado interno los productores son afectados por la retención debido a que perciben un precio menor.

36 El reconocimiento de que es necesario segmentar las retenciones según el volumen de producción puede sustentarse en esta cuestión.

Parte de la renta es absorbida por el aumento en el valor de la tierra, que corresponde a su capitalización, y otra parte se materializa parcialmente en el monto de los arrendamientos. ¿Qué pasa con los arrendamientos en general? Las situaciones son muy diversas. Van desde grandes terratenientes que arriendan parte de su tierra, hasta pequeños productores que son inducidos a alquilar sus campos frente a la imposibilidad de competir en el mercado. Los arrendamientos que circulan en el sector agropecuario constituyen renta fundiaria por excelencia y pueden ser considerados parte de las rentas diferenciales a escala mundial que, en este contexto, podrían ser gravadas. En la actualidad, los arrendamientos no son gravados, ni aquellos percibidos por los grandes productores cuando ceden sus campos a contratistas, ni los que corresponden a los pequeños productores que arriendan sus campos a *pools* de siembra, contratistas u otros productores. Sin embargo, en la medida en que las retenciones afectan los precios agropecuarios también afectan los arrendamientos manteniéndolos más bajos en comparación con un escenario en el que las retenciones no existieran. Frente a este contexto, quizás un punto nodal de una reforma impositiva podría tener que ver con encontrar una manera de gravar precisamente los arrendamientos, ya que el ingreso percibido por los arrendatarios posiblemente sea lo que más se acerca a la noción de renta fundiaria.

Disquisiciones finales en torno a las retenciones

En ciertos círculos se presume que la producción agropecuaria se transforma indefectiblemente en renta y que esas rentas son "diferenciales a escala internacional" o bien "especulativas". Por lo tanto, la aplicación de retenciones constituye en sí un mecanismo adecuado para captar una parte importante de dichas rentas como parte de una política redistributiva.

Esta argumentación, tal como lo hemos planteado en el presente trabajo, contiene ciertas falencias:

1) No toda la producción agropecuaria es rentística. Considerarla como tal no toma en consideración la gran heterogeneidad estructural del sector, en donde conviven grandes, medianos y pequeños productores. Podemos suponer que la mayor parte de la renta fundiaria se genera en las grandes explotaciones. Los ingresos de los productores familiares como los del sector campesino no son substanciales o tan extraordinarios como para que sean considerados renta y por tanto gravados del mismo modo que los que

perciben los grandes productores. Pueden existir coyunturas como la reciente en la que se produce el alza inusitada de los precios internacionales de los *commodities* en la que una parte (proporcionalmente pequeña) de los ingresos percibidos por los pequeños productores puede considerarse renta fundiaria. Sin embargo, los medianos y pequeños productores no generan el grueso de la renta. Por consiguiente, gravar a todos los productores con alícuotas uniformes no constituye un mecanismo adecuado para impulsar un sistema tributario más equitativo, y para promover un adecuado proceso de acumulación. Una política redistributiva requeriría gravar más la renta que la ganancia y el trabajo, lo cuál no parece ser el caso involucrado en el actual sistema de retenciones.

2) Es difícil, por lo menos en lo que atañe a la actual estructura agraria, considerar que se está gravando con efectividad la renta fundiaria mediante la vigente política de retenciones cuando en el sector ha habido una difusión masiva de los arrendamientos que no son gravados. Los contratos "accidentales" por una cosecha que muchos productores realizan con *pools* de siembra o contratistas generan ingresos rentísticos por excelencia[37]. En cambio los grandes productores o terratenientes que no arriendan sus campos sí pagan retenciones sobre sus rentas o ganancias extraordinarias. En efecto, serían rentas fundiarias adicionales que surgen como consecuencia de las superganancias provenientes de la venta de su producto, o bien del acrecentamiento del valor de su tierra. Pero si un productor arrienda su campo no paga un impuesto sobre esta renta extraordinaria pese a que éste puede ser considerado un ingreso "rentistico" por excelencia.

3) Una política redistributiva a nivel nacional tendría que considerar al sistema impositivo en su globalidad y su impacto sobre la redistribución de los ingresos. En este sentido la política impositiva que fue imponiéndose en las últimas décadas bajo la égida del neoliberalismo tendió a ser regresiva, pagando proporcionalmente "más impuestos los que menos tienen". Así tendieron a primar los impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, frente a los impuestos directos (ganancias). En la medida en que prevalecen los impuestos indirectos, el sistema tiende a ser relativamente más regresivo. El caso de las retenciones es bastante particular puesto que, si

37 En el caso de la ganadería, también hay un uso difundido de los fideicomisos (figura legal con la que suelen operar los *pools* de siembra) que favorecen el desarrollo de ingresos adicionales. De hecho, muchos de los grandes *feed-lots* están inscriptos como fideicomisos para beneficiarse con la reducción del impuesto a las ganancias que esta figura legal tiene (véase González Arzac, 2010).

bien en parte grava a sectores de altos ingresos, no discrimina entre grandes, medianos y pequeños productores, por lo cual no necesariamente es lo suficientemente progresivo como se piensa. Por otra parte, la aplicación de una política de retenciones no sustituye la necesidad de una reforma impositiva global que debería formar parte de una efectiva política redistributiva.

4) Hemos visto que las retenciones no constituyen una porción significativa de los ingresos fiscales, por lo menos en relación con la importancia que asume el IVA o los impuestos a las ganancias. Parte de la renta se cuela hacia los rentistas, que no pagan impuestos. Existen otros muchos sectores de la economía que generan "ganancias extraordinarias" que no son gravados: sectores monopólicos que generan en determinadas coyunturas rentas extraordinarias, por ejemplo, las empresas mineras.

5) La retención es un impuesto que favorece sobremanera a la Nación en detrimento de las provincias, dado que no es totalmente coparticipable. Y, como vimos páginas atrás, del monto destinado al Fondo Federal Solidario sólo el 30% es distribuido entre los estados provinciales. De allí que contribuye escasamente a una mayor federalización de la actividad económica. Asimismo, no siempre se manifiesta la presunta prosperidad que genera el modelo, dado que conjuntamente con el aumento de los beneficios generados para determinados sectores hay otros a quienes el presunto "derrame" de la política agraria no les llega o les impone consecuencias negativas. Como veremos en el próximo apartado sobre las *deseconomías externas* del modelo sojero, este generó expulsión social del sector y redujo sustancialmente la cantidad de productores agropecuarios y trabajadores rurales que viven y trabajan en el campo.

6) Cabe destacar también que una parte de los ingresos percibidos por el gobierno mediante la política de retenciones se revierte al sistema agroalimentario. Tanto productores, como otros agentes concentrados que participan del complejo agroalimentario, reciben una parte importante de los subsidios que otorga el gobierno. Según datos oficiales las compensaciones al sector en el 2007 ascendieron a $1.400 millones, más del 55% se concentraron en apenas 10 empresas (La Serenísima, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Cargill). Así, cada una de estas empresas se apropió en promedio de $80 millones mientras que el 45% restante se distribuyó entre 32.000 productores. Esto demuestra que sólo una parte de los subsidios otorgados al sistema agroalimentario se orienta a los productores agropecuarios. En un plazo más extendido,

los valores apenas se matizan pues como vemos en los cuadros 9 y 10 de un total de 7.359 millones de pesos poco más del 80% se destinó a las empresas del sector (molinos, *feedlots*, faenadores avícolas, industria láctea, aceites y harina de maíz) mientras que los pagos destinados a los productores tamberos, criadores de terneros overos, productores porcinos y pequeños productores de soja y girasol representaron poco menos del 20% de las compensaciones. Estos números demuestran no sólo un peso mayor del eslabón de procesamiento en la recepción de compensaciones sino también una concentración del mismo, pues los pagos solicitados son pocos pero de montos muy altos.

Cuadro 9: Total de pagos autorizados en concepto de compensaciones acumulados en el período 2007-2010.

Rubro	Total pagos	Importe
Molinos de trigo	1.602	$ 2.024.448.598,39
Feed lots	4.802	$ 1.560.854.574,42
Faenadores avícolas	914	$ 1.460.993.331,00
Productores tamberos	171.071	$ 965.379.311,32
Industria Láctea	181	$ 615.871.129,40
Productores de trigo	25.636	$ 338.919.385,20
Aceites	62	$ 282.200.831,61
Productores Porcinos	2.048	$ 89.364.812,62
Harina de Maíz	48	$ 14.311.868,09
Criadores de terneros overos	784	$ 6.905.000,00
Pequeños Productores de soja y girasol	26	$ 523.965,29
Total	207.174	$ 7.359.772.807,34

Fuente: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (oncca).

En definitiva, si tomamos en consideración tanto las retenciones como las compensaciones a diversos sectores del sistema agroalimentario vemos que la diversidad de situaciones resultantes "transforma en irrelevantes afirmaciones que hablan de la "rentabilidad del sector" sin precisar quienes ocupan posiciones dominantes en este negocio (grandes propietarios, pooles de siembra, exportadores, proveedores de insumos y tecnología) y quienes tienen un lugar subordinado y de mayor debilidad" (Lozano, 2008).

Por lo tanto las referencias a la "rentabilidad del sector agropecuario" de manera general y sin precisar no colaboran necesariamente con el entendimiento de la dinámica del conflicto agrario.

Cuadro 10: Total de pagos autorizados en concepto de compensaciones acumulados en el período 2007-2010 en valores relativos

Rubro	**Total pagos**	**Importe**
Molinos de trigo	0,77	27,51
Feed lots	2,32	21,21
Faenadores avícolas	0,44	19,85
Productores tamberos	82,57	13,12
Industria Láctea	0,09	8,37
Productores de trigo	12,37	4,61
Aceites	0,03	3,83
Productores Porcinos	0,99	1,21
Harina de Maíz	0,02	0,19
Criadores de terneros overos	0,38	0,09
Pequeños Productores de soja y girasol	0,01	0,01
Total	100,00	100,00

Fuente: ONCCA.

"Deseconomías externas" del modelo sojero

Una cuestión central y que sólo recientemente ha comenzado a plantearse con mayor claridad se refiere a los "costos" sociales, económicos, ambientales y referidos a la salud humana que genera el modelo sojero. Existe una tendencia a soslayar estos aspectos, ya sea porque se los considera poco importantes o porque las grandes rentas generadas por el modelo presumiblemente compensarían estos "costos" (se nos escapa cómo). Los economistas los denominan eufemísticamente "deseconomías externas a la empresa". Sin embargo, se trata de costos que tienen una importancia fundamental y que, a nuestro juicio, pueden poner en cuestionamiento el modelo sojero en sí, como así también otros modelos "extractivos" que se han impulsado en el país en años recientes: el sistema de los *feedlots*, la producción avícola en gran escala, la producción minera, la petrolera, la nuclear, etcétera.

Una primera cuestión a considerar tiene que ver con los peligros que entraña una excesiva *especialización* en un determinado cultivo, por ejemplo, la soja, la cual por definición excluye toda biodiversidad, producción de otros cultivos o alimentos más importantes desde el punto de vista de las necesidades de la población en su conjunto, y también la necesaria rotación de los cultivos y producción pecuaria para mantener aunque sea mínimamente la sustentabilidad del sector. Se trata de un debate que tie-

ne que ver con políticas de comercio exterior, por una parte, y políticas que atañen a la actividad productiva interna, por la otra.

Los aspectos externos de esta cuestión tienen una fundamentación teórica que se remonta a los pilares de la economía política clásica. David Ricardo (1817) desarrolla la doctrina de las *ventajas comparativas* como base de sustentación del comercio libre. Según esta tesis, a un país le conviene *especializarse* en aquella producción cuyos costos son más bajos en términos relativos. Estos costos tienen que ver en general con la disponibilidad de recursos existentes; por ejemplo, si en un país existe abundante tierra fértil conviene especializarse en la producción agropecuaria; si tiene abundante población, en producción industrial trabajo intensiva, etc. A un país le conviene especializarse en determinada producción y producir no sólo para el mercado interno sino también para los mercados externos. El intercambio de los productos mediante el comercio exterior se potencia debido a esta especialización de la producción realizada por todos los países en función de sus costos relativos. De este modo la especialización permite, al decir de Adam Smith, reducir costos unitarios y lograr mejoras en los ingresos *per capita* de todos los países. Esto ocurre también porque al ampliarse los mercados para aquella producción se generan "economías a escala de producción". Para Adam Smith la *división del trabajo* está limitada por la extensión del mercado, la cual podría restringir los aumentos de productividad[38].

Este modelo ha sido criticado por múltiples razones. En los años de la postguerra, Prebisch y los economistas de la CEPAL cuestionaron el librecambio que impulsaba la especialización de la producción interna en determinados productos primarios de exportación por parte de los países de la periferia. Plantearon esta temática en función de la dicotomía *centro-periferia*, criticando la perspectiva de economistas ortodoxos que consideraban que la periferia debía especializarse en la producción primaria cuyos costos eran relativamente más bajos.

Los economistas de la CEPAL señalaron que los "frutos del progreso técnico" no se distribuyen equitativamente entre los países centrales y periféricos. Si los países centrales industrializados introducen cambios tecnológicos que reducen los costos unitarios de su producción más que en la periferia, éstos no necesariamente redundan en la caída de sus precios internacionales. Como consecuencia, los "términos del intercambio" [los

38 El análisis de Adam Smith se orienta a demostrar que el aumento del ingreso *per capita* de la nación depende en gran medida de la división del trabajo que se realiza al interior de la misma. Reconoce, sin embargo, que esta división del trabajo es menos factible en la agricultura.

precios relativos de los productos (primarios) de exportación de la "periferia" con relación a los precios de los productos (manufacturados) de exportación del "centro"] tienden a deteriorarse. Esta situación apuntaba a que la periferia debía industrializarse, reduciendo de este modo tanto su dependencia externa como su especialización en la producción primaria. A esta cuestión se agregaba la *vulnerabilidad externa* de esa producción, que – como ha ocurrido a lo largo de la historia – podría ser sustituida por otra (por ejemplo, el caucho natural por el sintético, el azúcar de remolacha por la caña de azúcar, etc.).

Como hemos señalado en este trabajo, desde los años 70s a esta parte se ha producido en nuestro país una fuerte especialización en el cultivo de la soja. Ello significó grandes rentas agrarias a escala internacional y economías a escala de producción, aunque también menos biodiversidad en la flora y fauna local, menor producción de alimentos, con la consabida perdida de la soberanía alimentaria, deterioro del medio ambiente, deforestación, menor demanda de mano de obra en las zonas rurales al ser desplazada aquella que vive y trabaja en el campo, etc. Todos estos factores constituyen "costos" soslayados en los análisis "economicistas" realizados hasta el presente en torno al modelo sojero.

Frente a este contexto *Vía Campesina*[39] señala que el libre cambio ha empeorado la crisis que sufren las zonas rurales en todo el mundo. La liberalización de los mercados para los productos agrícolas, la apertura de las fronteras y la reducción de los aranceles han introducido a los campesinos en un sistema global de competencia sin límites, donde los únicos que se benefician son las multinacionales del agronegocio y sus accionistas. Como consecuencia, *Vía Campesina* se pronuncia en contra del librecambio de productos agropecuarios y la consiguiente especialización en determinadas *commodities* de exportación. Estas tendencias prefiguraron la crisis alimentaria mundial que se manifiesta en la actualidad.

El aumento constante de la superficie sembrada con soja señalado en este trabajo ha desplazado otros cultivos. Si para la campaña 2008/09 se registraba una superficie sembrada con la oleaginosa de 16,6 millones de hectáreas, en el próximo período (2009/2010) según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se proyecta sembrar 19 millones. Frente a esta situación, la intención de siembra se redujo en el período 2008/09 en 600.000 has en el caso del maíz y 820.000 has para el girasol. Igual situa-

39 Se trata de una organización internacional que agrupa a los campesinos del Norte y del Sur a fin de defender la soberanía alimentaria, la biodiversidad en el mundo y otros objetivos afines a sus intereses.

ción se visualiza en la actividad tambera, cuyo índice de concentración es altísimo, la ganadería y ciertos cultivos del interior del país. Toda esta producción que está siendo desplazada es la que históricamente proveyó los alimentos de consumo masivo para la población en general.

A la perdida de la soberanía alimentaria[40] se suman otros costos importantes. A lo largo del período en consideración hubo un aumento de la deforestación y el avance de la actividad agropecuaria sobre el monte nativo. Desde comienzos del siglo XX la Argentina perdió dos tercios de la superficie de su bosque nativo (Amorin, 2007). Según el Censo Nacional Agropecuario de 1937 había en el país 37,5 millones de has de bosques nativos. Hacia 1987 esa superficie se había reducido a poco más de 35,1 millones de has y para 1998 quedaban poco más de 33,1 millones. A partir de allí el ritmo de deforestación aumentó para llegar en el período 1998-2002 a la pérdida de 230.000 has. por año de bosques nativos. En años posteriores esta cifra ascendió a 250.000 has por año. Como es de imaginar, este proceso se encuentra estrechamente vinculado con el avance de la soja. Las provincias más afectadas son Chaco, Santiago del Estero y Salta. En esta última provincia se produjo uno de los mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 has, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada hasta llegar a las 414.932 has. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la ley de bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 has, evitando la moratoria que establecía la norma (Montenegro et al, 2004). En definitiva, se desmontan a nivel nacional 250 mil hectáreas de monte nativo por año,

> *"principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70 por ciento de la deforestación anual por la expansión de la soja transgénica y la ganadería. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte de las áreas amenazadas. Asimismo en la Selva Misionera que alberga la más alta biodiversidad del país, sólo queda un 7 por ciento de la superficie original. Esta situación se replica incluso con mayor intensidad en* ***Paraguay*** *y* ***Brasil*** *en donde el bosque nativo ha sido prácticamente destruido" (Amorin, 2007).*

40 En realidad correspondería hablar aquí de "seguridad alimentaria", "soberanía alimentaria" es un concepto más amplio. De todos modos, la pérdida de seguridad alimentaria (de la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional) también prefigura un empeoramiento de la soberanía alimentaria.

Es importante destacar que estos números se refieren exclusivamente a la pérdida de superficie forestal; no miden el grave proceso de "degradación" de las masas forestales restantes. Es decir que a la pérdida total de bosques se suma la modificación parcial hecha por la extracción de recursos forestales y la carga excesiva de ganado o de otros cultivos que sufren, por la soja. La deforestación también influye sobre la capacidad de absorción del suelo, las lluvias y el agua. Genera sequías pero también inundaciones, ya que el suelo deforestado y sembrado con soja no retiene el agua que termina escurriéndose hacia los ríos. O sea no se consideran sus probables efectos sobre el aumento de las inundaciones en vastas regiones del país (Brouver y Manghi, 2006). Según la FAO, la deforestación constituye una de las principales amenazas para el equilibrio ecológico del mundo (FAO, 2009).

Al mencionado deterioro ambiental debemos sumar el hecho que estos bosques son también el territorio de miles de pequeñas comunidades campesinas, pueblos originarios y criollos, que dependen de ellos cotidianamente. Para las comunidades que viven en y de los bosques, éstos constituyen su hogar y su fuente de subsistencia. La tasa de desmonte actual significa su expulsión hacia la pobreza suburbana. "Esta situación que afecta a todo el espectro económico y social, no parece importarle a las grandes empresas que -topadora al frente- barren con los bosques nativos para lograr territorio despejado donde se pueda sacar "oro verde" (soja), la producción más rentable y de mayor exportación en Argentina" (Amorín, 2007).

Finalmente, cabe destacar que la reglamentación de la "Ley de presupuestos mínimos ambientales para la protección de bosques nativos" (N° 26331), ha permitido a algunas comunidades obtener resultados interesantes a partir de sus reclamos. Sin embargo, estos avances son matizados tanto por las inadecuadas e inconsultas leyes de ordenamiento territorial que muestran los poderosos intereses en juego, como por el incumplimiento de la ley misma.

Uso de agroquímicos: durante el año 2009 la superficie implantada con soja recibió más de 200 millones de litros de glifosato, un aumento de más del 1.400% de lo aplicado en 1996 (14 millones de litros). A este herbicida, parte indispensable del paquete tecnológico que involucra el modelo sojero, se suman las aplicaciones de 2-4D, atrazina y endosulfán, las cuales sumaron entre 32 y 37 millones de litros. Esto se debe tanto al significativo avance de la semilla transgénica (soja y maíz prin-

cipalmente) como a la creciente resistencia que las "malezas" presentan al agroquímico, los cuales llevan a incrementar las dosis. Es importante destacar que en el caso del glifosato existen importantes y documentados estudios[41] que advierten sobre la peligrosidad de este herbicida para la salud humana, lo cual se suma a numerosas denuncias e investigaciones de organizaciones y poblaciones afectadas[42]. Como ejemplo podemos citar el trabajo elaborado por Domínguez y Sabatino (2005) que revela casos de contaminación humana, animal y vegetal ocurridos en su mayoría entre los años 2003 y 2005. Los registros provienen de ámbitos rurales, aunque también se detectan en áreas urbanas y periurbanas. Entre los agroquímicos responsables de la contaminación se destacan aquellos utilizados en la soja RR (glifosato y 2.4D). Gran parte de las denuncias asentadas provienen de ONGS, organizaciones campesinas, y localidades víctimas de la fumigación masiva donde se detectan distintos grados de impacto que van desde malestares generales, intoxicaciones, enfermedades crónicas, hasta la muerte inmediata. La presencia de estas organizaciones, principalmente en el caso del Paraguay, genera una mayor conflictividad por la resistencia de campesinos dispuestos a recurrir a un amplio repertorio de acciones directas (destrucción de cultivos, bloqueo de rutas, movilizaciones, acciones legales) (Domínguez y Sabatino, 2009: 30).

Además es importante destacar que el uso de pesticidas también influye sobre la biodiversidad. Según un estudio hecho público por la Universidad de Gotinga (Alemania) el uso sistemático de pesticidas reduce a la mitad la *diversidad biológica* en los campos de cultivo de toda Europa. El profesor de agricultura ecológica de la citada universidad Teja Tscharntke subrayó que, mientras un campo que es cultivado ecológicamente presenta hasta un millar de especies distintas, en uno que es fumigado con pesticidas y fungicidas no sobrevive más de la mitad. Tscharntke basa sus conclusiones en un amplio estudio realizado en 150 campos de cultivo de trigo en países como España, Alemania, Francia, Estonia, Polonia, Irlanda, Suecia y Holanda. La variedad de la muestra permitió cubrir distintas regiones, tamaños de los predios y formas de cultivo. Tras comentar que el estudio tuvo como fin estudiar la biodiversidad de plantas y animales, pero

41 Véase la investigación que muestra los efectos sobre los embriones de anfibios del glifosato utilizado para la soja transgénica que realiza el Dr. Andrés Carrasco, profesor de embriología de la UBA e investigador del CONICET, entrevista realizada por Darío Aranda, *Página 12,* 3 de mayo de 2009. Y los diversos trabajos incluidos en el sitio www.voces-de-alerta.blogspot.com

42 Véase Benachour y Séralini, 2009; Kaczewer, 2009 y 2002; Montenegro, 2009; GRR, 2009; Oliva, Spira y Multigner, 2001; http://observatoriodelglifosato.wordpress.com/

sobre todo de coleópteros y aves, el experto alemán explicó que la causa principal de la pérdida de especies se debe a la aplicación de insecticidas y fungicidas. El equipo dirigido por Tscharntke analizó la localización de los campos, el carácter del paisaje, el tipo de terreno, su cercanía a otros biotopos y, sobre todo, la forma de cultivo y con ello el uso de maquinaria y sustancias químicas. Asimismo comentó que el cultivo orgánico sin el uso de pesticidas tiene claros efectos positivos en la diversidad de plantas y animales, sobre todo insectos y, entre estos, coleópteros. Finalmente advirtió que el uso masivo de productos químicos en la agricultura afecta igualmente de manera negativa a especies de mayor tamaño como aves y mamíferos y aconsejó a quien apueste por la biodiversidad que renuncie al uso de pesticidas (Primicias Rurales, 2010).

En definitiva, el avance de ese paquete tecnológico involucrado en la producción sojera amenaza la soberanía alimentaria, crea graves problemas de salud a las poblaciones por medio de la fumigación, tiene efectos edafológicos, con un deterioro sustancial de la calidad de los suelos debido a prácticas corrientes del paquete tecnológico utilizado, incide sobre la biodiversidad de la fauna y flora del medio rural, y contribuye a que los desechos tóxicos tiendan a difundirse por el medio ambiente. En efecto, la sobreutilización de fertilizantes, y agroquímicos en general, afecta lagos, ríos, y regiones oceánicas, y las capas acuíferas de vastas regiones en el mundo. Estas consecuencias se suman al cambio climático que se manifiesta a escala global (sequías, inundaciones) a partir de los efectos del recalentamiento mundial que también constituye un producto de la difusión del modelo extractivo a nivel mundial (Foster, 2010: 3).

La expulsión rural y los cambios en la estructura productiva: no es una consecuencia menor del modelo la expulsión de medianos y pequeños productores y trabajadores rurales del sector que impulsa una suerte de "agricultura sin agricultores", así como la creciente dependencia del productor agropecuario sobre la semilla transgénica provista por unas pocas grandes semilleras transnacionales. A su vez, a medida que desaparecen los pequeños y medianos productores agropecuarios aumentan los índices de pobreza y de desocupación en nuestro país. Vemos que el aumento de la pobreza y la desocupación en el ámbito rural y en las pequeñas ciudades del interior están estrechamente vinculados con la desaparición de los cultivos regionales y el ahorro de mano de obra que significa la producción sojera. El campo queda despoblado, y las ciudades con sectores empobrecidos y hambreados. La comparación de los datos

censales de 1988 y 2002 son contundentes en este sentido pues, a la par del crecimiento del cultivo de la soja se ha dado una disminución de la cantidad de productores en todo el país del orden del 24%. La mayoría de las explotaciones desaparecidas corresponden a las de pequeñas dimensiones. Se pierde no sólo cantidad sino también variedad de la producción, afectando notablemente la disponibilidad de alimentos. Esta reducción de la oferta de alimentos también podría influir sobre el proceso inflacionario en ciernes.

Tal como comentamos en este trabajo la Argentina pone en peligro su soberanía alimentaria a causa del modelo sojero. Desaparecen tambos, cultivos industriales del interior y una parte importante de la ganadería. En esta última actividad tiende a consolidarse lo que González Arzac (2010) denomina una *nueva ganadería* con muchísimos menos productores (se estima que gran parte de los establecimientos que cerraron en los últimos ocho años son ganaderos), con muchas más empresas subsidiadas (impulsadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario en 2007 tal como se muestra en los cuadros 9 y 10). A medida que se reducen las hectáreas destinadas a la cría animal a causa del avance de la actividad agrícola, el engorde de la hacienda a corral (los *feedlots)* se convierte en una actividad fuertemente complementaria a la expansión sojera. Este método atenuó la dramática reducción del *stock* bovino pero no pudo evitarla.

Durante 2009 se produjo en los *feedlots* la mitad de la carne consumida en la Argentina. Los animales son engordados de manera intensiva en espacios reducidos permitiendo que la agricultura de exportación tenga una mayor cantidad de hectáreas disponibles. Frente a la gran participación de estos actores, estimaciones de las entidades agropecuarias concluyen que el 68% de los productores ganaderos tienen menos de 250 animales y generan el 30% del total de la producción[43]. "Los grandes productores –que son empresas porque el clásico ganadero oligarca fue reemplazado por Coto, Eurnekian, Irsa y Werthein– generan también el 30% del total. El resto queda en manos de productores a los que se denomina medianos. El Senasa hace otro recorte posible y concluye que el 90% de los ganaderos tiene menos de 500 vacas." (González Arzac, 2010). En definitiva, desaparecieron multiplicidad de ganaderos conjuntamente con la desaparición de

43 En 2009 la producción de carne ascendió a 3.300 millones de toneladas y en 2010, según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, llegará a los 2.400 millones.

millones de cabezas de ganado. Como contrapartida se promovieron los *feedlots* a través de subsidios.

Se trata de una ganadería plenamente compatible con el modelo sojero que es favorecida con menores impuestos para aquellos establecimientos inscriptos como fideicomisos. Además tienen un importante riesgo ambiental por la posibilidad de contaminación localizada de suelos y agua principalmente, pero que también puede afectar el aire y degradar el paisaje (Portillo, 2009). En términos cualitativos se trata de otra carne argentina, no aquella sabrosa, con poca grasa comparada con la australiana, porque se alimenta con pasturas mientras el animal camina por sobre las mismas.

Reflexiones finales

En primer lugar, nos parece importante reiterar que todo conflicto, especialmente cuando la carga política y mediática es tan fuerte como en el caso analizado, puede generar una polarización de la cual es difícil escapar. Frente a esta situación, es indispensable reconstruir la heterogeneidad del campo argentino, que por momentos parecía sólo estar formado por productores agrarios, principalmente sojeros, de distinto tamaño. La diversidad nos pone frente a situaciones e historias contrapuestas y en conflicto que imposibilitan toda amalgama totalizante. El universo de lo rural, y lo rururbano, incluye realidades en tensión y en algunos casos mutuamente excluyentes. No hay forma, más allá de la retórica, de poner bajo el mismo rótulo a campesinos y pueblos originarios; pequeños productores que resisten al avance de la soja en detrimento de sus cultivos tradicionales; grandes *pools* de siembras y empresas dedicadas a los agronegocios; chacareros medianos y pequeños, contratistas rurales; fondos de inversión; etc. Ni siquiera la idea de que todos estos actores están vinculados con la tierra funciona como factor común, pues la conexión que con ella se genera también adquiere múltiples versiones que van desde lo mercantil a lo territorial.

En este trabajo mostramos como un aspecto fundamental que opera en el transfondo del conflicto agrario pero que no fue considerado ni por el gobierno ni por la ME fue y sigue siendo el modelo sojero, paradigmático de los agronegocios impulsados en el país. Nos pareció importante recalcar los elementos que conforman este modelo que, conjuntamente con otras actividades agrarias establecidas en años recientes – el de los *feed-*

lots, de la producción avícola, entre otras – forman parte del sistema de los agronegocios implantado en el país. Se trata de un modelo que genera grandes rentas "diferenciales a escala mundial" pero también grandes "deseconomías externas". Un modelo que, conjuntamente con la minería a cielo abierto y ciertas matrices energéticas –petrolera y biocombustibles, por ejemplo- constituyen casos emblemáticos de una actividad que sigue la lógica extractiva. Se trata de un proceso productivo que hace uso de, contamina, y saquea en gran escala los recursos naturales, entre los cuales se destacan algunos tan preciados y escasos como el agua, la tierra fértil para los alimentos, la biodiversidad, la yunga, los bosques, etcétera.

Teniendo en claro los puntos anteriores, abordamos el tema de los derechos de exportación o retenciones porque constituyó uno de los puntos nodales del conflicto agrario. En este marco, y tras analizar la eficacia y limitaciones de dicha política, varios factores nos permiten señalar que las retenciones – tal como son aplicadas en la actualidad - no producen necesariamente una efectiva redistribución del ingreso a favor de los sectores más vulnerables de la población. Para lograr este objetivo se requeriría – entre otros factores – una reforma global del sistema impositivo.

La falibilidad de esta medida fiscal no está en su "naturaleza" sino que se vincula con una serie de factores propios de la economía argentina contemporánea en general y de la estructura agraria en particular. El primero de estos factores es la gran concentración que existe en el comercio de cereales y el enorme poder que adquieren un puñado de grandes empresas. El despliegue de varios mecanismos, algunos de ellos considerados defraudatorios para con el fisco, permiten que las grandes empresas exportadoras se apropien de una parte substancial de las rentas. De esta manera, tanto el Estado como los productores pierden, uno porque ve disminuida su recaudación y los otros porque dejan de percibir de los comercializadores y exportadores en concepto de retenciones un importe superior al que efectivamente arriba al erario público. En definitiva, lo que dejan de percibir por su producción son importes que no son apropiados totalmente por el Estado sino que una parte importante queda en manos privadas.

A este factor, que muestra la apropiación por parte de ciertas empresas de dinero que el Estado podría utilizar con fines redistributivos, se suman otros puntos que afectan negativamente la capacidad de los derechos de exportación de incidir sobre el precio de los alimentos y consolidarse en el marco de una estrategia antiinflacionaria. Como detallamos páginas atrás, el avance del modelo de los agronegocios (cuyo cultivo estrella es la

soja) genera una serie de consecuencias que afectan, entre otras múltiples variables, la soberanía alimentaria y la disponibilidad de alimentos accesibles y nutritivos para el conjunto de la población. La concentración de la tierra y de su producción, la reducción constante de cultivos alimenticios, la creciente integración vertical al interior de estos complejos dominados por grandes empresas y los mercados oligopólicos en la comercialización, se erigen como algunas de las causas de la suba de precios de los alimentos en la coyuntura actual[44].

Asimismo, el avance del cultivo de soja destinado a la exportación parece no tener freno. Año tras año la superficie sembrada y la producción aumenta notablemente reforzando un modelo productivo asentado en el monocultivo. Las deseconomías externas del modelo se incrementan así como la vulnerabilidad externa de la economía. Se produce la perdida de la biodiversidad productiva y aumentan los peligros que entraña la pérdida del acceso de la población a alimentos sanos y baratos al desestimar la producción y el consumo local domésticos. Finalmente, los efectos ambientales adversos del modelo sojero completan el marco de un sistema generador de enormes "deseconomías externas" que, por cierto, no siempre son consideradas en los debates periodísticos y académicos sobre la materia. Si equiparamos con efectividad estos costos, incluyendo el sufrimiento humano que provocan, con los ingresos generados por un sector del agro, podría ponerse en cuestionamiento al modelo sojero propiamente dicho.

Reiteramos: queda en pié el debate en torno a las retenciones. Como señalamos en este trabajo éstas no constituyen en sí un sustituto de una reforma fiscal global que tome en consideración las necesidades de los sectores menos favorecidos de la población. En parte esto se debe a que las retenciones sobre la soja representan apenas el 7% de los ingresos fiscales totales, pero también debido a su carácter de impuesto indirecto, siendo proporcionalmente más oneroso para los pequeños productores que para los grandes. Hemos destacado que una retención uniforme para todos los estratos de productores es regresiva por cuanto los grandes propietarios se apropian de una proporción mucho mayor de la renta diferencial a escala

44 Es interesante destacar que el corriente brote inflacionario se vincula con el aumento de los precios alimentarios internos, inducidos por el aumento de los precios internacionales. El avance del modelo sojero, el retroceso de la producción de productos alimenticios en el país, su creciente orientación exportadora así como la concentración y centralización del capital a nivel de la industria y la comercialización de alimentos, como también el aumento de las tarifas públicas de las empresas privatizadas, constituyen otros tantos factores estructurales inherentes que inciden sobre el proceso inflacionario. Véase Teubal *Pagina 12*, 30 de diciembre de 2009.

internacional que la que perciben los pequeños y medianos productores. En cierto sentido corresponde segmentar el pago por los distintos tipos de productores y sus respectivas escalas productivas (agricultores familiares vs. empresariales, por ejemplo), si es que se tiene el interés en que la política impositiva global tenga alguna sustancia redistributiva de importancia. De ninguna manera –reiteramos– la política de retenciones sustituye una reforma impositiva de fondo según la cual "pagarían proporcionalmente más los que tienen o perciben más ingresos o riqueza".

Quizás una de las críticas fundamentales que se puede hacer al modelo sojero afín a lo que ocurre con otros modelos extractivos es que genera "deseconomías externas" de diferente naturaleza, que tienen que ver con la pérdida de la soberanía alimentaria y de la biodiversidad, la incidencia sobre la deforestación y el deterioro ambiental en sus diferentes manifestaciones.

Paro agrario: crónica de un conflicto alargado[1]

Norma Giarracca, Miguel Teubal y Tomás Palmisano

Introducción

Salimos de Buenos Aires en un clima social de tregua y eso nos aseguraba la posibilidad de atravesar una de las zonas agrícola-ganadera más rica del país hasta llegar a Santa Rosa en La Pampa. Nos había invitado la Universidad Nacional de La Pampa a debatir acerca del paro agrario y encontrarnos con productores de la zona. Tomamos la ruta 5, los cortes aparecieron en cuanto nos internamos en las zonas de tambo; en los trechos anteriores, en los campos ya no había soja y la cosecha fina aún no se había sembrado. Aun así, los "silo-bolsa" donde se almacena la soja, la moderna maquinaria agrícola y los locales y propagandas de empresas semilleras como SPS, Syngenta y Monsanto nos recordaba que estábamos atravesando una de las zonas donde primero se impuso la soja como producto de exportación.

En algunos puntos el paro estaba presente -productores conversando, los flamantes implementos agrícolas a la vera de la ruta, los carteles, etc.- pero recién nos atrevimos a parar en Chivilcoy, en un espacio importante entre las dos manos de la ruta. El corte lo organizaba una mujer de unos 40 años, eficiente, con papeles en las manos quien parecía tomar la decisión acerca de qué camiones pasaban o no: la consigna era detener los transportes de cereales destinados a la exportación y ganado en pie para faena. Con la guía de transporte en mano, la activista consultaba con los hombres y permitía o no el paso.

Mientras esta situación ocurría, sacamos algunas fotos y esta acción se convirtió en un error. Predispuso mal a los productores que reaccionaron con desconfianza hacia nosotros y nos pidieron alguna identificación. Mientras algunos buscaban nuestros libros (nuestras mejores identifica-

1 Este artículo fue publicado por la revista Realidad Económica N° 238 de 2008.

ciones) en el coche, otros permanecimos tratando de convencer a los productores de que éramos gente de la universidad que quería comprender la situación. Llegaron los libros, la mujer se desocupó e intervino en la conversación justificando la actitud descortés de los productores. La situación nos demostró (y enseñó) que no estábamos entrevistando productores en sus explotaciones -como tantas otras veces antes-, en situaciones normales y distendidas. Estábamos atravesando uno de los paros agrarios más largos y complicados que recordamos en nuestras carreras de investigadores de los estudios rurales. Había comenzado el 12 de marzo de 2008 por la firma de una resolución ministerial que subía la alícuota de retenciones a la producción de soja y girasol.

El conflicto y sus componentes

¿Qué caracteriza a este conflicto? ¿Existe la posibilidad de que bajo el lema "el campo" se pueda concentrar éstos y muchos otros sentidos de los cortes de ruta?

Este artículo se propone pensar esta cuestión. Comprender un poco más por qué uno de los periódicos paros agrarios de la Argentina se convirtió en un conflicto político que mantuvo en vilo al país durante muchos meses, alargándose como nunca antes en la historia del país. Antes de acercarnos a la caracterización del conflicto y una posible periodización, queremos dejar en claro algunas conceptualizaciones y planteos que han circulado en estos meses (no siempre correctamente).

Las entidades agropecuarias, a veces en conjunto, otras una o dos juntas, han reclamado por sus intereses económicos en la mayoría de los gobiernos del siglo XX. Lo han hecho en democracia pero también durante regímenes de facto, por ejemplo, en el gobierno de Juan Carlos Onganía, siendo ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena. Las entidades tienen experiencia y un largo ejercicio en los reclamos sectoriales de precios, bajas en los impuestos, tipo de cambio favorable a la exportación, etc. A poco del regreso de la democracia y después de la ominosa dictadura de los setenta, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) organizó, en marzo de 1985 un "camionetazo" contra la tibia política intervencionista del presidente Alfonsín; unos años después, en la exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA), "la patota ganadera" (como tituló la revista *El Periodista*, 1988) desató una fuerte silbatina al presidente de la Repú-

blica. En aquellos años, los ganaderos no encontraban formas claras de acercarse a los productores agrarios que ya se estaban entusiasmando con la soja (aún sin la semilla transgénica) y sus precios internacionales en alza. Tiempo después, el 19 y 20 de marzo de 1991, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) organizaron un paro con marchas por todo el país; el 2 y 3 de noviembre de 1992 la FAA, la CRA y la CONINAGRO pararon y movilizaron el interior; el 27 de julio de 1993 hubo un tractorazo y una marcha a la Plaza de Mayo convocado por la FAA, la CRA y la CONINAGRO; en 1994 hubo un fuerte paro agrario en el que, nuevamente, la única entidad que se diferenció fue la SRA dada la excelente relación con el gobierno menemista gracias a la privatización de los puertos y los estrechos contactos de los presidentes de la entidad con el secretario de Agricultura. A fines de los noventa nuevamente el "campo" llegó a Buenos Aires y en esos años el problema fundamental fue el peligro de los activos por el endeudamiento del sector (Higa, 2000). Es decir, el campo, sus entidades corporativas, salieron a reclamar sistemáticamente por sus intereses a lo largo de la historia argentina y el siglo XX se enfrentó con estas situaciones tanto en períodos democráticos como en dictaduras.

Sus reclamos se enmarcaron y enmarcan dentro de las acciones corporativas, pues sus demandas, de ser respondidas, favorecen a un sector social y no necesariamente al conjunto social. Esta es la primera distinción necesaria de realizar: el paro agrario se inscribe dentro de la tradición de las acciones corporativas que nada tienen que ver con los nuevos movimientos sociales alrededor de los recursos naturales. Mientras los primeros buscan satisfacer requerimientos sectoriales, los segundos buscan expandir derechos sociales como, por ejemplo, el cuidado de los bienes comunes, la reparación histórica de regresar los territorios a las comunidades indígenas, el logro de la soberanía alimentaria, etc.

Otra cuestión que es necesario aclarar son las retenciones o derechos de exportación como herramienta legítima del Estado para interceptar renta agraria. Esto se ha repetido incansablemente en los últimos meses pero muchas veces queda confusa la fundamentación de tal legitimidad. La renta agraria es un elemento fundamental de la "cuestión agraria", es aquello que hace particular (un problema) la producción en el campo y se basa en la participación, por ahora insustituible, del recurso tierra. En efecto, la tierra es un medio de producción básico en los procesos de producción agraria y, a diferencia de otros medios, no es una mercancía, pues no es

producto del trabajo humano. La tierra es un bien natural cuya apropiación en el capitalismo es condición de posibilidad para obtener no sólo una ganancia sino también una sobreganancia que en la teoría económica se denomina "renta". Pero si además esa tierra está ubicada en territorios con fertilidades superiores a la media mundial, no sólo existe la condición de posibilidad de una renta por propiedad, sino también por fertilidades diferenciales (Giarracca y Teubal, 2005). La Argentina es ejemplo en el mundo por la generación de renta agraria y todo su desarrollo como nación, se basó sobre un modelo agroexportador que la tuvo como pivote de enriquecimiento de las elites terratenientes muy relacionadas con las clases políticas dirigentes. Los gobiernos democráticos del siglo XX, sobre todo los gobiernos peronistas de 1945-55 y el corto período de 1973-1976, tuvieron políticas para interceptar esa renta o ganancia extraordinaria. En aquellos tiempos no cabían dudas de que la clase terrateniente agrupada en la SRA y la CRA formaban los actores clave del modelo agrario: con este sector se enfrentaba el Gobierno para producir la intercepción de la renta que se utilizaba para la industrialización del país.

En la actualidad la cuestión de las ganancias extraordinarias persiste. Puede discutirse si realmente la renta absoluta (por propiedad) sigue existiendo, pero no cabe duda acerca de la presencia de renta diferencial por fertilidad de los suelos en la producción de granos de la región pampeana. No obstante aparecen serias dudas acerca de cuáles son los actores agrarios que se quedan con las fabulosas ganancias y las sobreganancias del sector. A nuestro juicio, la conformación del modelo del agronegocio está en manos de nuevos actores económicos ligados con el negocio agrario mundial: empresas semilleras, grandes exportadores y fondos de inversión. Los viejos actores agrarios entraron como socios subalternos en el nuevo modelo[2].

2 En relación con este punto no hubo acuerdo en los debates de los últimos meses: algunos periodistas y economistas se empeñaron en considerar que los viejos propietarios son mayoritarios en la producción sojera y se les restó importancia a los "*pools* de siembra" (parte de los nuevos actores). Basaban ese razonamiento en que el 86% de los productores pampeanos están en la categoría "propietarios" y suponían que los "*pools* de siembra" son puros tomadores de tierra, es decir entran en la categoría "arrendatarios". Hay que aclarar que el censo de 2002 tomó por un lado "formas de tenencia" y luego una pregunta sobre "formas de gestión" donde aparecen los "*pools* de siembra". El censo nada dice sobre la forma de tenencia de los *pools* y por ahora no se ha realizado el cruce de esa forma de gestión con la variable de "formas de tenencia". La aseveración de que son los viejos propietarios los que se enriquecieron con la soja no tiene ningún sustento en los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002. Nosotros para decir lo contrario nos basamos en estudios de campo e información cualitativa. Pensemos por ejemplo que Gustavo Grobocopatel, quien forma parte de una de las empresas agropecuarias más importantes, es propietario de 20.000 hectáreas y arrienda el resto. Lo mismo pasa con los

Antes de iniciar la cronología del conflicto, marcando aquellos hitos que posibilitan una posible periodización, describiremos sucintamente el escenario agrícola de los últimos años y remitimos al lector, para una ampliación, a trabajos anteriores del equipo (Giarracca y Teubal, 2005). Nuestros interrogantes tienen que ver con el cambio de sentido que, a medida que avanzaron las semanas, va mostrando el conflicto y como esto está posibilitado por el juego político desarrollado por los actores implicados: Gobierno y las cuatro entidades corporativas.

Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo

No cabe duda de que al interior del agro argentino se produjo en los últimos tres lustros una extrema sojización de la producción, que a partir de mediados de los años noventa se basa en la aplicación de la semilla transgénica. El auge de la soja explica en gran medida el aumento de la producción agropecuaria en su globalidad durante este período. Por ejemplo, la superficie cultivada pasó de los 21,2 millones de hectáreas en la campaña 1994/95 a los 27 millones de hectáreas en 2001/02 y la oleaginosa representó el 95,5% de dicho incremento.

La soja es un producto de exportación por excelencia, no sólo por el aceite que se produce con ella, sino también porque sus subproductos -pellets, tortas, harina, etc.- forman el alimento balanceado privilegiado por Europa para alimentar a sus cerdos, aves y vacas. Más del 90% de la producción sojera se exporta; representando en el año 2007, 24,4% de las exportaciones totales del país. En materia de aceite se vendieron al exterior 4.275 millones de dólares, 5.762 millones por harina y pellets y 3.428 millones de dólares en porotos de soja. Todos estos productos sumaron 13.602 millones de dólares. Este auge de las exportaciones se debió no sólo a mayores volúmenes sino también a un alza importante de los precios de la soja.

En diversos sectores de la comunidad se aclama el boom de la soja para la evolución económica del país. Los economistas celebran su contribución

grandes usurpadores de las tierras indígenas y campesinas de Santiago del Estero y Salta, que son dueños de grandes propiedades de Córdoba y Santa Fe. (Esta nota es anterior al trabajo publicado en este libro "El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios" donde ya se logra dicho cruce).

al saldo positivo de la balanza comercial y fiscal, necesarios para pagar los servicios de la deuda pública y para cubrir necesidades presupuestarias de todo orden. De allí el impulso dado desde el Estado al modelo sojero. Gracias a las retenciones y otros impuestos, los gobiernos se transformaron en "socios" de determinados sectores agropecuarios, en particular de los grandes exportadores.

Los defensores del modelo señalan que el auge de la demanda internacional de la soja no debe ser menospreciada. Sea por la creciente demanda de China y de la India, o por la producción de los agrocombustibles, crece en el imaginario popular la idea de que "la soja nos va a salvar a todos", y se reclama que "no matemos la gallina que pone los huevos de oro". Asimismo, se menciona que se trata de un cultivo producido en base a "tecnología de punta", utilizando modernos sistemas productivos (la siembra directa, la doble cosecha, la semilla transgénica RR que es resistente al glifosato que mata toda las malezas, etc.). Estos temas son usados por los defensores del modelo sojero como argumentos de los beneficios del mismo y para remarcar que no debería ponérsele "trabas".

Sin embargo, la crisis actual puede vislumbrarse como una de las consecuencias de la extrema sojización, enmarcada en las políticas neoliberales desregulatorias que se vienen aplicado desde los años 1990 (acerca del decreto de desregulación del año 1991 veáse Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005). La crisis actual pone de manifiesto cómo aquellas medidas incidieron sobre la falta de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente al aumento fenomenal que han tenido en los últimos años los precios internacionales de la soja y de los otros *commodities*. Impulsados en gran medida por factores especulativos que se manifiestan en el mercado de *commodities* de Chicago, este alza de precios externos encuentra al país con pocos instrumentos efectivos para moderar su incidencia de esos precios externos sobre los precios alimentarios internos.

Estas liberalizaciones y desregulaciones dieron el marco a la consolidación de agentes económicos que inciden de sobremanera en la política agropecuaria y configuran lo que hemos denominado los "agronegocios". En él subyace el modelo sojero liderado por grandes empresas, semilleras y *pools* de siembra que juntamente con un reducido número de exportadoras y un importante componente financiero inciden fuertemente en la dinámica del sector agropecuario argentino. Son estos los sectores que conforman el modelo del agronegocio en el país. Si bien estos sectores tienen fuerte incidencia, no tuvieron necesariamente visibilidad en esta

crisis. En efecto, a diferencia de otros períodos, no se han presentado a las sesiones de las comisiones del Congreso sus representantes, que por otra parte, se mantienen con un bajo perfil en relación con los medios de comunicación.

Al margen de estos sectores están los medianos y pequeños productores, campesinos y comunidades indígenas, que conforman la gran mayoría de los productores agropecuarios del campo argentino. En el debate que se tuvo a lo largo de estos meses se extremó la dicotomía campo/gobierno, cuando en realidad "el campo" cobija a un sector altamente heterogéneo.

La atención puesta a los grandes actores fue en aumento, principalmente sobre las exportadoras lideradas por Cargill a causa de denuncias de maniobras para evitar el pago efectivo de las retenciones. Cargill en 2007 tuvo exportaciones por 4.094 millones de dólares, un aumento del 65% en relación con el año anterior. La segunda comercializadora de aceite más importante fue Bunge Argentina con exportaciones que en ese mismo año alcanzaron 2.692,6 millones, 31% más que en el año anterior. Asimismo, LCD Argentina (Dreyfus) exportó por 2.033,4 millones de dólares, más de 45% de lo que exportó en 2006. A la lista de grandes exportadores aceiteras y cerealeras se suman la Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentin y Nidera. Son firmas que exportaron en 2007 por un total de 14,5 mil millones de dólares, 26,6% de las exportaciones totales del país y se encuentran entre las 10 principales exportadoras (acompañadas por YPF Repsol, Minera Alumbrera, Tenaris Siderca). Las empresas son demandadas por el fisco por una presunta evasión de 650 millones de dólares por cereales y oleaginosas y 300 millones de retenciones no pagadas en las transacciones de aceites.

El modelo que impulsan estos sectores además de romper la soberanía alimentaria de la Argentina, destruye puestos de trabajo y debilita a los pequeños y medianos productores ya que mientras la soja genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas, la economía familiar crea 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. Esta situación se empalma con el hecho de que la soja demanda más de 500 hectáreas para que una unidad productiva sea viable y autosuficiente. Es en este contexto de debilitamiento de la situación de los trabajadores del campo y de la pequeña producción rural donde debe inscribirse el conflicto actual.

En el debate producido sobre las retenciones se pusieron de manifiesto los altísimos márgenes que genera actualmente la producción sojera, así como también algunos de los márgenes para el maíz, el trigo y el girasol.

Lo que no se tomó en cuenta fue la rentabilidad de los productores que no siembran soja, los tamberos, ganaderos de zonas marginales, e incluso productores de cultivos industriales del interior como por ejemplo los pequeños productores cañeros de Tucumán. A este gran conjunto del sector agropecuario no le ha ido tan bien en estos años. Muchos de ellos desaparecieron en el pasado o bien no se hallan en una situación tan holgada como pudiera creerse.

El des-orden del conflicto

La realización de una cronología, por más tentativo o embrionario que sea su carácter, requiere de una serie de decisiones teóricas e interpretativas que respalden la elección de determinados eventos entre la enorme variedad que el conflicto ha expuesto.

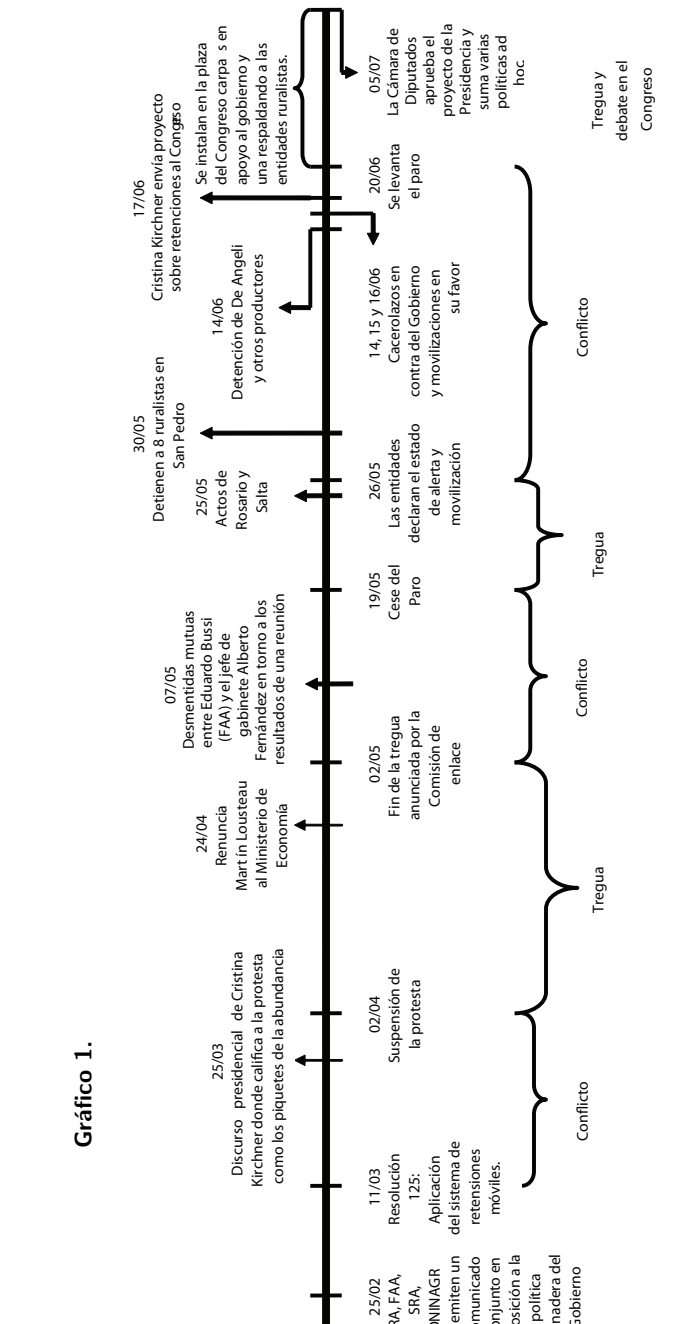
Una primera aproximación a su desarrollo podría ser representado en el Gráfico N°1.

En el gráfico N° 1 aparece un ordenamiento donde las barras que separan distintos períodos del conflicto responden a situaciones en que la Mesa de Enlace (ME)[3] anuncia paro o tregua que posibilite la negociación. Además, aparecen los actores sociales en conflicto ya que, desde nuestra perspectiva, es de central importancia comprender cómo éstos actúan para dar sentido a sus experiencias a través de una serie de representaciones, marcos de significación, entendimientos cognitivos y emocionales; lo que conocemos analíticamente como "la perspectiva del actor". Desde esta misma aproximación teórico-metodológica se puede caracterizar el conflicto como una "situación de interfase" marcado por las rupturas más que por las continuidades y de ese modo quisimos representarlo en el gráfico N° 1. (Long and Long: 1992)

Por otro lado, se puede reconocer a lo largo de estos días de conflicto una constante discursiva que atraviesa el escenario; una fuerte batalla simbólica en la que las partes en confrontación se interpelan constantemente dando como resultado la nominación de sus polos: "el campo" vs. "el Gobierno".

3 Espacio de decisión de las cuatro entidades agrarias: Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural (SRA). Si bien CONINAGRO, a diferencia del resto de las organizaciones, integra cooperativas cuyo fin es económico y no gremial, actúa de hecho como un sector gremial por el peso económico que ha alcanzado como entidad de tercer grado.

Gráfico 1.


25/02
CRA, FAA, SRA, CONINAGRO emiten un comunicado conjunto en oposición a la política ganadera del Gobierno
11/03
Resolución 125: Aplicación del sistema de retensiones móviles.
25/03
Discurso presidencial de Cristina Kirchner donde califica a la protesta como los piquetes de la abundancia
02/04
Suspensión de la protesta
24/04
Renuncia Martín Lousteau al Ministerio de Economía
02/05
Fin de la tregua anunciada por la Comisión de enlace
07/05
Desmentidas mutuas entre Eduardo Bussi (FAA) y el Jefe de gabinete Alberto Fernández en torno a los resultados de una reunión
19/05
Cese del Paro
25/05
Actos de Rosario y Salta
26/05
Las entidades declaran el estado de alerta y movilización
30/05
Detienen a 8 ruralistas en San Pedro
14/06
Detención de De Angeli y otros productores
14, 15 y 16/06
Cacerolazos en contra del Gobierno y movilizaciones en su favor
17/06
Cristina Kirchner envía proyecto sobre retenciones al Congreso
20/06
Se levanta el paro
Se instalan en la plaza del Congreso carpas en apoyo al gobierno y una respaldando a las entidades ruralistas.
05/07
La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de la Presidencia y suma varias políticas ad hoc
Conflicto
Tregua
Conflicto
Tregua
Conflicto
Tregua y debate en el Congreso

En ambas partes se reúnen posiciones o demandas diversas y por momentos antagónicas. En este sentido, fueron los dirigentes de las entidades ruralistas –Eduardo Buzzi, Fernando Gioino, Mario Llambías y Luciano Miguens- quienes primero sacaron ventaja, pues desde el inicio se presentaron como representantes de "el campo". Esta postura les fue muy beneficiosa pues cuanto más abarcativo y laxo es un concepto, mayor es la posibilidad de incluir en su significado posiciones heterogéneas. Tal como lo plantea Rubén Dri:

> "La lucha actual que diversos sectores contrapuestos de la producción agrícola y ganadera han entablado en contra de la política de retenciones llevada adelante por el Gobierno se expresa como la lucha del campo. Pero ¿qué es el campo? ¿Es el pequeño pedazo de terreno de 11 hectáreas que tenía mi padre y que desapareció bajo las aguas ocasionadas por la represa de Salto Grande? ¿Es la estancia correntina que tiene 11 mil hectáreas? . . .Si la lucha es la del campo, ¿quién puede oponerse? Todos defendemos el campo. El problema es que en esta lucha económica y profundamente política astutamente se ha recurrido a un símbolo que, como todo símbolo, recubre las fracturas, las contradicciones, los intereses contrapuestos. Al aceptar que la lucha es del campo, el Gobierno y, en general, la sociedad han perdido una batalla fundamental" (Dri, *Página 12*, 14/5/2008)

A medida que el conflicto se despliega, el significante "campo" comienza a integrar mayor cantidad de reclamos que abarcan, desde la suspensión de la Resolución N° 125 que fija las retenciones móviles hasta un cambio de modelo productivo; desde la revalorización de las instituciones estatales (Congreso, Poder Judicial) hasta la desvalorización de la imagen presidencial.

Los representantes de estos supuestos polos (gobierno-campo) se dedicaron a definirse mutuamente como antagónicos, como ese "otro" cuya presencia refuerza la identidad beligerante. En este juego político, subyace la creencia de que es fácil generar hegemonía si "el campo" es la "oligarquía golpista", productores que participan de "piquetes de la abundancia". En la vereda de enfrente, la búsqueda de adhesiones lleva a algunos a revitalizar el peligroso dogma según el cual el Estado debe retroceder y darle lugar al mercado: se argumenta que la administración pública ineficiente malgasta los recursos del país en diversas formas, poco federales y republicanas. Desde esta perspectiva se pierde de vista toda la heterogeneidad

del "campo" y todos los pliegues del Gobierno nacional, sus errores pero también sus aciertos (política de Derechos Humanos, por ejemplo). El peligro de la dicotomización es el solapamiento de los méritos y lógicas contrapuestas que se desarrollan al interior de un Gobierno y del Estado mismo, como así también de la enorme variedad de realidades productivas, culturales, regionales y sociales reducidas en el término "campo".

Post hoc, ergo propter hoc[4]

Desde febrero de este año (2008) comienza a vislumbrarse un estrecho acercamiento entre las cuatro entidades ruralistas más influyentes de la Argentina (CRA, FAA, SRA , CONINAGRO) en torno del tema de los precios de la carne, sentándose el antecedente de una vinculación que pocos días después adquirirá una central relevancia. Sólo de esta manera es posible comprender la rápida respuesta frente al anuncio del 11 de marzo cuando el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, puso en marcha un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo.

En la medida se desarrolla una estructura de valores móviles para los siguientes cuatro años, según la cual las alícuotas de las retenciones se ajustan automáticamente. Para la soja y el girasol regirán subas: en el primer caso pasará del 35% al 44,1% en promedio; mientras que las retenciones para el girasol subirán de 32 a 39,1 %. Las que bajan son las retenciones al trigo (pasan de 28 a 27,2%) y al maíz (van del 25 al 24,2% en promedio). Según lo anunciado, la alícuota será en lo sucesivo fijada día por día, de acuerdo con la evolución de los precios. Lo mismo sucederá con los demás cultivos y subproductos: si la cotización sube, sube el impuesto y viceversa. Lousteau justifica los incrementos de las retenciones en la necesidad de proteger el mercado interno de la suba de los precios internacionales de alimentos y, es importante destacar, también menciona que "hay que detener la sojización, que compite con producciones que queremos aumentar, como carnes y leche entre otros" (Trama del Conflicto, GER, 2008[5]).

Es importante focalizar en algunas particularidades de la situación inicial del conflicto, que permitirán comprender la rápida adhesión de gran

4 "Después del hecho, por lo tanto debido al hecho". Sentencia que resume la falacia lógica de afirmación de consecuente.

5 Terminada y publicada en este libro

parte de los "chacareros"[6]. Las retenciones tuvieron inmediata repercusión sobre los productores pues la comercialización de la cosecha gruesa aún no había comenzado y esta suba de las alícuotas menguaría casi 10% el precio de venta. Además, condiciones climáticas desfavorables afectaron buena parte de la pampa húmeda produciendo una reducción de las productividades. Por último, y no por ello menos importante, en este primer momento, el carácter indirecto de la gravación impositiva de las retenciones, no fue atenuado por ninguna política compensatoria y, de este modo, se afectó con mayor intensidad a los pequeños y medianos productores. Como es sabido, la estructura de costos y la sensibilidad frente a cualquier modificación de los márgenes de ganancia, son mayores a medida que las dimensiones de la explotación se reducen.

Cuando el anuncio fue hecho público, los dirigentes de la CRA, la FAA y la SRA estaban reunidos en la Cámara de Senadores para discutir con la oposición acerca de la política agropecuaria, por lo cual la medida fue considerada por ellos como una provocación por parte del Gobierno. Frente a este panorama, las relaciones entre las corporaciones ruralistas se estrecharon y habilitaron una rápida respuesta. El día 12 de marzo anunciaron la no comercialización de granos y comenzó una escalada de confrontación con el Gobierno nacional que, como sostuvimos anteriormente, mantuvo algunas constantes, más allá de matices y reconfiguraciones.

Los ruralistas buscaban ampliar la base de apoyo y la legitimación de la protesta refiriendo al "interés general". Este argumento está presente a lo largo del primer período apelando al bienestar de los pueblos y ciudades del interior; a que "el país está dejando pasar una oportunidad histórica"; a su rol como garantes de la soberanía alimentaria, etc. Más allá de algunos momentos de relativa calma, la conflictividad en este tramo va *in crescendo*.

El 27 de marzo, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner pronuncia un conciliador discurso que afloja las tensiones. Hasta ese momento el denominador común fue un fuerte enfrentamiento verbal con las entidades y el constante recrudecimiento de los piquetes, marchas, tractorazos, desabastecimiento en varias regiones del país. Se refuerza, además, una identidad que parecía primar en muchas de estas manifestaciones: los autoconvocados. Es paradojal que uno de los referentes signifi-

6 En nuestro país se denomina coloquialmente "chacarero" al productor familiar capitalizado que proviene de la tradición de lucha y producción que tuvo como momento fundacional el Grito de Alcorta de 1912.

cativos de estos "autoconvocados" sea Alfredo De Angeli, dirigente de la FAA.

A pesar que algunas referencias desde el Gobierno pretendían realizar una diferenciación al interior del "campo", las lecturas públicas de ministros, líderes alineados con el oficialismo e incluso la Presidenta subestimaron el conflicto e insistieron en relacionarlo con jugadas políticas de distintos sectores. El punto culminante de esta situación es el discurso de Cristina Kirchner del día 25 de marzo, cuando se acuñó la frase "piquetes de la abundancia". La respuesta es inmediata y se registró tanto en la Capital Federal como en varias urbes de las provincias, cacerolazos espontáneos, bocinazos que, una vez más, denotaban disconformidad con la respuesta del Gobierno nacional al campo. Simultáneamente con la concurrencia de los porteños díscolos a la Casa de Gobierno, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D´Elia, principal defensor en las calles de la postura gubernamental, ocupa la Plaza de Mayo argumentando la tradición peronista del histórico lugar.

El 27 de marzo la Presidenta convoca al diálogo y tras algunas negociaciones, el 2 de abril la ME anuncia la suspensión de la protesta y una tregua de un mes para trabajar conjuntamente en un paquete de políticas para el sector agropecuario.

La tregua y las vísperas. . .

La primera etapa trajo consecuencias y ambas partes del conflicto las analizaron. Por un lado la ME formula varias declaraciones que denotan la preocupación por la pérdida de sustento en los sectores urbanos, a causa del desabastecimiento. Este punto permanece latente a lo largo de todo el conflicto y se manifiesta a la hora de decidir el regreso a las rutas. Del lado del Gobierno, se busca segmentar las escalas de producción, principalmente separando a los pequeños y medianos productores de los grandes. En esta orientación se procede al avance de las medidas compensatorias a pequeños productores y la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Agricultura Familiar.

La tregua había comenzado a inicios del mes de abril pero no fue hasta el día 11 de ese mes que los dirigentes y técnicos de las entidades fueron recibidos por el Gobierno. Aun así, una semana después se logra el primer acuerdo que gira en torno de la ampliación sustancial de las exportaciones

de carne y la liberalización de los embarques de una categoría de vacas que no se consume en el mercado interno ("la vaca de conserva").

Es necesario mencionar que en esta etapa gravita negativamente la presencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tanto en el proceso de negociación, como finalmente en precipitar la caída de Martín Lousteau. Este ministro es reemplazado por Carlos Fernández dándose un giro que parece destrabar algunas disputas y muestra progresos en las negociaciones. No obstante, el cumplimiento del mes de tregua anunciado por la ME, encuentra las discusiones empantanadas en torno de las retenciones a las exportaciones de soja, girasol y trigo. Si bien para el día 6 de mayo los productores no han regresado completamente a las rutas y las conversaciones continúa, un entredicho mediático que involucra al titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumenta la tensión y culmina con la ruptura del diálogo en esta etapa. Ese mismo día, la ME anuncia las nuevas medidas de protesta.

En este nuevo ciclo del paro agropecuario se incrementan los piquetes y distintas manifestaciones públicas, pero a la vez se buscan otros canales de presión. Los políticos locales se convierten en el blanco de las interpelaciones tanto de los dirigentes ruralistas como de los "autoconvocados". En este período empiezan a gravitar en el escenario del conflicto los políticos de la oposición, en la mayoría de los casos, con postura crítica frente la política oficial. Por otra parte, los gobernadores e incluso el Congreso Nacional, que se habían mantenido al margen hasta ese momento, también comienzan a tener un rol mucho más activo con apoyos explícitos a uno u otro grupo.

Son muy pocos los actores que plantean alguna otra mirada del conflicto, y quienes lo hacen no pueden obtener la suficiente presencia en el espacio público pues el escenario de polarización socaba y/o solapa la mayoría de las posturas que intentaron mostrar las consecuencias negativas del modelo del agronegocio o lecturas críticas del comportamiento del Gobierno. La lógica del contexto parece obligar una fijación de postura a favor de una u otra fracción.

Nuevamente, un cambio en el tono y contenido del discurso presidencial descomprime la situación. En efecto, el 14 de mayo en un acto del Partido Justicialista la presidenta interpela "a todos los argentinos, sin distinción de banderías ni pertenencias, a debatir y discutir en un marco democrático para profundizar la transformación y el crecimiento". De este modo la medida de fuerza se interrumpe el 20 de mayo a la medianoche

aunque continúa la idea de realizar un acto con motivo del aniversario de la Revolución de Mayo en Rosario, cuestión que preocupó notablemente al Gobierno.

Salta y Rosario: en busca de un Mayo federal

El periodo está signado por los preparativos y puesta en escena de los actos del 25 de mayo y por un fuerte debate en torno de las retenciones dentro del proceso de negociación. El Gobierno fija rápidamente su posición en relación con las retenciones afirmando que las discutirían sólo en lo referente a los mercados a término[7]. Asimismo reafirma que no se modificaría el sistema móvil, y que una de las posibilidades para mantener los mercados a futuro se basa en poner límites al porcentaje con que el Gobierno se quedaría, si el precio de la soja alcanzara los 600 dólares la tonelada. Al parecer, los integrantes de la ME habían aceptado negociar un conjunto de medidas creadas *ad hoc* para corregir algunas de sus consecuencias, sin embargo una de las principales reuniones falla y el conflicto vuelve a hacerse sentir con nuevos cruces en los medios de comunicación. En este contexto de debilitamiento del diálogo, muchos dirigentes opositores de todos los espectros políticos confirmaron su presencia en el acto del 25 de mayo en Rosario.

Los actos del 25 de mayo

El acto de Rosario es masivo y heterogéneo; los números de asistentes oscilan entre las 170.000 y 300.000 personas. Concurren vecinos de diferentes barrios de Rosario, chacareros de distintos tamaños procedentes de todo el país, jóvenes de la Federación Agraria que pedían "reforma agraria ya", grandes productores, los movimientos piqueteros liderados por Raúl Castells y Juan Carlos Alderete y hasta llegó Darwina de Galicchio, una Abuela de Plaza de Mayo que adhería al reclamo de los pequeños productores. También están presentes muchos políticos opositores aunque no se les otorga lugares en el palco. Sólo hablan los cuatro representantes de la ME y un personaje que con el correr de los días aumenta su popularidad: el dirigente entrerriano Alfredo De Angeli. Con él en el escenario se su-

7 Se llaman mercados a términos o mercados a futuro aquellas transacciones en que se fija un precio a pagar en un futuro, que puede ser mayor o menor al presente.

ponen representados los "autoconvocados". Los discursos son acalorados, y los de la FAA, particularmente duros con el Gobierno. Es importante tener esto en cuenta ya que será la razón de una nueva y difícil ruptura de partes en el conflicto.

El acto oficial ocurre en el norte del país, más específicamente en la provincia de Salta, y tiene una convocatoria que, según las fuentes, oscila entre las 20.000 y las 150.000 personas. A diferencia de las alocuciones del acto de Rosario, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner es conciliador y evita menciones directas al conflicto y sus partícipes, resaltando que "antes que los intereses de sector o las individualidades están los intereses del país, de la patria". También habla el joven gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y es de resaltar que en ambos discursos hay una amplia enumeración de actores sociales pero ninguno nombra a las comunidades indígenas, en una de las provincias donde éstas se concentran. Como sostiene la teoría de la colonialidad, una vez más fueron invisibilizados a pesar de la presencia de wipalas (banderas indígenas) en uno y otro acto. No obstante este grave olvido, llegaron por sus propios medios, sectores populares de las afueras de la ciudad de Salta para conocer a la Presidenta.

Se desatan las furias. . .

El día lunes el Gobierno decide suspender una reunión prevista con los ruralistas y algunos de los integrantes del Gabinete retoman las actitudes de confrontación, instando nuevamente a la polarización[8]. Además, en un duro documento, el Partido Justicialista acusa a las entidades del agro de estar impulsando un "ataque antidemocrático con ánimo destituyente y falta de respeto a la voluntad popular"; se califica las protestas como "lockout salvaje e interminable"; se les reprocha invocar el diálogo cuando "simplemente desacreditan o conciben a las autoridades electas como un obstáculo"; se critica duramente los discursos de Alfredo De Angeli y Eduardo Buzzi y, a la vez, se defienden las retenciones como un instrumento válido y legítimo del Estado para impulsar la redistribución del ingreso.

8 En este sentido son un claro ejemplo las declaraciones del ministro de Planificación Julio De Vido quien advirtió que "no es hora para tibios" y agregó que "aquellos que están a favor del modelo deben decirlo porque ahora el que no suma resta".

Frente a este escenario, la dirigencia agropecuaria redobla la protesta ratificando el paro en la comercialización de granos con destino a exportación y sumando la interrupción en el envío de hacienda para faena al Mercado de Liniers. Además refuerza la estrategia de llevar el tema al Parlamento con el objeto de lograr por la vía legislativa sus objetivos y a la vez reclama la inclusión de más actores en el debate (Iglesia, partidos políticos, líderes locales, jueces, etc.).

Durante este nuevo período los canales de diálogo están más obturados que nunca, las declaraciones miden poder y posibilidades de imponerse. El primer momento de fuerte tensión ocurre hacia fines de mayo, cuando la Prefectura arresta a 8 manifestantes de San Pedro con la venia del fiscal Juan Murray. La medida la adopta el juez Villafuerte Ruzo en el marco de una causa por delitos de obstrucción de caminos federales y quema de pastizales. Esta medida revierte el proceso de socavación de consenso que estaban sufriendo las entidades ruralistas, que vuelven a cerrar filas más allá de las diferencias internas. Es una coyuntura de desgaste del Gobierno pues las detenciones incluyen ruralistas y políticos de oposición.

Estos eventos activan nuevas oposiciones al Gobierno: cordobeses como Juan Schiaretti y Juan Manuel de la Sota, y en menor medida el entrerriano Jorge Busti, el santafesino Carlos Reutemann y el bonaerense Felipe Solá. A esto se suma la fuerte preocupación de los políticos locales y provinciales del oficialismo por el debilitamiento de sus bases de apoyo rurales.

La ME busca aperturas y diálogos con otros actores sociales, aprovechando estos momentos de debilidad gubernamental. Por un lado, pide la mediación del Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino (el Gobierno responde que no accederá a participar en esta instancia). Por el otro lado, busca atenuar los cortes de ruta combinando la no comercialización de granos con algunos cortes esporádicos. Sin embargo, algunos grupos comienzan a adquirir autonomía y a desoír las decisiones de la ME; el ejemplo más claro es Gualeguaychú donde la asamblea de autoconvocados intensifica las medidas de protesta.

Hacia mediados del mes de junio, se produce un vuelco inesperado en la postura del Gobierno pues se anuncia que despejarán las rutas con el uso de la fuerza pública y el sábado 14 de junio es detenido el dirigente entrerriano Alfredo De Angeli junto con otros 30 productores. Esta medida genera una serie de manifestaciones de oposición que se intensifican a lo largo del día en muchos pueblos, rutas y rotondas y son contestadas

desde el oficialismo con una convocatoria esa misma noche a la Plaza de Mayo. Allí asisten piqueteros oficialistas con consignas que refieren erróneamente a la Constitución para justificar una potencial violencia, ministros, secretarios de estado y hasta el propio Néstor Kirchner. El costo político de esa noche se registrará dos días después con el cacerolazo del 16 de junio.

El lunes 16 de junio se organiza a través de correos electrónicos y mensajes de teléfonos celulares, un cacerolazo que dura un par de horas en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca. Esa acción está colmada de diferentes significados. Los "caceroleros" entrevistados por nosotros, aducen: "simpatías a la gente del campo"; "fastidio por la soberbia presidencial"; "fastidio por la actitud del ex presidente que no deja gobernar a su esposa" hasta problemas no atendidos de "salud, hospitales, educación, corrupción". En el "cacerolazo" de Cabildo y Juramento la mayoría de los entrevistados habían votado al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en las elecciones locales, una minoría a Elisa Carrió, y atravesando el voto en la ciudad, un 40% había votado a la presidenta en las elecciones nacionales. Pero todos demuestran un fuerte fastidio con la modalidad de Gobierno del matrimonio presidencial.

El escenario del conflicto muestra una tirantez y tensiones que, sin dudas, preocupa a la mayoría de la población. Los ruralistas lanzan nuevas medidas de fuerza mientras el Gobierno prepara un gran acto para el miércoles 18 de junio en la Plaza de Mayo. Pero el día anterior, tal como ocurrió cada vez que el conflicto se tensiona, la Presidenta descomprime la situación y acerca posiciones; más tarde que temprano, anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley con el cual busca legitimar por medio del Poder Legislativo el esquema de retenciones móviles.

La marcha del día 18 es masiva, con muchos colectivos de intendentes y gobernadores provinciales, pero también con muchos independientes, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. El evento tuvo que lamentar la muerte de un joven tucumano, por un desgraciado accidente que luego despliega y visibiliza las operatorias políticas de intendentes y concejales: según familiares y amigos, el joven Carlos Marreiro había recibido 200 pesos por viajar al acto (dos semanas después, el 9 de julio muere otro tucumano en su propia provincia en presencia de la Presidenta).

La etapa institucional

Este anuncio de llevar el conflicto al Congreso Nacional sorprende a la ME que, de todos modos, mantiene la protesta hasta el día 20 a la noche. Comienzan las reuniones con los legisladores para poder abrir el debate, pues el texto oficial se limita a ratificar el esquema de retenciones móviles. Los ruralistas solicitan que el proyecto se abra para que surjan modificaciones de consenso. El primer artículo del proyecto de ley es la ratificación de la resolución ministerial que originó el conflicto.

El debate dura cerca de 20 horas y es rico en posiciones, fundamentos de los votos, fuertes denuncias que cayeron en el vacío (véase Giarracca y Teubal, *Página 12*, 9/7/08). Es interesante señalar que el bloque oficialista contó con aliados de la oposición y que ésta tuvo entre sus filas a diputados del Frente para la Victoria (la fuerza política dirigida por Néstor Kichner). El proyecto de ley mantiene la resolución pero introduce un sistema de compensaciones a los pequeños productores de soja y girasol con un plazo marcado en el mismo texto (31 de octubre de 2008).

El proyecto es aprobado por los diputados con 129 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones. Después de dos semanas en la Cámara de Senadores con ricas discusiones, el 16 de julio el proyecto es rechazado por un voto de desempate del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Ing. Julio César Cobos. Dos grandes marchas en la ciudad de Buenos Aires habían coronado un día antes el ciclo de movilización en las calles y nuevamente el campo y sus aliados le habían ganado numéricamente al acto oficial.

Algunas pistas para una interpretación del conflicto

El conflicto es un componente de fundamental importancia en la sociedad y es el que, además, marca las dinámicas de las transformaciones. Pero no todo conflicto o expansión de la conflictualidad social conlleva una transformación política significativa orientada a una mayor democratización. Es decir, sólo algunos conflictos son los que permiten democratizaciones, expansiones de derechos, cambios de rumbo que modifiquen la gramática del orden existente. A nuestro juicio, el conflicto entre el campo y el Gobierno no entra dentro de esta categoría.

Fundamentamos esta conclusión en los actores que el Gobierno afectó con su resolución ministerial, son productores capitalistas que juegan un papel subordinado dentro de la cadena agroindustrial sojera. El proyecto de ley remitido al Parlamento no afectaba a los agentes económicos que pivotean dicho espacio: empresas exportadoras, fondos de inversión, corporaciones de semillas y agroquímicos. Sólo gravando y limitando la expansión y concentración de esos sectores habría, a nuestro juicio, transformaciones democratizadoras en el complejo oleaginoso argentino y en el agroindustrial en general.

El Gobierno se jugó a dos operaciones políticas: polarizar la sociedad y simbolizar en la SRA un actor poderoso, mayor responsable de la captación de ganancias y rentas, dentro de una vieja consigna de los setenta "la vieja oligarquía". Trató hasta último momento de sacar de escena a estos otros grandes actores, verdaderos esquilmadores de nuestras riquezas y del trabajo incorporado en ellas. Lo que sucedió con esto, a nuestro juicio, es muy complejo y difícil de interpretar aún, pero arriesgaremos algunas ideas. Por un lado, la consigna "vieja oligarquía" es de utilidad ("hace sentido") en la generación del matrimonio presidencial y las que siguen hacia arriba pero no en la gran mayoría de personas de hasta 50 años (de menos de 20 años en 1976) quienes están mucho más acostumbrados a las consignas políticas como "la patria. . . ." (sindical, contratista, ganadera, etc.). En segundo lugar, los dirigentes de la SRA, a diferencia de los años sesenta y setenta, aparecen como capitalistas argentinos preocupados por sus producciones y por el país, con razonables discursos y sin aquellos deslizamientos antidemocráticos de los años de 1970. Las consignas de los "intelectuales oficialistas mediáticos" refiriendo a la "oligarquía golpista" queda sin referencias empíricas. Sólo opera en los que ya estaban convencidos de la responsabilidad histórica de este sector social y lo consideran, por otro lado, inamovible, sin cambios.

Por otra parte, muy poco énfasis tuvo el hecho de que los contrincantes en este conflicto de ningún modo eran instituciones semejantes: era el Estado frente a cuatro corporaciones económicas que no tienen atributos semejantes al primero. Ni el Gobierno ni sus intelectuales mediáticos, a nuestro juicio, se ocuparon seriamente de este punto. No supieron densificar la legitimidad del actor "Gobierno" y esto se visualizó, también, cuando el Partido Justicialista desplazó al ejecutivo en el diálogo con los ruralistas, o los gobernadores fueron ubicados como voceros de un partido político. Sumemos a estos errores la desmedida intervención del

ex-presidente hablando en nombre de la presidenta-esposa (con tono paternalista) así como la competencia desmedida entre marchas, carpas y la disposición del escenario, en el último acto del 15 de julio, a espaldas del Congreso. Todas estas equivocaciones, a nuestro juicio, colaboraron para que el Gobierno, antes de perder la votación en el Congreso de la Nación, perdiera una batalla de sentidos que la política institucional no debe subestimar. Batallas de sentido, que para ganarse, necesitan aptitudes políticas (que no ponemos en duda) pero también muy buena información acerca de la sociedad que se gobierna.

Volvamos a los apoyos. Durante la década de 1990, los pequeños y medianos productores endeudados o en pésimas condiciones productivas, habían llegado varias veces a las ciudades provinciales y hasta a la ciudad de Buenos Aires. Basta con ejemplificar la repercusión mediática de la Mujeres Agropecuarias en Lucha y sus dramas de tierras hipotecadas. Los citadinos supieron de la recuperación de estos sectores y la experimentaron simultáneamente con sus propias recuperaciones desde 2002. Era muy difícil convencerlos de que estaban acaparando ganancias extraordinarias (esto fue un tema reiterado en los entrevistados en los cacerolazos).

Los dispositivos comunicacionales del Gobierno no cubren positivamente la franja de población a las que el Gobierno aspiraba. El "campo", entonces, apropiado de símbolos significativos, contrarresta positivamente aquella acción y les gana la batalla mediática. El nivel de descrédito de la medida gubernamental en las ciudades, incluida Buenos Aires, fue muy importante y la imagen presidencial bajó.

¿Qué pasa con los sectores populares urbanos, base electoral significativa de la elección presidencial? Es difícil saberlo, pues no existen estudios que den cuenta de sus cambios políticos desde sus propias vidas y experiencias y nosotros, como investigadores de los mundos rurales, no conocemos tales espacios. Sin embargo por lo que se puede inferir, no resultaron interesados en los debates y no hay ninguna evidencia de movilización autónoma en esta coyuntura. Sin introducir el tema del clientelismo político, se puede sostener que quienes llegaron a las movilizaciones lo hicieron en vehículos financiados por los intendentes. No hubo ninguna manifestación popular al margen de estas convocatorias presidenciales y organizaciones de aparatos políticos. A nuestro juicio, no hubo demostración de apoyo pues el debate les es ajeno y por otro lado, porque hace mucho tiempo que estos sectores se sienten al margen de una política que, evidentemente, los

asiste pero no los incluye como ciudadanos (pensemos en los transportes públicos, los hospitales, las escuelas, los estados de los barrios, etc.).

Mientras tanto los campesinos y las comunidades indígenas se reunieron, se organizaron en federaciones, debatieron, publicaron artículos y declaraciones en el diario *Página 12*, demostrando el entrenamiento de activismo que han desarrollado en todos estos años, justamente, en contra de los inversores sojeros que ponen en peligro constantemente sus producciones, sus territorios, sus bosques nativos, sus yungas y sus mundos de vida. Incluso, en el conjunto de carpas que colocaron frente al Congreso Nacional estaba presente una Comunidad Kolla de San Antonio de los Cobres reclamando por sus tierras.

En estos meses circuló mucha información y la población argentina tuvo a su alcance las herramientas básicas para acercarse a comprender una gramática de poder que generalmente queda oculta en los pliegues de la sociedad. No obstante hubo mucha crítica al papel de los medios de comunicación por el modo de procesar la información y, sobre todo, por el modo discriminatorio de caracterizar la diversidad de sujetos sociales partícipes en el conflicto. Pero también eso se puso en debate y no es poca cosa.

Por último creemos que esta coyuntura, signada por un conflicto no productivo en términos de resoluciones democratizadoras, abre una serie de grietas en el orden económico, específicamente en el complejo agroindustrial -con sus cadenas de grandes sojeros, financieros, exportadores, etc.- que pueden ser aprovechadas por las organizaciones sociales que desde hace décadas luchan por una distribución de la tierra, por la soberanía alimentaria, por el respeto a los bosques nativos, las yungas, las cadenas montañosas con sus ricos minerales, por el agua, los ríos. Además, y esto es importante remarcarlo, aparecieron discursos con fuerza política en el Congreso y debates que abren la esperanza de una democracia que pueda lograr sus cometidos esenciales: el bien común y no la garantía de las ganancias de unos pocos.

Expansión sojera y paro agrario. Reflexiones para comprender el 2008 y 2009 en la Argentina

Norma Giarracca y Tomás Palmisano

El conflicto que sostuvo el Gobierno de Cristina Fernández y las entidades ruralistas nucleadas en la Mesa de Enlace [Confederación Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA)] durante los meses de marzo a julio de 2008 fue un acontecimiento político, económico y social de significativa importancia. Se pueden registrar innumerables detalles de este escenario que han sido invisibilizados o reinterpretados por los múltiples actores involucrados. Desde los agricultores a los "intelectuales", tanto los críticos como aquellos orgánicos al Gobierno y nucleados en Carta Abierta, todos hicieron sus respectivas lecturas sobre el conflicto.

Nuestra propuesta es enmarcar este paro agrario dentro de un modo de acumulación agrícola que se encuentra en notable expansión y consolidación en gran parte del mundo rural argentino: el modelo sojero. En este contexto, el sector financiero adquiere notoria importancia al convertirse en uno de los factores centrales y sus vaivenes afectan las configuraciones del sector agropecuario. Es por ello que un análisis exhaustivo de las condiciones financieras nacionales e internacionales, tanto al momento de estallar el conflicto como en los momentos críticos actuales, aportan posibilidades interpretativas del paro agrario, su desarrollo y el panorama actual.

Marcado el contexto macro-institucional, es importante tener en cuenta que los actores no se encuentran completamente condicionados por él ya que sus percepciones y decisiones a la hora de actuar tienen consecuencias sobre el contexto. La construcción de una determinada realidad les permite elegir entre las múltiples opciones que tienen a su disposición, convirtiendo ciertas acciones circunstanciales en factores fundamentales a la hora de definir varias de las aristas del conflicto. Por ello, creemos que

una reconstrucción de las disputas que afloraron en el período se convierte en una vertiente indispensable a la hora de contar con una comprensión ampliada del acontecimiento. En este sentido, el accionar de la Mesa de Enlace (ME), las políticas adoptadas por el Gobierno, las reacciones de los partidos políticos y otros sectores de la sociedad adquieren un rol explicativo central.

Junto a estos análisis proponemos una reflexión sobre los conceptos que utilizamos, continuando con un delineamiento de los escenarios financieros que condujeron al conflicto, una descripción de los acontecimientos y finalizaremos con algunas ideas sobre la situación actual en el marco de la crisis mundial.

Conceptualización del conflicto

En primer lugar caracterizamos los conflictos de la primera parte del año como "paro agrario" y nos oponemos a denominarlo con el innecesario anglicismo de *lock out* patronal. Utilizamos el concepto "paro" pues esa ha sido la forma en que históricamente se denominaron a los procesos de reclamos similares. Igualmente, existe una fuerte tradición de la ciencia política que respalda esta elección semántica. Tiziano Treu haciendo referencia a las relaciones industriales, define al paro como un comportamiento distintivamente empresarial, que sería la cara opuesta de la típica acción de protesta de los trabajadores: la huelga. El autor nos dice que "el objetivo común de todas las formas de paro es, por lo demás, el de poner al empresariado en una posición más ventajosa ante los trabajadores comprometidos en la controversia" (Treu, 2002:1135). En nuestro caso, el conflicto con los asalariados es reemplazado por el enfrentamiento al Gobierno por causa de una política pública.

Durante todo el siglo XX hubo este tipo reclamos de los agricultores que se hicieron aún más frecuentes después del retorno a la democracia en 1983 (véase Giarracca, Teubal y Palmisano, 2008). Fueron "paros agrarios" cortos donde o bien las entidades arreglaban con los organismos pertinentes o aún sin satisfacer completamente sus reclamos regresaban a sus explotaciones. Sin embargo en el paro del 2008, por primera vez, los reclamos duraron tanto tiempo, sin que se solucionara en los niveles institucionales pertinentes. De hecho hasta ese momento las relaciones entre Gobierno y "campo" eran buenas y de cierta "aparcería" económica por lo que las retenciones agrarias habían representado en los años precedentes

durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, los arreglos institucionales fallaron, el discurso presidencial el 25 de marzo se politizó y se buscó colocar el conflicto en el espacio público. Parte de los dispositivos del Gobierno para deslegitimar el reclamo agrario fue la caracterización de *lock out*, aludiendo con él a sectores propietarios que ganaban mucho dinero y se presentaban "insolidarios" frente a la sociedad. Varios medios, periodistas e intelectuales "orgánicos" tomaron esta caracterización para fundamentar la posición binaria que el Ejecutivo proponía: campo (empresarial, oligárquico, etc.) contra Gobierno (progresista, redistribuidor, etcétera).

Así como retomamos la caracterización histórica de "paro agrario" (frente al de *lock out* patronal), debemos distinguir claramente qué tipo de acciones se propusieron los agricultores, ya que algunos partidos de centro-izquierda llegaron a hablar de "un movimiento social". Para nosotros, las acciones básicas de un movimiento social (MS) son las acciones colectivas que suponen no sólo un cierto nivel de identidad común y solidaridad, sino también una propuesta que supere demandas netamente sectoriales. Cuando los reclamos buscan beneficios o privilegios para determinado sector, estamos en presencia de "acciones corporativas" y no consideramos adecuado sostener que éstas constituyen la base de un MS. En nuestro caso, no se necesitan muchos fundamentos teóricos para comprender que estamos frente a acciones corporativas (era sólo un sector dentro del campo mismo los que supuestamente se perjudicaban con la medida). Con el correr de las semanas se fue dando un gran movimiento gremial corporativo del agro acompañado por otros actores como partidos políticos y poblaciones que más que apoyo al "campo" se oponían al Gobierno. La mayoría de nuestros entrevistados durante los "cacerolazos" centraban sus críticas en la voracidad recaudatoria del Gobierno y en la sospecha de que ese dinero no se destinaba a fines sociales. No obstante esto, no se registraron explícitas manifestaciones políticas destituyentes y lo que se demandaba estaba en relación con el reclamo del "campo". Se apoyaba el pedido sectorial por distintas y variadas razones sin que la oposición política se hiciera totalmente explícita. Fue más fácil encontrar afirmaciones del tipo "que la presidenta se vaya" en algunos cortes de ruta del corazón sojero, que en los políticos opositores. Del mismo modo hubo más deslizamientos antidemocráticos entre los representantes de los pequeños y medianos productores (Bussi y De Angeli de FAA) que en los "otrora golpistas" de la SRA. Es decir, estuvimos frente a acciones corporativas

fuertes, politizadas, con acompañamiento de partidos políticos y diversos sectores sociales pero que de ningún modo se las puede caracterizar como un "movimiento social agrario".

La tercera cuestión que deseamos explicitar es la legitimidad de la medida gubernamental. El Estado argentino, constitucionalmente tiene derechos a establecer derechos aduaneros a las exportaciones. En tanto nuestro país ha sido desde su fundación una nación "primario-exportador", ese derecho está justificado por la sobreganancia que generan las producciones basadas en recursos naturales como la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, etc. Las denominadas "retenciones", cuyo nombre correcto es "derechos de exportación", constituyen una intercepción del Estado de esa sobreganancia (denominada "renta" en la economía política) que va en aumento con el crecimiento de los precios internacionales. La renta se origina por la naturaleza del principal medio de producción de la agricultura: la tierra. En el capitalismo, este recurso funciona como una mercancía cuando en realidad no es producto del trabajo humano sino un "bien común" que por circunstancias históricas pasó a manos privadas[1]. La Constitución Nacional hace mención a la función social de la tierra y las interpretaciones acerca de este mandato constitucional son múltiples. Tal vez una de las más conservadoras (la cual siempre predominó en el país) sea que los productos de la tierra deben tributar para beneficio social colectivo. Para ello la Constitución Nacional expresa que la discusión de la cifra del porcentaje de las retenciones debe ser establecida por la comunidad, representada en el Congreso de la Nación. Los ejemplos que la ME y los partidos políticos utilizaron para criticar el porcentaje móvil que podía llegar al 50%, generalmente eran jurisprudencia para situaciones específicas (impuesto a la herencia, por ejemplo). La actividad tabacalera ha llegado a tributar hasta el 85% con impuestos directos e indirectos y no sólo en la Argentina sino en países como Suecia, Francia o Alemania. Cada Nación soberana fija sus niveles de impuestos de acuerdo a fundamentos sólidos y debatidos en los espacios pertinentes (en nuestro caso en el Congreso Nacional).

1 Hay muchos estudios históricos y actuales acerca de la generación de rentas (absolutas y diferenciales) en la producción pampeana argentina entre los que se destacan Flichman, 1977; Arceo, 2003,Teubal, 1975.

Escenario financiero mundial hacia comienzos de 2008 como marco de aplicación de la resolución presidencial 125

Desde hace varios años, e incluso décadas, asistimos a una suba en los precios de los productos agrícolas y sus derivados a nivel mundial impulsado por un constante aumento de la demanda. La mayoría de los analistas fundamentan este evento en el incremento del consumo de países de gran población como la India y China[2]; desastres climáticos diversos; el aumento sostenido del petróleo que no sólo afecta a los insumos, sino también presiona para la utilización de cultivos para la producción de biodiesel; la expansión del mercado interno argentino producto del desarrollo económico de los últimos años; etc. Si bien los dos últimos argumentos guardan cierto asidero con la realidad, sistemáticamente se deja afuera un factor explicativo fundamental de este aumento de precio de los *commodities*: el constante avance de la lógica financiera en el sector agropecuario. "El desarrollo (vertiginoso y en proporción geométrica) del comercio-a-futuro no es sino, y no puede ser sino, un disparador de precios. Porque la propia idea de transacción a futuro es especulativa" (Sabini Fernández, 2008: 15). Más allá de los distintos vaivenes financieros, el precio de ciertos cereales y oleaginosas destinados al mercado de exportación presionaron hacia una expansión de dichos cultivos provocando no sólo el desplazamiento de otras producciones tradicionales, sino también el corrimiento de la frontera agrícola sobre montes nativos, selvas y yungas. Presenciamos una reprimarización de la economía que sustenta el superávit de la balanza comercial nacional con las exportaciones sojeras transgénicas asegurando el pago a varios de los acreedores externos e intereses financieros locales e internacionales (Giarraca y Teubal, 2005).

En el marco de este régimen de acumulación signado por la valorización financiera, vemos la introducción de nuevos actores no sólo a la producción sino también a la comercialización y la especulación. Si bien la figura del gran terrateniente permanece presente en cuanto beneficiario de este sistema, ya no es el actor hegemónico ni el más favorecido. Unas de las figuras más novedosas y beneficiadas del sistema son los conocidos *pooles* de siembra, fondos de inversión y grupos de siembra. Frente al despla-

2 Con respecto a China se dice que la paulatina inclusión de las reglas de juego capitalistas ha disparado el consumo.

zamiento de la producción familiar, hay un notorio avance de empresas que manejan grandes volúmenes avalados por contratos eventuales, que buscan rentabilidad a corto plazo. El repertorio de tamaños y formas que adoptan es muy grande y gira en torno a la posesión o no de la tierra, la extensión cultivada, los recursos con los que cuenta, etc. A la vez se genera paulatinamente un estrato de pequeños rentistas que alquilan su tierra frente a la imposibilidad de competir en escala y tecnología con los grandes productores. A este conjunto de actores que se desarrollan en la producción se suman los exportadores y las grandes empresas agroalimentarias quienes cada día obtienen mayor participación en esta cadena, destacándose entre ellos los proveedores de semillas e insumos, procesadoras de materias primas agrícolas, supermercados, etc. (véase Teubal y Rodríguez, 2002). Accesoriamente, el tipo de producción del modelo está muy ligado a la aplicación de un determinado paquete tecnológico por lo que ciertas asociaciones que se dedican a desarrollarlo y actualizarlo adquieren notoria influencia[3] y se suman a las tradicionales entidades ruralistas como CONINAGRO, CRA, FAA y SRA.

La combinación de los factores financieros desarrollados párrafos atrás y ciertas condiciones coyunturales permitieron que para los primeros días de marzo del 2008 el precio de la tonelada de soja en Chicago[4] llegara a los U$S 550; la tonelada de maíz a U$S 215; y el trigo a U$S 410. Estos montos significaron importantes subas con respecto a meses anteriores y habían creado un clima de expectativas muy favorables para la cosecha gruesa, especialmente soja y maíz. Podemos afirmar que nos encontramos en un punto donde se combina una tendencia hacia la suba del precio de los *commodities* y el desarrollo de una multiplicidad de actores muy heterogéneos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del territorio argentino.

Es en este contexto que el 11 de marzo, el entonces ministro de economía, Martín Lousteau, anuncia la puesta en vigencia, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, de un esquema de retensiones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo donde se buscaba actualizar las alícuotas vigentes. En la medida se desarrolla una estructura de valores móviles

3 Entre ellas se destacan la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA), y la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (Acrea) las cuales según un reciente informe manejan más de mil millones de dólares anuales y proveen de constantes "mejoras" aplicables a la producción agrícola.

4 La "Chicago Board of Trade" es el mercado a futuro de *commodities* más importante cuyos valores son tomados como referencia a lo largo de todo el mundo.

para los siguientes cuatro años, según la cual las alícuotas de las retenciones se ajustan automáticamente a las variaciones internacionales del fluctuante mercado de *commodities* fijándolas día por día. Según los precios vigentes a ese momento, la soja y el girasol registrarían subas en el porcentaje de las alícuotas: en el primer caso pasaría del 35 al 44,1% en promedio; mientras que las retenciones para el girasol subirían de 32 a 39,1 %. Por otro lado, bajarían en el caso del trigo de un 28 a 27,2% y para el maíz del 25 al 24,2%. Esta política afectaba también a los demás cultivos y subproductos, pues si la cotización de los mismos subía, la proporción retenida ascendería y viceversa. Al momento del anuncio, el ministro Lousteau también aprovecha para fundamentar estos incrementos de las retenciones tanto en la necesidad de proteger el mercado interno de la suba de los precios internacionales de alimentos, como en el carácter negativo de la "sojización" por su competencia y desplazamiento de producciones tradicionales como carnes y leche. A partir de allí, comienza a desatarse una serie de acontecimientos que tendrán en vilo a la opinión pública por varios meses.

Los sectores en conflicto

En la mayoría de las interpretaciones sociales el punto de partida o marco de referencia es muy importante por lo que nos detendremos un momento en este punto. Tal como señalamos anteriormente, las acciones de reclamo corporativo por parte de las entidades ruralistas no son ninguna novedad; casi desde sus inicios históricos han demandado, conjunta o aisladamente, por políticas que los favorecieran como sector. En este sentido, encontramos durante los primeros meses del 2008 un estrecho acercamiento y una serie de reclamos institucionales y en la prensa por parte de CONINAGRO, CRA, FAA y SRA en torno a temas productivos tales como el precio de la carne y los lácteos. Tal como nos comenta Tiziano Treu, "el recurso al paro o a su amenaza se ve facilitado allí donde (como en Suecia o Alemania) las asociaciones empresariales son fuertes y centralizadas, dispuestas a hacer frente común" (Treu, 2002:1136). La convergencia de la importante experiencia histórica de las entidades y esta proximidad coyuntural nos permite comprender la rápida respuesta y organización frente al detonante del conflicto: el anuncio de la Resolución N° 125. Podemos afirmar

que la unidad de la ME es anterior al anuncio de la medida, aunque con el correr de los días se irá reforzando.

Asimismo, existe una serie de condiciones que permitirían comprender la rápida adhesión de gran parte de los "chacareros"[5] al paro convocado desde la Mesa de Enlace, pues el día 12 de marzo anuncian la no comercialización de granos y comienza una escalada de confrontación con el Gobierno nacional. Frente al favorable escenario mundial que hemos descrito líneas atrás, las retenciones tienen inmediata repercusión sobre los productores pues la comercialización de la cosecha de soja aún no había comenzado. Esta suba de las alícuotas menguaría casi 10% el precio de venta y parecía mantenerse *in crescendo* de acuerdo con las perspectivas generales. En este primer momento, el carácter indirecto del impuesto a las retenciones, no fue atenuado por ninguna política compensatoria y, de este modo, se afectó con mayor intensidad a los pequeños y medianos productores. Como es sabido, la estructura de costos y la sensibilidad frente a cualquier modificación de los márgenes de ganancia, son mayores a medida que las dimensiones de la explotación se reducen. En el caso de la soja este aspecto es sumamente influyente, pues el paquete tecnológico usado para su producción requiere de un importante uso de insumos.

Sin embargo, los ruralistas no agotan la búsqueda de apoyo en los sectores que tradicionalmente los apuntalan (a los cuales se referirán como "las bases" y a lo largo del conflicto irán tomando derroteros propios bajo la figura de los "autoconvocados"), buscan ampliar su sustento y la legitimación de la protesta refiriendo al "interés general" agrario. De esta manera, se logra incorporar otras demandas y actores a un conflicto que desde sus albores se presenta como sectorial, en especial a ciertos grupos descontentos por políticas particulares del Gobierno nacional. Quizás podríamos pensar el acto del 25 de mayo acaecido en la ciudad de Rosario como una muestra de ello, donde la masividad y heterogeneidad fueron el factor común. Más allá de la cantidad de personas (según las fuentes oscilan entre los 170.000 y los 300.000 concurrentes) es importante destacar la enorme diversidad de asistentes que va desde rosarinos de distinta procedencia social, chacareros y demás productores, jóvenes de FAA coreando a favor de una reforma agraria, grandes productores y terratenientes, movimientos piqueteros enfrentados con el Gobierno, etc. El concepto "campo" tuvo la suficiente polisemia como para incluirlos en sus filas, cuando la raíz

5 En nuestro país se denomina coloquialmente "chacarero" al productor familiar capitalizado que proviene de la tradición de lucha y producción que tuvo como momento fundacional el Grito de Alcorta de 1912.

del conflicto claramente gira en torno de la distribución de la renta de la tierra y no un cambio del régimen de acumulación.

Este panorama permanecerá subyacente a lo largo de los días en que se desenvuelven los avances y retrocesos del conflicto signados principalmente por un claro agotamiento de los arreglos institucionales. Los enfrentamientos discursivos y las demostraciones de fuerza y apoyo que se sucedieron parecían generar una fuerza centrífuga que polarizaba cada vez más el escenario. Así los planteos que proponían otra mirada al conflicto, criticando al modelo del "agronegocio" o los comportamientos del Gobierno, eran rápidamente solapados o rotulados en alguna de las "partes beligerantes". Las sentencias del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, "no es momento para tibios" y "quien no suma, resta" parecen resumir adecuadamente esta lógica que sólo pudo desarticularse en el momento que se llevó la medida al Congreso. La propuesta del debate allí, aún con las limitaciones que tenía el proyecto de ley propuesto por el Gobierno, fue una medida democrática que flexibilizó la situación y habilitó una interacción razonable, independientemente del final. No obstante ambas partes decidieron acompañar este evento con una batalla de apropiación del espacio público donde la "lógica numérica" (quién lleva más gente) de las marchas estaba en el centro de la discusión. Este grave error del Gobierno oscureció la democrática medida de dejar a los representantes de "todas las partes" (los partidos) discutir la cuestión. Como se sabe, el Gobierno perdió las batallas en el espacio público y luego en el legislativo.

El veto del proyecto de ley que ratificaba la resolución presidencial N° 125 llevado a cabo por el vicepresidente Julio C. Cobos como Presidente del Senado, finaliza una etapa y permite atenuar el conflicto y redefinirlo.

El panorama actual frente a la crisis mundial

Poco tiempo después del famoso voto "no positivo" del vicepresidente, la mayoría de los dirigentes ruralistas reactivaron sus discursos y peticiones frente al Gobierno. El sorpresivo descenso del precio de los *commodities* debido a la crisis financiera mundial les jugó una mala pasada pues la inmovilidad del sistema de retensiones vigente no hace más que intensificar la baja de los márgenes de ganancia de los productores agropecuarios. Esta situación parecía casi imposible de prever durante los primeros meses

del año cuando los *commodities* continuaban subiendo como resguardo frente a la caída de los mayores activos financieros. El desplome del precio de los principales productos agropecuarios durante esos meses puede considerarse una prueba central de la influencia del mercado financiero en los precios de los alimentos. No puede decirse que los chinos comen menos[6], que hubo superproducción de alimentos o que el biodiesel ya no es viable[7], sino que se hace evidente que son los mercados financieros de todo el mundo los que dictaminan esta enorme baja arrastrada por el desplome general de los valores transables a futuro. Esto también demuestra que la rentabilidad de las producciones está sujeta a una lógica de opinión de los mercados; el panorama crítico de ese momento no sería otra cosa que una construcción pesimista del porvenir económico producto de muchos años de crecimiento desmesurado del mercado financiero frente a la economía real.

Esta poderosa lógica que parece guiar los destinos de la economía capitalista contemporánea nos permite entender que muchos de los actores que el Gobierno afectó con su resolución ministerial juegan un papel subordinado dentro de la cadena agroindustrial sojera. Las empresas exportadoras, fondos de inversión, corporaciones de semillas, agroquímicos y el capital financiero no eran afectadas en el mismo grado que los productores del conflicto. Incluso en el contexto de caída internacional de los precios la principal salida dentro de este modelo de producción sojera es el aumento de la escala, pero esta estrategia es privativa a aquellas empresas que cuenta con el capital suficiente para hacerlo. Muchos de los productores capitalistas y chacareros que manifestaron durante gran parte de este año ya no serán rentables y terminarán cediendo su espacio a empresas más grandes. Por ello consideramos que sólo gravando y limitando la expansión y concentración de esos sectores habría transformaciones democratizadoras en el complejo oleaginoso argentino y en el agroindustrial en general.

6 Para una mejor comprensión de este tema y la desmitificación del argumento según el cual el aumento de los precios internacionales de los alimentos está relacionado con la demanda impulsada desde China recomendamos Nadal, 2008: 6.

7 Es importante recordar que varios países del mundo tienen reglamentaciones internas que obligan a mezclar combustibles fósiles y vegetales para reducir la influencia del petróleo en los mismos. Por ello, más allá del desplome del precio del barril de crudo, los productos agrícolas destinados a tal efecto no reducen su proporción en forma directamente proporcional a la baja del petróleo.

La agricultura "por venir": a modo de conclusión

Atravesamos una crisis internacional de la que poco se conoce en relación con las consecuencias que desatará en la "economía real" y en las distintas áreas del globo. Sabemos que tanto el país que inicia la crisis, EEUU, como Europa, tienen tradición de exportar sus consecuencias al mundo periférico, al que consideran una vieja colonia sobre la que aún mantiene una fuerte dominación; en algunos países, con dispositivos más sofisticados que en siglos anteriores (organismos internacionales, tribunales internacionales, etc.) y en otros con la directa intervención militar. No obstante, América Latina se topa con la crisis en un escenario de gobiernos con algún margen de autonomía y, en algunos casos, los encuentra sellando cartas constituyentes con fuertes precauciones en relación con temas vitales, entre ellos la preservación de los recursos naturales (Bolivia y Ecuador).

En materia de agricultura los dos estados más abiertos al escenario neoliberal en crisis son México y Argentina. No nos detendremos en México (véase Giarracca, en *Crítica* 23/10/08) sino que nos ocuparemos de nuestro país. El cambio de modelo de acumulación agraria que hemos descrito en este trabajo demuestra la fragilidad y dependencia al mercado externo de nuestra agricultura. Agreguemos todo lo que se ha perdido en la producción de alimentos, en bosques y yungas, agua[8], y tendremos más claro porqué sostenemos que las autoridades gubernamentales decidieron elegir y fortalecer el modelo neoliberal en materia agropecuaria.

Frente a la crisis actual, a nuestro juicio, existen dos opciones: seguir en este camino neoliberal y derivar en peores situaciones de pobreza y hambre que las de 2001-2002, o generar un paquete de medidas tendientes a la modificación de este modelo y orientar nuevamente nuestra agricultura a lo que Vía Campesina denomina "soberanía alimentaria": "Organizar la producción y el consumo de alimentos de acuerdo con las necesidades de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción y el consumo domésticos. Incluye el derecho de proteger y regular su producción nacional agrícola y ganadera. Campesinos, sin tierra, productores rurales

8 Finalmente, en la madrugada del 30 de septiembre de 2010 fue aprobada la ley de "presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial" (fábricas de agua para el presente y futuro), consensuada entre el diputado opositor, Miguel Bonasso, y el senador oficialista, Daniel Filmus. Cabe recordar que dicha ley había sido vetada anteriormente por la Presidenta de la Nación, fundamentándolo en el desarrollo primario exportador (en este caso favorecer a empresas mineras).

deben tener acceso a tierra, agua, semillas y recursos productivos y servicios públicos adecuados" (www.viacampesina.org). Para nuestro país es regresar a la producción de alimentos directos y garantizar el acceso a una alimentación sana y de buena calidad frente a los intereses sectoriales o a la necesidad de generar divisas para el financiamiento de un Estado que puede dudarse de que esté al servicio de la población.

Nuevamente, sólo el Congreso nacional en una posición autónoma frente a los intereses económicos corporativos representados, la mayoría de las veces, por gobernadores o autoridades nacionales y con buen conocimiento de los cambios mundiales en los próximos años, puede discutir y decidir el destino agroalimentario, es decir, el destino de la Argentina de los próximos años. Y si esto no ocurre y la crisis empeora, queda la solución de siempre: buscar, fortalecer, generar espacios de autonomía para producir para la alimentación, persuadir a las organizaciones de los productores de alimentos (nucleados en Federación Agraria) de volver al lado de la "soberanía alimentaria" y "salir del barco que se hunde" con un lanchón propio fortalecido, solidario y sensato. Los Movimientos Sociales, sobre todo los que tienen la disputa por los recursos naturales en el centro de sus acciones (tierra, agua, cerros mineros, bosques), son quienes están en condiciones de pivotear esos espacios necesarios en épocas de crisis.

En síntesis, el conflicto de los primeros meses de 2008, antecedió al comienzo de una fuerte crisis que ni las entidades corporativas ni el Gobierno supieron anticipar. Lo positivo ha sido que los legisladores y la sociedad comenzaron a saber qué sucede en el campo argentino, los problemas de los agricultores que pasaron a la soja, los campesinos a quienes se les arrebata la tierra, los trabajadores rurales mal pagos, el trabajo infantil, etc. En el 2009, con toda esa información, tanto los agricultores que configuraron la Argentina agraria con una fuerte tradición progresista como los sectores sociales que escapan a la colonialidad social, cultural y política, podrán decidir la agricultura que un mundo en crisis necesita y tal vez modificar en algo las orientaciones neoliberales del Gobierno argentino en estos aspectos.

Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral de 2009

Celeste Castro García, María Comelli y Tomás Palmisano

Introducción

El presente trabajo busca reconocer la incidencia del conflicto agrario de 2008 en el escenario electoral legislativo de 2009, en particular a través del accionar de la Mesa de Enlace (ME). Con este fin creemos pertinente recorrer algunos acontecimientos que antecedieron y dieron forma a un contexto signado por el adelantamiento de las elecciones y los efectos de un conflicto de fuertes repercusiones.

En primer lugar reconstruiremos a partir de una trama el desarrollo de las acciones de protesta y negociaciones más destacadas que tuvieron lugar entre la suspensión de la Resolución N° 125/08 (el 18 de julio de 2008) y las elecciones legislativas nacionales (el 28 de junio de 2009). En este escenario nos centraremos en el accionar de algunos de sus protagonistas: la ME, el Estado y los partidos políticos con sus candidatos. A través de este recorrido, nos resulta interesante analizar cómo la interpretación de la ME, expresada en el documento denominado "El aporte del campo a la política" (de aquí en más "El aporte..."), permea, se distribuye y se traduce en el contexto electoral. Así reconstruiremos la sucesión de reuniones, caravanas, actos y documentos[1] orientados a incidir en el escenario electoral. Finalmente, intentaremos reflexionar acerca de los comicios a partir de las distintas estrategias políticas desarrolladas por los diversos actores involucrados.

1 Entre ellos, la plataforma electoral que representa el clásico soporte del discurso propositivo y programático de los partidos políticos.

Un conflicto sin resolución: la caída de la 125 y las expectativas frente a las urnas

Tras el fallido intento de ratificación de la Resolución N° 125/08 vía Poder Legislativo, y su posterior suspensión por parte del Poder Ejecutivo, las tensiones parecieron menguar. Sin embargo, el conflicto se mantuvo latente y dos meses después reaparecieron las negociaciones entre la ME y el Gobierno. Tal es así que el 30 de septiembre, las entidades agropecuarias anunciaron un nuevo cese de comercialización de carnes y granos que iría desde el viernes 3 al miércoles 8 de octubre. La falta de respuestas y la escasa atención prestada a sus propuestas fueron los principales argumentos para volver al paro. Las demandas no fueron demasiado novedosas pues incluían una nueva baja de las retenciones; aumentos en los precios del ganado, la leche y el trigo; ayuda estatal para enfrentar la sequía; y flexibilización de las regulaciones aplicadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Por su parte, desde el Gobierno se mostraron sorprendidos ya que estaban en plenas negociaciones que incluían una reunión con Carlos Cheppi, el entonces secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), y el arreglo de un nuevo encuentro para la primera semana de octubre.

Más allá de las críticas cruzadas, el viernes 3 de octubre se inició el primer paro agrario tras la suspensión de la Resolución N° 125/08. Las principales manifestaciones se concentraron en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En varias localidades se controló el contenido de los camiones para evitar el paso de hacienda y granos pero la cantidad de productores en las rutas fue notablemente inferior a la reunida en los paros anteriores. En Buenos Aires, las principales asambleas se hicieron en Pinzón, Azul, Lincoln, Pehuajó, Carlos Tejedor y San Miguel del Monte. En Santa Fe, la concentración más importante se realizó frente a la planta de la multinacional Dreyfus, en la localidad de General Lagos; participó Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA). El momento de mayor tensión del paro tuvo lugar en Gualeguaychú, donde los productores cortaron la Ruta Nacional N° 14 y quemaron un tractor, generando discusiones entre los propios ruralistas. Durante este paro no se registraron cortes de ruta totales y los productores sólo impidieron el paso de camiones con cereales, oleaginosas o ganado en pie. Estas interrupciones afectaron principalmente las veintidós terminales portuarias santafesinas, ubicadas entre Timbó y Arroyo Seco.

El martes 7 de octubre, en el marco del paro agrario, Eduardo Buzzi junto a distintas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Tierra y Vivienda disidente, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y las Asambleas del Pueblo, se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires hasta la Plaza del Congreso e instalaron la llamada "Carpa de Todos", que permaneció toda la semana frente al Congreso de la Nación. Allí el titular de la FAA enfatizó: "no sólo el campo está mal. Las provincias están cada vez más complicadas. Entendemos que no se pueden reclamar políticas sólo desde lo sectorial, y por eso nuestro reclamo está enmarcado en el pedido de una política mucho más amplia, porque todos tienen más problemas, los docentes, los médicos, los chacareros". Además, afirmó: "Hoy tenemos trece millones de pobres y seis millones de indigentes en el país de la carne y de la leche. Lo que es una inmoralidad. Por eso hacen falta medidas que signifiquen revertir este proceso donde el presupuesto está dibujado y al final, se gobierna para el sector financiero. Mientras tanto los productores, especialmente los pequeños y medianos, y millones de argentinos estamos afuera del esquema. Es por eso que en esta nueva etapa de la protesta, le volvemos a manifestar al Gobierno Nacional que si no se modifican las reglas de juego desaparecerán más de 100 mil productores, tal como sucedió en los noventa con Cavallo" (FAA, 07/10/2008).

El paro finalizó el miércoles 8 con dos actos. Por la mañana, se realizó uno en San Pedro, que tuvo como oradores a los representantes de las cuatro entidades agrarias que integraban la ME. En su discurso, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, pidió que los argentinos luchen entre todos para buscar un futuro mejor para el país. El titular de la FAA reclamó que se pensara en discutir un presupuesto federal para que el Gobierno "deje de sacarle recursos a la gente y al campo" (Clarín, 8/10/2008). Por otra parte, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), Carlos Garetto, reclamó al Gobierno políticas urgentes para paliar las crisis que soportaban las producciones de carne, lácteos y las economías regionales. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, también cuestionó el destino que se daría a lo recaudado por las retenciones y agregó: "mientras nos negaron el diálogo, nos hicieron perder el tren de buenos precios que ofrecía el mundo" (Clarín, 8/10/2008). Así se hacía referencia a la crisis financiera internacional que desde agosto de 2008 había comenzado a afectar los precios de los prin-

cipales *commodities*, generando en el período de seis meses comprendido entre julio y diciembre de ese año, que la tonelada de soja perdiera más de U$S 200 (de U$S 548 a U$S 335).

Por la tarde, se realizó un abrazo simbólico al Congreso, en el que participaron las cuatro entidades junto a sectores políticos opositores al Gobierno. Mientras tanto el titular de la SAGPyA, Carlos Cheppi, anunció un plan de ayuda económica para productores rurales afectados por las sequías y para el desarrollo de las economías provinciales, luego de haberse reunido con organizaciones vinculadas a la agricultura familiar. Al participar de un acto en la localidad bonaerense de Moreno, Cheppi sostuvo que se destinarían "50 millones de pesos como ayuda especial a los costos de implantación de trigo de zonas afectadas" (Página 12, 9/10/2008), más un plus de ayuda por plantación y subsidios para productores vacunos.

Los días subsiguiente trascurrieron con cierta calma hasta que el 3 de diciembre, la FAA presentó en el Congreso un proyecto de retenciones agrícolas segmentadas, sin el apoyo de las demás entidades de la ME. Con el fin de beneficiar a los pequeños productores, el proyecto proponía retenciones segmentadas con alícuotas del 7% al 25% para las diferentes escalas y productos y la exención del pago de derechos de exportación para productores que cosecharan menos de 600 toneladas de soja y girasol, 1.200 de maíz y 900 de trigo.

Ese mismo día, la Comisión Nacional del Trabajo Agropecuario estableció la jornada laboral de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales para todo el personal comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, abarcando todas las actividades agropecuarias. La medida imponía además el reconocimiento del pago de horas extraordinarias con recargos del 50 % y 100 %; un descanso continuado de treinta y cinco horas semanales, desde las trece horas del sábado hasta las veinticuatro horas del domingo; una pausa de doce horas entre la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente; y la limitación a siete horas diarias y cuarenta y dos semanales para las jornadas nocturnas. Frente a este anuncio las cuatro entidades de la ME manifestaron su oposición.

Asimismo, al día siguiente, el Gobierno anunció que en el paquete de medidas anticrisis a implementar en las próximas semanas se incluiría una reducción del 5% a las retenciones de trigo y maíz.

Pocos días después, el 10 de diciembre, los productores "autoconvocados", con Alfredo de Angeli a la cabeza y sin el apoyo explícito de la ME, realizaron diversas protestas en distintos puntos del país en el mar-

co de la "marcha del duelo federal". En Paraná, Entre Ríos, la protesta comenzó un día antes con la concentración de productores en el acceso al Túnel Subfluvial y la movilización hacia la casa de Gobierno provincial, donde pasaron la noche. Al día siguiente se realizó un acto frente a la sede del Poder Ejecutivo entrerriano, con la participación de Alfredo de Angeli y el rabino Sergio Bergman. También en Córdoba y Santa Fe, los productores se movilizaron hacia sus respectivas gobernaciones para entregar petitorios en los que se reclamaba "retenciones a nivel cero" en los granos y políticas para la ganadería, la lechería y otras producciones. En La Pampa, un grupo de autoconvocados ruralistas realizó una mateada pública en la plaza San Martín de Santa Rosa, en adhesión a lo cual algunos comerciantes cerraron sus locales, y se realizó una marcha a la Casa de Gobierno en rechazo a la política agropecuaria nacional y provincial. Mientras que en la provincia de Buenos Aires hubo concentraciones en Saladillo y Salliqueló, en Tucumán los productores realizaron una caravana desde la localidad de Los Puestos hasta la plaza Independencia, en la capital provincial, donde se realizó un acto.

Casi a modo de respuesta y en el contexto de la inesperada baja en el precio de los productos agrícolas y la sequía que había azotado a la última campaña, la presidenta Cristina Fernández realizó una serie de anuncios que impactarían en las economías regionales y la pampa húmeda. Como parte de las medidas anticrisis, se resolvía: reducir a la mitad los derechos de exportación de los productos regionales en general, como frutas y hortalizas; rebajar cinco puntos las retenciones al trigo y al maíz; y establecer una "segmentación" a favor de los pequeños productores de dichos cultivos[2], quienes además recibirían las compensaciones o devoluciones en forma directa, sin intermediación de exportadoras o industrias transformadoras. Estas medidas fueron inmediatamente criticadas por los dirigentes de la ME. Hugo Biolcati declaró: "No hay medidas. Los anuncios son repeticiones de cosas ya anunciadas hace 20 días", al tiempo que afirmó que constituía "una falta de respeto a los productores". Por su parte, Eduardo Buzzi declaró en conferencia de prensa: "El rechazo es generalizado. Esto no resuelve los problemas del campo. Un 5% menos para el trigo y el maíz no modifica en nada la realidad. La rebaja en retenciones es para productos que se exportan muy poco. Y los principales rubros de

2 Mientras que a los grandes productores, por cada millón de toneladas de trigo y maíz extra que produjeran (por sobre un parámetro establecido en 13 millones para el trigo y 15 millones para el maíz), se rebajaría un punto en las retenciones; los medianos obtendrían una rebaja de dos puntos cada millón de toneladas y los más pequeños cinco puntos por cada millón.

este país que son la soja y el girasol se mantienen en un nivel de confiscación. Hoy no se soporta un 35% de retenciones" (Clarín, 22/12/2008). En tanto que un grupo de productores rurales entrerrianos, liderado por Alfredo de Angeli, decidió responder a dichas medidas interrumpiendo durante varias horas el tránsito en la Ruta Nacional N° 14. En sintonía con ello, otros productores realizaron concentraciones en las localidades entrerrianas de Cerrito, Villaguay, San Salvador y La Paz.

En el mes de febrero se llevaron a cabo dos seminarios de "formación cívica" convocados por la SRA en las ciudades de Paraná y Bahía Blanca[3]. Por otra parte, durante los dos primeros meses de 2009 hubo algunos cruces pero, a mediados de febrero y frente a la posibilidad de un nuevo paro agrario, la ministra de producción, Débora Giorgi, convocó a los titulares de la ME a una reunión para el martes 24. Los ruralistas confirmaron su presencia aunque ya habían resuelto realizar un nuevo paro desde el viernes 20 de febrero hasta unas horas antes del encuentro. La medida de fuerza incluía el cese de comercialización de granos y hacienda gorda, exceptuándose la leche, los productos perecederos y alimentos para la hacienda en zona de sequía.

En el primer día de paro los ruralistas realizaron un acto en la localidad de Leones, provincia de Córdoba, que tuvo como oradores a los cuatro titulares de las entidades agropecuarias. También se hicieron presentes referentes de la oposición: el titular del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, junto a dos diputadas socialistas; el ex intendente de Córdoba, Luis Juez; el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), Adrián Pérez, junto a las diputadas Griselda Baldata y Norma Morandini del Frente Cívico; el diputado de GEN, Francisco Ferro, y el radical Oscar Aguad. Por su parte, el Gobierno a través de la voz del ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó: "Lo de hoy se pareció más a un acto de campaña electoral que a un acto que pretende defender los intereses del campo; mejor que se presenten como candidatos y acepten el veredicto de las urnas" (Página 12, 21/02/2009).

Durante los cuatro días de paro no se registraron cortes de ruta ni abultadas manifestaciones como en protestas anteriores. Sin embargo, el lunes 23 de febrero, luego de una asamblea en el paraje El Pingo (Entre Ríos) los productores resolvieron movilizarse hasta la sucursal Hasenkamp del Nuevo Banco de Entre Ríos para manifestarse contra la política crediticia aplicada por la entidad a productores con problemas. El banco fue

3 Más adelante haremos una referencia más exhaustiva al respecto.

rodeado por máquinas agrícolas y agentes policiales, mientras que en el interior de la sucursal permanecían los productores y varios empleados. De Angeli, manifestó que el banco no había cumplido con los anuncios realizados en una reunión que las partes habían tenido y aclaró que, a pesar de la protesta, los productores no habrían afectado el funcionamiento del banco.

Finalizado el paro, la ME concurrió a la reunión pactada con la ministra Giorgi y el ministro del Interior en Casa de Gobierno. Allí, los funcionarios aseguraron que pondrían en marcha un conjunto de medidas para incentivar la producción de leche, carne, trigo y productos regionales, las cuales tendrían un costo fiscal de 1.300 millones de pesos. Por su parte los miembros de la ME se mostraron conformes con aquella nueva etapa de diálogo, aunque volvieron a remarcar que era necesario bajar las retenciones a la soja.

Hacia finales de febrero un equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encabezado por Ricardo Echegaray estudiaba la posibilidad de crear un nuevo organismo estatal de regulación del mercado agropecuario, en base a los proyectos que ya habían presentado en la Cámara baja los diputados Alberto Cantero Gutiérrez (Frente para la Victoria) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad). Según los impulsores, el objetivo de esa agencia sería "estabilizar precios, evitar distorsiones en la distribución de la renta entre los distintos sectores de la cadena favoreciendo a los productores y garantizar la seguridad alimentaria para el conjunto de la población" (Página 12, 28/02/2009). Frente a esta nueva iniciativa la ME, las bolsas de cereales y otras entidades agropecuarias expresaron su rechazo mediante una solicitada que fue publicada en los principales diarios del país el 28 de febrero. En ella afirmaban que con la generación de esa nueva agencia se provocaría "una grave disminución de la producción, con un fuerte impacto económico y social, sobre todo en el interior" y se paralizaría la comercialización (CRA, 28/2/2008)

Pocos días después y al cumplirse el aniversario del inicio del conflicto agrario de 2008, la ME realizó un acto en la provincia de Córdoba donde se presentó un documento titulado "El aporte..."[4]. La intención del acto era que los partidos políticos opositores al gobierno, tomaran los lineamien-

4 Es importante señalar que no era la primera vez que la ME presentaba un documento de este tipo. En abril de 1999, cuando las consecuencias de las políticas neoliberales en el sector agropecuario estaban en su punto más álgido, las entidades habían presentado un documento titulado "Frente a la crisis" que tenía un formato similar aunque no tan evidentemente electoral. Para un análisis del mismo ver Sidicaro, 2002.

tos de la carta como propios, en vísperas de las próximas elecciones. Los cuatro titulares de las entidades agropecuarias presidieron el acto mientras que los políticos opositores (Francisco de Narváez, Gerardo Morales, Margarita Stolbizer, Luís Juez, Esteban Bullrich, Ernesto Sanz, Rubén Giustiniani, Delia Inchespi, Laura Segman y Laura Montero) se sentaron en la primera fila junto a Alfredo de Angeli. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, no se hizo presente en el lugar pero envió una adhesión.

Todos los discursos hicieron alusión a las elecciones legislativas venideras, el papel del sector agropecuario durante el conflicto del año anterior y la necesidad de tenerlo en cuenta no sólo al momento de pensar medidas políticas que lo afectaran directamente sino también al diseñar el modelo económico y social del país. En este sentido, Mario Llambías afirmó: "El campo hasta ahora no participó en política ni discutió con los partidos las plataformas para el agro, pero la Argentina cambió, el campo sabe que tiene poder económico importante y presencia territorial y quiere conseguir y poner puntos básicos para que el conjunto del país se integre" (Página 12, 13/03/2009).

Mientras tanto, los productores "autoconvocados" realizaban asambleas y cortes en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba y Chaco, donde productores algodoneros mantenían bloqueada la Ruta Nacional N° 16, a la altura de Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el día anterior.

Una semana más tarde, el 19 de marzo, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto a través del cual se disponía la coparticipación del 30% del Fondo Federal Solidario conformado por los ingresos producto de la exportación de soja y sus derivados. Una de las condiciones del decreto era que el dinero debía destinarse a infraestructura social (escuelas, abastecimiento de agua corriente, instalación de cloacas, etc.). Los gobernadores de San Juan, Santiago del Estero y Entre Ríos hicieron público su apoyo a esta nueva disposición, pero las entidades agropecuarias, que durante el conflicto agrario habían reclamado la coparticipación de las retenciones, la criticaron y reclamaron su anulación. Incluso el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, se manifestó en contra de la medida, reiterando su pedido de suspensión por 180 días de las retenciones agropecuarias y solicitando el debate en el Congreso de cualquier iniciativa impositiva.

Mientras tanto en el Congreso Nacional, los legisladores opositores, en una sesión especial de la Cámara de Diputados, intentaron tratar un proyecto de ley que contemplaba una baja de las retenciones a la soja, el

trigo, el maíz, el girasol y el sorgo, pero no obtuvieron el quórum necesario. Frente a la difusión de este intento fallido y el anuncio de Cristina Fernández sobre la coparticipación de las retenciones a la soja, los productores que se encontraban en estado de alerta y movilización, decidieron bloquear rutas en Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Mientras la FAA, a través de su presidente, dio vía libre a cada una de las provincias para que decidiera qué medida de fuerza tomar, la ME expresó: "Desde hoy y hasta que tenga lugar la próxima convocatoria legislativa, la tarea de los productores será contactar a los representantes de sus respectivos distritos para concientizarlos acerca de la grave coyuntura del sector. Asimismo, recomendamos continuar movilizados y mediante asambleas y concentraciones en las plazas, a fin de alertar a la población sobre su problemática". (CRA, 19/03/2009)

Ante el malestar en las rutas, la ME decidió iniciar un nuevo paro con la suspensión de comercialización de cereales y ganado gordo desde el 21 al 27 de marzo, el cual fue acompañado por movilizaciones, cortes de ruta y asambleas de productores en las distintas provincias del centro y norte del país. En la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Gualeguaychú, los ruralistas decidieron volver a la dinámica del año anterior, realizando guardias a la vera de la ruta, cortes intermitentes y dos asambleas por día. También se realizaron cortes en Amstrong, Santa Fe; en la Ruta Nacional N° 9, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero; en la provincia de Buenos Aires y Chaco.

A su vez, durante esta nueva protesta, se difundió que seis productores agropecuarios habían sido procesados sin prisión preventiva por haber cortado la Ruta Nacional N° 9 durante tres horas en marzo del año pasado. La medida había sido adoptada el 6 de marzo por el Juez Federal de San Nicolás, Alberto Martínez, por violar el Artículo N° 194 del Código Penal, que castiga con penas de tres meses a dos años de prisión a la persona que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire". El magistrado también dispuso un embargo de cinco mil pesos sobre los bienes de cada procesado.

El 26 de marzo el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que adelantaba las elecciones legislativas, programadas para octubre, al domingo 28 de junio, aduciendo lo perjudicial de una campaña electoral extensa en el marco de la crisis económica mundial.

Frente a este nuevo contexto, los representantes de la ME anunciaron que durante abril visitarían varias localidades del norte del país, en especial las

zonas más afectadas por la sequía, como Chaco, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, acompañados por los candidatos de origen agropecuario que integrarían las listas de distintos partidos políticos. Siguiendo con esta nueva estrategia, el 21 de abril la ME dirigió una carta a Néstor Kirchner, en su carácter de Presidente del Partido Justicialista (PJ), solicitándole una entrevista con el objeto de que las pretensiones temáticas elaboradas en "El aporte..." fueran incorporadas en las plataformas políticas del espectro partidario nacional.

Dos días después, en su paso por Suipacha, Buzzi remarcó: "No podemos delegar nuestro futuro y mucho menos esperar que terceros nos resuelvan todos nuestros problemas [...] es muy importante lo que suceda el 28 de junio en las elecciones" (La Nación, 25/4/2009).

Otro de los actos más significativos de esta gira por el país, presentando "El aporte...", fue el del 30 de abril, en la ciudad de Reconquista, Santa Fe; bajo el lema "Sentando las bases para un país más federal", hablaron algunos de los principales dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias y el rabino Sergio Bergman.

Durante la primera semana de mayo, la CONINAGRO se reunió con los ex gobernadores de Salta, Juan Carlos Romero y de Misiones, Ramón Puerta, para entregarles el mencionado documento, lo que replicó con los referentes políticos cordobeses Luis Juez (Frente Cívico) y Eduardo Mondino (Unión por Córdoba).

Luego de la recorrida de la ME por las provincias de Chaco y Santiago del Estero con el fin de presentar a sus candidatos y negociar posiciones comunes con los partidos opositores al Gobierno, el 25 de mayo realizaron un significativo acto en la Ruta Nacional N° 3, a la entrada de Cañuelas. Unos días después, en su paso por Formosa, la ME acompañó a su candidato por esa misma localidad, Ricardo Buryaile, quien remarcó la necesidad de "generar las condiciones para que el cambio llegue a Formosa para que los formoseños podamos vivir un poco mejor". El 17 de junio se presentaron los candidatos ruralistas en Paraná (Entre Ríos) en un acto que contó con la presencia de los dirigentes Carlos Garetto, Hugo Biolcati, Mario Llambías y Alfredo De Angeli, quienes señalaron en sus discursos que la elección del 28 de junio constituiría "un punto de inflexión para la vida política del país". En tanto, el titular de la SRA remarcó: "El 28 de junio será el gran acto del campo del 2009, ya que, gracias a la participación política, se logrará recuperar la calidad institucional que hemos perdido en los últimos años" (SRA, 17/06/2009). Sin embargo, el punto más im-

portante de este acto fueron las palabras del dirigente Alfredo de Angeli quien, al finalizar la conferencia de prensa, propuso "juntar a los empleados de las estancias, subirlos a una camioneta y decirles a quién hay que votar" (Página 12, 19/06/2009). Estas afirmaciones le valieron las críticas de casi todo el espectro político e incluso de la propia FAA. Eduardo Buzzi, calificó de "oligárquica y feudal" la afirmación, vinculándola con las prácticas de la Década Infame y lo peor de la política argentina.

La ME también protagonizó encuentros con los candidatos nacionales de Corrientes y participó de una mesa de reflexión política en la ciudad de Resistencia en el marco de la 3º Edición de La Nación Ganadera Norte, acompañando a los candidatos a diputados nacionales por el norte argentino.

Pero en esta campaña electoral impulsada por la ME no sólo primaron encuentros y actos, también los productores agropecuarios, muchas veces repudiados desde sus entidades, realizaron múltiples "escraches" a dirigentes y candidatos kirchneristas en su recorrida por el interior del país. Algunos de los dirigentes agredidos fueron: Jerónimo Vargas Aignasse (diputado nacional FPV-Tucumán), Julio de Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) , Patricia Vaca Narvaja (diputada nacional FPV- Córdoba), José María Díaz Bancalari (diputado nacional FPV-Provincia de Buenos Aires), Agustín Rossi (diputado nacional FPV- Santa Fe), Ricardo Moccero (intendente kirchnerista de Coronel Suárez) y Daniel Scioli (gobernador de la Provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional).

Finalmente, el 28 de junio se realizaron los comicios electorales que pusieron en juego en el nivel nacional 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de Senadores. Las elecciones fueron tan reñidas que la diferencia en el nivel nacional entre la primera y la segunda fuerza fue muy escueta. Si tenemos en cuenta los datos de la Dirección Nacional Electoral, el Frente para la Victoria en sus distintas manifestaciones provinciales obtuvo 5675264 votos para sus candidatos a diputados nacionales mientras que la segunda fuerza fue el Acuerdo Cívico y Social con poco más de cinco millones. En tercer lugar lo obtuvo el PRO con 3372368 de sufragios a su favor. Más allá de estás cifras, algunas estimaciones realizadas días después de las elecciones (Gallo, 2009) acortan las distancias entre el Frente para la Victoria y el Acuerdo Cívico y Social al sumar las alianzas realizados en los distintos distritos. En ese caso, el oficialismo sumaría 5871345 votos (31,2%) mientras que el apoyo al Acuerdo Cívico asciende a 5763342

sufragios (30,7%) y la suma entre el PRO y el PJ disidente arroja un total de 3519843 votos que representan el 18,7% del total.

La estrategia electoral de la ME: entre el proselitismo y la "formación cívica"

La presencia del conflicto agrario de 2008 marcó el escenario electoral de 2009, en parte porque permeó todo el espectro político partidario durante el año anterior pero también por la recurrente capacidad de lobby de las entidades agrarias en la definición de políticas públicas nacionales, lo que se verificó de maneras novedosas. Es por ello que proponemos explorar algunas de sus aristas a partir del análisis de las distintas estrategias que se dio la ME para influir de forma decisiva en los comicios electorales.

Ante la decisión de la ME de no formar una estructura partidaria propia sino de distribuir a sus candidatos en una variedad de listas referenciadas en diversos partidos, la SRA decidió no dejar librada al azar la vinculación ideológica de esos candidatos a sus principios y modos de entender la política. Así, en el marco de la estrategia de la ME de sumar candidatos propios a las listas de los partidos políticos que se presentarían en las elecciones legislativas, la SRA lanzó una iniciativa destinada a formar políticamente a los candidatos ruralistas, haciendo gala de un cambio de estrategia ya que hasta ese momento la entidad no permitía que sus socios participaran directamente en procesos electorales.

Así se organizó una serie de seminarios de "formación cívica" en ciudades como Paraná y Bahía Blanca, en los que disertaron el rabino Sergio Bergman; el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Carlos Menem y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot; el consultor y asesor de campañas políticas Felipe Noguera, los referentes locales de las Sociedades Rurales, entre otros.

El primero de los seminarios tuvo lugar el 17 de febrero en Paraná (Provincia de Entre Ríos) y un día después se repitió en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires). A su vez, se realizaron varios cursos de formación para fiscales y autoridades de mesa en las Sociedades Rurales de todo el país, motorizados por las entidades del sector.

En este sentido, los seminarios organizados por la SRA o la ME, marcaron el inicio de la estrategia específicamente electoral de las entidades, evidenciando su decisión de incidir de manera directa en los lineamien-

tos políticos que se perfilaran en el escenario electoral de 2009. Si bien la influencia de las entidades agrarias en la vida política del país ha estado presente en todas las épocas (Ver Giarracca, 2009), democráticas o no, el conflicto agrario de 2008 posibilitó una presencia pública decisiva y evidente de la ME en los comicios, marcando una filiación política muy clara, por ejemplo, a la hora de elegir a los oradores que encabezarían sus seminarios de formación. Lo novedoso quizás consistió en encontrar a entidades como la FAA y la SRA en un mismo espacio político-ideológico, más allá de compartir coyunturas, de reivindicaciones y de negociación durante el conflicto.

El 20 de febrero en el marco de un nuevo paro agrario, los productores realizaron un acto en la localidad de Leones, provincia de Córdoba, que contó con la presencia de varios referentes de la oposición política. Tanto la participación de políticos y futuros candidatos como la lectura que hicieron algunos referentes del Gobierno sobre dicho acto, mostraron cómo el foco de la atención comenzaba a centrarse en las elecciones que tendrían lugar en octubre de 2009 (que luego se adelantaran).

Pocos días después, el 12 de marzo, la ME presentaba el documento "El aporte..." como una propuesta que interpelaba a las estructuras partidarias en general y a los candidatos y referentes políticos en particular. En su presentación no sólo asistieron importantes personalidades del arco político opositor, sino que en varios casos también refrendaron el documento.

Con el adelanto de las elecciones propuesto desde el Gobierno a finales de marzo esta estrategia se vio potenciada, abriendo paso a lo que podríamos denominar la campaña proselitista "del campo". Por un lado, la ME solicitaba a los productores movilizados que interpelaran a los representantes distritales, como forma de ejercer influencia y difundir las propuestas del sector. Por otro lado, los representantes de la ME se dedicaron a recorrer distintos puntos del país llevando "El aporte..." e intentando comprometer el apoyo de los candidatos de todo el espectro político a través de su adscripción a dicho documento. A su vez la metodología adquiría dos variantes, consistentes en reuniones relativamente pequeñas y privadas entre representantes de alguna de las cuatro entidades ruralistas y algunos políticos destacados; y en actos multitudinarios en diversos puntos del país con candidatos locales, provinciales y nacionales, invitados a que adhirieran o participaran.

Así, haciendo uso de su capacidad de lobby, la ME concretó reuniones y acuerdos con un número considerable de políticos a quienes se les entregaba una copia de "El aporte…". Algunos de los candidatos que concurrieron a estos encuentros y entrevistas fueron: Ricardo Alfonsín; Carlos Reutemann; Margarita Stolbizer; Francisco De Narváez; Mauricio Macri; Felipe Solá; Alberto Rodríguez Saá; Ramón Puerta; Juan Carlos Romero; Luis Juez; Eduardo Mondino; entre otros.

Los actos se realizaban en lugares que aseguraran una importante concurrencia a fin de reforzar el reclamo y la capacidad de influencia sobre los políticos locales. Así, podemos enumerar los actos de Suipacha (provincia de Buenos Aires), Reconquista (Santa Fe); Chaco; Santiago del Estero; Formosa; Entre Ríos y Corrientes. En la mayoría de los casos, las críticas al Gobierno, a las candidaturas testimoniales del Frente para la Victoria, los reclamos de medidas sectoriales, transparencia e institucionalidad, eran los ejes comunes de los discursos. También abundaban las acusaciones a gobernadores y políticos oficialistas.

Hacia el final de la campaña los miembros de la ME habían asumido de tal manera su rol en el escenario electoral que manejaban encuestas y proyecciones acerca del número de candidatos del "campo" que ingresarían al Congreso.

La plataforma de la Mesa de Enlace: las vías de la política ruralista

> "Todo enunciado, incluso un enunciado escrito y acabado, responde a algo y está orientado a algún objeto".
>
> Volóshinov, 2009: 116

En el escenario de la disputa electoral, "El aporte…" es mostrado por la ME como una herramienta política orientada a los comicios. Si bien analizaremos el contenido del documento, parece ineludible ampliar la idea de la enunciación "al decir y a sus modalidades, a las maneras de decir" (Verón, 2004: 172). Así el acto de enunciación adquiere su forma a partir de la combinación de la imagen del enunciador, la imagen del destinatario y la relación que se propone en y a través del discurso.

Ahora bien, es necesario aclarar que "El aporte…" no es un discurso cualquiera. Por circular que parezca la clasificación, pues el título ya lo

evidencia, corresponde al género de los discursos políticos. Para justificar la inclusión dentro de este tipo de discurso es ineludible una determinada definición de la política cuyo contenido pueda vislumbrarse entre las líneas del documento. En este caso puede resultar interesante la noción de Oakeshott rescatada por Chantal Mouffe según la cual "la política es la actividad que se ocupa de los ordenamientos generales de un conjunto de personas que, con respecto a su reconocimiento común de una manera de ocuparse de sus ordenamientos, componen una comunidad única" (Mouffe, 1999: 36). En una línea similar se ubica Raquel Gutiérrez cuando define a la política en tanto "el modo como los individuos se hacen cargo de la gestión del asunto común [...] resultante, inestable y cambiante, de ese complejo sistema de fuerzas constituido por múltiples relaciones sociales de poder" (2001: 66). En este sentido, intentaremos rastrear a lo largo de "El aporte..." las ideas acerca del ordenamiento del asunto común y la comunidad (en el sentido de sociedad política) que la ME enuncia tácita o explícitamente, pues a estas referencias subyace necesariamente una forma particular de entender/actuar la política del actor corporativo.

Por otro lado, el carácter político de este discurso también está dado por su estrategia en el campo discursivo (Verón, 1987) en el que se enmarca. Por ello la existencia de un adversario político con quien se polemiza es inevitable; este rol le cabrá al Gobierno Nacional que si bien no es mencionado directamente puede ser reconstruido a partir de la introducción, propuestas y demandas. En el sentido de Verón el documento sería una réplica en el marco de un fuerte enfrentamiento mediático que a la vez se anticipa a un escenario inminentemente electoral. Esta perspectiva nos permite explicar parte del ordenamiento del texto, similar a ciertas plataformas políticas.

Siguiendo al mencionado autor podemos reconocer un "Otro positivo", el *prodestinatario*, en la alusión a los partidos y la dirigencia política con quien se forja una serie de valores óptimos que compartirían o al menos deberían compartir: república; democracia; federalismo; institucionalidad plena; mayor justicia social; convivencia en la diferenciación sin descalificaciones, sin autoritarismo, con espíritu de convergencia, aptitud para el intercambio, para la crítica y la autocrítica que nos pone a resguardo de la arbitrariedad y las exclusiones; la ley; el trabajo; el conocimiento; la salud; la convivencia entre nosotros y con el mundo.

En este contexto, la construcción del *contradestinatario* está un poco más velada, es menos explícita. Por ello es necesario ver la influencia del

contexto en la interpretación de los posibles significados de este acto de enunciación. Es en este camino donde podemos observar una serie de calificativos y alusiones que los distintos integrantes de la ME y otros actores que compartían su postura, usaban para referirse al accionar del Gobierno y sus principales figuras. Reconstruyendo este colectivo de identificación negativo encontramos descalificaciones que en algunos casos funcionan como formas nominalizadas: autoritarismo, falta de diálogo y debate, poca aptitud para el intercambio, la crítica y la autocrítica, arbitrariedad, miseria, clientelismo, concentración de la riqueza, etc.

Finalmente, es posible reconstruir un *paradestinatario* en el documento (que incluye aquellos individuos indecisos o que no tienen una posición definida), a partir de la presencia de algunos guiños que se dan a sujetos que trascienden el reclamo sectorial y la interpelación político-electoral. La alusión a la superación de las demandas rurales y la representación de lo republicano, de la sociedad, de ser voceros de una demanda cívica que responde a los ideales de república y democracia son ejemplos de esto último. Al igual que la interpelación a los argentinos y la ciudadanía que se suman a los meta-colectivos singulares más utilizados como forjadores de identidad: el campo, la sociedad, pero principalmente la República.

En el mencionado texto de Verón también existen referencias a los componentes o zonas del discurso donde se articulan los elementos descriptivos, didácticos, prescriptivos y programáticos. Así leemos en los primeros párrafos de "El aporte. . . ":

> "El 12 de marzo de 2008, desde el campo, hicimos saber que nuestras exigencias y reivindicaciones, sin dejar de ser sectoriales, eran esencialmente republicanas.
>
> Nos convertimos en representativos de la sociedad, lo que - lejos de hacer de nosotros una oposición partidaria - nos transformó en voceros de una demanda cívica que responde al ideal, aún pendiente, de la República y de la democracia.
>
> No somos ni queremos ser un partido político. No los reemplazamos ni queremos reemplazarlos en el cumplimiento de las obligaciones que solo ellos pueden satisfacer para que la vida democrática se cumpla cabalmente.
>
> Y es por eso que hoy los hemos convocado".[5]

5 A partir de ahora presentaremos el documento completo seccionado para su mejor análisis.

En este caso se despliega la zona descriptiva del discurso, donde el enunciador (la ME) se dispone a realizar una lectura del pasado y el presente poniendo en juego varias estrategias. En primer lugar, se sostiene la idea de que la ME es "el campo", así el nosotros que enuncia adquiere una potencia simbólica que tiende a aumentar su legitimidad ya no como delegados de un sector, sino como "el campo" (al cual se alude en todo momento en la primera persona del plural) que representa a la sociedad y propone un determinado tratamiento de los asuntos comunes. Se produce así un proceso de simplificación del escenario sobre el que se posiciona la ME: se ocultan aquellas acentuaciones provenientes de mundos rurales distintos al de los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios capitalistas, la mayoría de ellos vinculados al mercado exportador, representado por la ME, unificando la multiplicidad de mundos rurales y actores presentados por el enunciador. En segundo lugar, los *meta-colectivos singulares* adquieren su máxima potencia otorgando una especie de refuerzo o encumbramiento que convierte a el/los emisor/es en certeros exégetas de la realidad. Finalmente, el abandono retórico de la lucha por el poder político partidario funciona como cierre definitivo de la jerarquía entre el enunciador colectivo y sus *prodestinatarios* a favor del primero: es el campo, como representante de la sociedad, quien interpela a los partidos políticos.

El resto del comunicado se dirime entre los componentes prescriptivos y programáticos. En el primer caso podemos señalar las siguientes líneas:

> "La sociedad necesita que asuman la responsabilidad plena que les corresponde.
>
> No se trata sólo de competir por el poder. Se trata, fundamentalmente, de imponer ética en esa competencia y eficacia en la gestión de gobierno.
>
> Es imprescindible que la sociedad encauce hacia los partidos políticos la demanda de institucionalidad plena y de mayor justicia social, petición de la que el campo supo hacerse eco."

Si bien el uso del impersonal refuerza la orden emitida no faltan ejemplos en los que el enunciador se hace visible y asume la primera persona del plural, primero en tono de recomendación para luego reforzar el sentido prescriptivo:

"La Comisión de Enlace no quiso ni quiere ser ejemplo de nada. Pero fue y es expresión de aptitud para la convivencia en el pluralismo y en el respeto por las diferencias. La fuerza conseguida con esta conducta nos conmueve aún hoy y nos comprometemos a sostenerla. Pero no queremos monopolizar ese valor simbólico, precisamente porque somos democráticos y republicanos. Queremos sí ver a las agrupaciones políticas del país conquistando ese valor representativo cada vez con más fuerza, mediante conductas que promuevan la convivencia en la diferenciación sin descalificaciones, sin autoritarismo, con espíritu de convergencia, aptitud para el intercambio, para la crítica y la autocrítica que nos pone a resguardo de la arbitrariedad y las exclusiones.

Como argentinos esperamos que la dirigencia política se comprometa al sostenimiento y al desarrollo de las bases fundamentales que hacen a la calidad democrática de una mejor vida republicana: la ley, el trabajo, el conocimiento, la salud, la convivencia entre nosotros y con el mundo. Solo así, gane quien gane, gobierne quien gobierne, estará asegurado ese ideal de legitimidad e institucionalidad que impulsó al campo a expresarse unánimemente junto al resto de la sociedad en el año que pasó (. . .)

Por todo eso, nos comprometemos y exigimos a ustedes que sean respetados los principios que emanan de la Constitución Nacional, las instituciones de la República y los mecanismos democráticos en todos sus niveles.

Sostenemos el reestablecimiento de un auténtico federalismo, que respete la autonomía en las decisiones de cada provincia y una justa y equitativa coparticipación federal.

Creemos que la educación, la cultura del trabajo, la producción, la innovación tecnológica, la generación de valor y el cuidado del medio ambiente son herramientas fundamentales para el desarrollo y el progreso de la Nación".

En las primeras líneas, la ME se autolegitima a través de la reiterada noción altruista y democrática que se atribuye al relato y a sus acciones presentes y pasadas, conjugando los componentes descriptivos, didácticos (al mostrar una forma de actuar que se presenta como indiscutible) y prescriptivos en los últimos párrafos. Así se delinean una serie de valores que conformarían la ética[6] nombrada en los párrafos precedentes que vendría

6 Es inevitable referir a la confusión entre ética y moral que existe en el documento, como así también la referencia netamente positiva que se le da a dicha idea, descartando la existencia de

a regular la "competencia y eficacia en la gestión de gobierno". Además se marca plenamente el objetivo a través de dos de las *formas nominalizadas* más corrientes del discurso político: el desarrollo y el progreso de la Nación.

Finalmente nos encontramos con el último componente aportado por Verón, el programático. Claramente toda la segunda mitad del documento refiere al futuro, a qué hacer para mejorar la situación de "el campo" y toda la sociedad. La forma de presentación adquiere el típico formato de las plataformas electorales o los documentos institucionales que tras los considerandos desarrollan las propuestas.

> "En este marco, proponemos una nueva política agropecuaria que permita:
>
> - Diseñar políticas que promuevan la radicación de los ciudadanos en el ámbito rural y en los pueblos del interior, a efectos de evitar la expulsión hacia concentraciones urbanas que generan miseria y clientelismo político.
> - Contribuir al establecimiento de un sistema tributario más justo que posibilite una distribución equitativa de la carga fiscal, estimulando el crecimiento de la producción y la creación de la riqueza.
> - Establecer una misma política cambiaria para todas las actividades. Es imprescindible para ello eliminar los derechos de exportación y mientras esto se logre, segmentarlas.
> - Jerarquizar el Impuesto a las Ganancias, generalizándolo a todas las actividades lucrativas, como eje de la recaudación fiscal coparticipable.
> - Diseñar una política de incentivos para los productores de ganadería, de lechería, de granos y de economías regionales, basada en beneficios impositivos y en líneas de crédito que contemplen la naturaleza de la actividad y de los ciclos productivos, teniendo como prioridad a las PYMES agropecuarias.
> - Impulsar políticas para el uso sustentable de los suelos y la reposición de sus nutrientes.
> - Dejar sin efecto los controles o acuerdos de precios y crear mecanismos participativos para transparentar la cadena de comercialización.

distintas éticas. Sin embargo, sería improcedente para los fines de nuestro análisis detenernos en este punto.

- Evitar todas las medidas que entorpecen la exportación, a cuyo fin la ONCCA deberá limitarse a cumplir, estrictamente, las funciones de control para las cuales fue creada.
- Terminar con las prácticas clientelistas y las políticas que fomentan la concentración de la riqueza.
- Eliminar los subsidios distorsivos.
- Propender la presencia de la agroindustria nacional en el mundo, imponiéndole la marca 'Argentina' a los productos.
- Invertir en caminos, vías férreas, puertos, energía, comunicaciones y en la infraestructura básica que promueva el bienestar en los pueblos del interior.
- Contar con una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria, dotada de un fondo específico propio.

Los principios enunciados en este documento no agotan las demandas que el campo considera necesarias pero señalan una dirección que inscribe las exigencias en el marco de la constitucionalidad imprescindible.

No aspiramos a agotar en lo que decimos todo lo que se puede y debe decir sino a compartir con todos, mediante el diálogo y el debate, lo que no se debe olvidar".

En estas líneas vemos el claro uso de los infinitivos como forma de combinar lo programático con lo prescriptivo ("aquello que no se debe olvidar"). La primera oración nos muestra que lo que se presentan son los objetivos de "una nueva política agropecuaria" más que los medios para llegar a ella, evitando hacer referencia a todos los conflictos que las contradicciones entre algunas medidas pudieran generar. El final pareciera ser más "sincero" con el estilo del texto cuando refiere a las demandas, al enumerar aquellas que las entidades consideran vitales y a la vez dentro de la norma ("en el marco de la constitucionalidad imprescindible").

Una lectura general del texto no deja dudas del carácter corporativo del reclamo, que si bien no desiste de referirse a la sociedad en su conjunto, lo hace desde la proposición de medidas sectoriales generando una fuerte tensión entre los reclamos corporativos y la postura de la gesta patriótica que la ME estaría llevando adelante. Así, se visibilizan las complejidades del proceso por medio del cual se intenta dotar a las pretensiones sectoriales de un cierto carácter universal. En este sentido, en los presupuestos y las propuestas del documento no subyace idea alguna de cambio en la

aritmética del poder o de dar voces a actores subalternos. Por el contrario se vincula más a un reacomodamiento en las posiciones de dominación de ciertos sectores rurales frente a la presencia de otros actores vinculados al sector financiero, el comercio exterior, el manejo de grandes explotaciones y la creciente integración vertical y horizontal del sector. Asimismo, la acción de la ME puede ubicarse dentro de la forma liberal de la política, en el sentido de que no se busca reconstruir la correlación de fuerzas iniciales que le da a un grupo de la sociedad "la capacidad de decisión a través de un acto de fuerza; sino que renuevan, reproducen y refrendan los circuitos de delegación de la capacidad de decisión autónoma individual y social" (Gutiérrez, 2001: 69). Al entender a la política de esta manera puede explicarse el peso dado a las elecciones legislativas en la estrategia política, como rápida respuesta frente a un cambio en las oportunidades políticas. El documento, fechado el 12 de marzo, sólo antecede algunos días el adelanto de las elecciones legislativas ratificado el 27 de ese mes pero anunciado por la presidenta Cristina Fernández el 13 de marzo en Chubut.

El aporte del campo a las plataformas políticas

Frente a la apuesta política que significó "El aporte..." nos resulta interesante analizar cómo influyó su difusión sobre los contenidos de las plataformas electorales. Si bien partimos de reconocer que éstas suelen tener una circulación restringida y no poseen un peso definitivo en los resultados electorales, existe una convergencia en la concepción de la política y el tipo de actor interpelado (*el ciudadano*)[7] que se desprende tanto de las propuestas formales de los partidos políticos como de la ME. De manera que las plataformas se constituyen en nuestro análisis en otra muestra más de la presencia del conflicto en el escenario preelectoral.

Para realizar este análisis tomamos además de "El aporte...", las plataformas de las principales fuerzas políticas de cada provincia de acuerdo a los resultados obtenidos en los comicios. En términos generales podemos decir que los aspectos compartidos por "El aporte..." y las plataformas de los partidos políticos se concentran en tres aspectos: el marco insti-

7 Como desarrollamos en el apartado anterior, a pesar de que "El aporte..." tiene como principal destinatario a la dirigencia política, el ciudadano aparece como el *paradestinatario* de su discurso.

tucional, la reforma al sistema tributario y la implementación de nuevas políticas de aliento a la producción.

En segundo lugar, en diversas propuestas partidarias aparecen las apelaciones de la ME a la democratización y el fortalecimiento de lo republicano, incorporando términos como redistribución de recursos, federalismo, justicia, etc. A su vez, encontramos algunas referencias incipientes al tema de la protección de los recursos naturales y el manejo sustentable de los suelos. Ambas cuestiones le permiten a la ME aparecer como un sector cuyas demandas involucran asuntos que interpelan a gran parte de la sociedad, ampliando un conflicto que en principio era sectorial.

Asimismo aparece ambigüedad en las demandas de control estatal, puesto que por un lado se presenta como una cuestión indispensable para mejorar las condiciones y posibilidades de producción, y por el otro, se critican directamente los efectos distorsivos de cualquier medida gubernamental que afecte la rentabilidad de determinadas producciones. A pesar de estas contradicciones, el conflicto abre en el escenario electoral la discusión acerca del rol del Estado y su intervencionismo en materia económica.

El análisis detallado de las plataformas de varios de los partidos que compitieron en los comicios, remite a algunas referencias explícitas a las propuestas de la ME. Durante el conflicto una demanda que aparece con fuerza y le permite a los ruralistas posicionar sus reclamos a nivel de una demanda que excede lo sectorial, es la necesidad de fortalecer el federalismo en términos de autonomía de las provincias y redistribución de los recursos a través de una nueva Ley de Coparticipación Federal. En este sentido, es destacable el énfasis dado a la noción de federalismo que atraviesa a la totalidad de las plataformas analizadas. Junto a este reclamo también se demanda una reforma tributaria que contemple la disminución o eliminación de las retenciones a los productos exportados, así como el diseño de políticas de incentivos para determinadas producciones que fortalezcan a las PyMES agropecuarias y las industrias regionales. A su vez se propugna por el mejoramiento de las redes de infraestructura que permitan una mejor comercialización y transporte de los productos de las economías regionales, la sanción de una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria y la desarticulación del andamiaje normativo que desincentivara la exportación de productos agropecuarios. Estas cuestiones son principalmente abordadas por las plataformas tanto provinciales como nacionales de la fuerza política que concentró la mayor cantidad de votos, el Acuerdo Cívico y Social[8]. Una referencia específica merece el caso del Frente para

la Victoria, cuyas plataformas provinciales siguen una línea común en lo que respecta al análisis del contexto socio-político y las propuestas, pero en ningún momento hacen mención explícita a las principales demandas surgidas en el marco del conflicto agrario.

En síntesis, la estrategia política de la ME en términos de globalizar un conflicto sectorial que le permitiera presentarse en la arena política como representativo de amplios sectores sociales, encontró una estructura de oportunidades políticas definida por la recreación de un escenario electoral proclive a la atención de sus demandas como sector. Muchos partidos políticos se hicieron eco de estos reclamos y montaron su estrategia electoral sobre la dicotomización social producida por el desenlace del conflicto agrario. De allí la presencia de las propuestas de la ME en las elecciones, tanto en términos de candidatos propios que usufructuaron las estructuras partidarias en su favor, como del desarrollo de plataformas electorales en sintonía con "El aporte...".

Hacia las bancas ruralistas

> "Una campaña electoral que levante la enseña contra los altos impuestos, llevando a la legislatura los portavoces de esas aspiraciones y necesidades supremas, conseguirá sentar en la legislatura representantes en número suficiente para morigerar el prurito irresponsable del oficialismo".
>
> La Nación, 30 de mayo de 1915

Transcurrida la campaña con todos sus pormenores, el 28 de junio tuvieron lugar las elecciones. Las escasas distancias que obtuvieron las dos principales fuerzas en pugna obligaron a esperar la sumatoria total de los resultados por región para conocer exactamente el listado de diputados y senadores elegidos. Finalmente triunfó el Frente para la Victoria y sus aliados pero las derrotas en algunos distritos claves y los triunfos ajustados en otros provocaron que perdiera la mayoría absoluta. De esta manera, se transformó en la primera minoría con 116 diputados y 36 senadores. Por su parte, el bloque nacional del "Acuerdo Cívico y Social" quedó formado por 76 representantes en la Cámara Baja y 23 en el Senado. El tercer lugar obtenido por la alianza entre el PRO y el PJ disidente les permitió

8 Cabe aclarar que si bien algunos de los partidos políticos que integraban esta fuerza en el nivel nacional se presentaban de manera independiente en el nivel provincial, (como fue el caso de la UCR en Tierra del Fuego) mantenían propuestas similares.

consolidar un bloque de 25 diputados y 7 Senadores. El PJ opositor que mantuvo sus listas independientes quedó con 17 representantes en la Cámara Baja y 2 en la Alta. Estos comicios resultaron perjudiciales para los partidos más pequeños, que en líneas generales perdieron 6 diputados y 3 senadores.

Más allá de los resultados generales, la gran mayoría de los dirigentes ruralistas especulaba acerca de la cantidad de legisladores electos que apoyaban expresamente a la ME. De hecho, en los días previos el dirigente de la CRA, Mario Llambías, vaticinó que ingresarían en el Congreso cerca del 7% de diputados y senadores "del campo" respecto del número total de legisladores. La realidad fue que al momento de los comicios los partidos que habían presentado candidatos pertenecientes a las entidades agrarias fueron los siguientes:

- Frente Pampeano Cívico y Social (FREPAM) – La Pampa (Ulises Forte);
- Unión PRO – Provincia de Buenos Aires (Jorge Solmi y Jorge Srodek);
- Frente Cívico y Social– Córdoba (Gumersindo Alonso);
- Unión por Córdoba - Córdoba (Estela Garnero);
- Acuerdo Cívico y Social (ACyS) – Entre Ríos (Atilio Benedetti, Hilma Ré y Jorge Chemes) – Formosa (Ricardo Buryaile) – Tucumán (Juan Casañas) – Neuquén (Eduardo Kirstensen);
- Encuentro por Corrientes (en alianza con el Acuerdo Cívico y Social) – Corrientes (Lucio Aspiazu);
- Frente de Todos – Corrientes (Josefina Meabe de Mathó);
- Frente de Todos – Chaco (Pablo Orsolini);
- Alianza Frente Cívico y Social-– La Rioja (Julio César Martínez);
- Frente Salta Somos Todos – Salta (Alfredo Olmedo).[9]

De estas diez fuerzas, según la ME, surgieron electos 13 diputados nacionales y una senadora lo cual puede leerse como un importante triunfo para los ruralistas. En definitiva, las entidades evitaron la conformación de una estructura partidaria y aprovecharon un contexto favorable a la recepción de sus demandas para comprometer a los distintos candidatos con sus posturas y políticas. Como ventaja para la ME esta estrategia permitió el ingreso de varios de sus dirigentes de segunda línea y adherentes sin el costo político, económico y simbólico de conformar un partido en

9 Por su parte los partidos que no presentaron candidatos ruralistas fueron el Frente Justicialista para la Victoria (el oficialismo); Santa Fe Federal (liderado por Carlos Reuteman); el Frente Progresista, Civico y Social (liderado por Eduardo Binner); y el Frente Cívico Federal (liderado por Julio Cobos).

un tiempo más bien escaso. Incluso con un partido propio difícilmente hubiesen conseguido dicha cantidad de escaños.

Reflexiones finales

En cuanto a la estrategia política de la ME, uno de los principales temas a destacar, es la construcción del emisor, "el campo", y el éxito de su esfuerzo simbólico en cuanto a arrogarse la representatividad de la sociedad o la República. En este mismo sentido, se consolidó una imagen un tanto engañosa de mundos rurales homogéneos, invisibilizando múltiples voces y actores que no se habían alineado con la ME. Así se potenció su fuerza en el espacio político trascendiendo las fronteras de "lo rural" (o lo sectorial), lo que le permitió incluir a otros grupos de la sociedad y tejer alianzas políticas con distintos espacios y partidos.

Asimismo, muchos de los representantes de los principales grupos de poder del modelo agroexportador contemporáneo (exportadoras, grandes productores sojeros, pools de siembra, empresas de insumos y logísticas, etc.) parecieron mantenerse al margen de la disputa. Sin embargo, esta relativa ausencia no impidió que sus intereses fueran realmente defendidos o al menos respetados a un costo político muy bajo en tanto no sufrirían el desgaste del conflicto agrario ni de la disputa electoral. De hecho, las propuestas y discursos de muchos representantes de las corporaciones ruralistas (incluido "El aporte...") coincidieron con la postura y las necesidades de estos actores, creando una clase especial de interacción discursiva en la cual una voz (exportadores, grandes productores, pools de siembra más importantes, empresas de insumos y agroquímicos) hablaba a través de otra voz en un determinado lenguaje social (ME)[10]. Puede que esta coincidencia no haya sido pactada pero indefectiblemente le sirvió a los actores más concentrados del mundo agrario para mantener una posición privilegiada con discusiones marginales acerca de las causas y consecuencias del modelo del agronegocio.

En lo que respecta a las elecciones, consideramos interesante destacar que el tipo de estrategia propuesta por la ME para las mismas muestra su apuesta a una determinada idea de ciudadanía y de política. El hecho de apelar a la presentación de una plataforma política en su formato más

10 Este análisis es desarrollado por algunos miembros del Círculo de Bajtín, especialmente en Volóshinov, 2009.

tradicional nos remite a la figura de un votante racional, "instruido", que decide su sufragio a partir de un estudio de las plataformas y las propuestas. Al presentar "El aporte. . . " en estos términos, la adhesión al mismo sería casi automática, pues en él se reconstruye la imagen de la República perdida y las ansias de recuperar la "normalidad" por medio de la institucionalización del conflicto.

Más allá de esas referencias a ciertos valores de la democracia formal, las propuestas tienen una extraña oscilación entre posturas liberales e intervencionistas. Por un lado, instan a abandonar los controles de precios, evitar las medidas que obstaculizan las exportaciones y eliminar los subsidios distorsivos, todas medidas tendientes al librecambio. Por el otro, se alientan políticas de asentamiento de la población en áreas rurales; de incentivos a la producción ganadera, lechera, granaria y regional; entre otras cuestiones que podrían ser consideradas distorsivas o perniciosas para otras actividades económicas. A pesar de este abanico disímil de propuestas, nos parece importante resaltar que no encontramos referencias críticas al modelo de desarrollo agropecuario y sólo algunas de sus consecuencias son mencionadas lateralmente. Tal es así que cuando se hace mención al éxodo rural, se propone una medida focalizada ("políticas que promuevan la radicación de los ciudadanos en el ámbito rural y en los pueblos del interior") evitando toda búsqueda de las raíces del problema.

Finalmente, la combinación de un amplio y ambiguo abanico de demandas con un nutrido repertorio de acciones de protesta y negociación, definieron una exitosa estrategia de incidencia sobre el escenario electoral posibilitando la reinserción de las repercusiones del conflicto agrario al interior del Congreso, luego de la derogación de la Resolución N° 125/08.

Los legisladores ruralistas y los políticos que apoyaron a la ME se encuentran ahora en un nuevo contexto que probablemente pondrá en evidencia las tensiones que permitieron su llegada al recinto.

El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios

Norma Giarracca

Introducción

Los mundos agrarios se conocieron más, sobre todo en las grandes ciudades, desde el conflicto por la resolución 125 que establecía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de soja en el país. Y con la información acerca del qué, cuánto, cómo y dónde se producen los cereales y oleaginosas cuya producción se discutía diariamente en los programas de televisión y en los principales diarios, se conoció más acerca de los mundos sociales: las ciudades intermedias, poblados, rutas, rotondas y plazas de la Argentina "no porteña", para decirlo de alguna manera. Aparecieron en los medios de comunicación los nombres de los centros urbanos dependientes de la producción agraria –Trenque Lauquen, Firmat, Maciel, Alcorta, etc.- y la ciudad de Buenos Aires demostró tener conexiones familiares presentes o pasadas con esos mundos sociales donde las producciones primarias son centro de las economías regionales y de las ciudades grandes y pequeñas de las provincias.

Este apoyo citadino al conflicto de 2008, fue uno de los centros del debate y un elemento significativo para la caracterización del problema. Por un lado, muchos grupos cercanos al Gobierno Nacional consideraron que las poblaciones que dieron esos apoyos eran potenciales aliados de una "nueva derecha" que intentaba desestabilizar al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner por su intento de subir las retenciones agropecuarias para una mejor redistribución de los ingresos. Para otros –actores sociales en juego, medios de comunicación, analistas políticos y gran parte de las poblaciones urbanas- la situación había emergido como detonante de un modo de tomar las decisiones y gestionar los conflictos por parte del Gobierno Nacional. Aquel discurso del 25 de marzo de 2008 de la Presidenta, denominando "piquetes de la abundancia" a las formas de manifestarse de

los ruralistas, habría simbolizado para ellos un modo intolerante de administrar el conflicto que se sumaría a muchos otros "gestos" presidenciales en el mismo registro.

Esta situación fue profusamente debatida en los medios, diarios muy ligados a los sectores agrarios como "Clarín" o "La Nación" por un lado y, por otro, en "Página 12" a través de las columnas de opinión utilizadas por el grupo de Carta Abierta (CA), formado por intelectuales cercanos al Gobierno Nacional y otros especialistas e intelectuales (entre quienes me incluyo). Si bien, como veremos, los sectores que apoyaban al campo evitaban una caracterización política y ponían énfasis en las demandas económicas, CA basó su estrategia de debate en politizarlo (y me atrevería a decir "ideologizarlo"). ¿"Nueva derecha" o sectores productivos amenazados por un Poder Ejecutivo sospechado de autoritario y de hacer un uso indebido de lo recaudado?, es la pregunta que sintetiza aquella discusión.

Existen diferentes posiciones expuestas en referencia a la caracterización del conflicto y en ese debate intervinimos nosotros como Grupo de Estudios Rurales; lo hicimos de un modo que procuró no convertirlo en posiciones irreconciliables sino proponer diálogos para superar una dicotomía que se presentaba como insalvable. Tratamos de caracterizar a los actores agrarios en conflicto, la importancia del modelo agrario sojero en la políticas de Estado, y nos atrevimos también a caracterizar el tipo de conflicto con el que nos enfrentábamos.

Para intervenir en las caracterizaciones económicas de los actores en juego se necesitaba un conocimiento más especializado y técnico del sector agrario, y por tal motivo este tipo de debate se circunscribió a un círculo menos extendido de personas. Distinto fue cuando de interpretaciones políticas se trataba; allí se involucraron tanto periodistas como filósofos, historiadores, contadores, antropólogos, novelistas, religiosos, politólogos y sociólogos de todos los gustos. En este artículo me limitaré a las interpretaciones de los miembros del grupo denominado Carta Abierta (CA).[1]

Para los miembros de CA estábamos en presencia de un actor social agrario ligado históricamente a sectores "golpistas" de la sociedad y que

1 Carta Abierta comenzó como un espacio de discusión de la coyuntura del conflicto y terminó como un fenómeno muy interesante desparramado por muchas provincias y en el exterior. Si bien desearon mantener ciertas distancias con el gobierno fue conocida su estrecha relación con el ex presidente Néstor Kirchner. Aún hoy siguen representando el grupo de intelectuales cercanos al poder gubernamental. Sus cartas, sus artículos de opinión, fueron publicados por el diario Página 12 y se encuentran en su blog www.cartaabierta.org.ar. En la bibliografía incluimos todas las fechas en que se sacaron las declaraciones.

continúa conformando la base del modelo agrario que se enriquece con la expansión sojera. Son, en su criterio, los grandes propietarios de la rica región pampeana del país cuya tenencia de la tierra se remonta a la conformación de la Nación y del capitalismo argentino. El grupo de Economía y Tecnología de FLACSO armó una demostración empírica de esta posición. Es importante analizar cómo se sostuvo esta posición porque terminó expresándose en las declaraciones de muchos funcionarios de primera línea y del expresidente Néstor Kichner. Estábamos nuevamente en presencia de "la vieja oligarquía".

Frente a esta idea de la "vieja oligarquía" aparecieron otras posiciones: las nuestras y también las de otros grupos ligados a corrientes políticas progresistas que denunciaron a los exportadores como sectores beneficiados detrás de la acción del Gobierno (Mario Cafiero, Claudio Lozano, Pino Solanas, Alcira Argumedo). El dramático discurso en el Congreso Nacional de Claudio Lozano sintetizó estos intentos, siempre incompletos, de darle visibilidad a los actores sojeros que se quedan con las abultadas ganancias y sobreganancias (véase artículo de Página 12, del 9/7/08 y Teubal y Palmisano en este libro).

Creemos que para transformar el capitalismo neoliberal agrario se debe contar con información e interpretaciones que puedan corroborarse empíricamente. Las caracterizaciones e interpretaciones basadas en datos erróneos pueden servir para el debate mediático pero no para avanzar en una transformación desconcentradora de la estructura productiva y social del campo. Hemos demostrado con un importante soporte empírico que hubo grandes cambios en el sector agrario (Giarracca y Teubal, 2005); por esta razón, los sectores en conflicto (los miembros de la Mesa de Enlace) ya no son los núcleos de poder del nuevo sistema agrario que denominamos "agronegocio" y simplemente ocupan un papel subordinado y territorializado (básicamente antiguos propietarios de tierra) en el nuevo modelo.

En este artículo me propongo trabajar alrededor de dos cuestiones. Comenzaré con la caracterización económica de los actores, ya que con ella se habilita una mejor comprensión acerca de la naturaleza política del conflicto, que desarrollaré en la segunda parte de la argumentación. Considero que ya en las breves reflexiones que fui publicando en Página 12 y Crítica intenté incluir algunas ideas acerca de la naturaleza del conflicto. Básicamente lo caractericé como un conflicto patronal por impuestos estatales que les influyen directamente en las condiciones de producción,

tasas de ganancia y posibilidades de apropiación de renta. Es decir, uno de los muchos conflictos de los agricultores en todos los tiempos del capitalismo argentino que, en este caso, cobra una dimensión política por la respuesta desmesurada del Gobierno frente al paro y su escasa capacidad de negociación con estos capitalistas nacionales heterogéneos (pequeños, medianos y grandes).

El debate acerca de la caracterización de los actores del conflicto

Me remito a la vasta bibliografía existente que se propone comprender las transformaciones ocurridas desde 1976 tanto en el nivel de la economía mundial, de los organismos de crédito que comenzaron a tener una injerencia inédita en los estados nacionales, como en los niveles de los territorios nacionales. Muchas veces hemos remarcado en nuestros trabajos que estas configuraciones económicas, sociales, culturales que vivimos hoy como escenario de nuestras vidas, no se realizaron de un momento para otro sino que comienzan con el disciplinamiento social que supuso la dictadura de 1976-1983, las medidas que condujeron a la des-industrialización, la apertura del comercio exterior y los climas sociales de terror e individualismo que acompañaron estos procesos (Giarracca, N., 2003; véase también entrevista a Giarracca, N. en Página 12, 31 de marzo del 2008). Todos estos cambios resultaron en "un campo social" mucho más complejo, heterogéneo y fragmentado. Lo que siguió en democracia poco cambió en relación con los ejes fundamentales del modelo que los grandes centros de poder generaban para estos países vía endeudamiento y servidumbres financieras. Si los setenta y ochenta fueron las décadas de los disciplinamientos sociales y significaron el establecimiento de un clima cultural que parecía decirnos "no hay alternativas", es "esto o algo peor", es decir etapas de una producción de subjetividades resignadas, los noventa será la década en que se pondrá en marcha una segunda etapa de reformas estructurales, privatizaciones, predominio del sector financiero, y se establecerá todo el andamiaje legal para el modelo extractivo de los recursos naturales minería a cielo abierto, etc. En esos años se producen las privatizaciones de los hidrocarburos y de las empresas de servicio del agua; se emite un decreto de desregulación económica que afecta al sector agrario (Decreto 2284); se implementan paquetes de leyes para habilitar a las corporaciones del

sector agrario, al gran negocio de la minería a cielo abierto en el país. Pero los noventa también serán la década en la que el programa de producción de subjetividades resignadas comienza a resquebrajarse y en el país comienza un gran "ciclo de protestas" que, me atrevería a decir, aún no ha finalizado[2].

En este contexto de profundas transformaciones en todos los niveles de la vida económica, social, cultural, es difícil sostener la permanencia de los viejos actores sociales con sus viejas conductas en el escenario nacional. En primer lugar porque desde 1975 hasta hoy hubo un recambio generacional en todos los ámbitos y si bien decimos con Pierre Bourdieu, que la "reproducción social" es fuerte y difícil de torcer, las generaciones viven distintos climas sociales y culturales y las dirigencias cambian en esos plazos de tiempo; en segundo lugar, porque las transformaciones impregnaron todas las instituciones del capitalismo argentino en sus diversos ámbitos: economía (mercado), política (Estado), educación, ciencia, salud, cultura. Y de esa catástrofe (para utilizar la metáfora de Ignacio Lewcowicz) quienes pueden salir adelante se parecen muy poco a lo que eran en los momentos previos a ella; muchos encontraron su final como agentes económicos y otros reaparecieron atados al motor de quienes pueden seguir adelante en la coyuntura. En nuestro caso, fueron las nuevas corporaciones transnacionales, las que se quedaron con las empresas públicas, con las empresas en cadenas agroindustriales y con los recursos naturales. Ya no son los mismos actores industriales, agrarios, banqueros, como no son los mismos dirigentes gremiales, o los mismos políticos, ni es la misma ciencia, la misma universidad ni los mismos medios de comunicación, aunque todo muestre un significativo "parecido de familia" (por aquello que nos recordaba Bourdieu). Incluso de los movimientos sociales centrados casi exclusivamente en la inserción de clase -el movimiento obrero- se pasó a otros diversos, centrados en problemas culturales y en las disputas territoriales.

En el registro de la economía agraria, además, se ha ido configurando una nueva lógica productiva que denominamos "agronegocio" que moldea un espacio dinámico, generador de grandes ganancias y con marcadas diferencias de funcionamiento con el antiguo sector agrario y agroindustrial (véase Giarracca y Teubal, 2008). En ese nuevo espacio económico

2 Estas protestas, vale la pena decirlo, fueron opacadas durante el año 2008 por el supuesto conflicto del campo capitalista. Ese conflicto, dentro del espacio del poder político y económico, opacó las resistencias al modelo neoliberal que se daban simultáneamente a que las cámaras de televisión se concentraban casi exclusivamente en el conflicto campo-gobierno.

del "agronegocio" se registra una fuerte intervención del sector financiero; en él, además, participan capitales transnacionales en puntos clave de la cadena de producción, distribución y ventas a los mercados externo y doméstico. Tanto las transnacionales que proveen insumos, los exportadores, así como las cadenas de "hipermercados" en el mercado interno, son unos pocos ejemplos de lo que deseo significar. Pero no es mi intención detenerme en el funcionamiento de este espacio económico y simplemente me remito al trabajo de Teubal y Palmisano en este libro.

Los viejos actores agrarios y agroindustriales del capitalismo nacional se van adaptando de dos modos diferentes al nuevo escenario: traspasan sus patrimonios a los capitales transnacionales (para operar en el sector financiero o sumar a la fuga de capitales) que son los que imponen la nueva lógica de funcionamiento (empresas agroalimentarias, ingenios azucareros, grandes bodegas vitivinícolas, etc.) o mantienen sus patrimonios nacionales y se subordinan a los nuevos "núcleos de poder". Denominamos "núcleo de poder" en las cadenas de producción a aquellos agentes capaces de imponer qué, cómo, cuánto producir y subordinar los funcionamientos del resto de los agentes a su propia lógica (Vigorito, 1979; Teubal, 1999). En el nivel de la producción agraria, la novedad que se dibuja en la década de 1990 y aparece con fuerza a partir de la expansión sojera es la gestión de los denominados "pools de siembra" o "fondos de inversión".

La caracterización del actor económico

Los nuevos actores de la producción que habilitan la impresionante expansión sojera pampeana primero y luego en las otras regiones antes dedicadas a las agroindustrias tradicionales o donde habitaban comunidades campesinas e indígenas así como en bosques y yungas, son estos nuevos inversores en la modalidad de "pools de siembra" o "fondos de inversión". Estos agentes, que en la mayoría de los casos están fuertemente relacionados con el capital financiero y con el mercado internacional a través de la gestión de exportación, las empresas transnacionales y algunas importantes empresas nacionales (Arcor, por ejemplo), las proveedoras de insumos, agroquímicos, semillas, maquinarias, etc., configuran el conjunto de agentes económicos que componen el pacto fundante del capitalismo del "agronegocio" argentino en estos tiempos presentes.

Por eso, como no podía ser de otro modo, el debate alrededor del actor agrario productivo giró en torno al peso de los pools de siembra y fondos de inversión en la producción sojera. Es decir, se discutió si se trata de un nuevo actor hegemónico o si volvemos a estar frente al terrateniente pampeano de siempre ahora metamorfoseado en sojero.

Un estudio de FLACSO, que se entregó con el diario Página 12 en 2009 (citado el año anterior por el mismo diario) de Arceo *et al* (2009), sostuvo la hipótesis acerca de que el terrateniente propietario es el principal beneficiario del modelo y que, al mantener ese poder económico se guarda, como lo hizo históricamente, una posición de poder capaz de "jaquear" al poder político que detenta el gobierno. Es decir, se invisibilizan los nuevos actores capaces de imponer leyes, decretos, resoluciones y se vuelve a apuntar a la "vieja oligarquía" en el supuesto de que activaría la memoria de la población que supo de sus andadas golpistas.

Para demostrar esta posición se toma el Censo Agropecuario (CNA) de 2002 y se lo compara con el anterior de 1988, año este en que los propietarios de la región pampeana explotaban en forma directa el 90% de la tierra cultivada; los autores sostienen que ese porcentaje para 2002 "apenas disminuyó al 86,4%". Frente a esta situación se deriva la "invariante" presencia en el escenario pampeano del terrateniente, base de Sociedad Rural Argentina (SRA) y de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

> *"La primera comprobación, es que el propietario rural sigue siendo durante la fase de expansión el protagonista decisivo de la producción agropecuaria pampeana. En efecto, los propietarios trabajan el 90% de la superficie agropecuaria en 1988 y el 86% de la misma en 2002, lo cual indica la posición privilegiada que tiene el propietario en ambos relevamientos censales respecto a las restantes formas de tenencia. No obstante esta significativa estabilidad, es preciso reparar en una serie de alteraciones que refuerzan el protagonismo que tradicionalmente ejercieron los propietarios pero que al mismo tiempo introduce nuevas facetas. En este sentido es revelador observar que la superficie trabajada por aquellos propietarios que sólo explotan sus tierras descendió muy acentuadamente (9,5 millones de hectáreas) mientras que los propietarios que, además de explotar sus tierras, trabajan otras, se incrementaron en forma ostensible (prácticamente en cinco millones de hectáreas). La importancia de estos últimos, se pone de manifiesto cuando se constata que son los "tomadores de tierras" más relevantes de la región pampeana superando ampliamente a quienes son*

"arrendatarios puros" entre los que se encuentran los Pools de Siembra pertenecientes al sector financiero. En efecto al confrontar la superficie tomada en arrendamiento por los propietarios y por quienes no lo son, se constata una notable superficie de los primeros (17,3 versus 5,5 millones de hectáreas de acuerdo al cuadro (siguiente)" (Pág.71).

Distribución de la tierra de la región pampeana* según la toma de tenencia de la tierra, 1988 y 2002 (en millones de hectáreas y porcentajes

	1998		2002		Diferencia 2002- 1998	
	Hectáreas	%	Hectáreas	%	Hectáreas	%
Total Región Pampeana	70.749.256	100,0	68.245.542	100,0	-2.503.714	-3,5
1. Tierras trabajadas por los propietarios	63.589.989	89,9	59.009.761	86,3	-4.580.228	-7,2
2. Propietarios que no toman tierra	44.051.073	62,3	34.520.100	50,5	-9.530.973	-21,6
3. Propietarios que toman tierra en:	19.538.916	27,6	24.489.661	35,8	4.950.744	25,3
3.1 Arrendamiento	11.566.816	16,3	17.333.123	25,4	6.766.307	49,9
3.2 Contrato accidental	4.249.416	6	2.953.074	4,3	-1.296.342	-30,5
3.3 Otros**	3.722.684	5,3	4.105.244	6	382.561	10,3
4 Tierra trabajada por no propietarios:	7.159.267	10,2	9.235.781	13,5	2.076.514	49,6
4.1 Arrendamiento	3.591.452	5,1	5.474.838	8	1.883.386	52,4
4.2 Contrato accidental	1.124.639	1,6	901.670	1,3	-222.969	-19,8
4.3 Otros **	2.443.176	3,5	2.859.273	4,2	416.097	17

* Comprende las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
** Incluye tierras ocupadas, aparcería, que no tienen la tenencia discriminada y otras.

Fuente: Elaborado sobre la base de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.

Este razonamiento se basa en una relación que los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) no otorga en las publicaciones que se vienen haciendo desde 2003 y que todos sus usuarios citamos. Es la relación entre dos variables: "forma de tenencia" y "forma de gestión". En efecto, tanto el censo de 1988 como el del 2002 incluyeron en su cédula censal las clásicas preguntas que indican las relaciones de propiedad con la tierra y las posibles combinaciones entre ellas. De este modo se obtienen "propietarios que no toman tierras" (en arriendo), "propietarios que toman tierra" (en arriendo), "arrendatarios", "contrato accidental" y las posibles combinaciones. Por otro lado, en virtud de la importancia que adquiere el sector financiero a través de las nuevas formas productivas, en 2002 se incluyó una nueva pregunta que indagaba la "forma de gestión" de la empresa. Se preguntaba si el censado formaba parte de un "pool de siembra". Esa respuesta se respondía por la afirmativa o la negativa y nada decía acerca de las características de la empresa censada. Fue una primera indagación

acerca de un fenómeno que crecía día a día (aún las cifras no alcanzaban un rango significativo) y que para el proyectado y abortado censo de 2008 sería perfeccionada. Es decir, no existía fuente empírica alguna para que los investigadores de FLACSO pudieran sostener la proposición: "La importancia de estos últimos [propietarios tomadores de tierra], se pone de manifiesto cuando se constata que son los "tomadores de tierras" más relevantes de la región pampeana superando ampliamente a quienes son **"arrendatarios puros" entre los que se encuentran los Pools de Siembra pertenecientes al sector financiero[3]".**

¿De dónde se había sacado que sólo entre los arrendatarios puros se encuentran los "pools de siembra" ligados mayoritariamente al sector financiero? ¿Esto significaba que entre los propietarios no había gestiones del tipo "pool de siembra"? ¿Cómo podían estar seguros sin corroborarlo con los datos censales? Esta relación, que no aparecía en el trabajo de FLACSO en forma de hipótesis a comprobar sino de aseveración, despertó dudas y las marcamos en la primera versión del artículo de Giarracca, Teubal y Palmisano, que integra este libro, publicado por primera vez en Realidad Económica en agosto de 2008. De un simple análisis censal corroborábamos que la mayoría de los productores de "hasta 200 has" son propietarios y también lo son la mayoría de quienes desaparecieron de la producción entre 1988 y 2002. Es decir, la condición de "propietario" en la Argentina no delimita por si misma estratos sociales y capacidad política de sus miembros; ni siquiera la delimita la relación entre tenencia y "cantidad de superficie" ya que, por ejemplo, algunos dueños de empresas agroindustriales suelen tener en propiedad o arriendo una superficie que los colocaría entre "los chacareros". Aún más del simple cruce de "regimen de tenencia" según "escala de extensión" en el nivel nacional se deduce que en casi todas las subcategorías de propiedad se toma tierra, desde los estratos más pequeños a los más altos (Datos del CNA); algunos simplemente arriendan más tierras, otros entran en "pool de siembra".

Profundizando estas cuestiones logramos, con datos censales de 2002, la información acerca de quiénes participan en los pools de siembra, grupo dentro del cual están, según nuestras hipótesis, gran parte de los nuevos actores del sector productivo. En efecto, en el conjunto de los que gestionan su explotación en la modalidad "pool de siembra" (o fondos de inversión) están algunas explotaciones poderosas por el volumen producido y/o por sus conexiones con la exportación; es decir agentes económicos

3 El destacado es mío

hegemónicos en la cadena del "agronegocio" y están los otros, formados por pequeños propietarios (mayoritarios en la estructura social agraria desde su origen) tomadores de tierra para aumentar la escala de producción. Veamos cómo se distribuye la variable "forma de gestión pool de siembra" en las variables que expresan las distintas formas de tenencia.

La forma de gestión "pool de siembra" que una parte incorpora como elemento central a inversores financieros (grandes y pequeños) tiene relaciones significativas con las principales formas de tenencia y no sólo –como sostiene el trabajo de FLACSO- con los "arrendatarios puros" (arrendatarios y "contrato accidental", de sólo un año de alquiler). Es decir, la forma "pool de siembra" aparece con porcentajes altos entre las EAPs de propietarios (47%), pero mantiene guarismos significativos en los arrendatarios, en el contratista accidental y en combinaciones de "propietarios" con "arrendatarios" o "contratistas accidentales". En la forma "propietario" en todas las provincias el porcentaje es mayor. Esto no nos llamó la atención pues en esos años llevamos a cabo un trabajo sobre los colonos del sur de Santa Fe y la mayoría de los que estaban produciendo soja declaraban pertenecer a un "pool de siembra". Estos eran pequeños agricultores, y el "pool" era una solución para superar la escala de producción que la soja les exigía (Véase Giarracca, Gras, Barbetta, 2005).

Pero ya existía para Santa Fe, Buenos Aires, y el resto de las provincias donde la soja se expandía, otro tipo de propietarios, de 2000 has o más de tierra, que participaba en otro tipo de pool de siembra (a los que en los primeros años se los denominaba "fondos de inversión"). Esta combinación de propietarios grandes y tomadores de tierra (arrendatarios o contratos accidentales) con la participación del capital financiero en altos montos, sumado a los servicios de terceros para el proceso productivo más los importantes estudios agronómicos al servicio de esta lógica, fueron configurando el nuevo agente productivo que se corresponde con el resto de los actores de la cadena (los grandes exportadores, las corporaciones, corredores de bolsa, etc.). No siempre se pueden corporizar en una persona como es el caso de Gustavo Grobocopatel, cabeza visible de Los Grobos, la familia Rodrigué de La Redención, o los Alvarado de El Tejar, quienes amasaron inmensas fortunas en muy pocos años acorde a los tiempos de la globalización, partiendo de extensiones y biografías variadas. Sin duda en este sector se encuentran familias de apellidos tradicionales pero están también los inmigrantes como los Grobocopatel, están los viejos estudios agronómicos de la vieja clase terrateniente pero están además las nuevas

Forma de tenencia y provincias por participación en un "pool de siembra". En porcentajes

		Provincia											
		Buenos Aires		Córdoba		Santa Fe		La Pampa		Entre Ríos		Total	
Tipo de tenencia		Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)	EAPs
Formas puras	Propiedad	39,60	45,02	37,76	41,63	55,25	52,63	75,05	54,35	38,11	38,11	44,36	47,01
	En sucesión indivisa	0,18	1,24	0,50	1,91	0,76	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,50
	Arrendamiento	20,93	17,91	24,42	27,27	13,33	19,03	2,94	15,22	0,82	0,82	18,00	19,66
	Aparcería	1,04	2,99	0,83	1,91	2,08	4,45	0,00	0,00	1,14	1,14	0,96	2,99
	Contrato accidental	10,83	12,69	7,15	7,66	4,04	4,45	0,17	2,17	24,67	24,67	9,09	9,08
	Ocupación con permiso	0,15	1,24	0,08	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,64
	Ocupación de hecho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,01	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
EAPs que combina tierra en propiedad con	En sucesión indivisa	1,74	0,50	0,59	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,43
	Arrendamiento	16,76	11,69	20,52	13,88	19,68	14,17	19,54	10,87	12,01	12,01	17,78	12,50
	Aparcería	0,80	1,49	2,80	1,44	0,00	0,00	1,71	15,22	1,37	1,37	1,27	1,82
	Contrato accidental	7,96	4,98	5,36	2,87	4,85	3,24	0,59	2,17	21,89	21,89	7,07	4,27
	Ocupación con permiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ocupación de hecho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos inéditos del CNA 2002

generaciones de ingenieros agrónomos formados en la universidad del neoliberalismo, trabajando para estos actores[4]. Considero que estamos frente a la formación de un nuevo actor (no necesariamente encarnado en una persona única) que ostenta no sólo rasgos económicos propios sino sociales y culturales; por ejemplo, otro tipo de relación con la universidad pública

4 "Bajo la coordinación de Casenave y Asociados, la dirección técnica de Jorge González Montaner, el asesoramiento de Pablo Calviño y la participación de las compañías SPS, Syngenta, BASF, Nitragin, Dow Agrosciences y Glencore Argentina se sembrarán . . . " anunciaba orgullosamente La Nación, Campo el 29 de abril de 2006. Es un pequeño ejemplo de la complejidad del nuevo agente agrario.

a la que la vieja clase terrateniente consideraba un lugar "peligroso", una relación distinta con los medios de comunicación y que, incluso, creó sus propias "exposiciones" anuales de la mano de los principales matutinos porteños (Clarín y La Nación)[5].

Estos nuevos actores productivos junto a los grandes exportadores aceiteras y cerealeras que están lideradas por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina, Aceitera General Deheza, Vicentin y Nidera, etc., son los núcleos del espacio económico que definimos como "agronegocio sojero". Son empresas que exportaron en 2008 por un total de 20 mil millones de dólares, 28,7% de las exportaciones totales del país. Son empresas que se encuentran entre las 20 principales exportadoras (acompañadas por YPF-Repsol, Minera Alumbrera, Tenaris Siderca). Estas empresas están siendo demandadas por el fisco por una presunta evasión realizada entre enero de 2007 y mayo de 2008 que asciende a 1447,9 millones de dólares. Como lo demuestran el artículo de Teubal y Palmisano en este libro, por las características del sistema de retenciones, que en principio son pagadas por las exportadoras, éstas luego las transfieren a los productores. O sea que los productores resignaron ingresos pero éstos no fueron transferidos al Estado. Cabe destacar también que la industria aceitera, frigorífica y otras agroindustrias que forman parte del modelo, también han recibido múltiples subsidios del Gobierno en el marco de una "declarada" lucha contra la inflación. Estos escándalos con los exportadores fueron denunciados por Mario Cafiero y proclamados en el debate parlamentario por el diputado Claudio Lozano (Véase debate en diputados en la Trama y nuestro artículo en Página 12 del 9 de julio de 2008)

¿Por qué insistir en la caracterización de que estamos en presencia de la vieja clase agraria? ¿Por qué tratar de invisibilizar estos profundos cambios en la estructura social agraria del país? Son interrogantes difíciles de responder ya que supone otorgar intencionalidades y no es mi propósito hacerlo sino simplemente mostrar cómo en los grandes debates se pueden "construir" los actores de acuerdo a las necesidades de los mismos. La mía también es una construcción, no existen "personas" o "grupos de personas" que se caracterizan como los caracterizamos nosotros, no existe un grupo que se autoidentifique como "núcleo de poder", por ejemplo. No obstante una vez "realizadas" las construcciones comienzan a ser utilizadas para identificar situaciones o autoidentificaciones (efecto de teoría).

5 Durante el conflicto Gustavo Grobocopatel fue invitado a seminarios universitarios en representación de nuevos empresarios diferenciados de "la vieja oligarquía".

Pasan del espacio teórico al cotidiano. Durante todo el siglo XX historiadores, economistas, ingenieros agrónomos, sociólogos, antropólogos fueron construyendo, contrastando, dando batallas de sentido para caracterizar al sector terrateniente, al chacarero y al campesino en la dinámica de la estructura agraria argentina (véase Giarracca, N., 1999). Esta tarea retoma aquella otra y como entonces los fundamentos teóricos y empíricos son de primer orden.

Caracterizaciones políticas

El antiguo actor "terrateniente pampeano", propietario de grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y agricultura, representado por SRA y por las capas más concentradas de CARBAP, fue quien ostentó un papel económico, político y cultural significativo en la conformación de la Argentina "moderna"; fue quien trató de influir en todos los gobiernos a través de prácticas corporativas o quien apoyó a militares golpistas; es quien hoy mantiene su remanente, una sombra de lo que fue, en las mismas siglas gremiales que lo acompañaron por décadas. No obstante, los contenidos sectoriales y corporativos del sector hoy son muy distintos a los que tuvieron hasta el golpe de 1976. Esta es la base de nuestra diferencia con la postura del Gobierno y sus aliados intelectuales durante el conflicto[6].

Sus dirigentes ni siquiera tenían visibilidad mediática antes de 2008, nadie sabía quien era Luciano Miguens, Mario Llambías, Eduardo Buzzi. Tampoco se sabía que el senador Roberto de Urquía había participado en la lista oficial y era el dueño de una de las empresas "ganadoras del modelo" sojero o que Gustavo Grobocopatel tuviera el poder económico que tiene y que concentrara una profunda admiración de la mayoría de los funcionarios del gobierno. La situación de comienzos de 2008 podría resumirse de este modo en referencia a las relaciones sociales entre actores agrario-Gobierno: 1) los nuevos inversores concentraban las simpatías de los funcionarios del gobierno "por innovadores, empresarios de la sociedad del conocimiento", viajaban en el avión presidencial y ocupaban bancas y puestos de funcionarios[7]; 2) los medianos productores "negociaban" con

6 No sólo nosotros registramos estas diferencias, lo hicieron legisladores, periodistas y otras personas con capacidad de observación.

7 No sólo están los viajes en el avión presidencial sino que existen videos con escenas de Expoagro que muestran estas cercanas relaciones.

mandos medios del gobierno tales como el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados o el presidente del INTA, sin conseguir mucho (una de las razones que explican sus posteriores alianzas) y 3) los miembros de la vieja clase terrateniente, subordinada a los nuevos núcleos del poder, recibían oficialmente la desconfianza propia de los gobiernos democráticos por pecados pasados pero mantenían cierta cercanía social con muchos de los funcionarios de gobierno por la vecindad de sus residencias o por pertenencias a una mismo sector social[8].

El paro, uno de los tantos de las entidades corporativas en todos los tiempos (véase Giarracca, Teubal y Palmisano en este libro), fue convertido en "conflicto" y caracterizado por el Gobierno como crucial e indispensable para cambiar de modelo, para "terminar con la polarización social, con la pobreza y la indigencia". Fue construido para darlo a conocer por los medios e informar al conjunto de los argentinos como un conflicto cuya resolución podía afectar al pacto fundante, es decir un conflicto que refiere a la posibilidad de modificar las reglas aceptadas por el capitalismo de esta etapa. ¿Realmente lo fue? Nuestra hipótesis de trabajo es que no lo fue; con sólo repasar la caracterización de quiénes son los núcleos de poder y con quiénes entraron en conflicto justificamos la hipótesis. El razonamiento gubernamental y el de sus aliados estratégicos sostenía que si se podía disciplinar a los dirigentes agrarios, a los miles de agricultores y poblaciones rebeldes a los costados de las rutas, se estaría en condiciones de tomar el camino hacia la redistribución de los ingresos, en pos de cambios sustanciales en la estructura de clases y hacia la consolidación de una sociedad democrática que vence a sus sectores más conservadores, de derecha. Este fue el transfondo del mensaje que se quería emitir. Este mensaje se encontró con un primer y grave problema: la oposición de los grandes y concentrados medios de comunicación que por intereses diversos habían tomado partido por "el otro" del conflicto, es decir por los dirigentes rurales[9]. De este modo generaron la otra cara de la moneda de la imagen oficial y construyeron su propia "representación social" del conflicto en

8 Información de entrevistas periodísticas televisadas frente a preguntas acerca de los efusivos saludos entre funcionarios y dirigentes en los encuentros en la Casa Rosada.

9 Podría no haber sido así; por ejemplo, en los años con predominio de los sectores terratenientes Clarín representaba intereses desarrollistas industriales con Rogelio Frigerio a la cabeza. Ahora se encuentra muy comprometido con el sistema sojero o agronegocio en general, es en si mismo un importante grupo económico concentrado; basta con analizar un par de ejemplares de su suplemento rural para corroborar esto. Existen intereses económicos en juego pero también ideológicos. El desarrollismo hoy se ubica, según el diario, en la expansión agraria en base a la biotecnología.

la cual el Gobierno, supuestamente, quería manejar una caja más grande para generar hegemonía y mantenerse en el poder; en otras palabras, el Gobierno, en esta postura, deseaba sacarle sus razonables ganancias a un sector emprendedor que generaba riqueza genuina: el sector agrario. A lo largo de los meses la Presidenta, como respuesta a esta acusación, anunciaba nuevas medidas sociales y prometía subvencionarlas con las recaudaciones; trató por meses de demostrar un fin noble para el impuesto como se puede comprobar siguiendo las intervenciones de la Presidenta en el capítulo "La Trama de un conflicto extendido" en este libro.

Intentaremos demostrar nosotros aquí cómo la construcción del Gobierno "campo-enemigo" (de la democracia; de los derechos humanos y redistributivos de la sociedad, etc.) fue una pieza clave para el desarrollo del conflicto y su posterior resolución parlamentaria. Pero también, a nuestro juicio, fue una pieza clave para que el Gobierno perdiera su pulseada con el campo (representado por la Mesa de Enlace) que se encontró muy cómodo en el rol de concentrar las oposiciones y críticas al Gobierno. Como dijo alguna vez Bertolt Brecht en referencia al acto teatral, se había convertido lo cotidiano en algo extraordinario, y los dirigentes se sentían (y lamentablemente aún se sienten) muy a gusto en esa construcción que los transforma de dirigentes de segunda línea a sujetos en situaciones extraordinarias. Si bien no es nuestro objetivo abordar la batalla de sentidos entre estos dos factores de poder (Gobierno-medios) es, sin dudas, el transfondo de cualquier tipo de análisis. De más está decir que nuestros discursos (ver última parte de este libro) intentaron no abonar ninguna de las posiciones y pusimos allí donde nuestras voces encontraron espacios -como estudiosos de la cuestión agraria- brechas que oxigenaran la oclusión discursiva enfrentada.

Pero pasado un tiempo prudencial, es necesario retomar los discursos de quienes rodearon y alentaron las posiciones binarias del Gobierno; esas posiciones que generaron los desplazamientos que investirían a los productores de las rutas de un poder hegemónico que no tenían y proponían repudiarlos como representantes de la "vieja oligarquía"; aquellos discursos que conducían a que la Presidenta el 1 de abril de 2008 comparara el "lock out" patronal al pre-golpe de febrero de 1976 con el paro agrario que ella enfrentaba en una operación de torsión de los hechos reales que preocuparon a quienes vivimos aquellas época[10]; o volver a recordar a

10 Dijo la Presidenta "Las mismas organizaciones [que hoy paran] llamaron también a un lock out patronal, allá por febrero del 76. Un mes después el golpe, la tragedia mas terrible que han tenido los argentinos"..."esta vez no han venido acompañados de tanques sino de 'generales

quienes en el debate intelectual ampliaron con sus calificativos y caracterizaciones supuestamente "expertas" (por la condición de universitarios, pensadores) las distancias que la propia Presidenta, erróneamente a mi juicio, estableció con los sectores medios agro-rurales (no sólo chacareros sino habitantes de las ciudades intermedias del país), que en una gran proporción la había votado.

Cualquier cientista social sabe que la batalla de sentidos fue tan importante como el enfrentamiento parlamentario o las mediciones de la densidad de las marchas y concentraciones en las calles. Por esta razón vale la pena simplemente recordar algunas de las cuestiones que se dijeron. No es nuestra intención analizar esos discursos desde el análisis semiótico sino intentar poner a su lado algunas reflexiones basadas en nuestra propia experiencia en el análisis social y en un derrotero de compromiso político de décadas[11].

Tomaremos básicamente las declaraciones del grupo que se denominó Carta Abierta (CA), formado por un conjunto de intelectuales de la Facultad de Ciencias Sociales bajo el liderazgo de, entre otros, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional

Dicen en su primera carta del 19 de abril de 2008:

> *Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones -comprensible objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fer-*

multimediáticos' " (http://www.casarosada.gov.ar/index). El lock out patronal de carácter golpista de 1976 al que hace mención la Presidenta, lo convocaron no sólo la SRA y CARBAP sino conjuntamente el resto del Consejo Empresario Argentino, con la Cámara de la Construcción, de Comercio, las cámaras de los grandes importadores y exportadores, supermercados, bancos y por supuesto la entidad empresarial de Martínez de Hoz que luego tomaría directamente el rumbo económico del país (la Asamblea Permanentes de Entidades Gremiales Empresarias). ¿Por qué omitir a estas corporaciones industriales y de servicio y, sobre todo, por qué incluir a la Federación Agraria que no estuvo y mantuvo una posición digna allí y durante toda la dictadura militar? ¿Ese "las mismas", un error de la presidenta o una estrategia de sus asesores?

11 Muchas veces durante el conflicto eché mano a mi propia experiencia durante los años setenta como una joven profesional que acompañó el corto período del Ing. Horacio Giberti en la Secretaría de Agricultura, a la vez que participaba en aquel impresionante movimiento social que se proponía transformaciones de fondo para el país.

nández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad... Esta atmósfera política, que trasciende el «tema del agro», ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. ***Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad[12].***

En el primer párrafo se delimitan los dos actores en conflicto y deducen la caracterización del mismo, veamos: "dura confrontación"; "sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes" y "un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta...". Se describe una atmósfera política que trasciende el tema del agro y pone en jaque a la democracia misma. De este modo, el paro con sus actores que luego se constituirían en la Mesa de Enlace, se convertirán desde el comienzo, según CA, en quienes impedían el programa democratizador de la Presidenta inaugurando su gestión.

Desde 2003 el Gobierno del matrimonio Kirchner apostó fuertemente al modelo productivo extractivo como una de las patas importantes de su plan económico para el país (véase discurso de 2004 de Néstor Kirchner presentando el Plan Minero o la celebración en las páginas gubernamentales acerca del país que en la agricultura había dado el salto "productivista"). Los núcleos de poder del sistema productivo extractivo y de servicios públicos (refrendado por los Kirchner), las empresas exportadoras que se quedan con las retenciones (véase artículo de Teubal y Palmisano en este libro), las proveedoras de insumos como Monsanto, los grandes lobbistas de la deuda externa, los grupos nacionales concentrados como Techint, las corporaciones mineras como Barrick Gold o la Alumbrera, las empresas de la privatización de los ferrocarriles, de los subterráneos, los grandes me-

12 El destacado es mío.

dios de comunicación, son quienes comandan con el Estado argentino el modelo económico. Estos fuertes actores económicos y políticos gozaban del consenso de empresarios nacionales agrarios, industriales, de servicios, de casinos y juegos, etc. de las distintas regiones del país. Algunos por convicciones ideológicas y otros por subordinaciones de diversos tipos. En la actualidad ese consenso se ha resquebrajado, asistimos a una crisis de consenso hegemónico y en tal sentido el Gobierno aparece en litigio con muchos de sus antiguos aliados, todos aquellos que constituyeron con el Estado el pacto fundante del capitalismo de esta etapa del neoliberalismo (posterior a la década de 1990).

El interrogante que nos hacemos es ¿con este modelo es posible la redistribución de la riqueza más allá de las políticas asistenciales también consensuadas con los que diseñan estos modelos (Banco Mundial)? ¿Es el paro de los productores y ese relativo monto de ingresos fiscales (véase artículo de Teubal y Palmisano en este libro) que ganaba o perdía el Gobierno lo que imposibilitaba un cambio de rumbo del país? ¿Por qué los Kirchner deciden utilizar las demandas de los productores agrarios para tratar de imponer a la sociedad una imagen binaria de si misma?

Cuando la presidenta Fernández decide responder en términos descalificadores a los productores en las rutas, esperaba sin duda despertar las viejas antinomias del peronismo, tanto de 1945 como de 1973, referir a ese otro país injusto, de importante base agraria, al que el General Perón y Evita aludían constantemente en sus discursos[13]. Sin embargo, esta estrategia no tuvo los efectos esperados sino el efecto contrario: se convertiría en un catalizador de muchos descontentos que los sectores medios tenían con el Gobierno en su nueva etapa. Y estos se hicieron escuchar como en ningún otro momento porque los medios de comunicación decidieron tomar sus voces para posicionarse también en contra del Gobierno. De este modo, los tradicionales sectores que se oponen a la política de derechos humanos del Gobierno, el arco político partidario opositor y esa clase media –generalmente con poca voz mediática- se unieron a los reclamos del campo y constituyeron un espacio político confuso con voces superpuestas. En ese espacio también se encontraban sectores de la izquierda tradicional parlamentaria (Vilma Ripoll), grupos piqueteros y gran parte de la "centro izquierda". Allí se constituía el espacio dicotómico al que

13 El enfrentamiento de Juan Perón con la oligarquía ganadera en su primer gobierno llevó a ésta a buscar su histórica alianza con sectores de las FFAA, sobre todo la Marina. En 1973, con el corto lapso de Cámpora-Juan Perón, la política de intercepción de renta agraria fue política de Estado

alude unos días después CA. Es decir, entre el Gobierno y los medios de comunicación lograban borrar ese rasgo abigarrado de grupos para convertirlo en "la voz del campo", espacio homogéneo, sin fisuras. CA registra inmediatamente el papel de los medios de comunicación y sostiene en esa primera carta:

> *En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente «la realidad» de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen «la verdad» sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el raiting. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las* ***mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan***[14] ***.***

Estaríamos totalmente de acuerdo con este párrafo si no fuera por la operación discursiva de ocultamiento de estas mismas capacidades semióticas del poder político. El Gobierno a través de sus voceros también estructuraba diariamente "la realidad de los hechos" con dispositivos que generan sentidos, interpretaciones y definen la verdad sobre los actores sociales y políticos. Estábamos frente a una verdadera batalla de sentidos con dos poderosos actores enfrentados: el primero por contar como pivote al Estado y el segundo, el llamado "cuarto poder" mediático (con el que el Gobierno había acordado desde 2003). En este espacio dicotomizado que pretendía generar distintos sentidos, los grandes perdedores fueron la duda, las posiciones que recogieran la historicidad del suceso, que pusieran toda la información disponible en el juego de nominar y significar. Lo más importante de remarcar aquí es que ni el Gobierno ni los medios de comunicación resaltaban lo que estaba por detrás de la construcción binaria: el gran "agronegocio" generador de riquezas que ambos grupos aprovechan mucho más que los chacareros o los ganaderos. Si algún calificativo cabe al conflicto, sobre todo por la intervención del monopolio mediático (Grupo Clarín), se orientaría a ubicarlo al interior del bloque de poder hegemónico hasta marzo de 2008.

14 El destacado es mío.

Frente a esta interpretación vale preguntarse ¿Por qué los actores ruralistas seguían el juego, entonces? FAA trataba de hacer explícito su rol subordinado mediante las voces de dirigentes de segunda línea pero eran simples susurros en el contexto de los grandes poderes y, por otro lado, a los dirigentes de primera línea se los veía muy cómodos en el nuevo papel de visualización política en el que factores contingentes los habían ubicado. Gustavo Grobocopatel no aparecía en los medios, por el contario era invitado a seminarios universitarios (en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por ejemplo) como integrante de la "sociedad del conocimiento" para discutir el conflicto que, supuestamente, no lo involucraba.

Tal vez por la cercanía de sus propios orígenes culturales, por razones políticas coyunturales, u otras razones, la mayoría de los sectores medios urbanos de Rosario, Córdoba y una buena parte de Buenos Aires no fueron convencidos por el discurso binario que apuntaba a los agricultores como la condensación de los límites de una democratización e inclusión social; entonces surgió la otra idea fuerte de CA: estábamos frente a un operativo "destituyente del gobierno popular", concepto que desarrollará más extensa y claramente CA en la V Carta, ya en los epílogos del núcleo del conflicto (abril de 2009)

> *Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra, nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrílocuos, pronostican el próximo viraje. El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.*

¿A qué se llamaba restauración conservadora? ¿A la del Centenario, a la del país agroganadero de 1910? ¿Al criminal intento de 1976 en su momen-

to represivo? Estamos seguros de que quienes esto escribieron, acordarían con nosotros que la restauración del conservadurismo de comienzos del siglo XX la dejamos en ese triste pasado del país. La configuración conservadora que sufrimos en el presente, la más enquistada y difícil de desarmar en el país actual, es de manufactura "menemista" (recordemos que se la llama además de neoliberal, neoconservadora); es esa construcción que toma su punto crucial en los noventa pero se prepara desde el golpe de 1976 y se proyecta en estos complejos presentes. La restauración conservadora no es un peligro futuro a partir del conflicto campo-Gobierno, sino un proceso en marcha y de muy difícil desactivación sin una fuerte decisión política, sin otro tipo de Estado, sin otro pacto fundante, sin una nueva Asamblea Constitucional. Por otro lado, los actores políticos son activos constructores de este modelo que hemos denominado "modernización conservadora" (véase entrevista a Norma Giarracca en González Arzac. R., 2009). La gran mayoría de los gobernadores y exgobernadores (Néstor Kirchner, Felipe Solá, Juan Carlos Romero, Eduardo Duhalde, etc.) son actores de primer nivel desde muy temprano en la consolidación de este modelo. En él, a nuestro juicio, participaron no sólo Carlos Menem y Domingo Cavallo, sino que a partir de 1994 comenzarían a participar activamente el conjunto de gobernadores (y partidos políticos) a quienes se habilita, por la reforma constitucional, para tomar en sus manos el destino de los recursos naturales de este país. Tal vez ésta sea la etapa más peligrosa e irreversible del modelo, y en ella el matrimonio Kirchner así como José Luis Gioja o Mario Das Neves, son piezas claves para su consolidación. Recordemos nuevamente que el senador Roberto de Urquía o César Gioja estaban en las listas que acompañaron las candidaturas de Cristina Fernández y Néstor Kirchner respectivamente.

El campo entró algo más tarde en la "modernización conservadora" de la mano de un modelo productivo que se asemeja a las producciones extractivas de la minería, el petróleo y que conceptualizamos como "agronegocio". Para que tal cosa sucediera, se necesitaron legislaciones, políticas públicas, nuevas direcciones de biotecnología en la administración pública, etc. Todos los funcionarios del gobierno actual y el de Néstor Kirchner son acérrimos defensores del modelo extractivo: sojero, minero, petrolero. Todos estos actores económicos correspondientes al nuevo modelo no necesitaban representación política: ya la tenían y la mantienen férreamente dentro del Estado y del grupo político gobernante. CA seguía sosteniendo en su quinta carta:

Los líderes del "partido del orden", mientras aguardan el auxilio de la crisis, no pueden atravesar ciertos dilemas de parroquia: ***¿qué representación política dará finalmente el nuevo bloque agrario que trae la sorprendente fusión en las consignas de los agronegocios de los sectores que antaño se diferenciaban por distintos tipos de actividad agropecuaria?***[15] *Una nueva soldadura material y simbólica ha ocurrido frente a las nuevas características tecnológicas y empresariales de la explotación de la tierra sobre el trasfondo de ganancias inesperadas. Se trata de un bloque "enlazado" que, bajo un débil manto de republicanismo, se propone la cruzada restauradora y para hacerlo declara vetustos a los desvencijados partidos remanentes, exige una derechización social y pone en crisis también a las tradicionales representaciones del sector.*

Si algo se constató después del tiempo transcurrido desde la cima del conflicto es que toda la administración pública apoya el modelo de expansión sojera con inusitada coherencia. Y esto en el ámbito político, mientras que al mismo tiempo que se pone la responsabilidad de todos los problemas de polarización social del país en los productores agrarios, se sigue apoyando como política de estado la soja, el petróleo y la minería. Carta Abierta no fue ajena al apoyo que el Gobierno nacional daba a todas las instituciones agronómicas y científicas, articuladas con este modelo al que tantas veces Gustavo Grobocopatel anunciaba como el verdadero logro de la "sociedad del conocimiento". ¿Entonces por qué necesitarían los agricultores una representación política nueva para las consignas de "agronegocio"? Recordemos la denuncia del investigador Andrés Carrasco contra los efectos dañinos del glifosato sobre embriones efectuada en abril de 2009 (Página 12, 13 de abril de 2009). Cuando se hizo pública, salieron todos los dispositivos a cargo de los distintos ministerios para contrarrestar el impacto del anuncio ¿necesitaban un partido propio acaso los simples consumidores del agroquímico (los agricultores) para lograr semejante colaboración? Es evidente que no lo necesitaban porque no se trataba de sacar parte de los impuestos a los heterogéneos capitalistas del país sino de cuidar el negocio de una de las empresas más cuestionadas del mundo: Monsanto. Ni la denuncia, ni el impresionante apoyo de la comunidad científica internacional (véase www.voces-de-alerta.blogspot.com) impidieron al Gobierno archivar el asunto del glifosato (mientras las de-

15 El destacado es mío

nuncias de las poblaciones afectadas aumentan y el gran sufrimiento social sigue).

Alrededor de mayo, cuando CA proclamaba formas nuevas de "golpes de estado", nosotros nos sumamos a las variadas voces que pedían que el debate se diera en el Congreso de la Nación (véase Página 12, 19 de mayo de 2008); la situación se iba tornando muy violenta dado la construcción maniquea "amigo-enemigo" que gobiernos e intelectuales defendían y en la que el campo opositor (medios, partidos opositores y Mesa de Enlace) parecía sentirse muy cómodo. Un puñado de periodistas independientes, políticos de centro izquierda (Claudio Lozano, Eduardo Macalusse, Pino Solanas, Alcira Argumedo, Ernesto Tenembaum, etc.) pedían semana tras semana tratar de "calmar las aguas" y buscar un espacio de debate acorde con la democracia que teníamos entre manos. El peligroso dispositivo "schmiteano" de amigo-enemigo podía generar consecuencias no deseadas en rutas y calles urbanas donde los enfrentamientos se caldeaban. Y en efecto, cuando comienza la etapa parlamentaria del conflicto, la situación se despeja de esa oclusión que la había caracterizado hasta entonces. Como podemos registrar en el primer capítulo de este libro -"La Trama. . ."- el 17 de junio la Presidenta manda el proyecto al Congreso e inmediatamente el oficialismo se encolumna en el mantenimiento de la Resolución N° 125; no obstante con el transcurrir de los días el proyecto se fue modificando y tomando en consideración muchos de los reclamos de los productores más allá de las retenciones. Pasaron muchos grupos, técnicos, especialistas por el Congreso donde las comisiones debatían y decididamente comenzaba otra etapa del conflicto.

No obstante estos avances en la discusión con mayor envergadura conceptual y empírica, el ex presidente Néstor Kirchner concentró el núcleo duro del discurso oficial y llevó el conflicto a las calles de la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno decidió "medir" fuerzas alrededor del Congreso y si bien la situación parlamentaria distendió el enfrentamiento, el grupo callejero que se llamó "compromiso K", endureció su discurso y CA se propuso comprender en sus propios términos las razones por las que las movilizaciones del campo (o antigobierno) eran tan masivas.

> *Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada "sociedad del conocimiento", y ésta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar "fuera de la política", pero munidos de*

> *jergas sustitutivas de la experiencia pública.* ***Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta "falsa conciencia" de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin Estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico*** (Carta Abierta III, junio de 2008).

Lo que más llama la atención en la interpretación "de las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas" dispuestas a fundar un nuevo federalismo sin historia, sin estado, sin instituciones y sin sujeto, es la mención a un posible descrédito de lo político que comienza a destituir a las masas populares y "sus imperfectas maneras". Referencia peligrosa y anticuada que siempre refiere a la supuesta "representación de las víctimas silenciosas" (las "masas populares") que las viejas concepciones políticas amparadas por los sistemas de representación siempre se atribuyen (desde los conservadores populares hasta la vieja izquierda). Si algo llamó poderosamente la atención en las movilizaciones de uno y otro bando del conflicto fue la pasividad que los sectores populares del Gran Buenos Aires -otrora base de los redistributivos peronismos "con Perón"- mostraron en la coyuntura.

¿Cuáles eran las imperfectas maneras de "los de abajo y los de más abajo"? (como suelen decir los zapatistas): ¿acaso las manifestaciones de los tradicionales gremios de la CGT con sus prácticas gremiales habituales? ¿Las intempestivas apariciones de Luis D'Elia en la Plaza de Mayo? Fue muy notable que ese gran espacio, desconocido, invisibilizado por los medios de comunicación (quienes reflejan a sus habitantes sólo como "sujetos de la inseguridad") de los sectores populares urbanos no tuvo voz pública, no llegó a los espacios de las disputas callejeras. Estuvo ausente, callado, tal vez agobiado y distraído por sus propias condiciones de existencia (véase el capítulo de "La trama. . . ."). Mientras los sectores subalternos del campo tuvieron voces en los medios de comunicación (Página 12 sacó declaraciones del MOCASE, del CAI, y de otros movimientos campesinos) a aquel sector sujeto de la política del país de la industrialización na-

cional, de la redistribución peronista y radical, se lo percibió callado y pasivamente transportado en una u otra movilización gestionadas por los intendentes de todo el país (recordemos la muerte del joven tucumano, véase Crítica 7 de julio de 2008 en este libro).

Algunas voces cercanas al gobierno –algunos miembros de CA y funcionarios– intentaron colocar en el debate "el viático" (transporte y un dinero) como nuevas formas de expresión de los sectores populares y que las críticas a estas gestiones constituyen prejuicios de clase media. A mi juicio esta fue una pobre concepción de los modos de lograr los apoyos populares o justificar ese modo "neoliberal" del gobierno para acercarse a ellos. El Vicepresidente de Bolivia, el intelectual y ex activista Álvaro García Linera sostiene en su extenso trabajo sobre los movimientos sociales de su país, que los hombres del orden siempre sospechan de los supuestos "financiamientos espurios" de las largas marchas y huelgas porque no pueden creer cómo el pueblo boliviano puede mantenerse en tiempos de protestas con sus propios recursos, sin un centavo externo a sus propios bienes; agreguemos que estaba hablando de sectores tan (o más) desposeídos como los sectores más castigados del gran Buenos Aires. En nuestro propio país, el peronismo popular, ese de los barrios obreros, las villas, los suburbios, demostró durante muchas décadas que no necesitaba "incentivos" para acompañar los proyectos que consideraba "suyos". Fueron marchas que llegaron al millón de personas convencidas de que sus propios destinos estaban atados al proyecto que apoyaban.

Por aquellos meses de invierno, las clases medias urbanas se dividieron entre uno u otro espacio; CA es un claro ejemplo de esto, profesionales, maestros, artistas, universitarios, muchas texturas de sectores medios que formaron este colectivo con el claro propósito de apoyar y defender al gobierno de los Kichner frente al "golpista campo". En tanto en las marchas pro-campo se podía encontrar un amplio espectro de profesionales, empleados, docentes, pequeños empresarios que se ubicaban en dicho espacio por una difusa simpatía con "la lucha del campo" pero también, según las encuestas que logramos hacer durante los cacerolazos, por un nítido repudio al gobierno de Cristina Kichner. Las razones de la oposición al gobierno que registramos en entrevistas que realizamos en tres marchas de la ciudad de Buenos Aires son difíciles de organizar; se mezclan cuestiones acerca de los rasgos de personalidad del matrimonio en el poder (soberbia, autoritarismo, falsedad, etc.) con un reclamo que se convirtió en una constante en las entrevistas: falta de transparencia en

los usos de los fondos públicos (incluía corrupción, manejo de los ámbitos de control, acercamiento de amigos empresarios que reciben prebendas, etc.). Las entrevistas fueron realizadas en la zona de Belgrano (Cabildo y Monroe, Cabildo y Juramento). Podemos suponer que en San Isidro, Olivos, Recoleta con predominio de sectores altos cercanos a los militares esas marchas expresaran otros sentidos cercanos al intento de desactivar la política de derechos humanos que generó el gobierno en respuesta al requisito de los organismos de derechos humanos. Entre las decenas de entrevistados en tres marchas, el 42% había votado a Cristina Fernández, el 33% a Elisa Carrió.

El debate parlamentario fue de un alto nivel de discusión y terminó en un empate pero el Senado, con el voto del presidente de la Cámara de Senadores y Vicepresidente de la Nación, inclinó la balanza para el lado del campo: se sustrajo la situación al 10 de marzo de 2008. Pero hubo derrotas anteriores, en la calle y en los medios; no obstante la derrota más importante para el gobierno no fue en esos momentos sino otras consecuencias tales como las elecciones de junio de 2009, la ruptura con el Vicepresidente de la Nación (Presidente de la Cámara de Senadores) y el exacerbamiento del enfrentamiento con el grupo mediático Clarín, quien se convirtió en el peor y más brutal opositor del gobierno. A partir de ese momento, coincidimos que el Gobierno Nacional se enfrenta a un concentrado grupo económico que se propone sustituirlo (electoralmente) para seguir con ese imperio montado en base a oscuros y ominosos procesos (adquisición de Papel Prensa) que hasta 2008 no había salido a la luz. El modelo sojero sigue como la minería a cielo abierto, el despilfarro de agua de glaciares, la contaminación de los ríos, aumentan los casos de enfermedades por la fumigación con glifosato y muchos etcéteras.

Algunas reflexiones a modo de conclusión

En 2009 no se formó "el partido del campo", no se registró un "giro a la derecha" institucional sino que en las elecciones de junio de 2009 hubo una gran dispersión del voto entre: 1) los sectores aliados al gobierno (gran parte de los gobernadores mencionados anteriormente); 2) la alianza del peronismo disidente con el "macrismo" (seguidores de Mauricio Macri y muchos de los ex-gobernadores mencionados anteriormente), 3) un espectro de alianzas entre radicales, coalición cívica (seguidores de Elisa

Carrió), "cobismo" (seguidores del vicepresidente Cobos), parte del socialismo y 4) una nueva franja del centroizquierda que en parte levantó la bandera crítica al modelo productivista extractivo: Proyecto Sur pivoteado por la figura del cineasta Pino Solanas, con parte de la CTA, parte del socialismo, desprendimientos de la Coalición Cívica y otro pequeño espacio del intendente de Morón, Martín Sabatella, más cercano al kirchnerismo. Además se registró un alto nivel de abstencionismo (27%).

Los festejos poselectorales mostraron que nadie ganó plenamente pero que el gobierno de los Kichner perdió sus mayorías parlamentarias y pasó a constituir la primera minoría. En algunas de las provincias en que más se sufre el modelo minero, por ejemplo La Rioja, encontraron motivos para festejar la derrota del oficialismo que se llevó puesta a la por entonces Presidenta de la Comisión de minería en la Cámara de Diputados; ganó un riojano productor agropecuario. El socialismo de Santa Fe que apoyó a sus agricultores y que nadie puede suscribir que represente a la nueva o vieja derecha, refrendó su papel en la provincia.

¿Y el campo? Pablo Orsolini (Frente de Todos, por la provincia del Chaco) Ulises Forte (FREPAM), por La Pampa, Juan Francisco Casañas (ACyS – por Tucumán), Estela Garnero (Unión por Córdoba) por Córdoba y Lucio Aspiazu (Encuentro por Corrientes-ACyS) por Corrientes, todos de Federación Agraria, juraron como diputados nacionales en diciembre de 2009. Otros entraron como diputados provinciales como Jorge Solmi, PRO en la provincia de Buenos Aires (Véase las cifras y nombres completos en el artículo de Castro García, Comelli y Palmisano en este libro).

"Un hecho histórico", titula la noticia el sitio de Internet de Federación Agraria. Y en efecto, la participación directa en la política había sido casi un privilegio de la SRA, desde diputados como Guillermo Alchouron hasta miembros de dictaduras como Alfredo Martínez de Hoz. El antecedente más inmediato es el de Humberto Volando, que después de muchos años de presidente de la Federación Agraria se convirtió en diputado nacional. El conflicto de 2008 posibilitó esta representación "rural" en distintos partidos políticos, algunos considerados "de derecha" (como el PRO) pero muchos en partidos de larga tradición democrática como la Unión Cívica Radical. Lo que ocurre es que esa "larga tradición democrática" fue adaptándose a los tiempos neoliberales y ni el peronismo ni el radicalismo persisten en la querella por la igualdad. Por otro lado existen sobradas pruebas que demuestran que las "representaciones corporativas" en el Congreso Nacional nunca fueron buenas para la democracia.

Sólo en los discursos de una pequeña franja de legisladores y funcionarios estatales del poder ejecutivo y judicial podemos hallar núcleos semióticos de nuevas emancipaciones necesarias y rechazos explícitos a todos los discursos de derecha. Estamos parados en una situación que contiene 35 años de neoliberalismo, 30 mil desaparecidos, y un bombardeo mediático diario de apoyo al modelo y sus "necesidades sociales" (cárceles, seguridad, etc.). Lo extraordinario es que haya resistencias a estas posiciones de derecha que también cruzan el arco social y político.

El gobierno nacional es hegemónicamente neoliberal –del siglo XXI y no de los noventa– aunque se presente con un supuesto discurso progresista. Ha hecho justicia con los derechos humanos y ha sacado una buena ley de medios de comunicación, pero la brutal entrega de recursos naturales y la ceguera frente al sufrimiento social del hoy (la sistemática muerte y desapariciones de jóvenes/niños en los sectores populares, por ejemplo) colocan estos aciertos en otra perspectiva.

Por último, estos debates son necesarios porque la "realidad" resulta de discursos y prácticas que son objeto de interpretación. Michel Foucault (1991) pensaba el discurso como juego estratégico "de acción y reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y retracción y también de lucha. El discurso –decía– es ese conjunto de hechos lingüísticos en determinado nivel, y polémico y estratégico en otro" (1996: 15). Las prácticas dejan algo así como marcas, huellas, a veces simples palabras dichas o escritas y es necesario recoger todo para intentar convertirlo en esas situaciones y procesos que luego, en las narrativas del investigador social, aparecen coherentes. Son los actores quienes otorgan significados y sentidos y desde ellos se nutre el narrador (sea ensayista o investigador social) para otorgar interpretaciones a determinada situación. Podríamos decir que el análisis social es (o debería ser) siempre más democrático que la sociedad que estudia: no le niega la palabra a nadie y necesita de todas las voces para comprender los complejos procesos que los hombres y mujeres construyen, en posiciones asimétricas, en la lucha por la ganancia, por el poder político, por atávicos sentidos de pertenencia, por reconocimientos de todo tipo, y muchos etcéteras. Las posiciones sociales son fundamentales, como decía Pierre Bourdieu (1988) son importantes porque no son intercambiables, no es lo mismo un "chacarero" que Grobocopatel, un desocupado que un chacarero. Las relaciones de poder existen, las subordinaciones capaces de imponer devastaciones y maltratos sociales también.

Por eso es tan importante en cada tiempo el esfuerzo por dar cuenta de los mecanismos de poder, de subordinación, de explotación. Por eso son tan importantes las batallas, todas las batallas, las que llevan adelante el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Consejo Asesor Indígena, grupos de productores medios críticos de la conducción de Federación Agraria, las asambleas de pueblos cordilleranos, las publicaciones de Biodiversidad (Grain), las huelgas de nuevos grupos de jóvenes obreros, los periodistas responsables, los científicos conscientes, los abogados autointerpelados, los legisladores transgresores del orden económico, la Iglesia de los pobres, los universitarios que pelean por la independencia de pensamientos y todo aquello que se orienta a buscar nuevos sentidos para la construcción de una vida social. En las sociedades que aspiran a democracias profundas y densas, se necesitan todas las voces y todas las batallas, también aquellas que producen los debates. Se trata de buscar senderos emancipatorios para construir nuevos modos justos, convivenciales (Illich, I.; 2006) y libertarios de producir "espacios de esperanza" (Harvey, D. 2004) y el interrogante siempre abierto es qué papel puede jugar este viejo Estado-nación que en muy pocas ocasiones históricas enfrentó la querella por la igualdad en contra del gran poder económico (véase mi prefacio al libro de De Sousa Santos, 2010). De esto se trata este debate. La aspiración de quien debate en la arena política se basa en acompañar el discurso con ciertas actitudes decodificadoras que "anticipen el poder desestructurador de la factibilidad social misma" (Roig, 2009:45). Pero como este autor mismo alerta no siempre el discurso contrario puede evitar las formas discursivas de lo que quiere oponerse. Esto se inscribe en la "colonialidad del saber", en evitar la posibilidad siempre abierta de que se piense especularmente en relación con "el amo" a quien se pretende reemplazar. Y aquí nuevamente la cuestión de los "polizones" del discurso liberal de la "democracia moderna", del "desarrollo y progreso", juega un importante papel.

El sutil arte de entramar

Daniela Mariotti

"Una investigación seria conduce a reunir lo que vulgarmente se separa o a distinguir lo que vulgarmente se confunde"

"El oficio del sociólogo"
Bourdieu, Passeron y Chamboredon

Por definición una trama es el relato de acontecimientos que pueden o no estar ordenados cronológicamente. A diferencia de otras construcciones narratológicas, que contienen un conjunto de sucesos según el orden causal y temporal en el que ocurren, una trama los narra en la forma en que el autor o el narrador los presenta.

Como señalamos en otro libro realizado por el GER-GEMSAL, *"Tiempos de Rebelión: que se vayan todos. Calles y plazas en la Argentina 2001-2002"* (2007), en el que se sistematizaron los sucesos del incandescente diciembre de 2001, la construcción de una trama presupone la selección y encadenamiento de los acontecimientos y de las acciones y la posterior realización de una síntesis de lo heterogéneo, que surge de la disposición de los hechos en una historia, pues en la dinámica del construir la trama se extrae de "un polvo de acontecimientos un relato unificado" (Ricoeur, 1996:28). El fundamento epistemológico que sostiene la trama es que a partir de la construcción de un relato se torna comprensible la conexión existente entre las diversas acciones sociales. En otras palabras, los acontecimientos de la vida, las distintas experiencias que se suceden y las situaciones hallan su significación al ubicarlas dentro de la urdimbre de una trama.

Es justamente en esta capacidad de ensamblar, de estructurar, de disponer sucesos discontinuos, que la trama se presenta como una herramienta metodológica adecuada para la representación y comprensión de las acciones sociales, pues esta estructuración transforma los incidentes y acontecimientos en una historia.

Estos acontecimientos, en el sentido de "momentos de novedad" (Birulés, en Aravena, 2005) no se deducen de sus antecedentes, sino por el contrario, son ellos los que iluminan los elementos que se cristalizan para

generarlos, retrospectivamente y bajo la forma de relato. Es en el relato, en la creación de una trama, donde finalmente va a producirse la significación y el sentido.

Consideraremos en términos generales que el arte de entramar es la producción de un texto narrativo, confeccionado por un autor que a partir, de un punto de vista (criterios de orden y selección) crea y reconfigura un mundo de interrelaciones entre diversos actores (en alianzas y conflictos), en una sucesión de acciones organizadas que permiten a los lectores, la interpretación de un momento histórico.

En este sentido el quehacer narrativo provee a la realidad social de inteligibilidad, amplía los marcos de su legibilidad, profundizando y enriqueciendo la comprensión de los actores sociales sobre sus propios mundos.

La trama, como dispositivo metodológico, nos permite aprehender las realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos.

Si por un lado parece no haber comprensión del tiempo humano fuera de su inserción en un marco narrativo, por otro lado la narrativa es la única forma cognoscitiva con que contamos para entender la causalidad en relación a las acciones de los agentes sociales (Mariotti, 2007).

Ahora bien, en el libro que aquí se presenta, los autores construyen y presentan la trama del conflicto agrario vivenciado por el país durante el mes de marzo de 2008 hasta el 17 de julio; de este modo se da visibilidad no sólo a la multiplicidad de argumentos, y acalorados debates acerca de la conveniencia o desavenencia de la aplicación del aumento en el porcentaje de retenciones a la soja, si no también a las acciones de protesta corporativa que llevaron adelante en dicho periodo tanto los actores antagónicos a la medida impulsada por el Gobierno (la Mesa de Enlace, sectores de la oposición política, y de la sociedad civil) como quienes estuvieron a favor. En este suceder de los acontecimientos se pusieron de manifiesto también los intentos de negociación y búsqueda de acuerdo entre las partes antagónicas, para dar fin al conflicto.

De esta manera, para construir *"La Trama de un conflicto extendido. El conflicto agrario marzo – julio de 2008"*, que en este caso se presenta también ordenada cronológicamente, los autores realizaron un minucioso análisis de seis diarios, tres de ellos nacionales: *Clarín, La Nación y Página 12;* y tres diarios provinciales: *El Diario*, de Entre Ríos, *La Arena*, de La Pampa y *La Capital*, de Santa Fe, día por día, para reunir en un único relato, los acontecimientos que se fueron sucediendo. Ahora bien,

se debe aclarar que en la construcción narratológica que han hecho los autores de este único relato, se trascendió la simple enumeración de hechos implicados en el conflicto. En efecto la organización de los mismos supuso la selección de criterios, que como se observará responden al del tipo de acción de protesta (piquetes, actos, etc.), acciones institucionales; o bien tipo de actores que fueron implicándose, o las ubicaciones territoriales y las distintas argumentaciones.

El uso de varias fuentes periodísticas sobre un mismo recorte temporal, permitió a los autores componer un relato acerca de cómo se fueron dando los hechos, deshaciéndose en el ensamble del acontecimiento, de la mirada particular, de la impronta y o posicionamiento político que los medios periodísticos poseen y transmiten sobre el mismo. En este caso fue muy importante controlar el uso de la información generada y transmitida por algunos medios de comunicación, ya que algunos de ellos fueron activos participantes del conflicto, militantes de la oposición al Gobierno, caso Clarín y otros se posicionaron como los canales en los que aparecían las voces de apoyo a las retenciones, o posiciones independientes y críticas como Página 12. Por esta razón el uso de varias fuentes de información permitió a los autores sustraerse de las contiendas que se sostenían desde los medios y trabajar con datos neutrales para configurar otra mirada sobre "el conflicto del campo".

En este sentido se tornó muy importante también, trabajar con diarios provinciales, pues son éstos los que otorgan visibilidad a aquellos episodios puntuales de alcance local, que en muchas oportunidades no son tenidos en cuenta desde la mirada de los periódicos nacionales. Finalmente, la cantidad de medios periodísticos que se han utilizado en este trabajo debe su recorte al criterio de redundancia o saturación de la información, es decir, el uso de más diarios no proveyó de nuevos aportes, ni de nuevos contenidos.

Ahora bien, mientras que en *"Tiempos de rebelión: que se vayan todos. . . "*, la trama fue implementada como estrategia metodológica para ordenar las múltiples subjetividades que aparecían día a día, en el escenario altamente convulsionado y heterogéneo de diciembre de 2001, expandiendo la cartografía y el formato de los reclamos y conflictos, en este libro, la particularidad de la construcción del relato fue la de dar a luz a la dinámica del "conflicto del campo", a través del señalamiento de los actores en juego, sus posicionamientos, sus argumentos, las distintas alianzas que se fueron formando a medida que el conflicto se intensificaba, las ac-

ciones colectivas de protestas y diversas apariciones en el espacio público, conjuntamente con una exhaustiva localización territorial. Por otro lado se pretendió, incorporar a lo largo de la trama a todas aquellas manifestaciones, comunicados de los movimientos campesinos y de las distintas organizaciones sociales que aparecían a favor, en contra o en una tercera posición.

En "*Tiempos de rebelión: que se vayan todos. . . "*, la trama hizo hincapié en la potencia, en la creatividad de aquellas mujeres y hombres "de abajo y de más abajo", ávidos de emancipación y de posibilidades, deseos de construir nuevos lenguajes y nuevos poderes (Zibecchi, 2007), y no privilegió en su relato ni el quehacer ni el discurso estatal, institucional, o partidario; en esta trama por el contrario se reinvierte el foco y se profundiza en las acciones y discursos de aquellos actores en irreconciliable disputa, pero que sin embargo nunca se han corrido, ni han cuestionado, por un lado o por el otro, al orden hegemónico, al modelo de producción y desarrollo de la Argentina de los últimos años.

No se trató de un conflicto que ampliara los derechos de la ciudadanía o la escena política, en términos de Ranciere (1996) para quien la política no es el simple hecho por el cual, "unos hombres, gracias al privilegio de la palabra, ponen en común sus intereses. Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hace contar entre éstos e instituyen una comunidad por el hecho de poner en común la distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aquel en que no son. . . " (1996:42). Más bien se trató de un conflicto, que como bien deja entrever esta trama de acontecimientos, muchas partes fueron invisibilizadas, o fueron habladas por el discurso del poder y el oficial, inhibiéndoseles la posibilidad de manifestar el desacuerdo y terceras o cuartas posiciones respecto del nudo conflictivo.

Como se sostenía inicialmente, una trama como dispositivo metodológico, ya sea que nos proporciones un relato sobre los acontecimientos disruptivos de intentos y búsquedas emancipatorias o por el contrario de acontecimientos que solidifican lo dado, lo imperante, siempre nos provee de los trazos de composición y de orden, que no siempre están ahí a la mano en la vida cotidiana.

Las colaboraciones periodísticas: la reflexión en situación

No a los agronegocios

Mocase-Vía Campesina[1]

Página 12– Economía– Opinión
Jueves, 27 de marzo de 2008

Desde los ranchos santiagueños, algunas memorias ante las protestas del "campo argentino":

1. Nosotros, miembros de comunidades indígenas y campesinas, familias organizadas en territorios, recordamos que la Tierra es un bien aún lleno de vida diversa, donde la humanidad y los pueblos quieren desarrollar los sentidos de la existencia.
2. Las grandes corporaciones de las cadenas agroindustriales imponen a los pueblos y países un modelo de producción alimentaria, cuyo único objetivo es la rentabilidad y concentración de las riquezas en pocas manos, con la complicidad activa de gobiernos, empresarios y, en el caso del actual "paro del campo", de los miembros de las cuatro entidades agropecuarias de Argentina.
3. El doble discurso de los dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) los ha llevado a un callejón sin salida. Sus prácticas reproducen el modelo de saqueo y contaminación tanto de la tierra, los territorios, así como también de su mentirosa pretensión de representar las luchas más genuinas de los movimientos campesinos en Argentina.
4. Este modelo agropecuario neoliberal, de saqueo y contaminación, reproduce nuevas formas de colonización y genocidio. ¿Qué hicieron estas cuatro entidades cuando en la etapa menemista desaparecían millares de unidades familiares de producción agraria?

1 Movimiento Campesino de Santiago del Estero–Vía Campesina, integrado por 9000 familias rurales organizadas, en lucha por la defensa del territorio y que rechazan el actual modelo de agronegocios.

5. ¿Qué han hecho y qué hacen esas cuatro entidades agropecuarias ante los asesinatos, cárceles, persecuciones, torturas y enfrentamiento con paramilitares y topadoras que sufren hoy miles de familias de pueblos originarios y campesinos?
6. Estas cuatro entidades dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparición de los pequeños y medianos productores, pero gran cantidad de ellos son empresarios y productores que han contratado matones para desalojar campesinos y comunidades originarias.
7. Rescatamos un hecho positivo de este paro de las entidades agropecuarias: se sacaron la careta de luchadores por un modelo de país digno, justo y para todos. Mostraron su verdadero rostro: creen que el país es para unos pocos que obedecen los dictámenes de las grandes corporaciones transnacionales de la alimentación.
8. El dinero de todos los impuestos tendría que estar controlado por todos, porque todas y todos pagamos impuestos en la Argentina, no sólo los productores y empresarios del campo. Proponemos mecanismos de participación directa para decidir cómo producir riqueza y cómo logramos su justa distribución.
9. Como un primer paso de acuerdos y consensos proponemos que el extra de las retenciones sirva para que no desaparezcan los verdaderos pequeños y medianos productores. Que esos fondos se utilicen para una Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria. Que se estaticen las exportaciones, que no queden más en manos de las grandes corporaciones transnacionales.
10. Con la Vía Campesina (organización que reúne a pequeños productores e indígenas de 56 países de cuatro continentes) decimos que la respuesta a la crisis global del precio de los alimentos está en la Agricultura Familiar Sostenible, que está comprobado puede alimentar al mundo. Los alimentos no pueden, ni deben, seguir siendo objeto de ganancias ilimitadas.

El Frankenstein sojero contra su creador

Entrevista con Norma Giarracca, especialista en Sociología Rural realizada por Javier Lorca

Página 12 - El país
Lunes, 31 de marzo de 2008

El campo se volvió contra el Gobierno como Frankenstein contra su creador. Norma Giarracca, profesora de Sociología Rural y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA), apela al mito del monstruo rebelado para sostener que las causas del conflicto agropecuario se fundan en el modelo sojero fomentado desde los '90 por el Estado y las grandes corporaciones.

¿Cómo se construyó y cuáles son las características del modelo agrario hegemónico en Argentina?

Al capitalismo transnacional le costó instalarse en el sector agropecuario por la fuerte presencia de productores familiares: los "chacareros". Ese sector mayoritario en el total de las unidades de producción, de "hasta 200 hectáreas", era protegido por un armado institucional desde principios del siglo XX. También estaban las viejas y fuertes empresas nacionales agroalimentarias y las cooperativas de comercialización. A partir de 1976 esto se fue modificando y se generaron las condiciones políticas, culturales, económicas e ideológicas para la instalación del nuevo modelo agrario.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Este proceso comenzó hace treinta y pico de años y el Estado estuvo en distintas manos. Primero, durante la dictadura, fue el disciplinamiento de los actores sociales que tenían una tradición de lucha. A los campesinos y chacareros de las Ligas Agrarias los silenciaron con el terror. En ese clima se introdujeron las semillas híbridas, nuevas formas de contrato de arrendamiento, el deterioro de los salarios de los trabajadores rurales, bajo la hegemonía de una clase tradicional que tenía fuertes articulaciones con la dictadura. Con la democracia se flexibilizan las condiciones políticas, pero pasan años para que los pequeños productores y campesinos vuelvan a organizarse. Los gremios de los trabajadores rurales nunca más llegaron a aglutinar las demandas de sus bases. En esta etapa se generan las condiciones para el cambio. La más importante es el decreto de desregulación de la dupla Menem-Cavallo en 1991, que desarma toda la

ingeniería institucional que había permitido la convivencia de la pequeña, mediana y gran explotación en la estructura agraria. Para participar del nuevo modelo se les ofrecía disponibilidad de créditos y así, en pocos años, parte importante del campo quedó totalmente endeudado y con fuerte peligro de perder la tierra. Aparecen nuevos actores y organizaciones, y las viejas, como la FAA, se reorganizan y toman contacto con sectores urbanos, con la CTA. Mientras, la cadena agroalimentaria sufría importantes transformaciones: concentración, extranjerización y predominio de super o hipermercadismo. En 1996, con el campo con bajos precios internacionales, desregulados, se autoriza a sembrar semilla transgénica de soja, con su paquete tecnológico promovido por una de las corporaciones más fuertes del área, Monsanto, una de las empresas más criticadas del mundo. Cambian los modos agronómicos de manejar los suelos, de sembrar y cosechar. Es la última etapa de la instalación del modelo del agronegocio. Argentina es uno de los 19 países donde se autoriza esto y uno de los 5 que produce con transgénico a gran escala. Transgenia, glifosato, fumigaciones con costos muy serios a la salud. No es la mano invisible del mercado, es producto de decisiones políticas.

¿Cómo incidieron las diferencias sociales y regionales en la instalación del modelo sojero?

Las primeras en entrar son las regiones más fértiles del país. A medida que los precios suben se van incorporando lo que llamamos eufemísticamente las regiones no pampeanas. Los nuevos inversores, los famosos fondos de inversión, buscan tierras, desplazan campesinos, yungas, montes. Sustituyen cultivos alimentarios en la región pampeana y se expanden a otras regiones a costa de comunidades, pueblos y bosques. ¿Quiénes entran en el modelo? Primero hay que recordar que vía endeudamiento muchos chacareros habían perdido su tierra, en un proceso dramático, con muchos suicidios. Esto es importante para entender hoy la desesperación de muchos agricultores "salvados con la soja". El fantasma de "estar mal, perder la tierra" está muy cerca. Entre 1988 y 2002, un 25 por ciento de unidades productivas había desaparecido y la mayoría pertenecía al estrato de "hasta 200 hectáreas". Todavía no sabemos cuántos desaparecieron desde 2002. Los que pudieron permanecer –con la devaluación, moratoria de la deuda, subsidios del combustible– entraron en el modelo sojero. Como con la fiebre del oro, los pueblos corrieron detrás del "oro verde" estimulados por el discurso triunfalista de los grandes productores y los medios de comunicación financiados por las corporaciones. Se dice:

"Entrar en el agronegocio es entrar en la modernización, seguir con la producción de alimentos y cuidar la tierra como un bien familiar es de atrasados". Y, debemos decirlo, la Federación Agraria sostuvo este discurso y promovió la agricultura sojera, aunque sus dirigentes sabían los peligros que el modelo acarreaba.

¿Qué pasó con los campesinos?

A los campesinos se les arrebatan sus tierras igual que a las comunidades indígenas. Se desmonta, se considera que en esas tierras antes marginales el precio internacional permite que sean rentables, pero a los campesinos no se les ocurre entrar en la soja, porque la relación de campesinos e indígenas con su tierra es diferente. Muchos de ellos pertenecen a organizaciones integradas a Vía Campesina, un interesante actor internacional que contrapone la vía campesina de producción de alimentos, la soberanía alimentaria, el respeto a la diversidad biológica y cultural, al modelo extractivo y devastador del agronegocio. Aún con toda la propaganda de la cultura neoliberal, existen poblaciones, culturas, que mantienen la creencia de que la tierra es para producir alimentos y para respetarla y no para hacer grandes negocios.

Si el Estado fue clave en la construcción del modelo, el conflicto abierto con el anuncio de las nuevas retenciones ¿supone una ruptura o una mutación de aquella alianza?

El Gobierno hace rato que decidió basarse en el modelo de una economía extractiva: petróleo, producción minera, agronegocio. Esta idea de que la Argentina puede insertarse en el mundo con petróleo, oro y soja no es privativa de los Kirchner, la legislación viene desde los '90. Pero estos últimos años, el Gobierno redobló la apuesta, pero decidió convertirse en socio, vía retenciones. Lo hizo con el petróleo y el agronegocio, lo piensa hacer con la actividad minera. Ahora se trata de ajustar su porcentaje en esa sociedad. El Gobierno creó sus propios Frankenstein. Legislar para traer a Monsanto, a las empresas mineras, a las petroleras, les dio subsidios para las nuevas exploraciones. Irresponsablemente genera en el país actores muy peligrosos: devastadores, insaciables, a los que les importa poco nuestro territorio. Son como Frankenstein, esa creación monstruosa pero también prometeica, que promete los fuegos de la vida o del desarrollo. Pero son mitos, creaciones que la gente cree por un rato pero, como aún funciona un núcleo del buen sentido, cuando se dan cuenta de que nada de lo prometido es cierto, reacciona.

¿Qué fuerzas sociales se están expresando en el conflicto bajo la denominación de "el campo"?

Son las corporaciones las que quieren instalar esto de "un campo", los cuatro gremios. Federación Agraria, lamentablemente, no ha hecho nada para diferenciarse. No hay agricultura más heterogénea, rica en regiones y cultura que la argentina. La actitud corporativa es la de "un campo que nosotros representamos". Es una capacidad hegemónica de los grandes. En los '70 y '80 la Sociedad Rural tenía esa capacidad. Ahora son los grandes sojeros, los "grobocopatel", los que han sabido incluir en sus propios intereses a los chacareros. Y eso es un drama. El país necesita de los agricultores, de ese agricultor familiar que era el gran alimentador del mundo y la población nacional. Se necesita separar los intereses de los grandes sojeros de los intereses de los pequeños. Eso lo debe hacer la Federación Agraria, pero no se puede hacer dentro del modelo del agronegocio sojero. Esa es la cuestión. Ese es el drama de estos días, no veo a los grandes sojeros en las rutas, veo a los chacareros, enojados, asustados y sin diálogo con el Gobierno.

¿Dónde encuentran su legitimación tanto la resistencia a las retenciones como la pretensión del Estado de gravar las exportaciones?

Hay una lucha de sentidos, de legitimaciones discursivas y, lamentablemente, ambas posiciones son maniqueas. El Gobierno, el discurso de la Presidenta, enfatiza un campo todo próspero, que se enriquece y es insensible con el resto de la población. Lo sermonea, lo amenaza. Y los ruralistas doblan la apuesta con otro discurso sin matices e igualmente duro.

¿Cómo es recuperada por sectores agrarios una modalidad de protesta social como el piquete? ¿Y cómo se relaciona con la reaparición urbana del cacerolazo?

El piquete, el corte de ruta, es agrario. No es "creación" de los '90, lo iniciaron en 1912 los "gringos" del Grito de Alcorta, esa heroica resistencia que da lugar a la Federación Agraria, que cada tanto debería repasar su historia. En la protesta hay repertorios que se repiten en la historia y otros nuevos. El corte es una vieja forma; el cacerolazo se inauguró el 19 y 20 de diciembre, y se repitió la semana pasada con menos fuerza, pero fue importante. Yo fui a la esquina de Cabildo y Juramento a preguntar "¿por qué están acá?". No estaba la clase alta, ni en Belgrano ni

en Primera Junta ni en Plaza de Mayo. Era esa clase media que en los '90 se "sensibilizó" con el drama de los chacareros... Sin saber detalles, se puso del lado del campo o, mejor dicho, en contra del Gobierno. Entre las personas que entrevisté había confusión acerca de si el campo ganaba o perdía. Pero no dudaban en culpar al "Estado" con quedarse con toda la plata y ahora querer más, sin distribuirla. Entrevisté a por lo menos 20 personas –un hábito profesional– y todas hicieron mención a que no se sabe qué hace el Gobierno con el dinero que recauda. Néstor Kirchner gobernó preocupado por los cacerolazos y creo que no pasa esto con Cristina y su entorno, y lo digo no sólo por la protesta agraria o en las calles.

Agronegocio y conflictos en Argentina

Norma Giarracca

Página 12– El país– opinión
Lunes, 19 de mayo de 2008

Si hay un aspecto de la sociedad que es no sólo constitutivo sino motor de su dinámica es el conflicto. Un libro reciente de Chantal Mouffe sostiene una dura crítica a las posiciones pospolíticas del (neo) liberalismo que borran la presencia del antagonismo en sus análisis. Los conflictos que importan son los que ponen en jaque un pacto fundante de determinado orden que en el capitalismo neoliberal es injusto, desigual, jerarquizante y excluyente.

La expansión de la conflictualidad social durante toda la década del '90 puso en jaque un estilo de gobierno que llevaba los peores rasgos del sistema y se cerró como ciclo de protestas con las rebeliones de 2001–2002. Sin esos tiempos de protestas y rebeliones hubiese sido muy difícil descentrar los elementos más aberrantes del sistema. Desde 2003 se abre otra etapa, con fuerte crecimiento económico donde los ejes de las protestas viran hacia las disputas por la redistribución del ingreso y por los recursos naturales entregados a devastadoras corporaciones. En estos conflictos, los actores siempre son tres: 1) asalariados o poblaciones afectadas, 2) empresas/corporaciones, 3) Estado. El reclamo al Estado es por su función facilitadora o neutral tanto en el acaparamiento de ganancias (relación empresas/trabajadores) como en la apropiación de los bienes naturales, su devastación y el acaparamiento de rentas extraordinarias. Allí, a mi jui-

cio, están los conflictos que hoy ponen en jaque un orden cuya legislación fundamental se fue construyendo en los '90 sin rectificaciones posteriores. No dudo de que haya otros conflictos sensibles a la democratización necesaria de esta sociedad, como aquellos derivados de la memoria y verdad por las atrocidades de la dictadura, por ejemplo. Pero aquí se trata de centrarnos en la riqueza material generada por estos territorios y sus poblaciones trabajadoras, así como las apropiaciones sectoriales que dan lugar a la vergonzosa polarización social de la Argentina de nuestros días.

En la década del '70 hubo otro gobierno peronista, entre 1973 y 1976 (aunque tomaría hasta 1974 con la muerte del general Perón) que, acorde con su tradición de generar cambios redistributivos desde el Estado, vio en las rentas agrarias una posibilidad no sólo de una nueva etapa de industrialización exportable, sino de distribución de la riqueza. No existían "trabajadores rurales" o "campesinos" que jaquearan el poder terrateniente y este trabajo quedó, una vez más, en manos del Estado. Por eso se eligió para la Secretaría de Agricultura un hombre cuyo solo nombre suponía una posibilidad cierta de desconcentrar la tierra, ponerla en producción y tributar a la sociedad: el ingeniero Horacio Giberti. Como él mismo suele contar, siempre tuvo el apoyo del ministro de Economía y de altos funcionarios del gobierno: la suya fue una política de Estado. El paquete de leyes generado en la Secretaría pasó por el Congreso Nacional y contenía la Ley de Arrendamientos Forzoso, la Ley de Renta Normal Potencial y la Ley Agraria. Es decir, uno de los conflictos centrales en la lucha por democratizar económicamente el país, pasaba por la clase terrateniente. Sólo leer los editoriales de la revista Anales de la Sociedad Rural Argentina presidida en aquellos tiempos por Celedonio Pereda, basta para darse cuenta de cómo se preparaba el sector para ganar esa disputa y hasta donde estaba dispuesto a llegar (y llegó sin lugar a dudas).

Pero desde 1976 hasta hoy la estructura económica y social del país cambió profundamente. Nos llevó muchos años y trabajos comprender la nueva gramática del poder agroindustrial en la Argentina, aquello que con Miguel Teubal conceptualizamos y tratamos de definir como "agronegocio", con sus componentes financieros, corporativos internacionales, científicos y culturales-comunicacionales. A medida que investigamos y difundimos esos conocimientos comprendimos el papel subalterno de los propietarios agrarios argentinos (el otrora poder terrateniente) en el nuevo esquema que la geopolítica internacional reservaba al país agrario. Grandes y medianos propietarios fueron complacientes con el "agronegocio"

porque, como capitalistas oportunistas, trataron por todos los medios de acoplarse a los nuevos tiempos. Pero lo que deseamos remarcar es que no son ellos los actores claves del conflicto social que llevaría a una redefinición del pacto fundante del poder económico agroindustrial en la Argentina de 2008 y dudamos de que comenzando por ellos se llegue al verdadero poder.

Este deslizamiento del conflicto desde los actores poderosos –extranjeros y nacionales– que realmente manejan concentradamente el negocio agrario en la Argentina hacia los propietarios agrarios tradicionales, me parece un juego político peligroso. Fomentar esa "picardía" oficial, sobre todo desde "opinólogos" que celebraron el modelo sojero o ignoraron de qué se trataba hasta hace unas semanas, me parece una irresponsabilidad infinita. No creo tener que aclarar que estoy a favor de las retenciones y de limitar la expansión sojera (y hasta prohibirla cuando es transgénica por muchas razones, incluida la salud pública), pero ese debate debe darse en el Congreso Nacional, que es donde se transforma el enemigo en adversario y se renuncia a la violencia como forma de decisión.

La culpa es de la soja

Miguel Teubal

Página 12– Especiales

Jueves, 27 marzo de 2008 y reproducido el Lunes, 26 de mayo de 2008

El conflicto agrario que se manifiesta en la actualidad es, en gran medida, consecuencia directa del auge fenomenal que han tenido los precios internacionales de la soja y de otros granos. El gobierno teme que tal situación pueda incidir sobremanera sobre el aumento de los precios internos de los alimentos y por ende sobre el proceso inflacionario, con todas las consecuencias que esa situación puede acarrear sobre el humor de la población. ¿Por qué aumentan los precios de la soja y de otros granos en el mercado internacional? Diversas razones explican el auge de la demanda de diversos granos. En el caso de la soja, tuvo que ver con la necesidad de Europa de encontrar un alimento balanceado adecuado para alimentar a sus cerdos, pollos y vacunos. También contribuyeron los nuevos proyectos para impulsar los agrocombustibles, que presumiblemente habrán de sustituir a combustibles fósiles en el futuro. Asimismo, China y la India

se han constituido en demandantes importantes de soja dado el tipo de "modernización" agraria que se está impulsando en esos países.

Pero cabría preguntarse si en el trasfondo de esta situación no se estaría conformando un nuevo estadio en la evolución del capitalismo. Tras varias décadas de neoliberalismo, de privatizaciones, desregulaciones y aperturas a la economía mundial que dieron impulso a importantes procesos de globalización dominados por los agronegocios, se fue configurando en escala mundial una "nueva división internacional del trabajo", equiparable a la de fines del siglo XIX, cuando tuvieron auge las denominadas "economías agroexportadoras". Al igual que entonces, en la actualidad estos nuevos y viejos productos de exportación generan enormes rentas internacionales en escala mundial que se han transformado en algunos de los principales soportes de los procesos de acumulación de los países periféricos. A esas razones de más largo alcance se agrega que por la actual crisis financiera muchos inversores se refugian en commodities, incidiendo en el corto plazo sobre el componente más especulativo del alza de esos precios. ¿Cómo se distribuirán esas rentas internacionales que derivan del alza de los precios en el orden económico interno? No cabe duda de que los precios internacionales inciden sobre aumentos de los internos. La soja contribuye a una importante prosperidad para vastos sectores del agro. Los principales beneficiarios de ese proceso lo constituyen los grandes productores, contratistas, "pool de siembra". Dado el auge que ha tenido la soja en los últimos años, los medianos y pequeños productores pampeanos también se están beneficiando. De allí la respuesta contundente del "sector" frente a las nuevas medidas.

Se nota cierto titubeo por parte del Gobierno frente a la actual situación. Y no es de extrañar que sea así. Porque tuvo que producirse la amenaza de que se agudizara el proceso inflacionario para que decidiera el establecimiento de retenciones móviles e intentara cambiar de rumbo aunque sea mínimamente en materia agropecuaria. Si no fuera por este hecho, no hubiera dejado de aplicar una política agraria que en lo esencial sigue siendo prosoja, en consonancia con lo que hicieron todos los gobiernos anteriores desde la aplicación del decreto de desregulación de 1991. Se trata de impulsar un cultivo utilizando "tecnología de punta" (los transgénicos), sean cuales fueren sus consecuencias, debido a que contribuye significativamente al superávit de la balanza comercial necesario para pagar los servicios de la deuda externa. Los gobiernos anteriores y el actual también hacen oídos sordos a las "deseconomías externas" del modelo sojero: la desaparición

de los productores medianos y pequeños, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el deterioro ambiental, los efectos de una deforestación indiscriminada, los efectos sobre la salud humana. Tuvo que producirse esta coyuntura muy especial y el peligro de una espiral inflacionaria para que el Gobierno intentara ciertos "correctivos" en la política global. El problema es que no se contemplan los intereses de medianos y pequeños productores. Y tampoco implica un cambio fundamental en el modelo agropecuario.

Democracia y conflicto social

Norma Giarracca

Página 12– El País
Miércoles, 4 de junio de 2008

Existen conflictos que expanden los bordes de la institucionalidad democrática y otros que ponen en peligro los escasos avances del proceso de democratización iniciado en 1983. El conflicto que protagonizan el Gobierno y los sectores capitalistas del campo se ubica en la segunda categoría. Los cortes de esta tercera etapa del conflicto son más complejos que los primeros. Es lógico que así sea pues pasó tiempo, se suman frustraciones, se polarizan las posiciones y circulan agravios por todos lados. Las diferencias se registran en muchos niveles, los sentidos de las acciones difieren entre un corte y otro. Entre aquel donde predominan pequeños productores que suman tierras en arriendo a unas pocas hectáreas propias y los otros que se encuentran alrededor de las grandes empresas sojeras, los grandes tambos o los terratenientes ganaderos de Buenos Aires.

En las zonas mixtas (agrícola-ganadera) se reconoce la legitimidad del reclamo ganadero aunque, según con quién se hable, muy diferentes son las porciones de la ganancia que se llevan los distintos sectores en los eslabones de la producción. Pero todos reconocen que el sector rural trabaja mucho más para ganar lo mismo o menos que los sectores comercializadores. Otro tanto pasa con los tambos y se podría sumar cada una de las problemáticas de los cultivos agroindustriales. Cada vez, la diferenciación social interna de los distintos tipos de productores de una misma actividad es mayor y, por otro lado, se acentúan las asimetrías con los otros agentes económicos de los eslabonamientos agroindustriales.

Ya no existe un solo y fuerte elemento que aglutine los reclamos como en los primeros días del paro. Cada vez salen más reivindicaciones particulares. El interrogante es si esas diferencias de situaciones económicas, posicionamientos sociales, tienen correlato en los discursos políticos o si tienden a la homogeneización a partir del eufemismo "gente de campo" o por la profundización del conflicto.

Los discursos de los dirigentes de las cuatro entidades se esfuerzan por mostrar problemas comunes y por guardar un mismo tono bastante mesurado en relación con la democracia y legitimidad del Gobierno (aunque éste lo ponga en duda). Es decir, no se les oyó decir a los ruralistas que el conflicto intenta desconocer el plazo de mandato gubernamental. Por el contrario, las narrativas de los productores son muy diferentes entre sí. Se puede escuchar desde el respeto incondicional a la institucionalidad y a la figura de una mujer en el Gobierno, hasta deslizamientos claramente antidemocráticos de algunos grupos de grandes productores de las regiones más ricas. Es de marcar que la "masculinidad" del campo pampeano se siente irritada frente a una mujer en la máxima autoridad y se expresa mediante un "supuesto humor" de carteles y pancartas.

En las zonas donde prevalecen la gran propiedad o grandes pools de siembra, la duda que circula es si los productores están solos o están acompañados en las rutas por los grandes ganadores del modelo sojero y del agronegocio, que comenzaron a preocuparse por esta inesperada situación generada en los últimos 80 días y que ponen en suspenso sus fabulosas ganancias. Estas diferencias en las rutas cortadas son invisibilizadas por el discurso oficial de un "solo campo", al que pretende enfrentar y disciplinar con dispositivos en los que también se ponen en riesgo muchos logros de estos años de democracia. Se arriesga el respeto a la oposición política, a la libertad de expresión de las ideas, a disentir. La judicialización de esta o cualquier protesta significa jugar peligrosamente con el derecho a peticionar. Incluir en esta acción a políticos de oposición es correr los límites del juego político partidario. Que el Gobierno hable por un partido y un sector económico por "la sociedad", tampoco es demasiado republicano.

Este grave conflicto, que atrapa al conjunto de la sociedad, está muy lejos de representar un dispositivo de oportunidades que conduzca a expandir derechos, democratizar la concentrada economía o lograr la soberanía alimentaria. Al contrario, emergen viejos rasgos sobre los que hemos reflexionado críticamente desde las ciencias sociales, el arte y el periodismo para poder comprender la responsabilidad que le cupo a la sociedad civil

en los períodos ominosos de nuestra historia reciente. Para llegar a buen puerto existe una variedad de soluciones técnicas y una masa de conocimiento –desperdiciado– que pueden contribuir a la cuestión impositiva y a políticas agrarias, pero debemos recordar que hay una sola salida política: el respeto por la democracia, salir con más democracia.

En una recorrida de campo hallamos productores que no apoyan al paro, así como suponemos que existe mucha gente en las ciudades que no apoya las medidas del Gobierno, ni su actitud de cortar el diálogo. Ese gran sector –"los tibios", según el ministro De Vido– creo que es mayoritario. Estos y muchos otros ciudadanos tienen sentimientos encontrados, están mortificados y con temor por nuestros rasgos como sociedad. Estos sentimientos, además, se suman a los profundos sufrimientos de millones de argentinos que experimentaron la cara oscura y violenta de la expansión del agronegocio en el campo, o una inclusión marginal y empobrecida que el modelo con sus divisas millonarias le ofreció vía programas sociales, o trabajos informales de muy bajos ingresos en los mundos urbanos. ¿Tanta riqueza para esto?

Campo territorios y culturas en tensión

Norma Giarracca

Crítica de la Argentina– Secciones
Martes, 10 de junio de 2008

El territorio de nuestro país es fundamentalmente agrario, está censado de ese modo; no obstante, la representación social que circula con mayor intensidad es la del país urbano. Es cierto que la cantidad de población urbanizada predomina aún sin tomarse demasiado en serio el criterio censal de conglomerados de más de 2.000 habitantes (criterio de urbanización). Pero este imaginario social tiene raíces en rasgos de nuestra marcada colonialidad y resultó en cierto desprecio citadino a la ruralidad. Raymond Williams en su libro *El campo y la ciudad* sostenía que en Gran Bretaña, el primer país que se industrializó y urbanizó en el mundo, se podía hallar, a poco de retroceder en las biografías personales de sus habitantes, un pasado agrícola del que se sentían nostalgiosos y orgullosos. Por el contrario, la Argentina, país capitalista que emerge en el siglo XIX por su desarrollo agroexportador, siempre ha tratado de negar estos comienzos

agrarios; se ha empecinado en negar esas mayoritarias historias familiares con antepasados indígenas, europeos, árabes, rusos, criollos, etc., de orígenes campesinos, para resaltar la gran ciudad, su cultura y su progreso europeizantes. Como buenos consumidores de la modernidad periférica, se colocó en el campo y en sus pobladores el atraso y la barbarie, mientras en la ciudad y la industrialización temprana se visualizó el añorado e ilimitado progreso.

Por todo esto es que hoy la ciudad de Buenos Aires o, mejor dicho, una parte de sus habitantes, que incluye a la clase política y a quienes están cómodos con esa modernidad periférica, se siente tan extrañada e irritada por este paisaje humano que aparece en las rutas, rotondas, plazas, pueblos, ciudades pequeñas y hasta en Rosario. Una geografía poblacional y cultural casi desconocida por gran parte de ellos.

La dinámica del país interior se basa en la producción primaria, dentro de la cual la agraria es la más importante en extensión y marca cultural. La agricultura es una actividad que habilita la pequeña unidad de producción y la siempre esperanzada posesión patrimonial para generaciones futuras. Aun cuando la extensión del país agrario hubiese habilitado un acceso a la tierra para muchos y contado con más productores que concentraran menos tierra en propiedad (para muchos, base de una sociedad democrática), la estructura social agraria se conformó con un fuerte sector medio que otros países de América Latina no tuvieron. Tal sector coexistió con la gran estancia ganadera por una serie de arreglos institucionales que se fueron construyendo en la primera mitad del siglo XX.

En la actualidad, el intento de comprensión del interior del país con la dicotomía rural-urbano borra un entramado de poblaciones, actividades, migraciones, ocupaciones y culturas diversas. Un pensador brasileño hace unas décadas propuso la categoría "rururbano" para caracterizar mejor las mezclas e imbricaciones. En nuestro país, desde mitad de los 70, las poblaciones dejan el campo para ir a las llamadas ciudades intermedias o a las ciudades capitales para formar los corredores del gran Rosario, Resistencia, Corrientes, etc., sin perder los vínculos de origen. En los finales de los 80 hasta los pobladores más pobres, campesinos y trabajadores rurales, buscaron pueblos para vivir y se mudaron allí manteniendo ocupaciones agrarias.

El entramado resultante es muy complejo: agricultores que combinan esta actividad con trabajos en comercios, campesinos que migran temporariamente a zonas de turismo a ocuparse en servicios, trabajadores con

largos recorridos de ocupaciones agrarias así como hijos de agricultores acomodados que viven en los pueblos pero trabajan en bancos, industrias, servicios o estudian en universidades de grandes ciudades. En varias provincias, además, las comunidades indígenas con sus reclamos históricos sobre la tierra y sus ancestrales prácticas culturales o las fuertes comunidades hortícolas bolivianas con sus fiestas y comidas, se imbrican en un entramado denso, interesante y conflictivo. Sumemos en los últimos años a los actores del mundo sojero: empleados de grandes empresas y de grandes contratistas, pilotos de aviones para fumigar, técnicos de los estudios que gestionan los pools de siembra, etc. Todos estos modos de vida, culturas que se imbrican, mercados laborales que articulan "pluriactividades", redes familiares que se extienden hasta la gran ciudad, conforman una parte muy importante de nuestro país, marcan fuertemente su dinámica y son casi desconocidos por las clases dirigenciales e intelectuales.

Es importante señalar que no todo este país "rururbano" –de agricultores, campesinos, comunidades indígenas, profesionales, maestros, comerciantes, músicos, artistas, artesanos, fumigadores, trabajadores– está presente en el paro agrario. Y no todos, además, fueron beneficiados por la expansión sojera; todo lo contrario, en el Norte se acusa a inversores del centro de desmontar y generar violencia en contra de campesinos e indígenas. Es decir, estamos frente a un territorio con tensiones, fuertes conflictos históricos agravados, últimamente, por la búsqueda capitalista de los recursos naturales (tierra, agua, minas) en una nueva etapa de valorización que los tiene como centrales.

De "rebeliones" y sus significados: el grito de Alcorta: 25 de junio de 1912

Norma Giarracca

Página 12– El País
Domingo, 22 de junio de 2008

En los finales del siglo XIX el sector agropecuario argentino comenzó una etapa que se cierra en 1930, con la crisis mundial, en la que se generó un importante excedente que habilitó el crecimiento deslumbrante y recordado durante todo el siglo con cierta nostalgia. Ese período expansivo,

"agroexportador", estuvo favorecido por condiciones de altos precios internacionales que estimularon la demanda externa de la producción de cereales y carne. Fue acompañado, además, por la expansión de la frontera agraria y el asentamiento de colonos de origen extranjero en esas vastas y fértiles tierras disponibles.

La provincia de Santa Fe fue clave, tanto por recibir una gran cantidad de colonos como por la posibilidad de producir cereales para la exportación. La agricultura estaba en manos de colonos arrendatarios que debían pagar una alta renta a los propietarios de la tierra. En los comienzos del siglo XX el territorio agrario provincial estaba habitado por una trama de actores agrarios –terratenientes propietarios; arrendatarios de grandes extensiones, pequeños arrendatarios; compañías colonizadoras; acopiadores de cereales; trabajadores rurales; exportadores, etc.– con relaciones asimétricas alrededor de la generación de la fabulosa renta agraria debido a fertilidad de las tierras.

No hay dudas de que el factor determinante de la gran protesta agraria en la localidad de Alcorta en 1912 fue económico: la baja de los precios de los cereales, el aumento del precio de los insumos y condiciones de arrendamientos muy desfavorables. No obstante, la trama del conflicto agrario estuvo atravesada por componentes políticos ya que, desde nuestros inicios como nación, la subalternización de ciertos sectores en el capitalismo argentino no fue naturalizada (más bien resistida) y esto es válido tanto para los chacareros como para las comunidades indígenas o los trabajadores en general. Recordemos, por ejemplo, que los colonos inmigrantes, como extranjeros, no eran sujetos de derecho y no había recepción de sus reclamos. La Iglesia tuvo un significativo papel en la alborada del conflicto cuando los curas párrocos de Alcorta –Pascual y José Netri– apoyaron las luchas y, además, pusieron a los colonos rebeldes en contacto con otro de sus hermanos, abogado residente en Rosario, Francisco Netri (importante asesor legal quien fuera asesinado en 1916).

La huelga agraria, los cortes de rutas y el cese de entrega de la producción fueron las formas de acción de los chacareros rebeldes. El domingo 25 de junio de 1912, en una de las asambleas donde los agricultores de las localidades vecinas llegaban en sus "sulkies", se anunció la huelga general. Los relatos cuentan que las caravanas en "sulky" que llegaban de La Adela, La Sepultura, Bigand, Firmat, etc. alcanzaban más de cinco kilómetros de largo. La asamblea en el local de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos declaró la huelga y se anunció el nuevo proyecto de arrendamientos

y aparcerías. Alrededor del 8 de agosto, cuando un significativo número de terratenientes propietarios ya habían aceptado los términos del nuevo contrato agrario, se levantó la medida.

Estos colonos herejes –como los caracterizó un trabajo reciente– pelearon por condiciones de labranza dignas como las empresas colonizadoras les habían prometido y luego, por la tierra. En ellos se imbricaban culturas de lucha socialistas, anarco-sindicalistas, antiliberales europeas con la generación de una política que irrumpía en el país de la mano del radicalismo. En ese mismo año crean la Federación Agraria Argentina (FAA), que se convertiría desde entonces en el arma gremial de los colonos rebeldes luego convertidos en pequeños propietarios.

La FAA estuvo aliada al Partido Socialista para pasar sus leyes por el Congreso, acompañó al partido radical y a los gobiernos populares peronistas. No existen registros que la conecten con golpes de Estado o posiciones de derecha. Durante la dictadura militar, por ejemplo, la FAA presidida por don Humberto Volando tuvo una coherente y honesta actuación en favor de los derechos humanos. Sin embargo, después del arrinconamiento al que sometieron a los pequeños productores las políticas de los '90, la FAA aceptó sin críticas el modelo del "agronegocio". Los últimos dirigentes de FAA –Bonetto y Buzzi– se equivocaron y desoyeron críticas que hacen los ambientalistas, la agroecología, Vía Campesina, entre otros, al nuevo modelo neoliberal para el campo, bajo el supuesto de que con él "salvarían" al sector. Y no es así. A mi juicio se equivocaron y se siguen equivocando ahora con sus alianzas. El capitalismo concentrador no acepta en sus producciones de punta la pequeña propiedad como pasaba hace casi un siglo. Sólo bajo las coordenadas de otro modelo agrario, para la soberanía alimentaria, y sin las fabulosas ganancias actuales, podrá sobrevivir como sector y reconciliarse con otros sectores subalternos del campo argentino.

Retenciones y distribución de ingresos. Debate sobre la renta de la tierra

Miguel Teubal

Página 12– El País
Martes, 24 de junio de 2008

En el trasfondo del conflicto agrario prevalece en forma muy contundente –por lo menos en el discurso– la cuestión de la distribución de los ingresos y, en particular, aquella que opera en relación con el sector agrario. ¿Quiénes y, a través de qué mecanismos, deberían apropiase de la renta fundiaria? ¿En qué medida es correcto o justo que esos sectores se apropien de esas rentas? ¿Para qué finalidades son utilizadas? ¿En qué medida constituyen mecanismos que contribuyen a una más justa distribución de los ingresos? ¿En qué medida contribuyen a paliar el hambre y la miseria en el país? Cabe destacar que se presume que esas rentas no son necesariamente producto de inversiones productivas o de aumentos en la productividad del trabajo, sino del alza de los precios internacionales de la soja y de otros commodities, de la devaluación del tipo de cambio y/o de otros mecanismos inherentes a la política económica. Todos estos factores hacen que muchas veces estas rentas sean consideradas "ganancias extraordinarias".

Esas preguntas no tienen fácil respuesta, con lo cual se requiere un amplio debate sobre la materia. Un punto de partida podría ser puntualizar quiénes son los protagonistas involucrados en estos procesos. Lo usual ha sido contraponer en forma simplista al "Gobierno" con el "sector agropecuario". Planteada la cuestión en estos términos, el problema de las retenciones aparece como que el Gobierno se apropia de una parte de esas rentas extraordinarias para destinarlas a finalidades sociales. Mientras que "el campo" se resiste por considerar esta apropiación "confiscatoria". Sin embargo, el problema tiene una complejidad mucho mayor.

El "sector agrario" es heterogéneo: existen grandes, medianos y pequeños productores, campesinos y comunidades indígenas. Existen diversos regímenes agrarios en el marco de los cuales operan estos sectores: desde grandes sojeros y "pools de siembra" hasta explotaciones familiares y comunidades indígenas. Están también aquellos agronegocios vinculados con la provisión de insumos y semillas (Monsanto), la comercialización, las exportaciones (Cargill), la gran industria alimentaria, los supermerca-

dos. Generalmente se postula que al "sector" le ha ido bien en los últimos años gracias a la devaluación, al aumento del precio de la soja y al marco institucional que se viene impulsando desde hace varias décadas y que ha favorecido sobremanera a la expansión sojera. Pero ¿a quiénes en el sector, o en el sistema agroalimentario, les ha ido efectivamente bien? No a todos, por cierto. Entre los dos últimos censos agropecuarios –1988 y 2002– desaparecieron 87.688 explotaciones agropecuarias, 6263 por año, de las cuales la gran mayoría tenía menos de 200 hectáreas. Y, en la actualidad, en plena bonanza del sector, existen muchos en el agro a quieres no les va necesariamente bien, generalmente medianos y pequeños tamberos, ganaderos de zonas marginales, cañeros tucumanos, algodoneros del Chaco, comunidades indígenas desplazados por la deforestación sojera. Basar una política en datos globales sobre la rentabilidad del sector sin tomar en cuenta a estos múltiples y heterogéneos sectores que lo constituyen es un error. La actual política de subsidios a algunos de estos sectores no tiene visos de haber sido exitosa. Como consecuencia, no es de extrañar que muchos de estos productores estuvieran en los cortes; así como también los vecinos de los pueblos del interior. Y persiste entre los pequeños productores la noción de que ellos también pueden desaparecer en cualquier momento. Creo que deberían tomarse en cuenta a todos estos sectores cuando se abra la discusión en torno de las "políticas agrarias" que necesita el país.

Otro tanto podemos decir respecto del "Gobierno". Durante la década del '90 y en lo que va del 2000 los sucesivos gobiernos apoyaron al modelo sojero en detrimento de medianos y pequeños productores, campesinos y comunidades indígenas. Impulsaron una "agricultura sin agricultores" y la producción de "commodities" orientados a la economía mundial en detrimento de la producción de alimentos básicos orientados a satisfacer la demanda de los sectores populares. Tras la devaluación del 2002 y la implantación del sistema de retenciones, el gobierno se transformó en socio del modelo, ya que una parte importante de sus ingresos fueron provistos en base a estos recursos.

Cabe destacar que las retenciones no son los únicos instrumentos que pueden ser utilizados para apropiarse de estas rentas, o para distribuirlas en forma más equitativa. Incluso desde un punto de vista impositivo, es un impuesto indirecto al igual que el IVA: si bien las pagan los exportadores, éstos luego las transfieren a los productores agropecuarios. Entre éstos, lo pagan proporcionalmente mucho más los medianos y pequeños

productores que los grandes. Asimismo, los exportadores, según una investigación de Mario Cafiero, no pagaron lo que deberían haber pagado en concepto de retenciones, transfiriéndoles a los productores parte de la carga del impuesto. Decíamos arriba que el Gobierno con el modelo sojero ha sido socio de los agronegocios, exportadores y pools de siembra. Esto se vio claramente con lo que sucedió con las retenciones móviles: la necesidad que tenían los exportadores de que aumentasen las retenciones para "reducir" el precio de la materia prima para hacer frente a exportaciones ya predeterminadas de antemano.

El Gobierno manifiesta que estamos en los albores de un "cambio de modelo". Pero para que ello ocurra debería transparentarse cómo serían apropiadas estas "rentas extraordinarias", qué sectores –Estado nacional, provincias, intendencias– serían sus beneficiarios y para qué finalidades serían utilizadas.

Asimismo, cabría preguntarnos si esta política de retenciones también sería aplicada con una perspectiva "redistribucionista" a otros recursos naturales, a la minería, al petrolífero, sectores que también generan enormes rentas pero a los que no se les cobra equiproporcionalmente los impuestos correspondientes. Y que por otra parte son actividades que contribuyen sobremanera a lo que los economistas denominan eufemísticamente como "deseconomías externas": contaminación ambiental, saqueo de recursos. O incluso, en términos más generales, en qué medida se estaría pensando en una reforma impositiva "progresiva" en serio, que haría que paguen proporcionalmente más los de mayores ingresos a nivel nacional.

La rapiña "del campo"

Consejo Asesor Indígena[1]

Página 12– El País
Miércoles, 25 de junio de 2008

Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el Gobierno y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por

1 El CAI es una organización de base del pueblo mapuche.

el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena.

El Estado argentino reconoció en la Constitución de 1994 la preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de nuestra existencia misma. Además, en el 2000 el Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 de la OIT. Finalmente, el año pasado, Argentina, como país signatario de Naciones Unidas, firmó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Estos reconocimientos suponen derechos efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral. En el caso del pueblo mapuche, en puel mapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepas de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hechas prisioneras por el Ejército Argentino (a partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda.

Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá –representantes de miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es la provincia de Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa–, por ejemplo, son prueba viva de nuestra vida en el territorio que siguen rapiñando hoy por sobre nuestra sangre derramada.

Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichi, qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de Roca y Victorica al Chaco. Según cifras oficiales, el 10 por ciento de la producción nacional de azúcar –con su consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones– la realiza la empresa Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral guaraní, que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma.

No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate "nacional" que haya analizado –menos cuantificado– el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del Bicentenario.

Ni qué hablar de los autodenominados representantes "del campo", que no consideran tales a las extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y chivas –para el consumo doméstico ge-

neralmente–, las que además son para los organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la degradación y desertificación de los suelos.

Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como "campesinos", categoría que niega nuestro autorreconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirles a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista. En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los Estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los "inversores" y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aun con nosotros viviendo dentro.

La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.

Agronegocios: ¿transformaciones del modelo?

Norma Giarracca y Miguel Teubal

Página 12– El País

Miércoles, 9 de julio de 2008

Asistimos en estas semanas, como pocas veces en los últimos años, a un debate parlamentario intenso, y el fin de semana pasado pudimos seguir las distintas posiciones acerca de la ley sobre retenciones y los sólidos fundamentos de votos a favor o en contra. Se podrá sostener que hubo intercambios de favores para conseguirlos, pero es normal en una democracia y, más que eso, lo que debe remarcarse es que no hubo la mínima sospecha de "compra" de votos como en otras épocas. No obstante, el Congreso nacional de esta joven democracia se muestra enmarcado en un sistema de representación política, núcleo de la democracia liberal, tan en crisis como la misma "modernidad" que le dio cobijo.

Como suele decir Boaventura de Sousa Santos, vivimos épocas de transiciones, de pasajes tanto societales como epistemológicos. Esa magnífica ingeniería social que denominamos "modernidad" durante el siglo XX fue perdiendo sus dispositivos teóricos y políticos emancipadores y quedándose con la pura regulación o control social. En estos tiempos de pasajes, de bisagra de la historia, los discursos tienden a vaciarse de sentido y cuentan más las imágenes, la sociedad del espectáculo, que aquellos efectos dramáticos de las palabras que visibilizan los pliegues ocultos de las relaciones económicas coloniales.

Pongamos un ejemplo: en otro frío julio, en 1935, un discurso del demócrata-progresista santafesino Lisandro de la Torre contuvo una fuerte acusación a los frigoríficos ingleses por burlar los impuestos de la Nación y denunció, además, una trama de corrupción que llegaba hasta el gobierno de Agustín P. Justo, sus ministros de Hacienda, Federico Pinedo, y Agricultura, Luis Duhau. Con sus palabras, Lisandro desató un drama político que terminaría con el asesinato de uno de sus discípulos para salvarle la vida en el acalorado discurso en el Senado, y con su propia vida unos años después. En este Congreso de los "tiempos líquidos", Claudio Lozano formuló una denuncia tan fuerte como aquélla, que involucra un gran desfalco al Estado con supuestas complicidades gubernamentales. Su encendido discurso quedó sin efecto, se naturalizó, se siguió con la lista de oradores como si hubiese hablado de las retenciones escalonadas una vez más. No sabemos si esa denuncia es verdadera o falsa, pero estos tiempos la tornaron de tal débil densidad que quedó allí, flotando en las viejas paredes del Congreso. Si molestó alguno de los cuerpos o las conciencias de los legisladores, se la pudo alejar con un simple sacudón de cabeza o con la fuerte convicción de la "real politik" que comparten con muchos "intelectuales" de época.

La clave para acercar interrogantes a la nueva situación pos-Congreso se relaciona, justamente, con la denuncia de Lozano: ¿esta ley modifica el papel de "núcleo de poder" de las exportadoras en la cadena agroindustrial oleaginosa argentina; toca ese núcleo que subordina en su propia lógica los funcionamientos de los otros agentes del sistema? Y, podemos agregar, ¿qué pasa con los grandes "fondos de inversión" y sus extraordinarias ganancias que no tributan? Fondos de inversión que están formados en una proporción que aún no se conoce –no sale de los datos del CNA de 2002 sin cruzamientos especiales que no se han realizado– por propietarios de tierra y por arrendatarios de corto plazo; por los grandes estudios

agronómicos cuyos miembros son en su mayoría portadores de apellidos de la vieja clase terrateniente, encargados de la operatoria productiva, y por quienes se contactan con los grupos de inversores, pequeños ahorristas pero también grandes capitales financieros. Son esos grupos que, como dijo la Presidenta, se dedican a la "timba financiera", ahora de commodities. Entre los nuevos grupos sojeros fuertes del país siempre aparece una historia familiar con o sin linaje ligada a la agricultura (Los Grobos de Grobocopatel, La Redención de los Rodrigué, El Tejar de Alvarado). Se amasaron fortunas en muy pocos años acordes a los tiempos globalizados.

Volvamos a los núcleos de poder. Los grandes exportadores, aceiteras y cerealeras están liderados por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina, Aceitera General Deheza, Vicentin y Nidera. Son empresas que exportaron en 2007 por un total de 14 mil millones de dólares, 28,4 por ciento de las exportaciones totales del país. Son empresas que se encuentran entre las 10 principales exportadoras (acompañadas por YPF Repsol, Minera Alumbrera, Teneris Siderca). Las cerealeras son demandadas por el fisco por una presunta evasión de 650 millones de dólares; las aceiteras también, por 300 millones de retenciones no pagadas. La ley no toca a estos exportadores ni a los fondos de inversión. El debate en el Congreso sí tomó en consideración a medianos y pequeños productores, a través de un sistema de compensaciones. Se los orienta, de este modo, a la producción sojera en detrimento de los alimentos de los argentinos, contradiciendo los discursos oficiales.

En definitiva, esta ley no modifica el modelo del agronegocio. No obstante, si creemos que una política (im)posible se esconde en los márgenes de la sociedad, que circula en la defensa de nuestros recursos naturales, donde la tierra y los cerros mineros están en el centro de la escena, estos meses fueron importantes. Podemos vislumbrar un país que, con debate y sin confrontaciones violentas, llega al consenso sobre la necesidad de generar políticas para estos nuevos tiempos. Abre la posibilidad de batallar por los sentidos de esas nuevas "políticas", a no suturar sin transformar nada. Esa posibilidad está aún abierta y tal vez debamos aprender con modestia que, para modificar la gramática del gran poder agroindustrial, aunque sea con tibias políticas reformistas, se requiere de muchos actores –los pequeños y medianos productores entre ellos– y de la generación de fuertes consensos.

Ley, bien común e intereses sectoriales

Norma Giarracca

Página 12– El País
Viernes, 25 de julio de 2008

El vicepresidente de la SRA, Hugo Biolcati, dijo que lo ideal para el futuro inmediato sería que la Mesa de Enlace –espacio de las cuatro entidades ruralistas– y el Poder Ejecutivo se sienten a elaborar una ley para el sector agropecuario (en Hora Clave, el domingo 20 de julio). Una manifestación descarnada para una concepción de la política que, lamentablemente, no sólo circula por los gremios empresariales, sino por los ámbitos de los partidos políticos. Es una idea burda –un marxismo vulgar, diría en afán didáctico– de la relación entre economía y política. La ley como rústica traducción de la suma de intereses sectoriales.

Alguna vez, a fines de 2002, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, cuando se discutía un proyecto de ley para fomentar la biotecnología, en mi carácter de socióloga les recordé a los diputados presentes que sólo ellos estaban en condiciones para legislar para el bien común; que ni las empresas de biotecnología con sus fuertes lobbies ni el aparato científico con sus intereses académicos propios del campo o en articulación con "el mercado" (financiamientos de Monsanto), estaban en condiciones de decidir lo mejor para el conjunto del país.

La decisión es un acto político y en ella se juega la posibilidad de mantener y afianzar una determinada gramática del poder o introducir reformas que se orienten a generar otra política agroindustrial. El Estado como garante del bien común es el que promulga las leyes. No obstante, se puede pensar que en nuestra historia muchas veces han sido los movimientos sociales –el obrero, el de derechos humanos, el de mujeres, etc.– los que han impulsado leyes reformistas importantes. Expansión de derechos que los legisladores tomaron de las luchas de los movimientos sociales. Pero hace falta hacer una distinción: una cosa es la acción colectiva de protesta por la tierra, por el "no a la minería", por el agua, por el gatillo fácil, etc., y otra es la acción corporativa como la de estas cuatro entidades agropecuarias u otras. En las primeras, el núcleo central de la acción está constituido por un reclamo que incluye un bien común (los recursos o bienes comunes naturales) o un reclamo "universalizable", que incluye a

toda la población (la vida de los jóvenes, por ejemplo). Otra cosa es la defensa por intereses sectoriales.

El país necesita urgentemente una ley agraria y con la memoria fresca acerca del funcionamiento del sistema agroindustrial es más fácil legislar con propiedad. Nunca la sociedad tuvo tanto acceso a los pliegues ocultos del poder. Las denuncias acerca de los exportadores, las consecuencias sociales del proceso de sojización en la salud, en la concentración de la tierra, sobre los trabajadores rurales, los campesinos, las comunidades indígenas; los disparatados pedidos de subsidios para producir soja en Chaco o Santiago del Estero ganando tierras del algodón (que ahora es rentable) o a las economías locales; el sufrimiento de las comunidades wichís perdiendo tierras, cementerios e hijos, etc. Todo se dijo, todo se sabe. Es hora de legislar, de poner límites al modelo sojero.

Los legisladores tienen potestad para consultar a todas las entidades representativas, a la Mesa de Enlace, a los campesinos, consejos indígenas, trabajadores rurales; pueden recibir a los técnicos, a los especialistas en el tema desde las distintas disciplinas, a los consumidores, etc., pero tienen que asumir la responsabilidad de generar políticas públicas para el bien común. Para nosotros, con muchos años de conocer el campo, ese "bien común" posible para esta compleja Argentina actual podría apoyarse en una economía sustentable, diversificada y basada en los alimentos, con rentabilidades razonables para los pequeños agricultores, orientada a la soberanía alimentaria; un modelo que equilibre los mercados interno y el externo (tan promisorio) con institucionalidad y no con el puro mercado; que grave y limite la rentabilidad de los exportadores, fondos de inversión, semilleras, etc., y sobre todo, con una fuerte protección estatal para los recursos naturales y para las poblaciones campesinas e indígenas; respeto a otros modos de producir y vivir. Seguramente existen muchas herramientas legislativas posibles, desde la creación de un ente estatal de exportación (o reformas sobre el uso de la tierra) hasta medidas intermedias en los eslabonamientos agroindustriales. Es una decisión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajando en conjunto o separados en una o varias leyes. Pero la ley está por encima de los intereses sectoriales.

Las novedades de la exposición rural de 2008

Norma Giarracca

Crítica de la Argentina– Opinión
Miércoles, 30 de julio de 2008

Como todos los años, el corazón de la gran ciudad recibe al campo de la mano de una de las más fuertes y antiguas corporaciones agropecuarias: la Sociedad Rural Argentina. En el predio que consiguió en medio de fuertes críticas y acciones judiciales vecinales, año tras año la entidad se muestra en su rasgo primordial, es decir, el ganadero.

Las exposiciones de "la rural" tienen una densa historia política: el gobierno peronista de 1973 no mandó al presidente Héctor Cámpora ni al secretario de Agricultura a la inauguración; la dictadura militar mandó a Videla y a Martínez de Hoz, quienes se sintieron "en casa". Asimismo, en los primeros años del regreso de la democracia en 1984, las tensiones entre el gobierno y la corporación volvieron a hacerse notar, pero unos años más tarde, con el gobierno de Carlos Menem, los ruralistas consiguieron lo que siempre habían requerido –desregulación y rebajas de retenciones a las exportaciones– y la entidad, que además se favorecía con las privatizaciones, ni siquiera participó de los grandes paros agrarios del período (1991/93/94).

En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, y a pesar de los gravámenes a las exportaciones, esta sociedad estuvo en muy buenas relaciones con el gobierno. Su presidente, Luciano Miguens, en 2004 subrayaba en la inauguración el protagonismo del agro, y agregaba: "Éste es un país que comienza a crecer y a despejar problemas". Y, en efecto, el sector agropecuario era el que más crecía de la mano de las semillas transgénicas, la siembra directa y los actores del negocio sojero. La SRA, como las otras tres entidades, optó por subordinarse al nuevo modelo y negociar el reparto de las ganancias agropecuarias desde esa posición.

No obstante, convengamos que la SRA "ya no es la que era antes". Además, sus socios ya no tienen la exclusividad de ser "los dueños de la tierra", esta propiedad importa menos en un modelo agroexportador en el que se arrienda, se desmonta o se desaloja con prepotencia a los antiguos pobladores. No obstante, el símbolo del viejo poder quedó en el predio de Palermo mientras los poderosos grupos del negocio sojero desean presentarse en sociedad como "Expoagro". De todos modos, ambos sectores

están imbricados en los negocios, en el uso de la tierra y comparten las demandas de no pagar impuestos y de esquivar las famosas retenciones a las exportaciones.

Existe un antiguo imaginario social que enuncia que los terratenientes fueron atrasados, desarrollaron conductas no capitalistas, etc., y que esto formó parte de las dificultades de este país. En honor a la verdad, hay que decir que los estancieros argentinos incorporaron las mejores tecnologías de cada época y se comportaron como verdaderos capitalistas ganaderos. Y esto también ocurre hoy día con los grandes productores sojeros, que incorporan las tecnologías de punta... tan de punta que no son permitidas en otros lugares del mundo y, como aquellos otros ganaderos, no admiten regulaciones o impuestos. Es decir, el problema del sector no pasa por las tecnologías utilizadas sino por la relación con un recurso natural como es el de la tierra. El problema con ellos es que jamás han admitido tener obligaciones sociales por el uso de la tierra, un bien común, recurso, además, imprescindible para la producción de alimentos. El Estado tiene responsabilidades sobre ambas cuestiones: la tierra y los alimentos. Pero estos grupos muy poderosos, llámense ganaderos o sojeros, siempre intentan reducir a cero esta responsabilidad gubernamental y han tenido la capacidad corporativa para hacerlo, ayer y hoy. La Argentina, por ejemplo, nunca tuvo un proyecto político de reforma agraria en los marcos del capitalismo, como Brasil, México, Corea, etcétera.

Este año, en la inauguración de la Exposición Rural no hay presencia gubernamental pues se viene de meses de fuertes confrontaciones. Sin embargo, hay una novedad digna de ser mencionada: la presencia muy festejada de la Federación Agraria Argentina. Esta entidad nació en 1912 como respuesta a la prepotencia de los terratenientes a quienes los colonos les arrendaban los campos y esta relación complicada y jerarquizada había estado siempre presente entre ellos. ¿Será que al compartir el papel subordinado frente al nuevo poder del "agronegocio" sus diferencias se diluyeron? O habrá que pensar que la FAA dio por terminado su ciclo de representación de pequeños sectores capitalistas interesados en la alimentación y bienestar del país; que ahora se ubica entre los subordinados del modelo sojero –subordinados pero integrantes al fin– y que confrontará con los intentos (si los hay) de limitarlo y transformarlo. Si así fuera, sería un triste final para una organización que nació como movimiento social de gran fuerza democratizadora.

El derrotero de la sociedad rural

Norma Giarracca

Crítica de la Argentina– Opinión
Jueves, 4 de septiembre de 2008

La Sociedad Rural Argentina (SRA) nombra en septiembre a su presidente número 46 desde que fue creada en 1866. Mucho se ha hablado en estos últimos meses de esta organización que agrupa a grandes productores agrícola-ganaderos.

La SRA ha cosechado muy mala prensa entre los sectores democráticos después de haber aportado algunos de sus hombres a los gobiernos militares del siglo XX y, peor aún, a la última dictadura militar. No obstante, muy pocos conocen que la SRA tuvo un comienzo muy auspicioso entre quienes aspiraban al desarrollo capitalista y al progreso de la Argentina a mediados del siglo XIX.

En 1866 se habían superpuesto varias situaciones complicadas: crisis en Europa, Guerra del Paraguay y conflictos internos entre Buenos Aires y la Confederación.

En ese escenario, un conjunto de productores de ganado lanar decidió crear una organización que agrupara a miembros innovadores e "ilustrados" y que valorara la necesidad de mejorar tecnológicamente la producción local. Y, más aún, uno de sus fundadores, Eduardo Olivera, según el historiador José Carlos Chiaramonte, fue un verdadero precursor de la industrialización de la lana, pues consideraba que sólo pasando a una segunda etapa productiva se podría controlar los vaivenes de los mercados internacionales.

El grupo de ruralistas que fundaron la SRA no representó necesariamente al conjunto de productores agrarios, sobre todo a quienes portaban apellidos tradicionales de la colonia que se integraron más adelante; la razón de esta diferencia reside en que mientras los primeros deseaban hacer de la producción agropecuaria y del campo un espacio de modernización y modernidad, los segundos preferían la ciudad y despreciaban profundamente la campaña como lugar de atraso y "barbarie".

De este modo, los pioneros, Olivera, el viejo Martínez de Hoz, los hermanos Pastor y Felipe Senillosa, bregaron en soledad durante los primeros tiempos para instalar las ideas de desarrollo tecnológico, modernización y

la posibilidad cierta de habitar el campo en las condiciones que la prosperidad podía otorgarles.

Estos pioneros tampoco estuvieron articulados políticamente desde el comienzo con las elites del poder; sin embargo, supieron generar excelentes relaciones con los presidentes que aspiraban a un mundo agrario "civilizado" y moderno, como Domingo Faustino Sarmiento, quien demostró simpatías por la organización y se convirtió en uno de sus primeros socios honorarios. Como hoy ocurre con la biotecnología, en los momentos fundacionales de la SRA, el avance tecnológico era muy valorado por las elites políticas y muchos científicos vieron en los ganaderos sujetos capaces de aplicar conocimientos para desarrollar un capitalismo agrario pujante. Varios hombres de ciencia fueron, también, miembros honorarios de la SRA.

Como vemos, este sector, lejos de constituirse como una "oligarquía parasitaria", cumplió con las aspiraciones de las elites políticas y supo articularse con la ciencia modernizante. Considero que recordar hoy aquellos momentos puede ayudarnos a reflexionar sobre dos cuestiones que guardan actualidad y ameritan cierta reflexión: primero, que los sectores agrarios poderosos, aunque se institucionalicen, no quedan al margen de los avatares de las transformaciones históricas, cambian sus visiones del mundo, sus ideologías, sus prácticas sociales y políticas. Suponer que la SRA de hoy es la misma "golpista" que la de los años setenta o la "vanguardista" de 1866 es un desconocimiento histórico y un grave error político.

En segundo lugar, podemos deducir que, a diferencia de otros países de América Latina, la agricultura argentina surgió capitalista, innovadora y con buenas relaciones con la ciencia y con los personajes "ilustrados". Es decir, la agricultura del siglo XIX, como la actual, usó tecnología de punta, generó buenas relaciones con el poder y con el sistema científico, y se orientó a las óptimas condiciones del mercado internacional.

A modo de conclusión, podemos formular estos interrogantes que se basan en otro modo de comprensión de la historia y del presente: ¿bastó todo esto para generar una sociedad democrática con distribución de la riqueza equitativa? ¿No será que para comprender el pasado y el presente polarizado e injusto tenemos que bucear la cara oculta de la modernización, es decir, la "colonialidad" que jerarquiza a las personas y desprecia otras formas de vivir y reproducirse materialmente; que usa la violencia para extender la frontera agraria; "inferioriza" al otro; "racializa" las relaciones; es sexista y empobrece subjetivamente a las personas para lograr

un orden dominante y único? Todo esto raramente es cuestionado por las visiones tradicionales marxistas, desarrollistas, cientificistas que celebran el "productivismo" y entonces buscan "atrasos" y "oligarquías" donde simplemente hay capitalismo modernizador y estados complacientes.

Ruinas emergentes presencia campesina en la producción

Diego Domínguez

Página– Cash

Domingo, 14 de septiembre de 2008

Es abril de 2008, pleno "paro del campo" en Argentina, ya se siente el desabastecimiento en cada rincón del país, producto de los cortes de ruta de chacareros y medianos productores que no dejan circular los transportes de alimentos de los grandes centros de acopio y distribución a los locales de venta. Asoma la mañana en El Colorado, pueblo de alrededor de 13.000 habitantes, del interior formoseño, provincia del interior argentino. Es sábado muy temprano, pero ya se ve gente en la plaza; esperan la llegada de los casi 100 "pequeños" productores de la "Asociación de feriantes de El colorado" que traen sus productos para vender o intercambiar: zapallos, porotos, maíz, verduras en general, frutas, mandioca, batata, leche, queso, ricota, huevos, chivos, cerdos, pavos, gallinas, etc. Antes de promediar la mañana, ninguno de los casi 30 puestos de la feria tiene productos, se ha vendido todo. Así sucedió, todas las semanas, mientras duró el pico de los cortes de ruta y el resultante desabastecimiento alimentario local.

Esta iniciativa había surgido al calor de la crisis de 2001-2002. Los primeros años supo ser una alternativa ante los problemas de la población urbana de acceder a los alimentos. En la feria se encontraban productos que tenían como precio máximo un 20 por ciento menos que en los comercios. Poco a poco, los comercios del mercado formal se recompusieron como las principales bocas de expendio de alimentos en la localidad, ofreciendo productos provenientes de los complejos agroalimentarios controlados por grandes empresas agroindustriales. Esto hizo que la feria fuese perdiendo su primer ímpetu y centralidad.

Tanto en su origen como en su actual y breve reverdecer, la feria de los pequeños productores, de los campesinos, se erige como alternativa a los circuitos dominantes. Cuando el "sistema" no responde afloran, como

"ruinas emergentes", estas estrategias "de abajo", forjadas por los mismos campesinos, basadas en el cara a cara con los consumidores y vecinos, al margen de las cadenas concentradas y centralizadas de producción, procesamiento y distribución de alimentos.

No es un caso aislado. En Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero existen experiencias de este tipo, protagonizadas mayormente por ex productores algodoneros o tabacaleros reconvertidos. Es probable que en esas localidades, al igual que en El Colorado, las crisis o momentos de suspensión de la provisión alimentaria, vía cadenas agroindustriales, hayan constituido oportunidades para la emergencia y expansión de aquellas cadenas agroalimentarias "alternativas" o "campesinas".

Más allá de la anécdota, del caso puntual, se pueden recuperar algunas cuestiones generales que tales situaciones dejan:

1. La dinámica campesina de producción, procesamiento y distribución de alimentos, si bien marginada y subrepticia, persiste y emerge vital como sostén principal en momentos de crisis de los encadenamientos controlados por el gran capital.

2. La subordinación de la lógica campesina frente al agronegocio es más un resultado de factores y restricciones políticas e institucionales que de una supuesta ineficiencia e ineficacia productiva.

3. Los campesinos, por su propia intencionalidad, tienen como uno de sus objetivos prioritarios la provisión de alimentos para las poblaciones locales, frente a otros actores del agro que orientan sus acciones en primer lugar a partir de la maximización de las ganancias.

4. Las ciudades pequeñas o medianas que cuentan con poblaciones campesinas vecinas no corren riesgo ante un eventual desabastecimiento de alimentos del sistema agroalimentario conducido por el agronegocio y las empresas agropecuarias.

5. Es posible, en base a políticas públicas integrales para el desarrollo campesino y al fortalecimiento de las organizaciones de base campesina, reformular el sistema agroalimentario de modo que tenga como primer objetivo aprovisionar con alimentos baratos a la población.

Desarrollo y drama social

Norma Giarracca

Página 12– El País

Viernes, 26 de septiembre de 2008

La economía política sostiene que todo régimen de acumulación se corresponde con un modo de distribución de la riqueza. Desde esta tesis, resulta más claro comprender por qué le cuesta tanto a la economía argentina lograr formas de redistribución del ingreso más allá de las confusas políticas sociales que anuncia la ministra de Desarrollo Social, cuñada de la Presidenta. ¿Cuál es el régimen de acumulación de esta Argentina del siglo XXI? No soy economista, pero puedo sostener sin temor a equivocarme que el sector primario forma parte sustancial del modelo productivo del actual gobierno. Un modelo basado en los recursos naturales y, por lo tanto, donde las "rentas" (sobre-ganancias) juegan un factor fundamental: la "renta agraria", la "renta petrolera" y la inestimable "renta minera". Si bien en los primeros dos casos el Estado intercepta parte de esas rentas vía retenciones a las exportaciones, en el caso de la minería deja esas fabulosas riquezas monetarias en manos de las grandes y concentradas corporaciones.

Estas producciones, base del funcionamiento económico del mundo desarrollado, son contaminantes, depredadoras, extractivas por las características del proceso de producción mismo. Extraen lo que pueden de los recursos, los esquilman y dejan un escenario de contaminación, cambio de flora y fauna y grandes disturbios de los ecosistemas. Muchas voces del mundo se han alzado con críticas radicales contra este tipo de desarrollo que está en la base del llamado "progreso".

La agricultura que se basa en el recurso "tierra", con los cuidados del caso, hubiese podido proveer una producción sustentable a las futuras generaciones. No obstante, en las últimas décadas, esa posibilidad se va perdiendo. Después de una etapa razonable de modernización técnica aparecieron las grandes revoluciones tecnológicas ya comandadas por las empresas transnacionales bioquímicas; primero la "revolución verde" y por último la revolución biotecnológica que vació al campo de personas e hizo uso y abuso de agrotóxicos que ponen en peligro la tierra, la fauna y flora así como la salud pública.

Agronegocios, expansión de la minería y agotamiento de los recursos derivados de fósiles al servicio del Norte rico son claves en el modelo económico argentino del siglo XXI. Con cada exportación del sector primario se fugan fertilidad de los suelos, recursos no renovables, un gran desperdicio de agua, minerales declarados y no declarados, gran cantidad de energía eléctrica, trabajo de compatriotas muy mal retribuido, yungas, montes nativos y se llevan también muchas dignas resistencias de poblaciones que cuidaron esos recursos y no se resignan a la depredación.

Un componente significativo de este verdadero drama actual reside en cierta complicidad de sectores de los que se esperaba otra actitud. En efecto, se percibe, por un lado, cierta celebración de este modelo "productivista" por parte de los aparatos de la tecnociencia universitaria y, por otro, una escandalosa "invisibilización" por parte de los intelectuales de Carta Abierta, que se han limitado a una crítica "setentista" a los sectores agrarios. En las universidades nacionales, sus laboratorios e institutos han sido colonizados por el discurso "productivista", y en ese espacio que se autorrefiere como Carta Abierta se buscan derechas y responsables por la falta de distribución de la riqueza ignorando la construcción y responsabilidad gubernamental en un modelo que está preñado no sólo de polarización social, sino de saqueo, devastación y grandes sufrimientos sociales.

La política neoliberal en materia científica y universitaria condujo a los científicos a celebrar la noticia de la importancia de sus conocimientos en el entrelazamiento de fuerzas productivas. No se preguntaron por las consecuencias sociales de esta fusión entre tecnociencia y mercado. Para hacerlo, se necesitaba una densa interacción con otras disciplinas. Pero el drama se conforma, justamente, porque muchos referentes del pensamiento crítico de los años '70, que aún dan batalla, no sólo no critican esta relación entre tecnociencia y mercado, sino que algunos han decidido convertirse en verdaderos guardianes intelectuales del Gobierno, que es un actor básico del modelo.

Tal vez, el desacuerdo reside en que el pensamiento crítico del ayer es improductivo y el nuevo pensamiento emancipatorio que circula soterradamente por Latinoamérica es de márgenes, de frontera, de poblaciones en lucha. Se trata de pensamientos, con raíces "de-coloniales" y que no hablan los lenguajes del poder. Por ello, estos nuevos pensamientos críticos son ignorados y vapuleados por una parte sustancial de los "intelectuales", quienes buscan desarrollos (no importa a qué costo), autoridad y

subordinación gubernamental (la obsesión del orden estatal) y derechas e izquierdas para dicotomizar la política como en las viejas épocas. Mientras tanto, unas poblaciones en lucha, otra ciencia y otros pensamientos críticos sobrevuelan nuestra desgarrada geografía.

El debate por la "soberanía alimentaria"

Norma Giarracca

Crítica de la Argentina– Opinión
Jueves, 23 de octubre de 2008

El mundo atraviesa una crisis que empezó en el sector financiero de Estados Unidos y se expande a otros sectores económicos y territorios con la velocidad de los tiempos. La economía argentina está integrada al mercado internacional en menor medida que los otros países de la región aunque en materia agrícola es el más hipotecado de América del Sur. En efecto, la Argentina y México son los dos países de América Latina que más han hipotecado sus agriculturas siguiendo los mandatos del neoliberalismo.

Quienes saben teoría económica y perciben los movimientos actuales con adecuadas experiencias vaticinan que se perderá mucho capital hasta que la rueda del ciclo vuelva a un nuevo punto de arranque. Sin embargo, nadie se anima a vaticinar qué carácter tendrá y qué países hegemonizarán la siguiente etapa.

Por eso, el diseño de medidas globales anticrisis en nuestros territorios lo deben asumir los "Estados nacionales" de acuerdo con sus intereses internos o regionales. Un mínimo principio de cooperación social en estos momentos es imprescindible para afrontar los años que vienen: cooperación interna y con el resto de América Latina. Es interesante observar que los países latinoamericanos más comprometidos con la crisis en materia agroalimentaria se resisten a retomar iniciativas "nacionales" serias. México, con un gobierno débil por su confusa elección, vapuleado por todos lados, subsumido en el Tratado de Libre Comercio y que ha perdido la decisión de formular un programa de soberanía alimentaría, no acierta senderos de salida. Ha perdido la capacidad de decisión de país libre y soberano, la autosuficiencia campesina y las remesas (ingresos que mandan los emigrantes) bajan estrepitosamente. Los emigrados regresan y el acceso a la alimentación no está garantizado excepto en comunidades au-

tosuficientes en materia alimentaria que, por la fuerza de las creencias y saberes indígenas y campesinos, resistieron las políticas neoliberales.

La Argentina comparte la vulnerabilidad agroalimentaria de México pues ambos Estados desregularon sus agriculturas en los años noventa y no revirtieron esas nefastas políticas. Ni el cambio del partido de gobierno en México ni la "era Kirchner" transformaron el ciclo neoliberal "duro" en materia agrícola. México decidió abandonar la posibilidad de autosuficiencia de su principal alimento: el maíz, importando buena parte de Estados Unidos y "exportando" mexicanos, quienes mandaban las remesas. Hoy vuelven y se queda sin remesas y sin maíz. Mientras tanto, la Argentina abandonaba irresponsablemente la producción de alimentos directos para orientarse a la exportación de soja, una forrajera que nada tiene que ver con su tradición alimentaria.

La propuesta clave es "soberanía alimentaria", un conjunto de medidas integradas a esta idea "descolonial" y progresista que la organización internacional Vía Campesina propone y define: "Organizar la producción y el consumo de alimentos de acuerdo con las necesidades de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción y el consumo domésticos. Incluye el derecho de proteger y regular su producción nacional agrícola y ganadera. Campesinos, sin tierra, productores rurales deben tener acceso a tierra, agua, semillas y recursos productivos y servicios públicos adecuados.

Para nuestro país es regresar a la producción de alimentos directos y garantizar el acceso a una alimentación sana y de buena calidad frente a los intereses sectoriales o a la necesidad de generar divisas para el financiamiento de un Estado que nadie siente al servicio de la población.

Frente a la gran crisis y la depresión por venir, la "soberanía alimentaria" es un camino que evitaría mucho sufrimiento en un futuro inmediato y no sólo a los sectores más vulnerables sino a grandes capas de sectores medios de estos dos países y de toda Latinoamérica. ¿Los políticos y funcionarios de la región están capacitados para comprender y actuar al margen de los pensamientos que predominaron en los últimos 35 años? Muchos lo dudamos, por lo menos para México y la Argentina. No obstante esto, el debate puede encontrar ecos impredecibles e inesperados; por ello, es necesario intentarlo.

Momento para cambiar

Miguel Teubal

Página 12– Cash
Domingo, 9 de noviembre de 2008

A esta altura no se debería dudar de la existencia de una profunda crisis mundial tanto o más importante que la de los años treinta. La caída de los bancos, compañías de seguros, la Bolsa de valores y la utilización de fondos multimillonarios para rescatarlos son una manifestación de una crisis financiera de enormes proporciones. Crisis que ya se extiende hacia la economía real. Ya hay suspensiones de personal en las grandes empresas, no sólo en bancos, sino también en la industria automotriz, química. Esta caída del empleo no se verifica sólo en los Estados Unidos y Europa, donde se focaliza la crisis, sino también en el resto de mundo, incluyendo a Latinoamérica. No es difícil de vislumbrar el efecto más temido de la crisis: su incidencia sobre la actividad económica global, el empleo, las condiciones de vida de vastos sectores sociales. Todo esto significa un incremento del enorme sufrimiento para millones de personas.

En los años treinta la crisis comenzó con la caída estrepitosa de la Bolsa en 1929 y después incidió significativamente sobre la economía real, cuya manifestación más concreta lo constituyó el aumento de la desocupación. También ahora hay signos concretos en ese sentido. Existe la perspectiva de un alza de la desocupación, caída de los salarios reales, aumento de la regresividad en la distribución de los ingresos. Si bien todo comenzó en el centro del imperio, se transmite hacia el resto del mundo con suma rapidez.

Frente a esta situación cabría preguntarse: ¿cuán resguardada está la economía argentina? Hasta hace poco el Gobierno insistía en que la economía no presentaba peligros y estaba lo suficientemente resguardada de la crisis mundial. Que la bonanza de los últimos años, con altas tasas de crecimiento, seguiría. Y que esto se debía en gran medida a que persistía una demanda externa pujante para las exportaciones: los commodities (soja y petróleo) que contribuyeron a sacar la economía del pozo de la crisis de 2002. En efecto, una parte importante de los superávit de la balanza comercial y fiscal que se contabilizaron en esos años se debió al auge de los precios internacionales de esos commodities. Esto permitió la acumulación de una importante masa de divisas extranjeras que podía ser

utilizada para hacer frente a cualquier contingencia. Pero ahora esto ya no es tan así: se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad externa de la economía, con caídas sustanciales del precio de esos commodities.

Paradójicamente, si hubiera estado vigente la Resolución 125, los productores agropecuarios no habrían tenido las retenciones que ahora pagan. Pero tanto o más importante que ello está el hecho de que se hace manifiesta la reducción de los superávit y la perspectiva de que una corrida puede comprometer las reservas acumuladas por el Banco Central.

La crisis mundial sobre nuestra economía también tiene otros ribetes: incide sobre las expectativas. Amenazas de despidos en varias empresas, lo que deriva en una reducción de la demanda global. La inestabilidad inherente al sistema se manifiesta con el famoso concepto "expectativas": si todo sigue a la baja, si se supone que la situación puede empeorar, que pueden reducirse las ventas, o que se puede perder el empleo, entonces efectivamente se tiende a una profecía autocumplida. La incertidumbre hace que la población consuma menos y los empresarios inviertan menos. Si además el sector privado ajusta sus cuentas, adelantando vacaciones o echando personal, la situación se agrava. En este contexto, la posibilidad de una recesión se pone a la orden del día.

¿Qué hace el Gobierno frente a esta situación? ¿Qué debería hacer? No caben dudas de que todavía persisten las recetas keynesianas de los años '30, del New Deal de Roosevelt en la segunda etapa de la crisis, cuando la economía estadounidense llegaba a su situación más desesperante, con tasas de más del 20 por ciento de desocupación abierta. Fue en ese momento que se impulsó una serie de medidas, incluyendo un vasto plan de obras públicas. Pero existen limitantes importantes para la aplicación de un importante plan de obras públicas e inversiones en nuestro país que vayan más allá de los negocios para algunos. Requeriría para su efectivización sumas millonarias para financiar, incluso con déficit fiscales. Y una pesada carga impediría su materialización: la deuda externa, que pese a su reestructuración a comienzos de esta década sigue tallando fuerte. Más allá de cómo obtener nuevos fondos de diferentes fuentes, el objetivo de la reestatización de la jubilación no tiene por qué ser fundamentalmente para apropiarse de fondos necesarios para pagar los servicios de la deuda. Es el momento para encarar los problemas en forma radical. De encararlos, además, en forma conjunta con los demás países de América latina. Los gobiernos de los Estados Unidos, Europa y Japón utilizan sumas multimillonarias para salvar grandes bancos sin consideraciones respecto de

las necesidades de su propia población, y menos aún de los pueblos del Tercer Mundo.

Es un momento en que todo cambia, que los preceptos considerados inamovibles tienden a ser dejados de lado. Se necesita hacer lo mismo: la deuda externa no tiene por qué pagarse en los términos en que fuera contraída o incluso negociada. Además, porque, como todos sabemos, es odiosa e ilegal. Existen otras necesidades mucho más importantes para los pueblos de América latina: salud, educación, vivienda popular, alimentación accesible a todo el mundo.

El modelo sojero

Miguel Teubal

Página 12– Cash
Domingo, 10 de mayo de 2009

El conflicto agrario que comenzó en 2008 y que sigue inconcluso contribuyó a que gran parte de la opinión pública tomara conciencia de muchos aspectos vinculados con la problemática del sector agropecuario. Sin embargo, quedó en el tintero una cuestión fundamental que no siempre fue debatida en profundidad: el modelo sojero. Este modelo cobra impulso en los años '70 y constituye una de las manifestaciones más palpables del sistema de los agronegocios. Si bien el modelo tiene sus defensores debido a la alta rentabilidad que genera para algunos sectores, ya que redunda en beneficio de exportadores, grandes productores, rentistas y proveedores de los insumos involucrados en la producción sojera, se tiende a soslayar los múltiples costos involucrados en esa producción. Costos sociales, económicos, ambientales e incluso en la salud pública. Costos que los economistas eufemísticamente denominan "deseconomías externas" o "externalidades", o sea, costos "externos a la empresa", generalmente soportados por agricultores, peones rurales, pobladores de las ciudades del interior. Costos que no son contabilizados en los debates sobre el modelo.

Ninguna de las partes del conflicto agrario que involucró al Gobierno y al campo (en realidad, una parte del campo, puesto que ni el sector campesino ni las comunidades indígenas ni tampoco gran parte de la agricultura familiar participaron en forma directa en esa puja) impulsó un debate en torno de las implicaciones del modelo sojero. El "campo" no lo hizo por-

que se trataba de un cultivo muy "rentable". Pero tampoco al Gobierno le interesaba poner en jaque a ese modelo porque gran parte de sus ingresos fiscales así como el superávit de la balanza comercial dependían de él. En este sentido el Gobierno actuó, en lo esencial, como socio de los sojeros. Los defensores del modelo señalan su alta rentabilidad debido, en parte, al paquete tecnológico que se utiliza. La semilla transgénica es resistente al glifosato. Esto le permite al productor adoptar el sistema de siembra directa, un sistema productivo que no requiere el laboreo tradicional en el campo, o sea, el arado que desde hace siglos se realiza para preparar la tierra para la siembra. Sin embargo, como la siembra directa deja intacta la maleza, se utiliza masivamente el glifosato juntamente con otros agrotóxicos para eliminarla. El glifosato mata la maleza aunque no la semilla. También mata gran parte de la fauna y flora existente en su entorno y tiene efectos nocivos sobre la salud humana. Lo único que queda en el campo después de la utilización masiva de glifosato y de otros agrotóxicos es la semilla, o planta de soja transgénica. El modelo sojero impulsa la utilización masiva del glifosato. En la actualidad se utilizan entre 160 y 180 millones de litros de glifosato por año equivalentes a 600 millones de dólares.

En esferas oficiales y entre las organizaciones del campo se afirma que el glifosato es un herbicida esencialmente inocuo, o bien, más inocuo que otras herbicidas. Para el Senasa se trata de un producto que "normalmente no ofrece peligro". No se conocen estudios que avalen fehacientemente estas y otras apreciaciones referidas a la inocuidad del glifosato. Cabe destacar que la semilla de la soja transgénica fue liberada al mercado en 1996 sin que fuesen presentados estudios científicos serios que avalaran su presunta inocuidad. ¿Cuánto perjuicio genera la utilización masiva del glifosato? Los defensores del modelo tratan con horror la posibilidad de que el glifosato y otros agrotóxicos sean prohibidos. No mencionan los costos de su utilización. Señalan con horror los presuntos perjuicios que puede acarrear la prohibición del uso del glifosato en la producción agropecuaria. No sería la primera vez que se prohíbe un agrotóxico.

Cabe destacar que la "rentabilidad" individual no es necesariamente equiparable a "bienestar general": de allí la necesidad de regulaciones y controles necesarios en la agricultura. Un alto valor de cambio que significa una alta rentabilidad empresarial no implica necesariamente un alto valor de uso, y menos aún un valor social importante conducente al bienestar general.

¿Cuál sería el mayor peligro para la evolución futura de nuestra agricultura? Según las organizaciones ligadas al campo y la producción sojera, prohibir el glifosato sería "retroceder diez años en los logros obtenidos". Estas afirmaciones encubren la multiplicidad de efectos o costos sociales negativos involucrados en el mantenimiento del modelo sojero. La gran rentabilidad de la soja es apropiada por determinados sectores que son los principales beneficiarios del modelo. Pero, ¿cuánta gente padece el modelo sojero? ¿Cuántos productores de alimentos básicos de consumo popular han sido desplazados por la soja? Si se tomaran en consideración los costos se vislumbraría que la soja no es tan "rentable" como se cree y que sus efectos de largo plazo no necesariamente promueven el "desarrollo" en el país.

¿Y al final, el partido del campo, dónde está?

Norma Giarracca

Crítica de la Argentina– El País.
Martes, 2 de junio de 2009

> No hace falta demostrar que no hubo "partido" y como siempre los ruralistas se quedaron con modos indirectos de influir en el poder político.
>
> Durante el conflicto de campo-gobierno nacional de 2008, mucho se especuló con la posibilidad de que los gremios rurales armaran su propio partido político; intelectuales cercanos al gobierno lo planteaban como el armado de una nueva derecha partidaria. A casi un año de aquellas especulaciones, y frente a las listas que se presentan el 28 de junio, vale la pena reflexionar sobre el campo en el escenario electoral.

No hace falta demostrar que no hubo "partido del campo" y como siempre los ruralistas se quedaron con modos indirectos de influir en el poder político. En realidad, durante el paro agrario de 2008 no hubo ningún indicio que condujera a pensar que ese partido se formaría; es decir no había tradición histórica ni presente que mostrara esa resolución. Los sectores poderosos del campo supieron influir de modos muy diversos en el poder político durante gran parte del siglo XX; por un lado atacaron y des-

estabilizaron despiadadamente a los gobiernos de períodos democráticos que proponían una política económica que diera lugar a una estructura productiva heterogénea y redistributiva. Los procesos de industrialización se financiaban vía impuestos a la renta agraria (no a la ganancia sino la sobreganancia generada por la fertilidad de la tierra), y entonces los sectores agrarios de Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA) respondían de modo corporativo y acudían a cualquier recurso para evitar esa situación. Es más, cuando se sentían muy amenazados en esa dirección apoyaban golpes militares de Estado. Mientras tanto los pequeños y medianos agricultores de la Federación Agraria Argentina (FAA) generalmente corrían la misma suerte que sus aliados industriales de la Confederación General Económica. En líneas generales el siglo XX marcó esas conductas ondulantes de los agraristas poderosos en coexistencias significativas con etapas de gobiernos militares y democráticos.

Esos ciclos de alternancias finalizan con la imposición violenta en su momento fundacional y trágica en el desarrollo posterior en democracia, del denominado modelo neoliberal. Proceso económico hegemonizado por las grandes corporaciones económicas que tienen en el siglo XXI, los recursos naturales como centro de extracción de riqueza y que requirió de un armado previo del andamiaje legal e institucional. El "agronegocio" (reemplazando la producción de alimentos) fue el primero en instalar su lógica subordinando a sus propios intereses a los productores y grupos agrarios nacionales a través de dispositivos generados mediante políticas públicas, es decir con el apoyo del Estado.

Las corporaciones económicas de cualquier origen nacional son las que tienen en el escenario de hoy la capacidad de desestabilizar a un gobierno democrático que intente una política autónoma y redistributiva; no necesitan un partido político porque apuestan a todos a través de los aportes de campaña y, además, tienen sus socios políticos preferidos dentro de sus negocios.

Un resultado sorprendente de estos cambios del país ha sido el achicamiento de brechas entre la Federación Agraria Argentina y las otrora entidades de gran poder como la SRA y CRA. No obstante ese acercamiento en relación con los intereses económicos, se mantiene todavía una prudente separación en el registro cultural, en lo que en términos clásicos podríamos denominar "culturas de clase". De este modo, algunos nostálgicos miembros de la SRA creen que pueden decir públicamente, lo que

les viene a la mente. Es lo que se pudo ver y escuchar en el comentado programa Hora clave cuando Hugo Biolcati y Mariano Grondona hicieron alardes de pasadas impunidades con insinuaciones autoritarias en referencias a la fecha de finalización del gobierno. Pero estos sujetos perdidos en la noche del domingo, sonaron, para decirlo compasivamente, ridículos y sin las consecuencias de antaño.

Finalmente, ¿por qué tantas dificultades para comprender estos cambios registrados en el país y tanta insistencia en la idea de procesos "destituyentes" en los que conspirarían los gremios rurales, ahora imaginados en contubernios con todos los partidos del arco opositor? A mi juicio es el modo de intentar producir una realidad que sea funcional a determinados posicionamientos políticos frente al "kirchnerismo". La fuerte e irrefutable imagen de la Presidenta con corporaciones mineras y gobernadores provinciales aliados así como el veto a la Ley de Glaciares, la posición del ministro de Ciencia frente a las denuncias sobre el agroquímico de la Monsanto, etc., no resultan compatibles con la caracterización de "gobierno progresista" que circula por estos grupos de la cultura. Entonces se construye un "opositor" despiadado en los cuerpos de estos sectores agrarios que supieron serlo en el pasado pero que ahora, aunque quisieran, no tienen capacidad ni condiciones objetivas para repetirlo.

El retroceso electoral del gobierno será mínimo pues el aparato del justicialismo es una poderosa máquina de recoger votos positivamente emitidos (esa vieja y desgastada política) y por ahora, está en manos del Gobierno. Afuera hacen colas los que quieren simplemente reemplazarlo y algunos otros que aún creen sinceramente en el poder de cambio del perimido sistema de representación. El campo de la Mesa de Enlace circula por todos lados para negociar sus ganancias sin partido propio.

El fracaso del censo agropecuario

Norma Giarracca

Crítica de la Argentina
Lunes, 21 de septiembre de 2009

En este país, por una razón u otra, los censos poblacionales y agropecuarios no han tenido las frecuencias recomendadas a todos los países con el fin de lograr comparaciones regionales e internacionales. Asimismo hubo

censos, de uno u otro tipo, mejores o peores. Lo que no recordamos es que haya habido censos sin terminar o en las condiciones presentadas en el informe que el 28 de agosto por el INDEC, que habla del Censo Nacional Agropecuario 2008.

Como usuaria permanente de los censos agropecuarios me preguntaba si no existiría forma de darles alguna utilidad a esos datos que se presentan. Revisé provincia por provincia y en alguna de ellas los datos parecen tener alguna correspondencia lógica con los censos anteriores y con lo que conocemos que ha ocurrido en esas regiones. La cuestión básica es la imagen en el nivel nacional de los datos y especialmente en la región pampeana. Esto último era esperable toda vez que se larga una operación censal durante uno de los conflictos más complicados entre el sector agrario pampeano y el Gobierno. Recordemos que la operación censal comenzó en junio de 2008, semanas después de agudizarse el conflicto y, también es importante recordar, un tiempo posterior de que se hubiesen desplazado de sus cargos a quienes dirigieron los dos censos agropecuarios anteriores con notable profesionalidad.

En la provincia de Buenos Aires de más de 50 mil explotaciones censadas en 2002, se censaron apenas 30 mil y más de un irresponsable lo interpretaría como concentración de tierra en menos empresas si no se observa el dato de la superficie censada: de 25 millones de hectáreas disminuye a 16 millones; es decir que de las supuestas 20 millones de hectáreas que el informe declara no censadas, casi la mitad son de la provincia de Buenos Aires. Todo ello en una expansión de tiempo censal que agota todas las tolerancias posibles hasta en una simple encuesta agraria, de junio a octubre (son muchas las condiciones de producción, cosecha, labores que cambian en ese lapso). El informe habla de "segmentos abiertos", eufemismo para contarnos que están pendientes o que nunca se censarán miles de explotaciones y millones de hectáreas.

Un operativo censal lleva mucho presupuesto, meses de preparación, consultas y luego un gran despliegue de personas que, simultáneamente en todo el país, aplican un cuestionario previo entrenamiento. Ni hablar de las etapas posteriores a pesar de los adelantos tecnológicos disponibles.

Es paradójico que en una coyuntura donde muchas áreas del Gobierno necesitan información confiable del sector agrario, esto ocurra. Es muy penoso que aquellos que periódicamente no sólo utilizamos los datos censales para nuestros trabajos sino que dábamos a conocer al gran público las grandes tendencias de cambio entre un censo y otro, nos hayamos quedado

sin esa importante información. Y es alarmante que el gobierno y muchas instituciones autónomas como las universidades sigan sin comprender las graves consecuencias de esta intervención política a un organismo técnico que fue reconocido como ejemplo de excelencia y profesionalidad.

Desarrollo, democracia y las asambleas en movimiento

Norma Giarracca

Pagina 12, Opinión
Jueves 5 de febrero de 2009

La discusión acerca de cuánto contaminó ayer u hoy Botnia con sus dioxinas, La Alumbrera con su cianuro o Monsanto con su glifosato enfermante, no es lo central para quienes pensamos que el problema no reside en estas mediciones sino en el modelo de desarrollo que se impuso (dictaduras mediante) y que ninguno de los gobiernos elegidos por esta democracia representativa, estuvieron dispuestos a modificar en lo esencial. Por eso es una buena ocasión para relacionar estas cuestiones que casi siempre aparecen separadas: qué modelo de desarrollo con qué democracia; y quiénes los cuestionan.

El concepto "desarrollo" tiene mala prensa y algunos pensadores proponen incluso desterrarlo del acervo lingüístico de los nuevos pensamientos críticos. No se lo puede desligar del colonial sentido evolucionista que establece estadios para alcanzar la meta que sólo unos pocos países lograron a costa del saqueo de otros territorios y poblaciones. El "desarrollo" siempre fue presentado como esa meta imposible para nosotros en tanto carecemos de algo, somos gente sin algún atributo por consecuencia de "la raza", "la cultura", "la educación", "el clima" o cualquier cosa que nos hace indefinidamente "subdesarrollados".

En los tiempos posteriores a la segunda posguerra hubo un período en que la ilusión del desarrollo parecía hacerse realidad y los mercados laborales se habían convertido en dispositivos de inclusión, dentro de sistemas de desigualdad corregibles en parte (pensemos en los gobiernos del primer peronismo) y un horizonte de derechos sociales fijado por el movimiento obrero, que justificaba la apuesta "desarrollista".

Pero esos tiempos cambiaron (gobiernos militares represivos mediante) y lo que resulta difícil de comprender es cómo, en la actualidad con las

características que la organización económica del capitalismo neoliberal ha asumido, se insista en el mito. Hoy el "paradigma desarrollista" que se ofrece a través del gran aparato comunicador mediático es inequitativo, socialmente excluyente, generador de muy pocos ricos que son muy ricos y muchos pobres que son muy pobres; y, además, es devastador de los recursos naturales que son la principal riqueza que el mundo globalizado disputa.

Ramón Grosfoguel, uno de los críticos del desarrollo, sostiene que para el pensamiento capitalista/colonial/moderno los pueblos fuera de los centros de poder, están siempre en una situación de carencia: pasamos de ser "gente sin escritura" a "gente sin historia" y cuando llegamos al siglo XX pasamos a ser "gente sin desarrollo" y más recientemente "gente sin democracia". Y siempre hubo un "gran otro" dispuesto a suplir esas carencias por nosotros y a proponernos modos de conocer (nos), imponiendo epistemas y produciendo verdaderos "epistemicidios" con otras formas de conocimientos que sustentaban otras formas de vida. En América Latina la caracterización de "gente sin democracia" -como señalamiento que apunta a los países asiáticos y africanos- no es necesaria por ahora, porque existen democracias dóciles y obedientes al mandato de estos poderes económicos. Y aquellas que se animan a desconocer el mandato corren el peligro de caer en tales categorías (sólo escuchar atentamente la CNN para percibirlo).

Las "democracias representativas" están cuestionadas por quienes sufren en carne propia, en su vida cotidiana, en la salud o seguridad de sus hijos las consecuencias de "este desarrollo" ya que "en nuestro nombre" se habilitan legislaciones criminales para sustentarlo; "en nuestro nombre" se sacan leyes que permiten y subsidian actividades como la minería; se veta una ley que protege a los glaciares; "en nuestro nombre" se habilitan situaciones diarias que violentan un básico sentido del "buen vivir".

En efecto, muchas de las poblaciones que rechazan estos desarrollos desconfían de la "representación"; desconfían de los partidos políticos y de las instituciones y proponen organizarse con formas de la democracia directa que intentan las difíciles formas asamblearias como dispositivo de decisión. Por supuesto que no se adjudican la representación del país sino que usan su pequeño espacio generado por la acción colectiva para pensar problemas que nos atañen a todos y, con la ayuda de los medios de comunicación y de otros actores, los ponen en la agenda de discusión pública. Porque la contaminación, la depredación de bosques, de glaciares,

de la tierra, el modelo sojero que sustituye a una agricultura de alimentos, son problemas de todos, no sólo de los grupos en resistencia.

Muchos de quienes critican "este desarrollo" así como la degradación irreversible de las formas de representación política en todos los niveles, cuestionan radicalmente el mundo en que vivimos hoy aunque no sepan muy bien cómo ir construyendo su reemplazo. Y esto, justamente, es la mejor expresión del pensamiento crítico de nuestro tiempo: el que se permite actuar sobre lo que aún no existe, imaginarse una economía del buen vivir o formas de democracia directa, democracias pluriétnicas o un "mandar obedeciendo" e ir actuando en consecuencia. Un pensamiento que no propone subordinar la novedad a las viejas formas institucionales existentes y mantiene una sana indignación que suscita impulsos para teorizar y acompañar las nuevas experiencias.

Anexo. Votos en la Cámara de Diputados y en el Senado

Votos Diputados – sábado 5 de julio de 2008

Votos a favor de la ratificación de la Resolución N° 125

Argüello Octavio (FPV)	Morejon Manuel (FPV)	Salum Osvaldo (FPV)
Basteiro Sergio Ariel (EP)	Pais Juan (FPV)	Vilariño José (FPV)
Bernazza Claudia (FPV)	Bedano Nora (FPV)	Caselles Graciela (FPV)
Bianchi Silvestre Marcela (FPV)	Cantero Alberto (FPV)	Ferra de Bartol Margarita (FPV)
Bidegain Gloria	Merchan Paula	Gioja Juan (FPV)
Carlotto Remo (FPV)	Vaca Narvaja Patricia (FPV)	Godoy Ruperto
César Nora Noemí (FPV)	Carmona María	López Ernesto (FPV)
Cigogna Luis (FPV)	Galantini Eduardo (FPV)	Córdoba José (FPV)
Conti Diana (FPV)	Perie Hugo (FPV)	Gutiérrez Graciela (FPV)
Depetri Edgardo (FPV)	Calza Nelio Higino (FPV)	Korenfeld Beatriz (FPV)
Di Tullio Juliana	Solanas Raúl (FPV)	Rodríguez Evaristo (FPV)
Díaz Bancalari José (FPV)	De la Rosa María (FPV)	Agosto Walter (FPV)
Donda Pérez Victoria (EP)	Díaz Roig Juan (FPV)	Berraute Ana (FPV)
Dovena Miguel Dante (FPV)	Fernández Basualdo Luis (FPV)	Dalla Fontana Ariel (FPV)
Erro Norberto (Concertación)	López Rafael (FPV)	Fiol Paulina Esther (FPV)
Fernández Marcelo (FPV)	Roman Carmen	Marconato Gustavo (FPV)
García María (FPV)	Martiarena Marío (FPV)	Obeid Jorge (FPV)
Giannettasio Graciela (FPV)	Moisés María (FPV)	Rossi Agustín (FPV)
Ilarregui Luis (FPV)	Snopek Carlos (FPV)	Rossi Alejandro
Kunkel Carlos (FPV)	Aguirre de Soria Hilda (FPV)	Sylvestre Begnis Juan (FPV)
Landau Jorge (FPV)	Herrera Griselda (FPV)	Brue Daniel (Frente Cívico por Santiago del Estero)
Leguizamón María (FPV)	Paredes Urquiza Alberto (FPV)	Herrera José (Frente Cívico por Santiago del Estero)
Llanos Edith (FPV)	Rejal Jesús (FPV)	Luna de Marcos Ana (Frente Cívico por Santiago del Estero)
Moreno Carlos (FPV)	Santander Mario (FPV)	Pastoriza Mirta
Muller Mabe (FPV)	Alvaro Héctor (Concertación)	Pérez Jorge (Frente Cívico por Santiago del Estero)
Pasini Ariel Osvaldo (FPV)	Fadel Patricia (FPV)	Bertone Roxana (FPV)
Porto Héctor (FPV)	Genem Amanda (FPV)	Calchaquil Mariel (FPV)
Puiggros Adriana (FPV)	González Juan (FPV)	Sciutto Rubén (FPV)
Recalde Héctor	Pereyra Guillermo (FPV)	Alfaro Germán (FPV)
Rico María (FPV)	Bianco Lía (FPV)	Córdoba Stella Maris (FPV)
Ruiz Ramón (FPV)	Irrazábal Juan (FPV)	Dato Alfredo (FPV)
Segarra Adela (FPV)	Iturrieta Miguel	Díaz Susana (FPV)

Serebrinski Gustavo (Concertación)	Kakubur Emilio (Dignidad Peronista)	Herrera Alberto
Sluga Juan Carlos (FPV)	Leverber Stella Maris (FPV)	Rojkés de Alperovich Beatriz (FPV)
Vázquez Silvia (Concertación)	Llera Timoteo (FPV)	Salim Juan (FPV)
West Mariano (FPV)	Perie Julia (FPV)	Vargas Aignasse Gerónimo (FPV)
Acosta María (FPV)	Massei Oscar (FPV)	Bonasso Miguel
Damilano Grivarello Viviana (FPV)	Prieto Hugo (Concertación)	Borocotó Lorenzo Eduardo (Movimiento Independiente)
Morante Antonio (FPV)	Arriaga Julio (FPV)	Coscia Jorge (FPV)
Soto Gladys (FPV)	Cejas Jorge Alberto (FPV)	Gullo Juan Carlos (FPV)
Chiquichano Rosa (FPV)	Cuevas Hugo (Concertación)	Ibarra Vilma (EP)
García de Moreno Eva (FPV)	Rossi Cipriana (FPV)	Lenz María (FPV)
González Nancy	Canela Susana (FPV)	Morgado Claudio (FPV)
Fuente: http://especiales.editorialperfil.com.ar/retenciones/provincia.php?id=Córdoba&pagenum=2 y http://www.julianobiglio.com.ar/Votos_Partido_sen.pdf. (Consultados el 11/08/2009).		

Votos en contra de la ratificación de la Resolución N° 125

Alcuaz Horacio (CC)	Aguad Oscar (UCR)	Daher Zulema (FPV)
Alvarez Juan José (Celeste y Blanco)	Albrisi César (FREJULI)	Marino Adriana (PS)
Amenta Marcelo (Recrear)	Ardid Mario (Partido Nuevo)	Bianchi Ivana (FREJULI)
Azcoiti Pedro José (UCR)	Baldata Griselda (CC)	Lusquiños Luis (FREJULI)
Baragiola Vilma	Del Campillo Héctor (UCR)	Merlo Mario Raúl (FREJULI)
Burzaco Eugenio (PRO)	Halak Beatriz (FPV)	Poggi Claudio (FREJULI)
Camaño Dante (Partido Nacional Sindical)	Heredia Arturo (FPV)	Torrontegui María (FREJULI)
Camaño Graciela (FPV)	Martínez Oddone Heriberto (UCR)	Acuña Kunz Juan (UCR)
Carca Elisa (CC)	Montoya Jorge (FPV)	Fein Mónica (PS)
Cuccovillo Ricardo (PS)	Morandini Norma (Memoria y Democracia)	Augusburger Silvia (PS)
De Narváez Francisco (Celeste y Blanco)	Sesma Laura (PS)	Barrios Miguel (PS)
Ferro Francisco (CC)	Storni Silvia (UCR)	Benas Verónica
Flores Héctor (CC)	Vega Juan (CC)	García Susana (CC)
Gardella Patricia (Celeste y Blanco)	Arbo José (Partido Liberal de Corrientes)	Gerez Elda (PS)
Gribaudo Christian (PRO)	Areta María (Frente de Todos)	Martín Maria Elena (PS)
Katz Daniel (Concertación)	Portela Agustín (UCR)	Morini Pedro (UCR)
Lanceta Rubén (UCR)	Roldán José (Frente de Todos)	Peralta Fabián (CC)
Ledesma Julio (Celeste y Blanco)	Cremer de Busti María (FPV)	Zancada Pablo (PS)
Linares Marta (CC)	Cusinato Gustavo (UCR)	Oliva Cristian (Frente Cívico por Santiago del Estero)
Macaluse Eduardo (SI)	Martínez Garbino Emilio (Concertación Entrerriana)	Velarde Marta (FPV)
Moran Juan Carlos (CC)	Petit María Angeles (FPV)	Belous Nélida (SI)
Naim Lidia (SI)	Varisco Sergio (UCR)	García Hamilton José (UCR)
Perez Adrián (CC)	Viale Lisandro (PS)	Bertol Paula María (PRO)
Quirós Elsa (CC)	Zavallo Gustavo	Bisutti Delia (SI)
Raimundi Carlos (SI)	Giubergia Miguel (UCR)	Bullrich Esteban (PRO)
Rioboó Sandra (UCR)	Nieva Alejandro (UCR)	Bullrich Patricia

Rodríguez Marcela (CC)	Baladron Manuel (FPV)	Cortina Roy (PS)
Sarghini Jorge (PJ)	García Irma (FPV)	Galvalisi Luis (PRO)
Satragno Lidia (PRO)	Kenny Eduardo	García Méndez Emilio (SI)
Solá Felipe (FPV)	Kroneberger Daniel (UCR)	Gil Lozano Claudia Fernanda (CC)
Spatola Paola (Guardia Peronista)	Albarracin Jorge (Concertación)	Ginsburg Nora (Frente por los Derechos Ciudadanos)
Tomaz Adriana	De Marchi Omar (Demócrata)	Giudici Silvana (UCR)
Villaverde Jorge (FPV)	Lemos Silvia (UCR)	González María América (SI)
Barrionuevo José (FPV)	Montero Laura	Hotton Cynthia
Collantes Aurelio (FCS)	Thomas Enrique (FPV)	Iglesias Fernando (CC)
Paroli Raúl Omar (FCS)	Acuña Hugo (MPN)	Lozano Claudio (Buenos Aires para Todos)
Pastoriza Eduardo (Bloque Verdad)	Brillo José (MPN)	Obiglio Julián (PRO)
Bayonzo Liliana	Comelli Alicia (MPN)	Pinedo Federico (PRO)
Beveraggi Margarita (UCR)	Scalesi Juan (Concertación)	Reyes María (CC)
Fabris Luciano (UCR)	Diez María Inés	Sánchez Fernando (CC)
Urlich Carlos (UCR)	Torfe Mónica (Partido Renovador)	
Fuente: http://especiales.editorialperfil.com.ar/retenciones/provincia.php?id=Córdoba&pagenum=2 y http://www.julianobiglio.com.ar/Votos_Partido_sen.pdf. (Consultados el 11/08/2009).		

Votos Senado – Jueves 17 de julio de 2008

Votos a favor de la ratificación de la Resolución N° 125

Daniel Filmus (FPV)	Blanca Osuna (FPV)	Judith Fortsmann (FPV)
José Pampuro (FPV)	Mariana Riofrio (FPV)	Marcelo Fuentes (FPV)
Eric Calcagno (FPV)	Fabián Ríos (FPV)	Haidee Giri (PJ)
Ramón Saadi (PJ)	Eduardo Torres (FPV)	Silvia Guisti (FPV)
Francisco Biancalani (FPV)	Mónica Troadello (FPV)	Pedro Guastavino (FPV)
María Bongiorno (FPV)	Ada Iturrez (Frente Cívico y Social)	Marcelo Guinle (FPV)
Liliana Fellner (FPV)	Isabel Viudez (Partido Nuevo)	Adriana Bortolozzi (FPV)
Nicolás Fernández (FPV)	Silvia Gallego (FPV)	Miguel Pichetto (FPV)
Guillermo Jenefes (FPV)	Daniel Pérsico (FPV)	Luis Viana (FPV)
José Mayans (FPV)	Nancy Parrilli (FPV)	Elida Vigo (FPV)
Ada Maza (FPV)	María Perceval (FPV)	Mario Collazo (FAUPE)
Julio Miranda (FPV)	César Gioja (FPV)	Ana Corradi (MSV)
Fuente: http://unionpopular.blog.terra.com.ar/2008/07/19/asi-voto-el-senado-la-resolucion-125-2da-parte/. (Consultado el 11/08/2009).		

Votos en contra de la ratificación de la Resolución N° 125

Elena Corregido (PJ)	Teresa Quintela (PJ)	Rubén Giustiniani (PS)
María Díaz (ARI)	José Martínez (ARI)	Carlos Rossi (Partido Nuevo)
Sonia Escudero (PJ)	Gerardo Morales (UCR)	María Sánchez (UCR)
Roxana Latorre (PJ)	Roy Nikisch (UCR)	Juan Alsina (Partido Renovador)
Carlos Reutemann (PJ)	Luis Naidenoff (UCR)	Norberto Massoni (UCR)
Juan Carlos Romero (PJ)	Ernesto Sanz (UCR)	Samuel Cabanchik (CC)
Roberto Urquía (FPV)	Arturo Vera (UCR)	Roberto Basualdo (PJ)

Rubén Marín (FPV)	Delia Pinchetti (FR)	Pablo Verani (UCR)
Hilda G. de Duhalde (PJ)	Horacio Lores (MPN)	Carlos Salazar (FR)
Carlos Menem (PJ)	Maria Eugenia Estenssoro (CC)	Juan Marino (UCR)
Liliana Negre (PJ)	Oscar Castillo (FCS)	Alfredo Martínez (UCR)
Adolfo Rodríguez Saá (Frejuli)	Marita Colombo (FCS)	Emilio Rached (FCS)
Fuente: http://unionpopular.blog.terra.com.ar/2008/07/19/asi-voto-el-senado-la-resolucion-125-2da-parte/. (Consultado el 11/08/2009).		

Siglas

AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.

AAGLP: Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.

AAPRESID: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa.

ACP: Asociación de Camioneros Profesionales.

ACSOJA: Asociación Cadena Argentina de la Soja.

ADE: Asociación Dirigentes de Empresa.

ADECUA: Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina.

AESI: Asociación de Estaciones de Servicio Independientes.

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos.

APCCBA: Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires.

APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

APYME: Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.

ARBA: Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.

ASAGIR: Asociación Argentina de Girasol.

ASU: Asociación de Supermercados Unidos.

ATE: Asociación de Trabajadores del Estado.

CA: Carta Abierta

CADIF: Cámara Argentina de la Industria Frigorífica.

CAFMA: Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola

CARBAP: Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

CARSFE: Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe.

CARTEZ: Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona.

CAS: Cámara Argentina de Supermercados.

CASRECH: Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos.

CATAC: Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga.

CAUQUEVA: Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles.

CBU: Clave Bancaria Uniforme.

CC: Coalición Cívica.

CCC: Corriente Clasista Combativa.

CEC: Centro de Educación al Consumidor.

CEDEPO: Centro ecuménico de educación popular.

CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales.

CEPA: Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.

CGT: Confederación General del Trabajo de la República Argentina.

CIARA: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

CICCRA: Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina.

CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

COOPAFES: Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar y la Economía Social.

COPROFAM: Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur.

CUBA-MTR: Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez.

CRA: Confederaciones Rurales Argentinas.

CTA: Central de Trabajadores Argentinos.

CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación.

DEUCO: Defensa de Usuarios y Consumidores.

DGA: Dirección General de Aduanas.

ENPYCCAA: Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario.

EP: Encuentro Popular

FAA: Federación Agraria Argentina.

FAAS: Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas.

FACMA: Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas.

FACTA: Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.

FADEEAC: Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas.

FAG: Federación de Acopiadores de Granos.

FAIM: Federación Argentina de la Industria Molinera.

FAM: Federación Argentina de Municipios.

FAN: Frente Agropecuario Nacional.

FARER: Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

FATAC: Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas.

FB19: Frente Barrial "19 de Diciembre".

FEBOTAC: Federación Bonaerense de Transporte de Cargas.

FECOAGRO: Federación de Cooperativas Agropecuarias.

FECOTAC: Federación Cordobesa de Transporte de Cargas.

FEDECAMARAS: Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales.

FEDECO: Federación Entrerriana de Cooperativas.

FADEEAC: Federación de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas.

FEDIA: Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios.

FESICARA: Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y afines.

FETAC: Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Cargas.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

FNC: Frente Nacional Campesino.

FONAS: Foro Nacional de Agricultura Familiar.

FPV: Frente para la Victoria.

FREJULI: Frente Justicialista de Liberación Nacional.

FTNP: Frente Transversal Nacional y Popular.

FTRA: Federación de Transportistas Rurales Argentinos.
FTV: Federación de Tierra y Vivienda.
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
JP: Juventud Peronista.
LADH: Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
MAM: Movimiento Agrario Misionero.
MAS: Movimiento Al Socialismo.
MCL: Movimiento Campesino de Liberación.
ME: Mesa de Enlace.
MIJD: Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.
MML: Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.
MNCI: Movimiento Nacional Campesino e Indígena.
MOCAFOR: Movimiento Campesino de Formosa.
MOCAJU: Movimiento Campesino de Jujuy.
MOCASE: Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores.
MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados.
MTL: Movimiento Territorial Liberación.
MUP: Movimiento de Unidad Popular.
ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
ONPIA: Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina.
PCR: Partido Comunista Revolucionario.
PDP: Partido Demócrata Progresista.
PJ: Partido Justicialista.
PL: Partido de la Liberación.
PO: Partido Obrero.
PRO: Propuesta Republicana.
PROGRANO: Asociación de Productores de Granos del Noroeste Argentino.

PS: Partido Socialista.

PSA: Partido Socialista Auténtico.

PTS: Partido de los Trabajadores Socialistas.

ROE: Registro Operaciones de Exportación.

SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

SERPAJ: Servicio de Paz y Justicia.

SI: Solidaridad e Igualdad.

SICGBA: Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires.

SMATA: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

SRA : Sociedad Rural Argentina.

TRA: Transportadores Rurales Argentinos.

UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.

UCEDE: Unión del Centro Democrático.

UCR: Unión Cívica Radical.

UES: Unión de Estudiantes Secundarios.

UIA: Unión Industrial Argentina.

UIC: Unión Industrial de Córdoba.

UNICA: Unión de la Industria Cárnica Argentina.

UOCRA: Unión de la Construcción de la República Argentina.

UOM: Unión Obrera Metalúrgica.

UPCN: Unión del Personal Civil de la Nación.

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

UTA: Unión Tranviarios Automotor.

Bibliografía

Administración Federal de Ingresos Públicos (2008) Anuario de Estadísticas Tributarias, Buenos Aires, AFIP.

Amorin, Javier (2007) Deforestación. La Ley de Protección del Bosque Nativo, frenada por presiones de empresarios sojeros, forestales y ganaderos, Buenos Aires, rel-UITA, 12 de marzo. Disponible en Web: http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/argentina_deforestacion.htm

Aravena, P. (2005) "Historia, Narración y Sujeto: conversaciones con Fina Birulés" en *Alpha*, Dec. 2005, N° 21, Pág.

Arceo, Enrique (2003) *Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Archetti, Eduardo y Stölen, Kristine (1975) *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Barbetta, Pablo (2009) *En los bordes de lo jurídico. Conflicto por la tenencia legal de la tierra en Santiago del Estero*. Tesis para optar al grado de Doctor en la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Basualdo, Eduardo; Arceo, Nicolas (2009) "Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retensiones móviles" en Arceo, E.; Basualdo, E.; Arceo, N. *La crisis mundial y el conflicto del agro*, Buenos Aires, Editorial La Página S.A.

Benachour, Nora and Gilles-Eric Séralini (2009) "Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells", en *Chemical Research in Toxicology*, N° 22, Francia.

Bibiloni, Mario J. (2008) "Acerca de los derechos de exportación, sus fundamentos legales e implicancias" en *Revista La Ley, Suplemento Especial Retenciones a las exportaciones*, Buenos Aires, Ed. La Ley.

Braun, Oscar (1974) "La renta absoluta y el uso ineficiente de la tierra en la Argentina" en *Desarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales,* Vol. 13, N° 54, julio-septiembre.

Brouver, M., Manghi, E. (2006) *Cambios estructurales en la Selva Tucumano Boliviana entre 1975 y 2000 en la zona de Tartagal*, Buenos Aires, Dirección de Bosques, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Bourdieu, Pierre (1988) *Cosas dichas*, Buenos Aires, Gedisa.

Cafiero, Antonio (1961) *5 años después*, Buenos Aires, Antonio Cafiero.

Domínguez, Diego y Sabatino, Pablo (2005) *La muerte que viene en el viento. Los problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay.* Informe final del concurso: Los impactos socioculturales y económicos de la introducción de la agricultura transgénica en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, CLACSO. Disponible en Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2005/soja/domsa.pdf

FAO (2009) *La situación de los bosques del mundo*, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Flichman, Guillermo (1970/71) "Modelo sobre la asignación de recursos en el sector agropecuario" en *Desarrollo Económico*, Vol.10, N° 39 y 40, octubre-diciembre 1970 y enero-marzo 1971, Buenos Aires, IDES.

Flichman, Guillermo (1974) "Nuevamente en torno al problema de la eficiencia en el uso de la tierra y la caracterización de los grandes terratenientes" en *Desarrollo Económico*, Vol. 14, N° 54, julio-septiembre, Buenos Aires, IDES.

Flichman, Guillermo (1977) *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino*, México, Siglo XXI Editores.

Foster, John Bellamy (2010) "Why Ecological Revolution?" en *Monthly Review*, Vol.61, Enero, Nueva York, Monthly Review Foundation.

Foucault, Michel (1991) *La verdad y las formas jurídicas*, Barcelona, Gedisa.

Gaggero, Jorge y Grasso, Federico (2005) *La cuestión tributaria en Argentina. La historia de los desafíos del presente y una propuesta de reforma*, Documento de trabajo N° 5, Buenos Aires, CEFID-AR.

García Linera, Álvaro (Coord.) (2004) *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia*, La Paz, Diakonia- Oxfam.

GER, GEMSAL (2007) *Tiempos de rebelión: "que se vayan todos". Calles y plazas en la Agentina: 2001- 2002*, Buenos Aires, Antropofagia.

GER, GEMSAL y Cátedra de Sociología Rural (2010) "Recursos naturales/Bienes comunes: planes hegemónicos/disputas y resistencias" en *Realidad Económica* N° 249, enero-febrero, Buenos Aires, IADE.

George, Henry (1929) *Progress and Poverty. An inquiery into the cause of industrial depressiones and the increase in want with increase of wealth*,Nueva York, The Modern Library.

Giarracca, Norma (1999) "Las ciencias sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX" en Giarracca, Norma. (Coord.) *Estudios Rurales.*

Teorías, problemas y estrategias metodológicas, Buenos Aires, Editorial La Colmena.

Giarracca, Norma (2003) (Coord.) *Territorios y lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en Tucumán*, Buenos Aires, Editorial La Colmena.

Giarracca, Norma; Gras, Carla; Barbetta, Pablo (2005) "De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe" en Giarracca, N.; Teubal, M. (Coord.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2001) "Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: las mujeres en la protesta social agraria" en Giarracca y colaboradores *La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Madrid/Buenos Aires, Alianza Editorial.

Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (coord.) (2005) *El campo argentino en la encrucijada*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

Giarracca, Norma y Teubal Miguel (coord.) (2005) "Introducción" en *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

Giarracca, Norma; Teubal, Miguel (2008) "Del desarrollo agroindustrial a la expansión del "agronegocio": el caso argentino" en Bernardo Mançano Fernández (Org.) *Campesinato e agronegocio na América Latina: a questao agrária actual*, Sao Pablo, CLACSO.

Giarracca, Norma; Teubal, Miguel y Palmisano, Tomás (2008) "Paro agrario: crónica de un conflicto alargado" en *Realidad Económica* N° 237, Buenos Aires, IADE.

González Arzac, R. (2009) ¡*Adentro! Millonarios, chacareros y perdedores en la nueva argentina rural*, Buenos Aires, Marea Editorial.

Grupo de Estudios Rurales (GER) (2004) "Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina" en *Realidad Económica* N° 203, abril-mayo, Buenos Aires, IADE.

Grupo de Reflexión Rural (GRR) (2009) *Pueblos Fumigados*, 26 de enero. Disponible en http://www.grr.org.ar/trabajos/Pueblos_Fumigados___GRR__.pdf

Gutiérrez, Raquel (2001) "Forma comunal y liberal de la política: de la soberanía social a la irresponsabilidad civil" en COMUNA *Pluriverso. Teoría política boliviana*, La Paz, Comuna-Muela del Diablo.

Harvey, David (2003) *The new imperialism*, Londres y Nueva York, Oxford University Press.

Higa, Mónica (2000) "Materiales para el estudio del paro agrario de 1994", presentación a las Jornadas de PIEA, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Hora, Roy (2009) *Los estancieros contra el Estado: la liga agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Illich, Iván (2006) *Obras reunidas I*, México, Fondo de Cultura Económica.

Kaczewer, Jorge, (2002) *Toxicología del glifosato: riesgos para la salud humana*, Universidad de Buenos Aires. Disponible en www.produccion-animal.com.ar

Kaczewer, Jorge (2009) *Uso de agroquímicos en las fumigaciones periurbanas y su efecto nocivo sobre la salud humana*, 16 Agosto. Disponible en: http://observatoriodelglifosato.wordpress.com/2009/08/16/uso-de-agroquimicos-en-las-fumigaciones-periurbanas-y-su-efecto-nocivo-sobre-la-salud-humana/

Laclau, Ernesto (1969) "Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno" en *Revista Latinoamericana de Sociología*, Vol.5, N° 2.

Long, Norman and Long, Ann (editors) (1992) *Battlefields of knowledge: The interlocking of theory and practice in social research and development*, London and New York, Routledge.

Lordon, Frédéric (1996) "Teoría de la regulación y política económica" en Boyer, R. y Saillard, Y (eds.) *Teoría de la regulación: estado de los conocimientos*, Vol. I., Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC.

Marx, Karl (1996) *El Capital*, México, Siglo XXI.

McMichael, Philip (2009) "The World Food Crisis in Historical Perspective" en *Monthly Review*, Vol. 61, N° 3, julio-agosto, Nueva York, Monthly Review Foundation.

Montenegro, Celina; Gasparri, Ignacio; Manghi, Eduardo; Strada, Mabel; Bono, Julieta; Parmuchi, María Gabriela (2004) *Informe de avance sobre la deforestación en Argentina*, Buenos Aires, Dirección de Bosques, Secretaría de desarrollo sustentable.

Montenegro, Raúl (2009) *Necesidad de prohibir el uso de plaguicidas agropecuarios en áreas urbanas y periurbanas*, 3 de agosto. Disponible en: http://observatoriodelglifosato.wordpress.com/2009/08/03/informe-sobre-los-efectos-de-los-plaguicidas-en-la-salud-humana-y-el-ambiente/

Mouffe, Chantal (1999), *El retorno de lo político*, Barcelona, Paidós.

Oliva, Alejandro, Spira, Alfred and Multigner, Luc (2001) "Contribution of environmental factors to the risk of male infertility" en *Human Reproduction*, Vol. 16, Nř 8, 1768-1776, August, Oxford Journals.

Patnaik, Utsa (2003) "Global capitalism, deflation and agrarian crisis in developing countries" en *Journal of Agrarian Change*, Vol. 3 Issue 1-2, enero-abril, Oxford, Blackwell.

Portillo, José y Conforti, Andrea (2009) "Feedlotización de la ganadería argentina" en VI *Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 11, 12 y 13 de noviembre.

Rapoport, Mario (2005) *Historia económica, política y social de la Argentina*, Buenos Aires, Ariel.

Rapoport, Mario (dir) (2007) *Historia de la economía argentina del siglo* XX, Buenos Aires, La Página.

Ricardo, David (1959) [1817] *Principios de economía política y tributación,* Vol. I de*Obras y correspondencia de David Ricardo,* edición dirigida por Piero Sraffa, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Ricoeur, Paul (1996) *Tiempo y narración* III, México, Editorial Siglo XXI.

Sidicaro, Ricardo (2002), *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/ 1973-76/1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Teubal, Miguel (1975) "Estimaciones del excedente financiero del sector agropecuario argentino" en *Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales,* vol. 14, N° 56, enero-marzo, Buenos Aires, IDES.

Teubal, Miguel (1999) "Complejos y sistema agroalimentarios: Aspectos teórico-metodológicos" en Giarracca Norma (Coord.) *Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas*, Buenos Aires, Editorial La Colmena.

Teubal, Miguel (2006) "La renta de la tierra en la economía política clásica: David Ricardo" en *Revista* NERA *(Núcleo de Estudios, Investigaciones y Proyectos de Reforma Agraria) edición electrónica*, Año IX, N° 8, enero-julio, Presidente Prudente (SP, Brasil), UNESP.

Teubal, Miguel (2008) "Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo" en *Revista Lavboratorio/ on line*, año X, N° 22, Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Teubal, Miguel Domínguez, Diego y Sabatino, Pablo (2005) "Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agroalimentario" en *El*

campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, sus ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial.

Teubal, Miguel y Rodríguez Javier (2002) *Agro y Alimentos en la Globalización*, Buenos Aires, La Colmena.

Thompson, John (1998) *Ideología y cultura moderna. Teoría social en la era de la comunicación de masas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Treu, Tiziano (2002) "Paro" en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino Gianfranco (dirs.) *Diccionario de política*, México DF: Siglo XXI.

Thompson, John (1998) *Ideología y cultura moderna. Teoría social en la era de la comunicación de masas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Urcola, Marcos (2010) "Transformación del estilo de vida "chacarero"" en *Realidad Económica*, N° 249, enero-febrero, Buenos Aires: IADE.

Verón, Eliseo (2004), *Fragmentos de un tejido*, Barcelona, Gedisa.

Verón, Eliseo (1987), "La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política", en *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*, Buenos Aires, Hachette.

Vigorito, Raúl (1979) "Criterios metodológicos para el estudio de los Complejos Agroindustriales" en *El Desarrollo Agroindustrial y la Economía Internacional*, Documento de trabajo para el desarrollo agroindustrial, N° 1, México, Codai-SARTH.

Volóshinov, Valentín N. (2009) *El marxismo y la filosofía del lenguaje*, Buenos Aires, Godot.

Zibechi, Raúl (2007) Prólogo en GER, GEMSAL, *Tiempos de rebelión: "que se vayan todos". Calles y plazas en la Agentina: 2001- 2002*, Buenos Aires, Antropofagia.

Otras fuentes

Aranda, Darío: "Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo" entrevista a Andrés Carrasco en *Página 12*, Buenos Aires, 3 de mayo de 2009.

Banco de datos de protestas del Grupo de estudios Rurales, Instituto Gino Germani, UBA www.ger-gemsal.org.ar

Ballesteros Ledesma, Patricio "Grobocopatel, ¿o rei da soja?: por qué gana más en Brasil" en *Revista Fortuna*, Año VII, N° 366, Buenos Aires, Perfil, 4 de junio de 2010.

Bertello, Fernando, "Más de U$S 1200 millones perderían los rentistas del agro" en *La Nación*, Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.

Cafiero, Mario y Llorens, Javier "La falacia de las retenciones móviles" en *Argenpress*, 17 de junio de 2008. Disponible en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2465

Cafiero, Mario y Monner Sans, Ricardo (2008) "Quinta presentación" en el marco de la causa "NN s/defraudación de seguros" (N° 4713/2008). Buenos Aires: Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría 15, Comodoro Py. 2002, 4° piso.

Carrasco Andrés, "El tóxico de los campos", en *Página 12*, Buenos Aires, 13 de abril de 2009.

Carrasco Andrés, "Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo" entrevista realizada por Darío Aranda, en *Página 12*, Buenos Aires, 3 de mayo de 2009.

Carta Abierta/ 1, 19 de abril de 2008 en www.cartaabierta.org.ar

Carta Abierta/ 2, 4 de junio de 2008 en www.cartaabierta.org.ar

Carta Abierta/ 3, 10 de junio de 2008 en www.cartaabierta.org.ar

Carta Abierta/ 4, 23 de septiembre de 2008 en www.cartaabierta.org.ar

Carta Abierta/ 5, 1 de abril de 2009 en www.cartaabierta.org.ar

Carta Abierta/ 6, 22 de agosto de 2009 en www.cartaabierta.org.ar

Carta Abierta/ 7, 22 de diciembre de 2009 en www.cartaabierta.org.ar

Cash, Suplemento Económico en *Página 12*, Buenos Aires, 12 de abril de 2009.

Castro, Jorge, "El crecimiento de China evitará una recesión global" en *Revista Fortuna*. Año II, N° 278, Buenos Aires, Perfil, 27 de septiembre de 2008.

Ceriotto, Luís, "Las retenciones dañan a los más chicos, admite un pool" en *Clarín*, Buenos Aires, 8 de julio de 2008.

Discurso del presidente Néstor Kirchner en la presentación del Plan Minero Nacional, año 2004.

Dri, Rubén "El campo y la escarapela" en *Página 12*, Buenos Aires, miércoles 14 de mayo de 2008.

Ferrari Etcheberry, Alberto (2008) *Un impuesto privatizado: las retenciones a los Granos.* Disponible en Web:http://www.argentinahola.com.ar/doc/unimpuesto-privatizado.pdf

Gallo, Alejandra, "El oficialismo, primero por 0,5 puntos" en *Clarín*, Buenos Aires, 30 de junio de 2009.

Giarracca, Norma, "El Frankestein sojero contra su creador", en *Página 12*, entrevista realizada por Javier Lorca, Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.

Giarracca, Norma, "Agronegocio y conflictos en la Argentina", en *Página 12*, Buenos Aires, 19 de mayo de 2008.

Giarracca, Norma, "Otra gramática sobre el conflicto: del agronegocio a las retenciones", entrevista realizada por la Vaca, Buenos Aires, 17 de junio de 2008. Disponible en http://lavaca.org/notas/otra-gramatica-sobre-el-conflicto/

Giarracca, Norma, "¿Tucumán será el termómetro del país?" en *Crítica de la Argentina*, Buenos Aires, 7 de julio de 2008.

Giarracca, Norma, "Ley, bien común e intereses sectoriales" en *Página 12*, Buenos Aires, 25 de julio de 2008.

Giarracca, Norma, "El debate por la Soberanía Alimentaria", en *Crítica de la Argentina*, Buenos Aires, 23 de octubre de 2008.

Giarracca, Norma, "¿Y al final, el partido del campo dónde está?" en *Crítica de la Argentina*. Buenos Aires, 31 de mayo de 2009.

González Arzac, Rodolfo, "La dieta argentina se despide de la vaca sagrada" en *Crítica de la Argentina*, Buenos Aires, 14 de febrero de 2010.

Krakowiak, Fernando, "El que no llora no mama" en *Página 12*, Buenos Aires, 24 de marzo de 2008.

La Nación, *Empresas del campo buscan inversiones*. Buenos Aires, 15 de septiembre de 2008.

Livolti, José Luis, "Las banderas del Grito de Alcorta" en *Página 12*, Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.

Lozano, Claudio: *Recuperar la soberanía alimentaria y mejorar el poder adquisitivo de la población*. Publicado en argenpress.info, 28 de marzo de 2008.

Lozano, Claudio, *El gobierno ha sido socio de la patria sojera*, 28 de marzo de 2008. Disponible en:

http://www.ar.terra.com/terramagazine/interna/0,,OI2714870-EI8868,00.html

Lozano, Claudio; Macaluse, Eduardo; Benas, Verónica; Martínez Garbino; Viale, Lisandro y Cafiero, Mario (2008) "Definiciones previas para el debate parlamentario sobre las retenciones móviles". Disponible en:
http://www.cta.org.ar/base/IMG/pdf/MATERIAL_SOBRE_LAS_RETENCIONES_A_LA_SOJA.pdf

Lukin, Tomás, "Nadie tan enojado como el rey sojero" en *Página 12*, Buenos Aires, 29 de marzo de 2008.

Nadal, Alejandro, "Adiós al factor China" en *Biodiversidad, sustento y culturas*. Julio 2008, N° 57, Argentina: REDES-AT, GRAIN, Acción por la Biodiversidad, la Campaña de la Semilla de Vía Campesina, Acción Ecológica, el Grupo de Semillas de Colombia y el Grupo ETC.

Premici, Sebastián, "Federación Agraria quiere desmarcarse" en *Página 12*, Buenos Aires, 11 de julio de 2009.

Presidencia de la Nación, "Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete Alberto Fernández, del ministro de Economía y Producción, Miguel Peirano y del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Javier de Urquiza", 7 de noviembre de 2007. Disponible en http://www.casarosada.gov.ar/index.php?id=1331&option=com_content&task=view

Revista Fortuna, *El derrumbe de la Bolsa* Año II, N° 276, Buenos Aires, *Perfil*, 13 de septiembre de 2008.

Revista *El Periodista* N° 204, 19 al 25 de agosto de 1988.

Sabini Fernández (2008) "Los nuevos especuladores" en *Biodiversidad, sustento y culturas*. Julio, N° 57, Argentina, REDES-AT, GRAIN, Acción por la Biodiversidad, la Campaña de la Semilla de Vía Campesina, Acción Ecológica, el Grupo de Semillas de Colombia y el Grupo ETC.

Teubal, Miguel, "El modelo de agricultura" en *Página 12, Suplemento Económico Cash,* Buenos Aires, 30 de diciembre de 2007.

Verbitsky, Horacio, "Radiografía de la pampa" en *Página 12*, Buenos Aires, 15 de junio de 2008.

Fuentes en Internet

Archivo de la Federación Agraria Argentina. Disponible en http://www.faa.com.ar/

Comunicados de prensa de las Confederaciones Rurales Argentinas, Solicitada "Argentina en retroceso", 28/2/2008. Disponible en http://www.cra.org.ar/.

Comunicados de prensa de las Confederaciones Rurales Argentinas, Comunicado de la Comisión de Enlace "Hoy el Congreso dio una muestra de compromiso cívico", 19/3/2009. Disponible en http://www.cra.org.ar/.

Noticias de la Sociedad Rural Argentina. Disponible en http://www.ruralarg.org.ar/

Vía Campesina. www.viacampesina.org

Diarios nacionales y provinciales

Diario *Clarín*, de Buenos Aires.

Diario *La Arena*, de La Pampa.

Diario *La Capital*, de Santa Fe.

Diario *La Nación*, de Buenos Aires.

Diario *El Diario*, de Entre Ríos.

Diario *El Diario,* de La Pampa.

Diario *El Tribuno*, de Salta.

Diario *Página 12*, de Buenos Aires.

Datos de los autores

Norma Giarracca: Socióloga (UBA), Magister en Sociología (Universidad Nacional Autónoma de México). Titular de Sociología Rural de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales. Miembro del Centro de Estudios Sociales/ América Latina, de carácter transnacional con asiento en Brasilia.

Miguel Teubal: Economista. PhD. Universidad de California, en Economía Agraria, Profesor Consulto de la UBA y Investigador Superior (contratado) del CONICET en el GER-GEMSAL (Grupo de Estudios Rurales–Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales de América Latina), Instituto Gino Germani-UBA. Ex miembro de Transnational Institute de Amsterdam.

María Celeste Castro García: Licenciada en Ciencia Política (UBA) y doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Becaria FONCYT en el Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante del GER-GEMSAL.

Mariana Ciccolella: Socióloga y estudiante del Profesorado de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Integrante del GEPCYD (Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos), Instituto Gino Germani.

María Comelli: Socióloga y doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Becaria doctoral del CONICET en el GER/GEMSAL del Instituto Gino Germani. Ayudante de cátedra en Sociología Rural y en el Seminario de Investigación sobre Acciones Colectivas y Movimientos sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Julieta Godfrid: estudiante avanzada de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Becaria estímulo (beca de investigación de estudiantes) de la UBA en el GER-GEMSAL. Instituto Gino Germani.

Daniela Mariotti: Socióloga (UBA), Magister en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Doctorando de la UBA. JTP de la materia Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Sociales y del Grupo de Estudios Rurales. Integrante del GEPCYD (Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos), Instituto Gino Germani

Mariano Negro: Licenciado en sociología y maestrando en investigación en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Tomás Palmisano: Politólogo, doctorando de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA. Becario FONCYT en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en el GER/GEMSAL.

Agustina Schvartz: Licenciada en sociología y maestranda en investigación en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Auxiliar de investigación del GER– GEMSAL, Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Durante gran parte del año 2008, el país estuvo atravesado por un conflicto complejo y por momentos laberíntico: el enfrentamiento Mesa de Enlace-Gobierno nacional. La ME representaba a una gran parte del campo más próspero así como a otros sectores que habían perdido rentabilidad. Las rutas, las plazoletas, los pueblos y hasta las grandes ciudades se vieron impregnadas por marchas, discusiones y protestas de productores y pobladores de todas las edades y regiones.

Este libro aborda el conflicto desde varias aristas: lo narra día a día en base a información periodística para desplegar hechos que se fueron concatenando e imbricando hasta llegar a formar ese obturado laberinto que se superó cuando la Presidenta mandó la resolución en litigio al Congreso. También se reconstruye en estas páginas el nivel macro-económico e institucional en que la disputa se genera y desarrolla; a la vez que se despliega una analítica que vincula el contexto agrario, social y político con la campaña y acto electoral de 2009. Los autores cuestionan y debaten con la caracterización del actor social en conflicto generada por el grupo de intelectuales de Carta Abierta, que circuló por muchos espacios sociales y del poder político.

El Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA es un lugar de generación de conocimientos y formación de recursos humanos para docencia e investigación en temas relacionados con los mundos agrarios, rurales y del interior del país en general. Está formado por sociólogos, economistas y politólogos dirigidos por Norma Giarracca y Miguel Teubal. Véase en Antropofagia, la colección de cuatro libros sobre América Latina "Universalismo Pequeño. Experiencias de investigación" cuyo último título es "La tierra es nuestra, es tuya y de aquel…." (www.ger-gemsal.org.ar).

ISBN 978-987-1238-70-5

9 789871 238705